MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 1.-

FUNCIONARIOS PUBLICOS ÷ HOMENAJES - NORMAS - PROHIBICIONES.-

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1955.-

CONSIDERANDO:

Que ha sido propósito fundamental de la Revolución, liberar al pueblo argentino de toda forma de opresión política, moral o económica, restaurando la efectiva vigencia del espíritu republicano y de las instituciones democráticas;

Que para el logro de objetivo semejante la conducta de los funcionarios públicos debe asentarse en sólidas normas que restauren los valores morales, desterrando para siempre de la vida institucional de la Nación prácticas que entrañaron personalismos y obsecuencia repugnantes al espíritu republicano de las instituciones fundamentales de la Patria;

Que es de vigencia permanente la tónica espiritual del famoso Decreto del 6 de diciembre de 1810, dictado por la Junta de Mayo bajo la inspiración de Mariano Moreno, que marcó el rumbo moral de una Argentina signada por la sencillez de sus magistrados;

Que contradicen tales principios las variadas formas de adulación con que la obsecuencia rindió homenaje a funcionarios y familiares del régimen depuesto, abriendo así el pernicioso camino que destruye la vigencia de las formas republicanas y conduce fatalmente a la idolatría política y al despotismo;

Que es objetivo primordial de este Gobierno liberar a la vida pública argentina de la práctica, común denominador de los sistemas totalitarios, por la cual mediante homenajes reiterados se adormece la conciencia ciudadana, se identifica la persona de los funcionarios con la esencia augusta de las instituciones, se perturba el libre juicio y la sana crítica de de los acontecimientos y se cae gradualmente en el cesarismo que degrada a los pueblos;

Que debe darse a la solución de este problema la importancia fundamental que tiene, para borrar de las mentes juveniles el espejismo de prácticas reñidas con nuestras más hon

rosas tradiciones;

Que ha de dejarse a la historia, con la perspectiva que da el transcurso del tiempo, el fallo sereno e imparcial del acierto de los funcionarios;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Los funcionarios públicos no podrán aceptar homenajes de ninguna naturaleza, que le sean ofrecidos en razón de su cargo o con motivo del ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 2º.- Los funcionarios públicos no podrán delegar total o parcialmente sus funciones en sus parientes, ni hacerse representar por éstos en ceremonias o actos oficiales o públicos, ni disponer el uso de las oficinas públicas para el ejercicio de sus actividades privadas o de las de sus parientes.

ARTICULO 3º.- Prohíbese a los poderes del Estado Nacional, provincial o municipal rendir homenaje a personas vivientes con estatuas o monumentos o mediante la designación con sus nombres de divisiones territoriales o políticas, calles, plazas,y en general otros lugares y bienes públicos o privados. Tampoco podrán utilizarse dichos nombres para individualizar disposiciones legales o administrativas de ninguna índole.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el Excmo. señor Vicepresidente de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en acuerdo general de Ministros.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Nacional y archívese.-

DECRETO-LEY Nº 5.158.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 2.-

FACULTAD MINISTERIAL - JUICIOS - DEMANDAS

Buenos Aires, 1 de diciembre de 1955.-

Visto que uno de los propósitos del Gobierno Provisional de la Nación, es adecuar la organización administrativa a los claros principios de su programa de acción y posibilitar a los distintos Ministerios la autonomía legal que les compete dentro del sistema democrático de gobierno, y

CONSIDERANDO:

Que el decreto Nº 14.546/943 dictado en acuerdo general de ministros, que regla las funciones del señor Procurador del Tesoro, dispone en su artículo 17º que cuando la Nación deba concurrir a juicio, el ministro del ramo al cual corresponde el pleito, remitirá directamente las actuaciones administrativas a la Procuración del Tesoro, con decreto del Poder Ejecutivo;

Que son numerosos los asuntos litigiosos de escaso monto, en que la Nación es parte, donde cada caso debe autorizarse al Procurador del Tesoro, por decreto del Poder Ejecutivo, para que asuma la intervención legal correspondiente;

Que este procedimiento abultado y pernicioso, producto de un absorbente centralismo administrativo en que el anterior régimen sujetó a la Administración Pública, con el consiguiente perjuicio del Poder Administrador y de los propios administrados;

Que ante ello se hace necesario introducir modificaciones a las disposiciones que traban el cumplimiento a los propósitos ya enunciados;

Atento a las razones expuestas,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

ARTICULO 1º .- Facúltase a los Ministros Secretarios de Estado a autorizar directamente al Procurador del Tesoro, pa

ra que intervenga en todo juicio en que la Nación sea parte, en que se cuestione una suma no superior a CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 50.000).

ARTICULO 2º .- Derógase toda otra disposición que se oponga al presente decreto.

ARTICULO 3º .- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional, pase a la Procuración del Tesoro y archívese.-

DECRETO Nº 4.369.-

MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 3.-

ORGANIZACION DE LOS MINISTERIOS NACIONALES

Buenos Aires, 8 de junio de 1956.-

Visto la necesidad de reestructurar los Ministerios Nacionales y Organismos dependientes del Poder Ejecutivo de la Nación conforme con lo dispuesto en el articulo 2º de la Proclama del Gobierno Provisional de fecha 27 de abril de 1956,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA, EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º .- El despacho de los negocios de la Nación estará a cargo de los siguientes Ministerios:

I. Del Interior;
II. De Relaciones Exteriores y Culto;
III. De Educación y Justicia;
IV. De Trabajo y Previsión;
V. De Asistencia Social y Salud Pública;
VI. De Ejército;
VII. De Marina;
VIII. De Aeronáutica;
IX. De Hacienda;
X. De Agricultura y Ganadería;
XI. De Comercio e Industria;
XII. De Obras Públicas;
XIII. De Comunicaciones y Transportes.

Los Ministerios tendrán la competencia y atribuciones establecidas por la legislación vigente con las modificaciones que resultan del presente decreto-ley.

ARTICULO 2º .- Los Organismos de Consejo y Coordinación serán los siguientes:

I. El Consejo de Gabinete;
II. El Consejo Económico Social;
III. El Estado Mayor de Coordinación.

El Consejo de Gabinete estará integrado por todos los Ministros del Poder Ejecutivo y será convocado cada vez que

el Presidente de la Nación lo considere conveniente.

El Consejo Económico Social y el Estado Mayor de Coordinación estarán constituídos y funcionarán de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente con las modificaciones que resultan del presente decreto- ley.

ARTICULO 3º .- El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer la creación de Comisiones Nacionales de Asesoramiento, permanentes o transitorias, que dependerán directamente del Presidente de la Nación y no tendrán función ejecutiva alguna.

ARTICULO 4º .- Los Organismos centralizados de la Presidencia de la Nación serán:

I. La Secretaría General;
II. La Casa Militar;
III. La Secretaría de Informaciones del Estado;
IV. La Secretaría de Prensa;
V. La Secretaría Privada;
VI. La Secretaría Administrativa.

Estos Organismos estarán constituídos y funcionarán de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Nº 7.120/56.

ARTICULO 5º .- El Ministerio de Educación y Justicia se integrará con los actuales de Educación y de Justicia; el de Hacienda, con los actuales de Hacienda y Finanzas; el de Comercio e Industria, con los actuales de Comercio y de Industria; el de Comunicaciones y Transportes, con los actuales de Comunicaciones y de Transportes.

La integración de estos Ministerios se hará a partir de la fecha del presente decreto-ley, con excepción del de Comunicaciones y Transportes que se integrará cuando lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 6º .- El presente decreto-ley será refrendado por el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Ejército, de Marina y de Aeronáutica.

ARTICULO 7º .- Comuníquese, publíquese, desé a la Dirección General de Boletín Oficial y archívese.-

DECRETO-LEY Nº 10.351.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 4.-

AGREMIACION

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1955.-

Visto que durante el régimen depuesto y bajo la ficta apariencia de propender a la formación de una conciencia gremial, se presionó al personal civil del Estado a afiliarse a las respectivas organizaciones sindicales, y

CONSIDERANDO:

Que esa gestión llevó implícito el propósito de sojuzgamiento e intimidación moral del agente público, como uno de los tantos y variados métodos de que se valía el ex-gobierno para enervar las fibras más nobles del espíritu y lograr el total acatamiento a su política;

Que la libre manifestación de la voluntad constituye un atributo inalienable de la democracia, ya que sólo a través del ejercicio de esa facultad pueda desarrollarse la personalidad humana en su inagotable intento de perfeccionamiento y superación;

Que no cabe en este particular el empleo de tutelas de ningún orden y menos de quien, por imperio de las circunstancias, viene a constituir la parte ante la cual van a oponerse los derechos y garantías que se defienden;

Que en consecuencia, y en lo que hace a este Ministerio, el suscripto considera saludable concretar estos conceptos en un acto que sirva a la vez de simbólico desagravio a los principios de libertad que definen la vocación y la trayectoria histórica del pueblo argentino;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION
R E S U E L V E :

1º) Invítase a los agentes de este Ministerio a manifestar libremente su voluntad en cuanto a la confirmación o renuncia de su condición de afiliados a los organismos gremia

les que los agrupan.

2ª) Remítase copia de la presente a la Unión del Personal Civil de la Nación y Asociación Trabajadores del Estado.

3ª) Tome nota la Dirección General de Contabilidad y Administración, comuníquese al personal y archívese.-

RESOLUCION Nº 5.462.-

Poder Ejecutivo Nacional

MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION

DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 5.-

TRAMITE - MESA DE ENTRADAS

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1955 .-

CONSIDERANDO:

Que el notorio aumento de las tareas a cargo de este Ministerio, hace necesario la fijación de normas para establecer los plazos máximos en que deben ser diligenciadas o resueltas las actuaciones respectivas;

Que su adopción redundará en un mejoramiento de los servicios como consecuencia de una mayor agilitación de la actividad funcional, con las ventajas consiguientes en cuanto a tiempo y economía;

Que de esta manera se determinará en forma precisa la responsabilidad de los funcionarios y empleados de este Departamento en el estudio y tramitación de los asuntos en que les corresponda intervenir;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º) A partir del día viernes 9 del corriente mes, todas las dependencias que forman parte de la organización interna de esta Secretaría de Estado, deberán diligenciar cualquier actuación administrativa en que deban intervenir, dentro de los términos máximos que se consignan a continuación:

a) Providencias de mero trámite o pedidos de informes, proyectos de resolución y trámites comunes, revisión y visación de lo actuado: dos (2) días hábiles.

b) Actuados cuyo volumen demore su estudio o éste sea especial o técnico: cinco (5) días hábiles.

c) Obrados que demanden un estudio especial o técnico profundo: diez (10) días hábiles.

Estos plazos se considerarán suspendidos cuando deba requerirse -por nota separada- una información para mejor proveer, debiendo, en estos casos, hacerse constar esa circunstancia a continuación de la última fecha de cargo, agregándose además copia de la nota cursada.

2ª) los plazos señalados en los puntos b) y c) podrán ser ampliados, por causas justificadas, por los titulares de cada dependencia, bajo su responsabilidad, haciendo constar esa circunstancia a continuación de la última fecha de cargo.

3ª) Todos los funcionarios responsables de los actos de sus subalternos, fiscalizarán en forma estricta si el diligenciamiento de los expedientes se cumple dentro de los plazos establecidos.

4º) Las dependencias deberán adoptar dentro de sus jurisdicciones los recaudos que estimen oportunos para evitar demoras injustificadas en el despacho de los asuntos, aún dentro de los plazos prefijados, siendo personalmente responsables sus titulares de diligenciar rápidamente los que se sometan a la firma o consideración del señor Subsecretario o del suscripto.

5ª) La División Mesa de Entradas dependiente de la Dirección General de Contabilidad y Administración del Ministerio, que se denominará en lo sucesivo Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo tendrá a su cargo verificar a través de sus registros el cumplimiento de los plazos indicados en el artículo 1ª.-

6ª) Para el mejor cumplimiento de sus fines específicos la organización de la mencionada División será la siguiente:

Sección Registro, Trámite y Archivo
Sección Contralor de Trámite
Sección Notificación e Información General
Sección Recepción y Expedición

7ª) Las dependencias a que se refiere el artículo 1ª procederán a confeccionar de inmediato un listado por duplicado de las actuaciones que hubieran excedido el plazo máximo establecido en el punto c) del referido artículo pendientes de trámite, uno de cuyos ejemplares deberá ser remitido a la División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, para el cumplimiento de la función que se encomienda por el artículo 5ª.

8ª) Quincenalmente -el 2ª y 4ª viernes de cada mes- las aludidas dependencias confeccionarán por triplicado un parte en un formulario especial en el que se consignarán los siguientes datos:

a) Existencia anterior; expedientes entrados y salidos y existencia actual;

b) Actuaciones pendientes de trámites, que hubieran excedido los términos fijados en el artículo 1ª; causas que impiden o imposibilitan su diligenciamiento.

Los tres ejemplares del parte señalado, deberán ser remitidos -dentro de las dos primeras horas de la jornada de labor de los días viernes- a la División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para las confrontaciones correspondientes. Centralizada la información será puesta en conocimiento del señor Subsecretario y del suscripto antes de la finalización de las tareas de dicho día.

A los efectos indicados precedentemente, los términos fijados en el artículo 1ª corren de viernes a jueves, ambos inclusive.

9ª) Semanalmente la División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, hará llegar a los titulares de las distintas dependencias, en un formulario especial, una lista de las actuaciones que obren en la misma y que hayan excedido el término máximo en el artículo 1ª. La aludida División llevará, permanentemente actualizada, la nómina de las actuaciones que hubieran sido despachadas fuera de dicho término.

10ª) La citada División hará llegar asimismo a dichos funcionarios una nómina de las actuaciones remitidas a otros Ministerios y/o dependencias, no devueltos dentro de los quince (15) días siguientes.

11ª) Todas las dependencias consignarán en los recibos de expedición (Aviso de Trámite), las condiciones en que son despachadas las actuaciones, indicando concretamente si se trata de un pedido de informe; de un memorandum; de una resolución; de un decreto, etc. y especificando especialmente los que tengan providencia de que ha finalizado su tramitación.

12ª) En los recibos que se otorgue por la recepción de las actuaciones, la firma del empleado que los suscribe, deberá ser puesta sin excepción con tinta o lápiz tinta, estampándose debajo del sello aclaratorio de la misma como asimismo una constancia de cargo, con el sello fechador de la dependencia receptora, que justifique de esa manera, la verda-

dera fecha de su otorgamiento.

13ª) Queda prohibido el diligenciamiento "a la mano" de las actuaciones; ello no obstante, si la naturaleza e importancia de los asuntos exigiesen una tramitación urgente, la entrada o salida, deberán ser comunicadas de inmediato y en todos los casos, a la División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, sin perjuicio de la remisión del "Aviso de Trámite" (Recibo), a posteriori.

14ª) Las dependencias de este Ministerio adoptarán con carácter de urgente las medidas conducentes a simplificar y agilizar al máximo el despacho de los expedientes, adoptando los sellos o formularios que estimen convenientes para la confección de resoluciones o informes tipificados, notificaciones, providencias de mero trámite, etc.

15ª) La inobservancia o transgresión de estas disposiciones hará pasible al o a los responsables de las sanciones disciplinarias que correspondan, según el grado de culpabilidad o negligencia.

16ª) Las reparticiones de este Ministerio deberán adoptar, dentro de sus respectivas órbitas y en un plazo de quince días de la fecha, medidas análogas, las que serán previamente elevadas al suscripto para su aprobación.

17ª) El Departamento de Organización tomará la intervención que le compete a los efectos del cumplimiento de las normas precedentes.

18ª) Derógase todas las disposiciones que se opongan a las presentes.

19ª) Comuníquese, publíquese y archívese.

RESOLUCION Nª 5.161.-

MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION
DIGESTO MINISTERIAL

Boletin Nº 6.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

Buenos Aires, 26 de junio de 1948.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que es oportuno aplicar con carácter general el régimen de bonificaciones por antigüedad para el personal del Ministerio de Hacienda, adoptando a tal fin las medidas correspondientes en consonancia con los postulados de mejoramiento social que el Gobierno propugna;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

ARTICULO 1º .- Establécese para el personal del Ministerio de Hacienda de la Nación un régimen de bonificaciones en concepto de antigüedad, sobre la base del sueldo que percibe cada agente y de acuerdo a su calificación.

ARTICULO 2º .- Queda comprendido en el presente régimen el personal que reviste con carácter permanente en el anexo respectivo de la ley de presupuesto, incluso los que estén cumpliendo servicio militar o fueran incorporados obligatoriamente a las Fuerzas Armadas de la Nación.

ARTICULO 3º .- Queda excluído de las bonificaciones a que se refiere el artículo 1º, el personal de la Administración General de Aduanas y Puertos de la Nación, Dirección Impositiva y Casa de Moneda de la Nación, en razón de que dichas reparticiones cuentan con regimenes similares que otorgan esos beneficios.

ARTICULO 4º .- Independientemente del sueldo básico que le corresponda, cada agente percibirá mensualmente la bonificación adicional a que se refiere el artículo 1º, calculada con arreglo a la siguiente escala:

1er. Sector: Sueldos básicos hasta m$n. 400.-

a) a los que obtengan una calificación cuyo promedio en

el período sea de ocho (8) a diez (10) puntos: m$n.25.- por cada dos años de servicios.

b) a los que obtengan una calificación cuyo promedio en el período sea de seis (6) a menos de ocho (8) puntos: m$n. 25.- por cada tres años de servicios.

c) a los que obtengan una calificación cuyo promedio en el período sea de cuatro (4) a menos de seis (6) puntos: m$n. 25.- por cada cuatro años de servicios.

2do. Sector: Sueldos básicos de más de m$n. 400 hasta m$n.800

a) a los que obtengan una calificación cuyo promedio en el período sea de ocho (8) a diez (10) puntos:m$n. 50.- por cada cuatro años de servicios.

b) a los que obtengan una calificación cuyo promedio en el período sea de seis (6) a menos de ocho (8) puntos: m$n. 50.- por cada seis años de servicios.

c) a los que obtengan una calificación cuyo promedio en el período sea de cuatro (4) a menos de seis (6) puntos m$n. 50.- por cada ocho años de servicios.

3er. Sector: Sueldos básicos de más de m$n. 800 hasta m$n.1.300

a) a los que obtengan una calificación cuyo promedio en el período sea de ocho (8) a diez (10) puntos: m$n. 75.- por cada seis años de servicios.

b) a los que obtengan una calificación cuyo promedio en el período sea de seis (6) a menos de ocho (8) puntos: m$n. 75.- por cada nueve años de servicios.

c) a los que obtengan una calificación cuyo promedio en el período sea de cuatro (4) a menos de seis (6) puntos; m$n. 75.- por cada doce años de servicios.

4to. Sector: Sueldos básicos de más de m$n. 1.300.

a) a los que obtengan una calificación cuyo promedio en el período sea de ocho (8) a diez (10) puntos: m$n. 100.- por cada ocho años de servicios.

b) a los que obtengan una calificación cuyo promedio en el período sea de seis (6) a menos de ocho (8) puntos: m$n. 100.- por cada doce años de servicios.

c) a los que obtengan una calificación cuyo promedio en el período sea de cuatro (4) a menos de seis (6) puntos: m$n. 100.- por cada diez y seis años de servicios.

Los Directores y Administradores Generales, Directores y

Administradores, Jefes de Departamento de la Subsecretaria, sus reemplazantes naturales y los funcionarios con jerarquía superior a la de los citados anteriormente, percibirán un adicional por antigüedad de m$n. 100 por cada ocho años de servicios.

ARTICULO 5º .- A los efectos del adicional, calculado en forma que se determina en el artículo anterior, se considerará como antigüedad el total de años de servicios prestados por los agentes en la Administración Pública Nacional, ya sea en forma ininterrumpida o alternada. Los servicios prestados en la Administración Pública Nacional que hayan originado pensión, jubilación o retiro; los servicios docentes o auxiliares de la docencia que se cumplan simultáneamente con el ejercicio de un cargo en la Administración Pública Nacional; y los períodos de licencia sin goce de sueldo por un término mayor de treinta días, no serán computados a los efectos de este régimen de bonificaciones.

ARTICULO 6º .- Los reemplazantes temporarios de agentes en uso de licencia no percibirán adicionales por antigüedad. En caso de que los mismos fueran luego designados con carácter permanente, les será computada la antigüedad desde la fecha en que ingresaron como reemplazantes.

ARTICULO 7º .- En los casos en que el agente pase o sea promovido a un sector superior conservará los adicionales por antigüedad ya adquiridos, y desde ese momento comenzará a acumular nueva antigüedad, hasta colocarse en las condiciones necesarias para lograr una nueva bonificación por adicional, la que al producirse será sumada a la obtenida anteriormente.

Si al efectuarse el pase de un sector a otro existieran plazos de antigüedad que no hubieran aún alcanzado a completar un período de bonificación en el sector anterior, esa antiguedad se trasferirá al nuevo sector, conjuntamente con la última calificación obtenida. Esta calificación traída desde el sector anterior, cubrirá toda la antiguedad que el agente transfiera al nuevo sector.

ARTICULO 8º .- Los ajustes por adicionales de antigüedad se efectuarán al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año, comprendiéndose en la primera fecha a los que estando en condiciones para ello, hubiesen cumplido los períodos de antigüe-

dad entre el 1ª de julio y el 31 de diciembre inclusive; y en la segunda a los que lo hubiesen cumplido entre el 1ª de enero y el 30 de junio inclusive, las liquidaciones que correspondan por estos adicionales se harán efectivas con retroactividad al primer día del mes siguiente a aquél en que se hayan cumplido los períodos.

ARTICULO 9ª .- Los agentes comprendidos en el presente régimen serán calificados ponderando su capacidad, rendimiento y conducta, mediante una escala de hasta diez (10) puntos, cuyas equivalencias serán:

Sobresaliente	desde nueve (9)	a diez (10)	puntos.			
Distinguido	" ocho (8)	" menos de	nueve	(9)	pts.	
Muy bueno	" siete (7)	" "	" ocho	(8)	"	
Bueno	" seis (6)	" "	" siete	(7)	"	
Suficiente	" cuatro (4)	" "	" seis	(6)	"	
Insuficiente	" uno (1)	" "	" cuatro	(4)	"	

ARTICULO 10ª.- A los agentes que obtengan calificación de "insuficiente" se les acordará un plazo de seis meses para mejorar concepto. Si no lo lograren podrán ser retrogradados hasta dos categorías, debiéndoseles calificar nuevamente dentro de los tres meses de la fecha de la retrogradación. De resultar también "insuficiente" los agentes podrán ser retrogradados otra categoría y hasta ser declarados cesantes. Esta última medida se operará por el sólo hecho de la calificación; no tendrá carácter disciplinario y no requerirá la formación de sumario alguno.

ARTICULO 11ª .- No serán calificados los funcionarios a que se refiere la parte "in fine" del artículo 4ª. Los agentes que por cumplimiento del servicio militar, por su incorporación como reservistas del ejército o por uso de licencia, hayan prestado servicio en el año por períodos menores de seis meses tampoco serán calificados durante ese lapso, manteniendo la última calificación que les hubiera correspondido hasta tanto se reintegren a su cargo.

ARTICULO 12ª .- El personal adscripto a otras dependencias oficiales será calificado de acuerdo con el informe de la jurisdicción en la cual se desempeña.

ARTICULO 13ª .- En la Subsecretaría del Ministerio de Hacien

da y en cada una de las reparticiones cuyo personal esté comprendido en las disposiciones del presente decreto, funcionará una Junta de Calificaciones constituida por los funcionarios que oportunamente se determine por vía reglamentaria, la que estará encargada de establecer las calificaciones definitivas del personal y de entender en la interposición de reclamos.

ARTICULO 14º .- En los casos de interposición de reclamos, esas Juntas, a más de los funcionarios que oportunamente se determinen, estarán, integradas también por un agente designado por el Ministro de Hacienda, de una terna propuesta anualmente por el personal, constituída por agentes del Item y sector del reclamante, que hubieran obtenido en el año inmediato anterior una calificación no menor de ocho (8) puntos.

ARTICULO 15º .- De acuerdo con las disposiciones de los artículos 1º y 4º, el presupuesto de sueldos de las reparticiones comprendidas en el presente decreto, se formará con:

a) un presupuesto fijo representado por el monto de los sueldos básicos correspondientes a las categorías en que se clasifica al personal.

b) una partida móvil y global representada por el monto de los adicionales que corresponda asignar anualmente en concepto de antigüedad.

ARTICULO 16º .- Los adicionales por antigüedad que establece el artículo 4º, serán liquidados al personal comprendido en este régimen, con retroactividad al 1º de marzo del año en curso; a tal efecto y por esta única vez el mismo será calificado como "sobresaliente".

ARTICULO 17º .- Déjanse sin efecto todas las disposiciones que rigen para la Administración General de Aduanas y Puertos de la Nación, Dirección General Impositiva y Casa de Moneda de la Nación, en cuanto limitan los beneficios del adicional por antigüedad hasta una determinada cantidad o sueldo.

ARTICULO 18º .- En concordancia con lo dispuesto en el artículo anterior, las reparticiones que se citan en el mismo, efectuarán los reajustes necesarios para incluir en el régimen de bonificaciones por antigüedad al personal que actual-

mente no lo perciba o lo haga con limitaciones, siguiendo a ese efecto el coeficiente de progresión del sistema de adicionales que rige en cada una de ellas, de acuerdo a la calificación y fecha de vigencia que oportunamente se establezca.

ARTICULO 19º .- A los efectos del régimen de adicionales que establece el presente decreto, solamente se considerará la antiguedad hasta un límite de treinta años de servicios, pasado el cual cada agente continuará percibiendo el último adicional que le hubiera correspondido. Esta disposición regirá también para las reparticiones señaladas en el artículo 3º.

ARTICULO 20º .- Los adicionales por antigüedad, como parte integrante del sueldo del agente, están sujetos a los descuentos por aporte jubilatorio que establece la ley Nº 11.923.

ARTICULO 21º .- El mayor gasto que representa la aplicación del beneficio que se autoriza por el presente decreto, se atenderá con los créditos que se prevean al efecto en el presupuesto de los respectivos organismos.

ARTICULO 22º .- La reglamentación y disposiciones complementarias del presente decreto serán dictadas por conducto del Ministerio de Hacienda.

ARTICULO 23º .- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.

DECRETO Nº 19.203.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 7.-

BONIFICACIONES POR ANTIGÜEDAD

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949.-

CONSIDERANDO:

Que el decreto Nº 19.203, de fecha 26 de junio de 1948, por el que se establece para el personal del Ministerio de Hacienda de la Nación un régimen de bonificaciones en concepto de antigüedad, determina en su artículo 2º que la reglamentación de las disposiciones contenidas en el mismo se hará por conducto de este Departamento,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION
R E S U E L V E :

1º) Determínase que los funcionarios comprendidos en el régimen de bonificaciones por antigüedad y plazos a que se refiere la parte "in-fine" del artículo 4º del decreto Nº 19.203, son los siguientes: Procurador del Tesoro; Presidente de la Contaduría General de la Nación y Contadores Mayores; Tesorero General de la Nación, Director General y Directores de la Dirección General Impositiva; Director General de las Oficinas Químicas Nacionales; Director de Casa de Moneda de la Nación; Administrador General de Contribución Territorial; Administrador General de Aduanas y Puertos de la Nación; Director General de Administración; Director General de Suministros del Estado; Director de Defensa Nacional del Ministerio de Hacienda; Directores y Jefes de Departamento de la Subsecretaría; los reemplazantes naturales de todos los citados precedentemente, y los funcionarios con jerarquía superior a la de los taxativamente enumerados.

2º) A los fines del beneficio establecido, se considerará como antigüedad el total de los años de servicios debidamente certificados, prestados por el agente en la Administración Pública Nacional, -incluso las Fuerzas Armadas de la Nación-, ya sea en forma ininterrumpida o alternada. En consecuencia, no serán computados:

a) Los servicios prestados en la Administración Pública Nacional y en las Fuerzas Armadas de la Nación, que hayan originado pensión, jubilación o retiro.

b) Los servicios provinciales o municipales.

c) Los servicios honorarios prestados en el orden nacional, provincial o municipal.

d) Los servicios prestados en Empresas Privadas, con anterioridad a la fecha en que las mismas hubieran pasado a formar parte del Patrimonio Nacional.

e) Los servicios docentes o auxiliares de la docencia que se cumplan simultáneamente con el ejercicio de un cargo en la Administración Pública Nacional.

f) Los períodos de licencia sin goce de sueldo, por un término mayor de treinta días.

g) Los servicios prestados en Empresas de Capital Mixto.

h) Los servicios prestados en calidad de becarios.

3º) A los agentes que hayan prestado servicio en la Administración Pública Nacional, con carácter de supernumerarios, o con retribución a jornal, o a destajo, o por cuentas especiales, se les computará esa antigüedad a los efectos de la bonificación, una vez designados con carácter permanente. Los agentes de que se trata, deberán acreditar dentro de los treinta días de liquidado el primer adicional por alguna de aquellas circunstancias, que han ingresado los descuentos de ley; y en caso de que no hubieran sido efectuados quedan obligados a presentarse dentro del mismo plazo anterior ante la Sección Ley Nº 4.349 del Instituto Nacional de Previsión Social, para que se les formule el cargo respectivo.

4º) El agente que se incorpora como conscripto percibirá el cincuenta por ciento de su sueldo básico y el cincuenta por ciento del adicional por antigüedad que le corresponde; en tanto que su reemplazante percibirá solamente el cincuenta por ciento del sueldo básico del titular.

5º) El agente que posea un grado en la reserva en la categoría de oficial o suboficial, y sea incorporado, percibirá el sueldo del grado, si éste es mayor que el del puesto civil, entendiéndose sueldo básico y adicional por antigüedad. En caso contrario, la diferencia será abonada por la dependencia res-

pectiva. A su reemplazante, se le abonará únicamente el importe del sueldo básico del titular.

6°) El agente que estuviere en uso de licencia sin goce de sueldo, no percibirá durante el lapso que dure la misma el adicional por antigüedad; y su reemplazante recibirá únicamente el importe del sueldo básico correspondiente al titular, en tanto que, en concepto de bonificación por antigüedad, continuará devengando el mismo adicional que le correspondiere en el puesto del cual es titular.

7°) El agente que estando en el ejercicio de un cargo permanente fuese designado para ocupar otro superior con carácter interino, percibirá únicamente el sueldo básico del titular a quién reemplaza; en tanto que, en concepto de bonificación por antigüedad continuará devengando el mismo adicional que le correspondiere en el puesto del cual es titular.

8°) Los agentes que ingresen al Ministerio de Hacienda con posterioridad a la fecha de la presente, percibirán la respectiva bonificación de acuerdo con la antigüedad que acrediten y el sector y grupo dentro del cual fueran clasificados por su sueldo básico y función. A estos fines, se tomará en cuenta la primera calificación obtenida por el agente después de los seis meses de su ingreso al Ministerio.

9°) Sin perjuicio de los descuentos fijados por resolución N° 894 de 17 de agosto de 1946, el agente que incurriera en llegadas fuera de hora o inasistencias que posteriormente no pudiere justificar, sufrirá correlativamente el descuento que en forma proporcional corresponda efectuar sobre el adicional por antigüedad que mensualmente percibe.

10°) Los agentes comprendidos en el beneficio del decreto que se reglamenta, -excepto los funcionarios mencionados en el punto 1° de la presente-, serán calificados de conformidad con lo establecido en su artículo 9°, anualmente, y de acuerdo con los conceptos y equivalencias numéricas correspondientes. A tal efecto, y durante la primera quincena de los meses de julio y enero de cada año, el agente que cumpla período entre enero y junio o entre julio y diciembre, respectivamente, será calificado por sus superiores inmediatos.

11°) Para determinar la ponderación del personal, se calificarán los siguientes conceptos:

1) CAPACIDAD

a) Aptitud para la función que desempeña.
b) Preparación General.

2) RENDIMIENTO

a) Contracción a las tareas.
b) Calidad del trabajo realizado.

3) CONDUCTA

12°) Para calificar la aptitud, deberá tenerse en cuenta los conocimientos sobre las disposiciones legales y reglamentarias que el agente posea con referencia a la función que desempeña, como así también los que en el ejercicio de sus tareas haya adquirido por la práctica.

13°) Se entiende por preparación general, los conocimientos o ilustración que posee el agente; su espíritu de iniciativa; criterio y condiciones para subsanar los defectos de organización.

14°) Para calificar el rendimiento se deberá tener presente la contracción a las tareas; la asistencia y la calidad del trabajo realizado por el agente, como así también el empeño y la eficacia puestas de manifiesto en los asuntos sometidos a su consideración.

15°) Para la conducta se considerará el carácter, espíritu de camaradería, discreción, trato con sus superiores, subalternos o con el público, en cada caso, y presentación personal del agente.

16°) Los conceptos de "insuficiente" a "distinguido", se fijarán teniendo en cuenta los conocimientos demostrados por el agente para desempeñarse en la función encomendada, prescindiéndose de comparaciones respecto a la competencia exigida para cumplir otra tarea; calificándose como "distinguido" al que se destaque especialmente en su cargo. Para merecer la calificación de "sobresaliente" el agente deberá reunir, además, las condiciones necesarias para desempeñarse en forma satisfactoria en la función inmediata superior.

17°) Los formularios en que consten las calificaciones

se elevarán a la Junta de Calificación, la que tomará conocimiento de las mismas a efecto de hacer saber a los agentes el puntaje promedio que les corresponda, de acuerdo con el que les ha sido asignado por los funcionarios a que se refiere el punto 10ª y el procedimiento de que informa el punto 21ª.

11ª) En la Subsecretaría y en cada una de las reparticiones del Ministerio de Hacienda, funcionará una Junta de Calificación compuesta por tres funcionarios de alta jerarquía, designados por el Subsecretario, Director, Administrador o Jefe de repartición, y el agente del Item, sector y especialidad a que se refiere el artículo 14ª del decreto Nº 19.203 de 1948. Esta Junta será la encargada de entender en los reclamos interpuestos, y establecer como consecuencia la calificación definitiva de los agentes. Su fallo tiene carácter de inapelable.

12ª) Para entender en los reclamos interpuestos por los agentes del interior, formará también parte de esta Junta el Inspector o Supervisor de zona, o el funcionario que lo reemplace.

20ª) Los integrantes de la Junta de Calificación durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

21ª) Dentro de los quince días de recibido el formulario con las calificaciones, la Junta de Calificación deberá hacer las saber a los agentes, a cuyo fin promediará el puntaje obtenido por los mismos en los rubros de "capacidad" y "rendimiento". Sobre ese promedio, la "conducta" incidirá del siguiente modo:

a) En caso de ser muy buena, aumentará el promedio en 0,50 de punto.
b) En caso de ser buena, no alterará el promedio obtenido.
c) En caso de ser regular, disminuirá en 1 punto el promedio obtenido.
d) En caso de ser mala, disminuirá en 2 puntos el promedio obtenido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que se haya hecho pasible el agente por esta causa.

22ª) La comunicación obtenida por el agente le será comunicada por escrito. Si éste tuviese observación que formular, in

terpondrá reclamo ante la Junta de Calificación dentro del término de diez (10) días de haber sido notificado.

Vencido ese plazo sin observaciones, se considerará que el agente está conforme con la calificación asignada y que la misma queda consentida.

23ª) Si del reclamo interpuesto en los términos del apartado 22ª hubiese que modificar la calificación del agente, por no ser exactos los antecedentes que sirvieron de base para determinarla, la Junta de Calificación hará saber tal circunstancia a la autoridad superior de la repartición, la que adoptará las medidas que estime corresponder, sin perjuicio de someter a su vez a la aprobación del Ministerio la adopción de otras, en caso de concurrir factores agravantes.

Idéntico procedimiento se adoptará en los casos en que la Junta de Calificación, dentro de las facultades que le son propias y que por éste apartado se le acuerdan, llame a su seno a los agentes que estime necesario y compruebe que la calificación que les ha sido asignada a los mismos por sus superiores inmediatos, no es la que les corresponde de acuerdo a sus méritos.

24ª) El personal de cualquiera de las reparticiones del Ministerio que se desempeñare en calidad de adscripto en otras de sus dependencias, será calificado por el jefe inmediato de la sección u oficina en la cual presta servicios, y sus resultados se comunicarán a la repartición a que pertenece por nombramiento.

En caso de interposición de reclamo, entenderá la Junta de Calificación donde preste servicios el agente; y éste comunicará a la repartición de la cual es titular el reclamante, la calificación definitiva que haya obtenido.

Igualmente se procederá con el personal que se desempeña en calidad de adscripto fuera del Ministerio de Hacienda.

25ª) Las Juntas de Calificaciones están facultadas para recabar directamente a todas las dependencias del Ministerio, las informaciones que estime necesarias para el mejor cumplimiento de su cometido.

26ª) Teniendo en cuenta las funciones específicas de la Casa de Moneda de la Nación, -incorporada al régimen del de-

creto Nº 12.203 de 1948 por el que lleva el Nº 20.390 de 6 de julio del mismo año-, y los trabajos de carácter industrial que realiza sobre la base de planes previos, autorízase a la citada dependencia para continuar aplicando el sistema y los procedimientos establecidos en la resolución nº 198.948 de su registro.

27a) Comuníquese, publíquese y archívese.

RESOLUCION Nº 478.-

Boletín Nº 8.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

Buenos Aires, 1 de junio de 1950.-

Visto la consulta formulada por la Dirección del Personal, referente a la aplicación de la parte "in fine" del artículo 5º del decreto Nº 19.203/948 y del inciso f) del punto 2º de la Resolución Ministerial Nº 478/949, que lo reglamenta; y

CONSIDERANDO:

Que el espíritu que animó las disposiciones del referido acto de gobierno, fué el de establecer un régimen que bonificara la antigüedad del agente en la Administración Nacional, condicionándola a coeficientes de capacidad y conducta;

Que, a efectos de hacer practicable la ejecución del beneficio se dispuso dividir en ciclos la vida administrativa de cada empleado, de acuerdo con sectores de calificación y sueldos, de tal modo que los distintos factores que pudieran producir modificaciones en la antigüedad computable, sólo fueran considerados en forma independientes dentro del período que origina el adicional;

Por lo tanto,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º) Los períodos de licencia sin goce de sueldo por un término mayor de treinta días, serán deducidos totalmente de la antigüedad del agente en el ciclo que según su sector y promedio de calificación le corresponda cumplir en aquel momento.

2º) Las licencias sin goce de sueldo por un término menor de treinta días que se produzcan dentro de un ciclo, se iran acumulando; y cuando lleguen a superar el margen de treinta días fijado, se las descontará totalmente de la antigüedad bonificable.

3º) La finalización de un ciclo de antigüedad da carácter definitivo a las situaciones provocadas durante el transcurso del mismo por las licencias sin goce de sueldo, las que en ningún caso deben gravitar sobre el cómputo de los nuevos términos de tiempo que deban considerarse.

4º) Comuníquese, publíquese y archívese.-

RESOLUCION Nº 1.418.-

Boletin Nº 9.-

BONIFICACION POR ANTIGUEDAD

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1950.-

Vistos los términos de la Ley nº 14.017, modificatoria de la Ley nº 13.343 en la parte "in-fine" de su artículo 8º; y teniendo en cuenta que como consecuencia de la misma corresponde reajustar el régimen de las bonificaciones por antigüedad establecido por decreto nº 19.203/948,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION
R E S U E L V E :

1º) A los efectos del adicional por antigüedad que prevé el decreto nº 19.203/948 y su reglamentación, el personal docente comprendido en las Leyes nº 13.343 y 14.017, que también desempeñe funciones en este Departamento, no podrá acrecer su antigüedad bonificable con los servicios prestados en el Ministerio de Educación.

2º) Exceptúase de lo determinado en el apratado anterior a los servicios prestados por el agente en el Ministerio de Educación con anterioridad a su ingreso en este Departamento, siempre que en tal circunstancia hubiese habido una cesación total de las funciones educacionales o consideradas como tales. En caso de que el agente reingresara al Ministerio de Educacion, la antigüedad general computada se anulará y el adicional deberá liquidarse en orden de los servicios prestados únicamente en este Departamento.

3º) Cuando por renuncia, cesación o cualquier otra causa el personal docente o considerado como tal que también se desempeñe en este Departamento dejare de prestar servicios en el Ministerio de Educación, podrá solicitar la acumulación de la antigüedad acreditada en aquella Secretaria de Estado, siempre que los servicios a considerar no se hayan cumplido simultáneamente.

4º) La Direccion del Personal del Ministerio, la Direccion General de Administracion y demas reparticiones efectuaran el reajuste necesario de acuerdo a las declaraciones ju-

radas y demas constancias que obren en su poder, para que a partir del 1º de diciembre proximo se abonen las bonificaciones por antigüedad de acuerdo con las presentes normas.

5º) Comuníquese a quienes corresponda; publíquese y pase a la Contaduría General de la Nación para su conocimiento y demás efectos.

RESOLUCION Nº 2.112.-

MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 10.-

BONIFICACION POR ANTIÜEDAD

Buenos Aires, 6 de mayo de 1955.-

Visto que la resolución nº 478 de 14 de marzo de 1949, reglamentaria del régimen de bonificaciones por antigüedad para el personal de este Ministerio, establecido por decreto nº 19.203/948, determina en el inciso b) de su punto 2º, que los servicios municipales no serán computados a los fines del beneficio de que se trata, y

CONSIDERANDO:

Que la exclusión de los servicios aludidos, como la de otros que se enumeran en la recordada cláusula, se fundamenta en la interpretación jurídica dada entonces al concepto Administración Nacional, invocado por el artículo 4º del decreto nº 19.203/948 para determinar el alcance del régimen bonificatorio acordado;

Que es evidente que posteriormente, distintos actos de gobierno han ido variando en este aspecto la estructura institucional del Poder Administrador, refirmando así su carácter de "Administración Pública Federal o Nacional, territorialmente descentralizada";

Que en ese sentido, resulta concluyente el reciente dictado del decreto nº 17.687 de 15 de octubre de 1954, que determina que la Intendencia Municipal de la Ciudad de Buenos Aires actuará "bajo la dependencia inmediata del Ministerio de Interior y Justicia y mantendrá por intermedio de éste sus relaciones con el P.E. y demás Departamentos de Estado";

Que en consecuencia, hallándose claramente definida la naturaleza jurídica de los servicios prestados en la Municipalidad de la Capital Federal, procede su reconocimiento a los fines del régimen del decreto nº 19.203/948, en idénticas condiciones a los acreditados en otros organismos dependientes de la Administración Nacional;

Por ello y atento los informes producidos por el señor Procurador General de la Nación, la Procuración del Tesoro

y la Contaduría General de la Nación,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION
R E S U E L V E :

1ª) Reconócese a partir del 1ª de enero del corriente año, los servicios prestados por los agentes de este Ministerio en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del régimen de Bonificaciones por antigüedad.

2ª) Derógase toda disposición que se oponga a la presente.

3ª) Comuníquese, publíquese, tomen nota la Dirección General de Contabilidad y Administración y la Contaduría General de la Nación y archívese.-

RESOLUCION Nª 3.764.-

Boletin Nº 11.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1953.-

Visto el decreto nº 19.203/948 de 26 de junio de 1948, por el cual se establece para el personal del Ministerio de Hacienda un régimen de bonificaciones por antigüedad, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con las disposiciones del artículo 22º del mencionado decreto, fué dictada la Resolución Ministerial nº 478 de 14 de marzo de 1949, reglamentaria de las disposiciones del mismo;

Que en virtud de lo establecido por el apartado 3º de la Resolución de que se trata, los beneficios de la bonificación por antigüedad no alcanzan al personal de cuentas especiales o con retribución a jornal o a destajo;

Que esa exclusión surge de los términos expresos del apartado 3º de referencia, cuyo texto determina: "A los agentes que hayan prestado servicios en la Administración Pública Nacional, con carácter de supernumerarios, o con retribución a jornal, o destajo, o por cuentas especiales, se les computará esa antigüedad a los efectos de la bonificación, una vez designados con carácter permanente";

Que sobre la base de las disposiciones comentadas, debe entenderse que el carácter de "permanente" lo adquiere el empleado al ser designado con imputación a un cargo de presupuesto, lo cual implica un tratamiento discriminatorio entre diversos servidores del Estado, basado únicamente en la distinta situación de revista de unos y otros;

Que, a juicio de este Departamento, la determinación del carácter permanente o transitorio de un cargo o empleo, siendo un problema de orden general, debe ser analizado de conformidad con las normas contenidas en el artículo 5º del decreto nº 55.211 de fecha 23 de enero de 1935, reglamentario de la Ley nº 11.923, el cual define y preci-

sa con exactitud dichos conceptos;

Que, a efectos de reconocer al personal que revista en cuentas especiales o con retribución a jornal o a destajo las benificaciones por antigüedad que otorga el aludido decreto nº 19.203/948 y como medida acorde con los postulados de mejoramiento social que propugna el Superior Gobierno de la Nación, procede modificar el apartado 3º de la Resolución nº 478/949 citada;

Por todo ello,

EL MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION
R E S U E L V E :

1º) Sustitúyese el punto 3º de la Resolución nº 478 de 14 de marzo de 1949, por el que se determina a continuación:

3º) Queda comprendido en el régimen de bonificaciones por antigüedad que establece el decreto nº 19.203 de 26 de junio de 1948, el personal designado o a designarse con carácter permanente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º del mencionado decreto.

A esos efectos, se considerará permanente:

a) El cargo o empleo de los agentes que no sean designados expresamente con carácter accidental o transitorio.

b) El cargo o empleo de los agentes designados para desempeñarlo durante períodos predeterminados mayores de seis meses, cualquiera sea la forma de su remuneración.

c) El cargo o empleo de los agentes designados con carácter accidental o transitorio, sin fijación de término, y el de los jornalizados, o con retribución a destajo o por cuentas especiales, a partir de la fecha en que se cumplan seis meses de servicio consecutivo.

d) Para los casos previstos en los apartados b) y c), si los servicios fueran discontinuos se sumarán las distintas prestaciones.

e) Para ser acreedor a los beneficios de la bonificación por antigüedad, será condición indispensable, con

carácter general, que el agente aporte con los descuentos de ley al Instituto Nacional de Previsión Social.

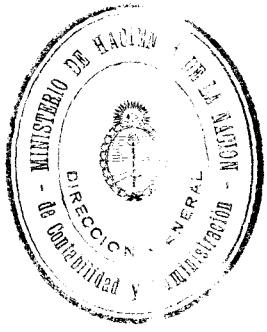
f) A los agentes que hayan prestado servicio en la Administración Pública Nacional y se los designe en este Departamento con carácter accidental o transitorio, o con retribución a jornal, o a destajo, o por cuentas especiales, se les computará aquella antigüedad, a los fines bonificables, de acuerdo con las normas precedentes, a partir de la fecha en que pasen a revestir carácter permanente, vale decir, una vez cumplidos seis meses de servicio. Sin perjuicio de ingresar los descuentos de ley por su cargo, dichos agentes deberán acreditar, en su caso, que han efectuado los aportes correspondientes al Instituto Nacional de Previsión Social.

2º) Al personal a jornal o a destajo, se le computará un año de antigüedad por cada 240 días de haberes liquidados.

3º) Las disposiciones de la presente resolución comenzarán a regir a partir del día 1º de enero de 1954.

4º) Comuníquese y pase a la Dirección General de Contabilidad y Administración a sus efectos.-

RESOLUCION nº 1.977.-



Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 12.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1951.-

Vistas las presentes actuaciones, por las cuales el Oficial 5º de la Contaduría General de la Nación, don Luis Francisco Pellegrino, gestiona se le abone la bonificación por antigüedad correspondiente al mes de mayo último; y

CONSIDERANDO:

Que el recurrente se desempeñó en el Ministerio de Justicia hasta el día 7 de mayo del corriente año, habiéndose liquidado en ese Departamento la bonificación de que se trata desde el día 1º al 7 inclusive del mes comentado;

Que, con fecha 8 del mismo mes, el peticionante se presentó a continuar prestando servicios en este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el decreto nº 1.567 de 2 de Mayo de 1951, por el que se disponía su nombramiento como Oficial 5º (Contador Fiscal de 5a.) de la Contaduría General de la Nación;

Que, en consecuencia, si el organismo en que se desempeñaba el causante tiene un sistema por antigüedad análogo al del Ministerio de Hacienda y se ha acreditado fehacientemente que no existe interrupción de servicios (fs. 5vta.), procede disponer que la respectiva liquidación del beneficio se practique a partir del día en que el interesado se presentó a ocupar su puesto, teniendo en cuenta que la prestación se ha cumplido sin solución de continuidad y en jurisdicciones donde es aplicable un mismo régimen;

Que, asimismo, es del caso aclarar los términos del artículo 8º de la reglamentación 478/49, en el sentido de que los seis meses de tiempo previstos en el mismo para conocer la primera calificación del agente, deben entenderse referidos únicamente a los ingresantes, toda vez que cuando se trate de servicios prestados entre una y otra dependencia sin interrupción, no resulta aplicable aquel procedimiento;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1ª) Pase a la Dirección General de Administración, para que de acuerdo con las razones sustentadas en los considerandos, se sirva liquidar al Oficial 5ª (contader Fiscal de 5a) de la Contaduría General de la Nación, adscripto a la Dirección General de Finanzas, don LUIS FRANCISCO PELLEGRINO, la bonificación por antigüed d a que se refiere el decreto nº 19.203/948 y su reglamentación de 14 de marzo de 1949, a partir del día 8 de Mayo del año en curso.

2ª) Declárase que en los casos en que un agente pase a continuar prestando servicios sin interrupción de uno a otro organismo de Estado, no es aplicable lo prescripto por el artículo 8ª de la reglamentación del decreto nº 19.203/48, en cuanto prorroga a seis meses de tiempo el plazo para conocer la primera calificación de los ingresantes y disponer la correlativa liquidación del beneficio.

3ª) Comuníquese a quienes corresponda; incorpórese la presente como parte integrante de la resolución nº 478/949, reglamentaria del decreto nº 19.203/948: publíquese y cumplida, dése al archivo.-

RESOLUCION Nº 2.285.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 13.-

BONIFICACION POR ANTIGUEDAD

Buenos Aires, 7 de Julio de 1953.-

Visto las presentes actuaciones, por las cuales el Oficial 2º (Contador Fiscal) de la Contaduría General de la Nación, don Alejandro Agustín Beguiristain, solicita reconsideración en cuanto al pago de la bonificación por antigüedad que se le viene practicando, y

CONSIDERANDO:

Que en oportunidad de entrar en vigencia el decreto nº 19.203/48, en virtud del cual se bonifica la antigüedad del personal en este Departamento, el recurrente declaró que con anterioridad a su ingreso al Ministerio de Hacienda, -ocurrido el 1º de febrero de 1946- se había venido desempeñando en el Ministerio de Educación desde agosto de 1932 como maestro de grado, y simultáneamente, desde octubre del mismo año con el cargo de Auxiliar 8º (Celador).

Que si bien al ingresar a este Ministerio el peticionante hizo renuncia de su cargo de Auxiliar 8º (Celador) antes citado, se le computaron al mismo los servicios comprendidos entre agosto de 1932 y febrero de 1946, -vale decir, los correspondientes a la docencia, aproximadamente 14 años- lapso que acreció su antigüedad a los fines de la respectiva bonificación;

Que, posteriormente, al sancionarse la ley nº 13.343, por la que establecían bonificaciones para el personal docente, el presentante se acogió a los términos del artículo 8º del mencionado texto legal, que establecía que en los casos en que se prestaren servicios administrativos y docentes y en más de uno de ellos rigieran sistemas de adicionales por antigüedad, el beneficiario debería optar por el cargo sobre cuya remuneración y antigüedad se liquidaría dicha bonificación;

Que al optar el interesado y solicitar que el beneficio de que se trata fuera liquidado por el Ministerio de Educa-

ción, este Departamento, como es natural, suspendió a partir del 1º de octubre de 1949, el pago de los adicionales por antigüedad que el causante venía percibiendo, correspondiendo destacar, a título ilustrativo, que el dictado de la ley nº 14.017 regularizó definitivamente el estado de cosas que nos ocupa, al determinar que en los casos en que se prestare servicios administrativos y docentes y en más de uno de ellos rigieran sistemas de bonificaciones por antigüedad, ésta debería computarse independientemente en cada uno de ellos, para percibir cada bonificación;

Que, finalmente, el decreto nº 7.060/952, es el que hace mérito para proveer en el presente caso, toda vez que extiende los beneficios de la bonificación por antigüedad a los preceptores y auxiliares de disciplina de establecimientos secundarios, personal que hasta esa fecha no percibía ninguna clase de adicionales por dicho concepto; siendo del caso, señalar, a mayor abundamiento, que el artículo 2º del citado acto de gobierno prescribe que él beneficio de que se trata corresponde a los preceptores y auxiliares de disciplina considerados docentes a los efectos de la acumulación, aun cuando gocen de igual beneficio en el desempeño de otro cargo;

Que, en consonancia con los principios anteriores, ha quedado aclarado el panorama que ofrecia el aspecto de antigüedad bonificable del peticionante, puesto que siguiendo las distintas disposiciones sobre el particular, ha de concluirse en que los años de servicios prestados por el mismo entre octubre de 1932 y enero de 1946 en calidad de Auxiliar 8º (Preceptor) deben ser reconocidos por este Ministerio en los términos del articulo 5º del recordado decreto nº 19.203/948 y bonificados consecuentemente;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION
R E S U E L V E :

1º) Pase a la Contaduría General de la Nación, para que de acuerdo con lo sustentado en los considerandos, proceda a regularizar la situación del Oficial 2º (Contador Fiscal) de la citada repartición, don ALEJANDRO AGUSTIN REGUIRISTAIN, debiendo computarle en el orden administrativo, los servicios

prestados en el cargo de Auxiliar 8ª (Celador) del Ministerio de Educación entre el 1º de octubre de 1932 y el 31 de enero de 1946, a los efectos de la bonificación que se otorga por aplicación del decreto nº 19.203/948, su reglamentación de 14 de marzo de 1949 y su resolución ampliatoria nº 2.112/950, la que deberá abonarse a partir del 1º de octubre de 1949.

2º) Incorpórese la presente como parte integrante de la resolución nº 478/949, reglamentaria del decreto nº 19.203/48.

3º) Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y cumplido, dése al archivo.-

RESOLUCION Nº 1.467.-



MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 14.-

VIATICOS - MOVILIDAD - INDEMNIZACIONES - HORAS EXTRAORDINARIAS - REINTEGRO DE GASTOS

Buenos Aires, 16 de octubre de 1956.-

Visto la conveniencia de ordenar en un cuerpo orgánico las disposiciones vigentes relativas a viáticos, movilidad, indemnizaciones por traslado y por fallecimiento del personal comisionado, retribución por servicios extraordinarios, gastos de comida y otras cuestiones sobre la materia, y

CONSIDERANDO:

Que es imprescindible fijar en forma indubitable el sentido que regla la aplicación de cada uno de los conceptos expresados;

Que es necesario adecuar las retribuciones asignadas en los distintos pronunciamientos que rigen en los rubros cuyo ordenamiento se persigue, en concordancia con el nivel logrado en las remuneraciones del personal de la administración pública;

Que tal ordenamiento constituye un acto complementario del Decreto-Ley Nº 7.104/55, modificado por el Decreto-Ley Nº 1.635/56, en cuanto contribuirá a posibilitar un adecuamiento y racionalización de las normas administrativas relacionadas con las materias de que se trata, lo cual en última instancia redundará en la obtención de economías en los gastos públicos;

Por todo ello y atento lo propuesto por el Ministerio de Hacienda de la Nación a quien compete cuanto se refiere a los gastos de la administración nacional y a la fiscalización administrativa de la misma;

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los funcionarios y empleados de la Administración Pública Nacional, cualquiera sea su jerarquía, función, denominación o categoría tendrán derecho a percibir, cuando reúnan los extremos que se determinan en el presente decreto, asignaciones que se liquidarán bajo las denominaciones de "viá

ticos", "gastos de movilidad", "movilidad fija", "indemnización por traslado", "indemnización por fallecimiento del personal comisionado", "retribución por servicios extraordinarios" y "gastos de comida".

ARTICULO 2º.- VIATICOS.- Es la asignación diaria fija que se acuerda a los agentes del Estado, con exclusión de los pasajes y órden de carga, para atender todos los gastos personales que le ocasione el desempeño de una comisión de servicio alejada a más de CINCUENTA (50) kilómetros de su asiento habitual.

Entiéndese por "asientos habitual" a los efectos de la aplicación del presente decreto, la localidad donde se encuentre instalada la oficina en la cual se preste efectiva y permenentemente el servicio.

I - El viático será liquidado en función del sueldo o jornal básico mensual del agente (categoría de presupuesto), de acuerdo con la siguiente escala:

SUELDO O JORNAL BASICO MENSUAL		VIATICO DIARIO
Hasta	m$n. 1.500	m$n. 80.-
De más de m$n.1.500 hasta	m$n. 2.000	m$n. 100.-
De más de m$n.2.000 hasta	m$n. 2.500	m$n. 120.-
De más de m$n.2.500 hasta	m$n. 3.000	m$n. 140.-
De más de m$n.3.000 hasta	m$n. 3.500	m$n. 160.-
De más de m$n.3.500		m$n. 180.-

II - El otorgamiento del viático se sujetará a las siguientes normas:

a) Comenzará a devengarse desde el día en que el funcionario o empleado sale de su asiento habitual para desempeñar la comisión de servicio hasta el día que regrese de ella, ambos inclusive.

b) Corresponderá el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del viático a los agentes que durante el viaje motivado por la comisión, siendo éste de una duración mayor de CUARENTA Y OCHO (48) horas, cualquiera fuera el medio de transporte utilizado, tengan incluída la comida en el pasaje.

c) Cuando la comisión se realice en lugares donde el Estado facilite al agente alojamiento y/o comidas, se liquidarán como máximo los siguientes porcentajes del viático:

1) 25 % si se le diere alojamiento y comida;
2) 50 % si se le diere alojamiento (cualquiera fuera éste), sin comida; y
3) 50 % si se le diere comida sin alojamiento.

d) Los agentes a quienes se destaque en comisión tienen derecho a que se les anticipe el importe de los viáticos correspondientes, hasta un máximo de TREINTA (30) días.

e) En casos de que un agente deba residir, por razones de servicio, en el mismo alojamiento de su superior, se liquidará a aquél el mismo viático que al último.

f) Cuando en razón de las comisiones el agente se aleje a más de CINCUENTA (50) kilómetros de su asiento habitual y regrese en el mismo día a su domicilio, tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del viático.

g) Las comisiones en el país que tuvieran una duración mayor de SEIS (6) meses, deberán ser autorizadas por el Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio de Hacienda, a los efectos de la liquidación del viático diario correspondiente. En estos casos no es de aplicación la norma del inciso siguiente.

h) Los agentes destacados en comisión cuya duración en un mismo lugar supere SEIS (6) meses, serán considerados como trasladados con carácter permanente y tendrán derecho a la indemnización prevista para esos casos por el presente decreto.

i) Cuando las comisiones se efectúen en zonas alejadas, insalubres, inhóspitas y/o desérticas, donde el personal permanente tenga establecido sobre su sueldo un coeficiente de aumento, el viático a liquidar a los agentes que las desempeñen será bonificado en igual porcentaje.

j) Los agentes que reciban fondos en concepto de viáticos deberán rendir cuenta, mensualmente, de las sumas anticipadas.

Al finalizar la comisión rendirán dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del regreso, el saldo pendiente a esa fecha.

Las rendiciones serán presentadas por intermedio del Jefe de la Repartición respectiva a la Dirección General de Administración u oficina que haga sus veces. En dichas rendiciones constará el tiempo de duración, fechas de salidas y de arribos, informaciones ésas que serán certificadas en cada caso, por la autoridad competente.

k) El envío de personal para el cumplimiento de comisiones o

misiones en el extranjero, cualquiera sea su duración, excepto los casos a que se refiere el artículo 10º, deberá ser autorizado por el Poder Ejecutivo con intervencion del Ministerio de Hacienda de la Nación, previa conformidad del Consejo de Gabinete. El viático a liquidarse a los agentes comprendidos en dichos envíos será exclusivamente el que determina el artículo 2º del presente decreto, multiplicado por coeficiente que fija en dicha materia y con exclusión de la bonificación del 50% que establece el artículo 5º del Decreto Nº 11.919 del 4 de julio de 1956.

1) No procede liquidación por diferencia de asignaciones en concepto de viáticos al personal que habiendo cumplido alguna comisión por exigencias del servicio, sea promovido posteriormente y con efecto retroactivo, a un cargo o jornal mejor remunerado.

ARTICULO 3º .- GASTOS DE MOVILIDAD.- Es la repetición de los gastos que el personal haya tenido que realizar para trasladarse de un punto a otro, en cumplimiento de tareas encomendadas, cuando por circunstancias acreditadas no sea factible el uso de órdenes oficiales de pasajes.

Los gastos de movilidad serán reintegrados de acuerdo a las siguientes normas:

a) Cuando el agente comisionado en la zona de asiento habitual incurra en esa clase de gastos, presentará el pedido de reintegro de los mismo que, una vez conformado por el superior jerárquico, será considerado para la liquidación respectiva.

b) No corresponde reintegrar este concepto de gastos a quienes gocen de movilidad fija, utilicen en las comisiones vehículos del Estado o perciban viáticos.

c) A los agentes que tengan afectados sus vehículos particulares al servicio oficial en las condiciones establecidas por el artículo 17º de la Ley Nº 11.672 (Edición 1943), se les liquidará únicamente el importe equivalente a la CUARTA (1/4) parte del precio oficial vigente en el momento de la comisión, de un litro del combustible empleado, por cada kilómetro de recorrido efectuado según distancias oficiales determinadas por la Administración General de Vialidad Nacional.

ARTICULO 4º .- MOVILIDAD FIJA.- Es la asignación estableci-

da para los agentes que, como misión propia y permanente cumplida fuera de las oficinas o lugares de trabajo, tengan a su gargo tareas de gestión, contralor, verificación, inspección o similares, que les demanden constantes y habituales desplazamientos.

Las retribuciones por movilidad fija serán liquidadas de acuerdo con las siguientes normas:

a) A los agentes que cumplan tareas de gestión o similares, se les asignará una suma fija de hasta CIENTO VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 120) mensuales.

b) A los agentes que realicen tareas de inspección o similares, se les asignará una suma fija de hasta CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.150) mensuales.

c) Los agentes que cumplan funciones en las condiciones de los puntos a) y b) que utilicen vehículos del Estado o vehículos propios afectados al servicio oficial, no percibirán suma alguna por este concepto.

d) Cuando razones especiales así lo justifiquen y no estuviera prevista su retribución y tarea en el presente decreto, podrá asignarse movilidad fija de hasta (TRECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 350) mensuales por resolución del Ministerio respectivo, siempre que la misma encuadre dentro del concepto establecido y exista un real desplazamiento del agente.

Importes mayores por el concepto de que se trata, sólo podrán ser acordados por resolución conjunta del Departamento respectivo y del Ministerio de Hacienda, en casos excepcionales fundamentados en necesidades includibles de los servicios amplia y fehacientemente documentadas en las actuaciones respectivas.

Las retribuciones contempladas en este apartado son incompatibles con la percepción de gastos de representación.

ARTICULO 5º .- INDEMNIZACION POR TRASLADO.- Es la asignación que corresponde al perspnal que sea trasladado, con carácter permanente, de su asiento habitual, siempre que el desplazamiento no se disponga a solicitd del agente. Esta indemnización es independiente de las órdenes de pasaje y de carga.

Se liquidará anticipadamente, como única indemnización, de acuerdo con las siguientes normas:

a) MEDIO (1/2) mes de sueldo básico del agente, importe que en ningún caso podrá ser inferior a QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 500).

b) CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 40) por cada miembro de familia que esté a cargo del agente o al que éste deba prestar alimentos de acuerdo con las disposiciones del Código Civil, en los casos en que el traslado implique un desplazamiento efectivo y permanente de los miembros de familia del trasladado.

c) No procede liquidación por diferencia de asignaciones en concepto de indemnización por traslado al personal que habiendo cumplido alguna comisión por exigencias del servicio, sea promovido posteriormente y con efecto retroactivo, a un cargo o jornal mejor remunerado.

ARTICULO 6.- INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DEL PERSONAL COMISIONADO .- Es el reintegro de los gastos de ataúd y traslado de los restos de los agentes que fallezcan en el desempeño de comisiones de servicio a más de CINCUENTA (50) kilómetros de su asiento habitual.

a) Corresponderá liquidar a favor de los derecho-habientes de los agentes fallecidos, los gastos de ataud, hasta la suma máxima de MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.000).

b) Procede el reintegro de gastos por traslado de los restos de agentes fallecidos, de acuerdo con los aranceles que rijan para esa clase de servicio en las empresas de transportes del Estado.

ARTICULO 7º .- RETRIBUCION POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS .- Es la que corresponde al personal del Estado que percibiendo en concepto de sueldo o jornal básico la suma de hasta DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.000) mensuales, realice tareas extraordinarias al margen del horario normal de labor establecido. Los servicios extraordinarios deberán ser cumplidos en la repartición en la que presta efectivamente servicios el agente y la excepción a esta norma será dada por resolución conjunta del Ministerio respectivo y del Departamento de HACIENDA.

I - Los servicios extraordinarios serán liquidados de acuerdo con la siguiente escala:

a) SUELDO O JORNAL BASICO MENSUAL RETRICUCIÓN POR HORA

Hasta m$n.1.000	m$n. 8.-
de más de m$n.1.000 hasta m$n.1.500	m$n. 10.-
de más de m$n.1.500 hasta m$n.2.000	m$n. 12.-

b) Cuando la tarea extraordinaria se realice entre las 22 y las 7 horas, se bonificará en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) la retribución por hora fijada precedentemente.

II - La habilitación de horas extraordinarias deberá ajustarse a las siguientes normas:

a) Sólo podrá disponerse cuando razones de imprescindible necesidad de servicios lo requiera, atendiendo a un criterio de estricta contención de gastos.

b) Deberá ser autorizada previamente por resolución ministerial o del funcionario de mayor jerarquía en las reparticiones descentralizadas, por un período no mayor de UN (1) mes en una misma tarea. En los casos que este plazo deba ser ampliado se requerirá la conformidad previa del Ministerio de HACIENDA.

c) La retribución para los servicios requeridos por cuenta de particulares, deberá ajustarse al régimen a establecerse con intervención de Ministerio de HACIENDA.

ARTICULO 8º .- GASTOS DE COMIDA .- Es la retribución que se abona a los agentes del Estado que en razón de exigencias extraordinarias del servicio deban realizar gastos por tal concepto, extendiendo por esas razones el horario habitual y siempre que no dispongan de un lapso mayor de UNA Y MEDIA(1 1/2) horas para comer.

a) Fíjase en VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20) el importe máximo a liquidar por gastos de cada comida.

b) No corresponde su liquidación cuando los agentes del Estado perciban, en razón de sus servicios, asignación en concepto de viáticos.

c) La realización de esta clase de gasto sólo podrá autorizarse cuando así lo exijan urgentes y documentadas necesidades del servicio.

d) No corresponde su liquidación cuando la repetición mensual del gasto alquiera característica de pago regular y permanente.

e) El reconocimiento de este gasto será autorizado por resolución ministerial o del funcionario de mayor jerarquía en los organismos descentralizados.

Los reintegros por gastos de refrigerio quedan suprimidos a partir de la vigencia del presente decreto.

ARTICULO 9º .- La liquidación de los gastos emergentes de los conceptos de asignaciones previstas por el presente decreto se imputarán a las siguientes partidas presupuestarias:

ASIGNACIONES	IMPUTACION
Viáticos.....	Otros Gastos-Partida "Viáticos y Movilidad".
Gastos de movilidad.....	Otros Gastos-Partida "Viáticos y Movilidad".
Movilidad fija.....	Otros Gastos-Partida "Viáticos y Movilidad".
Indemnización por traslado...	Otros Gastos-Partida "Reintegro de Gastos".
Indemnización por fallecimiento del personal comisionado..	Otros Gastos- Partida "Entiero y luto".
Retribución por servicios extraordinarios.....	Gastos en Personal-Partida "Asignación por horas extraordinarias".
Gastos de comida.....	Otros Gastos-Partida "Reintegro de gastos"

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 10º .- Las normas que anteceden no serán de aplicación para el personal comprendido en las disposiciones de las Leyes números 12.951 y 13.996 y sus respectivas modificaciones y reglamentaciones, como así tampoco para los agentes de la Administración Pública Nacional regidos por escalafones o similares aprobados por el Poder Ejecutivo, de los que surjan sistemas más beneficiosos que el dispuesto por el presente decreto.

ARTICULO 11º.- Las disposiciones de este decreto tendrán efecto a partir del día 1º del mes siguiente al de su aprobación y el mayor gasto que signifique a los distintos Ministerios y Reparticiones del Estado su cumplimiento, deberá ser atendido con sus respectivas autorizaciones presupuestarias.

ARTICULO 12º .- Quedan facultados los distintos Ministerios para reglamentar el presente decreto observando sus lineamientos generales y adecuando las retribuciones previstas para cada concepto conforme a la naturaleza de los servicios y siempre que ello no implique excederse de las mismas.

ARTICULO 13º Las normas aclaratorias y de interpretación que fueran necesarias para la mejor aplicación de todo cuanto regla el presente decreto serán dadas directamente por el Ministerio de HACIENDA.

ARTICULO 14º .- Derógase toda disposición que se oponga a lo establecido por este decreto.

ARTICULO 15º .- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.

ARTICULO 16º .- Comuníquese, publíquese,dése a la DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION para su conocimiento y demás efectos.

DECRETO Nº 18.989.-

D.M.

MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION
DIRECCION GENERAL
de Contabilidad Administración

Boletín Nº 15.-

LICENCIAS

Texto ordenado del decreto nº 12.720 de

14 de julio de 1953

ARTICULO 1º .- Fíjase el presente régimen de licencia para el personal civil dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación. Comprende a todos los agentes con funciones permanentes o transitorias, cualquiera sea la forma de su retribución.

Exclúyese al personal contratado, sometido a regímenes especiales, al que expresamente determine el Poder Ejecutivo y al designado por tiempo determinado o con acuerdo del Senado.

ARTICULO 2º .- El presente decreto reglamenta los derechos siguientes:

I - Licencia por vacaciones:
- a) De la licencia;
- b) Del término;
- c) De la antigüedad;
- d) De las licencias no utilizadas;
- e) De las licencias simultáneas;
- f) De la interrupción de las licencias.

II - Licencias para tratamiento de la salud y por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales:
- a) De la licencia por causal que imponga corto tratamiento de la salud;
- b) De la licencia por causal que imponga largo tratamiento de la salud;
- c) De la licencia por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
- d) Del procedimiento;
- e) De la asistencia médica gratuita;
- f) Del alta.

III - Licencia por maternidad y permiso para atención del lactante:
- a) De la licencia;
- b) Del permiso.

IV - Licencia por servicio militar.
V - Licencia para desempeñar cargos electivos o de representación política.
VI - Licencia por asunto familiar o particular:
a) De la licencia por asunto de familia;
b) De la licencia por asunto particular.
VII - Licencia y permiso para estudiantes:
a) Licencia para rendir exámen;
b) Permisos para asistir a clase, cursos prácticos etc.
VIII - Licencia para realizar estudios o actividad cultural en el país o en el extranjero:
a) Con auspicio oficial;
b) Sin auspicio oficial.
IX - Justificación de inasistencias.
X - Disposiciones generales.

CAPITULO I

LICENCIA POR VACACIONES

a) De la Licencia

ARTICULO 3º .- La licencia anual es obligatoria; se concederá con goce de haberes y podrá ser fraccionada en dos períodos a juicio de la autoridad competente, aun en caso de que por la excepción determinada en el artículo 10º se acumule la del año anterior. Se acordará por año calendario dentro de las épocas y con arreglo a los turnos que se establezcan en cada Repartición.

En las dependencias que tuvieran receso funcional anual, se tratará de que la mayor parte del personal use su licencia en dicha época.

b) Del término

ARTICULO 4º .- El término de la licencia anual será:
a) de diez (10) días laborables, cuando la antigüedad del agente sea mayor de seis meses y no exceda de cinco años;
b) de quince (15) días laborables. cuando la antigüedad

del agente sea mayor de cinco años y no exceda de diez;
c) de veinte (20) días laborables, cuando la antigüedad del agente sea mayor de diez años y no exceda de quince;
d) de veinticinco (25) días laborables, cuando la antigüedad del agente sea mayor de quince años y no exceda de veinte;
e) de treinta (30) días laborables, cuando la antigüedad del agente sea mayor de veinte años.

En la aplicación de este artículo se considerará como "no laborables" los días de asueto total decretado por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 5º .- Además del personal permanente con seis meses de antigüedad, tendrá derecho al uso de la licencia a que se refiere el artículo 3º, con arreglo a la escala del artículo anterior, el personal transitorio o a destajo que hubiere cumplido un período mínimo de seis meses de trabajo y el remunerado a jornal al que se le hubiesen liquidado como mínimo 120 días. En esos casos la liquidación de los haberes por el tiempo de la duración de la licencia, se prácticará de la siguiente manera: para el jornalero teniendo en cuenta el último jornal percibido a la fecha del otorgamiento de la licencia y para el personal a destajo, por primera vez, en base a un promedio de lo percibido en los últimos tres meses de trabajo, y en lo sucesivo en base al promedio de lo liquidado en el año anterior a la fecha de concesión de la licencia.

ARTICULO 6º .- Cuando el agente se hallare cumpliendo una comisión o misión oficial, fuera del lugar habitual donde desempeña sus tareas, no se computará en los términos del artículo 4º el tiempo normal empleado en los viajes de ida y vuelta que le ocasione los traslados, aunque la licencia se fraccione en dos períodos. Al término de la licencia deberá justificar su traslado mediante certificación de una dependencia de la Repartición en que se desempeña o por la Policía de la localidad.

c) De la antigüedad

ARTICULO 7º.- (Según modificación establecida por el decreto nº 13.800 de 1 de agosto de 1956). Para establecer la antigüedad del agente se computarán los años de servicio prestados en la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o

entidades privadas cuando en este último caso se haya hecho el cómputo de servicio en la respectiva Caja de Previsión Social.

A los efectos del reconocimiento de la antigüedad acreditada en entidades privadas y hasta tanto la correspondiente caja extienda las respectivas certificaciónes, los agentes deben presentar una declaración jurada, acompañada de una constancia extendida por el o los empleadores, sujeta a la pertinente certificación documental, en la que se justifiquen los servicios prestados a partir de los 18 años de edad.

ARTICULO 8º .- Al personal retirado o dado de baja de las Fuerzas Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Cuerpo Penitenciario, Policía Federal y Bomberos y Prefectura Nacional Marítima, lo mismo que a jubilados y retirados de la Administración Nacional, Provincial y Municipal que ocupen cargos en la Administración civil se computará su anterior antigüedad. A este fin se tendrá en cuenta el tiempo por el cual el agente percibió haberes por año calendario.

ARTICULO 9º .- En caso de que dentro del año calendario el agente cumpliese una antigüedad que diera derecho a un término mayor de licencia anual, se computará el término mayor para el otorgamiento de la licencia respectiva.

d) De las licencias no utilizadas

ARTICULO 10º .- Los períodos de licencia por vacaciones no son acumulables. Cuando el agente no hubiera podido usar de su licencia anual por disposición de autoridad compente, fundada en razones de servicio, tendrá derecho a que en el próximo período se le otorgue la licencia reglamentaria con más los días que correspondían a la licencia no usada en el año anterior. No podrá aplazarse una misma licencia del agente dos años consecutivos.

e) De la licencia simultánea

ARTICULO 11º .- Al agente que sea titular de más de un cargo rentado, ya sea de dependencia centralizada o descentralizada, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, se le concederá la licencia por descanso en forma simultánea.

f) De la interrupción de las licencias

ARTICULO 12º .- La licencia anual del agente se interrumpe en los casos siguientes:

a) por accidente;
b) por enfermedad;
c) por razones imperiosas del servicio.

En los casos a) y b), será de aplicación lo establecido en los artículos 13ª y 14ª, y en el caso c), lo dispuesto en el artículo 10ª, si en el transcurso del año no se le pudiera completar su licencia reglamentaria.

CAPITULO II

LICENCIA PARA TRATAMIENTO DE LA SALUD Y POR ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

a) Licencia por causal que imponga corto tratamiento de la salud

ARTICULO 13ª .- Para el tratamiento de afecciones comunes o por accidente acaecido fuera del servicio se concederá a los agentes hasta cuarenta y cinco (45) días corridos de licencia por año calendario, en forma continua o discontinua, con percepción integra de haberes. Vencido este plazo se debe necesariamente dar intervención al Ministerio de Salud Pública para que determine si corresponde una prórroga de esta licencia por aplicación del régimen establecido en el artículo 14ª del presente decreto.

b) Licencia por causal que imponga large tratamiento de la salud

ARTICULO 14ª .- Por afecciones que imponga large tratamiento de la salud, o por motivos que aconsejen la hospitalización o el alejamiento del agente por razones de profilaxis y seguridad, se concederá hasta dos (2) años de licencia, en forma continua o discontinua, para una misma o distinta afección, con percepción íntegra de haberes.

Vencido este plazo, subsistiendo la causal que determinó la licencia, se concederá ampliación de la misma por el térmi

no de un año en el que el agente percibirá la mitad de su remuneración. Cumplida la prórroga, será reconocido por una Junta Médica en el Ministerio de Salud Pública, la que determinará, de acuerdo a la capacidad laborativa del agente, las funciones que podrá desempeñar en la Administración Nacional. En caso de incapacidad total, se aplicarán las leyes de previsión y ayuda social correspondientes.

ARTICULO 15º .- Para solicitar licencia, a los fines del artículo anterior, se consideran causales las siguientes: enfermedades infecciosas, cardíacas, degenerativas, progresivas o blastomatosas, del sistema nervioso, de los sentidos, traumatismo y/o sus secuelas, malformaciones, intoxicaciones, intervenciones quirúrgicas. Esta enumeración no es taxativa, quedando a juicio del Ministerio de Salud Pública la consideción de otras causales.

Para conceder la licencia de acuerdo al presente artículo deberá comprobarse que dichas causales imposibilitan al agente al normal cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO 16º .- La presunción diagnóstica, suficientemente fundada, de una enfermedad contagiosa justificará el otorgamiento de licencia hasta tanto se determine el estado de salud del agente. El diagnóstico definitivo deberá producirse en el menor tiempo posible con intervención del Ministerio de Salud Pública.

ARTICULO 17º .- En caso de enfermedad profesional, contraída en acto de servicio o de incapacidad temporaria originada por el hecho o en ocasión del trabajo, se concederá hasta dos (2) de licencia con goce de haberes, prorrogable en iguales condiciones por otro año.

Si de cualesquiera de estos casos se derivara una incapacidad parcial permanente deberán adecuarse las tareas del agente a su nuevo estado.

d) Del procedimiento

ARTICULO 18º .- Los agentes que por razones de salud no puedan desempeñar sus tareas o deban interrumpir la licencia anual, están obligados a comunicar en el día esta circunstancia a la Repartición de que forman parte.

f) De la interrupción de las licencias

ARTICULO 12º .- La licencia anual del agente se interrumpe en los casos siguientes:

a) por accidente;
b) por enfermedad;
c) por razones imperiosas del servicio.

En los casos a) y b), será de aplicación lo establecido en los artículos 13ª y 14ª, y en el caso c), lo dispuesto en el artículo 10ª, si en el transcurso del año no se le pudiera completar su licencia reglamentaria.

CAPITULO II

LICENCIA PARA TRATAMIENTO DE LA SALUD Y POR ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

a) Licencia por causal que imponga corto tratamiento de la salud

ARTICULO 13ª .- Para el tratamiento de afecciones comunes o por accidente acaecido fuera del servicio se concederá a los agentes hasta cuarenta y cinco (45) días corridos de licencia por año calendario, en forma continua o discontinua, con percepción integra de haberes. Vencido este plazo se debe necesariamente dar intervención al Ministerio de Salud Pública para que determine si corresponde una prórroga de esta licencia por aplicación del régimen establecido en el artículo 14ª del presente decreto.

b) Licencia por causal que imponga largo tratamiento de la salud

ARTICULO 14ª .- Por afecciones que imponga largo tratamiento de la salud, o por motivos que aconsejen la hospitalización o el alejamiento del agente por razones de profilaxis y seguridad, se concederá hasta dos (2) años de licencia, en forma continua o discontinua, para una misma o distinta afección, con percepción íntegra de haberes.

Vencido este plazo, subsistiendo la causal que determinó la licencia, se concederá ampliación de la misma por el térmi

no de un año en el que el agente percibirá la mitad de su remuneración. Cumplida la prórroga, será reconocido por una Junta Médica en el Ministerio de Salud Pública, la que determinará, de acuerdo a la capacidad laborativa del agente, las funciones que podrá desempeñar en la Administración Nacional. En caso de incapacidad total, se aplicarán las leyes de previsión y ayuda social correspondientes.

ARTICULO 15º .- Para solicitar licencia, a los fines del artículo anterior, se consideran causales las siguientes: enfermedades infecciosas, cardíacas, degenerativas, progresivas o blastomatosas, del sistema nervioso, de los sentidos, traumatismo y/o sus secuelas, malformaciones, intoxicaciones, intervenciones quirúrgicas. Esta enumeración no es taxativa, quedando a juicio del Ministerio de Salud Pública la consideción de otras causales.

Para conceder la licencia de acuerdo al presente artículo deberá comprobarse que dichas causales imposibilitan al agente al normal cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO 16º .- La presunción diagnóstica, suficientemente fundada, de una enfermedad contagiosa justificará el otorgamiento de licencia hasta tanto se determine el estado de salud del agente. El diagnóstico definitivo deberá producirse en el menor tiempo posible con intervención del Ministerio de Salud Pública.

ARTICULO 17º .- En caso de enfermedad profesional, contraída en acto de servicio o de incapacidad temporaria originada por el hecho o en ocasión del trabajo, se concederá hasta dos (2) de licencia con goce de haberes, prorrogable en iguales condiciones por otro año.

Si de cualesquiera de estos casos se derivara una incapacidad parcial permanente deberán adecuarse las tareas del agente a su nuevo estado.

d) Del procedimiento

ARTICULO 18º .- Los agentes que por razones de salud no puedan desempeñar sus tareas o deban interrumpir la licencia anual, están obligados a comunicar en el día esta circunstancia a la Repartición de que forman parte.

Los ministerios reglamentarán la forma de proceder en estos casos, atendiendo a la agilitación y simplicidad del trámite.

ARTICULO 19º .- El Ministerio de Salud Pública de la Nación es el encargado de expedir las certificaciones y practicar los reconocimientos médicos para la aplicación de lo dispuesto en este decreto. Siempre que los respectivos ministerios tuvieren organizado el servicio médico, el Ministerio de Salud Pública podrá delegar en ellos, por convenios especiales, la justificación de licencias por causales comprendidas en los artículos 13º, 25º, 27º y 30º inc.4 punto a).

En los casos de accidente del trabajo, enfermedad profesional o afecciones que requieran largo tratamiento de la salud, es imprescindible la intervención del Ministerio de Salud Pública para la determinación y certificación de la naturaleza e importancia de dichas causales de licencia.

ARTICULO 20º .- En todos los casos los ministerios tendrán a su cargo el control de la situación declarada por los agentes de la Administración, para lo cual contarán con la colaboración del Ministerio de Salud Pública.

El agente que no se sometiera a tratamiento médico perderá su derecho a las licencias y beneficios que otorga el presente decreto.

ARTICULO 21º .- Si el agente se encontrara en el interior del país en lugar en que no hubiera médico del Ministerio de Salud Pública de la Nación o de la Repartición a que pertenece, o de otra repartición nacional, provincial o municipal, con sede en la localidad, deberá presentar certificado del médico de Policía del lugar y si no hubiere, de médico particular, con historia clínica y demás elementos de juicio médico que permitan certificar la existencia real de la causal invocada.

El certificado médico no perteneciente a una de las reparticiones citadas debe ser autenticado por la autoridad policial local.

ARTICULO 22º.- Los agentes civiles de la Nación en uso de licencia por enfermedad, no podrán ausentarse del país sin autorización de la repartición en que presten servicios y co-

nocimiento del Ministerio de Salud Pública de la Nación.

e) De la asistencia médica gratuita

ARTICULO 23º .- En los casos a que refiere el artículo 17º, las direcciones de obra social o asistencia social y en su defecto el Ministerio de Salud Pública, proveerán gratuitamente la asistencia médica y los elementos terapéuticos necesarios.

f) Del alta

ARTICULO 24º .- En los casos de licencias concedidas por aplicación de los artículos 14º y 17º, el agente no podrá ser incorporado a su empleo, hasta tanto el Ministerio de Salud Pública no otorgue el certificado de alta. El mismo Ministerio podrá aconsejar que, antes de reanudar sus tareas, se le asigne al agente, durante un lapso determinado, funciones adecuadas para completar su restablecimiento, o que las mismas se desenvuelvan en un lugar apropiado a esa finalidad.

CAPITULO III

LICENCIA POR MATERNIDAD Y PERMISO PARA LA ATENCION DEL LACTANTE

a) De la licencia

ARTICULO 25º .- Por maternidad se acordará licencia remunerada de doce (12) semanas dividida en dos (2) períodos preferentemente iguales, uno anterior y otro posterior al parto, el último de los cuales no será inferior a seis (6) semanas. Los períodos son acumulables. En los casos anormales se aumentará el término de la licencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 13º o en su caso, el artículo 14º. En caso de nacimiento múltiple esta licencia podrá ampliarse a un total de quince (15) semanas, con un período posterior al parto no menor de nueve (9) semanas.

ARTICULO 26º .- A petición de parte y previa certificación de autoridad médica competente que así lo aconseje, podrá acordarse cambio de tareas a partir de la concepción hasta el

comienzo de la licencia por maternidad.

b) Del permiso

ARTICULO 27º .- De acuerdo a lo estatuído en la Ley Nº12.568 toda madre de lactante tendrá derecho a optar por: a) disponer de dos descansos de media hora cada uno para amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo; b) o disminuir en una hora diaria su jornada de trabajo, ya sea iniciando su labor una hora después del horario de entrada o finalizando una hora antes; c) o disponer de una hora en el transcurso de la jornada de trabajo. Todo ello de acuerdo con la reglamentación que dicte cada Ministerio atendiendo a las características de la labor respectiva.

CAPITULO IV

LICENCIA POR SERVICIO MILITAR

ARTICULO 28º .- (Según modificación establecida por el decreto nº 13.800 de 1 de agosto de 1956) Los agentes que deban incorporarse al Servicio Militar tendrán derecho a las siguientes licencias con el 50% de remuneración; desde la fecha de su incorporación hasta cinco (5) días después del día de la baja asentada en la libreta de enrolamiento, en los casos en que el agente hubiera sido declarado inapto o fuera exceptuado; y hasta quince (15) días después de haber sido dado de baja si hubiera cumplido el período para el cual fué convocado y éste fuera mayor de seis meses. Igualmente se concederá licencia de cinco (5) días, con la remuneración expresada, cuando el período fuera inferior a seis meses.

El personal que en carácter de reservista sea incorporado transitoriamente a las Fuerzas Armadas de la Nación tendrá derecho a usar de licencia y a percibir, mientras dure su incorporación como única retribución la correspondiente a su grado en caso de ser oficial o suboficial de la Reserva; cuando el sueldo del cargo civil sea mayor que dicha remuneración, la dependencia a la cual pertenece liquidará la diferencia.

ARTICULO 29º .- (Según modificación establecida por el decreto nº 17.609 del 13 de setiembre de 1956) El personal civil dependiente de la Administración Nacional podrá gozar de li-

cencia especial en los siguientes casos:

1) Cargos electivos o de representación política en el orden nacional, provincial o municipal: cuando fuera designado para desempeñar estos cargos, en el caso de plantearse una incompatibilidad, tendrá derecho a usar de licencia sin goce de sueldo por el tiempo que dure su mandato, pudiendo reintegrarse a su cargo administrative dentro de los treinta (30) días siguientes al término de las funciones para las que fué elegido.

2) Cargos de representación gremial y/o sindical:

a) Cuando fuera designado para desempeñar un cargo de esta naturaleza representando a agentes del Estado, no retribuído por la entidad gremial o sindical, tendrá derecho a usar de licencia con goce de sueldo, en la medida necesaria y mientras dure su mandato, debiendo reintegrarse a su puesto administrativo, al término del mismo.

b) Cuando fuera designado para desempeñar un cargo de esta naturaleza, retribuído por la entidad gremial o sindical sólo tendrá derecho a usar de licencia sin goce de sueldo mientras dure su mandato, debiendo reintegrarse al servicio dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de éste.

El otorgamiento de las licencias a que se refieren los apartados a) y b) precedentes, quedará supeditado a las comunicaciones que efectúe la Secretaría General de la Confederación General del Trabajo o el sindicato con personería gremial correspondiente al organismo competente del Ministerio que corresponda.

ARTICULO 30º .- (Según modificación establecida por el decreto nº 13.800 del 1 de agosto de 1956) Desde el día de su ingreso, el agente tendrá derecho a usar de licencia remunerada en los casos y por el término de días laborables siguientes:

1) Matrimonio
   a) del agente: diez (10) días
   b) de sus hijos: un (1) día
2) Nacimiento
   a) de hijos del agente varón: dos (2) días
3) Fallecimiento

a) del cónyuge o parientes consanguíneos del primer grado: cinco (5) días.
b) de parientes afines de primer grado y consanguíneos y afines de segundo grado: dos (2) días.

4) Enfermedad de un miembro del grupo familiar:
a) para consagrarse a la atención de un miembro enfermo del grupo familiar constituído en el hogar hasta veinte (20) días continuos o discontinuos por año calendario. A este fin el agente deberá expresar, por declaración jurada, que es indispensable su asistencia o que el estado del paciente reviste extrema gravedad. Estas causales podrán ser comprobadas por el Ministerio de Salud Pública o por el Cuerpo Médico del respectivo Ministerio.

b) De la licencia por asunto particular

ARTICULO 31º .- En el transcurso de cada decenio el agente podrá usar de licencia, sin remuneración por el término de un año fraccionable en dos (2) períodos. El término de licencia no utilizado en un decenio, no puede ser acumulado a los decenios subsiguientes. Para tener derecho a esta licencia en distintos decenios, deberá transcurrir un plazo mínimo de dos (2) años entre la terminación de una y la iniciación de otra.

Los Ministros podrán conceder licencia, sin remuneración, en casos de fuerza mayor o graves asuntos de familia, debidamente comprobados, por términos que no excedan de tres (3) meses en el año calendario.

CAPITULO VII

LICENCIA Y PERMISO PARA ESTUDIANTES

ARTICULO 32º.- (Según modificación establecida por el decreto nº 17.609 de 13 de septiembre de 1956) Se concederá licencia con goce de haberes por veintiocho (28) días laborables anuales, a los agentes que cursen estudios en establecimientos oficiales o incorporados (nacionales, provinciales o municipales) para rendir exámen en los turnos fijados oficialmente, debiendo presentar constancia del exámen rendido otorgado por las autoridades del establecimiento educacional respectivo. Este beneficio será acordado en plazos máximos de hasta siete (7)

días laborables cada vez.

ARTICULO 33º .- Los agentes tendrán derecho a obtener permiso dentro del horario de trabajo, cuando sea imprescindible su asistencia a clase, cursos prácticos y demás exigencias inherentes a su calidad de estudiantes y no fuera posible adaptar su horario a aquella necesidad. Deberán acreditar: a) su condición de estudiantes en cursos oficiales o incorporados; b) la necesidad de asistir al establecimiento educacional en horas de oficina.

CAPITULO VIII

LICENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS O ACTIVIDAD CULTURAL EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO

a) Con auspicio oficial

ARTICULO 34º.- (Según modificación establecida en el decreto nº 13.800 de 1 de agosto de 1956) El agente tendrá derecho a usar de licencia sin goce de haberes por el término máximo de dos (2) años, cuando deba realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos o artísticos, o participar en conferencias o congresos de esa índole en el país o en el extranjero. Igual beneficio podrá concederse para mejorar la preparación técnica o profesional del agente o para cumplir actividades culturales o deportivas.

ARTICULO 35º .- (Según modificación establecida por el decreto nº 13.800 de 1 de agosto de 1956) Las licencias a que se refiere el artículo 34º podrán ser concedidas con goce de sueldo, pero por un término no mayor de un año cuando existan probadas razones de interés público en el cometido a cumplir por el agente o éste actúe representando al país. Cuando el agente deba trasladarse al extranjero, el beneficio deberá ser acordado por el Poder Ejecutivo, previa conformidad del Consejo de Gabinete; de lo contrario y en el supuesto previsto por el artículo 34º, el mismo será resuelto directamente por el titular del respectivo Ministerio. En todos los casos se tendrán en cuenta las condiciones, títulos y aptitudes del empleado y determinarán, asimismo, sus obligaciones a favor del Estado en el cumplimiento de su misión.

CAPITULO IX

JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS

ARTICULO 36º .- Fuera de los casos de licencia contemplados expresamente en el presente decreto, podrán justificarse excepcionamente y con goce de haberes, las inasistencias del personal motivadas por razones atendibles o de fuerza mayor. No excederán de dos (2) por mes ni de diez (10) días por año calendario.

CAPITULO X

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 37º .- (Según modificación establecida por el decreto nº 13.800 de 1 de agosto de 1956). El agente tendrá derecho a usar, desde la fecha de su incorporación, las licencias regladas en el presente decreto salvo los casos contemplados en los artículos 3º, 31º, 34º y 35º en que deberán tenerse en cuenta seis meses de antigüedad como mínimo.
ARTICULO 38º .- Todas las licencias concedidas por causa de enfermedad o accidente quedarán canceladas por el restablecimiento del agente. El agente deberá en todos los casos solicitar la reincorporación a sus funciones, aún cuando se hubiere vencido el término de su licencia, siempre que se encontrare en condiciones necesarias de acuerdo a la reglamentación presente.
ARTICULO 39º .- Se considerará falta grave toda simulación realizada con el fin de obtener licencia o justificación de inasistencias. El agente se hará pasible de suspensión por dos (2) meses sin goce de sueldo o cesantía en caso de reincidencia. Igual sanción se aplicará al médico funcionario público que extienda certificación falsa.
ARTICULO 40º .- (Según modificación establecida por el decreto nº 13.800 de 1 de agosto de 1956) Facúltase a los señores Ministros Secretarios de Estado para determinar que funcionarios tendrán a su cargo la concesión de las licencias previstas en el presente, con excepción de las determinadas por el artículo 34º y 35º.
ARTICULO 41º .- Encomiéndase a los ministerios la reglamentación del presente decreto, conforme con las necesidades de

los servicios respectivos.

El Ministerio de Salud Pública registrará en una ficha médica las circunstancias de cada caso en que intervenga para la determinación de las causales de licencia regladas en el presente decreto.

ARTICULO 42º .- Derógase el Decreto Nº 26.942/47 en cuanto se oponga al presente y toda otra disposición en contrario.

ARTICULO 43º .- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Asuntos Técnicos, Interior y Salud Pública.

ARTICULO 44º .- Comuníquese, publíquese, désé a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.



Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 16.-

LICENCIAS - REGLAMENTO

Buenos Aires, 16 de octubre de 1956.-

Visto las disposiciones del decreto nº 12.720 del 14 de julio de 1953, por el cual se fijó un nuevo régimen de licencia para el personal civil dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 41º de dicho acto de gobierno encomienda a los ministerios su reglamentación, conforme a las necesidades de los servicios, razón por la cual es preciso establecer normas que aseguren la correcta aplicación de los preceptos allí contenidos;

Que asimismo es aconsejable la revisión de las disposiciones en vigencia sobre inasistencias, faltas de puntualidad, permisos de salida, etc., contenidas en la resolución nº894/46, a fin de actualizarlas convenientemente, reuniendo en un solo cuerpo orgánico todo lo relacionado con los derechos y obligaciones del personal en esta materia;

Que consecuentemente con ello se facilitará la aplicación del reglamento que se implanta, mediante su cabal conocimiento por la totalidad de los agentes y autoridades a quienes compete su aplicación;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º.- Apruébase el adjunto reglamento de asistencia y licencias que forma parte integrante de la presente resolución y dispónese su inmediata vigencia.

2º.- Notifíquese y entréguese copia a todos los agentes del Ministerio debiendo arbitrarse las medidas pertinentes a efectos de que se proceda en la misma forma con el personal que ingrese en lo sucesivo en jurisdicción de esta Secretaría

de Estado.

3º Comuníquese, publíquese y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 8.264.-

-.-.-.-.-.-.-.-

DE LA ASISTENCIA

1º) El personal de las distintas reparticiones y dependencias de este Departamento, se regirá por el horario establecido para la Administración Nacional.

2º) Las excepciones horarias sólo podrán ser autorizadas por las reparticiones del Ministerio, siempre que medien razones reglamentarias, funcionales o de imperiosa necesidad que justifiquen la excepción.

3º) El personal que desempeñe funciones que se hallan encuadradas en el decreto-ley 22.212/945, ratificado por la ley nº 12.921 (Estatuto de los Profesionales del Arte de Curar), deberá cumplir un mínimo de diez y ocho horas semanales.

CONTRALOR DE ASISTENCIAS

4º) El personal registrará su entrada y salida diaria en una planilla de asistencia semanal, firmando con tinta en la casilla correspondiente. En caso de existir reloj registrador la asistencia se controlará mediante la impresión de la tarjeta respectiva, que será colocada en el "Fichero de Presentes", debiendo, en este caso, los jefes de oficina adoptar los recaudos que estimen oportunos con el objeto de verificar la efectiva prestación de servicios por el personal a sus órdenes.

5º) Dentro de los 15 minutos subsiguientes a la iniciación de las tareas, cada sección u oficina remitirá a la de Personal un parte de novedades, debidamente firmado por el jefe o segundo jefe, donde se dejará constancia de las faltas de puntualidad y asistencia en que hubiere incurrido el personal.

Al finalizar las tareas se remitirá a dicha oficina un nuevo parte de novedades, en el cual se consignará las salidas que, con antelación a la hora reglamentaria, se hubieren

concedido al personal y cualquier otra circunstancia que corresponda destacar.

6º) Los empleados que concurran a tomar servicio después de la hora reglamentaria, hasta un plazo máximo de 15 minutos de cumplida la misma, registrarán su asistencia en la planilla semanal, consignando la hora de entrada.

7º) Cuando la tardanza fuese mayor de 15 minutos, siempre que la causa sea atendible, el superior jerárquico inmediato autorizará al empleado a tomar servicio; caso contrario se lo considerará inasistencia. En el primer supuesto el agente firmará en la planilla de asistencia semanal, debiendo la oficina consignar esta circunstancia en el parte de novedades de salida.

8º) El personal deberá cumplir estrictamente el horario de labor que tiene asignado y podrá recién hacer abandono de las tareas que desempeña una vez finalizado el mismo.

9º) Las dependencias que funcionen fuera del edificio de la repartición, dentro del radio del Gran Buenos Aires, deberán elevar a la misma quincenalmente un parte de asistencia del personal, sin perjuicio de que por su intermedio se adopten los recaudos pertinentes, a efectos de que ya sea telefónicamente o por inspecciones se verifique el cumplimiento estricto del horario oficial.

10º) Las reparticiones que tengan dependencias en el interior de la República, deberán crear un sistema de fiscalización que les permita controlar el cumplimiento del horario y la asistencia del personal de las mismas.

11º) Los jefes inmediatos serán los responsables directos de que el personal bajo sus órdenes cumpla estrictamente las normas que se especifican en los artículos 4º, 6º y 8º. La transgresión a cualquiera de estas disposiciones los hará pasible de las sanciones disciplinarias que correspondan.

12º) Sin perjuicio de las medidas indicadas precedentemente, cada una de las reparticiones de este Ministerio deberá confeccionar un resumen diario de las inasistencias de su personal, que permita determinar porcentualmente el ausentismo, discriminando licencias por enfermedad y faltas con o sin aviso. Además y por separado, se hará constar las licencias

otorgadas por otras causales. Estas informaciones deberán remitirse quincenalmente a la Direccion General de Contabilidad y Administracion.

PERMISOS DE SALIDA

13ª) Los permisos para ausentarse momentáneamente de la oficina o retirarse antes de la hora de terminación de las tareas, se acordarán excepcionalmente, cuando medien causas muy justificables. Estos permisos serán concedidos por el jefe inmediato y no podrán exceder de un máximo de tres horas por dia de labor.

14ª) Para los permisos de que se trata se utilizará un formulario el que deberá adjuntarse al parte de novedades de salida.

PERMISOS PARA LLEGAR FUERA DE HORA

15ª) No se admitirán, en principio, como excusa de las faltas de puntualidad los inconvenientes ocasionados por los medios de transportes. Cuando se utilice el ferrocarril deberá presentarse el correspondiente justificativo y en caso de reiteradas faltas de puntualidad justificadas en esta forma, el empleado deberá adoptar los recaudos necesarios para no incurrir en ellas después de prevenido por este motivo.

16ª) Cuando el agente sepa con anterioridad que necesitará llegar fuera de hora, se presentará por escrito ante la autoridad correspondiente solicitando la autorización respectiva.

17ª) Cuando una causa urgente e imprevista impida solicitar el permiso con antelación, el agente deberá comunicarse telefónicamente con la dependencia donde presta servicios, dentro de los 15 minutos de iniciadas las tareas, dando cuenta de que llegará tarde a las mismas y presentará en ese día indefectiblemente un formulario donde consignará los motivos de su llegada tarde.

18ª) En los casos a que se refieren los articulos 15ª y 16ª, la superioridad procederá a conceder el permiso o justificar la llegada tarde, de acuerdo con la naturaleza de los

motivos invocados.

19º) Los permisos que fundados en motivos particulares se soliciten para no concurrir a prestar servicios, deberán ser obtenidos por lo menos el dia anterior, salvo aquellos casos en que se compruebe que una causa urgente e imprevista impidió toda anticipación, circunstancia que el interesado deberá acreditar indefectiblemente y en forma fidedigna mediante la presentacion de un formulario habilitado a ese efecto, el dia que se reintegre a sus tareas.

20º) El permiso se concederá con goce de haberes, o sin ellos, debiendo en el primer caso tenerse en cuenta lo prescripto por el articulo 36º del decreto nº 12.720/953.

21º) Los permisos a que se refiere este capitulo, serán otorgados por los señores Jefes de repartición o dependencias internas -hasta la categoría de Jefes de Departamento o su equivalente- segun los casos.

APLICACION DE SANCIONES

22º) El personal que sin causa justificada registre su entrada fuera de la hora de iniciación de sus tareas, se hará pasible de las siguientes sanciones:

1a. a 4a. falta en el año, sin sanción
5a. " " " " , prevención
6a. " " " " , llamado de atención
7a. " " " " , apercibimiento
8a. " " " " , 1 dia de suspensión
9a. " " " " , 2 dias de suspensión
10a. " " " " , 3 dias de suspensión
11a. " " " " , 4 dias de suspensión
12a. " " " " , 5 dias de suspensión

23º Toda inasistencia que se considere injustificada dará lugar a la aplicacion de las siguientes sanciones:

1a. inasistencia en el año, apercibimiento
2a. " " " " , 1 dia de suspensión
3a. " " " " , 2 dias de suspensión
4a. " " " " , 3 dias de suspensión
5a. " " " " , 5 dias de suspensión
6a. " " " " , 8 dias de suspensión

El cómputo de las faltas se hará por cada día de inasistencia.

24ª) Las suspensiones acumuladas en el año de que se haya hecho pasible un empleado, no podrán exceder de 20 días en total, computándose a tal efecto todas las sanciones aplicadas conforme a lo dispuesto por los artículos 22ª y 23ª. En el supuesto de sobrepasarse dicho límite, deberán elevarse los antecedentes respectivos a la superioridad, a fin de imponer, en mérito a los mismos, la sanción disciplinaria que corresponda.

25ª) Todas las suspensiones a que se refieren los artículos precedentes lo son sin goce de sueldo y sin perjuicio del servicio.

26ª) Cuando se trate de inasistencias injustificadas de personal que deba cumplir una guardia en día sábado, domingo o feriado, se aplicará al empleado la sanción que corresponda, sin perjuicio de elevar a la superioridad el informe pertinente, para los fines a que hubiere lugar, en el caso de que la inasistencia haya originado inconvenientes o perturbaciones en el servicio.

27ª) Las inasistencias sin aviso que se prolonguen por más de 48 horas significan, en principio, abandono de cargo, en este caso y vencido ese término las oficinas de personal emplazarán al empleado a regularizar su situación y si al segundo día no hubieran obtenido respuesta lo conminarán nuevamente por telegrama colacionado, bajo apercibimiento de ser declarado cesante.

Si de lo actuado se comprobara que el inasistente ha obrado con evidente negligencia o despreocupación se le suspenderá provisionalmente hasta tanto se resuelva en definitiva sobre su situación.

28ª) La omisión de consignar la firma en la planilla de entrada o registrarla en la ficha de control, implica de hecho falta de puntualidad y por lo tanto se sancionará conforme a la escala que fija el artículo 22ª. Sin embargo, podrán ser excepcionalmente excusada esas omisiones siempre que el jefe respectivo justifique que el empleado se hallaba presente a la hora de iniciación de sus tareas.

29ª) Al dictarse resolución sobre la justificación o no justificación de inasistencias y faltas de puntualidad en que

incurra el personal, se dispondrá asimismo lo pertinente respecto de la sanción disciplinaria que corresponda aplicar, según sean las circunstancias y los antecedentes del empleado.

30ª) La no justificación de inasistencias llevará aparejado el descuento correspondiente sobre los haberes del empleado por el período no trabajado. La justificación podrá ser, en cambio, según se lo considere pertinente, con goce de haberes o sin él.

31ª) El término para aplicar la escala que indican los artículos 22ª y 23ª será desde el 1ª de enero hasta el 31 de diciembre de cada año sin perjuicio de que la comisión de nuevas faltas en el período siguiente pueda dar lugar a que, previo estudio de los antecedentes de las sanciones a que el empleado se haya hecho pasible con anterioridad, se resuelva la aplicación de un correctivo superior al que corresponda de acuerdo con las escalas respectivas.

DE LAS LICENCIAS

32ª) De acuerdo con lo establecido en el decreto nª 12.720/53, sus modificaciones y complementarios, los empleados tendrán derecho a las siguientes licencias:

a) por vacaciones
b) por enfermedad o accidentes del trabajo
c) por maternidad
d) por servicio militar
e) para desempeñar cargos electivos o de representación política o gremial.
f) por asunto familiar o particular
g) para estudiantes
h) para realizar estudios o actividades culturales en el país o en el extranjero.

LICENCIA POR VACACIONES

33ª) La licencia anual es obligatoria; se concederá con goce de haberes y podrá ser fraccionada en dos períodos a juicio de la autoridad competente, aún en el caso de que por las excepciones determinadas en los artículos 42ª y 44ª, se acumu

le la del año anterior. Se acordará por año calendario dentro de las épocas y con arreglo a los turnos que se establezcan en cada repartición.

34ª) El término de la licencia anual será:

a) de 10 días laborables, cuando la antigüedad del agente sea mayor de 6 meses y no exceda de 5 años.
b) de 15 días laborables, cuando la antigüedad del agente sea mayor de 5 años y no exceda de 10.
c) de 20 días laborables, cuando la antigüedad del agente sea mayor de 10 y no exceda de 15.
d) de 25 días laborables, cuando la antigüedad del agente sea mayor de 15 años y no exceda de 20.
e) de 30 días laborables, cuando la antigüedad del agente sea mayor de 20 años.

Para la concesión de estas licencias, se considerará como "no laborables", los días de asueto total decretado por el Poder Ejecutivo.

35ª) Tendrá derecho a esta licencia, de conformidad con la escala establecida en el artículo anterior:

a) el personal permanente con 6 meses de antigüedad.
b) el personal transitorio o a destajo que hubiese cumplido un período mínimo de 6 meses de trabajo.
c) el remunerado a jornal al que se le hubiese liquidado como mínimo 120 días.

En los casos establecidos en los apartados b) y c), la liquidación de los haberes se efectuará de la siguiente manera; para el jornalero teniendo en cuenta el último jornal percibido a la fecha del otorgamiento de la licencia y para el personal a destajo, por primera vez, en base a un promedio de lo percibido en los últimos tres meses de trabajo, y en lo sucesivo de acuerdo al promedio de lo liquidado en el año anterior a la fecha de concesión de la licencia.

36ª) Cuando el agente se hallare cumpliendo una comisión o misión oficial, fuera del lugar habitual donde desempeña sus tareas, no se computará a los fines de su licencia anual el tiempo normal empleado en los viajes de ida y vuelta que le ocasionen los traslados, aunque la licencia se fraccione

en dos períodos. Al término de la licencia deberá justificar su traslado mediante certificación de una dependencia de la repartición en que se desempeña o por la Policía de la localidad.

DE LA ANTIGÜEDAD

37º) Para establecer la antigüedad del agente, se computarán los años de servicio prestados en la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o en entidades privadas.

38º) A los efectos de reconocer la antigüedad computable en los casos de licencias por vacaciones, el agente deberá presentar un certificado oficial expedido por las reparticiones de ese carácter donde haya prestado servicios. Si se tratara de servicios en entidades privadas, los mismos serán reconocidos provisionalmente, mediante declaración jurada del empleado acompañada de una constancia extendida por el o los empleadores -sujeta a la pertinente verificación documental-, hasta tanto la respectiva Caja de Previsión Social extienda la certificación correspondiente en la cual consten los años de servicios prestados, cómputo o aporte de los mismos.

39º) Al personal retirado o dado de baja de las Fuerzas Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Cuerpo Penitenciario, Policía Federal y Bomberos y Prefectura Nacional Marítima, lo mismo que a jubilados y retirados de la Administración Nacional, Provincial y Municipal que ocupen cargos en este Ministerio, se les computará su anterior antigüedad. A este fin se tendrá en cuenta el tiempo por el cual el agente percibió haberes por año calendario.

40º) El personal a que se refiere el artículo anterior, deberá presentar, a fin de que se le acredite la antigüedad respectiva, un certificado expedido por las correspondientes Cajas de Previsión Social. Cuando se trate de retirados o dados de baja de las Fuerzas Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Cuerpo Penitenciario, Policía Federal y Bomberos y Prefectura Nacional Marítima, dicha constancia deberá especificar el cómputo de la antigüedad por año calendario.

41º) En caso de que dentro del año calendario el agente cumpliese una antigüedad que diera derecho a un término mayor

de licencia anual, se computará el término mayor para el otorgamiento de la licencia respectiva.

LICENCIAS NO UTILIZADAS

42ª) Los períodos de licencia por vacaciones no son acumulables. Cuando el agente no hubiera podido usar de su licencia anual por razones de servicio, tendrá derecho a que en el próximo período se le otorgue la licencia reglamentaria con más los días que correspondían a la licencia no usada en el año anterior. En estos casos, se deberá dejar constancia fundada, firmada por el Jefe de la Repartición, de las razones de servicio que motivaron el aplazamiento de la licencia. De no existir registrado tal antecedente, el agente no podrá utilizar el beneficio acumulativo de que se trata. No podrá aplazarse una misma licencia del agente dos años consecutivos.

LICENCIAS DE AGENTES CON DOS O MAS CARGOS COMPATIBLES

43ª) En los casos de licencia por vacaciones en que el agente sea titular de más de un cargo y se haya declarado la compatibilidad, de acuerdo con el régimen correspondiente, las vacaciones se acordarán en forma simultánea siempre que las necesidades del servicio lo permitan, a cuyo fin se tendrá en cuenta la mayor antigüedad registrada por el interesado en la Administración Pública o reconocidas en los términos de los artículos 37ª al 40ª de la presente.

INTERRUPCION DE LA LICENCIA

44ª) La licencia por vacaciones se interrumpirá si durante su transcurso el agente contrajera enfermedad o se accidentase y se comprobara que su estado no le permite un verdadero descanso. En este supuesto, el tiempo de enfermedad debidamente comprobado, se justificará con imputación a los artículos 50ª, 70ª ó 71ª, según corresponda, debiendo el agente seguir el procedimiento establecido en los artículos 52ª ó 53ª.

Si por dichas razones, la licencia o parte de ella no pudiese tomarse dentro del mismo año para el cual fué acordada, por haber finalizado éste, el resto de los días no utilizados se acumulará al año siguiente, pero con imputación al año vencido.

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DE LICENCIAS POR VACACIONES

45ª) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32ª, las reparticiones del Ministerio deberán confeccionar un plan de licencias por vacaciones para la salida de su personal.

46ª) Las respectivas oficinas de personal confeccionarán un listado por duplicado de todos los agentes de la repartición, dividido de acuerdo con el lugar en el que los mismos prestan servicios, en el cual deberán consignar nombre y apellido, antigüedad computable y los días de licencia por vacaciones que correspondan, y procederán a remitirlo a las distintas dependencias, para que sobre esas bases establezcan el período de licencia (fecha de iniciación y terminación).

47ª) Sin perjuicio de que los agentes indiquen el período en que deseen hacer uso de sus vacaciones, en mérito a sus necesidades o preferencias, los jefes inmediatos, al asignarla, atenderán en primer término a las necesidades de la dependencia, evitando que la superposición de un excesivo número de licencias con relación a la dotación del personal, en un mismo período, provoque dificultades en la atención de las tareas. Los jefes serán directamente responsables del cumplimiento de este requisito.

48ª) Una vez confeccionado, el plan de licencias por vacaciones se elevará para su aprobación al Jefe de la Repartición.

49ª) Aprobado el plan -que entrará a regir el 1ª de enero del año siguiente- no se admitirán permutas o cambios en las fechas de licencias, sino solamente por exigencias del servicio o razones muy justificadas, no debiendo darse curso a los pedidos que no reúnan estas condiciones.

LICENCIAS POR ENFERMEDAD O ACCIDENTES DEL TRABAJO

50ª) Para el tratamiento de afecciones comunes o por accidentes acaecidos fuera del servicio, se concederá a los agentes hasta cuarenta y cinco días corridos de licencia por año calendario, en forma contínua o discontínua, con percepción íntegra de haberes. Vencido este plazo, las posteriores

solicitudes de licencia por dicha causa, podrán ser extendidas hasta completar el año calendario, pero sin derecho a percibir haberes, salvo que se le acordase el beneficio del artículo 70º.

51º) Todo empleado que habiendo tomado servicio solicite exámen médico por razones de salud, deberá presentarse a la dependencia de Personal de la repartición con un formulario, visado por su jefe inmediato, a fin de que se le extienda la correspondiente orden para el Servicio Médico.

52º) En casos de dolencias que le permitan deambular, el agente deberá hacerse reconocer en consultorio, siguiendo el procedimiento a que se refiere el artículo que antecede.

53º) Cuando la enfermedad obligue al empleado a guardar cama o por su naturaleza haga de todo punto inconveniente para su salud ausentarse de su domicilio, deberá comunicar tal circunstancia a la oficina donde presta servicios. Este aviso deberá efectuarse dentro de los 15 minutos subsiguientes a la hora en que debió tomar servicio. Cuando por razones de urgencia deba ser hospitalizado, se comunicarán también esa circunstancia.

54º) Las oficinas cursarán el aviso que se menciona precedentemente a las respectivas dependencias de Personal, las cuales en el formulario de estilo solicitarán el reconocimiento pertinente al Servicio Médico dentro de los 90 minutos subsiguientes a la iniciación del horario administrativo, consignado con exactitud nombre y apellido del empleado y domicilio donde haya de efectuarse el reconocimiento. En los casos de domicilio fuera de la Capital, se informará sobre localidad, línea de ferrocarril y todo otro medio de transporte que facilite la llegada hasta él.

55º) Para el reconocimiento en consultorio, el empleado deberá presentarse provisto de la respectiva orden y exhibir en cada caso documento de identidad.

56º) El servicio Médico entregará una constancia provisoria de la licencia aconsejada, cuando corresponda, a fin de que el causante obtenga la respectiva autorización para hacer abandono de sus tareas.

57º) Las distintas oficinas de personal están obligadas

a solicitar reconocimiento médico en el último domicilio denunciado por el empleado y no deberán aceptar comunicación verbal de cambio del mismo, salvo que el enfermo se encuentre ocasionalmente en otro domicilio, internado en sanatorio o establecimiento hospitalario o bien que medien razones que justifiquen debidamente dicho cambio.

58º) Si al término de la licencia acordada no se encontrase el agente en condiciones de reintegrarse a sus funciones, deberá solicitar nuevo reconocimiento en las condiciones establecidas precedentemente.

59º) Todo empleado que pase aviso de enfermo y que no concurra a los consultorios del Servicio Médico, dentro de las tres primeras horas del horario habitual, está obligado a permanecer en su domicilio a los fines de su exámen médico.

60º) El agente domiciliado dentro del radio de acción del Servicio Médico, que a pesar de haberla solicitado no hubiera recibido la visita del médico oficial, deberá reiterar, en caso de continuar enfermo, dicha formalidad. Si se reincorporara al día siguiente, concurrirá al Servicio Médico para que justifique su inasistencia.

61º) Los agentes con domicilio en zonas fuera del radio de acción del Servicio Médico, procederán igualmente, en caso de inasistencia por enfermedad, en la forma prevista en el artículo 53º, debiendo la dependencia a la cual pertenece seguir el procedimiento establecido en el artículo 54º, a los fines de que el Servicio Médico efectúe el respectivo contralor cuando se juzgue conveniente.

62º) Para justificación de las inasistencias en que incurran esos agentes, deberán presentar al Servicio Médico del Ministerio, dentro de los tres primeros días, un certificado médico en el que debe constar: nombre y apellido del efermo, repartición, domicilio, diagnóstico y tiempo aproximado que demandará su curación. Para la obtención de dicho certificado el agente deberá observar el siguiente órden de prelación:

a) médico del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación.
b) médico de la Obra Social de este Ministerio.
c) médico del Servicio Médico de otra repartición Nacional, Provincial o Municipal.

d) médico de la Policía del lugar.

e) médico particular.

El certificado médico extendido por los facultativos que se señalan en los apartados d) y e), debe ser autenticado por la autoridad policial local.

63ª) En los lugares donde existan médicos oficiales, no se aceptará, bajo ningún concepto, certificados de médicos particulares. En caso contrario la Policía certificará que no existe en la localidad ningún médico oficial.

64ª) Las reparticiones con dependencias en el interior de la República, cuyos agentes inasistan por enfermedad, deberán dar aviso de tal circunstancia a las delegaciones del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación. En caso de no existir éstas, el agente procederá en la forma establecida en los artículos 61ª y 62ª.

Los certificados que obtengan en esas condiciones, deberán cursarlos al Servicio Médico del Ministerio, para su registro, fichado y diligenciamiento que corresponda.

65ª) Cuando el agente se encontrase en el interior del país, fuera de su domicilio habitual, en uso de licencia ordinaria, comisión o misión oficial y no pudiera reintegrarse a sus funciones al término de las mismas por encontrarse enfermo, lo hará saber telegráficamente o por correspondencia expresa a la repartición en la cual presta servicios, y procederá en la forma indicada en los artículo 61ª y 62ª.

66ª) Los empleados deberán solicitar reconocimiento médico a domicilio en los casos realmente indispensables, cuando su estado no les permita trasladarse al lugar en que prestan servicios, y nunca por motivos de comodidad o con ánimo de dar más apariencia de gravedad a la enfermedad.

67ª) Las faltas por enfermedad que se consideren injustificadas, la infracción a lo dispuesto en el artículo 59ª, la omisión inexcusable de lo establecido en el artículo 53ª y el pedido injustificado de la concurrencia del médico a domicilio, harán pasible al empleado de las siguientes sanciones:

1a. vez en el año, 2 días de suspensión
2a. vez en el año, 5 días de suspensión
3a. vez en el año, 10 días de suspensión

de licencia con goce de haberes, prorrogable en iguales condiciones por otro año.

Si de cualesquiera de estos casos se derivara una incapacidad parcial permanente deberán adecuarse las tareas del agente a su nuevo estado.

72º) Los agentes de este Ministerio en uso de licencia por enfermedad no podrán ausentarse del país sin autorización de la repartición en que prestan servicios y conocimiento del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación.

73º) Todas las licencias concedidas por causas de enfermedad o accidente quedarán canceladas por el restablecimiento del agente. El empleado deberá en todos los casos solicitar la reincorporación a sus funciones, aún cuando no hubiere vencido el término de su licencia, siempre que se encomtrare en condiciones de acuerdo con lo dispuesto en esta reglamentación.

74º) No se justificarán, bajo ningún concepto, inasistencias fundadas en razón de salud, cuando se haya omitido el pedido de reconocimiento médico pertinente.

LICENCIA POR MATERNIDAD Y PERMISO PARA LA ATENCION DEL LACTANTE

75º) Por maternidad se acordará licencia remunerada de doce semanas dividida en dos períodos preferentemente iguales, uno anterior y otro posterior al parto, el último de los cuales no será inferior a seis semanas. Los períodos son acumulables. En los casos anormales se aumentará el término de la licencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 50º o en su defecto, en el artículo 70º. Si el nacimiento fuese múltiple, esta licencia podrá ampliarse a un total de quince semanas, con un período posterior al parto no menor de nueve semanas.

76º) La agente que en casos especiales gestione cambios de tareas a partir de la concepción hasta el comienzo de la licencia por maternidad, deberá presentar una solicitud en tal sentido, la que será considerada previa intervención del Servicio Médico.

77º) Toda madre de lactante durante un período de seis meses tendrá derecho a lo siguiente:

a) disponer de dos descansos de media hora cada uno para amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo; o

b) disminuir en una hora diaria su jornada de trabajo ya sea iniciando su labor una hora después de la hora de entrada o finalizando una hora antes; o

c) disponer de una hora en el transcurso de la jornada de trabajo.

Este permiso, en todos los casos, sin excepción, será acordado previa intervención e informe del Servicio Médico.

LICENCIA POR SERVICIO MILITAR

78ª) Los agentes que tengan que cumplir el servicio militar, deberán presentar el pedido correspondiente en el formulario respectivo acompañando la cédula de incorporación y tendrán derecho a las siguientes licencias, con el 50% de su remuneración:

a) hasta 5 días después de la fecha de la baja asentada en la libreta de enrolamiento, en los casos en que hubiera sido declarado inepto o fuese exceptuado.

b) hasta 15 días después de la fecha de baja, si hubiese cumplido el periodo para el cual fué convocado o éste fuese mayor de seis meses.

c) hasta 5 días después de la fecha de baja, cuando hubiese cumplido un periodo menor de seis meses.

Asimismo se acordará licencia sin percepción de sueldo al que opte cumplir Servicio Militar en carácter de agente de Policía Federal.

En todos los casos y en oportunidad de reintegrarse a sus tareas, el agente deberá dar cuenta por escrito de dicha circunstancia, acompañando los elementos probatorios que justifiquen su situación.

79ª En caso de que el agente no se reintegrara a su puesto dentro del término fijado en el artículo 78ª, y no justificara fehacientemente las causas que se lo impidieron, se hará pasible de las sanciones a que se refieren los artículos 23ª ó 27ª, según el caso.

80ª) El personal que en carácter de reservista sea incorporado transitoriamente a las Fuerzas Armadas de la Nación,

tendrá derecho a usar de licencia y a percibir, mientras dure su incorporación, como única retribución, la correspondiente a su grado en caso de ser oficial o suboficial de la reserva. Cuando el sueldo del cargo civil sea mayor que dicha retribución, la dependencia a la cual pertenece liquidará la diferencia.

LICENCIA PARA DESEMPEÑAR CARGOS ELECTIVOS O DE REPRESENTACION POLITICA, GREMIAL Y/O SINDICAL

81ª) El agente que sea designado para desempeñar un cargo electivo o de representación politica en el orden nacional, provincial o municipal y se le plantee con tal motivo una incompatibilidad, tendrá derecho a usar de licencia sin goce de sueldo por el tiempo que dure su mandato, pudiendo reintegrarse al cargo administrativo dentro de los treinta (30) días siguientes al de finalización de las funciones para los que hubiera sido elegido.

82ª) Cuando el empleado sea designado para desempeñar un cargo de representación gremial y/o sindical en su carácter de agente del Estado, no retribuido por la entidad gremial o sindical, tendrá derecho a usar de licencia con goce de haberes en la medida necesaria y mientras dure su mandato, debiendo reintegrarse a su puesto administrativo al término del mismo.

Cuando el cargo de que se trata fuera retribuido por la entidad gremial o sindical, sólo tendrá derecho a usar de licencia sin goce de sueldo mientras dure su función, debiendo reintegrarse al servicio dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización de ésta.

El beneficio previsto en los supuestos señalados precedentemente, sujeto a iguales alternativas -con o sin sueldo, según el caso- regirá para los agentes que sean designados por las autoridades gremiales competentes, para desempeñar en situaciones especiales, cargos de dirección o intervención en los organismos gremiales o sindicales respectivos, debiendo reintegrarse a su empleo administrativo al término de sus funciones.

83ª) El otorgamiento de las licencias a que se refiere el

tendrá derecho a usar de licencia y a percibir, mientras dure su incorporación, como única retribución, la correspondiente a su grado en caso de ser oficial o suboficial de la reserva. Cuando el sueldo del cargo civil sea mayor que dicha retribución, la dependencia a la cual pertenece liquidará la diferencia.

LICENCIA PARA DESEMPEÑAR CARGOS ELECTIVOS O DE REPRESENTACION POLITICA, GREMIAL Y/O SINDICAL

81ª) El agente que sea designado para desempeñar un cargo electivo o de representación política en el orden nacional, provincial o municipal y se le plantee con tal motivo una incompatibilidad, tendrá derecho a usar de licencia sin goce de sueldo por el tiempo que dure su mandato, pudiendo reintegrarse al cargo administrativo dentro de los treinta (30) días siguientes al de finalización de las funciones para los que hubiera sido elegido.

82ª) Cuando el empleado sea designado para desempeñar un cargo de representación gremial y/o sindical en su carácter de agente del Estado, no retribuido por la entidad gremial o sindical, tendrá derecho a usar de licencia con goce de haberes en la medida necesaria y mientras dure su mandato, debiendo reintegrarse a su puesto administrativo al término del mismo.

Cuando el cargo de que se trata fuera retribuido por la entidad gremial o sindical, sólo tendrá derecho a usar de licencia sin goce de sueldo mientras dure su función, debiendo reintegrarse al servicio dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización de ésta.

El beneficio previsto en los supuestos señalados precedentemente, sujeto a iguales alternativas -con o sin sueldo, según el caso- regirá para los agentes que sean designados por las autoridades gremiales competentes, para desempeñar en situaciones especiales, cargos de dirección o intervención en los organismos gremiales o sindicales respectivos, debiendo reintegrarse a su empleo administrativo al término de sus funciones.

83ª) El otorgamiento de las licencias a que se refiere el

punto 82ª quedará supeditado a las comunicaciones que efectúe la Secretaría General de la Confederación General del Trabajo o el Sindicato con personería gremial respectivo al organismo competente del Ministerio que corresponda.

84ª) A los fines establecidos en los puntos 81ª y 82ª, el agente deberá presentar la correspondiente solicitud de licencia, acompañando las constancias probatorias de su designación y detallando la fecha en que asumirá sus funciones. Asimismo, en oportunidad de su reintegro, certificará también por escrito la fecha de cesación de su mandato, de acuerdo con las constancias que establezcan las autoridades competentes.

LICENCIA POR ASUNTO FAMILIAR O PARTICULAR

85ª) Desde el día de su ingreso, el agente tendrá derecho a usar de licencia remunerada en los casos y por el término de días laborables que a continuación se detalla:

MATRIMONIO:
a) del agente: 10 días;
b) de sus hijos: 1 día.

NACIMIENTOS:
a) de hijos del agente varón: 2 días.

FALLECIMIENTOS:
a) 5 días en caso de fallecimiento de:
   esposo
   padres
   hijos
   padrasto o madrasta
   hijastro
b) 2 días en caso de fallecimiento de:
   hermanos o hermanastros
   abuelos, cuñados, nietos
   yerno o nuera
   suegros

ENFERMEDAD DE UN MIEMRO DEL GRUPO FAMILIAR

Para consagrarse a la atención de un miembro enfermo del grupo familiar constituído en el hogar, hasta veinte (20)días

continuos o discontinuos por año calendario. A este fin el agente deberá expresar, por declaración jurada, que es indispensable su asistencia o que el estado del paciente reviste extrema gravedad. Estas causales podrán ser comprobadas por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública o por el Servicio Médico de este Ministerio y sólo podrán ser invocadas con relación a los familiares que cohabiten con el agente.

Para solicitar licencia por su matrimonio, el agente deberá presentar una solicitud en tal sentido, con una antelación mínima de 15 días a la fecha de su salida. Dentro de los ocho días de su reintegro, exhibirá los documentos probatorios correspondientes.

86º) En el transcurso de cada decenio, el agente podrá usar de licencia sin remuneración, por el término de un año fraccionable en dos períodos. El término de licencia no utilizado en un decenio no puede ser acumulado a los decenios subsiguientes y para tener derecho a esta licencia en distintos decenios, deberá transcurrir un plazo mínimo de dos años entre la terminación de una y la iniciación de la otra.

Para acordar este beneficio, se tendrá en cuenta las causales invocadas por los agentes y se exigirán a tal fin las pruebas que se estimen convenientes, consultando en primer lugar las necesidades que existen con respecto a personal y servicios.

87º) Asimismo se podrá conceder licencia sin remuneración en casos de fuerza mayor o graves asuntos de familia, debidamente comprobados, por términos que no excedan de tres meses por año calendario. Las licencias a que se refiere este artículo sólo podrán ser concedidas por el señor Ministro.

88º) Si el agente se reintegrase a su puesto antes del vencimiento del término solicitado y no se le hubiese designado reemplazante interino, se le dará inmediata posesión de su cargo, previa presentación por escrito de tal pedido. En caso de existir reemplazante interino, el interesado no podrá tomar posesión de sus funciones, hasta tanto la superioridad provea la respectiva solicitud.

89º) Si el agente no se reintegrase una vez finalizado el

término de su pedido, se tendrá en cuenta lo prescripto en los artículos 22ª ó 26ª de la presente.

LICENCIA Y PERMISO PARA ESTUDIANTES

90ª) Anualmente se concederán 28 días laborables con goce de haberes a los agentes que cursen estudios en establecimientos oficiales o incorporados (nacionales, provinciales o municipales) y deban rendir exámen en los turnos fijados oficialmente. Este beneficio será acordado en plazos máximos de hasta 7 días cada vez.

A fin de tener derecho al beneficio, el interesado deberá llenar un formulario y presentará dentro de los cinco días de rendido el examen la constancia pertinente, la que será otorgada por las autoridades del respectivo establecimiento educacional.

91ª) Si dentro del término establecido anteriormente el agente no presentara la constancia de que se trata, se considerará integramente sin goce de sueldo el período de licencia solicitado y además se hará pasible de las siguientes sanciones:

1ra.	vez	5 días de suspensión
2da.	vez	15 días de suspensión

De existir una nueva transgresión se elevarán los antecedentes a la superioridad para que aplique las sanciones que estime convenientes.

92ª) Los agentes tendrán derecho a obtener permiso dentro del horario de trabajo para asistir a clase, de acuerdo con las siguientes normas:

a) se entenderá que el permiso a acordar será con el fin de anticipar o postergar la hora de iniciación de tareas o interrumpir las mismas en el curso de la jornada de trabajo.

b) sólo se acordarán las franquicias de que se trata en los casos en que exista superposición de horarios o lo impongan razones de distancia, no admitiéndose ninguna otra causal;

c) en todos los casos, el permiso se acordará con compensación horaria.

93º) Para acogerse al beneficio de la franquicia horaria establecida, el agente deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) demostrar fehacientemente la imposibilidad de seguir el curso o cumplir con las exigencias que él impone fuera de las horas de trabajo;
b) presentar, a efectos de demostrar la condición de estudiante en cursos oficiales o incorporados y la necesidad de asistir al establecimiento educacional en horas de oficina, comprobantes expedidos unicamente por la máxima autoridad administrativa del establecimiento o su reemplazante autorizado;
c) comunicar dentro de las veinticuatro horas cualquier variante -cesación de estudios, alteración de horario en los cursos a que asiste, etc.- producida en las actividades para las cuales solicitó el permiso. A tal efecto, el agente deberá presentar el respectivo formulario de declaración jurada en la que se obligue a cumplir con este requisito.

94º) Durante el peridde de receso de la enseñanza, caducarán automaticamente todas las franquicias concedidas, las que deberán renovarse, en su caso, anualmente. Toda transgresión a las normas establecidas anteriormente se reputará falta grave, pasible de las sanciones que la superioridad estime aplicar en cada caso.

95º) El agente tendrá derecho a usar de licencia sin goce de haberes por el término máxime de dos años, cuando deba realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos o artísticos, o participar en conferencias o congresos de esa índole en el país o en el extranjero. Igual beneficio podrá concederse para mejorar la preparación técnica o profesional del agente o cumplir actividades culturales o deportivas.

96º) Las licencias a que se refiere el punto 95º, podrán ser concedidas con goce de sueldo, pero por un término no mayor de un año, cuando existan probadas razones de interés público en el cometido a cumplir por el agente o éste actúe en representación del país. Cuando el empleado deba trasladarse

al extranjero, el beneficio deberá ser acordado por el Poder Ejecutivo, previa conformidad del Consejo de Gabinete; de lo contrario o en el caso contemplado en el punto anterior, será resuelto directamente por este Ministerio.

A los efectos previstos, se tendrán en cuenta las condiciones, títulos y aptitudes del agente, determinándose, asimismo, sus obligaciones en favor del Estado en el cumplimiento de su cometido.

DISPOSICIONES GENERALES

97º) El agente tendrá derecho a usar, desde la fecha de su incorporación, las licencias de que trata la presente reglamentación, salvo los casos contemplados en los artículos 83º, 86º, 95º y 96º, en que deberá tener seis meses de antigüedad.

98º) Se considerará falta grave toda simulación realizada con el fin de obtener licencia o justificar inasistencias. El agente se hará pasible de suspensión de dos meses sin goce de sueldo y sin perjuicio del servicio o cesantía en caso de reincidencia.

99º) Los agentes no podrán gozar de las licencias a que se refiere la presente reglamentación, si previamente no se han notificado de la resolución que recaiga sobre su pedido; en caso contrario, sus inasistencias serán consideradas como abandono del cargo.

100º) Facúltase a los señores Jefes de reparticiones a conceder por sí las licencias previstas en el régimen de que se trata, salvo en los casos contemplados por los artículos 81º y 86º, que serán resueltos por el señor Director General de Contabilidad y Administración, quien, además, tendrá a su cargo todo lo relativo al beneficio en lo que hace a las reparticiones y dependencias de la Subsecretaría y Dirección de Obra Social.

101º) Las excepciones, los casos no previstos en el Reglamento de licencias y las licencias encuadradas en los artículos 95º y 96º, serán elevadas a consideración de este Ministerio.

102º) Las autorizaciones que soliciten los agentes para trasladarse al extranjero durante el lapso que abarca su li-

cencia por vacaciones, serán acordadas por la Dirección General de Contabilidad y Admimistración, previa concesión por las reparticiones respectivas de la licencia requerida.

103ª) Facúltase a la Dirección General de Contabilidad y Administración para que confeccione los formularios que prevé este reglamento, los que se condiderarán a tal efecto como parte integrante del mismo.

104ª) La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos propondrá a este Ministerio, dentro de los treinta (30) días de la fecha, el reglamento de asistencia y licencias correspondiente al personal jornalizado que se desempeña en los casinos e hipódromos de su dependencia, siguiendo al efecto el ordenamiento general establecido en el presente.

105ª) Derógase la resolución nº 894 del 27 de agosto de 1946, como así también todas las disposiciones que se opongan a la presente reglamentación.-

DIRECCION GRAL. DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION Despacho General

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Art. 4º

Repartición: ..... Dependencia: .....

PLANILLA DE ASISTENCIA DIARIA

Fecha: .....

Apellido y Nombres	Firmas dentro del Horario		Firmas fuera de hora		Observaciones
	Entrada	Salida	Entrada	Salida	

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Art. 5ª

Repartición: .....

Dependencia: .....

PARTE DE NOVEDADES DEL DIA .....

(Entrada)

Apellido y Nombres	Novedad

Lugar y fecha: .....

.....

Firma

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Repartición: .....

Dependencia: .....

PARTE DE NOVEDADES DEL DIA .....

(Salida)

Apellido y Nombres	Novedad

Lugar y fecha: .....

.....
Firma

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Art. 9a

PARTE QUINCENAL: Mes de ....., desde el ..... al .....

Dependencia: .....

Apellido y Nombres	Días	Aclaraciones

..... Firma

Fecha

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Art. 12º

PARTE DE ASISTENCIA

Repartición: .....

Total de agentes en actividad: .....

Agentes con licencia por enfermedad: .....

Agentes enfermos: .....

Agentes ausentes: .....

Agentes con licencia por otras causales .....

Indice de ausentismo (enfermo+ausentes, sobre el total de agentes) .....%

....

Fecha Firma

TALON DE CONTROL

Permiso de Salida Nº .....

A PERSONAL:

Para su conocimiento y demás efectos se informa que el empleado .....

.....
Apellido

.....
Nombre

Nº de Orden .....

Que ha salido con permiso, retomo servicios a las ..... horas, y/o no volvio. (1)

(1) Téstese lo que no corresponda.

.....
(Nombre de la Oficina y Fecha)

.....
Firma del Jefe

NOTA: Este talón debidamente llenado por el jefe será devuelto a personal una vez que el empleado haya tomado servicio.

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Art. 13ª

Repartición: .....

.....
Oficina y Fecha

PERMISO DE SALIDA Nº .....

Con motivo de .....solicito permiso para ausentarme desde las ..... hasta las... horas o/y no volver (1)

(1) Téstese lo que no corresponda

APELLIDO Y NOMBRE: ..... Nº de Orden .....

.....
Firma

Señor .....

Estimo que ~~PUEDE~~ / ~~NO DEBE~~ accederse a lo solicitado, a compensar desde el ..... de 195..... de ..... a ... horas.

.....
Firma del Jefe

Visto lo informado precedentemente ..... concede el permiso solicitado.

OBSERVACIONES: .....

.....
Firma

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Art. 16ª

AUTORIZACION PARA LLEGAR FUERA DE HORA

Buenos Aires,

Señor Jefe:

Solicito se me autorice a llegar fuera de hora (.....(X).....el día .....por las siguientes causales: .....

.....

.....

....
Apellido y Nombre Firma

Opinión del superior inmediato:.....

.....

.....

....
Fecha Firma

AUTORIZADO: si/no ; pase a Personal a sus efectos.-

....
Fecha Firma

(x) Especificar tiempo de la demora.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Art. 17ª

JUSTIFICACION POR LLEGADA FUERA DE HORA

Buenos Aires,

Señor Jefe:

Solicito se me justifique la llegada fuera de hora en que incurrí en el día de la fecha, en razón de las siguientes causales: .....
.....
.....

....
Apellido y Nombre

..... Firma

Opinión del superior inmediato: .....
.....
.....

.....
Fecha

..... Firma

JUSTIFICADO: si/no ; pase a Personal a sus efectos.

.....
Fecha

..... Firma

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Art. 19a

PERMISO PARA INASISTIR

Buenos Aires

Señor Jefe:

Solicito autorización para inasistir el día ..... en razón de las siguientes causales:

.....

.....

.....

.....

.....

....

Apellido y Nombre Firma

Opinión del superior inmediato:.....

.....

.....

....

Fecha Firma

AUTORIZADO: [si/no] [con/sin] goce de sueldo; pase a Personal a sus efectos.

....

Fecha Firma

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Art. 19ª

JUSTIFICACION DE INASISTENCIA

Buenos Aires,

Señor Jefe:

Solicito se justifique mi inasistencia durante el/los día/s ..... en razón de las siguientes causales: .....
.....
.....

....
Apellido y Nombre Firma

Opinión del superior inmediato: .....
.....
.....

....
Apellido y Nombre Firma

JUSTIFICADO: si/no con/sin goce de sueldo; pase a Personal a sus efectos.

....
Fecha Firma

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Art. 32ª

Buenos Aires,

Señor Jefe:

A los efectos de la justificación de la licencia prevista en el art. 32ª del Dto. 12.720/53, elevo la constancia extendida por la autoridad competente.

Repartición: .....

Apellido y Nombre: .....

Categoría: .....

Licencia desde el ..... al .....

.....
Firma

Por la presente certifico que el señor .....
ha rendido examen en este establecimiento durante el/los día/s. ..... en las siguientes asignaturas: .....

Para ser presentado ante el Ministerio de Hacienda, se extiende el presente a los .....

Sello

.....
Firma

(ver al dorso)

ARTICULO 32º del Dto. 12.720/53: Se concederá licencia con goce de haberes por veintiocho (28) días laborables anuales, a los agentes que cursen estudios en establecimientos oficiales o incorporados (nacionales, provinciales o municipales) para rendir examen en los turnos fijados oficialmente, debiendo presentar constancia del examen rendido otorgada por las autoridades del establecimiento educacional respectivo. Este beneficio será acordado en plazos máximos de hasta siete (7) días laborables cada vez.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Art. 51ª

Repartición: .....

Dependencia: .....

Buenos Aires, ... de 195.

Señor Jefe de Personal:

Solicito quiera disponer se extienda una orden de reconocimiento médico / visitadora social a nombre del agente: .....

quién manifiesta (1) .....

Dicho reconocimiento deberá efectuarse en: (2) .....

Grado de parentesco con el enfermo: .....

.....
Firma del Jefe

(1) "estar" o "continuar enfermo" o "tener que asistir a familiar enfermo".

(2) "en consultorio" o "su domicilio".

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Arts. 51/54/55ª

Nª de Orden .....

Buenos Aires,

AL SERVICIO MEDICO:

Se servirá efectuar el reconocimiento médico en (1) ..... al empleado cuyos datos se consignan a continuación, quién manifiesta (2) ..... enfermo:.

Apellido y Nombre .....

Legajo Nª ..... Repartición .....

Domicilio ..... nª..... piso ....dpto....

Localidad .....

.....
Jefe de Personal

A PERSONAL:

Se acordó/denegó licencia desde el.....

..... hasta el ..... (inclusive).

Observaciones: .....

.....

....
Fecha Firma

(1) "su domicilio" o "consultorio"

(2) "estar" o "continuar"

Nota: Este formulario se confeccionará por triplicado; Original a Personal; Duplicado a Servicio Médico y Triplicado al agente.

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Art. 78ª

Buenos Aires,

Señor Jefe:

Solicito se me conceda licencia a partir del del ....., en los términos del artículo 78ª del decreto nº 12.720/53, para incorporarme a las filas de (1) ..... a efectos de cumplir con el Servicio Militar, en prueba de lo cual acompaño la cédula de notificación respectiva (2).

.....
Firma

Repartición: .....

Apellido y Nombre: .....

Categoría: .....

(1) Marina-Aeronáutica-Ejército.

(2) Este documento deberá ser devuelto en el acto al interesado, dejando constancia de ello en las actuaciones.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Art. 85ª
Original

Buenos Aires, ...de 195...

De la Oficina de Personal de .....

A la Jefatura de la División Servicio Médico

Con el objeto de que se efectúe un reconocimiento médico social del empleado cuyos datos se expresan a continuación, que manifiesta tener que atender a su ..... enfermo.

Apellido ..... Nombres .....

Calle .....Nº .....Piso .....Depto.....

Localidad ..... F. C. .....

Observaciones: .....
.....

.....
Jefe de Personal

Apellido y Nombre .....

Repartición .....

El Servicio Médico ha comunicado que se encuentra al cuidado de su ..... correspondiendo licencia desde el .....hasta el ..... (inclusive), de lo que debe notificarse a sus efectos correspondientes.

Observaciones: .....
.....

.....
Fecha

.....
Jefe de Personal

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Art. 85ª
Duplicado

Buenos Aires, ... de 195..-

De la Oficina de Personal de .....

A la Jefatura de la División Servicio Médico

Con el objeto de que se efectúe un reconocimiento médico social del empleado cuyos datos se expresan a continuación, que manifiesta tener que atender a su ..... enfermo.

Apellido ..... Nombres .....

Calle .....Nº ..... Piso .....Depto.....

Localidad ..... F. C. .....

Observaciones: .....

.....

.....
Jefe de Personal

Señor Jefe:

Elevo el informe social referente a Don .....
....., para la justificación de inasistencias desde el .....-

Parentesco.....Edad .....

Enfermedad (Establecer estado de gravedad) .....
.....

Nucleo Familiar (Si es imprescindible su atención por el agente) .....

Licencia .....

....
Fecha Firma

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Art. 67-
Triplicado

Buenos Aires, ... de 195.

De la Oficina de Personal de .....

A la Jefatura de la División Servicio Médico

Con el objeto de que se efectúe un reconocimiento médico social del empleado cuyos datos se expresan a continuación, que manifiesta tener que atender a su ..... enfermo.

Apellido ..... Nombres .....

Calle ..... Nº ..... Piso.....Depto....

Localidad ..... F. C. .....

Observaciones: .....

.....

.....
Jefe de Personal

Fecha ..... Certificado Nº .....

Pase a la Oficina de Personal de .... haciéndole saber que de acuerdo al informe médico social producido,..... corresponde justificar las inasistencias que ha incurrido Don ..... desde el ..... hasta el .....

Regístrese en la ficha del recurrente

Observaciones

División Servicio Médico .....
Firma del Jefe

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 17.-

LICENCIAS

Buenos Aires, 19 de octubre de 1956.-

//ñor Ministro de Aeronáutica de la Nación:

En respuesta a la gestión que antecede, llevo a conocimiento del señor Ministro que este Ministerio participa de la inquietud señalada respecto de las demoras e inconvenientes a que dá lugar el trámite para la concesión de las licencias previstas en el artículo 35º del decreto nº 12.720/53, pero entiendo que ello no se debe a una deficiencia del texto legal citado, sino a la práctica equivocada en que incurren los Ministerios al diligenciar dichos actos.

En efecto, el artículo citado expresa: "...cuando el agente debe trasladarse al extranjero, el beneficio deberá ser acordado por el Poder Ejecutivo, previa conformidad del Consejo de Gabinete..." Esto no significa, como se ha dado en interpretar, que los Ministros deban refrendar el acto, como si se tratara de un decreto dictado en acuerdo; por el contrario, se estima que la mecánica es la siguiente: el Ministro respectivo debe someter a la consideración del Consejo de Gabinete, en la oportunidad en que éste celebra sus reuniones, la concesión del beneficio correspondiente, y obtenida la conformidad, se remitirá el proyecto a la Secretaría de Decretos de la Presidencia de la Nación, indicando en sus considerandos el consentimiento otorgado. Esta circunstancia puede ser constatada por dicho organismo mediante la pertinente consulta de los antecedentes a su disposición.

En razón de tales circunstancias considero innecesaria la modificación propuesta al comentado artículo, pero sí, en cambio, estimo que podría gestionarse ante la Presidencia de la Nación, la redacción de una circular aclaratoria de dicho trámite.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. E.A.BLANCO

EXPEDIENTE Nº 43.591/56.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 18.-

MINISTERIO - DIRECCION NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y FINANCIERA - FUNCIONES

Buenos Aires, 26 de octubre de 1956.-

Visto lo dispuesto por el artículo 1º del decreto nº 12.433;

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Fíjase la competencia de la Dirección Nacional de Política Económica y Financiera en la siguiente forma:

a) Asesorar al Ministerio de Hacienda en todo lo relativo a la política monetaria, crediticia, cambiaria, mobiliaria y económica general, y especialmente en los aspectos de intercambio y desarrollo económico;

b) Informar en todos los asuntos que plantee el Banco Central de la República Argentina, así como los demás Bancos, Superintendencia de Seguros, Instituto de Reaseguros, Compañías de Seguros y de Capitalización;

c) Efectuar el cálculo del producto e ingreso nacional, de las cuentas sociales y de las relaciones de insumo-producto;

d) Calcular anualmente el presupuesto económico del país.

ARTICULO 2º.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º la Dirección Nacional propondrá los funcionarios de este Ministerio que actuarán en el asesoramiento de la Comisión de Aforos, de la Comisión Interministerial de Intercambio Comercial y de toda otra Comisión Interministerial en que participe el Ministerio de Hacienda y tenga competencia sobre materias vinculadas al desarrollo económico, a las inversiones del Estado y a problemas financieros.

ARTICULO 3º.- Las funciones de la Dirección Nacional de Política Económica y Financiera serán atendidas específicamente por cinco subdirectores que ajustarán su cometido a los siguientes objetivos:

a) Análisis y proyecciones. Determinación del producto e ingreso nacional. Cálculo de las cuentas sociales. Análisis de las relaciones de sectores y de insumo-producto;

b) Política Monetaria. Análisis del mercado monetario. Formulación de la política bancaria y de seguros. Política mobiliaria. Relaciones con las instituciones financieras internacionales;

c) Intercambio. Formulación de la política cambiaria. Intervención en la negociación de convenios comerciales y financieros y observación de su aplicación. Análisis del balance de pagos y estudio de sus proyecciones. Estudio del presupuesto de divisas;

d) Programación del desarrollo económico. Cálculo del presupuesto económico. Análisis del presupuesto de obras públicas y del régimen de prioridades. Régimen de la radicación de capitales y estímulo de la inversión privada. Estudio de los ciclos económicos;

e) Coordinación financiera provincial. Estudio de la programación económica regional y análisis de los presupuestos de obras públicas provinciales y municipales. Orientación de la ayuda financiera nacional a las provincias y municipalidades. Promoción de la formación de organismos interprovinciales para el estudio y proyecto del desarrollo económico de regiones específicas.

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.-

RESOLUCION Nº 8.271.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 19.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

Buenos Aires, 2 de julio de 1956.-

Visto el Decreto Nº 19.203/48, por el cual se estableció un régimen de bonificaciones por antigüedad para el personal del Ministerio de Hacienda, y

CONSIDERANDO:

Que dicho beneficio se estructura sobre la base de los servicios que el agente acredite en la Administración Nacional, con arreglo a su calificación y sueldo básico;

Que una lógica evolución de conceptos y la experiencia recogida a través del lapso transcurrido desde su implantación, aconsejan la revisión del régimen de que se trata, a fin de ajustarlo a principios más orgánicos y justos, y al propio tiempo perfeccionar su mecanismo sobre bases esencialmente prácticas y racionales;

Que movido por esa inquietud y como primera medida destinada a la consecución del propósito enunciado precedentemente, el Ministerio de Hacienda señala la inoperancia de la calificación como factor de gravitación en la determinación del adicional por antigüedad, ya que siendo virtualmente extraña al elemento que fundamentalmente pondera el sistema, su aplicación -resistida por la lógica- resulta ficticia;

Que en ese sentido se destaca, en efecto, que si la calificación del agente debe incidir necesariamente sobre sus posibles promociones que en definitiva no son más que un estímulo y recompensa a sus merecimientos personales, no puede en cambio decidir un beneficio que, como su nombre lo expresa, es la valoración real del tiempo de prestación de servicios;

Que en consecuencia, debe concluirse en que el otorgamiento de la bonificación aludida debe quedar circunscripto exclusivamente al elemento tiempo como simple expresión numérica, con prescindencia de todo otro concepto que, además de limitar y desvirtuar el carácter de la concesión, lo somete a un

complejo mecanismo administrativo que en la práctica no se justifica;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Suprímese a partir del 1º de julio el requisito de la calificación del agente como elemento de juicio para determinar la bonificación por antigüedad prevista por el Decreto nº 19.203, para el personal del Ministerio de Hacienda, cuyos beneficios serán acordados exclusivamente en función del sueldo básico respectivo conforme las normas de dicho acto de gobierno.

ARTICULO 2º.- Las postergaciones que a la fecha estuviera cumpliendo el personal que, según lo determinado por el artículo 4º del régimen en cuestión, no hubiera reunido la calificación necesaria para ser promovido a un nuevo sector en el plazo mínimo fijado para cada caso, se darán por finalizadas el 30 de junio de 1956, a partir de cuya fecha le será liquidado el beneficio correspondiente y comenzará a computársele nueva antigüedad.

ARTICULO 3º.- Lo dispuesto por el artículo 1º y 2º, será de aplicación también con respecto al régimen que sobre la misma base y a iguales fines fué fijado para el personal de la Dirección General Impositiva por los Decretos números 19.204/48 y 6.011/56.

ARTICULO 4º.- Facúltase al Ministerio de Hacienda a dictar las normas complementarias y aclaratorias a que diera lugar el presente.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, pase a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos.

DECRETO Nº 11.665.-

DONACIONES - LEY DE CONTABILIDAD - FACULTAD MINISTERIAL

Buenos Aires, 13 de enero de 1954.-

Visto el Expediente nº 64.077/1950 del registro del Ministerio de Educación de la Nación por el que se destaca la conveniencia de dictar normas relativas a la aceptación de las donaciones que se efectúan a favor del Estado Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que las asociaciones cooperadoras, juntas vecinales, comisiones culturales, de fomento, etc., ofrecen en donación bienes muebles, especies, efectivo o conceptos similares cuya aceptación está sujeta al procedimiento determinado por la Ley de Contabilidad;

Que ello supone someter a pronunciamiento del Poder Ejecutivo numerosos expedientes que por el monto e índole de las donaciones respectivas no justifican dicho trámite;

Que precisamente de acuerdo al principio sustentado en el "Segundo Plan Quinquenal" debe agilizarse el diligenciamiento de los asuntos administrativos, correspondiendo por lo tanto, en casos como el mencionado en estas actuaciones, contemplar con carácter general la adopción de las medidas consiguientes de acuerdo al criterio expuesto por la Contaduría General de la Nación en sus informes Nº 433/1953 y Nº 1.945/1953 (Expediente número 141.833/1951 fs. 51 vta. y fs.56).

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Déjase establecido que las donaciones sin cargo que se efectúen a favor del Estado Nacional Argentino y que se refieran a bienes muebles, especies, efectivo o conceptos similares hasta la suma de veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000.00), serán aceptadas por el señor Minis-

tro del ramo, en mérito a las razones expuestas precedentemente.

ARTICULO 2º.- Las donaciones con o sin cargo de inmuebles, así como las demás donaciones, con cargo, serán consideradas en todos los casos por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educación, Hacienda y Asuntos Técnicos de la Nación.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y vuelva al Ministerio de Educación de la Nación a los fines consiguientes.

DECRETO Nº 426.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO LEGISLATIVO

Boletín Nº 21.-

MINISTERIO - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - DIRECCION GENERAL DE FINANZAS - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - DIRECCION DE OBRA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE PRENSA Y BIBLIOTECA - DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION

Buenos Aires, 11 de marzo de 1953.-

CONSIDERANDO:

Que por Ley nº 3.727 de Organización de los Ministerios se fijó originalmente la competencia del Departamento de Hacienda, sobre cuya base, por decreto nº 86.799/936, se organizó la Subsecretaría de dicho Ministerio;

Que posteriormente por Ley nº 13.529 fué modificada la Ley 3.727 y se establecieron las funciones que actualmente cumple ese Departamento de Estado, para cuya ejecución han sido creadas, por distintos actos de gobierno, diversas dependencias que modifican la estructura general fijada por el citado decreto nº 86.799/936;

Que a fin de coordinar el mecanismo administrativo de acuerdo con las nuevas necesidades, resulta conveniente efectuar un ordenamiento y agrupación de las dependencias que por la naturaleza de las tareas que ejecutan, deben formar parte de la estructura orgánica interna del Ministerio, en forma tal que le permita alcanzar el mayor grado de eficacia en el cumplimiento de sus funciones;

Que de acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, se estima necesario centralizar en una sola Dirección Gene-

ral, y sobre la base de las funciones que actualmente tiene asignadas la Dirección General de Administración, las que cumplen la Dirección del Personal, el Departamento del Servicio Médico, la Mesa General de Entradas y Salidas y la Intendencia del Ministerio.

Que dada la relación existente entre las funciones que cumple la Dirección General de Finanzas y la Tesorería General de la Nación, es conveniente la centralización de las mismas en la primera de las dependencias nombradas;

Que en atención a la naturaleza de las funciones a cumplir por el Departamento de Informaciones y Prensa es indispensable incorporar al mismo la Biblioteca del Ministerio, como así también toda otra dependencia cuya función se vincula a la materia;

Que finalmente se hace necesario la creación de un organismo que tenga a su cargo la racionalización de las tareas administrativas del Departamento de Hacienda, procurando la agilitación y perfeccionamiento de los servicios que cumple esa Secretaría de Estado;

Por ello y atento lo propuesto por el Departamento de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A:

ARTICULO 1a.- El Ministerio de Hacienda estará integrada en su organización interna, por las siguientes dependencias:

a) Dirección General de Contabilidad y Administración

b) Dirección General de Finanzas

c) Dirección General de Impuestos y Contribuciones

d) Dirección de Obra Social

e) Departamento de Prensa y Biblioteca

f) Departamento de Organización

ARTICULO 2ª.- La Dirección General de Contabilidad y Administración estará integrada por los departamentos de:

a) Administración

b) Contabilidad

ARTICULO 3ª.- La Dirección General de Finanzas estará integrada por los departamentos de:

a) Movimiento de Fondos y Deuda Pública

b) Estudios e Investigaciones Financieras

c) Presupuesto y Contralor Financiero y la Tesorería General de la Nación.

ARTICULO 4ª.- La Dirección General de Impuestos y Contribuciones estará integrada por los departamentos de:

a) Aduanas y Puertos

b) Impuestos y Contribuciones

c) Estudios e Investigaciones Impositivas

ARTICULO 5ª.- En caso de ausencia temporaria del Subsecretario de Hacienda, los señores Directores Generales de las reparticiones que integran la organización interna del Ministerio, procederán a atender directamente el despacho de los asuntos corrrespondientes a la materia de su respectiva dependencia.

ARTICULO 6ª.- Dentro de los noventa días de la fecha del presente decreto, las dependencias mencionadas en el artículo 1º deberán elevar a la consideración y aprobación del Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda la reglamentación respectiva.

ARTICULO 7ª.- Derógansе todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

ARTICULO 8ª.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda y Asuntos Técnicos.
ARTICULO 9ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

DECRETO Nª 3.881.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 22.-

MINISTERIO - DEPARTAMENTO DE PRENSA Y BIBLIOTECA - DIVISION BIBLIOTECA

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1955.-

Visto que por Decreto Ley Nº 3.030 del 16 de noviembre último, ha sido disuelta la Secretaría de Prensa y Actividades Culturales de la Presidencia de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto número 3.881/53, fué creado en el Ministerio de Hacienda el Departamento de Prensa y Biblioteca;

Que el libre acceso a las fuentes de información es uno de los elementos de más genuina esencia democrática, que no puede ser coartado bajo ningún pretexto valedero y que dicho principio, en la función pública, se traduce en legítima garantía para los administrados, de significativa gravitación como instrumento regulador del buen servicio;

Que por aplicación del espíritu que inspira el recordado decreto ley, ha sido restablecido a sus fuentes normales el ejercicio de actividades que deben estar libradas al juicio de quién posee plenos derechos para erigirse en censor de la acción de gobierno; la opinión pública, y consiguientemente, resulta improcedente mantener en funcionamiento a un organismo que ya no tiene razón de ser ni justificación desde el punto de vista de su jerarquía funcional;

Que únicamente permanece al margen de estas consideraciones la División Biblioteca -que fuera anexada a aquella dependencia- cuyo origen y mérito eximen todo análisis, ya que los mismos se hallan consubstanciados con los que definen toda actividad intelectual;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Declárase disuelto el actual Departamento de Prensa y Biblioteca del Ministerio de Hacienda.(1)

ARTICULO 2º.- La División Biblioteca, que integraba el organismo citado, seguirá funcionando como dependencia de la Subsecretaría de la referida Secretaría de Estado.

ARTICULO 3º.- La información relacionada con los actos de gobierno o cualquier otra medida que interese a la opinión pública será suministrada directamente por la Subsecretaría de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Por la Dirección General de Contabilidad y Administración se procederá a la adecuada distribución en las dependencias del Ministerio, del personal que se venía desempeñando en el organismo aludido en el artículo 1º.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus efectos.-

DECRETO Nº 3.664.-

(1) Ver Digesto Ministerial, Boletín Nº 21.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 23.-

MINISTERIO - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - DIRECCION GENERAL DE FINANZAS - DIRECCION NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y FINANCIERA - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - DIRECCION DE OBRA SOCIAL - DIVISION BIBLIOTECA E INFORMACIONES

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1956.-

Visto el decreto nº 3.881/53, por el cual se fija la organización de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario rever el ordenamiento de que se trata a fin de adecuarlo a la nueva estructura ministerial establecida por el decreto-ley nº 10.351/56;

Que esta circunstancia permitirá ajustar el mecanismo administrativo a las nuevas necesidades producidas por la incorporación de los servicios que se hallaban a cargo del ex-Ministerio de Finanzas, como así también actualizar el planteo organizativo de la Subsecretaría de Hacienda, cuya fisonomía se ha ido alterando en forma parcial a través de distintos actos de gobierno;

Que por otra parte, atento que el recordado decreto nº 3.881/53 dispone la creación del Departamento de Organización del Ministerio de Hacienda y teniendo en cuenta que las funciones encomendadas entonces al mismo, según lo demuestra la experiencia recogida, pueden ser asimiladas en los aspectos que hacen a la competencia de cada una, por las distintas reparticiones que integran la organización interna de la citada Secretaría de Estado, procede resolver la disolución de la co

mentada dependencia;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- La Subsecretaría del Ministerio de Hacienda estará integrada en la siguiente forma:

a) DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS;

b) DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION;

c) DIRECCION GENERAL DE FINANZAS;

d) DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES;

e) DIRECCION NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y FINANCIERA;

f) DIRECCION DE OBRA SOCIAL;

g) DIVISION BIBLIOTECA E INFORMACIONES.

ARTICULO 2º.- En caso de ausencia temporaria del señor Subsecretario de Hacienda, los señores Directores de las reparticiones que integran la Subsecretaría, procederán a atender directamente el despacho de los asuntos correspondientes a sus respectivas dependencias.

ARTICULO 3º.- El Ministerio de Hacienda elevará para su aprobación al Poder Ejecutivo, la estructura orgánica correspondiente a cada una de las reparticiones que se citan en el artículo 1º, con excepción de la mencionada en el inciso g), cuyo ordenamiento será fijado por el titular de la mencionada Secretaría de Estado.

ARTICULO 4º.- Deróganse los artículos 1º, 5º y 6º del decreto número 3.881/53 y toda otra disposición que se oponga a la presente.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

DECRETO Nº 17.071.-

Ver Digesto Ministerial, Boletín Nº 21.-

MINISTERIO - DIRECCION NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y FINANCIERA

Buenos Aires, 11 de julio de 1956.-

Visto que por el artículo 5º del decreto-ley nº 10.351/56, se dispuso que el Ministerio de Hacienda se integraría con dicho Departamento de Estado y el de Finanzas, y

CONSIDERANDO:

Que a los efectos funcionales derivados del citado acto de gobierno, procede disponer la creación de la dependencia que tenga a su cargo las relaciones del Ministerio de Hacienda con el Banco Central de la República Argentina y demás Instituciones bancarias oficiales, como asimismo la atención de todo cuanto hace a la política monetaria, crediticia, cambiaria, mobiliaria y económica general;

Que, por otra parte, le compete a esta nueva repartición la supervisión técnica de los organismos de seguros y reaseguros;

Que con tal motivo corresponde dotar a la misma de una estructura funcional adecuada a la trascendencia y naturaleza de su cometido, razón por la cual se hace necesario reajustar en esa medida la autorización acordada por el artículo 9º del decreto número 11.551/56;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Reemplázase el artículo 9º del decreto nº 11.551/56, por el siguiente:

"Créase, bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, "la Dirección Nacional de Política Económica y Financie-

"ra, la que estará constituida por los Departamentos de "Economía, de Bancos y de Seguros y Reaseguros, cuyas fun "ciones serán reglamentadas por el citado Departamento de "Estado.

ARTICULO 2º.- Modifícase la planilla anexa al artículo 5º del decreto nº 11.551/56, ANEXO 10 - MINISTERIO DE HACIENDA: CAPITULO I - ADMINISTRACION CENTRAL; A - Gastos a financiar con recursos de Rentas Generales; INCISO 1º - GASTOS EN PERSONAL; Item 1 - Ministerio; a) SUELDOS; Partida Principal 1 - Parcial 1, en la siguiente forma: donde dice " 1 Director General de Bancos y Seguros", debe decir " 1 Director Nacional Nacional de Política Económica y Financiera", y donde dice "1 Subdirector General de Bancos y Seguros", debe decir "1 Subdirector Nacional de Política Económica y Financiera".

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General de Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos.-

DECRETO Nº 12.433.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 25.-

MINISTERIO - FACULTADES - FUNCIONES - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - PERSONAL - TRASLADOS

DISPOSICIONES VIGENTES DE LA RESOLUCION MINISTERIAL Nº 1.648 DE 7/9/1953

(Rige para la Subsecretaría)

.....

2º.- En lo sucesivo los cargos jerárquicos serán asignados por resolución escrita emanada de autoridad competente.

3º.- Facúltase, de acuerdo con la norma precedente, a los Directores Generales y Directores de las dependencias integrantes de la organización interna de este Ministerio, a asignar funciones a su personal hasta 2º Jefe de División, como asimismo a proceder a su traslado -dentro de su jurisdicción- hasta Jefe de División. Los pases de personal entre esas mismas dependencias serán dispuestos por el señor Subsecretario. Los cargos de Jefe de División, en adelante, serán designados por resolución ministerial a propuesta de las dependencias.

.....

5º.- Los cargos jerárquicos de personal de mayordomía y maestranza, serán asignados por disposición de la Dirección General de Contabilidad y Administración.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 26.-

MINISTERIO - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - FUNCIONES - PERSONAL - DEFENSA NACIONAL

Buenos Aires, 25 de junio de 1956.-

Visto que por los decretos números 2.247 y 2.248 de 6 de febrero último se modifica la organización de las Direcciones de Defensa Nacional que venían funcionando en los Ministerios Nacionales, y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo dispuesto en la nueva estructura, ha quedado suprimido el organismo que atendía la materia de que se trata en este Departamento de Estado;

Que ello no obstante y según lo sugiere en las presentes actuaciones -expediente "R" 2.878/956- el Estado Mayor de Coordinación, resulta conveniente contar y mantener permanentemente actualizada, la información relacionada con las aptitudes del personal, con miras a su más eficaz y adecuado aprovechamiento en el supuesto de ser necesaria su movilización;

Que ello resulta oportuno no solo para los fines enunciados, sino también como elemento de información dirigido a satisfacer las exigencias del servicio, en cuanto hace a la racional distribución del agente en orden a sus conocimientos y grado de capacitación especializada;

Que por otra parte, procede también determinar el organismo cuyas funciones específicas le permitan desempeñarse convenientemente como medio de enlace con la Dirección General de Planificación de Recursos de Guerra y Defensa Civil, que tiene a su cargo la coordinación de las tareas que efectúen los ministerios civiles con relación a la defensa nacional;

Que en razón de la naturaleza de estos servicios y de su estrecha vinculación con los que en el orden administrativo realiza la División Personal de la Dirección General de Conta

bilidad y Administración, procede centralizar en la misma todo lo atinente a la materia en lo que hace a la actividad de este Ministerio;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º) Asígnase a la División Personal de la Dirección General de Contabilidad y Administración, la atención de los servicios vinculados a la defensa nacional que deban desarrollarse en el ámbito de este Ministerio.

2º) Sin perjuicio de las demás tareas que deba realizar en cumplimiento de lo dispuesto por el punto 1º) la citada dependencia procederá a confeccionar de inmediato un registro del personal con especificación de los siguientes datos básicos:

Nombre y Apellido.-

Clase y datos de enrolamiento.-

Fecha de nacimiento.-

Domicilio.-

Repartición donde presta servicios.-

Estudios cursados, especialidades, oficios y/o aptitud para determinadas actividades (conducir automotores, embarcaciones, aviones, etc.) condición de movilizable o no en su puesto de paz, tiempo necesario para su reemplazo, etc.

Los datos consignados precedentemente serán actualizados anualmente.

3º) A los fines establecidos en la presente, las reparticiones y dependencias de este Ministerio deberán prestar toda la colaboración necesaria y remitir a la Dirección General de Contabilidad y Administración, División Personal, los datos, informes y antecedentes que ésta solicite.

4º) El señor Jefe de la División Personal actuará como agente de enlace con la Dirección General de Planificación de Recursos de Guerra y Defensa Civil y coordinará con los organismos pertinentes todo lo relacionado con la materia.

5º) Comuníquese a quienes corresponda y pase a la Dirección General de Contabilidad y Administración a sus efectos.-

Boletín Nº 27.-

MINISTERIO - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - PERSONAL - INTENDENCIA

Buenos Aires, 6 de junio de 1956.-

Visto que distintas reparticiones con asiento en el Palacio de este Ministerio poseen, bajo su dependencia directa, personal de chóferes, ordenanzas y peones, para la atención de los servicios que les son propios, y

CONSIDERANDO:

Que tal situación, como es natural, determina la dispersión de esfuerzos y falta de coordinación en las directivas a seguir, con el consiguiente perjuicio para la eficacia de las tareas de atención, conservación y limpieza del edificio;

Que elementales razones de organización y economía aconsejan centralizar en una sola dependencia, todo el personal y elementos afectados a los servicios de que se trata, a fin de lograr con ello su mejor aprovechamiento y un rendimiento laboral más intensivo;

Por ello y atento lo expresado por la Contaduría General de la Nación en las presente actuaciones;

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º) A partir de la fecha, todo el personal obrero, maestranza y de servicios que se desempeñen en el Palacio de este Ministerio, cualesquiera sean las reparticiones del mismo en las cuales reviste, queda afectado definitivamente, a los fines funcionales y disciplinarios, a la dependencia directa de la Dirección General de Contabilidad y Administración (Departamento de Administración - División Inten-

dencia).

2º) Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1º y para el mejor cumplimiento de los fines que inspiran la presente, la Dirección General de Contabilidad y Administración, adoptará las medidas pertinentes a fin de que en su oportunidad, el personal de que se trata sea incorporado al presupuesto de este Ministerio.

3º) Comuníquese a quienes corresponda y pase a la Dirección General de Contabilidad y Administración a sus efectos.-

RESOLUCION Nº 8.080.-

Boletín Nº 28.-

MINISTERIO - NORMAS - INTENDENCIA

Buenos Aires, 16 de abril de 1956.-

Visto la necesidad de organizar convenientemente el acceso al Palacio que ocupa este Ministerio, a fin de evitar las aglomeraciones que se provocan en oportunidad de la entrada y salida del personal y lograr, al mismo tiempo, un mejor aprovechamiento del servicio de ascensores,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º) A partir de la fecha, la entrada y salida del personal con asiento en el edificio central de este Ministerio, se efectuará por las puertas ubicadas sobre las calles Balcarce y Paseo Colón, quedando, en tales ocasiones, reservada para el público, la correspondiente a la calle Hipólito Yrigoyen.

2º) La entrada o salida de personal conduciendo paquetes, se seguirá cumpliendo exclusivamente por la puerta que da a la calle Balcarce.

3º) Durante los lapsos comprendidos entre las 11 y 12 horas y entre las 18 y 19 horas, los ascensores funcionarán con arreglo al siguiente orden: ascensores con numeración impar, atenderán el 2º subsuelo y los pisos 1º, 3º, 5º, 7º, 9º y 11º y los de numeración par el 1er. subsuelo y los pisos 2º, 4º, 6º, 8º, 10º y 12º. Fuera del horario indicado, dicho servicio seguirá su circulación habitual.

4º) Tome nota la Dirección General de Contabilidad y Administración, comuníquese a las reparticiones con asiento en este edificio y archívese.-

RESOLUCION Nº 8.024.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 29.-

PERSONAL - PROHIBICIONES - INFORMES

Buenos Aires, 5 de mayo de 1917.-

Teniendo conocimiento este Ministerio que a las reparticiones y oficinas de su dependencia concurren personas en procura de datos relacionados con el estado de asuntos en tramitación y, una vez en posesión de los informes que se les suministran, se presentan a casas de comercio o particulares ofreciendo obtener el pronto despacho de sus expedientes o el pago de sus créditos, simulando vinculación o influencia con los funcionarios públicos, y

CONSIDERANDO:

Que los decretos reglamentarios de la Ley Nº 8.871, disponen que "los ciudadanos están obligados a presentar su libreta de enrolamiento en todos los casos en que las autoridades nacionales lo exigieran";

Que "cuando un ciudadano se presentare a gestionar cualquier clase de asuntos, peticiones, demandas, reclamos, etc., las autoridades nacionales le exigirán la exhibición de la libreta y no darán curso a la gestión, si no fuese presentada";

Que "los extranjeros que gestionen asuntos ante las autoridades nacionales podrán comprobar que no les alcanza la disposición anterior, con la simple presentación de un certificado de nacionalidad, de lo que deberá dejarse constancia";

Que "los apoderados de personas que residan fuera del lugar donde tienen asuntos que gestionar, deberán, en cada caso, al dar cumplimiento a su mandato, presentar un certificado de la autoridad nacional o del Consulado Argentino, del lugar de residencia de sus mandantes, por el cual acredite que aquellos han exhibido ante las autoridades mencionadas la libreta de enrolamiento o han comprobado su nacionalidad,

según el caso. En este certificado, que será agregado al expediente de la gestión, deberá especificarse el número de la matrícula, la clase a que pertenece el enrolado y la fecha en que dicha presentación tiene lugar";

Que "estos certificados podrán servir para diversas gestiones como las libretas y en las mismas condiciones que éstas";

Que el hecho enunciado en el preámbulo de esta resolución implica incorrecciones que tienen por fin el lucro en detrimento del buen nombre de la Administración y de la seriedad que preside el trámite y despacho de los asuntos;

Que es un deber de los poderes públicos adoptar medidas tendientes a evitar tales hechos;

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1ª.- Queda absolutamente prohibido, bajo severas penas, al personal de las reparticiones y oficinas del Departamento de Hacienda, dar informes sobre el estado de los asuntos en trámite, a toda persona que no sea el propio interesado o su representante con poder otorgado ante Escribano Público.

ARTICULO 2ª.- A los efectos del artículo anterior, se comprobará la identidad del interesado o apoderado con la libreta de enrolamiento, siendo argentino nativo o naturalizado y con la cédula de identidad o certificado de nacionalidad, siendo extranjero.

ARTICULO 3ª.- Esta resolución deberá fijarse en lugar visible en todas las mesas de entrada u oficinas donde se dan informes al público.

ARTICULO 4ª.- Comuníquese y archívese.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 30.-

PROHIBICIONES - PERSONAL

Buenos Aires, 25 de junio de 1931.-

Siendo conveniente dictar una disposición que rija especialmente para el personal de las Dependencias Nacionales que tengan manejo de fondos del Estado:

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Prohíbese terminantemente a todo empleado Nacional que preste servicios en Tesorería, Cajas de Recaudaciones o Pagos, Contadurías o dependencias que tengan manejo directo de fondos fiscales, la concurrencia a hipódromos, recintos de juego de azar, ruletas, casas de apuestas mútuas, etc.

ARTICULO 2º.- Toda infracción será penada con la inmediata cesantía del causante.

ARTICULO 3º.- Cada Ministerio adoptará los recaudos correspondientes para el mejor cumplimiento de éste Acuerdo.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 308.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 31.-

PERSONAL - NORMAS

Buenos Aires, 11 de octubre de 1946.-

Visto y

CONSIDERANDO:

Que es conveniente desde todo punto de vista, uniformar durante las horas de oficina la presentación personal de los agentes femeninos que se desempeñan en este Departamento y en las distintas reparticiones que de él dependen;

Que la observación diaria y la práctica seguida por otras jurisdicciones, aconsejan como mejor medida la adopción del delantal blanco a los fines expresados;

Por tanto,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º) Declárase de uso obligatorio para los agentes femeninos de este Ministerio y sus reparticiones, sin excepción, el delantal blanco durante las horas de labor.

2º) Comuníquese, publíquese y archívese.-

RESOLUCION Nº 1.052.-

DIRECCION Gral LIDAD Y ADMINISTRACION Despacho General

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 32.-

PERSONAL - PROHIBICIONES - NORMAS

Buenos Aires, 31 de mayo de 1948.-

Visto y
CONSIDERANDO:

Que, con el propósito de ver refirmados los principios generales de la organización que tiene a su cargo, y a través de diversas medidas oportunamente dictadas, este Departamento ha ido fijando las directivas necesarias para que las funciones encomendadas a sus agentes se cumplan dentro de elementales normas de ética administrativa;

Que, a pesar de esos deseos de perfeccionamiento que animan su gestión, ha llegado a conocimiento de este Ministerio que en algunas de las reparticiones o dependencias que lo integran, existen agentes que durante las horas de labor se dedican a ofrecer a sus compañeros de tareas artículos o mercaderías de cuya venta se ocupan en forma particular;

Que, en consecuencia, si se ha prohibido a los particulares que dentro de la jurisdicción del Ministerio desarrollen en el orden privado actividades comerciales análogas a las comentadas, menos aún puede admitirse que las realicen los propios empleados, toda vez que el ejercicio de las mismas se traduce en una disminución del interés y dedicación que el agente debe a su cargo, cuya consagración le requiere el mayor tiempo posible para su desempeño, y cuya investidura, desde cualquier esfera en que actúe, no condice en absoluto con la práctica observada;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º) Prohíbese terminantemente al personal del Ministerio

dedicarse dentro de las reparticiones o dependencias y durante las horas de oficina, al ejercicio de actividades de índole comercial que resulten extrañas a las específicas y propias que debe cumplir.

2º) Las transgresiones a lo dispuesto se considerarán faltas graves y serán pasibles de severas sanciones.

3º) Comuníquese, publíquese y archívese.-

RESOLUCION Nº 658.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 33.-

DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1949.-

Visto que el artículo 33 de la ley Nº 13.529 de organización y competencia de los Ministerios Secretarías de Estado, establece que el Poder Ejecutivo procederá a transferir a la jurisdicción de cada uno de aquéllos, los servicios existentes que les sean específicos por las funciones o cometidos que tengan a su cargo; y que uno de los servicios que deben ser considerados de acuerdo con la letra y espíritu de dicha ley, es el de asesoramiento y fiscalización técnica de carácter químico, y

CONSIDERANDO:

Que los servicios de esta naturaleza a cargo de la Nación están diversificados en contra de toda razón económica y técnica, al punto de que se los ha implantado en cada Ministerio Secretaría de Estado con la consiguiente dispersión de hombres y material, interferencia y superposiciones funcionales.

Que no obstante tratarse de una labor inespecífica, con respecto a la naturaleza de cada uno de los ministerios, como los análisis y estudios químicos sirven para la aplicación de leyes y reglamentos propios de cada uno de ellos, esto obligaría aparentemente, en cumplimiento de la ley nº 13.529 a acentuar la diversificación existente si no fuera que la índole misma de dicha función técnica permite hallar otra solución al problema.

Que para llegar a esta solución debe considerarse que una cosa es función específica y competencia legal que corresponde a cada ministerio en virtud de leyes particulares y otra cosa es la función de asesoramiento químico y la capacitación técnica integral para cumplirla. Realizar análisis químicos, verdadero acto pericial, es bien distinto que

aplicar e interpretar las leyes para cuyo cumplimiento son necesarias aquellas peritaciones.

Que sentada esta discriminación, nada obsta dentro del espíritu y letra de la ley nº 13.529, para que se centralicen en un único organismo todas las funciones de fiscalización técnica que requieren análisis químico que el Estado necesite como persona de derecho privado o en virtud de facultades regladas, siempre que el cumpliento de las leyes y reglamentos para cuya aplicación se realiza la peritación quede a cargo del ministerio correspondiente.

Que existiendo una repartición nacional capacitada y organizada técnica y administrativamente, como la Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales, es lógico que ella sirva de base para dicha centralización.

Por lo tanto,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Créase la DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA, dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación, con competencia en la ciudad de Buenos Aires, territorios nacionales y todos los casos de jurisdicción federal.

ARTICULO 2º.- Serán funciones exclusivas de la DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA la fiscalización técnica de orden químico que el Estado necesite ejercer, como persona de derecho privado o en virtud de facultades regladas, sobre mercancías cualquiera sea su clase y destino. Asesorará al Estado y a los particulares sobre las materias de su especialidad.

ARTICULO 3º.- La DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA se formará con la base de la hasta ahora Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales del Ministerio de Hacienda, cuyas funciones asume totalmente, así como, con arreglo a lo establecido en el artículo 2º del presente decreto, todas aquellas que sean necesarias para la aplicación de las presentes disposiciones: Ley nº 13.529 (artículo 14, inciso 1º; artículo 17, incisos 6º y 16º; artículo 20º, inciso 1º, segunda parte e inciso 9º, y artículo 23, incisos 3º, 4º y 7º) Ley nº 11.275, modificada por ley nº 13.526 (artículo 10, inciso d); decreto nº 7.573/49, y decreto nº

14.080/48 de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Para el cumplimiento de estos fines se transfieren a la DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA las funciones que siendo de su competencia, están actualmente a cargo de la Dirección Municipal de Bromatología de la ciudad de Buenos Aires y del Instituto de Farmacología y Contralor Farmacéutico del Ministerio de Salud Pública. Estos organismos continuarán con las funciones que les competen siempre que sean distintas de las que resulten de la aplicación del artículo 2º del presente decreto. Por conducto del ministerio que corresponda se procederá a la reestructuración de los organismos citados precedentemente para el cumplimiento de las demás funciones que quedan a su cargo.

ARTICULO 4º.- Queda facultado el Ministerio de Hacienda por intermedio de la DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA para realizar todos los demás actos que conduzcan al cumplimiento de sus fines, en concurrencia con otras reparticiones o con carácter exclusivo, cuando así resulte de disposiciones expresas. La aplicación de las leyes y reglamentos para cuyo cumplimiento la DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA deba actuar en su carácter de organismo técnico o asesor, quedará a cargo del ministerio respectivo o de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, según corresponda.

ARTICULO 5º.- Los ministerios y la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires deberán prestar la colaboración que les requiera el Ministerio de Hacienda para el mejor cumplimiento de las funciones que el presente decreto le asigna a la DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA, disponiendo la adscripción de personal, bienes, muebles, aparatos, accesorios, drogas y enseres que estuvieren afectados a los servicios de los cuales ésta se hace cargo y que fueren requeridos. Oportunamente se proveerá a las transferencias de cargos y de patrimonios que fuera menester, en orden a lo dispuesto por el artículo 33 de la ley nº 13.529.

ARTICULO 6º.- Facúltase a la DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA para cobrar los aranceles fijados por las respectivas leyes u ordenanzas para los servicios requeridos para terceros y para proponer los aranceles que correspondan a los servicios que deba prestar a pedido de las dependencias públicas.

ARTICULO 7º.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se

opongan al presente decreto.
ARTICULO 8º.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

DECRETO Nº 1.496.-

PERSONAL - INGRESO - EXAMENES

Buenos Aires, 9 de febrero de 1954.-

Visto que por decreto nº 18.741 de fecha 25 de noviembre de 1946 se implantó el examen de ingreso para el Ministerio de Hacienda y sus dependencias, sobre las bases de ciertas normas tendientes a efectuar la selección de los candidatos a ocupar cargos en esa Secretaría de Estado, y

CONSIDERANDO:

.....

Que corresponde facultar a dicho Departamento a dictar un nuevo régimen sobre la materia que, sin perjuicio de lograr la agilitación necesaria en mérito a una adecuada descentralización funcional, tienda al debido cumplimiento del objetivo señalado, teniendo en cuenta la característica especial de los servicios que cumple el citado Ministerio.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Derógase el decreto nº 18.741 del 25 de noviembre de 1946.-

ARTICULO 2º.- Facúltase al Ministerio de Hacienda a establecer en su jurisdicción, un régimen para el ingreso de personal a sus dependencias y reparticiones descentralizadas, en concordancia con lo expresado en los considerandos del presente decreto.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda y Asuntos Técnicos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 1.891.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Despacho General -

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 35.-

PERSONAL - INGRESO - EXAMENES

Buenos Aires, 17 de febrero de 1954.-

Visto que por decreto nº 1.891/54 de fecha 9 de febrero de 1954, se faculta a este Departamento a establecer un régimen de ingreso para los aspirantes a ocupar cargos en sus dependencias, reparticiones y organismos descentralizados, y

CONSIDERANDO:

Que en tal sentido es necesario fijar las normas a cumplimentar por todos aquellos que deseen optar a un empleo en las reparticiones dependientes de este Ministerio;

Que la medida comentada permitirá el ingreso de los aspirantes más capacitados, mediante una selección adecuada para las tareas a desarrollar, lo cual redundará en beneficio del servicio y tenderá a una mayor dignificación de la Administración Pública en el ámbito de esta Secretaría de Estado;

.....

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º) Apruébase el adjunto "Reglamento de Ingreso" para los aspirantes a ocupar cargos en las dependencias, reparticiones y organismos desdentralizados de este Departamento de Estado, cuyo texto forma parte integrante de la presente resolución.

2º) Comuníquese, publíquese y archívese.-

RESOLUCION Nº 2.312.-

REGLAMENTO DE INGRESO

1ª) El ingreso al Ministerio de Hacienda, sus dependencias y reparticiones descentralizadas estará sujeto a un examen de competencia para la función a desempeñar, salvo cuando el agente deba cumplir tareas específicas para las cuales posea título habilitante otorgado por Universidad Nacional.

2ª) Todo aspirante deberá presentar ante la autoridad competente de la repartición a que desee ingresar, un formulario que contendrá los siguientes datos:

a) fecha, apellido y nombre y domicilio.

b) número de cédula de identidad, de libreta de enrolamiento o cívica, o de carta de ciudadania si fuese argentino naturalizado.

c) fecha y lugar de nacimiento, estado civil y personas a su cargo.

d) nombre y nacionalidad de sus padres.

e) parentesco con agentes o ex-agentes del Ministerio.

f) si ha cumplido con el servicio militar, si ha sido exceptuado o cuando lo cumplirá.

g) si tiene otro empleo nacional, provincial, municipal o particular, con especificaciones de horarios que cumple en los mismos.

h) si es pensionado, retirado militar o tiene algún beneficio jubilatorio.

i) título universitario que posea, profesión, estudios cursados o que cursa.

j) si conoce idiomas extranjeros, contabilidad, taquigrafía, máquinas de calcular o contabilidad o si posee otros conocimientos especiales afines a las tareas de la repartición a que desea ingresar.

k) detalle de los empleos anteriores y si posee certificados de los mismos.

l) si ha rendido examen con anterioridad en alguna repartición del Ministerio.

m) lugares del territorio nacional en los que estaría dispuesto a prestar servicios.

n) acreditar condiciones de absoluta moralidad y buena conducta, presentando los certificados pertinentes que se exijan.

o) grupo del personal al cual desee ingresar.

p) si desea rendir materias optativas, con indicación de ellas.

3º) Serán condiciones indispensables de admisión:

a) tener 16 años de edad como mínimo y 35 como máximo. Podrá prescindirse del requisito de la edad máxima en los casos de aspirantes a ocupar cargos profesionales, técnicos o para aquellos en que se requiera idoneidad especial.

b) para ocupar cargos de cadetes y aprendices se requerirá edad mínima de 14 años.

4º) A los fines del ingreso que establece el presente reglamento, el personal se divide en seis grupos, a saber:

a) profesional universitario.

b) técnico.

c) administrativo especializado.

d) administrativo.

e) obrero y de maestranza.

f) de servicio.

5º) El ingreso al grupo a) -profesional universitario- se realizará por concurso de antecedentes.

6º) El ingreso al grupo b) -técnico- se realizará por concurso de antecedentes, previo examen de competencia sobre su especialidad.

7º) Para el ingreso al grupo c) -administrativo especializado- se exigirá que el aspirante haya cursado el 2º año de estudios secundarios y rinda un examen de competencia sobre los conocimientos de leyes, disposiciones legales o reglamentarias y/o conocimientos especiales que deberá aplicar en el ejercicio de sus funciones.

8º) El ingreso al grupo d) -administrativo- se efectuará previo examen de competencia. Será condición indispensable el haber cursado el 2º año secundario.

9º) Para el ingreso al grupo e) -obrero y de maestranza- y al grupo f) -de servicio- se exigirá solamente que el aspirante sepa leer y escribir.

DEL EXAMEN

10º) Los exámenes serán escritos y/o prácticos y las materias a rendir tendrán carácter obligatorio u optativo.

11º) Las pruebas de examen serán tomadas y calificadas por los agentes que cada repartición designe a tales efectos.

12º) Las distintas reparticiones deberán confeccionar los programas de ingreso a las mismas, los que serán proporcionados a los aspirantes.

13º) El ingreso al grupo administrativo versará sobre las siguientes materias obligatorias de orden general:

a) aritmética (operaciones elementales y hasta 5 problemas, con un mínimo de 3, incluídos los de regla de tres simple y compuesta y de interés simple.)

b) castellano (se considerará sintaxis y redacción en la confección de una nota y ortografía, mediante la corrección de un escrito que contenga errores ortográficos).

c) mecanografía (se exigirá un mínimo de 30 palabras por minuto, con una tolerancia de hasta un cinco por ciento de errores de ortografía y escritura, sobre una copia de tres minutos de duración).

d) caligrafía (letra cursiva o cualquier otro tipo, clara y uniforme).

e) conocimiento elemental sobre la organización y funcionamiento de la repartición a que desea ingresar.

14º) Los temas y materias optativas que se rendirán si el aspirante así lo pidiere al suscribir la solicitud de ingreso, tratarán sobre:

a) mecanografía (45 palabras por minuto, con una tolerancia de hasta un cinco por ciento de errores de ortografía y escritura, sobre una copia de tres minutos de duración).

b) taquigrafía (90 palabras por minuto en cinco minutos de dictado y su correspondiente versión).

c) idiomas (redacción de una nota y traducción de un texto de 300 palabras como mínimo).

d) contabilidad (5 temas sobre: jornalización de operaciones; análisis de cuentas; conocimientos de operaciones y documentación comercial, etc.)

e) nociones de derecho (conceptos generales sobre derecho civil, comercial, penal y administrativo).

f) economía y/o finanzas (desarrollo de un tema sobre la especialidad)

g) manejo de máquinas de calcular y/o contabilidad.

h) nociones generales sobre leyes o disposiciones de carácter impositivo, administrativo, etc.

i) personal especializado para salas de entretenimientos e hipódromos: haber aprobado el curso de competencia.

15º) La calificación obtenida en las materias optativas será complementaria y se la considerará en el caso de aspirantes que hayan obtenido el mismo promedio en el examen de las materias obligatorias.

16º) Los exámenes escritos se regirán por las siguientes normas:

a) una vez comprobada la identidad de los aspirantes, se les entregará las hojas necesarias selladas y firmadas por los encargados de tomar las pruebas.

b) el tema será igual para todos los aspirantes de un mismo grupo que participen en un mismo examen, y se les hará conocer al iniciarse la prueba.

c) el examen tendrá una duración máxima de tres horas, será obligatorio la escritura con tinta y no se permitirá el uso de papel borrador para cálculos, los que deberán hacerse en el papel provisto.

d) al finalizar la prueba el examinado firmará cada una de las hojas que haya usado y devolverá las no utilizadas.

17ª) Con respecto a los aspirantes del grupo e) a que se refiere el artículo 9ª el servicio técnico correspondiente deberá producir una información sobre la idoneidad del candidato para ocupar el cargo que pretende.

18ª) Los temas de examen escrito a rendir por aspirantes en dependencias del interior, se enviarán por la vía que corresponda en sobre cerrado, sellado y firmado, el que será abierto por los encargados de tomar la prueba, en presencia de los interesados y en el momento de iniciarse la misma.

19ª) Una vez rendida la prueba, los examinadores firmarán cada una de la hojas utilizadas y las harán llegar por la vía que procediera a la repartición correspondiente, a efectos de la calificación.

20ª) La calificación de los exámenes será múmerica, de 1 a 10 puntos. Las materias comprendidas en cada examen serán calificadas por separado. Siempre que en ninguna de las materias se haya obtenido menos de 4 puntos -salvo la prueba de aritmética, que se considerará selectiva, siendo indispensable la calificación mínima de 6 puntos-, se considerará aprobado el examen cuyo promedio de calificaciones alcance a 6 puntos. Quedará eliminado el aspirante que resulte aplazado en cualquiera de las materias del examen a que deba someterse.

21º) Los que resulten aplazados no podrán rendir una nueva prueba hasta transcurrido el término de 6 meses. Si fuesen aplazados en una segunda prueba sólo podrán rendir un tercer examen después de un año. Estos plazos se reducirán a la mitad en el caso de que el aspirante no haya sido aplazado en ninguna materia pero no alcance el promedio de 6 puntos exigido por el artículo anterior.

22º) Cumplido todos los requisitos y aprobado el examen, la repartición citará al interesado a fin de obtener una impresión personal sobre las condiciones del mismo, en orden a su personalidad, cultura general, presentación, buenas maneras y facilidad de expresión. La opinión que se recoja, se consignará sucintamente por escrito.

23º) Para proveer una vacante, la autoridad superior de la repartición propondrá a los aspirantes que hayan obtenido la mejor calificación. A igual calificación se dará preferencia, en este orden, a las siguientes circunstancias:

1º) Promedio de calificación obtenido en materias optativas, siempre que fuera superior a 6 puntos.

2º) Viuda o huérfanos de ex-empleados del Ministerio, sus dependencias o reparticiones descentralizadas, prefiriéndose en igualdad de condiciones, a aquellos que hayan quedado privados de pensión o ésta sea de reducido monto.

3º) Reemplazantes de empleados titulares, siempre que su desempeño fuere o hubiere sido satisfactorio.

4º) Ex-empleados del Ministerio que hubiesen gozado de buen concepto en el desempeño de sus funciones.

5º) Hijos de empleados y ex-empleados del Ministerio.

6º) Argentinos nativos.

7º) Fecha de presentación de la solicitud de ingreso.

24º) Los exámenes de los aspirantes se efectuarán a medida que las necesidades de las reparticiones así lo exijan.

25º) Las reparticiones, en oportunidad de elevar las correspondientes propuestas de nombramientos acompañarán a las mismas, las calificaciones de los exámenes rendidos por los aspirantes.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

26º) Los aspirantes que deseen ingresar a las dependencias que componen la organización interna de este Departamento (decreto nº 3.881/953), rendirán exámenes de competencia en la Dirección General de Contabilidad y Administración.

27º) Una vez designado y producida la incorporación, el agente deberá presentar ante la repartición respectiva, toda la documentación y elementos que se le exijan.

28º) Las reparticiones podrán prescindir de las normas contenidas en la presente reglamentación, cuando el carácter de las funciones a desempeñar o causas excepcionales así lo aconsejen, o este Ministerio lo crea conveniente.

29º) La transferencia al personal administrativo y técnico de agentes que revisten como personal obrero y de maestranza y de servicio, se hará indefectiblemente mediante examen, de acuerdo con el régimen establecido precedentemente.

30º) Las condiciones exigidas por esta reglamentación se consideran básicas, pudiendo las reparticiones ampliarlas de acuerdo con la importancia de las vacantes a cubrir. como así también en mérito a la naturaleza o características de las funciones que cumplen.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 36.-

FALLECIMIENTOS - PERSONAL

Buenos Aires, 17 de febrero de 1955.-

CONSIDERANDO:

Que en el rubro "Otros Gastos" de cada uno de los Item que integran el Presupuesto de este Ministerio, ha sido prevista una partida de "Entierro y Luto", destinada principalmente a hacer frente al ceremonial de estilo que deben cumplir las distintas reparticiones en ocasión del fallecimiento de autoridades o agentes de sus dependencias;

Que en ese sentido y a fin de uniformar el temperamento a seguir en dichas circunstancias procede establecer las normas a aplicar;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1ª) En ocasión del fallecimiento de un agente, la repartición a la cual éste hubiera pertenecido, procederá a enviar nota de pésame y una ofrenda floral -corona- como testimonio de adhesión al duelo.

2ª) Déjase establecido que la norma fijada en el punto 1ª, es aplicable con respecto a todos los agentes sin distinción.

3ª) Tome nota la Dirección General de Contabilidad y Administración, comuníquese a quienes corresponda y archívese.-

RESOLUCION Nº 3.274.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 37.-

PROHIBICIONES - HOMENAJES - PETITORIOS - ACTOS POLITICOS - COLECTAS - ADHESIONES

Buenos Aires, 10 de febrero de 1956.-

Visto que durante el ex-gobierno, el personal civil del Estado fué sometido a presiones de distinta índole a efecto de obtener su adhesión o contribución en favor de las maniobras y actos políticos dirigidos a difundir y perpetuar el régimen imperante, y

CONSIDERANDO:

Que entre esos hechos cobran singular relieve los petitorios para la reforma de la Constitución de 1853 y la reelección presidencial del entonces gobernante, que debieron ser suscriptos por los empleados públicos bajo pena de ser declarado cesante o exonerados;

Que procedimientos similares se adoptaban en ocasión de los fastos políticos organizados por la dictadura, a cuyo fin y con el propósito de asegurar la concurrencia del personal, se procedía a pasar lista de asistencia en los distintos puntos de concentración;

Que igual origen tenían los aportes de dinero ue debían efectuar los agentes en oportunidad de sus promociones, los que luego eran calificados de donación e investían el carácter de un simbólico agradecimiento por la mediación que en dichas mejoras se adjudicaba a ciertas personas, cuando en definitiva las mismas eran apenas un menguado aumento de haberes, insuficientes ya para atender las necesidades mínimas de la subsistencia;

Que frente a los hechos comentados, parece paradójica la presencia del decreto nº 17.906/50 que consagra la libertad del empleado público para afiliarse a cualquier partido político legalmente reconocido y prevé la obligación de denunciar todo

acto que obstaculice o impida ese derecho;

Que procedimientos de esa naturaleza resultan vejatorios para la dignidad humana, tanto porque con ellos se conculca la voluntad que genera la libre expresión del pensamiento, cuanto por estar dirigidos a explotar las inhibiciones -humanamente justificables- propias de una dependencia económica y disciplinaria;

Que la experiencia recogida aconseja la adopción de las medidas necesarias para que, en homenaje a la tradición democrática del pueblo argentino y desagravio de los magnos principios que ilustran nuestra Carta Fundamental, se asegure al empleado público las garantías elementales de respeto a la libertad de trabajo y de pensamiento;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º) Prohíbese terminantemente a las reparticiones y dependencias de este Ministerio, la adopción de toda medida -oral o escrita- por la cual se ordene, solicite, propicie o auspicie la colaboración, contribución o adhesión del personal a actos, resoluciones o iniciativas de orden político. Asimismo no podrá, bajo ningún concepto, otorgarse autorización o consentimiento para que en jurisdicción oficial y por intermedio de organizaciones políticas o gremiales, se recabe de los agentes, en función de tales, su aporte económico, firma y/o adhesión a homenajes, petitorios o actos que invistan carácter político.

2º) Este Ministerio propiciará ante el Poder Ejecutivo, la inmediata exoneración del o los funcionarios que infrinjan lo dispuesto precedentemente.

3º) Comuníquese, publíquese y archívese en la Dirección General de Contabilidad y Administración.-

RESOLUCION Nº 7.058.-

Boletín Nº 38.-

INHABILITACIONES - PERSONAL

Buenos Aires, 6 de marzo de 1956.-

CONSIDERANDO:

Que una de las características predominantes del régimen depuesto por la Revolución Libertadora, es la subversión total de los valores éticos, con el consiguiente caos institucional, jurídico y económico que padece la República;

Que esta labor destructiva de la nacionalidad, no hubiera alcanzado la magnitud que los hechos evidencian, sin la complicidad, intervención o beneplácito de los funcionarios que prestaron activa o pasivamente su colaboración;

Que igual culpa recae sobre el disuelto Partido Peronista y sobre sus autoridades, en sus dos ramas, que sirvieron incondicionalmente a los fines de la dictadura;

Que es inprescindible adoptar medidas moralizadoras, que impidan la repetición de hechos semejantes, por los cuales la vida, el honor y el patrimonio de los argentinos quedan a merced de un tirano;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO, DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Decláranse inhabilitados a contar desde la fecha de publicación del presente Decreto-Ley, para desempeñar cargos públicos electivos, empleo en la administración pública o actuar como dirigentes de partidos políticos, en los órdenes Nacional, Provincial y Municipal, a las personas que a partir del 4 de junio de 1946 se hubieren desempeñado por el régimen depuesto en los siguientes cargos:

a) Cargos electivos en los órdenes Nacional, Provincial y Municipal;

b) Ministros y Subsecretarios del Poder Ejecutivo en el orden Nacional y Provincial;

c) Interventores Federales, Gobernadores de Territorios Nacionales, Ministros y Subsecretarios de los mismos;

d) Intendentes y Comisionados Municipales;

e) Autoridades del Partido Peronista en las ramas masculina y femenina, hasta la jerarquía de Secretario General de Unidad Básica, inclusive.

ARTICULO 2º.- La inhabilitación que establece el artículo precedente alcanza también a quienes estén procesados o condenados por torturas y negociados públicos.

ARTICULO 3º.- Quedan exceptuados de inhabilitación, aquellas personas comprendidas en el artículo 1º que durante el régimen depuesto sufrieron encarcelamiento por razones políticas.

ARTICULO 4º.- La inhabilitación a que se refieren los artículos 1º y 2º del presente Decreto-Ley se extenderá hasta la fecha que fije al efecto el futuro gobierno constitucional de la Nación.

ARTICULO 5º.- Se encomienda al Ministerio del Interior la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de las presentes disposiciones.

ARTICULO 6º.- Este Decreto-Ley será refrendado por el señor Vicepresidente Provisional de la Nación y todos los Ministros Secretarios de Estado, en Acuerdo General.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

DECRETO-LEY Nº 4.258.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 39.-

INTENDENCIA - PERSONAL - PROHIBICIONES - NORMAS - COMUNICACIONES TELEFONICAS

CIRCULAR Nº 2.592/48. (+)

Se recuerda al personal de las reparticiones y dependencias que funcionan en el edificio de este Departamento, que le está terminantemente prohibido:

a) Atender asuntos de índole privada dentro del edificio del Ministerio y en horas de servicio, como así también, detenerse en los pasillos o conversar con otros empleados o con personas extrañas;

b) Utilizar los teléfonos con fines particulares; solamente se les permitirá en los casos de enfermedad de familiares o por causas de urgencia debidamente justificadas. Las comunicaciones deberán ser breves;en caso de que las mismas se prolonguen más de lo normal, el servicio telefónico tiene la obligación de dar cuenta a la superioridad a los efectos consiguientes; (°) (·)

c) Agitar la horquilla de los aparatos al solicitar la comunicación;

d) Abrir las ventanas o puertas que dan al exterior durante las horas en que se provee de aire acondicionado al edificio, es decir, de 8 a 13 horas, horario de verano, y de 10.30 a 19 horas, en el de invierno; debiendo cuidar por su propio interés que las comunicaciones con el exterior de cualquier parte del edificio permanezcan cerradas;

e) Permanecer en mangas de camisa dentro de las oficinas o en los corredores;

f) Fumar o llevar cigarrillos encendidos cuando se halle en el interior de los ascensores;

g) Ocupar a los ordenanzas o mensajeros en cosas ajenas al servicio;

h) Debe permanecer en su oficina y no salir de ella para realizar gestiones en otras, salvo casos especiales debidamente justificados, o por expresa disposición de la Superioridad;

i) Para trasladarse entre dos pisos inmediatos debe utilizar las escaleras y no los ascensores;

j) Para no recargar el trabajo de las operadoras, al solicitar la comunicación no debe pedir por el nombre de los funcionarios o empleados, sino que debe hacerlo indicando el número correspondiente; (•)

k) Las máquinas de escribir y de calcular deben ser colocadas en las mesas especiales destinadas a tal objeto; a la terminación de su tarea se las cubrirá con las tapas o fundas respectivas; (•)

l) Al finalizar su tarea debe dejar el escritorio completamente libre de papeles, a efectos de facilitar la labor del personal de limpieza; (•)

m) Los ordenanzas que actúan en los pisos, no pueden, salvo casos especiales, abandonar sus puestos para cumplir misiones en otros; en general deben permanecer en los sitios asignados;

n) Para la remisión de papeles y expedientes debe utilizar los aparatos automáticos colocados a tal efecto en cada uno de los pisos;

o) Cuando por razones de servicios necesite entrar en el edificio durante las horas en que no funcionan las oficinas, o en días domingos o feriados, debe munirse de la tarjeta de acceso correspondiente, firmada por personal autorizado;

p) Cuando por necesidades de trabajo deba permanecer en la oficina después del horario oficial, el empleado tiene la obligación al retirarse de cerrar las ventanas, apagar las luces y dejar sin contacto toda máquina eléctrica; su incumplimiento le hará responsable de los inconvenientes, daños o perjuicios que por ello se pudiera causar al patrimonio nacional; (•)

q) Para poder salir del edificio con bultos o paquetes, es imprescindible presentar al portero la boleta de salida firmada por el respectivo Jefe;

r) Las deficiencias o fallas que se advierta en el servicio, o en los elementos de que ha sido dotado el edificio para su comodidad, deben llevarse a conocimiento de la Intendencia por intermedio del órgano correspondiente, a efectos de arbitrar las medidas que sean del caso.-

(+) Reiterada el 1 de junio de 1949

(°) Reiterada por resolución nº 4.471 del 1 de setiembre de 1955 (S.S.)

(•) Reiterada el 15 de febrero de 1956

Boletín Nª 40.-

PERSONAL - NORMAS - PROHIBICIONES - INTENDENCIA - COMUNICACIONES TELEFONICAS

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949.-

Visto que por decreto del Poder Ejecutivo se han fijado las tarifas que a partir del 1ª del mes en curso, han de regir para los Teléfonos del Estado en su diversos servicios de comunicaciones, y

CONSIDERANDO:

Que tal medida de gobierno, hace imprescindible el dictado y reiteración de normas que en forma concreta y definitiva, establezcan la prohibición de utilizar el teléfono para asuntos particulares, desterrando de esa manera una práctica que a más de perjudicar el normal servicio telefónico, ocasiona el pago de elevadas sumas en concepto de comunicaciones adicionales.

Que asimismo corresponde determinar que las comunicaciones oficiales han de tener la brevedad que su asunto requiera y que las de larga distancia sólo podrían ser solicitadas desde los aparatos de Directores, Administradores y funcionarios expresamente autorizados.

Por tanto,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1ª) Quedan terminantemente prohibidas las comunicaciones particulares, desde los teléfonos del edificio, bajo apercibimiento de suspensión como medida disciplinaria mínima. Cuando razones de excepción obliguen a ello, las comunicaciones particulares al exterior sólo podrán hacerse por

los aparatos expresamente autorizados y bajo la responsabilidad del funcionario o empleado a cargo de ese teléfono, y siempre que se justifique el motivo. (.) (°) (+)

2º) Las comunicaciones oficiales han de tener la brevedad y mesura que el asunto requiera; el darle carácter oficial a las comunicaciones particulares hará pasible al que lo haga de sanciones superiores a las señaladas en el punto 1º. (•)(°)

3º Las comunicaciones a larga distancia, sólo podrán efectuarse desde los aparatos de Directores, Administradores y funcionarios expresamente autorizados. (•)

4º) El personal que tenga a su cargo aparatos telefónicos, será directamente responsable de las transgresiones que se comprueben a lo establecido precedentemente, sin perjuicio de la medida que corresponda adoptar contra el que incurriera en falta. (+)

5º) La Intendencia practicará un censo de los aparatos instalados en el edificio de este Departamento y el o los responsables de cada uno de ellos, después de lo cual confeccionará una guía para conocimiento del servicio telefónico, el que a su vez efectuará el control de lo establecido en la presente resolución (•)

6º) Las reparticiones con oficinas establecidas fuera del edificio, dictarán medidas análogas a las de esta resolución.

7º) Remítase nota acordada a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, solicitándole quiera hacer conocer a las dependencias de la Dirección Nacional de Estadística y Censos, establecidas en el edificio de este Ministerio, las presentes disposiciones y recabe el estricto cumplimiento de las mismas.

8º) Comuníquese a quienes corresponda y archívese.-

RESOLUCION Nº 425.-

(•) Reiterado por resolución nº 4.471 del 1 de setiembre de 1955 (S.S)

(°) Reiterado el 1 de junio de 1949

(+) Reiterado el 15 de febrero de 1956

Boletín Nº 41.-

PERSONAL - PROHIBICIONES - FUNCIONARIOS PUBLICOS

Buenos Aires, 9 de marzo de 1932.-

CONSIDERANDO:

Que es propósito de este Gobierno dignificar la función pública, rodeandola de todos los prestigios necesarios, dentro de los principios de una severa ética administrativa;

Que no es admisible, bajo concepto alguno, que los profesionales llevados a desempeñar cargos en la administración pública hagan valer su ventajosa situación para obtener el pronto o favorable despacho de los asuntos particulares de cuya gestión hayan sido encargados, requiriendo o aceptando preferencias indebidas de parte de los que deban tramitarlos o resolverlos;

Que en consecuencia, se hace necesario exigir de todos los funcionarios o empleados que se hallen en las condiciones expresadas se abstengan en tales casos de hacer gravitar la situación o ascendiente derivado del cargo que desempeñan debiendo en este sentido evitar toda sospecha que pueda afectar el decoro que su misma investidura les impone;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN
ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los funcionarios o empleados de la administración pública deberán abstenerse de utilizar su influencia personal en favor de asuntos particulares, previniéndoles que toda infracción a este deber de ética administrativa dará lugar a la adopción de medidas tendientes a hacer efectivas las responsabilidades consiguientes.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.-

DECRETO Nº 328.-

Boletín Nº 42.-

PERSONAL - PROHIBICIONES - FUNCIONARIOS PUBLICOS - JUICIOS - LITIGIOS - PATROCINIO - REPRESENTANTES EN JUICIOS

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1944.-

Vista las notas del señor Procurador del Tesoro, en la que éste sugiere la conveniencia de modificar, hasta tanto se establezca un régimen general de incompatibilidades, el artículo 14 del decreto nº 13.925, de 7 de diciembre de 1932, de creación y reglamentación de la "Oficina de Asuntos Fiscales", por el cual se prohibe a los funcionarios y empleados de la administración pública representar o patrocinar a litigantes contra la Nación e intervenir en gestiones extrajudiciales en juicios en que la Nación sea parte, y

CONSIDERANDO:

Que la modificación propuesta consiste en comprender los casos de juicios universales o la defensa de parientes por afinidad, entre las excepciones que el citado artículo solamente establece para los casos de defensa de intereses personales del empleado o de sus parientes consanguíneos;

Que, como lo maniesta el Señor Procurador del Tesoro, no debe ser tenida por incompatible la actuación profesional de los funcionarios o empleados en un juicio universal, aún cuando el mismo Fisco pueda reclamar un crédito o tener interés como tercerista, o si defiende intereses de los parientes por afinidad, por cuanto éstos están más cerca en efecto y grado, en muchos casos, que algunos de los consaguíneos;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 14 del decreto nº 13.925,

de 7 de diciembre de 1932, el que tendrá la siguiente redacción:

"Art. 14.- Los funcionarios y empleados de la administración pública, no podrán, bajo pena de destitución, representar o patrocinar a litigantes contra la Nación, e intervenir en gestiones judiciales o extra judiciales en asuntos en que la Nación sea parte, salvo que se trate de juicios universales o de la defensa de intereses personales del empleado, de su conyuge o de sus parientes consanguíneos, o por afinidad en primer grado".

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los Señores Ministros de Justicia e Instrucción Pública y de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Registro Nacional.

DECRETO Nº 33.036.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 43.-

RECURSO JERARQUICO

Buenos Aires, 28 de marzo de 1944.-

CONSIDERANDO:

Que es necesario dar la mayor amplitud y certeza a las garantías jurisdiccionales en la esfera de la administración pública dentro del sistema constitucional tanto para los administrados como para los funcionarios públicos;

Que al ejercer el Poder Administrador el contralor de legitimidad respecto de los actos de cualquier naturaleza emanados de los órganos administrativos centralizados o descentralizados, no afecta la competencia que ellos tienen para resolver originariamente;

Que la revisión fundada en consideraciones de equidad, moralidad y justicia sobre los actos administrativos, tiende lógicamente a evitar en lo posible acciones judiciales contra la Nación;

Que es conveniente para la mejor realización de los fines indicados y los considerandos que preceden, simplificar los trámites, ampliar algunas disposiciones de los decretos del 7 de abril de 1933, 7 de noviembre de 1934 y 7 de abril de 1939 y refundir en un sólo cuerpo los preceptos vigentes.

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA,

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Procederá el recurso jerárquico contra las decisiones dictadas por funcionarios públicos, órganos centralizados y entidades autárquicas, cuando ellas lesionen derechos o intereses legítimos de administrados, funcionarios o empleados. No se admitirá recurso jerárquico contra las medidas preparatorias de decisiones administrativas, ni contra los informes ad-

ministrativos,ni contra los actos de las entidades autárquicas cuando éstas hubiesen obrado como personas jurídicas civiles.

ARTICULO 2º.- Todo recurso jerárquico promovido ante el Poder Ejecutivo se presentará por escrito ante el Ministerio respectivo, de acuerdo con las siguientes formalidades:

1.- Nombre y estado civil del recurrente, constitución del domicilio en la Capital federal y expresión del domicilio real;

2.- Citas o documentos que acrediten legalmente la identidad del recurrente;

3.- Determinación del recurso y afirmación de haberse solicitado revocatoria y haber sido ésta denegada por la autoridad superior del funcionario u órgano administrativo del cual emanó la resolución recurrida o de provenir la resolución directamente de la misma autoridad mencionada.

ARTICULO 3º.- Se entenderá, para este trámite, que ha sido denegado el pedido de revocatoria cuando no fuese resuelto dentro del término de diez días a contar desde su presentación.

ARTICULO 4º.- El recurso jerárquico deberá ser promovido en el término de quince días, a partir de la notificación de la denegatoria o vencido el plazo de diez días a que se refiere el artículo anterior.

ARTICULO 5º.- El recurrente podrá actuar por persona autorizada mediante mandato regular.

El menor adulto podrá recurrir con autorización de su padre, tutor o guardador; pero si no tuviera autorización podrá presentarse aduciendo el motivo de la falta de ese requisito, y el Ministerio decidirá si debe darse entrada al recurso.

ARTICULO 6º.- La Mesa de Entradas dará al recurrente comprobantes de la presentación.

El Jefe de la Mesa de Entradas podrá exigir al recurrente la ratificación de su firma cuando lo juzgue necesario para probar la identidad personal.

ARTICULO 7º.- Recibido el escrito, el Ministro lo proveerá solicitando de la autoridad administrativa que dictó la resolución objeto del recurso, el envío de las respectivas actuacio

nes y antecedentes, fijando para ello un término perentorio.
ARTICULO 8º.- Si a juicio del Ministro los elementos probatorios no fuesen suficientes para dictar decisión definitiva, ordenará a petición de parte o de oficio, la presentación de la prueba que estime pertinente.

Producida la prueba se dará vista al recurrente y a la autoridad administrativa interesada, para que presenten memorial o para que aduzcan, para una sola vez nuevos motivos en favor de la admisión del recurso, o de su rechazo.
ARTICULO 9º.- De las informaciones sobre concepto o legajo personal se dará vista al interesado, quien podrá formular sus observaciones en el mismo expediente o directamente ante el Ministerio. Se omitirá la vista si se tratase de información reservada.
ARTICULO 10º.- Las Direcciones Generales, los Inspectores Generales y los Directores Generales de Administración producirán informes sobre todo asunto que corresponda a su respectiva oficina. Producidas las pruebas y presentados los informes y las alegaciones, el Subsecretario formulará en dictamen las conclusiones sobre el asunto.
ARTICULO 11º.- En todo recurso jerárquico en que haya interés fiscal, se dará vista al Procurador del Tesoro.
ARTICULO 12º.- El procurador del Tesoro dictaminará en ls resoluciones condenatorias de la Contaduría General, contra las cuales se interponga recurso jerárquico, pero el recurrente deberá previamente efectuar el pago o consignación de acuerdo con lo establecido en el art. 76 de la Ley de Contabilidad.
ARTICULO 13º.- La decisión definitiva se dictará en decreto o resolución, según corresponda, de acuerdo con la Constitución (art. 89), y la Ley Orgánica de los Ministerios. Esta decisión será siempre ejecutoria y se notificará en el término de tres días, al recurrente y al órgano administrativo que deba hacer la cumplir. El Poder Ejecutivo puede, de oficio o a petición de parte, suspender o diferir la ejecución de la decisión, si un interés fundado de orden administrativo lo justifica.
ARTICULO 14º.- Con excepción de las normas de procedimientos establecidas en las leyes y reglamentos para casos especiales,

deróganse las disposiciones que se opongan al presente decreto.

ARTICULO 15º.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 7.520.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 44.-

RECURSO JERARQUICO

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1949.-

Visto la necesidad de complementar las disposiciones que sobre Recurso Jerárquico establece el Acuerdo General de Ministros Nº 7.520 de fecha 28 de Marzo de 1944, y

CONSIDERANDO:

Que dicho decreto no prevé el plazo dentro del cual debe interponerse el recurso de revocatoria, trayendo como consecuencia la actualización extemporánea de expedientes que han estado paralizados, a veces durante años, con el consiguiente recargo de las tareas de despacho, demora de aquellos y, en muchos casos, la pérdida de pruebas y testimonios que al tiempo de la resolución que se recurre pudieran haber existido;

Que, por otra parte, es propósito, repetidamente enunciado, del Gobierno de la Nación, agilizar el trámite administrativo, haciendo de él un instrumento eficiente y apto para llenar sus finalidades;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA,

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- El recurso de revocatoria, al cual se refiere el artículo 2º, apartado 3º, primer párrafo, del Decreto número 7.520/44, deberá ser interpuesto dentro de los quince días de la notificación de la resolución que se recurra.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

DECRETO Nº 21.680.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletin Nº 45.-

RECURSO JERARQUICO

Buenos Aires, 25 de setiembre de 1951.-

Visto la necesidad de completar las disposiciones de carácter procesal que sobre Recurso Jerarquico y Recurso de Revocatoria establecen los Decretos numeros 7.520 y 21.680, dictados en Acuerdo General de Ministros de fecha 28 de marzo de 1944 y 6 de setiembre de 1949, respectivamente, y,

CONSIDERANDO:

Que como dichos decretos no prevén el modo de contar los intervalos del derecho, corresponde computar los días feriados, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Civil;

Que la práctica ha demostrado la conveniencia de adoptar para los recursos jerárquicos y de revocatoria los mismos principios de derecho procesal que han presidido la elaboración de normas legislativas y reglamentarias sobre recursos administrativos, en cuanto limitan el cómputo de los plazos a días hábiles;

Que corresponde dejar asimismo determinado que por días hábiles cabe entender aquéllos en que funciona la Administración Nacional;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA,

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Para computar los plazos a que se refiere el Decreto número 7.520/44 y su complementario número 21.680/49, sólo se contarán los días hábiles administrativos.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

DECRETO Nº 19.041.-

De lo expuesto fácilmente se advierte que lo que se persigue en realidad es una modificación a la decisión judicial, pues no otra cosa implicaría reconocer las pretensiones del recurrente.

La supuesta infracción denunciada ha sido desestimada por la Justicia Federal y su decisión ha quedado firme y adquirido por ello la autoridad de la cosa juzgada que es inconmovible no siendo por consiguiente revisible por ninguna vía que se intente. De ella debe conformarse el recurrente y aceptar la verdad que la misma representa.

No es inoficioso destacar la perturbación de todo orden que significa volver en cualquier oportunidad sobre causas definitivamente juzgadas, intentando recursos que la ley no autoriza contra esas decisiones. Reconocerlo es anular la estabilidad de los derechos, alterar el orden jurídico y la independencia de los poderes.

En ese orden de ideas el recurso jerárquico no corresponde, ya que falta la escala jerárquica entre el órgano que dictó la resolución y el órgano cuya intervención se solicita, condición indispensable para que aquél recurso proceda; en otros términos presupone que el órgano ante el cual se recurre ejerza una función de contralor (Legal o administrativa), que en el caso no existe.

Por otra parte, si lo que busca el peticionante es que se modifique o revoque la resolución de la Aduana en cuanto dió por finiquitadas las actuaciones ordenadas para conocer la forma y condiciones en que se verificó el despacho observado, tampoco puede progresar el recurso, pues está ausente el interés del recurrente en el resultado de esa investigación, vale decir, carece de personería para considerarse parte en ella, y no debe suponer el nombrado que por habérselo notificado de la resolución lo fué en el carácter de parte interesada.

En esa inteligencia estimo que debe desestimarse el recurso intentado.

Agosto 31 de 1946.-

BERNARDO VELAR DE IRIGOYEN
Procurador del Tesoro
de la Nación

Buenos Aires, Setiembre 14 de 1946.-

VISTOS:

Por los fundamentos del precedente dictámen del señor Procurador del Tesoro, desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Manuel A. de Robles contra la resolución recaída en el sumario 167-R-1943, instruído por la Aduana de la Capital, que no concede ni la apelación deducida en contra de la misma ni acuerda el recurso jerárquico en contra de las anteriores.

Publíquese con copia del aludido dictámen y pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos.-

Fdo. CEREIJO

RESOLUCION Nº 487.-

Boletín Nº 47.-

RECURSO JERARQUICO

Buenos Aires, 24 de enero de 1947.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el señor Roberto I. Lascano interpone recurso jerárquico contra la resolución de la Aduana de la Capital que denegó su pedido de que se dejara sin efecto la disposición recaída en solicitud Nº 84.611 de 1946 de esa dependencia, por la que se resolvió suspender la ejecución del fallo dictado en el sumario Nº 41-S-1942, en atención a que siendo dos las firmas condenadas en dicha sentencia, y habiendo sido la misma apelada ante la Justicia Federal por uno de los codenunciados, correspondía así resolver de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1.072 de las Ordenanzas de Aduana;

Que el artículo 1.072 de la Ley 810 expresa: "Cuando de la resolución administrativa sólo uno o algunos de los condenados ocurrieran a la Justicia Nacional a entablar la contención, se suspenderán los efectos de la resolución administrativa, no sólo respecto a los recurrentes, sino a todos los penados, hasta que se concluya el juicio iniciado";

Que en el presente caso la Aduana de la Capital ha ajustado su procedimiento a lo que determina la cláusula citada;

Que del examen de los antecedentes agregados no surge, como lo sostiene el interesado, que se trata de dos infracciones independientes juzgadas en un solo sumario, supuesto en el cual la suspensión de los efectos de la sentencia no tendría motivo;

Que, por otra parte, cabe señalar que el artículo 1.073 de las citadas Ordenanzas, contempla el caso de que si la sentencia judicial absuelva o aminore la pena que les impuso la Administración declarando no haber habido hecho punible o haberse cometido éste con circunstancias atenuantes para todos los culpables, la absolución o disminución de la pena alcanzará

a los demás penados que no recurrieron a la Justicia Nacional, salvo que la absolucion o disminucion de la pena, fuera por circunstancias especiales a cada uno de los recurrentes, en cuyo caso no alcanzará a los demás penados;

Que por consiguiente y hasta tanto no se pronuncie la Justicia en el recurso deducido no será posible conocer si contempla o no la situacion de todos los condenados;

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

Desestimase el recurso interpuesto.

Pase a la Direccion General de Aduanas a sus efectos.-

RESOLUCION Nª 26.-

RECURSO JERARQUICO

Expediente Nº 8.716 - 1951
S/medida adoptada por Comisión contra el Agio.
MINISTERIO DE HACIENDA

Señor Ministro de Hacienda:

I.- Por Disposicion Nº 3 de fecha enero 5 de 1951, el Presidente de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos caducó "ad referendum" de V.E., el reparto correspondiente a la concesión nº 1846, acordada a nombre de Salomón Kerbal, por una asignación de dos decenas. Funda la caducidad en que el agente, según informe de la Dirección Nacional de Precios y Abastecimientos, fué procesado con motivo de una infracción a las leyes represivas del agio, incidiendo -en su concepto- en las condiciones de honorabilidad que deben poseer los concesionarios de lotería, según el art.7º,inc. 5º) apartado b) del Reglamento General (fs.8)

El interesado interpuso contra dicha disposición recurso de revocatoria (fs. 11/15). El señor Presidente de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos señala que el causante presentó el mencionado recurso al día siguiente de fenecer el plazo de cinco días que establece el art.20 del decreto nº 6968/48, lo que así se dispuso a fs. 24.

II.- El Decreto nº 6968/48, que fija el procedimiento a seguirse en el otorgamiento de concesiones para la venta de billetes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, preceptúa en su artículo 20 que contra las sanciones de cualquier grado que se dicten podrán los agentes que se consideren injustamente afectados deducir recurso de reconsideración ante la propia Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, dentro de los cinco días de notificados, si se trata de concesionarios de la Capital Federal y localidades

comprendidas dentro de un radio de 70 kilómetros o de diez dias si lo son del país.

Tal precepto no prevé el modo de computar el plazo de cinco dias, esto es, si se deben o no incluir los días feriados. Por decreto nº 10.041 de fecha 25 de setiembre de 1951, el Poder Ejecutivo, en Acuerdo General de Ministros, resolvió la cuestión, al declarar que para computar los plazos previstos en el decreto nº 7.520/44 y su complementario nº 21.680.49 -que tampoco contenían normas expresas acerca del modo de efectuar los cómputos - solo se tomarían en cuenta los días hábiles administrativos.

Segun resulta de lo informado a fs. 20, la Disposición nº 3 de fs. 8 fué notificada el 11 de enero de 1951 y el escrito de revocatoria, según se infiere del cargo estampado en el escrito respectivo, fué presentado el 18 del mismo mes y año. Como el día 11 de enero (fecha de la notificación) no se lo computa en el plazo concedido para interponer el recurso de reconsideración (art.24 del Código Civil) y como, a su vez, los días 12 y 13 no fueron hábiles administrativos, debe concluirse que el recurso ha sido deducido en término.

Por lo tanto, en el presente caso, soy de opinión que corresponde devolver estas actuaciones a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos para que substancie el recurso, se expida con respecto a la cuestión suscitada y resuelta que sea, de ejercitarse el recurso jerárquico contemplado en el art. 20 in fine del decreto nº 6968/48, me pronunciaré el respecto, si el señor Ministro lo requiere.

Enero 16 de 1952

ENRIQUE C. PETRACHI
Procurador del Tesoro de la Nación

Boletín Nº 49.-

RECURSO JERARQUICO

Expediente Nº 71933/55.- MINISTERIO DE HACIENDA - L,B.N. C.- Caducidad de concesión. - Recurso Jerárquico.-

///ñor Director General:

Por estas actuaciones, el señor Juan Carlos Etcheverry interpone el recurso jerárquico que prevé el artículo 27 del decreto nº 12.286/54, contra la resolución nº 3.603/55, (fs.5), invocando, entre otras, las siguientes causales: a) que de acuerdo con lo determinado por el artículo 25, inc.e) del decreto nº 12.286/54, la no renovación del contrato sólo procede en caso de inconducta comercial o en las relaciones con la Lotería; b) que con respecto al primer punto, afirma no haber sido jamás objeto de sanción alguna, sea en el orden nacional, provincial o municipal y gozar de gran concepto comercial en la zona; c) que el proceso judicial en el que se ha visto envuelto es obra de intereses particulares para perjudicarlo y prueba de ello es que la justicia "se ha encargado de reparar el error sobreseyéndolo definitivamente sin que el proceso afecte su buen nombre y honor"; d) que en cuanto al segundo supuesto manifiesta que jamás ha sido sancionado por parte de la repartición y en cambio se ha caracterizado por ser "fiel cumplidor de las disposiciones reglamentarias".

Analizado el trámite seguido por el asunto en debate y frente a la consideración del recurso jerárquico interpuesto, este Departamento estima que el mismo debe ser rechazado por no correspomder. En efecto: el recurso jerárquico es una acción promovida contra un pronunciamiento de un agente u órgano administrativo, ante su superior jerárquico, para que éste modifique o revoque ese acto, por considerar que el mismo le-

siona un derecho o interés legítimo del recurrente e importa una transgresión de normas legales o reglamentarias que imperan en la actividad administrativa. Es decir que, en principio, para que exista lugar al recurso jerárquico, debe invocarse la lesión de ese derecho o interés legítimo (art. 1º del decreto nº 7.520/44).

En el caso de autos, en cambio, el recurrente no puede ofrecer esas causales, toda vez que la medida de que se agravia (res. 153 de 6-11-950), y contra la cual opone sucesivamente los recursos de reconsideración y jerárquico, dispuso la no renovación del contrato concesión, luego que éste hubo vencido (30 de junio de 1950 - fs. 140). Es decir, que no existió, como se observa, ninguna sanción o acto que afectara un derecho subjetivo del recurrente, sino simplemente, la ejecución de una facultad que la Administración en ningún momento había resignado. En ese sentido cabe recordar que la renovación de los contratos, salvo que se hubiera pactado expresamente un régimen especial, es un acto voluntario que nace de la conveniencia o interés de las partes y siempre que exista acuerdo entre ellas. En el caso de la concesión para la venta de billetes de lotería, aún cuando en la práctica es usual que, salvo una situación de fuerza mayor o inconducta comercial o con la repartición, de parte del concesionario (art. 25, inc. e) del decreto 12.286/54), éste continúa en la explotación de los servicios y el contrato se renueva automáticamente, ello obedece a razones de organización administrativa, pero en ningún momento puede ser interpretada como renuncia a la libertad de pactar.

Por otra parte, el texto del artículo 25, del decreto ya mencionado, cuando señala las sanciones a que pueden hacerse pasibles los concesionarios, e incluye entre ellas, inc. e), la "no renovación del contrato concesión", no debe ser objeto de interpretación literal y deducirse de ella que, los únicos supuestos en que cabe ser aplicada la medida de referencia, son la inconducta comercial o en las relaciones del concesionario con la Lotería. Sostiene en cambio este Departamento que, efectivamente, sólo esas causales determinan la no renovación del contrato como sanción, pero al margen de

ellas, es evidente que nada puede impedir que la Administración resuelva no renovar el contrato si razones de confianza en el concesionario ó factores que hacen a su interés o conveniencia, le aconsejan proceder en esa forma. En este caso, entonces, no nos hallamos frente a un acto emanado de una facultad reglada, sino puramente discrecional que, por otra parte, en cuanto a su fondo, no lesiona el derecho del concesionario; y no existiendo vicio de forma o incompetencia en el dictado de la medida, que la hagan recurrible, este Departamento considera inaplicables las disposiciones del artículo 27 del decreto nº 12.286/54, sólo referido a las medidas que tengan carácter punitivo. Por lo expuesto se estima que el recurso jerárquico interpuesto por el señor Etcheverry es improcedente en virtud de lo cual se aconseja su rechazo, sin perjuicio de que, si esa Dirección General lo estimara conveniente a fin de mejor proveer, fuera solicitada la opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Dpto. de Administración de la D.G.C.y A., 4 de agosto de 1955.-

5 de agosto de 1955.-

Pase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, encareciéndole quiera servirse emitir su opinión.

Director General de
Contabilidad y Administración

///ñor Ministro:

1.- Se requiere el dictamen de esta Dirección a propósito de lo expuesto por el Dpto. de Administración en su informe de fs. 147/9, motivado por el escrito de fs. 141/3, de 11/5/955, donde Juan Carlos Etcheverry "viene a interponer recurso jerárquico ante el Ministerio a su digno cargo, a raíz de la medida adoptada por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos al disponer la no renovación de su contrato-concesión..."

2.- Se han adoptado en las presentes actuaciones, en relación con este asunto, las siguientes resoluciones:

a) Resolución de 17/9/949, dictada por la Presidencia de la Lotería (fs. 16). Suspende la entrega del reparto correspondiente al concesionario oficial nº 1691, Juan C. Etcheverry, con una adjudicación de 20 decenas, hasta tanto se aclare debidamente su situación. Se funda en las denuncias telegráficas, formuladas por la Policía de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, sobre expendio de "quinielas" y loterías prohibidas en el local de la agencia de Etcheverry, cuya detención se había solicitado de la Policía de esta Capital (fs. 13 y 15).

b) Resolución de 6.11.950, dictada por el Ministro de Hacienda (Res. 157/50, fs. 4). Dispone no renovar el contrato-concesión correspondiente al concesionario oficial nº 1691, Juan C. Etcheverry. Establece, también, que el depósito de garantía será retenido por la Lotería y que la situación del mismo quedará sujeta a lo que se resuelva en definitiva con respecto al asunto planteado en las presentes actuaciones.

Se funda en la necesidad de regularizar la adjudicación de las decenas en cuestión, en la circunstancia de no haberse firmado el contrato-concesión y en que, no obstante el tiempo transcurrido, no se ha dictado aún sentencia definitiva en la causa criminal iniciada contra Etcheverry (fs. 42). Fueron, además, elementos de juicio decisivos el informe de la Policía de Comodoro Rivadavia (fs. 28) y la comunicación de carácter "reservado" de fs. 22, enviada por el entonces Gobernador Militar de Comodoro Rivadavia, General de Brigada, don Julio A. Lagos, que solicitó se dejara sin efecto la concesión oficial otorgada a Etcheverry, por haberse establecido "en forma concluyente" que "tenía montada y bien organizada la explotación de juegos prohibidos", realizando "la venta de quinielas con corredores levantadores, reparto al por mayor y ventas al detalle de lotería de Montevideo y Santa Fé". "Aunque en

el mencionado procedimiento -se dice igualmente a fs. 22- no pudieron ser encontradas pruebas terminantes, las autoridades policiales tienen conocimiento de que también se pasaban redoblonas de las carreras de caballos que se efectúan en Buenos Aires, San Isidro y La Plata", "Es el concesionario nombrado -se agrega- elemento de pésimos antecedentes morales y que entre la población honesta y laboriosa de la ciudad está conceptuado como pernicioso y de mal vivir". Señala por todo ello la necesidad de una medida ejemplarizadora, "a efectos de evitar que dicho individuo continúe con sus actividades ilícitas".

c) Resolución de 24/3/54, dictada por el Ministerio de Hacienda (Res. 2559/54, fs. 120). Considera "que con referencia al concesionario nº 1691, teniendo en cuenta los descargos por él aportados y demás constancias obrantes, se estima necesario -antes de adoptar una medida definitiva y a fin de obrar con la mayor justicia-, requerir de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos un estudio e informe detallado del asunto, en el cual se fundamenten asimismo las razones que apoyan lo propuesto a fs. 113 por dicha repartición".

Obedecía esta decisión a que Etcheverry había sido absuelto de culpa y cargo en la causa criminal, según la sentencia de primera instancia (v.testimonio de fs.54), a que dicha causa había terminado luego por sobreseimiento definitivo, en virtud de haberse operado la extinción de la acción penal, por prescripción (v. testimonio de fs. 95), y a que, según el dictamen de la Procuración del Tesoro de fs. 115/117, el caso era, en tales condiciones, "de la apreciación discrecional de V.E.", siendo "el grado de confianza que pudiera merecer el concesionario sobreseído lo que determinaría la subsistencia o no de la concesión".

d) Resolución de 31/8/54, dictada por el Ministro de Hacienda (Res. nº 3707/54, fs. 125). Confirma la no renovación del contrato-concesión correspondiente al concesionario oficial nº 1691, Juan C. Etcheverry, dispuesta por la

resolución ministerial nº 157/50, en mérito a los nuevos antecedentes aportados por la Lotería.

Consisten tales antecedentes en el informe "confidencial" y planilla prontuarial de Etcheverry, sumistrados, a pedido de aquella repartición para obtener mayores elementos de júcio, por la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia. Corren, como podrá verse, a fs. 124, bajo sobre cerrado.

e) Resolución 13/4/55, dictada por el Ministro de Hacienda (Res. 3603/55, fs. 5 del exp. -agregado- nº 71.091/55). No hace lugar al pedido de reconsideración formulado por Etcheverry respecto de la medida adoptada por la resolución ministerial anterior, nº 3707/54. Se funda en que no existe vicio de fondo o de forma que haga su nulidad y en que el causante no aporta nuevos elementos de jucio que aconsejen rever lo actuado.

3.- El "recurso jerárquico" que se interpone por Etcheverry en el escrito de fs. 141/3 se refiere erróneamente "a la medida adoptada por la Loteria de Beneficencia Nacional y Casinos, al disponer la no renovación de su contrato-concesion", cuando, como se ha visto, tal medida se adoptó por resoluciones ministeriales (Res. 157/50, fs. 44, confirmada por Res. 3707.54, fs. 125).

El dec. 12.286/54 (arts. 25 y 26) faculta a la Loteria para aplicar a los concesionarios determinadas sanciones, así como para imponer las sanciones disciplinarias que estime pertinente, ante la comisión de hechos no previstos en el decreto, cuando por su gravedad o alcance sea necesaria su punición. Contra las resoluciones de la Loteria podrá deducirse: a) recurso de reconsideración ante la propia Lotería; b) recurso jerárquico ante el Ministerio de Hacienda, si el pedido de reconsideración fuere denegado (ibid, art. 27).

Cuando la resolución administrativa emana, como en el caso, directamente del Ministerio de Hacienda, y se adopta en el ejercicio de atribuciones privadas, (dec. 13.832/50, art. 7º) no procede contra ella el "recurso jerárquico" (arg.dec. 7520/44, art. 13).

Pero cabe aún otra consideración. La caducidad de la concesión otorgada a Etcheverry o la no renovación del respectivo contrato-concesión no ha sido adoptada en el presente caso por vía de sanción. Se trata de una concesión precaria, por tiempo determinado (un año de duración, con opción a otro más: dec. 12.286/54, art. 5º) y es de suyo evidente que la Administración no se halla obligada a la indefinida renovación del contrato y puede decidir no renovarlo cuando, hallándose vencido, no lo crea conveniente por razones de orden administrativo que son de su libre y discrecional apreciación, sin que tal decisión pueda dar lugar a reclamación alguna por parte del interesado. La caducidad como sanción (dec. 12.286/54, art. 25, inc. f) por haber cometido el concesionario determinadas infracciones es, en cambio, el medio idóneo para la rescisión del contrato antes de su vencimiento.

El último contrato suscripto con Etcheverry venció el 30 de junio de 1950 (fs. 146) y es por ello que el Ministerio pudo resolver válidamente, en 6 de noviembre de 1950 (Res. 157/50, fs. 44), que no se lo renovara, y confirmar tal decisión en 31 de agosto de 1954 (Res. 3707/54, fs. 125), sin dar a la medida el carácter de una "sanción", sino el de una decisión fundada en razones de buen orden administrativo, en la situación de duda planteada por el resultado de la causa criminal y en los antecedentes de Etcheverry a que se refieren especialmente los informes "confidenciales" de fs. 22 y 124, suministrados por la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia.

Por lo demás y en cuanto hace concretamente al resultado de la cusa criminal seguida contra Etcheverry (absolución en primera instancia y sobreseimiento definitivo en segunda instancia por haberse operado la prescripción de la acción penal), ha dicho ya la Procuración del Tesoro que, en casos como el de autos, "como la caducidad de la concesión no constituye una medida penal, sino un procedimiento administrativo que da término a una concesión de suyo precaria, no podría invocarse la regla del art. 13 del Código de Procedimientos en lo Criminal, en virtud de la cual en caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable al procesado" (v. fs. 115).

A juicio de esta Dirección, el hecho de que dicha norma haya sido incluída en la C.N. (art. 29), no cambia la naturaleza de la misma, pues de su simple lectura "surge claro que ella contempla el caso de duda en la secuela del proceso"(v. fs. 115). Fuera de éste, la resolución administrativa puede inclinarse en uno u otro sentido, según sea el grado de confianza que pudiera merecer el concesionario así sobreseído y el criterio personal del funcionario a quien incumbe la responsabilidad de resolver el caso.

4.- Por estas consideraciones, opina esta Dirección que cabe desestimar por improcedente el "recurso jerárquico" que se intenta en el escrito de fs. 141/3. No obstante, por no tratarse en el caso de actos jurisdiccionales, sino de actos administrativos no revestidos de la autoridad de la cosa juzgada y sujetos, por ello, a revisión por el propio órgano que los dictó, V.E. podría, a su vez, rever las decisiones anteriores y revocarlas por contrario imperio, si así lo considerara pertinente en el ejercicio de sus atribuciones privativas y según fuera la discrecional apreciación de V.E. respecto de las circunstancias del caso y de la mayor o menor equidad de las resoluciones adoptadas, cuestión que es, por la subjetividad de su índole, ajena a la competencia de esta Dirección.

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 19 diciembre 1955.-

CRISTIAN M. GIMENEZ DEMARIA

Director General

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1955

Visto el expediente nº 71.933/55, por el cual el señor Juan Carlos Etcheverry interpone recurso jerárquico contra la medida que dispuso la no renovación de su contrato concesión para la venta de billetes de lotería (fs. 141/3), y

CONSIDERANDO:

Que por resolución nº 157/50 (fs. 44), confirmada por la nº 3.707/54 (fs. 125), se dispuso la no renovación del contrato concesión celebrado con el causante, cuyo vencimiento se había operado el 30 de junio de 1950 (ver informe de fs.140);

Que posteriormente, por resolución nº 3.603/55 (fs. 5 expediente nº 71.091/55), se deniega el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Etcheverry, en razón de no aportar éste nuevos elementos de juicio que aconsejaran rever la medida aplicada y carecer ésta de vicios de fondo o forma que hicieran su nulidad;

Que conforme la doctrina imperante y lo establecido por el artículo 1 del decreto nº 7.520/44, el recurso jerárquico es una acción promovida contra un pronunciamiento de un agente u órgano administrativo, ante su superior jerárquico, para que éste modifique o revoque ese acto, por considerar que el mismo lesiona un derecho o interés legítimo del recurrente e importa una trasgresión de normas legales o reglamentarias;

Que en este orden de ideas y a los efectos de considerar la naturaleza y procedencia de la gestión sometida a juicio en la oportunidad, cabe consignar en primer término que la no renovación del contrato invocado fué dispuesta en fecha 6 de noviembre de 1950 (res. nº 157/50), es decir, luego que éste hubo vencido (30/6/50);

Que la venta de billetes de lotería se autoriza por una concesión precaria de un año de duración con opción a otro más, y en razón de ello es evidente que la Administración no se halla obligada a la indefinida renovación del contrato y puede decidir no hacerlo cuando, hallándose vencido, lo crea inconveniente por razones de orden administrativo que son de su exclusivo gobierno;

Que de lo expresado precedentemente surge que no ha existido sanción o acto que afectara un derecho subjetivo del recurrente, sino simplemente la ejecución de una facultad que el Estado en ningún momento habia resignado;

Que en ese sentido cabe agregar que aún cuando en la práctica es usual que, salvo una situación de fuerza mayor o inconducta comercial o con la repartición de parte del concesio

nario (art. 25, inc. e) del decreto nº 12.286/54), éste continúa en la explotación de los servicios y el contrato se renueva automáticamente, ello obedece a razones de organización interna, que jamás pueden ser interpretadas como renuncia a la libertad de pactar;

Que si bien la no renovación de un contrato concesión constituye una de las sanciones a que puede hacerse pasible el agente, no cabe deducir de ello que solamente procede esa medida cuando hubieran existido algunas de las causales previstas por el artículo 25 del recordado decreto (inconducta comercial o en las relaciones con la repartición); ante bien corresponde interpretar que esas circunstancias son las únicas que determinan que la no renovación del contrato tenga efectos punitivos, pero al margen de ello, es evidente, nada puede impedir que la Administración resuelva no prorrogar el convenio si razones de confianza o factores que hacen a su interés o conveniencia, le aconsejan proceder en esa forma;

Que como surge de lo expuesto, el acto de que se trata, emanado de una facultad discrecional, no ha causado agravio al derecho del concesionario, no contiene vicio de forma o de legitimidad que lo hagan recurrible, razón por la cual resulta improcedente el recurso jerárquico deducido en esta actuaciones en los términos del decreto nº 7.520/44 y artículo 27 del decreto nº 12.286/54;

Por ello y de conformidad con lo manifestado por el Departamento de Administración de la Dirección General de Contabilidad y Administración a fs. 147/9 y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos a fs. 150/3,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º) Desestímase por improcedente el recurso jerárquico promovido en estas actuaciones por el señor Juan Carlos Etcheverry.

2º) Tome nota la Dirección General de Contabilidad y Administración y pase a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos para su conocimiento y notificación al interesado, previa reposición del sellado de ley correspondiente.-

RESOLUCION Nº 5.460.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 50.-

RECURSO JERARQUICO

Expediente Nº 12.166/54.- MINISTERIO DE HACIENDA - Recurso Jerárquico.- Impugna Facultad Ministerial.-

M E M O R A N D U M

Las presentes actuaciones se relacionan con el recurso jerárquico interpuesto por el Jefe de División de la Dirección General de Contribuciones e Impuestos, don ARMANDO N. GALLARDO, en su carácter de afiliado de Obra Social, respecto de la resolución de aquella dependencia por la que se deniega su solicitud de reintegro de gastos ocasionados por una intervención quirúrgica que le fuera practicada en un instituto particular.

Cumplidos los extremos exigidos por el decreto nº 7520/944 que regla el recurso jerárquico, este Ministerio, por resolución nº 3.383/954, rechazó el recurso confirmando la medida adoptada por la Dirección de Obra Social, a que se hace referencia precedentemente.

Al notificarse de la decisión recaída en su presentación, el interesado impugna la legitimidad del acto, por entender que el mismo debió ser dictado por decreto del P.E. y no por resolución ministerial.

Se plantea así una cuestión sobre la competencia del señor Ministro para dar resolución definitiva al recurso jerárquico interpuesto.

El recurso jerárquico es una reclamación promovida contra un acto o decisión de un agente administrativo, ante el superior jerarquico, para que este modifique o revoque esa decision, por considerar que lesiona un derecho o interés legitimo del recurrente, e implica una transgresión de normas legales que imperan en la actividad administrativa" (Bielsa-El - Recurso Jerarquico-pag. 34/35-ed.1940).

Según el articulo 13° del decreto nº 7.520/944, la decision definitiva del recurso jerarquico podrá ser dictada por "decreto" o "resolución", segun corresponda, de acuerdo con el articulo 83° de la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de los Ministerios.

El P.E. es unipersonal y el Presidente de la Nacion es el Jefe Supremo de la Administración Nacional conforme lo establece nuestra Carta Magna. Sin embargo esto no significa - que el mismo deberá cumplir esa funcion directa y personalmente. Ello provocaria una enorme congestión en su labor y el entorpecimiento de la gestión de los asuntos sometidos a su consideración. Por el contrario, el P.E. cumple esa actividad a través de los distintos órganos que forman parte de la Administración Nacional, según una distribución de competencias. Dentro de esos órganos, los que le siguen en jerarquía son los Ministros, cuyas facultades se encuentran regladas por las leyes y normas respectivas; desde luego, siempre bajo la superintendencia del Presidente de la Nación. - (Dic.del P. del T. del 11/9/950).

En consecuencia, dentro de la actividad administrativa que lleva a cabo el P.E., existen casos que son de su resorte exclusivo y debe atender directa y personalmente y otros sobre los que su intervencion se limita al examen de la legitimidad del acto cumplido por sus organos subordinados.

De lo expuesto e interpretando lo estatuido por el recordado articulo 13° del decreto 7.520/944, se infiere que co-

rresponde al P.E. dictar decision definitiva, en cuanto a oportunidad y conveniencia, en los recursos jerarquicos promovidos por los administrados, contra medidas adoptadas por los órganos de la Administración Nacional, cuando las mismas no esten referidas al regimen economico y administrativo interno de aquellos. En caso contrario su intervencion se limita al examen de la legitimidad del acto. Por oposicion, corresponde a los Ministros dictar decision definitiva en los recursos promovidos por los administrados, funcionarios o empleados, cuando aquellos obren en la esfera de competencia que les fijan las leyes y reglamentos.

En este orden de ideas, resta por establecer si en el caso que nos ocupa la resolucion fue dada en ejercicio de las facultades que son propias del señor Ministro, es decir, si el asunto pertenece al "regimen economico y administrativo" del Ministerio.

A juicio de este Departamento si. Prescindiendo de consideraciones sobre la naturaleza juridica de la Obra Social, se analizara su relación de dependencia con el señor Ministro de Hacienda a traves de los actos que le dieron origen y determinaron su funcionamiento. El decreto nº 40.947/947 crea en el Ministerio de Hacienda la División de Ayuda Social bajo la dependencia directa del Subsecretario, el que a ese fin seria asistido por un Consejo Consultivo, con facultades de contralor e integrado por funcionarios del Ministerio, designados a tal objeto por el señor Ministro (Arts. 1º y 3º).

El decreto nº 8854/949 -vigente a la fecha- que substituye al anterior, no modifica aquella relacion de dependencia y mantiene el funcionamiento de un Consejo Consultivo y de Contralor que juntamente con el Director ejerce la Direccion de la Obra Social (art. 3º).

El articulo 4º determina: "La Obra Social podra realizar, sin otras limitaciones que las que dictare el Ministerio de

Hacienda, todos los actos y operaciones tendientes a la consecucion de sus fines..." Del texto que se comenta surge en forma evidente las amplias facultades que posee el Ministerio de Hacienda para regir y reglamentar el funcionamiento de dicha dependencia, observandose al respecto como elemento confirmatorio de este juicio el hecho de que el Presupuesto de dicha dependencia es aprobado directamente por el Ministro de Hacienda, quien tiene ademas atribuciones para nombrar, promover y remover a su personal, con excepcion del Director y Subdirector que son nombrados por el P.E.

Tambien el decreto de que se trata concede al Ministro de Hacienda atribuciones para fijar las cuotas de afiliacion, - crear nuevos servicios, celebrar contratos y convenios,etc.

A traves de las disposiciones referidas surge el caracter peculiar de la Direccion de Obra Social y su directa dependencia del Ministro de Hacienda, el que a su vez posee, por delegacion expresa del P.E. plena competencia para decidir sobre su organizacion y funcionamiento, como medio racional de descentralizacion administrativa en beneficio de los servicios - que debe cumplir la dependencia. Asimismo procede citar que el decreto nº 3.881/953, incluye a la Direccion de Obra Social como dependencia integrante de la "Organizacion Interna del - Ministerio".

Ahora bien: siguiendo una analisis logico de los antecedentes traídos a juicio, surge:

1º) Que la Direccion de Obra Social pertenece a la organización interna del Ministerio, en la que el señor Ministro es el superior jerarquico, es decir, que actua en la órbita de competencia delegada a los Secretarios de Estado, por ser propio de su regimen economico y administrativo.

2º) Que si por decreto del P.E. se ha autorizado el funcionamiento de los servicios de la Obra Social con sujecion a las normas que fije el Ministerio de Hacienda, aplicando

Hacienda, todos los actos y operaciones tendientes a la consecucion de sus fines..." Del texto que se comenta surge en forma evidente las amplias facultades que posee el Ministerio de Hacienda para regir y reglamentar el funcionamiento de dicha dependencia, observandose al respecto como elemento confirmatorio de este juicio el hecho de que el Presupuesto de dicha dependencia es aprobado directamente por el Ministro de Hacienda, quien tiene ademas atribuciones para nombrar, promover y remover a su personal, con excepcion del Director y Subdirector que son nombrados por el P.E.

Tambien el decreto de que se trata concede al Ministro de Hacienda atribuciones para fijar las cuotas de afiliacion, - crear nuevos servicios, celebrar contratos y convenios,etc.

A traves de las disposiciones referidas surge el caracter peculiar de la Direccion de Obra Social y su directa dependencia del Ministro de Hacienda, el que a su vez posee, por delegacion expresa del P.E. plena competencia para decidir sobre su organizacion y funcionamiento, como medio racional de descentralizacion administrativa en beneficio de los servicios - que debe cumplir la dependencia. Asimismo procede citar que el decreto nº 3.881/953, incluye a la Direccion de Obra Social como dependencia integrante de la "Organizacion Interna del - Ministerio".

Ahora bien: siguiendo una analisis logico de los antecedentes traídos a juicio, surge:

1º) Que la Direccion de Obra Social pertenece a la organización interna del Ministerio, en la que el señor Ministro es el superior jerarquico, es decir, que actua en la órbita de competencia delegada a los Secretarios de Estado, por ser propio de su regimen economico y administrativo.

2º) Que si por decreto del P.E. se ha autorizado el funcionamiento de los servicios de la Obra Social con sujecion a las normas que fije el Ministerio de Hacienda, aplicando

igual principio con respecto a la actividad administrativa de sus autoridades, es procedente reconocer en el señor Ministro competencia para dictar resolución definitiva respecto a reclamos interpuestos contra medidas adoptadas por la Dirección de que se trata.

Analizado asi el fundamento formal en que se sostiene el acto dictado por el señor Ministro y que fuera impugnado por el recurrente, resta a juicio de este Departamento concurrir en via del pronunciamiento decisivo del P.E. respecto a su legitimidad o sea, el analisis procesal de lo actuado, ya que segun se estima, el señor Ministro no podria resolver sobre su propia competencia. Al dictar resolución en el recurso jerarquico interpuesto habria perdido jurisdicción y quedaria reservado al P.E., eregido en juez, la apreciación de esa calidad.

En merito a ello y a fin de mejor resolver se considera conveniente remitir las presentes actuaciones al señor Procurador del Tesoro solicitando su opinion sobre el caso planteado en autos.

Departamento de Administración de la D.G.C.y A., 30/9/1954.

30 de Septiembre de 1954.-

Pase al Señor Procurador del Tesoro de la Nacion, en careciendole quiera emitir dictamen.

Director General de
Contabilidad y Administración

D.M. nº 50.-

Señor Ministro de Hacienda:

Notificado a fs. 22 vta. de la resolucion ministerial nº 3383 del 20/7/54 (fs. 20/22) que rechaza el recurso jerárquico interpuesto a fs. 12, por el señor Armando Manuel Gallardo, el recurrente pretende que debe mediar en el caso el decreto del Poder Ejecutivo Nacional considerando insuficiente el pronunciamiento de V.E.

El art. 13 del decreto nº 7520/44 dispone que "la decision definitiva se dictara en decreto o resolucion segun corresponda, de acuerdo con la Constitucion (art. 89) y la Ley Organica de los Ministerios...".

Corresponde decidir en que casos cabe una u otra decision.

Al respecto expresa Bielsa: "Los ministros no pueden decidir sino en los limites de su competencia, es decir, en el orden interno de sus respectivos departamentos...".

"...Los recursos promovidos por los administrados, o sea no subordinados o funcionarios, y los promovidos contra entidades autarquicas, o por ellas, deben ser resueltos por el Poder Ejecutivo, esto es, por el presidente de la Nacion (El recurso jerarquico, ed. 1953, f. 112).

Corresponde consiguientemente decidir si la materia respecto de la cual V.E. ha emitido opinion en la resolucion de referencia, es de su competencia, o en otro terminos, si corresponde al orden interno del Departamento de Estado a su cargo, ya que la decision dictada fuera de aquellos limites, autorizara el recurso administrativo de revocatoria por ilegalidad (Bielsa, obra y pag. citadas).

Por decreto nº 40.947/47 (publicado en el Boletin del Ministerio de Hacienda nº 84; 1-X-48) se creo la Division de Ayuda Social dependiente de la Subsecretaria de ese Ministerio, la que por el art. 3 funcionara bajo la dependencia directa -

del Subsecretario del Departamento asistido por un Consejo - Consultivo integrado por funcionarios del Ministerio.

La situacion aludida fue mantenida por el decreto número 8854 del 12-IV-49 siendo dirigida la Obra Social por el Consejo Consultivo y su Director, cuyo cargo deberiafigurar en el Presupuesto de la Subsecretaria de Hacienda (art. 3º).

Por el art. 4º se autoriza a la Obra Social, la realizacion de una serie de actos, sin mas limitacion que las que dictare el Ministro de Hacienda.

Por último, el decreto nº 3881/53 que reestructura el Departamento de Estado a cargo de V.E., incluye en el art. 1º inc. d), como dependencia del mismo, a la Direccion de Obra Social.

De las normas reglamentarias citadas se desprende la dependencia presupuestaria y administrativa de dicho organismo respecto del Ministerio a cargo de V.E.

Resulta inobjetable entonces, la decision objeto del recurso, toda vez que se refiere a un problema estrechamente - vinculado con la competencia legal de V.E. y que hace al regimen economico-administrativo de una de sus Direcciones.

Ha podido en consecuencia V.E., conocer y resolver en el recursos jerarquico deducido a fs. 12, por imperio de lo dispuesto en el art. 13 del decreto nº 7.520/44.

En lo que hace a la posibilidad de requerir el pronunciamiento del Poder Ejecutivo Nacional sobre el problema sometido a consulta, por via del análisis de la legitimidad del acto, no obstante lo señalado en el punto 2º del informe del - Departamento de Administracion de ese Ministerio agregado a estas actuaciones, considero que no corresponde tal requerimiento.

D.M. nº 50.-

Se ha visto que la resolucion dictada por V.E. lo ha sido dentro de los limites de su competencia legal, poniendose, consiguientemente fin, a la via jerarquica.

La revision por decreto del Poder Ejecutivo Nacional basada en la legitimidad del acto cuestionado no se justifica, luego del analisis de las normas, que motivaron el mismo y lo actuado en este expediente.

A fs. 10 el Departamento de Accion Social de la Direccion de Obra Social, transcribe las normas que regulan los reintegros de gastos de la indole, los que se supetidan -ademas de otras circunstancias- a la necesidad de que la Direccion carezca del servicio asistencial que necesite el afiliado.

Los variados supuestos enunciados no son aplicables al caso en estudio, y por ende, la pretensión del recurrente carece de fundamento legal, maxime si se tiene en cuenta que -como se destaca a fs. 3 y se desprende asimismo de su escrito de fs. 1/2- el afiliado tenia conocimiento del impedimento reglamentario que obstaba a su pretension y de la posibilidad de hacerse intervenir por los servicios medicos de la Obra Social.

La resolucion de fs. 4 que decidio no acordar el reintegro de los gastos en cuestion ha sido dictada conforme a derecho, mediante un procedimiento tambien inobjetable, por lo que no corresponde su revision por el Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de no existir vicio de legitimidad alguno.

Agosto 2 de 1956

RICARDO COLOMBRES
Procurador del Tesoro de la
Nacion.-

D. M. nº 50.-

//—nos Aires, 9 de agosto de 1956.

Visto que al notificarse de la resolución ministerial nº 3383/54 (fs. 22/24), el señor Armando Manuel Gallardo impugna como ilegal dicho pronunciamiento, por considerar que el mismo debió ser dictado por el Poder Ejecutivo, y atento que según surge de lo actuado y la naturaleza del asunto resuelto a través de la medida en cuestión, este Ministerio procedió en la oportunidad dentro de sus atribuciones legales y en orden a lo determinado por el art. 13 del decreto nº - 7.520/44 (dictamen del señor Procurador del Tesoro de fs. 27/28); RESUELVO:

No ha lugar.

Pase a la División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo y dentro del término de cinco días hábiles notifíquese al interesado; cumplido, vuelva a la Dirección de Obra Social para su conocimiento y archivo.-

E. A. BLANCO

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletin Nº 51.-

RECURSO JERARQUICO

Expediente Nº 182/56.- M.de F. Norberto M. Blumencweig.- Banco Central.- Multa por infracción al régimen de cambios.- Recurso jerárquico.-

//ñor Ministro:

1.- De la confusa presentación del recurrente (fs. 2/36), pareciera desprenderse que reproduce ante el Poder Ejecutivo los recursos interpuestos en anteriores presentaciones ante el Banco Central y el ex Ministerio de Finanzas (recurso jerárquico, recurso ante la justicia nacional, recurso extraordinario y pedidos de indulto y de facilidades de pago), por más que tanto al comienzo como en el petitorio sólo reclama concretamente la devolución de las sumas abonadas al Banco Central en concepto de multa por infracciones al régimen de cambios.

2.- La Carta Orgánica del Banco Central (art. 42, t.o. en 1956, decreto nº 14.570/56), le confiere facultades para instruir sumarios y aplicar sanciones por infracciones a las normas de cambios. El ejercicio de esas facultades ha sido reglamentado, con referencia a las multas aplicables según las disposiciones del art. 17 de la ley nº 12.160, por los decretos 12.647/49 y 4750/50, t.o. por resolución nº 152/50 del ex Ministerio de Finanzas, de cuyo régimen resulta que contra la resolución del Banco que impusiera una sanción, sólo se podrá interponer el recurso de reconsideración, que se sustanciará ante el mismo Banco, cuya resolución confirmatoria cierra la instancia administrativa y hace procedente la ejecución judicial de la multa por la vía de apremio (art. 17 y 18).

3.- El recurso amplio que instituye el art. 1º del decreto

nº 7520/44, halla su limitación en las normas de procedimientos establecidas en las leyes y reglamentos para casos especiales, de acuerdo con lo previsto por el art. 14 del mismo y la reiterada jurisprudencia administrativa existente sobre el particular.

Además, si bien como principio general todo acto del inferior puede ser objeto de revisión por el superior, a petición de parte y ex-oficio, en virtud del vínculo de superioridad, vigilancia y contralor, quedan excluídos, no obstante, los actos a los que la ley, expresa o implícitamente, niegue el recurso jerárquico o la revisión (Bielsa, "El recurso jerárquico", Bs. As., 1953, p. 65).

Así, pues, no existe duda de que, por habérsele deferido la decisión final del caso en la instancia administrativa, las resoluciones del Banco Central en esta materia sólo se pueden impugnar ante la justicia, y ello mediante demandas por repetición contra el propio Banco y no contra la Nación (art. 19 del citado decreto nº 12.647/49, t.o. en 1950).

Por lo tanto, no son tampoco de aplicación en el caso las disposiciones de las leyes 3952 y 11.634, sobre demandas contra la Nación, a los efectos de la previa reclamación del derecho controvertido ante el Poder Ejecutivo y su denegación por parte de éste, que, en la especie, no sólo resultan innecesarios sino improcedentes.

4.- Basta con lo expuesto para concluir que es de suyo evidente, asimismo, la improcedencia de los demás recursos a que se alude en la presentación del recurrente y del pedido de devolución administrativa de la multa abonada, que no podría concederse por el Poder Ejecutivo sin infringir el régimen establecido por los decretos 12.647/49 y 4750/50. Y en cuanto al pedido de indulto, esta Dirección concuerda, también, con lo expresado en el informe de fs. 198/199 y dictamen de fs. 200/207, en el sentido de que sólo podría considerarse una vez que el interesado hubiese agotado la vía judicial y de que, por consiguiente, el examen de esta cuestión se hallaría enteramente fuera de lugar en las presentes circunstancias.-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS (M.H.), 30-10-56.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 52.-

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA

Buenos Aires, 25 de abril de 1956.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que por razones de racionalización administrativa, es conveniente centralizar las funciones y tareas que en materia inmobiliaria cumplen actualmente diversas dependencias del Ministerio de Hacienda de la Nación, para posibilitar la simplificación y celeridad de los trámites y la mayor eficiencia y economía en el servicio;

Que, en tal orden de ideas, es conveniente crear un organismo específico, dotado de las facultades necesarias para cumplir acabadamente la finalidad que se persigue, para que tome a su cargo tales tareas;

Por tanto,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO,

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Créase la Dirección General Inmobiliaria, bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, que se organizará sobre la base de la actual Subdirección Inmobiliaria de la Dirección General Impositiva, de la Administración General de Inmuebles del Estado y de la Comisión Especial Decreto 15.054/50; y de la que formarán parte la Cámara de Alquileres y el Tribunal de Tasaciones.

La Dirección General Inmobiliaria ejercerá las funciones que las disposiciones legales y reglamentarias vigentes encomiendan a la Dirección General Impositiva -y que se cumplen por conducto de la Subdirección Inmobiliaria- a la Administración General de Inmuebles del Estado y a la Comisión Especial Decreto número 15.054/50, la que se declara disuelta como órgano co

legiado. La Cámara de Alquileres y el Tribunal de Tasaciones continuarán ejerciendo las funciones que actualmente desempeñan.

ARTICULO 2º.- La Dirección General Inmobiliaria estará a cargo de un Director General, el que será secundado en sus funciones por un Subdirector General y un Director Secretario.

ARTICULO 3º.- El Director General ejercerá las facultades que las disposiciones legales y reglamentarias vigentes encomiendan a las autoridades de la Dirección General Impositiva en las materias que por este Decreto-Ley se declaran de competencia de la Dirección General Inmobiliaria; de la Administración General de Inmuebles del Estado y de la Comisión Especial Decreto número 15.054/50, quedando autorizado suscribir en nombre del Estado Nacional Argentino las correspondientes escrituras traslativas de dominio de los inmuebles que se enajenen en virtud de la Ley Nº 13.539, pudiendo delegar esta función en la forma prevista por el Decreto número 20.353/54.

ARTICULO 4º.- Durante el término a que se refiere el artículo 8º, el Director General podrá delegar total o parcialmente en el Subdirector General y en el Director Secretario las facultades encomendadas por el artículo anterior.

ARTICULO 5º.- El tribunal de Tasaciones substituirá en todas sus funciones y atribuciones a la Junta de Reclamos, la que se declara disuelta como órgano colegiado.

ARTICULO 6º.- La Tesorería General de la Nación depositará mensualmente el importe del seis por mil (6‰) de las sumas recaudadas por la Dirección General Inmobiliaria -que se tomará de la participación de la Nación- en una cuenta especial, a disposición de la Dirección, para servir como fondo de estímulo para los funcionarios y dependientes de la Dirección. La cuenta especial a que se refiere este artículo se denominará "Dirección General Inmobiliaria - Fondo de Estímulo" y se incorporará al Presupuesto General de la Nación.

ARTICULO 7º.- El personal, los bienes muebles e inmuebles, los elementos de trabajo y los créditos presupuestarios de los organismos que pasan a integrar la Dirección General Inmobiliaria, serán transferidos a ésta, inmediata y gradualmente, a

propuesta de la nueva repartición.

ARTICULO 8º.- Dentro de los 180 días de la fecha del presente la Dirección General Inmobiliaria deberá elevar al Ministerio de Hacienda un anteproyecto de Decreto-Ley destinado a reglar su organización definitiva.

ARTICULO 9º.- Deróganse las disposiciones que se opongan al presente Decreto-Ley.

ARTICULO 10º.- El presente Decreto-Ley será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.

ARTICULO 11º.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

DECRETO - LEY Nº 7.688.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 53.-

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA

Visto la necesidad de asegurar la continuidad de los servicios a cargo de las distintas dependencias que, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto-ley nº 7.688/56, pasaron a integrar la Dirección General Inmobiliaria; y,

CONSIDERANDO:

Que tal concentración de funciones hace indispensable una redistribución de los servicios, con la consiguiente refundición o creación de sectores de las distintas dependencias reunidas en la Dirección General, por las situaciones de hecho que trae aparejada esta última circunstancia;

Que, asimismo, resulta indispensable una distribución racional del personal directivo, con el objeto de evitar los entorpecimientos lógicos que puedan producirse debido a la superposición de mandos en tareas similares, lo que originaría inevitablemente una seria perturbación funcional con el consiguiente resentimiento de los servicios, que, por su naturaleza, no pueden llegar a suspenderse;

Que, en virtud de esta causa, por Resolución Administrativa Interna Nº 24, se creó una comisión que tuvo a su cargo el estudio de un proyecto relativo a la estructuración orgánica de la Dirección General, tarea ésta que ha quedado concretada a la fecha;

Que el proyecto elaborado responde a las exigencias de una organización racional para el mejor cumplimiento de las funciones específicas a cargo de la Dirección General Inmobiliaria;

Que para el logro de dicho objetivo, corresponde crear los Departamentos técnicos, legales y administrativos necesarios, conforme a los principios de división del trabajo, especialización y coordinación de funciones;

Que, asimismo, deben incorporarse a la estructura de esta Dirección General los cuerpos colegiados y las entidades oficiales que determina el decreto-ley nº 7.688/56 en su artículo 1º, con arreglo a las disposiciones legales que rigen su constitución y funcionamiento;

Por ello, en uso de las atribuciones que le confiere, en su artículo 7º la ley 11.683 (t.o. en 1955), conforme a lo dispuesto por el decreto-ley nº 7.688/56 (art.3º),

EL SUBDIRECTOR GENERAL EN EJERCICIO DE LA

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA

R E S U E L V E :

1º.- La Dirección General Inmobiliaria queda estructurada orgánicamente, a partir del día 3 de septiembre próximo, en la siguiente forma:

1 - DIRECCION GENERAL

1.1 - Director General
1.2 - Subdirector General
1.3 - Director Secretario

2 - TRIBUNAL DE TASACIONES

2.1 - Presidencia
2.1.2- Secretaria General

2.1.2.1. - Secretaría Técnica
2.1.2.2. - Secretaría Administrativa

2.1.3 - Asesoría Legal
2.1.4 - Asesoría Técnica
2.2.1 - Sala 1a. (Capital Federal, Gran Buenos Aires, Servicios Públicos, Reclamos, Contribución Inmobiliaria y Propiedad Horizontal)

2.2.2 - Sala 2a. (Interior, Urbanos y Suburbanos, Reclamos, Contribución Inmobiliaria y Propiedad Horizontal)

2.2.3 - Sala 3a. (Rurales, Reclamos, Contribución Inmobiliaria y Propiedad Horizontal).

3 - CAMARA DE ALQUILERES

3.1 - Presidencia
3.1.1 - Secretaría
3.1.2 - Asesor Técnico
3.1.3 - Asesor Legal
3.1.4 - Comisión de Asuntos Legales
3.1.5 - Comisión de Asuntos Técnicos

4 - COMISION ASESORA PARA LA VENTA DE INMUEBLES FISCALES (Problemas generales y particulares vinculados con la venta de inmuebles de propiedad del Estado).

5 - DEPARTAMENTO TECNICO DE TASACIONES

5.1 - Jefatura
5.2 - Asesor Técnico
5.3 - División Valores Inmobiliarios

5.3.1 - Oficina de Planimetria, Dibujo y Mapoteca.
5.3.2 - Oficina de Valores de Tierra y Edificacion

5.4 - Division Tasaciones Especiales

5.4.1 - Oficina Capital Federal
5.4.2 - Oficina Gran Buenos Aires
5.4.3 - Oficina Urbana y Suburbana del Interior
5.4.4 - Oficina de Servicios Públicos y Usinas
5.4.5 - Oficina de Rurales

5.5 - División Tasaciones Inmobiliarias

5.5.1 - Oficina de Inspección y Verificaciones
5.5.2 - Oficina de Avalúos

6 - DEPARTAMENTO INMOBILIARIO

6.1 - Jefatura

6.1.0.2 - Sección Administrativa y Auxiliares

6.3 - <u>División Propiedad Horizontal</u>

6.3.0.1 - Sección Administrativa
6.3.0.2 - Sección Comunicaciones
6.3.0.3 - Sección Solicitudes de no Adeudar
6.3.0.4 - Sección Certificación
6.3.0.5 - Sección Estudios
6.3.0.6 - Sección Legajos

6.4 - <u>División Contribución Inmobiliaria</u>

6.4.0.1 - Sección Administrativa

6.4.1 - Oficina de Padrón Inmobiliario
6.4.2 - Oficina Departamental
6.4.3 - Oficina de Certificados
6.4.4 - Oficina de Cuentas Impositivas

6.4.02 - Sección Exoneraciones

7 - DEPARTAMENTO DE LOCACIONES

7.1 - <u>Jefatura</u>

7.1.0.7 - Sección Auxiliares de Técnica
7.1.0.8 - Sección Administrativa

7.2 - <u>División Asuntos Legales</u>

7.2.1 - Oficina de Permutas, Convenios, Audiencias y Conciliaciones.

7.2.1.1 - Sección Convenios y Permutas
7.2.1.2 - Sección Audiencias y Conciliaciones

7.3 - <u>División Inspección</u>

7.3.0.3 - Sección Inspecciones
7.3.0.4 - Sección Revisión y Despacho

7.4 - <u>División Sumarios</u>

7.4.0.5 - Sección Dictámenes
7.4.0.6 - Sección Actuarios

8 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

8.1 - Jefatura

8.2 - División Administrativa

8.2.1 - Oficina de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo

8.2.2 - Oficina de Personal

8.2.3 - Oficina de Adquisiciones y Suministros

8.3 - División Contaduría

8.3.1 - Oficina de Teneduría de Libros y Presupuestos

8.3.2 - Oficina de Verificaciones y Liquidaciones

8.3.3 - Oficina Patrimonial

8.4 - División Tesorería

8.4.1 - Oficina de Recaudación

8.4.2 - Oficina de Valores

8.4.3 - Oficina de Habilitación

9 - DEPARTAMENTO DE INMUEBLES FISCALES

9.1 - Jefatura

9.2 - División Registro

9.2.1 - Oficina de Estudios y Registros

9.2.2 - Oficina de Antecedentes de inmuebles

9.2.3 - Oficina de Planos y Dibujos

9.3 - División Mensura y Conservacion

9.3.1 - Oficina de Agrimensura

9.3.2 - Oficina de Inspección

9.3.3 - Oficina de Conservación

9.3.4 - Oficina de Talleres

9.4 - División Explotación

9.4.1 - Oficina de Arrendamientos y Concesiones
9.4.2 - Oficina de Explotación Directa
9.4.3 - Oficina de Ventas

10 - DEPARTAMENTO DE COORDINACION Y ASUNTOS LEGALES
10.1 Jefatura

10.2 División Coordinación y Auditoría

10.3 División Despacho

10.4 División Legal y Notorial

2º.- Las Jefaturas de los Departamentos someterán a consideración de la Dirección General, en el plazo de sesenta (60) días, las modificaciones que aconseje la experiencia respecto a la estructura y las funciones de las dependencias a su cargo. Asimismo, la Dirección General recibirá, dentro de dicho término, las observaciones que, con el mismo objeto, le formulen la Cámara de Alquileres, el Tribunal de Tasaciones y la Comisión Asesora para la Venta de Inmuebles Fiscales.

3º .- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA, 24 de agosto de 1956.-

RESOLUCION ADMINISTRATIVA INTERNA Nº 26.-

Boletín Nº 54.-

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA

Buenos Aires, 2 de octubre de 1956.-

Vistos los proyectos de estructuración orgánica y funcional de la Dirección General Inmobiliaria, elevados por dicha Repartición, y

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la creación de la Dirección General Inmobiliaria por decreto-ley nº 7.688/56, ha sido necesario, dada su separación de la Dirección General Impositiva, crear nuevas dependencias encargadas de las funciones de contaduría, tesorería, asesoría letrada, personal, etc., y la agrupación racional de las ya existentes;

Que, respecto a los cuerpos colegiados -Cámara de Alquileres y Tribunal de Tasaciones- que integran la Dirección General, dentro de la organización proyectada, se los asiste administrativa y técnicamente por dependencias de la Repartición, con personal especializado en las funciones respectivas;

Que, conforme a las exigencias de la racionalización administrativa, la estructuración de la Dirección General en seis departamentos de carácter técnico unos, legal y administrativos otros, responde a los principios de división del trabajo, especialización y coordinación de funciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Apruébase la organización de la Dirección General Inmobiliaria, conforme a los proyectos de estructuración funcional y orgánica elevados por dicho organismo, que corren agregados a esta Resolución.

ARTICULO 2º.- Comuníquese a la Dirección General Inmobiliaria a sus efectos.-

RESOLUCION Nº 8.242.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletin Nº 55.-

ADSCRIPCIONES - FACULTAD MINISTERIAL - PRESUPUESTO

//--nos Aires, septiembre 3 de 1956.

Vuelva a la Contaduria General de la Nación para manifestarle, con respecto a la consulta formulada en las presentes actuaciones, que las adscripciones de personal entre servicios con distinta financiación (Rentas Generales, Cuentas Especiales, Organismos Descentralizados, etc.) aunque pertenezcan a una misma jurisdicción, sólo podrán ser dispuestas por resolución emanada del señor Ministro Secretario de Estado respectivo.

Dése a la presente el carácter de resolución aclaratoria del Decreto-Ley nº 7.104/55 conforme a lo reglado por el articulo 27 del mismo, modificado por el Decreto-Ley nº 1635/56.

RESOLUCION Nº 154/56

EXPEDIENTE Nº 111.025/56

Fdo. Eugenio A. BLANCO

INDEMNIZACIONES - RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

"VI.- Que conforme a la doctrina sostenida en otras ocasiones por esta Contaduría General, la responsabilidad de los agentes de la administración debe entenderse limitada respecto de los bienes que les son confiados, no procediendo hacer la extensiva a los daños que causaren a terceros por los que el Estado deba responder en juicio ordinario, pues para este caso particular, no contemplado especialmente en la ley n° 12.961, rige el procedimiento que estatuye el artículo 1123 del Código Civil. El caso de estas actuaciones, en que el tercero perjudicado es un gobierno provincial -despues una empresa nacional- y las leyes de la nación prevén procedimientos especiales para hacer valer los derechos resarcitorios, no altera en cuanto al agente se refiere, su situación, pues no ha sido creado, a su respecto un "status" especial que lo sustraiga de la jurisdicción de los jueces ordinarios"

CONSIDERANDO VI° de la Res. n° 3192 de 25/9/56
Causa Fiscal n° 121/56.
Contaduría General de la Nación.-

Finalmente y a título de aclaración general, se expresa que el reglamento en cuestión no prevé bajo ningún motivo el descuento doble de haberes.-

EXPEDIENTE Nº 847.372/56.-

ANGEL BOTTERO TORRES
Director General
de Contabilidad y Administración

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION
DIGESTO MINISTERIAL

Boletin Nº 5...

RACIONALIZACION - ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACION - BAJA DE ACTUACIONES Y BIENES - PATRIMONIO DEL ESTADO.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1955.-

Visto el Decreto nº 13.899 de agosto 31 del año en curso por el que se faculta a la Contaduria General de la Nacion para que, con caracter permanente, provea a la venta o incineracion, segun el caso, de la documentacion del Archivo General de la Administracion que ya no sirva como elemento de consulta por su estado de deterioro o por haberse operado la prescripcion, autorizandosele a implantar un turno extraordinario de labor con el proposito de proceder a la revisacion, clasificacion, depuracion y desglose de la documentacion actualmente depositada en distintos locales a fin de determinar la documentacion que debe conservarse y la que debe ser objeto de enajenacion y

Teniendo en cuenta:

Que a ese efecto resulta conveniente impartir las instrucciones del caso de manera que constituya las normas del procedimiento a seguir tanto en lo que respecta a la documentacion existente a la fecha como en lo que hace a la que se acumule en el futuro a fin de que en lo sucesivo, con su depuracion periodica se evite la congestion innecesaria de documentos que han perdido valor probatorio o de consulta,

LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Para la clasificacion y desglose de la documentacion actualmente en existencia y de aquella que se acumule en lo sucesivo se tendra en cuenta:

a) Que deberan conservarse los comprobantes vinculados con el pago de sueldos, pensiones, jornales, viáticos y analogos, incluso en aquellos casos en que tales erogaciones hayan sido atendidas con partidas para gastos.-

b) Que el desglose de la documentacion restante para proveer a su venta procede a partir de los diez (10) años de la aprobacion por parte de la Contaduría General de la Nacion de la respectiva rendicion de cuentas.-

c) Que en las rendiciones de cuentas depuradas deberá dejarse constancia, firmada por los empleados que han tenido a su cargo dicha tarea, de la naturaleza de los documentos desglosados y del numero y año de la presente resolucion que asi lo dispone.-

d) Que cuando se trate de documentacion que revista interes historico, previo a su venta o inutilizacion, corresponde recabarse la intervencion del Archivo General de la Nacion conforme a lo prescripto por el decreto nº 19.021 de noviembre 8 de 1954.-

e) Que en lo que hace a los libros registros, duplicados de ajustes de liquidación de haberes, informes, notas, resoluciones, decretos, etc., remitidos por las Oficinas, Delegaciones y Fiscalías, deberán conservarse aquellas que tengan una antigüedad menor de tres (3) años y los registros de rendiciones de cuentas y de juicios de responsabilidad.-

f) Que en lo que respecta a los libros que no pertenecen a la Contaduría General de la Nación, procederá a consultarse a las reparticiones de origen si existe interés en conservarlos, debiendo, en caso afirmativo, retirarlos y, de lo contrario, prestar su conformidad para enajenarlos.-

g) Que en cuanto a los legajos y libros correspondientes a la "Cuenta de Inversión" por los años 1930 - 1945 ya aprobadas por el H. Congreso de la Nación, corresponderá retenerse aquellos antecedentes a que se hizo referencia en el punto a) teniendo especial cuidado de conservar los comprobantes sobre pagos - de sueldos efectuados por "Ejercicio Vencido".-

h) Que en lo sucesivo, previo informe al respecto de - la Dirección de Contabilidad, transcurridos dos y - diez años de la aprobación formal de la "Cuenta de Inversión" o del vencimiento del plazo fijado por - el art.66, párrafo 2° de la Ley n° 12.961 (cinco años posteriores a la presentación de la Cuenta de - Inversión por parte del Poder Ejecutivo) se procederá a la venta de los antecedentes que a continuación se detallan:

A LOS DOS AÑOS DE APROBADA LA CUENTA DE INVERSION

1) Libros:

Sección Contabilidad del Presupuesto, Gastos.-
" " " " , Recursos.-
" Operaciones Varias.-
" Sumaria.-

2) Documentación:

Copias fotográficas de los decretos de apertura y - modificación de créditos (Presupuestos-Cuentas Especiales-Plan de Trabajos Públicos, etc.).-
Notas de ingreso de fondos a Tesorería General de - la Nación, menos por haberes.-
Estado de Cuentas Especiales de órden y de terceros.
Estados mensuales de ejecución del presupuesto.-
Notas de referencia y de contraasientos.-
Estados de recaudación de Rentas Generales.-

Estados de la Deuda Pública.-
Comunicaciones recibidas o copias de las remitidas por la Dirección y Estados bancarios.-

A LOS DIEZ AÑOS DE APROBADA LA CUENTA DE INVERSION

1) Libros:

Sección Movimiento de Fondos.-
" Mayores.-
" Deuda Pública.-
" Deuda Exigible.-
Cualquier otro libro perteneciente al ejercicio que vence.-

2) Documentación:

Copias fotográficas de órdenes de pago.-
Recibos por fondos recibidos por las Reparticiones.
Recibos de pagos por certificados o suministros Parciales de órdenes de pagos.-
Notas de ingresos por devoluciones de haberes.-
Cualquier otro documento perteneciente al ejercicio que vence.-

i) Que en lo que respecta a las Delegaciones, Fiscalías y restantes oficinas, vencido el término de tres años, remitirán al Archivo General de la Administración para que provea a su venta los duplicados de las liquidaciones de sueldos y gastos, de ajustes de liquidaciones de haberes, informes, notas y libros de registros ya terminados o fuera de uso.-

ARTICULO 2°.- En lo referente a los muebles y elementos varios (armarios, sillas, mesas, máquinas de escribir, etc.) existentes en los locales ocupados por el Archivo que se encuentran en desuso o que por su grado de deterioro han caído en condición de rezago, con intervención de la Oficina de Habilitación

dependiente de la Secretaría Administrativa, serán oportunamente puestos a disposición de la Dirección General de Suministros del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo 2° art. 2° apartado 5 del decreto n° 15.650/54.-

ARTICULO 3°.- A los efectos de la venta de la documentación desglosada que por carecer de valor como elemento de consulta o haberse operado la prescripción constituye un material de rezago, periodicamente se solicitará la intervención de la Dirección General de Suministros del Estado.-

ARTICULO 4°.- La destrucción, incineración o venta de los libros, documentación u otros elementos a que se refiere la presente disposición, solo podrá hacerse en cada caso, previa autorización de esta Contaduría General de la Nación.-

ARTICULO 5°.- Notifíquese al Archivo General de la Administración a fin de que ajuste el cometido que le fuera asignado por la Resolución n° 1.636 bis/55 a las normas precedentemente señaladas; dése al Digesto Administrativo y archívese en Secretaria Administrativa.-

RESOLUCION N° 373/55
C.G.N.

ANGEL B.VUOLO - Dino Dallatana
Aldo Chittaroni-Juan Maria Zanchetti-R.Tarelli-Osvaldo F.Rosinganna-Secretario

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Buenos Aires, 3 de febrero de 1956.-

Vista la necesidad de proceder a una reorganización de la estructura funcional de la Superintendencia de Seguros, sobre bases racionales y adecuadas al logro de la mayor eficacia y celeridad en el cumplimiento de las funciones que la ley le otorga, y

CONSIDERANDO:

Que el personal con que cuenta este Organismo ha sufrido, en los últimos años, sensibles disminuciones, a la par que se operaba un crecimiento de la actividad aseguradora del país, expresado -entre otras cosas- por la incorporación de numerosas empresas a nuestro mercado;

Que ello obliga -unido a las normas vigentes que imposibilitan el nombramiento de nuevos agentes en la medida necesaria- a proceder a la más conveniente distribución del personal existente, tendiendo al máximo aprovechamiento de su experiencia y aptitudes;

Que a los fines propuestos es necesario propender a la descentralización de funciones, agrupando cada sector homogéneo en estructuras administrativas autónomas con amplias facultades resolutivas y adecuadas en su nomenclatura a la específica naturaleza y jerarquía de cada dependencia y a las denominaciones utilizadas en organismos similares dependientes del Ministerio de Finanzas de la Nación;

Que de conformidad con lo dispuesto en el punto 3º del Régimen legal de superintendencia de seguros (Ley nº 11.672, art. 150 t.o., edición 1943) al funcionario a cargo de este Organismo le corresponde el título de "Superintendente de Seguros", por lo cual no resulta ajustada la denominación de "Subdirec-

tor General" -dada por Res. nº 639, ratificada por Decreto nº 27.783/45- al funcionario que comparte las tareas y reemplaza al Superintendente en caso de ausencia.

Por ello y atento los estudios efectuados e informes producidos en estas actuaciones,

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS

RESUELVE:

I.- Organización

1ª) La Superintendencia de Seguros estará integrada por un Superintendente de Seguros, un Vicesuperintendente de Seguros, una Gerencia de Contralor Externo, una Gerencia de Contralor Interno, una Asesoría Legal, una Gerencia de Autorizaciones, una Gerencia de Normas y Estudios, una Gerencia de Administración y una Subgerencia de Relaciones y Difusión del Seguro.

2ª) La Gerencia de Contralor Externo estará constituída por un Cuerpo de Inspectores.

3ª) La Gerencia de Contralor Interno se compondrá de los Departamento de Balances y Estadísticas.

4ª) La Gerencia de Autorizaciones comprenderá los Departamentos de Inscripciones y Pólizas y de Tarifas.

5ª) La Gerencia de Normas y Estudios estará integrada por los Departamentos de Estudios y Proyectos y Actuarial y por la División Biblioteca.

6ª) La Asesoría Legal comprenderá los Departamentos de Estatutos y de Consultas.

7ª) La Gerencia de Administración estará integrada por los Departamentos de Contaduría, Administrativo y de Tesorería, Suministros e Impresiones.

8ª) Cada Gerencia y la Subgerencia de Relaciones y Difusión del Seguro contará con una Secretaría que cumplirá funciones de receptoría en coordinación con la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Asimismo existirán Secretarías Privadas del Superintendente y Vicesuperintendente, que se ocuparán, además, de lo relacionado con las reuniones del Consejo Consultivo y Comisión Consultiva de Cooperativas y Mutualidades.

9ª) Al frente de cada Gerencia actuarán un Gerente y un Subgerente y cada Departamento y División contará con un Jefe y un Encargado.

10ª) La Asesoría Legal tendrá el rango de Gerencia y actuarán a su frente un Asesor Letrado y un Subasesor Letrado.

II.- Competencia

11ª) Corresponderá al Vicesuperintendente:

a) Colaborar con el Superintendente en todo lo relacionado con la dirección del Organismo y reemplazarlo automáticamente en todos sus deberes y atribuciones en caso de vacancia, licencia o impedimento.

b) Actuar como coordinador y supervisor de las distintas Gerencias.

c) Compartir con el Superintendente las tareas que éste disponga.

12ª) Serán funciones de la GERENCIA DE CONTRALOR EXTERNO: Practicar inspecciones generales o parciales a las entidades comprendidas en las disposiciones vigentes sobre superintendencia de seguros, a fin de verificar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, técnicas y estatutarias a que están sujetas. Estudiar las conclusiones a que se arribe en dichas inspecciones, adoptando o proponiendo, en su caso, las medidas que correspondan. Controlar la liquidación de entidades aseguradoras y todo lo relacionado con transferencias de cartera. Proponer las modificaciones que la práctica aconseje a las normas y sistemas uniformes de contabilidad. Atender la liquidación de las compañías de seguros y de reaseguros actualmente a cargo de la Repartición. Cumplir, en general, en el orden externo, la tramitación de actuaciones de la Superintendencia.

13ª) La GERENCIA DE CONTRALOR INTERNO tendrá a su cargo la verificación, en el orden interno y principalmente a través del estudio de los balances de las entidades, el cumplimiento de las normas vigentes y la compilación de las cifras estadísti

tros riesgos cuyas tarifas hayan sido aprobadas experimentalmente.- Proyectar normas sobre reservas matemáticas de riesgos complementarios y valores garantizados.-

b) AL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS: Estudiar e informar sobre problemas técnicos, económicos, financieros y normativos de carácter general, relacionados con la actividad aseguradora, proyectando las disposiciones que corresponda dictarse.- Considerar la implantación de nuevas coberturas en el país, proyectando las condiciones pertinentes y redactar pólizas uniformes para cada uno de los ramos.- Atender el "Buzón de iniciativas" y estudiar los problemas que se planteen sobre la organización funcional de la Repartición.- Pronunciarse en todas las cuestiones que le someta la superioridad y efectuar los trabajos especiales que la misma le encomienda.- Proyectar normas y sistemas uniformes de contabilidad y formularios de balances.- Traducir leyes, artículos especializados, tarifas, elementos técnico-contractuales, etc., que se reciban en idioma extranjero.-

c) A la DIVISION BIBLIOTECA: Atender el funcionamiento de la Biblioteca y Hemeroteca de la Repartición, manteniendo actualizada la existencia, registro y traducción de la bibliografía nacional y extranjera sobre la materia, proponiendo las adquisiciones pertinentes.- Llevar catálogos y los ficheros alfabéticos y temáticos adecuados a la mejor ubicación de la legislación, jurisprudencia y doctrina registradas.- Seleccionar el material de recortes periodísticos, verificando la publicidad de las entidades aseguradoras.- Atender el canje de publicaciones.-

16º) La GERENCIA DE AUTORIZACIONES estará encargada de todo lo relacionado con habilitación para operar en seguros, aprobación de elementos técnicos y contractuales, instalación de su-

a) AL DEPARTAMENTO DE ESTATUTOS: Tramitar las actuaciones referentes a personería jurídica, reformas estatuarias, autorización para instalar en el país agencias o sucursales de sociedades extranjeras y las relacionadas con aumento y disminución de capital.- Pronunciarse sobre la situación de empresas o personas frente a las normas vigentes sobre superintendencia de seguros.- Considerar las convocatorias y actas de asamblea y ocuparse de lo relativo a la transferencia de acciones de entidades aseguradoras.-

b) AL DEPARTAMENTO DE CONSULTAS: Atender y evacuar las consultas de carácter jurídico y legal, internas o externas y las reclamaciones vinculadas con la actividad aseguradora.- Tramitar las actuaciones originadas por oficios judiciales librados a la Superintendencia y las referentes a recursos interpuestos contra medidas adoptadas, aplicación de multas, apercibimientos y sanciones y atención del "Registro de Faltas y Sanciones".- Estudiar y registrar los poderes que presenten las empresas.-

15º) La GERENCIA DE NORMAS Y ESTUDIOS tendrá a su cargo todo lo relacionado con la elaboración de estudios, investigaciones y proyectos de normas relativas a la actividad aseguradora, a la organización administrativa interna, y problemas de carácter actuarial, manteniendo actualizada la existencia, registro y traducción de elementos bibliográficos nacionales y extranjeros sobre la materia.- Competerá en especial:

a) AL DEPARTAMENTO ACTUARIAL: Estudiar reajustes de las tarifas aprobadas, incorporación de nuevas coberturas en su aspecto tarifario correspondiente a ramos eventuales y vida.- Preparar estudios actuariales generales y particulares y tablas de mortalidad.- Analizar los datos estadísticos sobre experiencias de mortalidad, invalidez, etc. y las de o

tros riesgos cuyas tarifas hayan sido aprobadas experimentalmente.- Proyectar normas sobre reservas matemáticas de riesgos complementarios y valores garantizados.-

b) AL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS: Estudiar e informar sobre problemas técnicos, económicos, financieros y normativos de carácter general, relacionados con la actividad aseguradora, proyectando las disposiciones que corresponda dictarse.- Considerar la implantación de nuevas coberturas en el país, proyectando las condiciones pertinentes y redactar pólizas uniformes para cada uno de los ramos.- Atender el "Buzón de iniciativas" y estudiar los problemas que se planteen sobre la organización funcional de la Repartición.- Pronunciarse en todas las cuestiones que le someta la superioridad y efectuar los trabajos especiales que la misma le encomienda.- Proyectar normas y sistemas uniformes de contabilidad y formularios de balances.- Traducir leyes, artículos especializados, tarifas, elementos técnico-contractuales, etc., que se reciban en idioma extranjero.-

c) A la DIVISION BIBLIOTECA: Atender el funcionamiento de la Biblioteca y Hemeroteca de la Repartición, manteniendo actualizada la existencia, registro y traducción de la bibliografía nacional y extranjera sobre la materia, proponiendo las adquisiciones pertinentes.- Llevar catálogos y los ficheros alfabéticos y temáticos adecuados a la mejor ubicación de la legislación, jurisprudencia y doctrina registradas.- Seleccionar el material de recortes periodísticos, verificando la publicidad de las entidades aseguradoras.- Atender el canje de publicaciones.-

16º) La GERENCIA DE AUTORIZACIONES estará encargada de todo lo relacionado con habilitación para operar en seguros, aprobación de elementos técnicos y contractuales, instalación de su-

cursales y autorización de tarifas. Competerá en especial:

a) AL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIONES Y POLIZAS: Tramitar las actuaciones referentes a inscripción en el "Registro de Entidades de Seguros", habilitación de sucursales de entidades nacionales y pedidos de autorización y modificación de elementos técnico-contractuales, proponiendo las medidas conducentes a su paulatino perfeccionamiento. Considerar el cumplimiento de los extremos formales, económico y técnicos, requeridos para operar en cada uno de los ramos de seguros.

b) AL DEPARTAMENTO DE TARIFAS: Considerar y verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos en los pedidos de autorización para operar con tarifas generales ya aprobadas por la Repartición y aprobar con carácter experimental las que no reúnan tal requisito. Determinar la cotización correspondiente a riesgos especiales y atender las consultas relacionadas con la aplicación de tarifas en ramos eventuales. Aprobar planes Vida similares a otros ya autorizados.

17ª) La GERENCIA DE ADMINISTRACION tendrá a su cargo todo lo relacionado con las cuestiones contables y administravas internas de la Repartición. Competerá en especial:

a) AL DEPARTAMENTO DE CONTADURIA: Registrar los ingresos y egresos y el movimiento de fondos. Emitir cheques, preparar balances y realizar arqueos. Proponer el plan de gastos y calcular los recursos necesarios para atender el funcionamiento de la Repartición. Atender lo relacionado con autorización de gastos y el registro analítico de imputaciones. Realizar el inventario patrimonial y formular rendiciones generales de cuentas. Recaudar y verificar el ingreso de las contribuciones que fijen las disposiciones vigentes. Efectuar licitaciones, compras, contrataciones, liquidaciones de facturas y servicios. Liquidar los sueldos y otros conceptos análogos.

b) **AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:** Atender todo lo relacionado con la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, verificando el cumplimiento de la Ley de Sellos. Evacurar las consultas de carácter administrativo que se formulen. Ocuparse de todos los asuntos referentes al personal de la Repartición. Intendencia y Mayordomía. Tramitar los asuntos vinculados con Medicina Preventiva, Dirección General de Servicios Sociales para Bancarios y Caja Nacional de Ahorro Postal (Seguro de Vida y de Fidelidad) y actuar como agencia colectora de depósitos de ahorro.

c) **AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SUMINISTROS E IMPRESIONES:** Efectuar los pagos de haberes, servicios y facturas en general. Atender los gastos menores, rindiendo cuenta de los que se abonen por "caja chica". Atender todo lo relacionado con impresiones, equipo fotomecánico, máquina "Adrema", publicidad de las disposiciones que se dicten y lo concerniente a Economato y Almacenes.

18ª) La SUBGERENCIA DE RELACIONES Y DIFUSION DEL SEGURO tendrá a su cargo todo lo atinente a las relaciones de la Superintendencia con organismos similares de los distintos países, así como respecto de Asociaciones, institutos especializados, conferencias, etc. del país y del extranjero, la preparación y coordinación de todos los actos o ceremonias en que deba participar o corresponda organizar a la Superintendencia de Seguros, y preparación de publicaciones sobre el seguro con fines de divulgación, Memorias de la Repartición y material informativo que corresponda y fomento del seguro y de la acción preventiva de siniestros.

III.- Facutades

19ª) En el orden administrativo competerá a los Gerentes y al Subgerente de Relaciones y Difusión del Seguro, dirigir la labor de la dependencia a su cargo, adoptando las medidas conducentes a su mayor eficiencia, disponiendo a tal efecto el

cumplimiento de tareas o la adopción de sistemas, registros, formularios, fichas y demás elementos adecuados a la simplificación, celeridad e individualización de las actuaciones, estando facultados, asimismo, para disponer traslados del personal dentro de su jurisdicción, asignarle tareas y aplicar sanciones que no configuren suspensión. A los fines expuestos estarán facultados para dictar disposiciones internas que llevarán la denominación "Instrucción" y se numerarán correlativamente.

20º) En el aspecto relacionado con las funciones específicas de sus dependencias los gerentes estarán facultados para formular a las entidades, observaciones de cualquier naturaleza y aceptar su descargo siempre que existan normas expresas aplicables o un criterio establecido en casos anteriores por la Superioridad. Asimismo podrán resolver las autorizaciones que se soliciten sobre las bases de elementos ya aprobados en otros casos o en virtud de la aplicación de normas expresas. Corresponderá también a los gerentes, según su competencia, la expedición de testimonios, certificados de servicios, otorgamiento de licencias y justificación de inasistencias y demoras que no importen excepción, dictado de resoluciones y circulares no normativas, autorización para publicación de balances y, en general, toda cuestión que no importe comprometer el criterio del Organismo, fijar su política o sentar un precedente.

21º) Los casos a cuyo respecto no aparezcan evidentes las facultades de un Gerente o del Subgerente de Relaciones y Difusión del Seguro o exista duda sobre su alcance, serán elevados a la solución o despacho del Superintendente.

22º) Los Jefes de Departamento estarán facultados para requerir los datos, informes y elementos que consideren necesarios para la resolución de los asuntos a su cargo.

23º) Los Subgerentes colaborarán con los Gerentes en todo lo relativo a la dirección de las dependencias a su cargo, reemplazándolos, automáticamente, en todos sus deberes y atribuciones, en caso de vacancia, licencia o impedimento. Actuarán como coordinadores y supervisores de los distintos Departamentos y compartirán con los Gerentes la firma del despacho en la forma que éstos lo dispongan.

IV.- Normas sobre funcionamiento interno

24º) En caso de vacancia, ausencia o impedimento de algún Jefe de Departamento, el despacho a su cargo será firmado por el Subgerente respectivo, ocupándose el Encargado de todo lo relacionado con la disciplina y marcha administrativa de la Dependencia.

25º) Cada Gerencia deberá informar trimestralmente sobre las funciones cumplidas respecto de cada uno de los puntos previstos en su competencia. Asimismo, tendrán la obligación de mantener informadas a cada una de las dependencias interesadas, de todas las cuestiones que lleguen a su conocimiento referentes a las entidades aseguradoras, que puedan resultar útiles para el cumplimiento de sus respectivas funciones.

26º) El ordenamiento y funciones establecidas en la presente resolución, regirán a partir del día siguiente a aquél en que se disponga la redistribución del personal.

27º) En el futuro, los cargos correspondientes a Gerentes y Subgerentes de Contralor Externo e Interno, Cuerpo de Inspectores y Jefe de Departamento de Balances, deberán ser llenados con Contadores Públicos Nacionales. En lo que respecta al Jefe del Departamento Actuarial, el mismo deberá poseer el título de Actuario.

28º) Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores, en tanto se opongan a las presentes normas.

Regístrese y comuníquese al personal.

RESOLUCION Nº 3.472.-

S.S.N.-

Fdo. FELIX G. BORDELOIS
Superintendente de Seguros

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 60.-

INDEMNIZACIONES - RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1956.-

Vista en despacho la presente causa fiscal seguida contra don Santiago Héctor Telis, de cuyas constancias

R E S U L T A :

1.- Que por resolución 715 de fecha 5 de marzo de 1956 se formuló cargo al nombrado por la suma de m$n. 16.613,35, importe de la indemnización y costas que Obras Sanitarias de la Nación debió pagar a los padres del menor Oscar Ponce Morales en el juicio iniciado por estos con motivo de su fallecimiento producido por el camión de servicio público que guiaba;

2.- Que a fs. 60/63 vta. produce su descargo el responsable. Niega el causante haber tenido responsabilidad criminal en el accidente ofreciendo como prueba de su aserto el fallo recaído en la causa criminal y sostiene asimismo que no le cabe responsabilidad civil en virtud de las consideraciones de orden legal que ofrece;

3.- Que dada la pertinente intervención al contador fiscal don José G. Vicetto, se expide este funcionario mediante el dictamen obrante a fs. 65, opinando que el descargo del causante no "aporta elementos de juicio que permitan modificar lo resuelto";

C O N S I D E R A N D O :

I.- Que llenados los requisitos exigidos por los artículos 94º, 95º y 96º de la ley 12.961, corresponde a esta Contaduría General avocarse para el estudio de esta causa fiscal y el dictado de la resolución definitiva que corresponda (art. 97º ley citada);

II.- Que previo al estudio de la cuestión de fondo, es de

cir, la responsabilidad que pudiera caber al causante como consecuencia de los hechos acaecidos, debe examinarse si el juzgamiento de esos hechos y aquella responsabilidad está sujeta a la potestad jurisdiccional de esta Contaduría General;

III.- Que al respecto se advierte que se trata de conseguir la separación por parte del señor Telis, agente de Obras Sanitarias, de la indemnización que debió abonarse a los padres del menor accidentado;

IV.- Que los hechos que dieron origen a la obligación han sido examinados por la justicia criminal para juzgar la conducta del imputado, el que fué sobreseído provisoriamente; y por la justicia civil para juzgar de la procedencia de la reparación del daño causado (art. 1.109 del C. Civil), habiéndose establecido la existencia de culpa concurrente entre Telis y el menor y obligado a Obras Sanitarias a reparar el daño en su carácter de empleador de Telis;

V.- Que conforme las prescripciones del C.Civil y lo sostenido por la jurisprudencia el resarcimiento por parte de un empleador de las indemnizaciones abonadas a terceros por hechos cometido por sus dependientes debe intentarse por la vía del juicio ordinario de repetición;

VI.- Que las disposiciones de la ley de contabilidad no prevén para el caso de que el empleador sea el Estado un régimen de excepción, por lo que no resulta de aplicación respecto del causante el juicio de responsabilidad legislado por el capítulo V de aquélla;

Por todo ello,

LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Declarar su incompetencia para seguir entendiendo en estas actuaciones, a mérito de la inaplicabilidad al caso en examen de las normas de la ley 12.961, y dejar sin efecto el cargo formulado por resolución.

ARTICULO 2º.- Notifíquese al causante en legal forma y a tal efecto se librará la nota de estilo al señor Director Nacional de Correos y [illegible]

ARTICULO 3º.- Publíquese en el Digesto Administrativo, a cuyo efecto se remitirá copia de la presente a Secretaria Técnica. Cumplido, devuélvase al origen con la nota acordada.-

RESOLUCION Nº 3.125.-

Causa Fiscal Nº 153/56.-

C.G.N.-

Fdo.: DAMIAN FIGUEROA -Presidente en ejercicio- Eusebio E. Villar, Wifredo P.Dedeu, Antonio Manuel Perez Arango y José M. Fernández Fariña, Contadores Mayores - César Aguirre Legarreta-Secretario.

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletin Nº 61.-

FONDO DE ESTIMULO - APORTE PATRONAL

Buenos Aires, 11 de junio de 1956.-

Visto la necesidad de resolver lo relativo a la financiación de los aportes jubilatorios derivados de la computabilidad a los fines provisionales de las sumas que perciba el personal del Estado en concepto de premio estimulo, y

CONSIDERANDO:

Que el referido beneficio no constituye un "sueldo" ni tampoco un "sobresueldo" sino que asume el carácter de una gratificación extraordinaria con que se estimula la acción individual y consecuentemente la de conjunto de los agentes, con el propósito de obtener un mayor rendimiento en los organismos de la Administración Pública que lo tienen instituído;

Que, en consecuencia, las sumas liquidadas por tal concepto no configuran la retribución compensatoria de los servicios que presta cada agente, en proporción al esfuerzo desarrollado mensualmente, la que se considera a través de lo que presupuestariamente se define como sueldo;

Que la calificación que sobre el particular hace el Artículo 4º de la Ley Nº 4.349, modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 11.923 debe ser definida con arreglo al criterio expuesto en el considerando que antecede, sin perjuicio de ptros conceptos de retribución que, en virtud de las leyes que autorizan los presupuestos generales de gastos de la Nación, se encuentran en forma expresa sujetos a aportes jubilatorios;

Que el Aporte Patronal importa una obligación directamente a cargo del Estado cuando la misma deriva del pago de retribuciones que revisten las características que se especifican precedentemente;

Que en el caso particular de las gratificaciones que se

acuerdan con finalidades de estímulo, atento la definición de su concepto que se hace precedentemente, el Aporte Patronal respectivo debe ser atendido con cargo al recurso que financia las mismas con carácter de obligación primordial;

Que es necesario arbitrar la norma legal que instituya el procedimiento que no sólo regularice la liquidación de los aportes patronales futuros que correspondan por las gratificaciones de que se trata, sino también de aquellos que pertenezcan a períodos anteriores y cuya computabilidad a los efectos jubilatorios soliciten los interesados;

Por lo tanto,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- En lo sucesivo se deberá deducir de las sumas a distribuir a agentes de la Administración Pública con el carácter de premio estímulo o gratificación de análogas características, los importes establecidos en concepto de aporte patronal, que serán entregados a las Cajas Nacionales de Previsión que correspondan.

ARTICULO 2º.- Previo a la deducción que dispone el Artículo 1º y en función del monto anual que en concepto de cargos por aporte patronal formulen las Cajas Nacionales de Previsión, por computación de las sumas percibidas con el carácter de premios estímulos o gratificaciones con anterioridad a la fecha del presente Decreto-Ley, se destinará hasta el cinco por ciento (5%) de la suma a distribuir.

ARTICULO 3º.- Queda derogada toda disposición que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el Excelentísimo señor Vicepresidente Provisional de la Nación Argentina y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de HACIENDA, EJERCITO, MARINA y AERONAUTICA.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

DECRETO - LEY Nº 10.374.-

Boletín Nº 62.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

Buenos Aires, 11 de julio de 1956.-

Visto que en distintas oportunidades se han efectuado gestiones por parte de agentes al servicio del Estado, tendientes a obtener el reconocimiento de los servicios prestados en la Administración Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de los cómputos de las bonificaciones por antigüedad que rigen para el personal ocupado en la Administración Pública Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que al presente existe un tratamiento diferenciado en razón de que, mientras en algunas jurisdicciones ministeriales aquel reconocimiento tiene aplicación, en otras, los servicios prestados en el orden municipal del Distrito Federal no se toman en cuenta para determinar los adicionales por antigüedad de que se trata;

Que razones de equidad y justicia aconsejan adoptar una medida que posibilite, en el aspecto en cuestión, un tratamiento uniforme para todos los agentes al servicio de la Administración Pública Nacional, cualquiera fuese la jurisdicción en que los mismos se desempeñen;

Que, asimismo, razones de buen ordenamiento administrativo señalan la conveniencia de dictar un pronunciamiento con carácter general que determine expresamente la computación de los servicios prestados en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de la liquidación de las bonificaciones por antigüedad que se acuerdan al personal de la Administración Nacional;

Que tal reconocimiento puede ser dispuesto por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades que le son propias;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- A los fines de uniformar la aplicación de los regímenes de adicionales por antigüedad vigentes en distintas jurisdicciones de la Administración Pública Nacional establécese, a partir del día 1º de julio de 1956, para todos los casos en que hasta el presente no eran considerados, la computación de los servicios prestados por los agentes en la administración comunal de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda y de Interior.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General de Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la Nación para su conocimiento y demás efectos.-

Fdo. ARAMBURU.- E.A.Blanco
L. Landaburu.-

DECRETO Nº 12.439.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 63.-

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1946.-

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
REUNIDOS EN CONGRESO, etc., SANCIONAN CON FUERZA DE
L E Y :

ARTICULO 1º.- Institúyese la remuneración anual complementaria para todos los servicios del Estado, sean éstos permanentes o transitorios, a tareas o a destajo, que revistan en cualquiera de las ramas de los poderes públicos, reparticiones autárquicas y entidades subsidiadas, cuyas remuneraciones se atiendan con partidas individuales o globales. Esta remuneración anual complementaria se abonará el 31 de diciembre de cada año.

ARTICULO 2º.- A los efectos de esta ley, dicha remuneración anual complementaria se calculará tomando la doceava parte del total de las retribuciones, sueldos o jornales básicos nominales, devengados en el respectivo año calendario. Queda excluída cualquier otra remuneración, sea en dinero efectivo, especie o casa habitación. El personal que haya cobrado haberes con aplicación de los coeficientes autorizados por el artículo 20 de la Ley 11.672 (edición 1943) por prestar servicios en el extranjero, percibirá la remuneración anual complementaria, únicamente con relación a los haberes percibidos sin coeficiente.

ARTICULO 3º.- Por esta única vez este derecho queda reconocido exclusivamente para el personal que se halle en servicio al 31 de diciembre de 1946 y comprenderá los que se hubieren prestado durante el mismo año, aunque correspondan a diversos Ministerios, reparticiones nacionales o Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En lo sucesivo todo servidor del Estado que deje de prestar servicios tendrá derecho a percibir una doceava parte del total de los sueldos devengados en el año calendario hasta el momento de dejar el servicio.

ARTICULO 4º.- La presente ley no anula las disposiciones legales o reglamentarias que otorgan a los servidores del Estado otros beneficios mayores que los establecidos en esta ley.
ARTICULO 5º. - La remuneración anual complementaria es inembargable y no se efectuará la contribución a los institutos y Cajas de Previsión Social que determinan las leyes respectivas para el caso de aumentos de retribución; las partes aportarán como contribución única el porcentaje ordinario que esas leyes fijan sobre los haberes mensuales, aplicándolo al monto de la remuneración anual complementaria.
ARTICULO 6º.- El sueldo anual complementario no se liquidará al Presidente y Vicepresidente de la Nación, Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y legisladores nacionales.
ARTICULO 7º.- El sueldo anual complementario a que se refiere la presente ley, no podrá ser en ningún caso inferior de cien pesos moneda nacional (m$n. 100), debiendo abonarse esta suma, aún en los casos en que la doceava parte de lo percibido anualmente no alcanzara a dicha cifra.
ARTICULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se abonará con los fondos propios de cada repartición. La diferencia no cubierta con estos recursos se tomará, por el año 1946, de rentas generales, con imputación a esta ley.
ARTICULO 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a veinte días de diciembre del año mil novecientos cuarenta y seis.-

Fdo. J.H.Quijano, Ricardo C.Guardo, Alberto Reales y L.Zavalla Carbó.-

LEY Nº 12.915

POR TANTO:

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.-

DECRETO Nº 24.084.-

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1947.-

Atento la necesidad de reglamentar las disposiciones de la ley nº 12.915 que fija la remuneración anual complementaria para todos los agentes al servicio del Estado, y teniendo en cuenta las opiniones de los distintos Ministerios, Secretarías y Reparticiones,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

I.- Personal al que alcanza el beneficio:

ARTICULO 1º.- El derecho a percibir el sueldo anual complementario a que se refiere la ley nº 12.915, le corresponde a todos los agentes al servicio del Estado vinculados al mismo por una relación de dependencia.

Serán acreedores al beneficio aludido todos los agentes civiles al servicio de la Administración Central y Entidades Descentralizadas; el personal en actividad de las fuerzas armadas de la Nación y cuerpos de seguridad; Magistrados de la Justicia de todos los fueros; personal docente y del Clero, cuyos haberes se atienden con partidas individuales o globales del presupuesto, planos de obras, cuentas especiales, y los agentes de entidades subsidiadas.

Tendrán derecho asimismo a dicho beneficio:

a) Los militares expedicionarios al desierto;
b) Los miembros retirados de las fuerzas armadas que vuelvan al servicio activo o a cumplir funciones del servicio militar;
c) Los agentes que se hallen cumpliendo el servicio militar;

d) Los agentes reemplazantes o suplentes.

II.- Personal excluído del beneficio:

ARTICULO 2º.- Quedan excluídos de los beneficios que acuerda la Ley nº 12.915:

a) El Presidente y Vicepresidente de la Nación;
b) Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo Nacional;
c) Los Legisladores Nacionales;
d) Los soldados conscriptos, aspirantes, aprendices militares y cadetes de las fuerzas armadas de la Nación y cuerpos de seguridad;
e) El personal contratado para tareas o funciones especiales y determindas, cualquiera fuese su duración, cuya retribución aunque sea bajo la forma de pagos periódicos reúna las características de un honorario.

III.- Liquidación del beneficio:

ARTICULO 3º.- Los beneficios de la Ley nº 12.915 serán reconocidos al personal -con la sola excepción prevista para el ejercicio de 1946 por el artículo 3º de dicha ley- que hubiere permanecido en servicio durante todo o parte del año calendario, cualquiera fuese la forma de su retribución (a sueldo o jornal o por pieza o unidad de producción-destajistas) o la duración de las tareas a su cargo (permanentes o transitorias, continuas o discontinuas).

ARTICULO 4º.- La remuneración anual complementaria estará constituída por la doceava parte del total de las retribuciones que por servicios prestados a sueldo, jornal o a destajo, perciba el personal durante el respectivo año calendario.

Se computarán a los efectos de determinar las retribuciones del personal, los importes nominales resultantes de las siguientes asignaciones:

a) Personal a sueldo: El sueldo mensual y suplementos computados como tal a los efectos jubilatorios;
b) Personal a jornal: Los jornales básicos y suplementos computados como tales a los efectos jubilatorios;

c) Personal a destajo: La tarifa básica por pieza o unidad con exclusión de todo suplemento otorgado sobre dichas tarifas no computables como valor de la producción (bonificaciones por mayor costo de vida, etc.)

En el caso de personal que realiza tareas a destajo a domicilio, los Ministerios, Secretarías o Reparticiones determinarán mediante tablas de rendimiento máximo de producción individual, si se trata de destajistas o si revisten las características de contratistas. En este último caso, no habrá lugar al pago de la remuneración anual complementaria.

El desempeño de funciones especiales no remuneradas mediante las asignaciones determinadas en los apartados precedentes y que solo se compensan con sumas en concepto de viáticos o reintegro de gastos, no darán lugar a la liquidación del sueldo anual complementario.

ARTICULO 5º.- Para la liquidación de la remuneración anual complementaria a favor de los miembros retirados de las fuerzas armadas de la Nación que vuelvan al servicio activo, se computará el importe del sueldo equivalente al grado respectivo.

ARTICULO 6º.- El personal que se halle cumpliendo el servicio militar, percibirá la remuneración anual complementaria en relación a las retribuciones efectivamente percibidas durante el año. Igual tratamiento se aplicará a los reemplazantes de ese personal.

ARTICULO 7º.- El sueldo anual complementario no podrá ser en ningún caso inferior a cien pesos moneda nacional (m$n. 100), debiendo en consecuencia, abonarse esa suma cuando la doceava parte de los percibido anualmente no alcanzare a dicha cifra, siempre que el beneficiario se encuentre al servicio del Estado desde el 1º de enero al 31 de diciembre. A los efectos de la aplicación de este beneficio, considérase al servicio del Estado al personal que, manteniendo la relación de dependencia de la respectiva administración, por circunstancias ajenas a su voluntad y no atribuíbles al mismo, no preste servicios pe devengue haberes.

ARTICULO 8º.- Si el agente hubiere prestado servicios durante el año calendario en una sola Repartición, a los efectos de

percibir el mínimo de cien pesos moneda nacional (m$n. 100) a que se refiere el artículo anterior, deberá presentar con la antelación que determinen las oficinas liquidadoras, declaración jurada que acredite tal circunstancia.

En los casos en que el agente preste servicios durante el año calendario en distintas reparticiones o entidades del Estado, entidades subsidiadas, etc., percibirá de cada una de ellas la doceava parte de las retribuciones efectivamente devengadas en las mismas. Si el conjunto de la remuneración anual complementaria no alcanza al mínimo de cien pesos moneda nacional (m$n. 100) a que se refiere el artículo anterior, el agente sin perjuicio de recibir el importe liquidado, gestionará ante los respectivos organismos el pago de la diferencia. A tales fines mediante declaración jurada, informará sobre esa situación a las reparticiones que corresponda, debiendo éstas proceder a la liquidación de las diferencias, proporcionalmente al monto de lo pagado por cada una de ellas.

ARTICULO 9º.- La remuneración anual complementaria será liquidada el día 31 de diciembre de cada año. En los casos de renuncia, retiro, jubilación o fallecimiento, el personal o sus derecho-habientes podrán gestionar y tendrán derecho a percibir de inmediato la remuneración anual complementaria que les corresponda hasta el momento de dejar el servicio. En los casos de reestructuración de servicios u otras causas que determinen durante el ejercicio el cambio de jurisdicción del personal y de los créditos presupuestarios respectivos, el Ministerio, Secretaria o Repartición que se desprenda de esos elementos, comunicará al que corresponda, el monto de los haberes percibidos por ese personal en su anterior revista, debiendo liquidarse en forma total el sueldo anual complementario por conducto y con cargo a los créditos de la repartición en que reviste en la oportunidad que deba efectuarse el pago.

IV.- Financiación :

ARTICULO 10º.- El pago de la remuneración anual complementaria será financiado en la forma que se indica a continuación:

a) Personal de la Administración Central cuyos haberes se atienden con cargo al presupuesto general: con cargo al crédito que a tales fines tenga asignado el presupuesto;
b) Personal de entidades descentralizadas: con los recursos propios de cada organismo, entendiéndose por tales los provenientes de sus propias actividades, aportes del Estado, etc.

Las entidades que no cuenten con la respectiva partida procederán en el corriente año a su incorporación al presupuesto a los fines del cumplimiento de la Ley nº 12.915, y de conformidad con lo previsto en el artículo 4º de la ley nº 12.961;
c) Personal imputado a cuentas especiales: con los recursos propios de cada cuenta. En el caso de cuentas especiales que funcionan con presupuesto, deberá incorporarse a éste la respectiva partida;
d) Personal imputado a planes de obras y adquisiciones: con los recursos de las respectivas partidas de dichos planes;
e) Personal de entidades subsdiadas: con los recursos de las respectivas entidades, entendiéndose por tales los provenientes del subsidio nacional y los que obtuvieren de otras fuentes o por medios propios.

ARTICULO 11º.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la ley nº 12.961, el pago de la remuneración anual complementaria del personal imputado a cuentas especiales, que es costeado por empresas particulares, estará a cargo de dichas empresas, a cuyo efecto deberán ingresar a la Tesorería General de la Nación el importe equivalente al monto de la remuneración anual complementaria y del aporte patronal que corresponda.

V.- Disposiciones varias:

ARTICULO 12º.- La remuneración anual complementaria es inembargable y sobre la misma no podrán efectuarse otras quitas que la del porcentaje que las leyes de la materia disponen se ingrese mensualmente como aporte jubilatorio y las retencio-

nes por pago de impuestos cuando corresponda.

ARTICULO 13º.- A los efectos de la aplicación durante el ejercicio de 1947 del crédito de ciento cincuenta millones de pesos moneda nacional (m$n. 150.000.000) acordados por las leyes Nros. 12.931 y 12.938 (texto ordenado) el Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda procederá a su distribución por jurisdicción. Hasta tanto se efectúe esa distribución sobre la base de las informaciones que a tales fines deberán hacer llegar al Departamento de Hacienda los Ministerios y Secretarías, quedan en suspenso las órdenes de pago dictadas o que se dicten con cargo a dicho crédito.

ARTICULO 14º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

DECRETO Nº 37.569.-

Boletín Nº 65.-

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO - CONTRATADOS

Buenos Aires, 5 de febrero de 1949.-

Vuelva al Ministerio de Guerra para manifestarle que, en opinión de este Departamento a los Contadores, señores Julio Martínez y Juan Manuel Hornia les alcanzan los beneficios de la remuneración anual complementaria instituída por la ley nº 12.915.

Fundamenta tal criterio en el hecho de que las tareas que desempeñan los recurrentes en cumplimiento de las misiones específicas para las cuales fueron contratados, se hallan condicionadas a una relación de dependencia para con el Estado, percibiendo una remuneración mensual que, no obstante el carácter contractual de la prestación de servicios, configura un sueldo desde que reune todas las características de éste.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. R.A. Cereijo

RESOLUCION Nº 30.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 66.-

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO - CONTRATADOS

Buenos Aires, 10 de junio de 1949.-

Vuelva al Ministerio de Ejército para manifestarle que en opinión de este Departamento, al Jefe del Taller de Automotores, del Arsenal "Esteban de Luca", don Luis Antonio Copalbo le alcanzan los beneficios de la remuneración anual complementaria instituída por la ley nº 12.915.

Fundamenta tal criterio en el hecho de que las tareas que desempeña el recurrente en cumplimiento de la misión específica, para la cual fué contratado, se hallan condicionadas a una relación de dependencia para con el Estado, percibiendo una remuneración mensual que, no obstante el carácter contractual de la prestación de servicios, configura un sueldo desde que reune todas las características de éste.

Sirva la presente de atenta nota de envío.

Fdo. R.A. Cereijo

RESOLUCION Nº 161.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 67.-

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO - CONTRATADOS

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1949.-

Vuelva al Ministerio de Ejército para manifestarle que este Departamento considera que al Contador, don Eduardo Leslie Gibson no le alcanzan los beneficios del sueldo anual complementario, desde el 1º de mayo del corriente año.

Fundamenta tal criterio en el hecho de que la retribución percibida por el recurrente a partir de la fecha citada, no participa de las características de "sueldo", ya que no sufre descuentos por aportes a cajas de jubilaciones, encuadrado por lo tanto el caso en el artículo 2º, inciso e) del decreto nº 37.569/47 que excluye de los beneficios que establece la ley nº 12.915 al "personal contratado para tareas o funciones especiales y determinadas, cualquiera fuese su duración, cuya retribución aunque sea bajo la forma de pagos periódicos, reuna las características de un honorario".

Por otra parte, cabe hacer notar que todos los pagos que el Estado hace como retribución de servicios comunes a sus agentes, sufren el descuento jubilatorio de práctica y ello contribuye a caracterizar la naturaleza de tales pagos. El propio sueldo anual complementario -que es algo accesorio o derivado de las retribuciones, sueldos o jornales que le dan origen- también experimenta la quita del aporte para jubilación conforme lo establece el artículo 5º de la ley nº 12.915.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. R.A. Cereijo

RESOLUCION Nº 213.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletin Nº 68.-

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO - COSTO DE VIDA

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1949.-

Vuelva al Ministerio de Marina para manifestarle que este Departamento considera, que el suplemento móvil estatuído por la ley nº 13.478 no debe computarse a los efectos de determinar la remuneración anual complementaria al personal retirado de las Fuerzas Armadas de la Nación, en funciones del servicio militar.

Fundamenta tal criterio en el hecho de que el suplemento variable de referencia fué creado "para compensar las oscilaciones del costo de la vida" y representa para el personal jubilado, retirado o pensionado lo que las bonificaciones suplementarias establecidas por los Decretos Nros.23.846/47 y 10.432/48 significaron en su oportunidad para los agentes en actividad al servicio del Estado, y a igual que aquellos es liquidado sin efectuarse sobre el mismo descuentos por aportes a montepio y no acrece el haber de retiro.

Teniendo en cuenta que las mencionadas bonificaciones por disposición expresa de los decretos que las reglamentaron y de lo prescripto por el apartado a) del articulo 4º del decreto nº 37.569/47, no se consideran a los efectos de determinar la remuneración anual complementaria, tampoco debe computarse el suplemento móvil, por reunir ésta las características similares a aquellas a que se ha hecho referencia precedentemente.

Sirva la presente de atenta nota de envio.-

Fdo. R.A. Cereijo

RESOLUCION Nº 307.-

Boletín Nº 69.-

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO - ORGANISMO DESCENTRALIZADOS

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1949.-

Vuelva al Ministerio de Economía para manifestarle, con respecto a la consulta formulada en las presentes actuaciones que este Departamento considera que al personal de los organismos descentralizados dependientes de esa Secretaria de Estado, debe liquidársele la remuneración anual complementaria en base al sueldo nominal percibido al 31 de diciembre del corriente año.

Fundamenta tal criterio la circunstancia de que los mencionados organismos, incorporados al sistema bancario oficial con anterioridad a la sanción de la ley nº 12.915 quedaron sometidos al régimen de dicho sistema y, por consecuencia, con idéntico derecho a gozar del beneficio del sueldo anual complementario aplicado por el Banco Central, no pudiendo quedar éste enervado por el solo hecho de no haberse puesto en práctica con anterioridad a la ley nº 12.915, en dichos organismos, aquel régimen.

Por ello, entiende este Departamento que al personal de los organismos mencionados, deberia liquidársele el sueldo anual complementario conforme a las normas que rigen para el Sistema Bancario Oficial del cual formaron parte, sin que el hecho ya referido, como asi tampoco el cambio de jurisdicción, pueda modificar esa situación especialmente ante los términos del articulo 4º de la ley nº 12.915 de los cuales surge el propósito del legislador de que no aparezcan lesionados aquellos derechos adquiridos en virtud de otros regímenes existentes.

Sirva la presente de atenta nota de envio

Fdo. R.A. Cereijo

RESOLUCION Nº 315

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 70.-

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO - CONTRATADOS

Buenos Aires, 19 de enero de 1951

Vuelva al Ministerio de Salud Pública para manifestarle, con respecto a la consulta formulada en las presentes actuaciones, que este Departamento considera que la retroactividad de la afiliación al Instituto Nacional de Previsión Social es al solo efecto del cómputo de servicios para fines jubilatorios.

Estima, por lo tanto, que el personal contratado con relación de dependencia para con el Estado, que se afilie al Instituto de referencia, debe liquidársele la remuneración anual complementaria, a partir de la fecha en que dicha afiliación se efectúe.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. R. A. Cereijo

RESOLUCION Nº 19.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 71.-

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1951.-

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para referirme a la consulta formulada en su atenta nota de fecha 12 de febrero de 1951, respecto a si las sumas que se liquidan al personal en concepto de casa-habitación, deben ser computadas a los efectos del sueldo anual complementario instituido por la ley nº 12.915.

Dicha consulta se formula teniendo en cuenta:

1º) Que el artículo 4º del decreto nº 37.569/47, reglamentario de la ley nº 12.915, establece que se computará a los efectos de determinar las retribuciones que integrarán el cálculo del sueldo anual complementario "el sueldo mensual y suplementos computados como tal a los efectos jubilatorios".

2º) Que la prestación de casa-habitación tiene asignado un valor locativo para los aportes al Instituto Nacional de Previsión Social -Sección ley nº 4349, en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto nº 12.582/46.

Al respecto, este Departamento debe expresar que no obstante la circunstancia señalada precedentemente, en el sentido de que por los beneficios concedidos en concepto de casa-habitación se efectúan aportes jubilatorios, y la disposición reglamentaria que determina la computación, a los fines de la ley nº 12.915, "del sueldo nominal y suplementos computados como tal a los efectos jubilatorios", no corresponde incluir dentro de esa norma reglamentaria el beneficio de la casa-habi-

tación, por tratarse ésto de un concepto expresamente excluido por la propia ley nª 12.915 en su artículo 2ª.

Para mayor información sobre este aspecto, se acompaña copia del informe producido por la Contaduría General de la Nación con fecha 10 de abril ppdo. y dictamen del señor Procurador del Tesoro del 30 del mismo mes.

Saludo al señor Presidente con mi consideración más distinguida.

Fdo. R. A. Cereijo

Señor Presidente del Banco Hipotecario Nacional
Don Alfredo J. Alonso
S / D.

ANEXO A LA NOTA Nº 758/51

Excmo. señor Ministro de Hacienda:

Esta Contaduría General interpreta que a pesar de la definición dada al "sueldo" por el artículo 1ª de la Ley nª 13.499, no corresponde computar a los efectos de la liquidación del sueldo anual complementario las sumas percibidas por los agentes en concepto de casa-habitación, por cuanto la exclusión ha sido establecida en forma clara y terminante por la ley nª 12.915. Cabe señalar que cuando esa ley consagró la excepción en su artículo 2ª, dió a esos pagos el alcance de "remuneraciones" y no de "reintegro de gastos", circunstancia esa que abona, a juicio de esta repartición, en favor de su pronunciamiento.

Aconseja, sin embargo, recabar sobre este punto la autorizada opinión del señor Procurador del Tesoro, y solicita desde ya a V.E. quiera dignarse disponer se le comunique lo que se resuelva sobre el particular.

Contaduría General de la Nación, abril 10 de 1951.-

Fdo. Otto D. Rasmussen
Presidente

ANEXO A LA NOTA Nº 758/51

Señor Ministro de Hacienda:

El señor Presidente del Banco Hipotecario Nacional consulta V.E. si debe computarse, a los efectos de la determinación del sueldo anual complementario, el valor locativo asignado a la casa-habitación que el Banco proporciona a los gerentes de sucursales.

El artículo 4º del decreto nº 37.569/47 que reglamenta la ley nº 12.915, que instituyó el sueldo anual complementario para los servidores del Estado, dispone que se computarán a los efectos de determinar las retribuciones del personal, los importes nominales de las siguientes asignaciones:

"a) Personal a sueldo: El sueldo mensual y suplementos computados como tal a los efectos jubilatorios".

Cuando el texto transcripto establece que se computarán los importes nominales del sueldo y suplementos, excluye retribuciones que no sean nominales, es decir, en dinero.

Y no podría ser de otra forma, puesto que el artículo 2º de la ley nº 12.915 excluye a su vez y expresamente "cualquier otra remuneración sea en dinero efectivo especie o casa-habitación, que no sea una retribución, sueldo o jornal básico, nominales.

En derecho administrativo se entiende por retribución, sueldo o jornal básico, nominales, la cantidad que en dinero asigna el presupuesto respectivo, como remuneración del servicio.

La remuneración anual complementaria, está constituída por la doceava parte de la suma básica nominal percibida en concepto de pago por los servicios que se prestan.

A mérito de lo expresado y ante la claridad del texto legal, que no admite interpretaciones, no procede computar a efectos de la ley nº 12.915 el valor locativo de la casa-habitación que se asigne al personal.

Abril 30 de 1951.-

Fdo. Enrique C. Petrachi
Procurador del Tesoro de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 72.-

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO - JUBILACIONES - PENSIONES - RETIROS

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1951.-

Visto lo dispuesto por el artículo 17 de la ley nº 14.069 promulgada por decreto nº 21.434 de fecha 29 de octubre de 1951, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario establecer las disposiciones reglamentarias que posibiliten hacer efectivos los beneficios del haber anual complementario instituído por aquella ley para todos los jubilados, retirados y pensionistas, como así también para quienes gozan de pensiones a la vejez, cuyas prestaciones se acuerdan y liquidan por organismos o reparticiones dependientes de la Nación;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- El haber anual complementario instituído por el artículo 17 de la ley nº 14.069 para todos los jubilados, retirados y pensionistas, incluso los beneficiarios de pensiones a la vejez, será liquidado y abonado a partir del correspondiente al año 1951 inclusive, por las distintas Secciones del Instituto Nacional de Previsión Social; Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares y transitoriamente las Direcciones Generales de Administración o Administrativas de Ejército, Marina y Aeronáutica; Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal; Instituto Municipal de Previsión Social; y demás reparticiones o dependencias nacionales que tengan a su cargo el pago de pasividades, haberes y haberes de reti-

ros y pensiones a la vejez de acuerdo con lo dispuesto por el presente decreto.

ARTICULO 2º.- El haber anual complementario estará constituído por la décimotercera parte del total de los haberes de pasividad, haberes y haberes de retiro, y sus bonificaciones, que hubiere correspondido por todo concepto y por cada año calendario a partir de 1951 inclusive, a los jubilados, retirados y pensionistas (incluso los graciables, de leyes generales o especiales, etc.), titulares de haberes y beneficiarios de pensiones a la vejez.

Quedan igualmente comprendidos en los beneficios del haber anual complementario quienes perciban el adelanto previsto por la ley nº 13.576. Los haberes que se abonen por tal concepto serán deducidos de la primera liquidación definitiva que se practique.

ARTICULO 3º.- Cuando se operase la acumulación de diversos beneficios de pasividad, haberes o haberes de retiro a favor de una misma persona, liquidados y abonados por distintas reparticiones o dependencias de la Nación, cada organismo liquidará y abonará, a su vez, el haber anual complementario que corresponda a las prestaciones -incluso bonificaciones- que hubiera hecho efectivas a los beneficiarios durante el año respectivo.

ARTICULO 4º.- En los casos de organismos de previsión social a los que correspondiera el pago de prestaciones liquidadas con contribución de otras dependencias similares, el haber anual complementario será liquidado y abonado íntegramente por los primeros sin cargo para las segundas.

ARTICULO 5º.- Las primas correspondientes al Seguro de Vida Colectivo (Leyes Nros. 13.003 y 14.003) que deban abonar anualmente y por adentado los jubilados y retirados que continúen con el seguro, se deducirán del haber anual complementario.

En los casos en que el haber anual complentario no alcanzara para cubrir íntegramente el importe de la prima del seguro, las dependencias respectivas quedan autorizadas para completar dicho importe mediante la deducción pertinente sobre la liquidación y pago de beneficios correspondientes al mes inmediato siguiente.

Las primas referentes al año 1952 serán retenidas por los organismos que corresponda al hacerse efectivo el haber anual complementario del año 1951.

ARTICULO 6º.- La mayor erogación que signifique el pago del haber anual complementario establecido por la ley nº 14.069, será atendida con los propios recursos de los organismos que tengan a su cargo la liquidación y abono de dicho haber.

Para el caso de aquellas otras prestaciones o beneficios cuya financiación se atiende íntegramente con cargo a la Cuenta Especial -"Fondo Estabilizador de Previsión Social - Ley nº 13.478 - Artículo 3º", el Ministerio de Hacienda de la Nación propondrá al Poder Ejecutivo los ajustes legales de créditos que fuera menester a los efectos de posibilitar el pago de los haberes anuales complementarios correspondientes.

ARTICULO 7º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los departamentos de Hacienda y de Trabajo y Previsión.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.

DECRETO Nº 23.118.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletin Nº 73.-

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO - JUBILACIONES - PENSIONES - RETIROS - INHABILITACIONES

Buenos Aires, marzo 18 de 1952.-

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para manifestarle que el amplio criterio y finalidad social en que se inspira el artículo 17 de la Ley nº 14.069 que instituyó el beneficio del haber anual complementario para todos los jubilados, retirados y pensionistas, determina a este Departamento considerar que corresponde también liquidar dicho beneficio a quienes gozan de traspasos de haberes de pensión o retiro emergentes de lo dispuesto por el inciso 4º del artículo 19 del Código Penal.-

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

R. A. CEREIJO

RESOLUCION Nº 73.-

Boletín Nº74.-

SUELDO - DIFERENCIA DE HABERES - PRESUPUESTO - REEMPLAZOS

Buenos Aires, septiembre 14 de 1946.-

CONSIDERANDO:

Que entre las funciones asignadas a los Sub-Directores, a los Segundos Jefes de Reparticiones o al personal que haga sus veces, se encuentra la de reemplazar al superior en caso de ausencia;

Que es indispensable precisar las situaciones en que es procedente liquidar y abonar la diferencia de sueldo correspondiente al desempeño de la función retribuída en el Presupuesto con una mayor remuneración cuando los servicios exceden un tiempo prudencial, puesto que no sería equitativo que frente al mayor trabajo que el Estado usufructúa y ante el mayor esfuerzo y responsabilidad del funcionario o empleado se le negara la equitativa retribución;

Que tratándose de funcionarios o empleados, cuyos cargos no contengan por presupuesto especificación de tareas, el pedido del pago de la diferencia será procedente siempre que el Poder Ejecutivo o Resolución Ministerial cuando cuadre, los haya designado expresamente para el desempeño del cargo superior, y que se establezca en tal designación que tendrán derecho a percibir tal diferencia;

Que el Poder Ejecutivo en los casos a que se hace referencia en los considerandos anteriores puede disponer la liquidación y pago de las diferencias de sueldos correspondientes, cuando existan fondos que puedan afectarse a tal fin;

Que para todas aquellas situaciones en que no se cuente con el crédito necesario que permita resolver en forma favorable el reconocimiento de los servicios en cuestión, el Po-

der Ejecutivo ha sometido a consideración del H. Congreso de la Nación una disposición para ser incluída en la Ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto), que determina el procedimiento a seguir en estos casos;

Atento a lo informado por la Contaduría General de la Nación, lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro de la Nación y el Procurador General de la Nación y lo propuesto por el señor Ministro de Hacienda;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los funcionarios de la Administración Nacional incluídos los de las Reparticiones autárquicas, que tengan la obligación legal o reglamentaria de reemplazar los cargos superiores de la escala jerárquica respectiva tendrán derecho a reclamar las diferencias de sueldos existente entre ambos cargos, cuando concurran las tres circunstancias siguientes:

a) Cuando el sueldo del cargo superior se halle vacante o al titular no le corresponda la liquidación de haberes inclusive en los casos de suspensión no comprendidos en el artículo 22 del Acuerdo General de Ministros del 16 de enero de 1913.

b) Cuando el período de reemplazo, sea superior a 30 días.

c) Que el reemplazo sea legal o reglamentario. En los casos a que se refiere el artículo 3º del presente decreto, será requisito indispensable para interponer estos reclamos acompañar el original o una copia legalizada de la resolución que dicho artículo exige.

ARTICULO 2º.- Las disposiciones del artículo 1º, no podrán invocarse por los empleados o funcionarios, cuyos cargos no figuren en el presupuesto respectivo con especificación de tareas ni por aquellos que se desempeñen como Jefes de las Ofi-

cinas o Secciones que integran la Repartición donde prestan - servicios, los cuales deberán ajustarse a las normas especiales que rijan al respecto en la repartición o dependencia.

ARTICULO 3º.- Cuando se trate de funcionarios o empleados cuyos cargos no contengan por presupuesto especificación de tareas, el derecho a la diferencia será procedente únicamente - cuando por decreto del Poder Ejecutivo o resolución de autoridad competente de las Reparticiones Autárquicas, los haya designado expresamente para el desempeño del cargo superior y - establecido en tal designación que tendrán derecho a percibir tal diferencia, debiendo además en estos casos, concurrir los extremos que establece el artículo 1º del presente decreto, en sus apartados a), b) y c).

ARTICULO 4º.- Debe entenderse a partir de la fecha del presente decreto, que los funcionarios a quienes no se haya liquidado las diferencias a que pretendan tener derecho, se considera que han renunciado a cobrar dichas diferencias, si no interponen el pedido dentro de los 60 días subsiguientes a la - terminación del período en que se realizó la función en que - podía fundarse el reclamo.

ARTICULO 5º.- Facúltase a las Direcciones Generales de Administración o Reparticiones que hagan sus veces para liquidar directamente y con intervención de la Contaduría General de - la Nación, el importe de las diferencias de sueldos de que se trata.

ARTICULO 6º.- Tómese nota en la Dirección de Administración del Ministerio de Hacienda, comuníquese a quienes corresponda y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

DECRETO Nº 10.542/46.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 75.-

SUELDO - DIFERENCIA DE HABERES - PRESUPUESTO - REEMPLAZOS

Exp.nº 540.875/54 - Araoz Gregorio R.-
Reconocimiento de diferencia de haberes
(Dec. 10.542/46).-

///ñor Procurador del Tesoro de la Nación:

1º.- Se requiere el dictamen de esta Dirección con motivo de la solicitud interpuesta por el Doctor Gregorio R. Araoz, quien reclama -de acuerdo con las disposiciones del decreto nº 10.542/46- el pago de la correspondiente diferencia de haberes por haber reemplazado, en su carácter de Subasesor y Segundo Jefe del Departamento de Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Aduanas, al ex-Asesor y Jefe del mismo Departamento, Doctor Juan José Naón, durante el período que media entre el 1º de abril de 1953 y el 31 de agosto de 1954.-

La Dirección Nacional de Aduanas estima que no procede acceder a dicha solicitud y se funda para ello en el antecedente constituído por la resolución nº 22 del12 de febrero de 1951, fundada a su vez en el dictamen de esa Procuración de 25 de enero de 1951 (exp. 523.853/50), a cuyo contenido me remito para evitar repeticiones (ver fojas 3).-

2º.- Esta Dirección considera conveniente la revisión de la doctrina sentada en dicho dictamen, por ofrecer duda -a su juicio- la afirmación según la cual resultan inaplicables al personal aduanero las disposiciones del decreto 10.542/46 en virtud de lo establecido en el artículo 19 del régimen de escalafón implantado por decreto 4113/48.-

En efecto, no parece que exista contradicción entre ambos ordenamientos:

1) porque el decreto 10.542/46 (Boletín del M. de H., a-

ño 1946, p. 2047) se aplica a todos "los funcionarios de la Administración Nacional, incluídos los de las reparticiones autárquicas, que tengan la obligación legal o reglamentaria de reemplazar los cargos superiores de la escala jerárquica respectiva", y no se vé razón alguna para excluir a los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas de beneficios que se conceden a todos los demás funcionarios de la Administración Nacional;

2) porque el decreto 4113/48 (Boletín del M. de H., año 1946, p. 401) no hace más que establecer un régimen o escalafón de promociones sobre las siguientes bases: a) retribuciones básicas por categorías en función de la tarea desempeñada por el agente, y b) adicionales por antigüedad sobre la base de la calificación; se trata, por consiguiente, de un régimen análogo a muchos de los regímenes implantados en estos últimos años en casi todas las reparticiones, ninguno de los cuales priva a su personal de los beneficios acordados por el decreto 10.542/46;

3) porque el artículo 1º del decreto 4113/48 no contiene en rigor más que una enunciación del principio según el cual es facultad privativa del Jefe de la Repartición la de disponer el "traslado" del "personal administrativo" de una a otra tarea o función, cuando así lo considere conveniente por razones de servicio, sin que ello altere, como es natural, la situación escalafonaria del agente; si esta situación se alterase y ocasionara aumentos o disminuciones de sueldos, se producirían situaciones de ascensos o retrogradaciones que son, por su carácter de tales, ajenas a los regímenes escalafonarios;

4) porque una cosa es el "traslado" de un empleado o funcionario de una a "otra" función, y otra -sin duda muy distinta- "la obligación legal o reglamentaria de reemplazar los cargos superiores de la escala jerárquica respectiva"; así, no puede decirse que existe "traslado" o "modificación" de funciones cuando, en cualquier organismo, el vi-

cepresidente, el subdirector, el subadministrador, el subgerente, el protesorero, el prosecretario o -como en el caso de autos- el subasesor, reemplazan, respectivamente, al presidente, director, administrador, gerente, tesorero, secretario o asesor del mismo organismo; por el contrario, esos reemplazos no constituyen sino un aspecto -y no el menos importante- del cumplimiento de sus propias funciones específicas -previstas por lo general en las leyes, estatutos o reglamentos- por parte de los reemplazantes;

5) porque tanto es así en el caso de autos, que la misma Dirección Nacional de Aduanas tiene dispuesto que "en lo sucesivo todo cambio de destino que signifique modificación de funciones del personal de la repartición, será resuelto exclusivamente por esta Dirección Nacional" (resolución nº 417/49, Boletín D.N.A., Vol. XII, nº 8, p. 897) y que "cuando razones de servicio, por bajas producidas por traslado, fallecimiento, renuncia, jubilación, cesantía, etc. de los titulares sea necesario proveer una función vacante con personal de otra categoría o designación, deberá solicitarse previamente a esta Dirección Nacional la autorización pertinente en los términos de la resolución nº 417 de agosto 4 ppdo., la que en caso de aceptarse lo será con carácter interino, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1º del decreto nº 4113/48" (resolución nº 525/49, ibid, nº 9, p. 1033); aquí no ha mediado ninguna resolución de traslado o cambio de funciones del Doctor Araoz y no se ha hecho, su consecuencia, aplicación de lo dispuesto por el artículo 19 del decreto 4113/48, sin duda por que ello era evidentemente improcedente, toda vez que se trataba de un reemplazo de carácter reglamentario, según resulta, ya del artículo 5º de la resolución 136/46, aprobada por decreto nº 15.024/46 (Boletín del M. de H., año 1946, p. 1117/21), ya del artículo 6º del decreto nº 5882/49 (Boletín del M. de H., año 1949, p. 880);

6) porque lo dispuesto por el artículo 19 del decreto nº 4113/48 se relaciona más bien, como norma especial, no con las normas del artículo 1º del decreto 10.532/46, sino con -

las del artículo 2º y 3º de este último, que prevén precisamente los casos en que el desempeño de un cargo superior no resulta de la obligación legal o reglamentaria de reemplazar los cargos superiores de la escala jerárquica respectiva.-

3.- Por lo expuesto, al entender que las disposiciones de los decretos 10.542/46 (artículo 1º) y 4113/48 (artículo 19) constituyen normas reguladoras de distintas situaciones y que no se observa entre ellas, por lo tanto, contradicción o concompatibilidad que haga aplicable en el caso el principio de la derogación tácita de la ley (lex posterior derogat priori), someto el asunto al señor Procurador, en carácter de consulta (decreto 34.952, artículo 8º, inciso a).-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 14 marzo 1955.-

Dictamen nº 39/955

Dr. CRISTIAN G. DEMARIA
Dtor.Gral.de A.Jurídicos

Expediente nº 540.875-1954.-Dr. - Araoz Gregorio R.,reconocimiento diferencia de haberes.-MINISTERIO DE HACIENDA (Consulta Cuerpo de Abogados del Estado).-

Señor Director General de Asuntos Jurídicos
Del Ministerio de Hacienda:

Comparto la opinión, que al formular la precedente consulta sustenta el señor Director General en el sentido de - que el artículo 1º del Decreto nº 10.542/46 y el 19 del Decreto 4113/48 son compatibles, no hay derogación tácita, entre otras razones, porque regulan situaciones distintas y - que por consiguiente, los reemplazos de cargos superiores - en la Aduana de carácter legal o reglamentario están regi - dos por el precitado artículo 1º del decreto de 1946 que reconoce el derecho a las diferencias de sueldos.-

Como la opinión del señor Director General está ampliamente fundada, sólo cábeme abundar con coincidentes consideraciones.-

Desde luego, lo que dejo dicho importe rectificar la - doctrina de mi dictamen del 25 de enero de 1951 que en co - pia corre a fojas 3, dado en el expediente 523.853/950 M. - Hacienda, en cuanto a la terminante afirmación de la inaplicabilidad del decreto 10.542/46 al personal aduanero por virtud de la derogación tácita operada por el decreto 4113/48, pues el nuevo examen de los precitados decretos me lleva a la convicción de que el régimen del artículo 1º del decreto de 1946 rige, indudablemente, respecto de dicho personal, - sin que sea obstáculo el artículo 19 del decreto 4113 de - 1948.-

En tal sentido, el mencionado dictamen fué dado con evidente error, que cumplo en reconocer expresamente.-

No tengo a la vista el expediente 523.853/950 M. Hacienda y ello me impide comprobar, si pese a la errónea doctrina de mi citado dictamen, la Resolución nº 22 de la Dirección Nacional de Aduanas fué la que al caso correspondia - por alguna particularidad del mismo, o si por el contrario, era aplicable el decreto 10.542/46 y aquella errónea doctrina influyó en la resolución de la Aduana.- Esa situación me permite sugerir al señor Director General, que según sea la decisión que en el presente caso recaiga, convendrá se sirva promover oportunamente la revisión del mencionado expediente, dando oportunidad al nuevo examen y pronunciamiento de esta Procuración.-

Volviendo a lo particular de la consulta, evidentemente, aparte de lo que resulta de la espera de aplicación expresa, la substancia del decreto 10.542/46 le caracteriza de ordenamiento general para regir en todas las Reparticiones de - la Administración Nacional.- Es un reglamento autónomo y precisamente por su carácter general, la importancia de su materia y ser destinado a unificar normas administrativas, es que fué dictado en acuerdo de Ministros, acuerdo, que por esas razones es de los que en doctrina se denomina "necesarios".-

Siendo así, y salvo, naturalmente, la derogación expresa -que en el caso sería muy difícil justificar- no puede presumirse la derogación tácita del artículo 1º del decreto nº - 10.542/46 por la vía de una disposición, que como el precitado artículo 19º, forma parte de un decreto común, dictado para una repartición del Estado, que como tal está sujeta a - los principios y normas del Reglamento general en tanto no - sea modificado por otro del mismo rango, y tanto mas, si como ocurre, sus normas y principios de indiscutida equidad, - son compatibles con la organización de cualquiera reparti - ción de la Administración Nacional.-

Reglamentos generales, y por eso dictados en acuerdo, de la índole del 10.542/46, suponen, al par de su estabilidad, por principio, que los posteriores de carácter común y aplicación particular para determinadas dependencias de la Administración, se han de amoldar a las prescripciones de aquellos y que su derogación, conforme al principio de la identidad formal del acto original y el que lo modifique o extinga debe ser por decreto de la misma especie -acuerdo- vale decir, derogación expresa, porque de lo contrario el Reglamento general perdería ese carácter y su correlativa fuerza merced a la reducción de su órbita de aplicación prevista y porque si de sus normas se entendieran tácitamente excluídas algunas reparticiones subsistiendo sin embargo para otras, se daría una inadmisible anarquía interadministrativa respecto de la materia regulada por el Reglamento general.-

El artículo 1º de dicho Reglamento de 1946 reconoce el derecho a las diferencias de sueldos para el personal con obligación legal o reglamentaria de reemplazar los cargos superiores, y lo que por su letra y substancia establece el artículo 19 del decreto 4113/48 es que el personal administrativo común de la Aduana -por oposición al con funciones de reemplazo o con tareas especificadas en el presupuesto,- según la terminología y diferenciación que involucra el Decreto-Acuerdo de 1946- es decir, el personal que por carecer de asignación específica presupuestaria de tareas, y precisamente por eso, es susceptible de ser destinado a las que las conveniencias del servicio ocasionalmente señalen, puede ser "trasladado" (movilizado) de una tarea, de una función a otra, sin que ese solo hecho origine derechos subjetivos respecto a diferencias de sueldos en los casos del desempeño de cargos superiores.-

Si, pues, el precitado artículo 19 del decreto de 1948 refiere a un personal distinto del previsto por el artículo 1º del Reglamento general de 1946, y si como ocurre, aquel

presupone el ejercicio de funciones superiores por la vía de "traslado" sin que en principio ello origine derechos a diferencias de sueldos, y el de 1946 lo reconoce expresamente para los reemplazos de orden legal o reglamentario, es evidente que se trata de situaciones diferentes regidas por distintas normas, lo que hace que ambas coexistan y en definitiva, que dicho artículo 19 del decreto de 1948 no pueda ser aplicado al personal de la Aduana en los casos a que refiere el artículo 1º del Reglamento general de 1946.-

Este Reglamento reconoce el derecho a las diferencias de sueldos en caso de tratarse de reemplazos legales o reglamentarios, vale decir, los que son de la función propia del cargo titular y el reemplazo es por ello automático, cosa que no ocurre en el caso del "traslado" del personal administrativo común por vía del artículo 19 del decreto de 1948 en que el desempeño de funciones superiores se origina en la circunstancial decisión de la superioridad por razones de conveniencia del servicio y en ejercicio de las facultades aparejadas por el orden jerárquico y la consiguiente subordinación que éste presupone.-

Pero cabe, de paso, señalar, que aún en este último caso -traslado- del personal administrativo común de la Aduana, la diferencia de sueldos que no funcione como derecho, constituye sin embargo una posibilidad.- En efecto; el artículo 19 del decreto 4113/48 faculta el traslado del personal administrativo sin que "origine" derecho a diferencias de sueldos, y el Reglamento general (artículo 2º decreto 10.542/46) refiere indudablemente a esa misma categoría de personal administrativo, estableciendo que no puede "invocar" dicho derecho. Pero esto no significa que esté absolutamente vedado reconocer diferencias de sueldos a ese personal, circunstancialmente, en los casos y con los requisitos previstos por el artículo 3º del Reglamento de 1946, pues de otro modo, esta disposición carecería de sujeto de aplicación y por ende, de objeto práctico.-

Esa coordinación de los preceptos del Reglamento general y del particular de la Aduana, posibilita justas soluciones, ya que si se entendiera que el artículo 19 del último citado impide reconocer diferencias para el personal administrativo común en todos los casos, al par de desentonar con el régimen, con la excepción del artículo 3º del Reglamento general de 1946, podría ser causa de situaciones faltas de equidad en caso de traslados a funciones superiores por largos lapsos o en razón de la importancia y responsabilidad de las mismas, etc.-

Por lo demás, son elementales normas de hermenéutica, que en los casos de Leyes o Reglamentos sucesivos del mismo origen, no cabe presumir la contradicción, ni que uno de carácter particular para determinada repartición derogue las normas y se aparte de los principios de otro general para todas las dependencias administrativas, tanto más, si no hay alusión al de esta última especie, así como también, que la interpretación debe orientarse hacia la compatibilidad y armonización de los textos, lo que hace que en este caso, la del artículo 19 del decreto 4113/48 no puede substraerse a la debida relación con las normas y principios del Reglamento general de 1946.-

Una interpretación del precitado artículo 19 que no atendiera a las disposiciones, principios y preceptos del Reglamento general, significaría admitir que sin causa expresa, en la Dirección Nacional de Aduanas habría de imperar, en perjuicio de su personal, un régimen, distinto del vigente con carácter general para el resto de las reparticiones de la Administración Nacional y en contra, precisamente, del propósito de "colocarlo en un pie de igualdad con respecto al de otras reparticiones del Estado" expresado en los considerandos del propio decreto 4113/48 como uno de sus dominantes motivos.-

Es, pues incuestionable, que el reemplazo ejercido por -

el Doctor Gregorio R. Araoz, de las funciones de Asesor Jefe del Departamento de Asesoría Legal de la Aduana, como obligación de su entonces cargo titular de Sub-Asesor segundo Jefe de dicho Departamento, es extraño al régimen previsto por el artículo 19 del decreto 4113/48, y que atento su carácter reglamentario (artículo 5º decreto 15.024/46 y artículos 6 y 11 decreto 5852/49) y habiéndose cumplido los requisitos de vacancia de sueldo y período, está regido por el artículo 1º del Decreto Acuerdo 10.542/46 asistiéndole el derecho que invoca respecto de las diferencias de sueldos, que, por tanto, deben ser liquidadas.-

Naturalmente, no puede ser obstáculo para que se resuelva así, ni la doctrina de mi dictamen dado en el expediente 523.853/950 M. Hacienda porque por errónea la dejo absolutamente rectificada, ni la que coincidente con aquel dictamen informa la Resolución nº 22 de la Dirección Nacional de Aduanas, puesto que en cualquier hipótesis sobre particularidades del caso en que dicha Resolución recayó, el artículo 19 del decreto 4113/48 no comprende la situación del Doctor Araoz porque revista en una categoría de personal distinta del que dicho artículo prevé y porque atento a que el suyo fué un reemplazo de carácter reglamentario, está regido, como lo he dicho, por el artículo 1º del Decreto Acuerdo nº 10.542/946.-

Dejo, pues, evacuada la consulta y agradezco al señor Director General, que al provocar la revisión de mi comentado dictamen del 25 de enero de 1951, haya dado oportunidad para advertir el error y para la consiguiente rectificación.

Abril 12 de 1955.-

FAUSTO CORTES
SUB-PROCURADOR DEL TESORO

Buenos Aires, noviembre 24 de 1955.-

Vista la presentación efectuada en expediente número - 540.875/954 -Ministerio de Hacienda- por el Jefe de Departamento de 1ra. de la Dirección Nacional de Aduanas, doctor - GREGORIO RUBEN ARAOZ, por la que solicita se le reconozca y abone en los términos del artículo 1º del decreto número - 10.542/946 la diferencia de haberes entre el cargo de 2º Jefe de Departamento de 1ra. (Sub-Asesor Legal) y el de Jefe de igual dependencia (Asesor Legal), por el período comprendido entre el 1º de abril de 1953 y el 31 de agosto de 1954, en que desempeñó esas funciones por vacancia del cargo superior, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1º del decreto 10.542/946, dado en acuerdo general de ministros, declara procedente el reconocimiento a la diferencia de haberes cuando concurren las siguientes circunstancias: a) cuando el sueldo del cargo superior - se halle vacante o al titular no le corresponda la liquidación de haberes, inclusive en los casos de suspensión no comprendidos en el artículo 22 del acuerdo general de ministros del 16 de enero de 1913; b) cuando el período de reemplazo - sea superior a 30 días; c) que el reemplazo sea legal o reglamentario;

Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, restaría acreditar la presencia del último requisito señalado en el considerando precedente, ya que la de los dos anteriores es obvia, y a tal efecto, basta con recordar que la resolución nº 136/946, de la Dirección Nacional de Aduanas, aprobada por decreto nº 15.024/946, que reglamenta el funcionamiento y la organización de la Asesoría

Legal, dispone en su artículo 5º: "El Director estará secundado por un Sub-Director con título de abogado, quien en su carácter de Sub-Asesor Letrado y sin perjuicio de las tareas que expresamente se le asignen en el Reglamento Interno de la Dirección de Asuntos Legales, reemplazará al Director en caso de ausencia o impedimento de cualquier naturaleza";

Que no obsta para el reconocimiento del derecho en cuestión, la presencia del artículo 19º del decreto nº 4.113/48 -Escalafón para el Personal de la Dirección Nacional de Aduanas- por cuanto el mismo sólo está referido a la facultad del Jefe de la Repartición para disponer el traslado del personal administrativo de una a otra función o tarea, cuando por razones de servicio así lo considere conveniente, pero que sin duda alguna no puede alcanzar a situaciones como la que se debate, en la que el cambio de función nace de la obligación legal o reglamentaria de reemplazar al superior jerárquico;

Que en ese sentido, tal como lo expresa el señor Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda y lo corrobora el señor Sub-Procurador del Tesoro, lo estatuído por el artículo 12º que se comenta, no tiene relación con las disposiciones del artículo 1º del decreto número 10.542/46, que trata de reemplazos reglamentarios o legales de cargos superiores de la escala jerárquica, sino más bien con las situaciones contempladas en sus artículos 2º y 3º, referidas a los agentes cuyos cargos no figuran en el presupuesto respectivo con especificación de tareas;

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por la Procuración del Tesoro de la Nación y lo informado por la Contaduría General de la Nación,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Reconócese de legítimo abono a favor del Je-

fe de Departamento de 1ra. de la Dirección Nacional de Aduanas, Doctor GREGORIO RUBEN ARAOZ, la diferencia de haberes existente entre el cargo de 2º Jefe de Departamento de 1ra.- y el de Jefe de igual dependencia, por el período comprendido entre el 1º de abril de 1953 y el 31 de agosto de 1954, en que desempeñó esas funciones por vacancia del cargo superior, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º del decreto nº 10.542/946.-

ARTICULO 2º.- Interprétase que el artículo 19º del decreto número 4.113/948 -Escalafón para el personal de la Dirección Nacional de Aduanas- no es de aplicación cuando el cambio de funciones de un agente nace de la obligación legal o reglamentaria de reemplazar al superior jerárquico.-

ARTICULO 3º.- La erogación que demande lo estatuído por el artículo 1º, será atendida con cargo a las disposiciones de la ley nº 13.654.-

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.-

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos.-

A R A M B U R U
EUGENIO A. BLANCO

Boletín Nº 76.-

AFECTACIONES - EMBARGOS - CREDITOS AL EMPLEADO PUBLICO - SUELDO - RELACION DE EMPLEO

Expediente Nº 71.136 - 1947.-
Coronado Máximo César. Acompaña poder especial otorgado a su favor por don Carlos Soriano cobro haberes.-
MINISTERIO DE HACIENDA

Señor Ministro:

Se presenta ante el señor Administrador de la Aduana de la Capital don Máximo César Coronado en su carácter de apoderado especial de don Carlos Soriano Monasterio, que ocupa el cargo de Oficial 9º de esa repartición. La condición invocada está legalmente acreditada con el instrumento público que corre agregado de fs. 3 a 5 de este expediente.

El apoderado está acreditado para percibir el sueldo que tiene asignado el mandante como empleado de la Administración Nacional y firmar en su nombre recibos, planillas y toda otra documentación que se le exija, como asimismo los demás actos necesarios para el mejor desempeño del mandato.

Dice Bielsa en su tratado de Decreto Administrativo, Tomo II, pág. 79 y vta. 2a. edición, 1929, al referirse a las características generales y legales del sueldo: "El derecho a un sueldo determinado nace del acto legislativo o Administrativo quelo concede, y se expresa generalmente en el nombramiento". "Asignado el sueldo, él se convierte en un derecho patrimonial, atribuye la facultad de exigirlo en los períodos fijados (mensualidades o anualidades) y de demandar su pago ante los tribunales. El derecho al sueldo nace con el nombramiento,

pero, como retribución de servicios que es, sólo se percibe desde que se inicia la prestación de servicios".

Puede el empleado en consecuencia disponer de sus haberes a voluntad, salvo las restricciones impuestas expresamente por disposiciones legales.

No percibe su sueldo nominal íntegro, ya que está obligatoriamente gravado con un descuento destinado a la Caja de Jubilaciones en concepto de aporte para tener derecho oportunamente al retiro de la Administración. En la misma forma y de acuerdo al monto, el Estado ejerce funciones de agente de retención para el cumplimiento de la liquidación del Impuesto a los Réditos y deduce del sueldo el importe correspondiente al impuesto.

Quiero significar con esto que el agente no puede disponer a su arbitrio del total nominal de sus haberes, sino que a sus manos llega el sueldo con las mermas impuestas por las leyes y en esas condiciones, percibido el remanente por el empleado, la administración es ajena al uso o destino que se dé al dinero legítimamente percibido.

Esto en cuanto a las relaciones entre el Estado y su empleado.

Ahora es necesario analizar la cuestión bajo otro aspecto y ese es, no la vinculación entre administrador y empleado, sino las relaciones del empleado con respecto a terceros.

La legislación existente sobre la materia tiende a asegurar al empleado la regularidad en el cumplimiento de sus obligaciones y a tales efectos le asegura una parte de sus haberes no supeditada a gravamen alguno, y el excedente sólo es pasible de embargos en escala proporcional de sueldo que goza el agente. En esta forma quien no pueda normalmente cumplir con sus compromisos sabe que las medidas judiciales que en su contra se adopten no le insumirán la totalidad de sus ingresos, sino que siempre contará con una parte libre de los mismos para cubrir sus necesidades.

Así lo establece con amplio espíritu social la Ley 9511.

Su artículo 1° determina que no son susceptibles de embargo ni pueden ser enajenados ni afectados a terceros por derecho alguno los salarios, sueldos, jubilaciones y pensiones que no excedan de cien pesos moneda nacional mensuales.

El art. 2° establece la proporción embargable de los sueldos fijando una escala de afectaciones la que es ineludible - cumplir aún en el caso de que se compruebe transferencia o constitución de derechos por el valor íntegro del sueldo.

La única excepción que reconoce la ley 9511 está contenida en el art. 40 y refiere a la inaplicabilidad de la escala en los créditos por pensiones alimenticias, litis expensas y operaciones con la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones.

Por otra parte el decreto 6754 de fecha agosto 26 de 1943 declara en su art. 1° inembargable los sueldos, salarios, etc. de los empleados y obreros de la Administración Nacional por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o compra de mercaderías, salvo en la proporción y condiciones establecidas en el referido decreto. El empleado puede de acuerdo a prescripciones contenidas en el decreto, contraer obligaciones previo cumplimiento de los requisitos allí exigidos, pero para garantizar el pago de las deudas contenidas no puede afectar más de el 20% de la remuneración nominal mensual.

Fué dictado este decreto con el fin de tratar de combatir el grave mal social de la usura y organizar fuentes sanas de créditos. Se estimuló a los Bancos serios y entidades con capitales disponibles a invertir sus fondos en préstamos a los empleados públicos, garantizándoles el cumplimiento con una parte del haber mensual del deudor, el que no puede en ningún caso afectar o ceder un porcentaje del sueldo superior al 20%.

Le está vedado entonces al agente del Estado disponer de su sueldo discrecionalmente para el servicio de sus obligaciones, cuando esta operación se realiza por intermedio de la Administración.

Analicemos ahora concretamente el caso en consulta.

El Oficial 9° de la Dirección General de Aduanas confiere poder para que en su nombre y representación se perciban íntegramente sus haberes.

No se especifica en el instrumento público pertinente el motivo del acto jurídico realizado por el empleado.

No resulta tampoco de las actuaciones que el agente se encuentre imposibilitado para cobrar personalmente sus sueldos.

Por estas razones el acto realizado ante escribano público debe ser juzgado en base a lo que resulte de su texto.

Se trata, a mi criterio, de una cesión lisa y llana de la totalidad del sueldo que el empleado Carlos Soriano Monasterio efectúa a favor de Emma Esperanza Coronado de Soriano y de don Máximo César Coronado, ya que no otra cosa significa la autorización amplia contenida en el mandato para cobrar, percibir firmar recibos, planillas, etc.-

Siendo así y hasta tanto no se expongan razones que justifiquen el motivo que existe para que el empleado no pueda o no quiera percibir en mano propia la parte de su sueldo disponible, previa deducción de descuentos autorizados por disposiciones legales, no debe accederse a la solicitud de fs. 1.

Se opone a ello las prescripciones contenidas tanto en la ley 9511 como en el decreto ley 6754 citados oportunamente en otra parte de este dictamen.

Puede tratarse aquí, y no soy categórico en el juicio por cuanto ello no resulta expreso del instrumento, de una enajenación o afectación a favor de terceros del total del sueldo de un empleado, operación ésta que no puede ser efectuada por intermedio de la Administración atento a la prohibición contenida en los arts. 1º y 2º de la ley 9511 y 2º del decreto 6754.

En la obra citada del Doctor Bielsa, pag.80 vta. y 81 se expresan conceptos que comparto en absoluto, aplicables a la cuestión en consulta. Manifiesta el maestro del derecho administrativo: "El sueldo, como también la jubilación y la pensión tiene un carácter alimentario; de ahí la regla incorporada en todas o casi todas las legislaciones: la inembargabilidad de sueldos total o parcial (ver ley 9511 2 de octubre de 1914). De modo que el principio general del derecho común

según el cual los bienes del deudor constituyen la garantía o prenda común de los acreedores admite, entre otros, una excepción relativa al empleado o funcionario público, excepción que consiste en que el derecho del acreedor sólo puede ejercerse en una parte determinada del sueldo de aquel, o no ejercerse (mínimum inembargable). La verdad es que la excepción legal obedece, más que a un interés del empleado, al interés de la Administración".

Este privilegio de la inembargabilidad, dice Bielsa, actualmente no representa un "retoño" de la antigua concesión inherente a la relación entre el Estado y el empleado y que se resolvía en una especie de protección preventiva ejercida por la Administración sobre sus empleados, privándolos de la libre disponibilidad de los bienes. Antes bien, esa protección legal aparece fundada en una necesidad de orden administrativo, de doble interés para el Estado, pues en esa forma asegura para conseguir sus fines generales, la continuidad del servicio público y evita complicaciones de contabilidad en el pago de los sueldos y el interés también de los mismos asalariados, los cuales, con las normas vigentes, tienen asegurado el mínimum indispensable para su subsistencia.

El Estado debe, en consecuencia velar por los intereses de sus empleados tratando de que el producto de su trabajo les llegue sólo afectado por gravámenes provenientes de disposiciones legales y que sea el agente, sin intervención estatal, el que haga uso del derecho de disponer libremente del sueldo neto incorporado a su patrimonio por la consiguiente prestación de servicio.

Concretando, en el caso en consulta no debe accederse a lo solicitado, ya que lo contrario significaría reconocer al empleado el derecho de ceder íntegramente y sin término sus sueldos a terceros, lo que estaría en pugna con las disposiciones legales comentadas.

Abril 2 de 1947.

Fdo. Bernardo Velar de Irigoyen.

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 77.-

DERECHO-HABIENTE - ACREEDORES - PAGOS

Expediente nº 75.460 - 1945.- Cerisola Raúl Pedro. S/pedido de oposición al pago de multas devengadas por su extinto esposo a doña María M. Perez de Quirno.-MINISTERIO DE HACIENDA.-

Señor Ministro:

La esposa del ex-empleado de la Administración de Impuestos Internos don Emilio F. Quirno percibió oportunamente la suma de m$n.264.98 liquidados a favor del causante en concepto de su participación legal en la multa impuesta por expediente nº 3317-20-1941.

Para formalizar la mencionada operación se han cumplido en este caso los requisitos exigidos por el acuerdo de ministros nº 16.800 de fecha febrero 7 de 1937.

Acreditó la recurrente su identidad, justificó el vínculo invocado en su presentación y ofreció una fianza que fué considerada satisfactoria por el encargado de juzgarla. Siendo así y ante la falta de impedimento conocido en aquella oportunidad se procedió al pago de la suma liquidada a favor del empleado fallecido.

Posteriormente se presenta ante el Departamento a cargo de V.E. don Raúl Pedro Cerisola, quien invocando el carácter de acreedor del extinto empleado, solicita la suspensión de pagos futuros a favor de la viuda de don Emilio F. Quirno, hasta tanto se desinterese del crédito que denuncia por un total de m$n.300.-

Se me consulta a raíz de esta presentación el procedimiento a seguir para casos futuros en que corresponda efec-

tuar liquidación de multas a favor del causante.

No basta a mi criterio la sola manifestación del recurrente para que en base a ella se adopten medidas que sólo se justifican cuando emanan de autoridad competente.

Es absurdo pretender que con la sola relación de antecedentes, la administración debe estar al servicio del solicitante y acreditarle a su favor, hasta su cancelación, una obligación de la que sólo se tiene conocimiento por sus manifestaciones.

Sin una orden judicial expresa la Administración no puede disponer de haberes que tiene o puede tener en custodia y para que ello ocurra, en el caso presente, el señor Cerisola debe iniciar las acciones judiciales del caso, tendientes al reconocimiento de su derecho.

No debe en consecuencia accederse a lo solicitado en el sentido de liquidar a favor del recurrente las multas que puedan corresponder al ex-empleado Quirno, pero sí corresponde tomar nota de la oposición formulada a los efectos de posibles ulterioridades.

En cuanto a la suma ya percibida por la señora de Quirno lo ha sido bajo su responsabilidad y afianzada por un empleado de la Administración Nacional. Responden ellos por los perjuicios o lesión de intereses que la extracción pueda ocasionar a terceros.

La Administración ha cumplido ajustándo el procedimiento a disposiciones reglamentarias. Son ahora los interesados - quienes deben solucionar sus problemas dentro de los márgenes legales.

Abril 17 de 1947.

Fdo. Bernardo Velar de Irigoyen.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín nº 78.-

FUNCIONARIOS PUBLICOS - PROHIBICIONES - PERSONAL - HONORARIOS- PROFESIONALES - JUICIOS - LITIGIOS

Expediente nº 74.976 - 1943
MINISTERIO DE HACIENDA.-

Señor Ministro:

La situación que plantea la Dirección General Impositiva ya ha sido considerada anteriormente con toda amplitud por esta Procuración del Tesoro.

En el expediente nº 76.921-1941 del Departamento a cargo de V.E. se emitió el dictamen que transcribo y reproduzco en sus partes pertinentes, dado que en él se evacúa la consulta que ahora se me formula.

Este dictamen tiene fecha 2 de junio de 1943 y dice así: "A mi criterio los empleados de la administración nacional no pueden en ningún caso cobrar honorarios a cargo del Fisco, salvo en los casos contemplados en el precepto legal citado, después de su modificación.

El texto primitivo del artículo 11 de la ley nº 11.672 era categórico en este sentido y no admitía ninguna clase de excepciones; su redacción era la siguiente:

"Los peritos y profesionales de cualquier categoría que desempeñen empleos a sueldo de la Nación, no podrán reclamar honorarios en los asuntos en que intervengan por nombramiento de oficio o en los que el Fisco sea parte".

La modificación operada en este artículo, con carácter de permanente en la Edición de 1940 de la Ley nº 11.672 convirtió su redacción primitiva en esta forma:

"Los peritos y profesionales de cualquier categoría, que desempeñen empleos a sueldo de la Nación, no podrán reclamar honorarios en los asuntos en que intervengan por nombramiento de oficio en los que el Fisco sea parte y siempre que las costas no sean a cargo de la parte

tuar liquidación de multas a favor del causante.

No basta a mi criterio la sola manifestación del recurr te para que en base a ella se adopten medidas que sólo se ju tifican cuando emanan de autoridad competente.

Es absurdo pretender que con la sola relación de antece- dentes, la administración debe estar al servicio del solici- tante y acreditarle a su favor, hasta su cancelación, una o- bligación de la que sólo se tiene conocimiento por sus mani- festaciones.

Sin una orden judicial expresa la Administración no pue disponer de haberes que tiene o puede tener en custodia y pa ra que ello ocurra, en el caso presente, el señor Cerisola b be iniciar las acciones judiciales del caso, tendientes al r conocimiento de su derecho.

No debe en consecuencia accederse a lo solicitado en el sentido de liquidar a favor del recurrente las multas que p dan corresponder al ex-empleado Quirno, pero sí correspond tomar nota de la oposición formulada a los efectos de posi ulterioridades.

En cuanto a la suma ya percibida por la señora de Quir lo ha sido bajo su responsabilidad y afianzada por un empl do de la Administración Nacional. Responden ellos por los p juicios o lesión de intereses que la extracción pueda ocasi nar a terceros.

La Administración ha cumplido ajustándo el procedimient a disposiciones reglamentarias. Son ahora los interesados - quienes deben solucionar sus problemas dentro de los márge legales.

Abril 17 de 1947.

Fdo. Bernardo Velar de Irigoyen.-

Boletin Nº 79.-

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - INDEMNIZACIONES - DAÑOS Y PERJUICIOS

Buenos Aires, 24 de octubre de 1944.-

Vistas las presentes actuaciones, en las que la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones por un lado, y varias personas, por otro solicitan: la primera, un pronunciamiento del Poder Ejecutivo que determine el aspecto relativo a la responsabilidad del Estado con respecto a los accidentes de tránsito ocasionados por vehículos de esa dependencia, y las segundas, indemnización por daños cometidos por hechos de sus agentes; y

CONSIDERANDO:

Que en principio parecería que nada se opusiera para que el Poder Ejecutivo, en presencia de elementos de juicio que acreditaran en forma indubitable la responsabilidad del Estado por hechos de sus agentes, así lo declarase por un decreto;

Que la experiencia y las modalidades infinitas de los casos particulares pondrían de manifiesto, en la práctica, un mínimo de hechos claros, fácilmente calificables, de los que sugiera en forma evidente la responsabilidad frente a hipótesis más numerosas de situaciones y hechos dudosos, de culpa concurrente, de culpa exclusiva de la víctima, etcétera;

Que para poder decidir la posición del Estado frente a ese mayor número de casos, en presencia de cuestiones dudosas, habría que contar, en primer término, con una documentación completa o con recursos legales eficaces para obtenerla, cuando no aparezca acumulada de oficio; existiendo el grave inconveniente, en lo administrativo, de carecer de normas básicas obligatorias para una y otra parte -Estado y reclamante- que aseguren un procedimiento eficaz ("litis contestatio", término-

no, emplazamientos, recusaciones, designaciones de peritos, responsabilidad de testigos y peritos, etcétera);

Que la solución de esos casos dudosos se prestaría a la intervención interesada y a veces perniciosa de personas influyentes;

Que en lo que se refiere a la indemnización, la Procuración del Tesoro ha sostenido invariablemente que no procede el pago, por vía administrativa, de indemnizaciones derivadas de hechos producidos por los agentes de la administración pública, en el ejercicio legítimo de sus funciones, de forma que lleguen a determinar la responsabilidad del Estado, debiéndose dejar librada la cuestión a los tribunales federales, a fin de que los mismos hagan la estimación del monto de los perjuicios sufridos;

Que aun suponiendo que fuera viable el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, por acto del Poder Ejecutivo, los damnificados tendrían igualmente que recurrir a una acción ordinaria para determinar el "cuantum" de la indemnización, y resulta, en consecuencia, preferible, al no poder evitarse el proceso judicial, que se deje librado a la estimación de los tribunales tanto lo relativo a la responsabilidad como lo que se refiere al importe de la reparación.

Por ello, y atento a las informaciones producidas,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, EN

ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Declárase que el Poder Ejecutivo no admitirá, por vía de gestión administrativa, la responsabilidad del Estado en las reclamaciones por daños y perjuicios que se promuevan con motivo de hechos o accidentes en que sean parte sus empleados o agentes, acaecidos en circunstancias en que éstos realizan las funciones o tareas encomendadas; debiéndose dejar librada a la eventual contienda judicial, tanto lo relativo a la responsabilidad por las consecuencias de

los hechos o accidentes como lo que se refiera al monto de la compensación a que hubiera lugar.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General de Registro Nacional y archívese.-

DECRETO Nº 28.211.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 80.-

SUELDO - DIFERENCIA DE HABERES - PRESUPUESTO - REEMPLAZOS

//ÑOR MINISTRO: Expediente nº 74.667/952

Las presentes actuaciones tratan del reclamo interpuesto por el Oficial 2º de la Dirección de Obra Social, don OSCAR G. RODRIGUEZ, respecto al pago de la diferencia de haberes entre el cargo de que es titular y el de Jefe del Departamento Administrativo de la citada dependencia, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1952.

Según las constancias adjuntas, su prestación real de servicios al frente de la Jefatura de dicho Departamento, comenzó en abril de 1951 pero recién con fecha 1º de enero de 1952 ese cargo es incorporado al presupuesto de la dependencia. Por resolución nº 5 de la D.O.S., de 3 de marzo de 1952, por la que se asigna funciones a su personal, se designa al recurrente Jefe de la División Contralor y a cargo de la Jefatura del Departamento Administrativo. Posteriormente, la resolución nº 16, D.O.S., de 23 de junio del mismo, amplía los términos de la anterior y entonces se le asigna el cargo de Jefe (interino) del Departamento Administrativo "sin perjuicio de sus actuales funciones".

Al respecto, esta Dirección General estima que no le asiste al señor Rodriguez el derecho a percibir la diferencia que reclama y que funda en las disposiciones del decreto nº 10.546, Artículo 1º, inc. a), por las razones que se exponen a continuación:

1º) El inciso a) del recordado artículo 1º señala una de las tres circunstancias que deben concurrir para tener derecho al reclamo de la diferencia de sueldos pero, para ello, es necesario que se trate de un funcionario que tenga la obligación legal o reglamentaria de reemplazar los cargos superiores de la escala jerárquica respectiva, cosa que no ocurre en el presente caso.

2ª) El artículo 2ª del decreto comentado establece: "Las disposiciones del artículo 1ª no podrán invocarse por los empleados o funcionarios cuyos cargos no figuren en el presupuesto respectivo con especificación de tareas ...". Tal es la situación del señor Rodriguez, cuyo cargo no tiene especificación presupuestaria de tareas, ya que es simplemente un Oficial 2ª.

3ª) En el mejor de los casos sería de aplicación el artículo 3ª de aquel decreto, que dispone: "Cuando se trate de funcionarios o empleados cuyos cargos no contengan por presupuesto especificación de tareas, el derecho a la diferencia será procedente únicamente cuando por Decreto del P.E., o resolución de autoridad competente de las Reparticiones Autárquicas, los haya designado expresamente para el desempeño de un cargo superior y establecido en tal designación que tendrán derecho a percibir tal diferencia, debiendo además, en estos casos, concurrir los extremos que establece el artículo 1ª, en sus apartados a), b) y c)." Pero aún así observamos que en aquellas resoluciones no se dejo establecida la constancia de que esa designación daba derecho a percibir la diferencia de sueldos, y, por otra parte, la Dirección de Obra Social no es autoridad competente para disponer pues, de lo contrario, llegaríamos al absurdo de reconocer en favor de esa dependencia, facultades de nombramiento que son privativas del P.E. o del señor Ministro. en su caso.

4ª) Al emitir su opinión, tanto la Contaduría General de la Nación como el señor Procurador del Tesoro, no llegan al fondo de la cuestión, pues en ambos casos se limitan a establecer en términos generales que el reclamo podría prosperar siempre que concurran los requisitos exigidos por el decreto nº 10.542/46 y, como se ha demostrado, en estas circunstancias no son satisfechas ninguna de las exigencias a que alude el mencionado acto de gobierno.

5ª) Las facultades que invoca la Dirección de Obra Social y que le confería el decreto nº 8.854/49 no se discuten, pero ellas ni autorizan a efectuar asignación de funciones

con reconocimiente al cobro de la diferencia de haberes, ni van más allá de las que tienen las autoridades de las otras reparticiones que integran el Ministerio de Hacienda.

6º) Invoca también la Dirección de Obra Social los dictámenes de la Contaduría General de la Nación y de Procuración del Tesoro, expresando que son coincidentes con su opinión en el sentido de que el reclamo podría prosperar, pero como hemos visto, aquellos dictámenes no pueden considerarse como favorables ni decisivos, sino condicionados al cumplimiento de las normas establecidas por el decreto 10.542/46.

En síntesis, a juicio de esta Dirección General, no corresponde hacer lugar a la diferencia de sueldo que reclama el presentante y que, tal como queda demostrado, no puede ser fundamentada en ninguna disposición legal o reglamentaria.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 19-2-954

Buenos Aires, 19 de febrero de 1954.-

Atento lo informado por la Dirección General de Contabilidad y Administración en el reclamo interpuesto por el Oficial 2º de la Dirección de Obra Social, don OSCAR G. RODRIGUEZ, por el cobro de diferencia de haberes, y

CONSIDERANDO:

Que el caso planteado por el recurrente no se halla encuadrado en las disposiciones contenidas en el decreto nº 1.542/46, toda vez que no han sido reunidos los requisitos por él establecidos,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º) No ha lugar a lo solicitado.

2º) Gírese a la Dirección de Obra Social para su conocimiento y notificación al interesado y vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administración para su archivo.

Fdo. BONNANI

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

SUELDOS - DIFERENCIA DE HABERES - PRESUPUESTO - REEMPLAZOS. Boletín nº 81.-

Expediente nº 33.413/1955

Señor Ministro:

Por las presentes actuaciones, el ex-Oficial Superior de 9a. de la Dirección Nacional de Aduanas, don Luis Hivert, interpone recurso jerárquico en los términos del art. 4º del decreto nº 7.520/44, respecto de la denegación tácita recaída en su gestión ante las autoridades de la citada repartición, por intermedio de la cual solicitaba la diferencia de haberes existentes entre su categoría escalafonaria y el cargo de Jefe de la División "Coordinación y Control" que desempeñó durante el período comprendido entre el 1º de julio de 1952 y el 19 de noviembre de 1954, conforme a las disposiciones del decreto nº 10.542/46.

La Dirección Nacional de Aduanas, haciendo mérito de pronunciamientos anteriores producidos en casos análogos e invocando las prescripciones del art. 19 del decreto nº 4.113/48, sostiene la improcedencia del reconocimiento (fs. 4 vta. y 5).

Al ser requerida la opinión de la Contaduría General de la Nación, dicha repartición se remite a lo ya manifestado en expediente nº 540.875/54, donde sostuviera la necesidad de un pronunciamiento de carácter general por parte del P.E., destinado a establecer la compatibilidad de los decretos números 10.542/46 y 4.113/48, en los casos de reclamos de haberes por reemplazos de cargos jerárquicos superiores.

En este estado de las actuaciones es llamada a intervenir esta Dirección General, quien para una mejor solución del caso en debate estima oportuno traer a consideración los textos de aquellas disposiciones que las partes invocan en apoyo de sus respectivas posiciones.

1º) El decreto nº 4.113/48, establece un régimen de

promociones ó escalafon para el personal de la Dirección Nacional de Aduanas y su art. 19º, dice textualmente : "Cuando razones del servicio así lo exijan, el personal administrativo podrá ser trasladado en cualquier momento a otras funciones con retribución menor, igual o superior a la que perciba, sin que esa modificación reconozca derechos o cause perjuicios al agente, ni implique una alteración de las normas contenidas en el presente escalafón".

2º) El decreto nº 10.542/46, determina el régimen para el reconocimiento a la diferencia de haberes en favor de todos los funcionarios de la Administración Nacional, incluídos los de las reparticiones autárquicas, que tengan la obligación legal y reglamentaria de reemplazar los cargos superiores de la escala jerárquica respectiva. Dicho beneficio se halla sujeto a ciertas normas y entre ellas son de interés recordar para el caso que nos ocupa, las contenidas en los siguientes artículos:

Artículo 1º.- Los funcionarios de la Administración Nacional incluídos los de las Reparticiones autárquicas, que tengan la obligación legal o reglamentaria de reemplazar los cargos superiores de la escala jerárquica respectiva tendrán derecho a reclamar las diferencias de sueldo existente entre ambos cargos, cuando concurran las tres circunstancias siguientes:

a) Cuando el sueldo del cargo superior se halle vacante o al titular no le corresponda la liquidación de haberes inclusive en los casos de suspensión no comprendidos en el art. 22 del Acuerdo General de Ministros del 16 de enero de 1913.
b) Cuando el período de reemplazo, sea superior a 30 días.
c) Que el reemplazo sea legal o reglamentario. En los casos a que se refiere el art. 3º del presente decreto, será requisito indispensable para interponer estos reclamos acompañar el original o una copia legalizada de la resolución que dicho artículo exige.

Artículo 2º.- Las disposiciones del art. 1º, no podrán invocarse por los empleados o funcionarios, cuyos cargos no figuren en el presupuesto respectivo con especificación de tareas ni por aquellos que se desempeñan como Jefes de las Ofi-

cinas o Secciones que integran la Repartición donde prestan servicios, los cuales deberán ajustarse a las normas especiales que rijan al respecto en la repartición o dependencia.

Artículo 3°.- Cuando se trate de funcionarios o empleados, cuyos cargos no contengan por presupuesto especificación de tareas, el derecho a la diferencia será procedente únicamente cuando por decreto del P.E. o resolución de autoridad competente de las Reparticiones Autárquicas, los haya designado expresamente para el desempeño del cargo superior y establecido en tal designación que tendrán derecho a percibir tal diferencia, debiendo además en estos casos, concurrir los extremos que establece el art. 1° del presente decreto, en sus apartados a), b) y c).

Ahora bien, el caso a que alude la Contaduría General de la Nación y que fuera tramitado en expte. n° 540.875/54, se halla comprendido en el art. 1° del decreto n° 10.542/46. Es decir, es la situación de un funcionario cuyo cargo figuraba en el presupuesto con especificación de tareas - (2° Jefe del Departamento de Asesoría Legal) y siendo el reemplazante natural de su superior jerárquico (Jefe de Departamento), cargo que se hallaba vacante, resulta innegable su derecho al cobro de la diferencia de haberes. Tal - fué el criterio sostenido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y confirmado ampliamente por la Procuración del Tesoro, quienes llegaron a esa conclusión, luego de dejar expresamente establecida la inaplicabilidad del art. 19° del decreto n° 4.113/48 para casos como el considerado.

En mérito de ello fué confeccionado el respectivo proyecto de decreto -que a la fecha se encuentra a la firma del P. E.- en el cual, además de reconocer de legítimo abono la diferencia de haberes reclamada, se incluye un artículo -he aquí la sugerencia a que alude la Contaduría General de la Nación- concebido en los siguientes términos: "Interprétase que el artículo 19° del decreto n° 4.113/48 -Escalafón para el personal de la Dirección Nacional de Aduanas- no es de aplicación cuando el cambio de funciones nace de la obligación legal o reglamentaria de reemplazar al superior jerárquico".

En este orden de ideas, esta Dirección General considera que la analogía establecida por la Contaduría General de la Nación entre el caso del señor Hivert y el sustanciado por expediente nº540.875/54 solo puede invocarse en cuanto a la inaplicabilidad del artículo 19º ya recordado -a cuyo respecto ya el acto en gestión a que se alude precedentemente dará la norma definitiva-, por cuanto evidentemente se trata de un reemplazo reglamentario (art. 38, inc 1º del Reglamento General de Aduanas, fs. 4 vta.), pero en cambio ello no es suficiente para consagrar el derecho al cobro de la diferencia cuestionada. En efecto: deslindada ya la incidencia de aquel artículo 19º, corresponde someter el análisis de la solicitud del señor Hivert, a las prescripciones del decreto nº 10.542/46 y en ese sentido se observa que el cargo de Jefe de la División Coordinación y Control ejercido por el causante no figura en la nomenclatura presupuestaria con la especificación correspondiente. De consiguiente corresponde remitirse a lo estatuído por los artículos 2º y 3º del citado decreto nº 10.542/46 y según dichas disposiciones, tal como surge literalmente de su texto, no procede acordar el reconocimiento por no hallarse acreditados los requisitos exigidos.

Frente a lo expuesto, esta Dirección General estima que corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto, a cuyo efecto eleva a consideración del señor Ministro el proyecto de resolución respectivo.

DIRECCION GRAL. DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 19/10/55.

Fdo. Mariano Rodolfo Mei
Director General
de Contabilidad y Administración

D. M. Nº 61.-

Buenos Aires, octubre 31 de 1955

Visto el recurso jerárquico interpuesto por el ex-Oficial Superior de 9a. de la Dirección Nacional de Aduanas, don Luis Hivert, con motivo de considerar denegado el recurso de revocatoria de fs. 1, entablado por el cobro de diferencia de haberes, en virtud de que la mencionada dependencia no lo ha resuelto dentro del término que prescribe el art. 3º del decreto nº 7.520 de 28 de marzo de 1944, y

CONSIDERANDO:

Que el causante fundamentó su presentación de fs. 4 en lo dispuesto por el decreto nº 10.542 de 14 de setiembre de 1946, en virtud de haber ocupado en el período comprendido entre el 1º de julio de 1952 y 19 de noviembre de 1954, con la conformidad tácita de la superioridad, la Jefatura de la División "Coordinación y Control" dependiente del Departamento de Contralor de Importaciones y Exportaciones de la citada repartición, con un cargo de menor jerarquía al que por escalafón correspondía;

Que el cargo a que se alude precedentemente no figura en la nomenclatura presupuestaria con la especificación correspondiente, ni ha existido tampoco el acto del Poder Ejecutivo que al designar al causante para cumplir esas tareas hubiera reconocido a la vez su derecho a percibir la respectiva diferencia de haberes (art. 3º, decreto nº 10.542/46);

Que de lo actuado surge que el caso sub-examen se encuentra encuadrado en lo prescripto en el artículo 2º del decreto nº 10.542 de 14 de setiembre de 1946, que dispone que: - "Las disposiciones del art. 1º, no podrán invocarse por los empleados o funcionarios, cuyos cargos no figuran en el presupuesto respectivo con especificación de tareas ni por aquellos que se desempeñan como jefes de las oficinas o secciones que integran la repartición donde prestan servicios, los cuales deberán ajustarse a las normas especiales que rijan al respecto en la repartición o dependencia";

Por ello de conformidad con lo informado por la Dirección General de Contabilidad y Administración,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º.- No ha lugar a lo solicitado por el ex-Oficial Superior de 92. de la Dirección Nacional de Aduanas, don LUIS HIVERT.

2º.- Tómese nota y vuelva a la Dirección Nacional de Aduanas para su conocimiento y demás efectos.

Fdo. E.J. FOLCINI

RESOLUCION nº 4.873.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 82.-

SUELDOS - DIFERENCIA DE HABERES - PRESUPUESTO - REEMPLAZOS.

Expediente nº 43.917 - 1947 .-
Piñero Héctor M.- Director interino del Hospicio de las Mercedes s/reconocimiento de diferencia de sueldo.-
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA.

Buenos Aires, abril 4 de 1950.-

Señor Ministro de Salud Pública:

I.- El doctor Héctor M. Piñero solicita el reconocimiento del derecho a la diferencia de sueldos que entiende le corresponde, en razón de haber sido designado para desempeñar funciones con remuneración mayor a la del cargo de que era titular.

El doctor Piñero que revistaba como Oficial 8º -Médico Jefe de Servicio del Hospicio de las Mercedes- por resolución de V.E. de julio 28 de 1947 (fs. 2-Expediente 54.282/47) fué designado Director Interino del Hospicio.

II.- La situación del Dr. Piñero no se halla encuadrada en el decreto nº 10.542/46 que reglamenta la liquidación y pago de diferencia de haberes al personal de la Administración que desempeñe cargos superiores.

El decreto de referencia exige como condición fundamental para que la suplencia o interinidad traigan aparejadas el derecho a la diferencia de sueldos entre el correspondiente al cargo de que es titular y el del cargo que desempeña - como suplente o interino, que ella constituya una obligación legal o reglamentaria. (Art. 1º, 1er. apartado e inciso c).

En segundo lugar se exige que el sueldo del cargo superior se halle vacante (Art. 1º, inc. a).

Y en tercer lugar que el reemplazo sea por un período superior a 30 días (Art. 1º, inc. c).

Caracen de ese derecho los funcionarios o empleados -

cuyos cargos no figuren en el presupuesto respectivo con especificación de tareas (art. 2º), a menos que, por decreto del Poder Ejecutivo se los haya designado expresamente para el desempeño del cargo superior y establecido en la designación que tendrán derecho a percibir tal diferencia siempre que concurran los demás extremos que establece el art. 1º, y que acabo de puntualizar. (art. 3º).

Por consiguiente para que pudiese funcionar la autorización contenida en el art. 5º del citado decreto -liquidación automática de la diferencia de sueldos en favor de los beneficiarios- no solamente habría sido necesario que el Poder Ejecutivo hubiese designado al recurrente para desempeñar interinamente o en carácter de suplente el cargo de Director del Hospicio estableciendo expresamente que tendría derecho a la diferencia de sueldos, sino también que se contara con el crédito de presupuesto que permitiera la imputación respectiva -- (arts. 1º inciso a) y 3º, y considerando 5º).

No habiendo ocurrido así, el funcionario en tales condiciones carece de un derecho subjetivo para pretender la liquidación y pago de diferencia de haberes por haber cumplido funciones de un cargo de jerarquía superior (véase Corte Suprema Nacional - abril 8/1931 - Fallos: Tº 160 - pág. 165 - J.A. Tº 35 - pág. 529 - Cámara Federal de la Capital - abril 23/1940 - J.A. Tº 72 - pág. 320). Ni siquiera admite la jurisprudencia judicial que en tal hipótesis pueda hablarse de empleo útil o de enriquecimiento sin causa (Corte Suprema Nacional-Abril 16/1943 - Tº 195 - pág. 360).

Sin embargo, si es verdad que la equidad en el campo del derecho administrativo halla su expresión más acabada al decir de Scavonetti en la conocida fórmula de Romagnosi según el cual las relaciones entre los ciudadanos y el Estado deben ser de tal suerte, que se obtenga la máxima utilidad pública con la mayor ventaja y el mínimo sacrificio privado (L'Equitá della Pública amministraziones, en Studi in onore de Federico Cammeo - Volúmen II/1933 - pág. 508). El presente es un caso en que, sino por derecho ya que como lo hemos visto el recurrente carece de él sí por razones de equidad, el Poder Ejecutivo puede, si lo desea, reconocer de legítimo abono el pago de la diferencia de sueldos reclamados.

Advierte que nuestras prácticas administrativas han sido sensibles al principio de equidad que nadie debe enriquecerse a expensas de otro sin justa causa, en situaciones similares a la que plantea este expediente.

Y la propia doctrina y jurisprudencia extranjera también lo han admitido si bien considerando que las sumas que se abonaban en esas condiciones no lo eran en concepto de sueldo sino de indemnización. (Jeze: Les principes generaux de droit administratif - 3a. edición - 1930, vol. 2º, pág. 797/8. Bertrand: Le Statud de personnel communal - 1946, pág. 83 - Petrozziello, El rapporto de púbblico impiego 1935, pág. 318 nº 3º), distingo que en la oportunidad carece de importancia.

Fdo. ENRIQUE C. PETRACCHI
Procurador del Tesoro de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL.

Boletín nº 83.-

SUELDOS - DIFERENCIA DE HABERES - PRESUPUESTO - REEMPLAZOS

M E M O R A N D U M

Para información del señor Ministro

Las presentes actuaciones se relacionan con la gestión interpuesta por el oficial 4º de la Dirección Nacional de Química, Ingeniero MANUEL GONZALEZ BUELGA, a fin de que se le reconozca el derecho a percibir la diferencia de haberes existente entre el cargo de que es titular y el de Jefe de la División San Juan, que desempeña desde el 14 de febrero del año en curso, por renuncia del titular.

El asunto en cuestión guarda estrecha analogía con el que fuera tramitado por expte. nº 33.413/55 por el señor Luis Hivert, en cuya oportunidad esta Dirección General sostuvo la improcedencia del reconocimiento reclamado en mérito a las disposiciones contenidas en los arts. 2º y 3º del decreto nº 10.542/46, temperamento éste que fué homologado por la resolución ministerial nº 4.873/55 (se adjuntan antecedentes citados).

En este orden y conforme la jurisprudencia administrativa existente en la materia (expte. 74.667/52), esta Dirección General se remite a lo ya manifestado en el caso a que se hace referencia precedentemente, aconsejando no hacer lugar a lo solicitado por el recurrente.

DIRECCION GRAL. DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 15-11-955.

Expte. nº 41.370/55

Fdo. Santiago José Vicini
Director General
de Contabilidad y Administración

Buenos Aires, noviembre 18 de 1956.-

Visto el expediente nº 41.370, por el cual el oficial 4º de la Dirección Nacional de Química, don MANUEL GONZALEZ BUELGA, recurre de la resolución de aquella repartición, de fecha 1º de agosto último (fs. 2 vta.) que deniega su pedido de reconocimiento y pago de la diferencia de sueldo entre el cargo de que es titular y el de Jefe de la División San Juan, que viene desempeñando desde el 14 de febrero del año en curso, por renuncia de su titular, y

CONSIDERANDO:

Que el presentante invoca en apoyo de su gestión, la disposición contenida en el art. 1º, inciso a) y b) del decreto nº 10.542/46;

Que las prescripciones citadas están referidas a los funcionarios "que tengan la obligación legal o reglamentaria de reemplazar los cargos superiores de la escala jerárquica respectiva" y tal no es el caso del señor González Buelga, puesto que su nombramiento como Jefe interino de la dependencia no obedeció -es evidente- a un mecanismo normativo, sino a un acto discrecional o facultativo de las autoridades de la repartición;

Que el régimen previsto por la recordada disposición, está condicionado -art. 2º del decreto nº 10.542/46- a la circunstancia de que el cargo respectivo figure en presupuesto con especificación de tareas, cosa que tampoco ocurre en esta oportunidad;

Que por otra parte, no es aplicable en el caso sub-examen, la norma estipulada por el art. 3º del decreto ya citado, toda vez que no ha existido el acto del Poder Ejecutivo que al designar al causante para desempeñar el cargo superior le reconociera, a la vez, derecho a percibir la diferencia de haberes;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º.- No ha lugar a lo solicitado por el oficial 4º de la Dirección Nacional de Química, don MANUAL GONZALEZ BUELGA.

2º.- Tómese nota y vuelva a la Dirección Nacional de Química para su conocimiento y demás efectos.

Fdo. EUGENIO A. BLANCO

RESOLUCION nº 5.009.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín nº 84.-

SUELDO - DIFERENCIA DE HABERES - PRESUPUESTO - REEMPLAZOS

Expediente nº 74.016/1955.-

M E M O R A N D U M

Para información del señor Ministro

Las presentes actuaciones se relacionan con la gestión interpuesta por el Jefe de División de la Casa de Moneda don HECTOR LENA, a fin de que se le reconozca y abone la diferencia de sueldo existente entre el cargo de Oficial Principal (m$n.1.900.-) y el de Jefe de la División Impresiones Calcográficas (m$n.2.200.-) por el período que va desde el 1º de octubre de 1953 hasta el 31 de agosto de 1954.

El asunto en cuestión guarda estrecha analogía con el que fuera tramitado por expte. nº 33.413/55 por el señor Luis Hivert, en cuya oportunidad esta Dirección General sostuvo la improcedencia del reconocimiento reclamado en mérito a las disposiciones contenidas en los arts. 2º y 3º del decreto número 10.542/46, temperamento éste que fué homologado por la resolución ministerial nº 4.873/55 (se adjunta antecedentes citados).

En este orden de ideas y conforme la jurisprudencia administrativa existente en la materia (expte. 74.667/52 - Oscar G. Rodriguez; expte. 72.359/53 - Erasmo E. Calderone, etc.), esta Direccion General se remite a lo ya manifestado en el caso a que se hace referencia precedentemente, aconsejando no hacer lugar a lo solicitado por el recurrente.
DIRECCION GRAL. DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 16/11/1955.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1955.-

Visto el expediente nº 74.016/55, por el cual el Jefe de la Casa de Moneda, don HECTOR LENA, solicita el reconocimiento y pago de la diferencia de haberes existente entre el cargo de Oficial Principal (m$n.1.900.-), y el de Jefe de la División Impresiones Calcográficas (m$n.2.200.-), por el período comprendido entre el 1º de octubre de 1953 hasta el 31 de agosto de 1954, y

CONSIDERANDO:

Que el presentante invoca en apoyo de su gestión, la disposición contenida en el artículo 1º del decreto nº 10.542/46;

Que la prescripción citada está referida a los funcionarios "que tengan la obligación legal o reglamentaria de reemplazar los cargos superiores de la escala jerárquica respectiva" y tal no es el caso del señor Lena, puesto que su nombramiento como Jefe de la División Calcografica no obedeció -es evidente- a un mecanismo normativo del Jefe de la repartición (fs. 3);

Que por otra parte, tampoco es aplicable al caso sub-examen, la norma estatuida por el artículo 3º del decreto ya citado, toda vez que no ha existido el acto del Poder Ejecutivo que al designar al causante para desempeñar el cargo superior, le reconociera, a la vez derecho a percibir la diferencia de haberes;

Que el procedimiento fijado por la estipulacion comentada en el considerando precedente, tiene su razon de ser en el artículo 83 de la Constitución Nacional, que reserva al Presidente de la República -en su carácter de Jefe de la Administracion Nacional- la facultad de nombrar, en merito a lo cual, no es posible asignar funciones que configuren un cambio en la situación de revista prusupuestaria del personal, sin contar con la consiguiente aprobacion del Poder Ejecutivo;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º.- No ha lugar a lo solicitado por el Jefe de la División de Casa de Moneda, don HECTOR LENA.

2º.- Tómese nota y vuelva a la repartición citada para su conocimiento y notificacion al interesado.

Fdo. EUGENIO A. BLANCO

RESOLUCION nº 5.029.-

Boletín nº 85.-

SUELDO - DIFERENCIA DE HABERES PRESUPUESTO - REEMPLAZOS

Expediente nº 112.023/54

Señor Ministro:

En las presentes actuaciones el Contador Fiscal de la Contaduría General de la Nación, don Raúl Uzal, gestiona el reconocimiento y pago de la diferencia de haberes existente entre el cargo de 2º Jefe de la Inspección de Contabilidad y el de Jefe de la misma dependencia, por el período comprendido entre el 1º de febrero y el 31 de agosto de 1954.

Por resolución nº 49/54 de la Contaduría General de la Nación, se asignan al causante las funciones de 2º Jefe de la Inspección de Contabilidad y hallándose vacante la jefatura por renuncia de su titular, el mismo se desempeño interinamente al frente de la dependencia, durante el lapso ya señalado.

Dicho reemplazo se halla contemplado en el art. 4º del Reglamento que rige el funcionamiento del organismo (aprobado por resolución nº 2809/52), atento lo cual e invocando el régimen del art. 1º del decreto nº 10.542/46, el señor Uzal deja promovido el reclamo.

Al informar la gestión, la Contaduría General de la Nación admite que la misma no puede prosperar, salvo pronunciamiento expreso del P.E., por cuanto el cargo de 2º Jefe de Inspección de Contabilidad, no figura en el presupuesto con especificación funcional.

Dicho criterio concuerda con el reiteradamente expuesto por esta Dirección General (expte. 74.667/52 -Oscar G. Rodríguez; expte. 72.359/53 - Erasmo E. Calderone; expte. 41.370/55 - Manuel G. Buelga y expte. 33.413/55 - Luis Hivert) en el sentido de que las prescripciones del art. 1º del decreto nº 10.542/46 solo pueden invocarse (art. 2º), cuando el cargo del

interesado contenga la respectiva especificación de presupuesto y en caso contrario debe seguirse el régimen previsto en el art. 3º del mismo acto, a cuyo efecto resulta necesario el pronunciamiento del P.E., que al nombrar al agente para el desempeño del cargo superior, le reconozca derecho a percibir la diferencia de haberes. Ello es así por cuanto la facultad de nombrar, promover y remover a los agentes del servicio civil, es facultad privativa del Poder Ejecutivo -art. 83 de la Constitución Nacional- y no podrían asignarse funciones que configuren un cambio en la situación de revista presupuestaria, sin contar con la consiguiente autorización del Poder Administrador.

No obstante ello, se observa que en el informe de fs. 2, la Contaduría General de la Nación manifiesta que la situación planteada por el recurrente solo puede ser resuelta -en sentido favorable- por acto del Poder Ejecutivo, posición que no comparte esta repartición por cuanto un pronunciamiento de esa naturaleza dictado a posteriori y aún cuando fuera por vía de un decreto, entraña una excepción al régimen general instituido por el recordado art. 3º, según el cual, la intervención de aquella jerarquía es precisamente a los efectos de asignar las funciones, siendo evidente entonces que este acto, en un orden de acatamiento legal, debe ser previo o a lo sumo contemporaneo a la puesta en actividad del interesado.

Ensayar un procedimiento contrario a esa norma, configura un riesgoso precedente que no se justifica a mérito de dejar regularizada una situación de hecho.

En virtud de lo expuesto, esta Dirección General aconseja al señor Ministro no hacer lugar al reconocimiento solicitado.

DIRECCION GRAL. DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 9/12/1955

Fdo. Angel Bottero Torres
Director General
de Contabilidad y Administración

D.M. Nº 69.-

Buenos Aires, diciembre 14 de 1955.-

Visto el expediente nº 112.023/54, por el cual el Contador Fiscal de la Contaduría General de la Nación, don RAUL UZAL, solicita el reconocimiento y pago de la diferencia de sueldo existente entre el cargo de 2º Jefe de la Inspección de Contabilidad y el de Jefe de igual dependencia, por el período comprendido entre el 1º de febrero al 31 de agosto de 1954, y

CONSIDERANDO:

Que el presentante invoca en apoyo de su gestión, la disposición contenida en el artículo 1º del decreto nº 10.542/46;

Que si bien en principio concurren en la situación planteada, los extremos exigidos por la recordada norma, cabe hacer notar que segun el artículo 2º del mismo acto de gobierno, aquel beneficio no puede ser invocado por los agentes "cuyos cargos no figuren en el presupuesto respectivo con especificacion de tareas";

Que siendo tal el caso del recurrente, procede analizar su presentación a la luz de lo establecido por el artículo 3º del decreto nº 10.542/46;

Que en ese sentido se observa que no ha existido el acto del Poder Ejecutivo que al designar al causante para desempeñar el cargo superior, le reconociera, a la vez, derecho a percibir la diferencia de haberes;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º.- No ha lugar a lo solicitado por el Contador Fiscal de la Contaduría General de la Nación, don RAUL UZAL.

2º.- Tome nota la Dirección General de Contabilidad y Administración y pase a la Contaduría General de la Nación para su conocimiento y notificación al interesado.

Fdo. EUGENIO A. BLANCO

RESOLUCION Nº 5.248.-

SEÑOR MINISTRO:

Tratan los presentes actuados de la gestión promovida por el Contador Fiscal de la Contaduría General de la Nación, don Raúl Uzal, a fin de que se reconozca el derecho a percibir la diferencia de haberes existentes entre el cargo de 2° Jefe de la Inspección de Contabilidad y Jefe de la misma dependencia, por el período que va desde el 1° de febrero al 31 de agosto de 1954.

Por resolución ministerial n° 5.248 de fecha 14 de diciembre de 1955 (fs. 4), se dispuso no hacer lugar a dicha solicitud por no hallarse comprendida en las disposiciones del decreto n° 10.542/46, que rige la materia. A fs. 5, el causante recurre de dicha medida invocando las siguientes causales:

a) Que en el presente expediente faltan "importantes elementos de juicio, a saber: 1) proyecto de decreto firmado por el titular de Hacienda, que según expresa, tenia ya reservado el número 21.729, cuya copia agrega a fs. 6/7, y por el cual se accede a su reclamo; 2) memorandum de fecha 3 de diciembre de 1954 (fs. 8), producido por la Secretaría Administrativa de la Presidencia (cuya copia también agrega), donde se manifiesta que aquel proyecto de decreto se devolvió sin firmar por ser improcedente la excepción al decreto n° 10.542/46, y 3) memorandum sin firmar (fs. 10), que, según el interesado, corresponde a la Contaduría General de la Nación, donde dicha repartición apoya su petitorio.
b) Que resulta necesario recuperar los originales de la documentación señalada a fin de proveer de conformidad.
c) Que existen criterios dispares de la consideración de su gestión, y con tal motivo solicita se recabe la opinión del Señor Procurador del Tesoro.

Antes de entrar a considerar el aspecto de fondo que plantea la presentación del señor Uzal, esta Dirección General desea detenerse a formular algunas consideraciones respecto a las circunstancias invocadas en los puntos precedentes:

I) El suscripto desconocía por ser anterior a su gestión y no existir antecedentes alguno al respecto en esta

Direccion General, el origen del proyecto de decreto que se acompaña a fs. 6/7. Sin embargo no duda de su autenticidad, como tampoco de la del resto de la documentacion agregada y apoyado en ese mismo motivo desea destacar el hecho que el mencionado proyecto haya sido devuelto sin firmar por la Secretaria Administrativa de la Presidencia (fs. 8), por considerarlo improcedente frente a las normas del decreto nº 10.542/46. Esto, confirma el criterio sostenido por esta reparticion, en su informe de fs. 3.

II) La disparidad de criterio que señala el peticionante estaria evidenciada por los considerandos del aludido proyecto y la nueva opinion que habria vertido la Contaduria General de la Nacion, (luego de ser devuelto el mismo) segun copia de fs. 9, frente a la opinion - de la misma Contaduria General de la Nación emitida - anteriormente, lo expresado por la Secretaria Administrativa de la Presidencia de la Nación, el informe de esta Direccion General y la resolucion Ministerial nº 5.248/55.

Con motivo del recurso promovido por el señor Uzal, - ha tomado intervención la Dirección General de Asuntos Juridicos, quien expresa en primer termino que la resolucion ministerial nº 5.248/55 (fs. 4), dictada en estas actuaciones, se ajusta a las prescripciones en - vigor, ya que el caso del peticionante no encuadra en sentido estricto, en las normas dadas al efecto por el decreto numero 10.542/46. Ello no obstante manifiesta la reparticion aludida que, tal como lo señalara ya anteriormente la Contaduria General de la Nación, el Poder Ejecutivo podria, por via de interpretación y con carácter de excepción, hacer lugar al reclamo formulado.

Aceptado, ya que la ortodoxia del texto legal citado no - permite a este Ministerio la posibilidad de resolver favora - blemente el caso planteado, veamos si como lo propone la Contaduria General de la Nacion en su informe de fs. 2 y prevé la Dirección General de Asuntos Juridicos a fs. 12/13, debe

el Poder Ejecutivo autorizar excepcionalmente, a mérito de equidad, el reconocimiento impetrado. En tal sentido y si se reconoce validez al memorandum obrante a fs. 8, podría advertirse que ya la Presidencia de la Nación ha rechazado el intento, poniendo de manifiesto que no proceden excepciones al decreto nº 10.542/46, por cuanto el mismo es normativo. Sin embargo y admitida la posibilidad de una nueva gestion, esta Dirección General desea formular algunas consideraciones al respecto.

En primer lugar y en lo que hace a si el caso en cuestión estaria o no contemplado en el "espiritu de equidad" que habria inspirado las normas que regimentan el reconocimiento del derecho a la diferencia de haberes, esta reparticion considera necesario senalar que, contrariamente a lo que se supone, dicho texto legal no debe ser interpretado en forma amplia e ilimitada, sino que, siendo su objeto reprimir lo discrecional, en los reconocimientos de haberes por reemplazo, su carácter es netamente restrictivo.

En efecto, el parrafo inicial determina expresamente:"Que es indispensable precisar las situaciones en que es procedente liquidar y abonar la diferencia de sueldo correspondiente.." Esto es, que si el régimen de que se trata prevé textualmente las causas en que es viable el reconocimiento, por contrario imperio surge que, las no contempladas en el, no podrian prosperar.

Por otra parte, es evidente que el rigorismo del texto tiene por fundamento no consentir la delegación de facultades privativas del Poder Ejecutivo (art. 86 de. C.N.) y en tal sentido determina que no es suficiente la legalidad del reemplazo si no existe al mismo tiempo la especificacion funcional en el presupuesto respectivo (arts. 2º y 3º del decreto nº 10.542/46). Este criterio sirvió de fundamento a esta Dirección General para sostener su oposición al intento de proponer al Poder Ejecutivo el reconocimiento con carácter de excepción, de situaciones como la que se analiza, por cuanto un pronunciamiento de esa naturaleza dictado a posteriori, aún cuando fuera por vía de decreto, entraña apartarse del régimen general citado en su artículo 3º según el cual, la intervención de aquella jerarquía es precisamente a los efectos de asignar funcio

nes, siendo evidente entonces que ese acto, en un orden de acatamiento legal, debe ser previo o a lo sumo, contemporáneo a la puesta en actividad del interesado. Ensayar un procidimiento contrario a esa norma, configura un riesgoso precedente que no se justifica en mérito de dejar regularizada una situación de hecho.

Asi también lo ha entendido en otras oportunidades la misma Contaduría General de la Nación, quien en memorandum de fecha 17 de marzo de 1948, elevado a la Presidencia de la Nación, dijo textualmente: "Desde luego, que en los casos regidos por el decreto nº 10.542, en que no resulten cumplidas las condiciones expresas que el decreto exige, esta Contaduría General reiterando su opinión ya expuesta sobre el particular, estima que no corresponde acceder a tales reconocimientos pues el Poder Ejecutivo ha implantado un régimen cuyo cumplimiento debe exigirse integralmente, no siendo aconsejable establecer excepciones al mismo, por las razones que previamente determinaron su implantación y que se destacan en los considerandos del mismo.

DIRECCION GRAL. DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 20/8/1956.

Fdo. Angel Bottero Torres
Director General
de Contabilidad y Administración

Buenos Aires, agosto 22 de 1956.-

Visto el expediente nº 112.023/54, por el cual el señor RAUL UZAL solicita el reconocimiento y pago de la diferencia existente entre los sueldos de 2º Jefe de la Inspección de - Contabilidad de la Contaduría General de la Nación y el de Jefe de la misma dependencia, durante el período comprendido entre el 1º de febrero al 31 de agosto de 1954, en que el causante desempeñó dichas funciones, por ausencia del titular, y

CONSIDERANDO:

Que analizada la gestión promovida a la luz de las normas establecidas por el decreto nº 10.542/46, se observa: a) que el cargo de 2º Jefe de la Inspección de Contabilidad no estaba previsto en el presupuesto de la Contaduría General de la Nación con la respectiva especificación funcional y b) que no ha existido en su defecto el acto previo del Poder Ejecutivo que designara al señor Uzal para desempeñar el cargo de Jefe de la Inspección de Contabilidad y reconociera, a la vez, su derecho a percibir la diferencia de haberes;

Que resultando ello contrario a lo establecido por los - artículos 2º y 3º del recordado decreto, y atento al carácter normativo que el mismo inviste, no procede considerar favorablemente el reclamo formulado;

Que habiéndose precisado taxativamente en el texto de referencia los casos en los cuales procede la liquidación y pago de las diferencias de haberes por el desempeño de un cargo superior y contando en esta forma los respectivos organismos del Estado con los medios legales necesarios para asegurar en su oportunidad el justo reconocimiento de los derechos acreditados, no se estima conveniente considerar por vía de excepción, otras situaciones producidas al margen de ese régimen;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- No ha lugar.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge

neral del Boletín Oficial, tome nota la Contaduría General de la Nación y, previa notificación del interesado, archívese.

Fdo. ARAMBURU
BLANCO

DECRETO Nº 15.296.-

Boletín Nº 86.-

SUELDO - DIFERENCIA DE HABERES - PRESUPUESTO - REEMPLAZOS

SEÑOR MINISTRO: Expediente Nº 535.198 - 1956

El doctor Miguel Lificir, Asesor Letrado de la Dirección Nacional de Aduanas se presenta en estas actuaciones solicitando el reconocimiento y pago de las diferencias de haberes que resulten entre los correspondientes al cargo de presupuesto de que era titular y el realmente desempeñado durante el período comprendido entre el 30 de marzo de 1953 y el 31 de marzo de 1956.

La gestión de que se trata debe ser analizada a la luz del decreto nº 10.542/46, que determina el régimen a seguir en la materia, y conforme a ello se observa lo siguiente:

a) que durante el lapso que va desde el 30 de marzo de 1953 al 21 de abril de 1955, no existió ningún acto expreso y formal por el cual se asignaran al causante funciones de 2º Jefe del Departamento de Asesoría Legal;

b) que sin perjuicio de lo señalado en el punto a), y en lo que hace al término comprendido entre el 30 de marzo de 1953 y el 1º de setiembre de 1954, la petición que formula el causante es improcedente de hecho, por cuanto está ausente el principal recaudo que el decreto nº 10.542/46 determina para el reconocimiento en cuestión, esto es, que "el sueldo del cargo superior se halle vacante o a su titular no le corresponda la liquidación de haberes" (art. 1º, inc. a). En efecto, durante dicho interin, el titular del cargo de 2º Jefe del Departamento de Asesoría Legal, era el doctor Gregorio R. Aráoz. No modifica esta circunstancia el hecho de que, posteriormente, al doctor Aráoz, a la sa

zón a cargo de la Jefatura de dicha dependencia, se le haya reconocido derecho a percibir la diferencia de haberes correspondientes a la jerarquía superior (decreto nº 5.099/55), toda vez que ese hecho, segun la técnica presupuestaria, no basta para producir la vacante, la cual recién se concretó a partir de la fecha en que se hizo efectivo el nombramiento del titular en la categoría superior, es decir, 1º de setiembre de 1954. Como se observa, hasta dicha fecha el cargo de 2º Jefe de Departamento, pertenecía al doctor Gregorio R. Aráoz, quien por ejercer la Jefatura en ausencia de su titular, percibió la correspondiente diferencia de haberes (el reemplazo era reglamentario). No existió entonces en este caso y desde el punto de vista presupuestario, una promoción en favor del nombrado, ya que éste siguió siendo el 2º Jefe del Departamento y percibiendo sus haberes como tal, con la sola variante de que se adicionó a estos "por diferencia", el importe necesario para totalizar el sueldo de la categoría superior, cuyo interinato ejercía por exigencia legal.

Este procedimiento es por otra parte el único que autorizan los artículos 1º y 5º del recordado decreto nº 10.542/46.

c) que con relación al período restante, hasta llegar al 31 de marzo de 1956, cabe señalar que tampoco puede prosperar el reclamo en razón de lo establecido por los artículos 2º y 3º del decreto nº 10.542/46. En efecto, el cargo del que era titular el recurrente no figura en el presupuesto respectivo con especificación de tarea (art. 2º) ni la asignación de las funciones que dan lugar a la petición, emanó del Poder Ejecutivo (art. 3º).

En consecuencia y haciendo mérito de la jurisprudencia administrativa existente al respecto (ver exptes. 74.667/52; 33.413/55; 41.370/55; 74.016/55; resoluciones ministeriales nº 4.873/55; 5.009/55; 5.029/55, etc.), esta Dirección General con

sidera que la gestión promovida por el doctor Miguel Lificir no se ajusta a las normas dadas por el Decreto nº 10.542/46, y por lo tanto corresponde sea desestimada.-

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 17-7-56.-

ANGEL BOTTERO TORRES
Director General
de Contabilidad y Administración

Buenos Aires, 23 de julio de 1956.-

Visto la reclamación promovida en estas actuaciones por el Oficial Superior de 3ª de la Dirección Nacional de Aduanas, doctor Miguel Lificir, y de conformidad con lo informado precedentemente por la Dirección General de Contabilidad y Administración,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º) No ha lugar

2º) Tome nota la Dirección General de Contabilidad y Administración y pase a la Dirección Nacional de Aduanas para su conocimiento y notificación al interesado.-

Fdo. E.A. BLANCO

RESOLUCION Nº 8.144.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletin Nº 87.-

SUELDO - DIFERENCIA DE HABERES - PRESUPUESTO - REEMPLAZOS

Expediente Nº 544.914 - 1956.-

SEÑOR MINISTRO:

Las presentes actuaciones se relacionan con la gestión interpuesta por el actual Oficial 4º de la Dirección Nacional de Aduanas, don Argimiro Fernández, a fin de que se le reconozca el derecho a percibir las diferencias de haberes que resulten entre las correspondientes al cargo de presupuesto de que es titular y el realmente desempeñado durante el período comprendido entre el 1º de setiembre de 1953 hasta la fecha.

El asunto en cuestión guarda estrecha analogía con los que fueron tramitados por expediente 33.413/55 - Luis Hivert; 74.667/52 - Oscar G. Rodríguez; 72.359/53 - Erasmo E. Caldarone; 74.016/55 - Héctor Lena; 41.370/55 - Manuel González Buelga; 535.198/56 - Miguel Lificir; y 543.831/56 - Florio José Brugnone, en cuya oportunidad esta Dirección General sostuvo la improcendencia del reconocimiento reclamado en mérito a las disposiciones contenidas en el decreto nº 10.542/46, temperamento este que fue homologado por las respectivas resoluciones ministeriales.

Asimismo, debe señalarse en tal sentido y conforme lo determinado en el art. 2º del citado texto legal que no pueden ser invocadas sus disposiciones por los empleados o funcionarios cuyos cargos no figuren en el presupuesto respectivo con especificación de tareas o aquellos que se desempeñan como Jefes de las oficinas o secciones que integran una repartición, debiendo en consecuencia ajustarse los mismos a las normas especiales que rijan al respecto en la dependencia donde presta servicios.

En este orden de ideas y conforme a la jurisprudencia ad-

ministrativa existente en la materia (se adjuntan antecedentes), esta Dirección General se remite a lo ya manifestado en los casos a que se hace referencia precedentemente, aconsejando no hacer lugar a lo solicitado por el recurrente.-

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 9-8-56.-

ANGEL BOTTERO TORRES
Director General de
Contabilidad y Administración

//—nos Aires, 9 de agosto de 1956.-

De conformidad con lo manifestado precedentemente por la Dirección General de Contabilidad y Administración, se resuelve:

1ª.- No hacer lugar a lo solicitado por el Oficial 4ª de la Dirección Nacional de Aduanas, don Argimiro Fernández.

2ª.- Tómese nota y pase a la Dirección Nacional de Aduanas para su conocimiento y notificación al interesado.-

Fdo. E.A. BLANCO

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 88.-

COMPRA-VENTA - PROHIBICIONES - ARTICULOS IMPORTADOS

Expediente Nº 17.034 - 1956.-

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1956.-

Visto la situación planteada a diversas e importantes industrias nacionales que ven perjudicados sus legítimos intereses por la competencia desleal que deben afrontar en la venta de sus productos, frente a la oferta que de sus similares importados efectúan personas que los introducen por medios que se suponen ilícitos, y

CONSIDERANDO:

Que es propósito del Gobierno Provisional de la Nación propender por todos los medios posibles a la protección de la industria nacional, favoreciendo su desarrollo y engrandecimiento cuando la misma desenvuelve su acción dentro de las normas legales y reglamentarias que son la esencia del ordenamiento jurídico del país;

Que en ese orden de ideas, cabe considerar la situación de personas o entidades que poseen productos de origen extranjero o fabricados con elementos de igual procedencia, cuya importación ha estado y/o está vedada a la generalidad de los habitantes o sujeta a requisitos de orden cambiario, por lo que su tenencia deriva, o bien de importaciones efectuadas al margen de esta últimas normas o como consecuencia de la violación de las leyes represivas del contrabando, con la consiguiente evasión de la renta;

Que, cuando la Administración Nacional o sus organismos descentralizados deben adquirir productos de esa índole, aquellas personas concurren con sus ofertas originado el problema de que dan cuenta los anteriores considerados, afectando en

muchos casos a ofertas de productos de industria local y en otros a aquellos derivados de importaciones lícitas;

Que, en consecuencia, y en salvaguarda de los justos intereses enunciados y por obvias razones de moral y de justicia, se impone dictar las normas que las circunstancias aconsejan.

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- A partir de la fecha de vigencia del presente decreto-ley, los organismos de la Administración Nacional, entidades descentralizadas y empresas del Estado se abstendrán de adquirir, ya sea por compra directa o por licitación, materiales importados o equipos de procedencia extranjera existentes en el país o a importarse, cuya introducción esté prohibida por las disposiciones vigentes en materia de importación o por el régimen de cambios.

ARTICULO 2º.- A los fines dispuestos en el artículo que antecede, el Banco Central de la República Argentina comunicará de inmediato a los distintos Ministerios, quienes, a su vez, la pondrán en conocimiento de las reparticiones compradoras de su jurisdicción, la nómina de aquellos productos, materiales, maquinarias, etc., cuya introducción al país no haya estado autorizada desde el 1º de enero de 1954 a la fecha.

En caso de recibir ofertas de dichos artículos, las reparticiones compradoras, previo a la adjudicación, requerirán de la firma oferente la justificación de la tenencia legal de los bienes y en defecto de esa justificación, comunicarán tal circunstancia a la Dirección Nacional de Aduanas, para la investigación del caso.

ARTICULO 3º.- El presente decreto-ley será refrendado por el señor Vice-Presidente Provisional de la Nación y por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, Ejército, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

DECRETO-LEY Nº 22.294.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 89.-

MINISTERIO - OFICINA DE PRENSA - DIVISION BIBLIOTECA E INFORMACIONES

Buenos Aires, 24 de diciembre de 1956.-

Visto la necesidad de reorganizar el servicio de prensa de este Ministerio a fin de ajustar su funcionamiento a un sistema ágil y dinámico, acorde con la naturaleza específica de su cometido, y

CONSIDERANDO:

Que actualmente dicha tarea está a cargo de la Sección Informaciones de la División Biblioteca e Informaciones, la cual atiende además la realización de impresiones de formularios, circulares, folletos etc. para las dependencias de la Subsecretaría y otras reparticiones de este Departamento;

Que la práctica ha evidenciado la conveniencia de que la labor de dicha Sección, se cumpla bajo el control directo del titular del Ministerio;

Que la dependencia respectiva debe ser librada de toda otra actividad que no sea la inherente a su cometido específico como órgano de información y nexo con la prensa nacional y extranjera;

Que ello permitirá lograr una mayor eficiencia en el servicio como medio dirigido a mantener permanente y fielmente informada a la opinión pública y sectores interesados del país y exterior, en todos los asuntos económico-financieros de competencia de este Departamento de Estado;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º) Créase la "Oficina de Prensa" de este Ministerio, como organismo dependiente directamente del suscripto.

2º) Serán sus funciones principales:

a) difusión de actos, medidas, declaraciones, conferencias, etc. vinculadas con la actividad de este Ministerio.

b) relaciones con los órganos de la prensa oral, escrita y filmada del país y del extranjero.

3º) La difusión de toda noticia o información que deba efectuar la Oficina de Prensa deberá contar con la autorización previa del suscripto o del funcionario responsable que oportunamente se designe.

4º) La Sección Informaciones de la División Biblioteca e Informaciones creada por el inciso c) del punto 1º de la resolución ministerial nº 8.216/56, pasará a denominarse "Sección Impresiones".

5º) Comuníquese a quienes corresponda y archívese.-

Fdo. E.A. BLANCO

RESOLUCION Nº 8.342.-

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS - PRESUPUESTO

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1956.-

Visto las disposiciones contenidas en el Decreto número 7.867/46 y en la Ley Nº 13.992, referente al régimen de distribución de los beneficios obtenidos por la explotación de los casinos y salas de juegos de azar, y

CONSIDERANDO:

Que el aludido régimen actualmente en vigor no contempla apropiadamente la verdadera función que por la naturaleza de los recursos provenientes de aquella explotación están llamados a cumplir los mismos;

Que el actual Gobierno de la Nación, orientado en el firme propósito de encauzar con un criterio positivo y realista los medios que posibiliten un mayor bienestar general, estima indispensable adecuar la aplicación de los fondos de que se trata, a la satisfacción de verdaderas necesidades sociales en todo el territorio del país;

Que, en tal sentido, es procedente disponer la distribución de los recursos provenientes de la explotación de los casinos y de las salas de juego de azar de acuerdo con los principios enunciados, de manera tal que los beneficios que se obtengan con la conveniente aplicación de esos recursos alcancen justicieramente a todos los habitantes de la República, sin que por ello se deje de contemplar con cierta preferencia la consideración especial que deben merecer las comunas donde funcionen aquellos casinos y salas;

Que el temperamento señalado encuadra debidamente en la real circunstancia de que los fondos que provienen de esas actividades del juego, son el producto verdadero del aporte de

los habitantes de las distintas zonas del país, lo cual justifica ciertamente la equidad de devolver a todas esas zonas, con la preferencia apuntada en el considerando anterior, los beneficios líquidos de las explotaciones que se consideran;

Que con similar criterio se impone reservar en una cuenta especial una parte prudencial del producido de la explotación de los casinos y salas de juegos de azar, con el propósito de que la misma sea oportunamente destinada a subsidiar en forma especial a las provincias, municipios, entidades u organismos a los cuales se transfieran en definitiva los establecimientos a que se refiere el Decreto-Ley número 11.922/56, que regla sobre la distribución de los bienes actualmente en jurisdicción del Instituto Nacional de Acción Social;

Que, por otra parte, es indispensable impulsar decididamente la construcción y mejoramiento de edificios destinados a la enseñanza primaria, para superar los problemas derivados de las precarias condiciones en que la misma se desenvuelve actualmente, ya que la habilitación de nuevos locales en los últimos años, pese a la prédica del régimen de puesto, ha sido ínfima en relación con las necesidades del país;

Que, a este efecto, resulta imprescindible dotar de recursos al tesoro propio del Consejo Nacional de Educación - instituido por Decreto-Ley Nº 7.977/56, a fin de que puedan atenderse las erogaciones que demanden la construcción, ampliación y reparación de escuelas de su dependencia;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO
DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Los beneficios líquidos de la explotación de casinos y salas de juegos de azar que se obtengan a partir -

del día 1° de enero de 1957, se distribuirán en la forma siguiente:

a) El diez por ciento (10 %) para las Municipalidades correspondientes al lugar donde funcionen los casinos y salas de juego de azar productores del recurso. Los fondos resultantes de la aplicación de dicho porcentaje, serán administrados directamente por los respectivos Gobiernos Municipales y se adjudicarán por el Gobierno Nacional en la proporción que corresponda al producido líquido total de la explotación de cada uno de los establecimientos de la respectiva jurisdicción de aquéllos.
Tales fondos deberán ser empleados, exclusivamente, en realizaciones de bien común y de aprovechamiento general de la población tales como adquisición, construcción y ampliación de edificios destinados a obras de asistencia social y salud pública o a establecimientos educacionales, incluso los gastos que demande su habilitación, y para obras de saneamiento, urbanización y embellecimiento; no pudiendo en consecuencia bajo ningún concepto utilizarse para la atención de gastos en personal y administrativos que demanden el funcionamiento de organismos públicos, cualquiera sea su naturaleza, o privados.
Anualmente las Municipalidades beneficiadas rendirán cuenta documentada de la inversión de los fondos percibidos;

b) El veinte por ciento (20 %) será asignado anualmente al Consejo Nacional de Educación, el cual ingresará los fondos correspondientes a su tesoro propio en una cuenta especial que se aplicará, exclusivamente, a la adquisición, construcción y ampliación de edificios destinados a escuelas en todo el territorio del país, incluso los gastos que demande la habilitación de los mismos.- Las inversiones respectivas se realizarán de conformidad con las previsiones del Plan de

Obras y Adquisiciones del Estado que anualmente a - pruebe el Poder Ejecutivo.
Igualmente podrá destinarse parte de los recursos de aquella cuenta para la refección de edificios escolares.
El Consejo Nacional de Educación no podrá aplicar - los fondos de que se trata para solventar gastos en personal y administrativos que demanden las dependencias y establecimientos a su cargo;

c) El veinte por ciento (20 %) será ingresado por el Poder Ejecutivo en una cuenta especial cuyos fondos se distribuirán entre todas las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a índices representativos que oportunamente se aprobarán con intervención de los Ministerios de Interior y de Hacienda de la Nación.
Dichos fondos que serán administrados directamente - por los respectivos gobiernos beneficiarios, con cargo de rendir cuenta, deberán ser aplicados exclusivamente en establecimientos, obras, servicios y finalidades de bien común (asistenciales, sanitarios, educacionales y similares) inclusive la habilitación de los mismos;

d) El cincuenta por ciento (50 %) restante será ingresado por el Poder Ejecutivo a una cuenta especial cuyos fondos serán destinados exclusivamente para:
1º) Atención transitoria de los gastos que demande - al Instituto Nacional de Acción Social el sostenimiento de los establecimientos, dependencias y servicios que dicho Instituto conserve en su jurisdicción, hasta tanto dicha situación se mantenga y en la cuantía que por la expresada razón se determine; y
2º) Contribuir a las provincias, a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y a los organismos

y entidades, en la medida que corresponda y se convenga con los mismos, para posibilitarles la adecuada atención de los gastos de sostenimiento de los establecimientos, dependencias y servicios que se les transfieran de conformidad con lo reglado por el Decreto-Ley número 11.922 del 4 de julio de 1956.

Una vez finalizada la liquidación del Instituto Nacional de Acción Social la parte de estos recursos que quede sin afectación, luego de cumplida la norma contenida en el apartado 2º) precedente, pasará a engrosar los fondos del inciso c).-

ARTICULO 2º.- De los recursos recaudados en virtud de lo establecido por las disposiciones pertinentes de la Ley número 14.385, se transferirá la suma de ciento cincuenta millones de pesos moneda nacional (m$n. 150.000.000.-), por esta única vez y con carácter de aporte definitivo, a la cuenta especial a que se refiere el inciso b) del artículo 1º del presente decreto, a fin de ser invertidos conforme con el régimen que se le ha fijado.-

ARTICULO 3º.- Deróganse las disposiciones correlativas del Decreto Nº 7.867 del 18 de marzo de 1946 y de la Ley número 13.992 que se opongan a la aplicación del presente decreto ley.-

ARTICULO 4º.- El presente decreto-ley será refrendado por el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, Interior, Educación y Justicia, Aeronáutica, Ejército y Marina.-

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

ARAMBURU - ROJAS - LANDABURU
ADROGUE - OSSORIO ARANA - HARTUNG
KRAUSE - BLANCO

DECRETO-LEY Nº 22.296.

Boletín Nº 91.-

PROCURACION DEL TESORO - JUICIOS - DEMANDAS - REPRESENTANTES EN JUICIO - INCOMPATIBILIDADES - LITIGIOS - FUNCIONES - PATROCINIOS - PROHIBICIONES -

Buenos Aires, noviembre 20 de 1943.-

Visto la necesidad de reglar las funciones del Procurador del Tesoro de la Nación,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA,
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- El Procurador del Tesoro de la Nación es asesor legal del Poder Ejecutivo; representante especial de la Nación en juicio en los casos previstos por el artículo 1º de la Ley Nº 3.367 y en los asuntos sometidos a arbitraje; tiene a su cargo la dirección y control de los juicios en que la Nación es parte y en este carácter imparte las instrucciones que sean necesarias a los representantes fiscales, salvo el caso de intervención del Procurador General de la Nación previsto en la Ley Nº 3.367.-

ARTICULO 2º.- Son requisitos para desempeñar el cargo, ser abogado, argentino nativo, con 30 años de edad y ocho de ejercicio de la profesión, en la magistratura o en la administración.-

ARTICULO 3º.- Asesora al Poder Ejecutivo en las consultas que le sean formuladas directamente por la Presidencia de la Nación, encontrándose facultado para dirigirse en la misma forma al Poder Ejecutivo o a los señores Ministros, en asuntos de interés general, cuando lo conceptúe necesario o conveniente.-

ARTICULO 4º.- Evacúa las consultas en que su dictámen esté previsto por leyes especiales o a solicitud de los señores Ministros.-

ARTICULO 5º.- El Procurador del Tesoro, el personal de la Procuración del Tesoro y de la Oficina de Asuntos Fiscales comprendidos en el presente estatuto, revistarán en el Presupuesto del Ministerio de Hacienda y por conducto de este Departamento el Procurador del Tesoro propondrá al Poder Ejecutivo las designaciones y ascensos para los cargos de escalafón hasta Abogado Inspector inclusive, con arreglo al presupuesto en vigor, como asimismo su cesantía o exoneración y asigna al personal técnico y administrativo las funciones que correspondan dentro de la Procuración del Tesoro y Oficina de Asuntos Fiscales.-

ARTICULO 6º.- El Procurador del Tesoro de la Nación podrá hacerse representar por los funcionarios letrados de la Procuración en el diligenciamiento de las medidas probatorias en juicio, en la asistencia a los comparendos y audiencias, a cuyo efecto constituirá documento habilitante la nota-poder que a tal efecto suscriba, debiendo proceder dichos funcionarios de acuerdo con las instrucciones que en cada caso les imparta el Procurador del Tesoro.-

ARTICULO 7º.- El Procurador del Tesoro de la Nación deberá someter a consideración del Poder Ejecutivo la transacción en los juicios cuando lo estimare conveniente para los intereses de la Nación.-

ARTICULO 8º.- En los juicios cuya representación le ha sido confiada, los honorarios a cargo del vencido regulados a favor del Procurador del Tesoro, pertenecerán a este funcionario.-

ARTICULO 9º.- El Procurador del Tesoro de la Nación no podrá abogar, ni integrar directorios de sociedades o empresas que exploten servicios públicos.-

ARTICULO 10º.- El Procurador del Tesoro está facultado para señalar al Poder Ejecutivo la conveniencia de aclarar, modificar o derogar las leyes que la jurisprudencia o la práctica administrativa demuestren que no consultan los intereses de la Nación.-

ARTICULO 11º.- Está facultado para requerir directamente de las oficinas dependientes del Poder Ejecutivo y reparticiones autárquicas todos los informes y antecedentes que estime convenientes para el mejor cumplimiento de sus funciones.-

ARTICULO 12º.- El Subprocurador del Tesoro de la Nación reemplaza y substituye al Procurador en caso de excusación, ausencia o impedimento.-

ARTICULO 13º.- El Abogado Inspector es el Jefe de Despacho y tiene a su cargo la vigilancia del trámite de los juicios y arbitrajes cuya defensa haya sido confiada al Procurador.-

ARTICULO 14º.- El Cuerpo de Abogados auxiliares de la Procuración del Tesoro estará formado por los que fije en tal carácter la Ley de Presupuesto y sus funciones serán las que les asigne el Procurador del Tesoro de acuerdo al artículo 5º.-

ARTICULO 15º.- La Oficina de Asuntos Fiscales tiene a su cargo el contralor administrativo y gestiones por intermedio de los representantes fiscales, ante los Tribunales, de la Capital Federal, Provincias y Territorios Nacionales, de los juicios en que la Nación sea parte o tenga interés.-

ARTICULO 16º.- La Oficina estará a cargo de un abogado designado por el Procurador del Tesoro entre los abogados auxiliares de la Procuración, que revistará con el título de Jefe de la Oficina de Asuntos Fiscales y que deberá vigilar su funcionamiento; tener la dirección del personal asignado a la misma; suscribir las providencias de trámites y realizar las inspecciones que sean necesarias para la buena marcha de

los juicios que tramiten por ante los Tribunales Federales u Ordinarios en la época y forma que, previa consulta al Procurador del Tesoro, considere conveniente, estando facultado para solicitar de los representantes fiscales todas las informaciones que considere necesarias.-

ARTICULO 17º.- Cuando la Nación deba concurrir a juicio, el Ministerio del ramo al cual corresponda el pleito, remitirá directamente las actuaciones administrativas a la Oficina, con Decreto del Poder Ejecutivo, para que ésta las gire al representante fiscal que corresponda a sus efectos y coopere con éste cuando sea necesario, salvo las excepciones establecidas por leyes especiales.-

ARTICULO 18º.- A los efectos del control que le compete la Oficina consignará en libros foliados y rubricados por el Procurador del Tesoro, el estado de los juicios de acuerdo a las comunicaciones que reciba de los representantes fiscales o de las averiguaciones que directamente realice.- Llevará igualmente ficheros-índices de demandados y demandantes contra la Nación y observará las medidas conducentes al cumplimiento de su cometido.-

ARTICULO 19º.- Los representantes fiscales, salvo los casos establecidos en leyes especiales, se comunicarán con el Poder Ejecutivo por intermedio de la Oficina de Asuntos Fiscales.- A falta de instrucciones expresas del Poder Ejecutivo para la tramitación de los juicios, solicitarán de ésta, las instrucciones pertinentes.- Deberán promover toda demanda que se les ordene dentro de los ocho días hábiles de recibidas las actuaciones respectivas, salvo los casos en que siendo necesario interrumpir una prescripción, deberán proceder con la urgencia que el caso requiera, o en aquellos en que sea menester requerir antecedentes, elementos de juicio, pedir instrucciones o formular consultas, todo lo cual deberá efectuarse sin dilación.- Con relación a los juicios en que la Nación es par

te, los representantes fiscales deberán comunicar a la oficina:

a) Dentro del tercer día, la fecha de promoción de todos los juicios y el juzgado y secretaría en que se haya radicado.
b) Trimestralmente, un detalle de movimiento de los juicios, consignando su estado, el ministerio o repartición de origen y número y año del expediente administrativo correspondiente.
c) En su oportunidad, la sentencia recaída, adjuntando copia de la misma o transcripción de la parte dispositiva.-

ARTICULO 20º.- Se considerará que los representantes fiscales han incurrido en falta administrativa grave, a los efectos de la aplicación del artículo 1.112 del Código Civil, toda perención de instancia, prescripción o dilación injustificada que se produzca por su culpa o negligencia en los juicios a su cargo.-

ARTICULO 21º.- Las reparticiones públicas en cuyas dependencias se haya originado el crédito u obligación en su caso y que fuesen motivo de juicio, llevarán libros en los que conste la tramitación y estado de las respectivas causas, con arreglo a los informes que les remitirá la oficina semestralmente. Cualquier observación que las reparticiones crean pertinente formular, respecto de la tramitación de los juicios, deberá hacerse por ante la oficina.-

ARTICULO 22º.- Queda terminantemente prohibido a los funcionarios y empleados de la Procuración del Tesoro y de la Oficina de Asuntos Fiscales, representar o patrocinar a litigantes contra la Nación, intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales en los juicios en que la Nación es parte, tramitar los expedientes administrativos que por tal motivo se originan, bajo pena de exoneración, salvo que se trate de intereses personales del empleado o de sus parientes consanguíneos, cónyuge o afines en primer grado.-

ARTICULO 23º.- Abrese una cuenta a la Oficina de Asuntos Fiscales para la atención de los gastos que demande la tramitación de los juicios (publicación de edictos, diligenciamiento de notificaciones, mandamientos y otros análogos) para su distribución entre los representantes fiscales, en la medida que lo soliciten y sea necesario a juicio de la oficina,con cargo a dichos funcionarios de rendir cuenta documentada de su inversión y de ingresar por intermedio de la oficina a la misma cuenta, cuando a la terminación de los juicios se hayan percibido de la parte vencida las sumas invertidas en concepto de gastos realizados.-

ARTICULO 24º.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan al presente.-

ARTICULO 25º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

RAMIREZ - FARRELL -
GILBERT - MARTINEZ ZUVIRIA
AMEGHINO - VAGO - MASON
PERLINGER - SUEYRO

DECRETO Nº 14.546.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 92.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1956.-

Visto que en distintas oportunidades se han efectuado gestiones por parte de agentes que con carácter de "ad-honorem" prestaban servicios al Estado, tendientes a obtener el reconocimiento del tiempo trabajado en tal condición, a efectos del cómputo de la bonificación por antigüedad que rige para el personal de la Administración Pública Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que abona un pronunciamiento favorable la circunstancia de que los servicios prestados "ad-honorem" son reconocidos a los fines de su cómputo jubilatorio, conforme a las prescripciones de la Ley Nº 14.069, por lo cual, prácticamente, los servicios honorarios se asimilan a una prestación rentada;

Que razones de equidad y buen ordenamiento administrativo aconsejan adoptar una medida que posibilite en el aspecto en cuestión un tratamiento uniforme para todos los agentes al servicio del Estado;

Que en tal sentido el derecho al cómputo de esos servicios a los efectos de la percepción de la bonificación por antigüedad emergerá una vez que los mismos sean reconocidos por la Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado, a solicitud de los interesados acorde con lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley Nº 14.069, aludida;

Que causales de orden económico-financiero imponen la necesidad de considerar el pago de la bonificación por tal concepto a partir de la fecha;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Declárase computable, a partir de la fecha, y a los efectos del pago de las bonificaciones que correspondan en concepto de antigüedad vigentes en las distintas jurisdicciones de la Administración Pública Nacional, para todos los casos en que hasta el presente no eran considerados, los servicios prestados al Estado en carácter "ad-honorem", siempre que los mismos sean reconocidos por la Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado, a solicitud de los interesados, de acuerdo con las prescripciones de la Ley Nº 14.069.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de HACIENDA.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial, tómese nota y archívese.-

Fdo. ARAMBURU

E.A.Blanco

DECRETO Nº 21.120.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 93.-

ADSCRIPCIONES - COMISIONES - PROMOCIONES

Buenos Aires, 21 de octubre de 1948.-

Atento la necesidad de contemplar la situación creada a determinado personal que por razones de servicio o circunstancias especiales es designado para desempeñarse fuera de la dependencia en que revista como titular, y

CONSIDERANDO:

Que en la mayoría de los casos los empleados o funcionarios destinados a prestar servicios especiales fuera de sus tareas habituales, no obstante significar ello un reconocimiento a sus cualidades, ven neutralizada su carrera administrativa durante el lapso que permanecen alejados de su dependencia de origen;

Que la dificultad de conocer la forma en que ese personal viene desempeñándose mientras dura su adscripción o comisión -como base para su calificación y promoción-, puede ser salvada dando intervención en las oportunidades requeridas a la autoridad a cuyas órdenes ejerce sus tareas.

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Declárase que no podrá constituir causal de postergación en la promoción de empleados o funcionarios de la Administración Nacional y sus dependencias descentralizadas, la circunstancia de encontrarse prestando servicios en comisión o en calidad de adscripto a las órdenes de autoridades distintas a las del organismo a que pertenecen.

ARTICULO 2º.- La calificación de dicho personal deberá e-

fectuarse por la autoridad que corresponda al organismo donde transitoriamente presta servicios, la cual remitirá en las oportunidades requeridas, la documentación respectiva a la dependencia en que el mismo revista como titular.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

DECRETO Nº 32.529.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 94.-

CONVENIOS DE TRABAJO - EMPRESAS DEL ESTADO

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1956.-

Visto lo informado por los Ministerios respectivos sobre el estado de las tratativas para la renovación de los convenios colectivos de trabajo relativos al personal que presta servicios en empresas u organismos del Estado, y

CONSIDERANDO:

Que el procedimiento de la revisión de dichos convenios colectivos en comisiones paritarias permite la posibilidad de que tales empresas y su personal arriben a acuerdos equitativos que a la vez que contemplen las aspiraciones de los empleados se hallen en relación con las posibilidades económicas de cada empresa;

Que el Decreto Ley Nº 2.739/56 dispone que en caso de no llegarse a un acuerdo en la revisión de los convenios colectivos de trabajo los puntos en litigio deberán ser sometidos al arbitraje de tribunales dependientes del Ministerio de Trabajo y Previsión;

Que tal procedimiento, si bien resulta conveniente y adecuado, en las actuales circunstancias para la regulación de las actividades privadas, no es aconsejable en cambio en los casos relativos al personal perteneciente a empresas u organismos del Estado;

Que la adecuada solución de tales conflictos hace necesaria la consideración de sus múltiples aspectos, pues se halla vinculado intimamente a diversas materias que deberán ser revisadas para su solución integral, todo lo cual escapa a la competencia del Tribunal Arbitral que sólo está facultado para la adaptación de cada convenio a las normas del Decreto Nº 2.739/56;

Que el procedimiento del laudo por el Tribunal Arbitral, siempre importará limitar los aumentos a otorgarse, a las po

sibilidades presupuestarias de cada repartición, que en la mayoría de los casos son ínfimas o inexistentes;

Que atento a que en la consideración de tales conflictos juega preponderantemente el aspecto económico-financiero, resulta imprescindible la intervención del Ministerio de Hacienda, dándose en el sistema actual, de los tribunales arbitrales, únicamente participación a los Ministerios de Trabajo y Previsión y de Comercio e Industria;

Que este régimen, naturalmente, sólo se aplicará a las empresas y organismos estatales y su personal que no hayan resuelto sus conflictos por convenios colectivos o sobre los que no se hubiere laudado o dictado decretos especiales;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA, EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO,

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Cuando las Comisiones Paritarias, encargadas de la revisión de los convenios colectivos de trabajo del personal de empresas u organismos del Estado, no hubieren arribado a un acuerdo, los puntos en litigio serán elevados a consideración del Poder Ejecutivo y resueltos por Decreto en el término de veinte días. Las partes deberán presentar un memorial perentoriamente dentro de los cinco días de la elevación al Poder Ejecutivo.

ARTICULO 2º.- Serán sometidos también al Poder Ejecutivo, los convenios del personal indicado en el artículo anterior que hayan sido elevados al Tribunal Arbitral y sobre los cuales no se hubiere laudado. Se consideran definitivos y no susceptibles de reconsideración por el Poder Ejecutivo los convenios ya firmados y los laudos y decretos dictados que hubieren dado solución a los conflictos planteados con respecto al mismo personal.

ARTICULO 3º.- La Comsión Asesora Mixta creada por Resolución Nº 44 del 6 de agosto de 1956 del Ministerio de Trabajo y Previsión, elevará un informe al Poder Ejecutivo en la oportunidad en que se la convoque sobre puntos en litigio

ARTICULO 4ª.- El presente decreto-ley será refrendado por el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Trabajo y Previsión, Comercio e Industria, Transportes, Hacienda, Ejército, Aeronáutica y Marina.

ARTICULO 5ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Horacio Aguirre Legarreta - Arturo Osorio Arana - Teodoro Hartung - Julio C. Krause - Eugenio A. Blanco - Rodolfo Martínez - Sadi E. Bonnet.

DECRETO-LEY Nª 20.414.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 95.-

PERSONAL - NORMAS - DOMICILIOS

Buenos Aires, 8 de octubre de 1952.-

Visto el decreto 14.609/943, modificatorio del artículo 19 de la ley Nº 11.386, en cuanto establece que el enrolado que haya cambiado de domicilio deberá comunicarlo dentro de los siete meses de producido; atento el artículo 14 del decreto nº 30.748/44 que dispone la comunicación inmediata de los cambios de domicilio a la respectiva Dirección de Defensa Nacional, para tener permanentemente actualizado en ese orden de cosas los registros del personal del Servicio Civil; y con el fin de uniformar los procedimientos al respecto,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º) Todo el personal del Ministerio -incluso el de las entidades descentralizadas- deberá comunicar por escrito antes del 15 de noviembre próximo, a sus jefes respectivos, el domicilio de su residencia actual e informar además la fecha de anotación de dicho domicilio por la oficina enroladora que debe constar en la respectiva libreta de enrolamiento o cívica.

El personal extranjero no naturalizado y los menores de 18 años, únicamente comunicarán su actual domicilio.

Una vez producida la información y verificada la constancia respectiva en la libreta de enrolamiento o cívica, el jefe inmediato superior elevará la comunicación a la respectiva Dependencia de Personal para que ésta proceda a su registración e informe a la Dirección de Defensa Nacional.

2º) En lo sucesivo todo el personal del Ministerio -incluso el de las entidades descentralizadas- deberá comunicar el cambio de domicilio real (donde reside), de acuerdo con las siguientes normas:

a) Dentro de las 48 horas de producido el cambio de domicilio real, el agente lo hará saber por escrito al je-

fe inmediato superior.

b) En conocimiento de esta circunstancia, y dentro de las 24 horas siguientes, el jefe inmediato superior elevará la comunicación de que se trata a la respectiva dependencia de Personal, a efectos de que la misma proceda a:

1) registrar el cambio de domicilio en el legajo individual del interesado, fichas y demás elementos que correspondan.

2) Hacer saber a la Dirección de Defensa Nacional, cada 15 días, todos los cambios de domicilio denunciados por los agentes de su jurisdicción, dentro de ese lapso, en orden de las constancias existentes en la planilla que se agrega como modelo y queda aprobada por la presente.

c) Posteriormente, el cambio de domicilio denunciado por el agente deberá ser confirmado mediante la presentación de la libreta de enrolamiento o libreta cívica, según el caso, con la constancia de que fue registrado ante la autoridad competente (oficinas enroladoras y donde no la hubiere oficina de correos correspondiente a su domicilio), sin exceder los plazos que a continuación se señala:

- Hasta 7 (siete) días después de ocurrido el cambio de domicilio aquellos agentes cuya nueva radicación tenga lugar en la Capital Federal.

- Hasta 15 (quince) días después de ocurrido el cambio de domicilio, todos los que hayan pasado a radicarse en provincias o cambiaren de domicilio dentro de ellas.

- Hasta 30 (treinta) días después de ocurrido el cambio de domicilio, todos los que hayan fijado su nueva residencia en gobernaciones o territorios nacionales o cambiaren de domicilio dentro de ellos.

d) En el caso de que determinadas disposiciones especiales impongan al agente la declaración y registro en su libreta de enrolamiento o libreta cívica del domicilio de la dependencia en la cual presta servicios, el mismo queda obligado a manifestarle así por escrito a su jefe inmediato superior a la vez que informar su actual domicilio real (donde reside), el que deberá ser actualizado siguiendo la forma y términos establecidos en esta resolución.

3º) Los jefes a quienes corresponda exigir el registro de domicilio en la documentación oficial antedicha, verificarán que el cambio y fecha dado a la dependencia en que el agente presta servicio coincida con los datos que figuren en la libreta de enrolamiento o libreta cívica. En caso de que el agente requiera una constancia de haber cumplido con lo dispuesto en la presente resolución, los funcionarios mencionados anteriormente procederán a entregársela.

4º) La no comunicación de todo cambio de domicilio a la dependencia en que presta servicios el agente -cualquiera sea su forma de trabajo y remuneración (por mes o jornal)- será considerada falta grave y lo hará pasible de penalidades que podrán llegar hasta la cesantía. En tal supuesto, los jefes a que se refiere el punto 3º elevarán los antecedentes a la respectiva dependencia de Personal, para que ésta, por la vía que corresponda, provea a la resolución de cada caso en particular.

5º) La comprobación de una declaración falsa de domicilio real (donde reside) será conceptuada asimismo falta grave y dará también lugar a sanciones disciplinarias, que se aplicarán con el mismo alcance que establece el punto anterior.

6º) Comuníquese; notifíquese al personal y entréguese copia de la presente a los agentes ingresantes; cumplido, archívese.-

Fdo. P.J. BONANNI

RESOLUCION Nº 1.915.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 96.-

NORMAS - INFORMES - DOMICILIOS

Buenos Aires, 26 de julio de 1956.-

Visto lo dispuesto por resolución ministerial nº 1.549/53 y atento lo actuado en el presente expediente nº 39.396/56,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º) Los pedidos de informes sobre domicilios de personas, cuya localización sea imprescindible a las dependencias y reparticiones de este Ministerio por justificadas exigencias del servicio, podrán ser formulados directamente por cada una de ellas a la Policía Federal, adoptando los siguientes recaudos:

a) se confeccionará una nota por cada persona especificando concretamente las razones que fundamentan la solicitud;

b) se consignará número de Cédula de Identidad del causante o en su defecto, los siguientes datos: a) nombres y apellidos completos; b) fecha y lugar de nacimiento; c) nacionalidad y último domicilio; d) nombre y apellido de los padres.

2º) Déjese sin efecto la resolución ministerial nº 1.549/53.

3º) Comuníquese a quienes corresponda y archívese.-

Fdo. E.A. BLANCO

RESOLUCION Nº 8.147.-

Boletín Nº 97.-

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS.-

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1956.-

Visto la Ley Nº 13.987, y su modificatoria, Nº 14.171,- por la cual se creó, baje la dependencia del Ministerio de Finanzas, la Dirección General de Servicios Sociales para - Bancarios, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto-Ley Nº 10.351/56 -por el cual se reestructuran los Ministerios Nacionales y organismos dependientes - del Poder Ejecutivo- dispuso que el Ministerio de Hacienda - estaría integrado por dicha Secretaría de Estado y la de Finanzas;

Que conforme a ello procede la revisión de la recordada Ley Nº 13.987 a fin de ajustar su funcionamiento a la nueva organización ministerial;

Que en tal sentido se ha observado a través de ese análisis que, independientemente de los aspectos de forma que plantea el nuevo ordenamiento, el texto en cuestión es susceptible de enmienda en el aspecto atinente a la dirección de la entidad;

Que en efecto la prescripcion contenida por el articulo 5º de la Ley Nº 13.987, según la cual el cargo de Director - General de la repartición debe ser ejercido por el Subsecretario de Finanzas, niega a la misma el grado de descentralización indispensable para el eficiente desenvolvimiento de su actividad;

Que consultado ese hecho a la luz de un estricto sentido de administración, la acumulación de las tareas correspon -

dientes a ambos cargos en el funcionario de que se trata, supone una virtual incompatibilidad, toda vez que el mismo como Jefe de la dependencia debe atender el despacho de asuntos - que luego volverá a considerar en su condición de Subsecretario;

Que lo propuesto armoniza con el principio de descentralización administrativa postulada en el punto k) de la Declaración de Principios de la Revolución Libertadora;

Que el caracter de los servicios a cargo de la citada dependencia, hace necesario que su gobierno se ejercite en forma ágil y dinámica, razón por la cual se estima procedente - fortalecer las facultades asignadas al Jefe de la misma, de tal manera que queden a su cargo, en forma directa, las funciones directivas y ejecutivas,

Que en ese sentido, el Consejo de Administración pasará a constituir un cuerpo de asesoramiento y contralor, sin perjuicio de la intervención que se le reserve en la aprobación de medidas extraordinarias en la legislación de los servicios a cargo de la institución;

Que es conveniente ajustar la denominación de la dependencia y el carácter de los funcionarios y órganos que ejercerán su dirección, a la nueva estructura funcional que se le fija por la presente;

Que asimismo y en cuanto al procedimiento a aplicar en la designación de los miembros del Consejo de Administración se estima que así como los representantes del personal son propuestos por la entidad gremial reconocida, procede que la representación de los bancos particulares y mixtos sea propuesta por la entidad patronal pertinente, toda vez que ello concede a los mismos un auténtico carácter representativo y le - asegura la intervención de los distintos sectores interesados;

Que el artículo 12º de la Ley nº 13.987, modificada por la Ley nº 14.171 determinan en su inciso h), una contribución del 2% sobre el total de lo percibido en concepto de comisio-

nes e intereses por los bancos oficiales, mixtos y particulares y el Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias;

Que la naturaleza especial de dicho aporte debe ser objeto del análisis previo del organismo competente, a fin de consultar su incidencia financiera y los distintos intereses afectados, por cuyo motivo resulta necesario suprimir provisionalmente el funcionamiento de la disposición citada, hasta tanto el Consejo de Administración se expida en definitiva sobre la constitución integral de los recursos de la entidad;

Que por razones que hacen al interes fiscal y al mejor contralor administrativo, se considera conveniente incluir a la entidad en el régimen de la Ley de Contabilidad número 12.961, en mérito a lo cual corresponde suprimir el artículo que consagra actualmente la excepción;

Que por otra parte, y teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda cuenta ya con sus propios servicios sociales -Dirección de Obra Social- debe procurarse que la incorporación a jurisdicción del referido Departamento de Estado de la Dirección de Servicios Sociales para Bancarios se lleve a cabo orgánica y racionalmente, sin lesion de los intereses afectados, ni desequilibrio para la organización vigente;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO
DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- La Dirección General de Servicios Sociales para Bancarios que pasa a denominarse Instituto de Servicios Sociales Bancarios, funcionará como entidad autárquica, bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda de la Nación y ajustará su cometido a las presentes disposiciones y demás normas legales y reglamentarias concordantes.-

ARTICULO 2º.- El Instituto tendrá por objeto, con total prescindencia de la actividad política y gremial, la atención de los servicios sociales para su propio personal, el de las instituciones bancarias oficiales, mixtas y particulares, de las entidades autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para funcionar como bancos, del Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias (en liquidación), de las entidades gremiales bancarias debidamente reconocidas y del dependiente del presupuesto de la Presidencia de la Nación.-

ARTICULO 3º.- El plan de prestaciones, que se realizará de conformidad con la reglamentación a dictarse, deberá contemplar obligatoriamente, en el orden de prioridad que se indica, las siguientes, sin perjuicio de las demas prestaciones que se establezcan:

a) Asistencia médica integral,
b) Descanso y recuperación;
c) Proveedurías;
d) Subsidios.-

ARTICULO 4º.- La administración del Instituto estará a cargo de un Presidente, un Vicepresidente y un Consejo de Administración.-

ARTICULO 5º.- El Presidente y el Vicepresidente serán nombrados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Hacienda, y ejercerán a la vez las mismas funciones en el Consejo de Administración.-

ARTICULO 6º.- El Consejo de Administración estará integrado además por seis Vocales, que representarán: dos a los bancos oficiales y uno a los bancos mixtos y particulares; dos al personal de los bancos oficiales y uno al personal de los bancos mixtos y particulares.- Los Vocales durarán cuatro años en su mandato, podrán ser reelectos y se renovarán por mitades cada bienio.- Serán designados por el Poder Ejecuti-

tivo y las propuestas correspondientes se elevarán al Ministerio de Hacienda en la forma que se indica a continuación: el Banco Central de la República Argentina propondrá a los representantes de los bancos oficiales, y las entidades bancarias patronales reconocidas al de los bancos mixtos y particulares.- Los representantes del personal serán propuestos por las entidades gremiales reconocidas.- Si alguno de los Vocales falleciere o renunciare o en alguna forma dejare vacante su cargo antes de terminar el periodo para el cual fué designado, se procederá a elegir un reemplazante para completar el lapso, en la forma establecida.- Para ser Vocal se requerirá:

a) Ser argentino;
b) Revistar en alguna de las entidades comprendidas en el presente régimen, con una antigüedad bancaria mínima de diez años, en el caso de los representantes del personal;
c) No integrar las comisiones directivas de organizaciones gremiales -obreras o patronales- ni ejercer funciones en las mesas directivas o cargos electivos de partidos políticos;
d) No ser agente ni percibir retribución alguna por prestaciones de servicios del Instituto de Servicios Sociales Bancarios;
e) No haber sido condenado por delitos comunes.-

ARTICULO 7º.- El Presidente tiene a su cargo la representación administrativa del Instituto y ejerce la tarea directiva y ejecutiva del mismo en todos los asuntos técnicos o administrativos que no estuvieran reservados expresamente a la decisión del Consejo, y aun en este caso, cuando lo exijan razones de urgencia, debiendo entonces dar cuenta al Consejo en la primera oportunidad.- Será al mismo tiempo el representante legal de la entidad en todas sus relaciones con terceros, y además tendrá entre sus funciones principales:

a) Dirigir y ejercer la inspección y fiscalización de

todas las dependencias, actividades y personal a su cargo;

b) Cumplir y hacer cumplir, en lo que le compete, las presentes disposiciones y demas normas legales y reglamentarias que se dicten;

c) Nombrar, promover, suspender y separar de sus cargos a los empleados de su dependencia;

d) Proponer al Consejo de Administración el presupuesto anual de sueldos, gastos e inversiones;

e) Elaborar los planes de acción y someterlos a consideración del Consejo;

f) Someter a la aprobación del Consejo de Administración la habilitación de nuevos servicios y ampliación y/o modificación de los existentes;

g) Dictar las disposiciones internas relacionadas con la organización y funciones de las dependencias del Instituto y dar cuenta de ello al Consejo;

h) Llevar el inventario general de todos los bienes pertenecientes al Instituto;

i) Someter a la consideración del Consejo el balance general, la cuenta de ganancias y pérdidas y la memoria del Instituto;

j) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración;

k) Proponer al Consejo de Administración las operaciones financieras que sean necesarias y útiles para los Servicios Sociales y la modificación de las cuotas de afiliación;

l) Intervenir en el manejo de fondos del Instituto, disponiendo los ingresos y egresos con sujeción a las normas que establezca el Consejo de Administración;

m) Asistir a las sesiones de cualesquiera de las comisiones del Consejo de Administración, actuando como Presidente de las mismas.-

ARTICULO 8º.- El Vicepresidente reemplazará al Presidente -

en caso de ausencia o impedimento de éste, o vacancia del cargo. Fuera de dichos casos, desempeñará las funciones que el Presidente le asignare.

ARTICULO 9º.- El Consejo de Administración sesionará por lo menos una vez cada quince días y las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes, salvo disposición en contrario que exija un número superior. En caso de empate el Presidente o el Vicepresidente en su caso tendrá doble voto.

ARTICULO 10º.- Al Consejo de Administración le corresponde:

a) Establecer las normas para la gestión administrativa y específica del Instituto; tomar conocimiento de las operaciones decididas con arreglo a dichas normas e intervenir, según la reglamentación que se dicte, en la resolución de los casos no previstos;

b) Aprobar el balance general, la cuenta de ganancias y pérdidas y la memoria del Instituto, todo lo cual será elevado al Ministerio de Hacienda y publicado;

c) Adquirir y enajenar inmuebles y contratar, suprimir o modificar los servicios;

d) Fijar el régimen de compra-venta para el Instituto;

e) Proponer al Ministerio de Hacienda las cuotas de afiliación;

f) Someter a consideración del Ministerio de Hacienda el presupuesto anual de sueldos, gastos e inversiones;

g) Contraer préstamos, dar o tomar en arrendamiento toda clase de bienes, muebles, inmuebles o semovientes;

h) Constituir o aceptar derechos de hipotecas, prenda o cualquier otro derecho de uso, goce o garantía.

ARTICULO 11.- Gozarán de los beneficios que establece el presente régimen, el personal en actividad, jubilados y pensionistas, de las entidades comprendidas en el artículo 12º, inciso e), y sus familias, de conformidad con la reglamentación que se dicte.

ARTICULO 12°.- El patrimonio del Instituto se formará con los siguientes recursos:

a) Los fondos acumulados en la cuenta "Previsión para el cumplimiento del plan de ayuda social interbancaria", radicada en el Banco Central de la República Argentina, así como los bienes muebles e inmuebles que se hubieren adquirido con fondos de dicha cuenta;

b) Los fondos y bienes a cuya transferencia se refiere el Decreto número 28.064/49;

c) Las donaciones, legados y subsidios;

d) Los intereses de los valores públicos que posea;

e) La contribución mensual obligatoria del personal en actividad; jubilados y pensionistas de las siguientes entidades:
   1°.- instituciones bancarias oficiales, mixtas y particulares;
   2°.- Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias (en liquidación);
   3°.- Entidades autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para funcionar como bancos;
   4°.- Instituto de Servicios Sociales Bancarios;
   5°.- Entidades gremiales reconocidas;
   6°.- Presidencia de la Nación.

f) La contribución mensual obligatoria que deberá efectuar el personal en actividad, jubilado y pensionistas, por sí y por su familia, a que se refiere el inciso e) de este artículo, será del dos por ciento (2%) sobre el monto mensual del sueldo, jubilación o pensión;

g) La contribución mensual obligatoria de las entidades empleadoras, cada una de la cuales aportará una suma igual a la contribución total que sus empleados en actividad efectúan;

h) Las retribuciones por servicios prestados.

ARTICULO 13º.- Las entidades empleadoras actuarán como agentes de retención de las contribuciones de su respectivo personal (incisos e) y f) del artículo 12º). De igual modo procederán las instituciones que abonen las jubilaciones y pensiones. Las contribuciones mencionadas, así como las del inciso g)del artículo 12º, deberán depositarse dentro de los primeros quince días del mes siguiente al de su retención en el Banco de la Nación Argentina a la orden del Instituto de Servicios Sociales Bancarios.

ARTICULO 14º.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 13º, determinará que las sumas correspondientes devenguen un interés anual, a partir del momento de producirse la mora, igual al que rija en el Banco de la Nación Argentina para las operaciones ordinarias de descuento.

ARTICULO 15º.- El Instituto propenderá la incorporación de aquellas entidades formadas por empleados bancarios que tengan por objeto la prestación de servicios sociales.

ARTICULO 16º.- Los recursos no invertidos en un ejercicio se transferirán al siguiente.

ARTICULO 17º.- El Instituto estará sometido exclusivamente a la jurisdicción nacional. Cuando sea actor en juicio, la competencia nacional será concurrente con la de la justicia ordinaria de las Provincias.

ARTICULO 18º.- El Presidente absolverá por escrito posiciones en juicio, no estando obligado a comparecer personalmente.

ARTICULO 19º.- Los inmuebles del Instituto, sus operaciones propias y los actos de sus representantes y apoderados, están exentos de toda contribución o impuesto nacional.

ARTICULO 20º.- El Instituto de Servicios Sociales Bancarios elevará al Ministerio de Hacienda, dentro de los noventa (90) días subsiguientes a la fecha de constitución del Consejo de Administración, el proyecto de reglamentación del presente decreto-ley, y dentro de los sesenta (60) días, se expedirá sobre el problema enunciado en los considerandos 11º y 12º.

ARTICULO 21º.- El personal jubilado o los pensionistas de agentes que hubieran pertenecido al ex Ministerio de Finanzas y se hallaren a la fecha afiliados a los Servicios Sociales Bancarios, conservarán dicho carácter.

ARTICULO 22º.- El personal en actividad, jubilados y pensio-

nistas de las dependencias del Ministerio de Hacienda aludidos en el inciso c) del artículo 12º queda excluído de la afiliación a la Obra Social del citado Departamento de Estado y a su vez, el personal en actividad, jubilados y pensionistas amparados en los beneficios del artículo 9º de la Ley Nº 13.215 y sus reglamentaciones, no podrá ser afiliados a los Servicios Sociales Bancarios.

ARTICULO 23º.- Deróganse las Leyes números 13.987 y 14.171.

ARTICULO 24º.- El presente decreto-ley será refrendado por el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Ejército, de Marina, de Aeronáutica y de Hacienda.

ARTICULO 25º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Arturo Ossorio Arana - Teodoro Hartung - Julio C. Krause - Eugenio A. Blanco.-

DECRETO-LEY Nº 20.714.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 98.-

HORARIO ADMINISTRATIVO

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943.-

Visto el momento anormal por que atraviesa la explotación de los servicios de transportes urbanos colectivos de pasajeros, y

CONSIDERANDO:

Que el problema de la afluencia extraordinaria de pasajeros se agudiza durante las horas en que comienzan y terminan las jornadas de labor de los empleados y obreros, o se producen las interrupciones ordinarias y del medio día;

Que en la puja por obtener ubicación el pasaje femenino resulta visiblemente perjudicado;

Que tal inconveniente puede solucionarse con medidas conducentes a la descongestión y debe remediarse cuidando de mantener las prerrogativas inherentes al sexo;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, EN

ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- A partir de la fecha, el horario de trabajo del personal femenino que presta servicios de oficina dentro del radio de la Capital Federal, en las dependencias nacionales, terminará quince minutos antes de la hora ordinaria de cese de las actividades fijada para el resto del personal.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.-

DECRETO Nº 8.453.- RAMIREZ - Alberto Gilbert
Benito Sueyro - Segundo R. Storni - Jorge
Diego L.Mason - A. Santamarina - Elbio C.
I.F.Galíndez - Anaya - Edelmiro J.Farrell

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 99.-

HORARIO ADMINISTRATIVO

Buenos Aires, 15 de marzo de 1956.-

Visto la necesidad de aumentar el rendimiento de la administración pública, fijando un horario de trabajo que permita el máximo aprovechamiento del empleado para la función asignada, y

CONSIDERANDO:

Que el horario que cumple esas necesidades es el de 11 y 15 a 18 y 15 de lunes a viernes y habilitación esporádica de cinco horas los días sábados por la mañana cuando las necesidades de servicio lo haga necesario;

Que el mismo debe tener carácter permanente porque el horario matutino durante la temporada estival no satisface aquel propósito;

Que las exigencias de las tareas que cumple cada Ministerio y la proximidad de ubicación de sus sedes principales induce, a su vez, a establecer un límite de quince minutos en más o menos, a efectos de que cada Departamento de Estado fije su horario de tareas, de manera que la media hora de referencia resultante, evite congestión en los medios de transporte colectivo;

Que debe excluirse del tratamiento referido en cuanto al límite que atañe al Ministerio de Finanzas en atención a que el personal bancario que depende del mismo tiene horario que excede a aquél;

Que igualmente, por razones habituales de organización y servicios deben quedar exceptuados de este régimen los Ministerios de las Fuerzas Armadas, y por último;

Que debe coordinarse en el Ministerio de Trabajo y Previsión el horario cierto de cada Secretaría de Estado;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A:

ARTICULO 1º.- Institúyese a partir del 15 de marzo de 1956 el horario permanente de 11,15 a 18,15 horas para la Administración Pública Nacional.

ARTICULO 2º.- Facúltase a los distintos Ministerios para señalar, dentro de un límite de quince minutos en más o menos de las horas fijadas en el artículo anterior, y con acuerdo del Ministerio de Trabajo y Previsión que actuará de coordinador, el horario cierto a su respectivo Departamento de Estado. Exclúyense del presente régimen al Ministerio de Finanzas que lo relacionará con el horario de las instituciones bancarias, y los Ministerios de las Fuerzas Armadas que continuarán con el horario matutino.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será suscripto por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Trabajo y Previsión y de Interior.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

ARAMBURU - Raúl C. Migone - Eduardo B. Busso.-

DECRETO Nº 4.797.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 100.-

PASAJES OFICIALES

Expediente Nº 290.177 - 1954.-

//—ÑOR MINISTRO:

En las presentes actuaciones la Dirección General Impositiva somete a consideración de V.E. la situación planteada a raíz de la reclamación del beneficio que acuerda el decreto nº 98.902/947, formulada por el Jefe del Distrito Comodoro Rivadavia, de esa Repartición, don FERMIN LAVAYEN.

El artículo 1º del recordado decreto nº 98.902/947, establece: "Hágase extensivo a todo el personal de la Administración Nacional que presta servicios en los Territorios Nacionales, el beneficio relativo a la concesión de un pasaje de ida y vuelta por cuenta del Estado cada dos años, para su traslado a la Capital".

Al reglamentar dicha concesión, el Reglamento de Pasajes y Cargas, en su artículo 30, estatuye:

a) "Es necesario que el empleado tenga un mínimo de dos años de trabajos continuados y de permanencia ininterrumpida en el territorio".

b) "Se tendrá derecho a pasaje, únicamente en los casos de licencias por razones particulares o enfermedad, siempre que éstas sean con goce de sueldo".

El funcionario de referencia, que había usado el beneficio de que se trata el 10 de julio de 1951, se presenta con fecha 9 de enero de 1953 solicitando la nueva concesión con motivo de tener que trasladarse a la Capital Federal en uso de licencia ordinaria, por razones de enfermedad de su esposa (fs.2).

Teniendo en cuenta que no se había cumplido el término exigido por el recordado decreto 98.902/947 -ya que esto re-

ción sucedería el 10 de julio de 1953, la Dirección General Impositiva deniega su solicitud. (fs. 2 vta.)

Con fecha 6 de julio de 1953 (fs.3), el interesado se presenta nuevamente- ahora en oportunidad de cumplir el plazo previsto- reclamando el reintegro de los gastos del pasaje utilizado con motivo de su viaje a la Capital en el mes de febrero de dicho año.

Frente a este hecho la Dirección General Impositiva, interpretando que, siendo el derecho a pasaje oficial correlativo al de la licencia, debe aplicarse a ambos el mismo criterio, es decir, que el pasaje podrá ser otorgado al hacer uso de la licencia correspondiente al año en que esté en condiciones de ejercer dicho derecho, dispone la liquidación del reintegro respectivo. (fs. 6 a 11).

Observado el pago por el Delegado Contador y consultado el caso a la Contaduría General de la Nación, ésta confirma aquél reparo y señala la improcedencia del derecho reclamado, toda vez que entiende que el beneficio de que se trata ha sido previsto con el propósito de estimular a los empleados que prestan servicios en los Territorios Nacionales y por lo tanto es requisito indispensable el cumplimiento del término fijado por el decreto respectivo, sin que pueda configurar excepción a él las razones de orden familiar que determinaron que el interesado se trasladara a la Capital con varios meses de anticipación a la fecha de cumplimiento del plazo establecido (fs.13).

Con tal motivo la Dirección General Impositiva ocurre a este Ministerio propiciando la resolución favorable del caso planteado e invocando para ello diversas razones que esta Dirección pasará a analizar seguidamente:

I.- Dice la Dirección General Impositiva que el uso del beneficio de que se trata no podría desvincularse de las normas que rigen en materia de licencias, ya que si razones de servicio obligaran al agente a solicitar su licencia antes de que se cumplieran los períodos bienales, quedaría excluído del beneficio, lo que no coincidiría con el espíritu del citado decreto nº 98.902/947.

El espíritu del decreto que acuerda el derecho al pasaje sin cargo es -a juicio de esta Dirección- el de estimular la prestación de servicios en aquellos puntos del país que ppr su ubicación geográfica resultan difíciles de cubrir y que, para el agente que residiendo en la Capital Federal acepta aquel destino, entraña una serie de inconvenientes. Por ello se sostiene que corresponde conceder el beneficio recién cuando el agente haya cumplido el plazo de permanencia ininterrumpida exigido, y a esta circunstancia debe subordinarse todo otro factor. La licencia es la oportunidad que pone en ejecución el derecho previsto. Por otra parte cabe señalar que la misma Impositiva ha aplicado tal criterio en el primer trámite impuesto a la gestión del nombrado agente. (fs. 2 vta.)

II.- En opinión de la Dirección General Impositiva el "beneficio sólo podrá usarse en cualesquiera de las distintas oportunidades en que sea procedente hacer uso de la licencia -año por medio- y siempre que, por supuesto, se haya cumplido el primer período bianual de servicios".

Tal criterio supone la implantación de un mecanismo al margen de las disposiciones del recordado acto de gobierno, que en última instancia vendría a vulnerar sus propósitos, ya que en éste únicamente se hace mención de que el beneficio será concedido "cada dos años". Además, de ser obligatorio ese término sólo por primera vez, para luego otorgarse el beneficio año por medio, quedaría consagrada una contradicción. Las mismas razones que exigen el cumplimiento del primer plazo deben imponer el de los restantes y viceversa. El ejemplo del régimen de licencias no se ajusta al caso, puesto que aquellas no obligan al cumplimiento de un plazo intermedio.

Por las razones expuestas precedentemente, esta Dirección General -compartiendo el criterio sustentado por la Contaduría General de la Nación- estima que no procede acceder a lo solicitado por el recurrente.-

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 23-8-954.-

Fdo. MARIANO RODOLFO MEI
Director General
de Contabilidad y Administración

Buenos Aires, 25 de agosto de 1954.-

Visto el informe de la Dirección General de Contabilidad y Administración, que este Ministerio hace suyo y lo opinado por la Contaduría General de la Nación, vuelva a la Dirección General Impositiva manifestándole que no procede el pago del beneficio acordado por el decreto 98.902/947 al Jefe del Distrito Comodoro Rivadavia, don FERMIN LAVAYEN, por no haberse cumplido el término exigido por el citado acto de gobierno.

Fdo. P.J. Bonanni

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 101.-

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS - PERSONAL JORNALIZADO - LICENCIAS

Buenos Aires, 2 de enero de 1957.-

Visto el decreto nº 12.720/53, por el cual se fija el régimen de licencias para el personal de la Administración Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1º del referido acto de gobierno se excluye de su ámbito de aplicación al personal sometido a regímenes especiales;

Que en dicha situación se encuentra el personal jornalizado por reunión que presta servicios en los hipódromos dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, toda vez que el mismo sólo desempeña sus tareas en días feriados, sábados o domingos, es decir, en días inhábiles para el resto de los agentes de la Administración Nacional;

Que con tal motivo, procede determinar expresamente el régimen a que habrá de ajustarse dicho personal en el uso del comentado beneficio, adecuando el mismo a las características especiales del servicio respectivo;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Fíjase el presente régimen de licencias para el personal jornalizado -por reunión- que presta servicios en los Hipódromos dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, sobre la base de los beneficios que se detallan a continuación:

a) Licencia por vacaciones;

b) Licencia para tratamiento de la salud, por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;

c) Licencia por maternidad y permiso para la atención del lactante;

d) Licencia para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio;

e) Licencia para desempeñar cargos electivos o de representación política, gremial y/o sindical;

f) Licencia por asunto familiar;

g) Licencia por asunto particular;

h) Licencia para rendir examen;

i) Licencia para realizar estudios o actividad cultural en el país o en el extranjero;

j) Justificación de inasistencias.

C A P I T U L O I

LICENCIA POR VACACIONES

a) Del término

ARTICULO 2º.- La licencia anual es obligatoria, comportará el goce de haberes y se concederá dentro del año calendario en las épocas y con arreglo a los turnos que se establezcan para cada dependencia. Podrá ser fraccionada en dos períodos como máximo, si las necesidades del servicio lo permiten.

En ocasión del receso funcional, se tratará de que la mayor parte del personal use de su licencia en dicha época.

El término de la licencia anual será de:

Cuatro reuniones cuando la natigüedad sea menor de cinco años;

Seis reuniones cuando la antigüedad sea mayor de cinco años y no exceda de diez;

Ocho reuniones cuando la antigüedad sea mayor de diez y no exceda de quince años;

Diez reuniones cuando la antigüedad sea mayor de quince y no exceda de veinte años;

Doce reuniones cuando la antigüedad sea mayor de veinte años.

b) De la antigüedad

ARTICULO 3º.- Para establecer la antigüedad del agente se computarán los años de servicios prestados en la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o en entidades privadas, cuando, en este último caso, se haya hecho el cómputo de servicios en la respectiva Caja de Previsión Social; Al personal retirado o dado de baja de las Fuerzas Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Cuerpo Penitenciario, Policía Federal y Bomberos y Prefectura General Marítima, lo mismo que a jubilados de la Administración Nacional, Provincial y Municipal, se le considerará su anterior antigüedad, a cuyo fin se tendrá en cuenta el tiempo por el cual el agente percibió haberes por año calendario.

A los efectos del reconocimiento de la antigüedad acreditada en entidades privadas y hasta tanto la correspondiente Caja extienda las respectivas certificaciones, los agentes deben presentar una declaración jurada, acompañada de una constancia extendida por el o los empleadores, sujeta a la pertinente certificación documental, en la que se justifiquen los servicios prestados a partir de los 18 años de edad.

La antigüedad como empleado por reunión será computada por año calendario.

ARTICULO 4º.- En caso que dentro del año calendario el agente cumpliera una antigüedad que diera derecho a un término mayor de licencia anual, se computará el término mayor para el otorgamiento de la misma.

c) De las licencias no utilizadas

ARTICULO 5º.- Los períodos de licencia por vacaciones no son acumulables. Cuando el agente no hubiera hecho uso total o parcial de su licencia anual por razones de servicio, debidamente documentadas, tendrá derecho a que en el año siguiente se le otorgue la licencia anual con más la que le correspondiese por la licencia no utilizada. No podrá aplazarse una misma licencia dos años consecutivos.

d) De la interrupción de la licencia

ARTICULO 6º.- La licencia anual se interrumpe por accidente, enfermedad o razones de servicio, siendo de aplicación en los dos primeros casos, lo determinado en los artículos 7º y 8º, según corresponda y en el restante lo especificado en el artículo precedente.

C A P I T U L O II

LICENCIA PARA TRATAMIENTOS DE LA SALUD Y POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

a) Licencia por enfermedad que imponga corto tratamiento de la salud

ARTICULO 7º.- Se concederán hasta quince (15) reuniones de licencia por año calendario en forma contínua o discontínua, con percepción de jornales, en los casos de tratamientos por afecciones comunes o accidentes fuera del servicio.

Vencido dicho plazo, las posteriores licencias por esta causa podrán ser extendidas hasta completar cien (100) reuniones, pero sin derecho a percibir haberes, salvo que se le acordare el beneficio previsto por el artículo 8º.

b) Licencia por causal que imponga largo tratamiento de la salud

ARTICULO 8º.- Se concederá licencia con goce de jornal por las reuniones comprendidas en el término de dos (2) años, en forma contínua o discontínua, para una misma o distinta afección, que imponga largo tratamiento de la salud, por motivos que aconseje

la hospitalización o el alejamiento del agente por razones de profilaxis y seguridad. Vencido este plazo se concederá ampliación de la misma, por el término de las reuniones comprendidas en otro año, en el que el agente percibirá la mitad de su remuneración; finalizada la prórroga será reconocido por una Junta Médica en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, la que determinará, de acuerdo con la capacidad laborativa del agente, las funciones que podrá desempeñar en los Hipódromos. En caso de incapacidad total se aplicarán las leyes de previsión y ayuda social correspondiente.

Para solicitar licencia, a los fines de este artículo se considerarán causales, las siguientes: enfermedades infecciosas, cardíacas, degenerativas, progresivas o blastomatosas, del sistema nervioso, de los sentidos, traumatismo y/o secuela, intoxicaciones, malformaciones, intervenciones quirúrgicas. Esta enumeración no es taxativa, quedando a juicio del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública la consideración de otras causales. La presunción diagnóstica, suficientemente fundada, de una enefermedad contagiosa, justificará el otorgamiento de licencia hasta tanto se determine el estado de salud del agente. El diagnóstico definitivo deberá producirse en el menor tiempo posible, con intervención del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.

ARTICULO 9º.- En caso de enfermedad profesional contraída en acto de servicio o incapacidad temporaria originada por el hecho o en ocasión del trabajo, se concederá licencia con goce de jornal por las reuniones comprendidas en el término de dos (2) años, prorrogables en iguales condiciones por otro año. Si de cualquiera de estos casos se derivara una incapacidad parcial permanente deberán adecuarse las tareas del agente a su nuevo estado.

c) Del procedimiento

ARTICULO 10º.- El agente que por razones de salud no pueda desempeñar sus tareas o deba interrumpir la licencia anual, está obligado a comunicar en el día tal circunstancia. Por otra parte, si no se sometiera a tratamiento médico, perderá sus derechos a las licencias y beneficios que otorga el presente decreto.

ARTICULO 11º.- Si el agente se encontrara enfermo en el interior del país, fuera del radio de acción del Servicio Médico del Ministerio de Hacienda y no hubiere médico del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, o de otra repartición nacional, provincial o municipal, con sede en la localidad, deberá presentar certificado del médico de policía del lugar y si no lo hubiere, del médico particular, con historia clínica y demás elementos de juicio, que permitan justificar la existencia real de la causal invocada. El certificado médico no perteneciente a algunos de los organismos oficiales citados, debe ser autenticado por autoridad policial local.
ARTICULO 12º.- Los agentes en uso de licencia por enfermedad, no podrán ausentarse del país sin autorización previa del organismo competente y conocimiento del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.

d) De la asistencia gratuita

ARTICULO 13º.- En los casos a que se refiere el artículo 9º, la Dirección de Obra Social del Ministerio de Hacienda, proveerá gratuitamente la asistencia médica y los elementos terapéuticos necesarios.
ARTICULO 14º.- Para la concesión de las licencias previstas en los puntos 8º y 9º deberá darse intervención al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación. La certificación de los estados a que se refieren los artículos 7º,16º, 17º y 20º -apartado 4 a)- estarán a cargo del Servicio Médico respectivo.

e) Del alta

ARTICULO 15º.- En los casos de licencia concedida por aplicación de los artículos 8º y 9º, el agente no podrá ser incorporado a su empleo, hasta tanto el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación no otorgue el alta respectiva.

CAPITULO III

LICENCIA POR MATERNIDAD Y PERMISO PARA LA ATENCION DEL LACTANTE

a) De la licencia

ARTICULO 16º.- Por maternidad se concederá licencia con percepción de jornal, por el término de doce (12) semanas, divididas en dos períodos preferentemente iguales, uno anterior y otro posterior al parto, el último de los cuales no será inferior a seis (6) semanas. En casos anormales se aumentará el término de la licencia de acuerdo a lo establecido en los artículos 7º y 8º, según corresponda.

En caso de nacimiento múltiple esta licencia podrá ampliarse a un total de quince (15) semanas, con un período posterior al parto no menor de nueve (9) semanas.

b) Del permiso

ARTICULO 17º.- De acuerdo a lo establecido por la ley nº 12.568, toda madre de lactante tendrá derecho a optar por:

a) Disminuir en una hora su jornada de trabajo, ya sea iniciando su labor una hora después del horario de entrada o finalizando una hora antes.

b) Disponer de una hora en el transcurso de la jornada de trabajo para amamantar a su hijo.

C A P I T U L O IV

LICENCIA POR SERVICIO MILITAR

ARTICULO 18º.- Los agentes que deban incorporarse al Servicio Militar, tendrán derecho a las siguientes licencias: con el 50% de su remuneración, desde la fecha de su incorporación hasta (2) reuniones después del día de la baja asentada en su libreta de enrolamiento, en los casos en que el agente hubiera sido declarado inepto o fuere exceptuado; hasta cinco (5) reuniones después de haber sido dado de baja si hubiera cumplido en período para el cual fué convocado. Igualmente se concederá licencia de dos (2) reuniones con la remuneración expresada, cuando el período fuera inferior a seis meses.

El personal que con carácter de reservista sea incorporado transitoriamente a las Fuerzas Armadas de la Nación, tendrá de-

recho a usar de licencia sin goce de haberes por el tiempo que permanezca en esa situación.

C A P I T U L O V

LICENCIA PARA DESEMPEÑAR CARGOS ELECTIVOS O DE REPRESENTACION POLITICA, GREMIAL Y/O SINDICAL

ARTICULO 19º.- El personal jornalizado de los hipodromos podrá gozar de licencia especial en los siguientes casos:

a) Cargos electivos o de representación política en el orden Nacional, Provincial o Municipal; cuando fuere designado para desempeñar estos cargos, en el caso de plantearse una incompatibilidad, el agente tendrá derecho a usar de licencia sin goce de jornal por el tiempo que dure su mandato, debiendo reintegrase al cargo administrativo dentro de los treinta (30) días siguientes al término de las funciones para las que fué elegido.

b) Cargos de representación gremial y/o sindical; cuando fuera designado para desempeñar un cargo de esta naturaleza, representando a agentes del Estado, no siendo retribuído por la entidad gremial o sindical, tendrá derecho a usar de licencia con goce de jornal, en la medida necesaria, mientras dure su mandato, debiendo reintegrarse a su puesto administrativo al término del mismo.

c) Cuando fuere designado para desempeñar alguno de los cargos previstos en el inciso b), y éste fuera retribuído por la entidad gremial o sindical, el agente sólo tendrá derecho a usar de licencia sin goce de jornal mientras dure su mandato, debiendo reintegrarse al cargo administrativo dentro de los treinta (30) días de vencido éste.

El otorgamiento de las licencias a que se refieren los apartados a) y b), quedará supeditado a las comunicaciones que efectúe la Secretaría General de la Confederación General del Trabajo, o el sindicato respectivo con personería gremial, al orga-

nismo competente del Ministerio de Hacienda.

C A P I T U L O VI

LICENCIA POR ASUNTO FAMILIAR

ARTICULO 20º.- Se concederá licencia remunerada en los casos y por el término de reuniones siguientes:

1) Matrimonio

a) Del agente, las reuniones comprendidas dentro de los diez (10) días hábiles.

b) De sus hijos, una (1) reunión (si coincidiera con el día de actuación).

2) Nacimiento

a) De hijos del agente varón, una (1) reunión (si el hecho se produjera en el día de actuación o víspera).

3) Fallecimiento

a) Del cónyuge o parientes consanguíneos de primer grado (padres o hijos), las reuniones comprendidas dentro de los cinco (5) días laborables de producido el hecho.

b) De parientes afines de primer grado o consaguíneos y afines de segundo grado (suegros, yerno y nuera, hermanos, abuelos, nietos y cuñados), una (1) reunión si coincidiera en el día de actuación o víspera.

4) Enfermedad de un miembro del grupo familiar

a) Para consagrarse a la atención de un miembro enfermo del grupo familiar constituído en el hogar, se concederá licencia con goce de jornal por el término de ocho (8) reuniones, contínuas o discontínuas por año calendario. A este fin el agente deberá expresar mediante declaración jurada, que es indispensable su asistencia o que el estado del paciente reviste extrema gravedad. Esta causal deberá ser certificada por el Servicio Médico respectivo.

C A P I T U L O VII

LICENCIA POR ASUNTO PARTICULAR

ARTICULO 21º.- En el transcurso de cada decenio el agente podrá usar de licencia sin remuneración, por el término de un (1) año, fraccionado en dos (2) períodos. El término de licencia no utilizado en un decenio no puede ser acumulado en los decenios subsiguientes. Para tener derecho a esta lecencia en distintos decenios, deberá transcurrir un lapso mínimo de dos (2) años entre la terminación de una y la iniciación de otra.

El titular del Ministerio podrá conceder licencia, sin remuneración, en casos de fuerza mayor o graves asuntos de familia debidamente comprobados, por términos que no excedan de tres (3) meses en el año calendario.

C A P I T U L O VIII

LICENCIA POR EXAMEN

ARTICULO 22º.- Se concederá licencia con goce de jornal al personal que cursa estudios en establecimientos oficiales o incorporados (Nacionales, Provinciales o Municipales) para rendir examen en los turnos fijados oficialmente, debiendo el agente presentar constancia de la prueba rendida, otorgada por las autoridades del establecimiento respectivo.

Este beneficio será acordado por el término de diez (10) reuniones anuales y por plazos que no excedan de dos (2) reuniones cada vez, debiendo ser éstas inmediatamente anteriores o cincidentes con el examen a rendir, y acreditando la causal invocada con el certificado a que se alude precedentemente.

C A P I T U L O IX

LICENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS O ACTIVIDAD CULTURAL EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO

a) Sin goce de haberes

ARTICULO 23º.- El agente tendrá derecho a usar de licencia sin goce de haberes por el término máximo de dos (2) años, cuando deba realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos o

artísticos o participar en conferencias o congresos de esa índole en el país o en el extranjero. Igual beneficio podrá concederse para mejorar la preparación técnica o profesional del agente o para cumplir activiades culturales o deportivas.

b) Con goce de haberes

ARTICULO 24º.- Las licencias a que se refierewel artículo 23º podrán ser concedidas con goce de jornal, pero por un término no mayor de las reuniones comprendidas en un año calendario, cuando existan probadas razones de interés público en el cometido a cumplir por el agente o éste actúe representando al país.

Cuando el agente deba trasladarse al extranjero, el beneficio deberá ser acordado por el Poder Ejecutivo, previa conformidad del Consejo de Gabinete; de lo contrario y en el supuesto previsto en el artículo 23º, el mismo será resuelto directamente por el titular del Ministerio. En todos los casos se tendrán en cuenta las condiciones, títulos y aptitudes del empleado y determinarán, asimismo, sus obligaciones a favor del Estado en el cumplimiento de su misión.

C A P I T U L O X

JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS

ARTICULO 25º.- Fuera de los casos de licencia contemplados expresamente en el presente decreto, podrán justificarse excepcionalmente y con goce de jornal, las inasistencias del personal motivadas por razones atendibles o de fuerza mayor. No excederán de cuatro (4) reuniones anuales, fraccionadas a razón de una (1) reunión por trimestre.

C A P I T U L O XI

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 26º.- El agente tendrá derecho a usar desde la fecha de su incorporación las licencias glosadas en el presente decreto, excepto las contempladas en los artículos 2º,21º,23º y 24º en que deberá totalizar como mínimo, cincuenta (50) reuniones de antigüedad.

ARTICULO 27º.- Todas las licencias concedidas por causa de enfermedad o accidente quedarán canceladas por el restablecimiento del agente, quien deberá, en todos los casos, solicitar la reincorporación a sus funciones, aún cuando no hubiera vencido el término de la licencia, siempre que se encontrase en condiciones necesarias de acuerdo al presente régimen.

ARTICULO 28º.- Se considerará falta grave toda simulación realizada con el fin obtener licencias o justificacion de inasistencias. El agente se hará pasible de suspensión por las reuniones comprendidas en el término de dos (2) meses sin goce de jornal o cesantía en caso de reincidencia.

ARTICULO 29º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a dictar la reglamentación del régimen que se instituye por el presente.

ARTICULO 30º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda y Asistencia Social y Salud Pública.

ARTICULO 31º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - E.A. Blanco - F. Martínez.-

DECRETO Nº 10.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 102.-

PASAJES OFICIALES

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1933.-

Visto lo dispuesto en la Resolución de fecha de octubre 20 ppdo., y siendo conveniente complementar las disposiciones contenidas en el decreto nº 5383 que reglamenta la pedición y uso de las órdenes de pasajes y carga, en las dependencias del Ministerio de Hacienda, y

CONSIDERANDO:

Que es pertinente aclarar la disposición del Decreto arriba citado, en cuanto se refiere a las órdenes de pasajes expedidas para los familiares de los empleados, como asimismo no otorgar pasajes en aquellos casos que su importe sea inferior a un peso moneda nacional;

Por lo expuesto,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Amplíase el Decreto nº 5383 de fecha junio de 1932, con las siguientes disposiciones:

a) Cuando el cambio de destino, imponga como consecuencia el cambio de residencia, se acordará a cada empleado pasajes para él y la familia declarada en la ficha del impuesto al crédito por ferrocarriles, vapores o mensajerías con exceso de equipajes y una orden de carga para él y su familia, en las condiciones del inciso C. del art. 3º del decreto de fecha junio 30 de 1932.-

b) Cuando el cambio del destino responda a gestiones propias del interesado, ajenas a razones de servicio, no se le acordarán pasajes.

c) No podrán acordarse pasajes u órdenes de transporte a cuenta de haberes, ni tampoco órdenes de pasajes, cuando el importe del viaje no ascienda a la suma de un peso moneda nacional.

ARTICULO 2ª.- Tómese nota en la Dirección de Administración del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese y archívese.-

JUSTO - Federico Pinedo

DECRETO Nª 32.897

PASAJES OFICIALES.-

Buenos Aires, enero 28 de 1937.-

CONSIDERANDO:

Que por resolución de fecha 5 de enero de 1905, dictada por intermedio del Ministerio del Interior, con el propósito de estimular a los empleados de los Territorios Nacionales que hubieren acreditado consagración al servicio, se acordó al personal dependiente de las Gobernaciones de los mismos, que hayan permanecido en el desempeño de sus tareas durante dos años continuados, el derecho de un pasaje de ida y vuelta hasta la Capital Federal por cuenta del Estado;

Que por Decretos de fechas 26 de noviembre de 1906 y septiembre 1º de 1935, se concedió análogo beneficio a los empleados de Correos y Telégrafos y al personal de policía marítima de la Dirección General de Prefectura General Marítima que presta servicios en los expresados Territorios;

Que es de justicia considerar comprendidos en tales disposiciones a todo el personal de la Administración Nacional destacado en esas regiones, cualquiera sea la repartición a que pertenezca;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A:

ARTICULO 1º. Hagase extensivo a todo el personal de la Administración Nacional que presta servicio en los Territorios -

Nacionales, el beneficio relativo a la concesión de un pasaje de ida y vuelta por cuenta del Estado cada dos años, para su traslado hasta la Capital Federal.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

J U S T O - M.R.Alvarado - R.M.Ortiz - R.S.Castillo - C.Saavedra Lamas-Jorge de la Torre - B.B.Pertiné - E.Videla - M.A.Cárcano

PASAJES OFICIALES

Buenos Aires, 20 de julio de 1943.-

Vistos estos actuados; y

RESULTANDO:

Que la Empresa del Ferrocarril del Sud al enviar a la Dirección General de Correos y Telégrafos, para su liquidación, la cuenta nº 31.831 del mes de Mayo de 1932, relativa a pasajes concedidos a empleados en uso de licencia, con asiento en Territorios Nacionales, lo hizo por el importe íntegro aduciendo que a su juicio no corresponde la rebaja del 50%, en virtud de lo establecido en el Decreto de fecha 11 de abril de 1924;

Que la Dirección General de Ferrocarriles manifiesta (fs. 12 y 25) no ser aplicable al presente caso lo dispuesto en el Decreto mencionado, por cuanto el mismo se refiere a "pasajes oficiales para miembros de las familias de los empleados" y no a empleados en funciones y a quienes por razones reglamentarias se les expide pasaje para trasladarse durante su licencia;

CONSIDERANDO:

Que la interpretación del significado y alcances de la expresión "Tarifas Oficiales", ha sido ya considerada en diversos pronunciamientos, en asuntos semejantes al que motiva la cuestión planteada y relacionados con el aforo que corresponde aplicar en materia de transporte y pasajes oficiales;

Que el derecho que asiste a los empleados dependientes de las gobernaciones de los Territorios Nacionales y de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con asiento en dichos Territorios, sobre concesiones de pasajes oficiales aún hallándose en uso de licencia ha quedado concretamente establecido

en el Decreto de fecha 2 de julio de 1907, cuyo artículo 1º, inciso 8, dispone: "quedan subsistentes las resoluciones del 5 de enero de 1905 y la del 26 de noviembre de 1906, relativas a la extensión de pasajes a empleados con licencia, otorgándose a los que hayan prestado servicios contimuados durante dos años y obtengan licencia para ausentarse del Territorio, el derecho a un pasaje de ida y vuelta hasta la Capital Federal por cuenta del Estado, por que éste crea conveniente estimular a los que hayan acreditado consagración a sus tareas";

Que el señor Procurador General de la Nación, dictamina a fs.22 concordantemente con lo expuesto, expresando que es procedente considerar pasajes oficiales con derecho a la rebaja del 50%, los que expide la Dirección General de Correos y Telégrafos a sus empleados con asiento en los Territorios Nacionales;

Que a su vez, el señor Procurador del Tesoro (fs.17), manifiesta que "la Ley, al determinar la rebaja, sólo ha tenido en cuenta el hecho de que el pasaje o los materiales transportados por cuenta del Gobierno, son pagados en definitiva por el Estado y que las órdenes de pasajes extendidas por éste, gozan de la rebaja del 50% de las tarifas, siendo una cuestión ajena a las Empresas el destino de esas órdenes"; y

De acuerdo con lo informado por la Dirección General de Ferrocarriles (fs. 12 y 25);

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Déjase establecido que los pasajes otorgados a los empleados de la Administración Nacional que se trasladen desde los Territorios Nacionales en uso de licencia, deben ser aforados con el 50% de rebaja, conforme a lo que dispone el Art. 10 de la Ley 5315.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese y fecho, vuelva a la Dirección General de Ferrocarriles a sus efectos.-

RAMIREZ - Ismael F. Galindez

DECRETO Nº 3.053.-

PASAJES OFICIALES

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944.-

Visto este expediente por el que la Dirección General de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos del Ministerio de Obras Públicas, sugiere que el beneficio que otorga el Decreto en Acuerdo General de Ministros de fecha 28 de enero de 1937 al personal de la Administración Nacional que presta servicios en los Territorios Nacionales, se haga extensivo para cualquier punto de la República, siempre que el importe del pasaje no sea superior al que correspondería concederle desde el lugar en que desempeña sus tareas hasta la Capital Federal;

TENIENDO EN CUENTA:

Que dicho beneficio se acuerda cada dos años a aquellos empleados que hubieran acreditado consagración a sus tareas;

Que la licencia anual de un mes que se concede a ese personal conforme a lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Nº 92.900 del 24 de octubre de 1936, para ausentarse del Territorio donde presta servicios, es utilizada generalmente por el mismo con el fin de trasladarse al lugar de residencia de sus familiares;

Que por lo expuesto precedentemente se estima de equidad considerar la gestión interpuesta sin la limitación formulada por la mencionada Dirección General; y

Atento a lo propuesto por el señor Ministro del expresado Departamento;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Determínase que el beneficio establecido por el Decreto Nº 98.902 dictado en Acuerdo General de Ministros con fecha 28 de enero de 1937 al personal de la Administración Nacional, se haga extensivo para cualquier punto de la República, siempre que éste sea el lugar de residencia de sus familiares directos; debiendo comprobarse esta circunstancia mediante certificado expedido por la autoridad competente con excepción del pasaje a la Capital Federal para el que no se exigirá tal requisito.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese y, previo conocimiento de la Dirección General de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, archívese.-

DECRETO Nº 35.696.-

Boletín Nº 106.-

PASAJES OFICIALES

Buenos Aires, 8 de julio de 1949.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que el cumplimiento del plan de recuperación de los servicios públicos, el P.E. ha nacionalizado y estatizado concesiones de diversa naturaleza;

Que, por otra parte, e inspirado en el mencionado plan ha impulsado enérgicamente el desarrollo de actividades existentes, tal cual acontece con la Flota Mercante del Estado;

Que como resultado de este ordenamiento el Estado Nacional explota y presta directamente un amplio y efectivo servicio de transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional;

Que por lo tanto es necesario actualizar y completar las disposiciones aisladas existentes sobre la utilización de estos servicios en viaje al interior y exterior del país;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA,

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS,

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Toda persona que deba trasladarse al interior o al exterior en misión encomendada por el Gobierno de la Nación deberá utilizar las líneas de transporte de propiedad del Estado.

ARTICULO 2º.- En los casos en que el medio de transporte de propiedad del Estado no tenga acceso directo al lugar de destino, el interesado deberá utilizarlo en su mayor recorrido en forma combinada con el de propiedad de terceros.

ARTICULO 3º.- Toda excepción al régimen establecido en el presente decreto, deberá ser autorizada por el Poder Ejecutivo previa aprobación de la causa que la justifique.

ARTICULO 4º.- Derógase toda disposición que se oponga al cumplimiento del presente decreto.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

DECRETO Nº 15.896.-

Boletín nº 107.-

PASAJES OFICIALES

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1956.-

Vistas las presentes actuaciones, en las cuales se ha considerado la modificación del Reglamento para la expedición, aceptación y facturación de las órdenes oficiales de pasajes aprobado por Resolución nº 265/54; y

CONSIDERANDO:

Que la experiencia recogida en la materia desde su implantación, ha aconsejado la modificación parcial del mismo;

Que de lo actuado en el expediente del rubro ha surgido la necesidad de agilizar su articulado para adaptarlo a las circunstancias;

Por ello, y de acuerdo a lo informado por las DIRECCIONES NACIONALES DE PLANIFICACION Y COORDINACION DE LOS TRANSPORTES y de FERROCARRILES Y AUTOMOTORES,

EL MINISTRO DE TRANSPORTES

R E S U E L V E:

1º.- Apruébase el REGLAMENTO PARA LA EXPEDICION, ACEPTACION Y FACTURACION DE ORDENES OFICIALES DE PASAJES, que figura anexo a la presente resolución, el que comenzará a aplicarse a los NOVENTA (90) días de la fecha de la presente resolución.

2º.- A partir de igual fecha déjase sin efecto la Resolución nº 265/54.

3º.- En los casos de infracciones a las disposiciones del Reglamento a que se refiere el artículo 1º, este DEPARTAMENTO DE ESTADO podrá dar intervención a la DIRECCION NACIONAL DE

VIGILANCIA DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTOS, a efectos de que la misma considere si la falta cometida resulta encuadrada dentro de los actos a que se refiere el Decreto nº 26.901/51.

4º.- Regístrese, gírese a la DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION DE LOS TRANSPORTES para su conocimiento, notificación a las empresas interesadas y ministerios nacionales; previa toma de conocimiento por la DIRECCION NACIONAL DE FORROCARRILES Y AUTOMOTORES, archívese.

RESOLUCION Nº 643/56

Fdo. SADI E. BONNET
Ministro de Transportes

Anexo a la Resolución nº 643/56

REGLAMENTO PARA LA EXPEDICION, ACEPTACION Y FACTURACION DE ORDENES OFICIALES DE PASAJES

Artículo 1º.- Las empresas de transporte automotor y los transportadores de un solo vehículo, sujetos al régimen de la Ley nº 12.346 y al Decreto nº 10.178/50, respectivamente, las empresas automotoras de propiedad del Estado y las empresas automotoras en funcionamiento con solicitud de permiso en trámite, deberán aceptar y dar cumplimiento -todo ello conforme a la forma y condiciones que se indica en el presente Reglamento- a todas las órdenes oficiales que fueran expedidas para las mismas por los Ministerios o Reparticiones Nacionales, así como también las expedidas por los Bancos Oficiales.

También podrán estas empresas convenir la aceptación de las órdenes oficiales que emitan las autoridades provinciales o comunales, quedando entendido que dicha aceptación no las obliga a otorgar la franquicia que establece el citado Art. 10, inciso g) de la Ley nº 12.346.

Artículo 2º.- Las órdenes oficiales mantendrán su validez hasta los treinta (30) días posteriores a la fecha de su emisión, serán instransferibles y deberán contener los siguientes datos:

a) Nombre de la empresa a la cual está dirigida;
b) La clase de servicio: si se trata de pasajeros, encomiendas, exceso de equipajes o carga. En este último caso, mención de la carga, su peso o volumen;
c) El punto de partida y destino;
d) El nombre de la persona a cuyo favor se extiende. Si se expendiera a nombre de varias, se detallará quienes la utilizarán;
e) Cargo que ocupa la persona o personas a cuyo nombre se expide la orden;
f) Indicación de que se trata de un transporte motivado en razones de servicio;
g Lugar, fecha en que se extiende, firma del funcionario

autorizado que expida la orden (aclaratoria de su firma) y sello de la repartición expedidora.

Artículo 3º.- Déjase aclarado que los beneficios del descuento establecido por el art. 10, inc.g) de la Ley nº 12.346, no lo alcanzan a las personas que presten servicios en las Reparticiones del Estado y/o a las cosas de exclusiva propiedad de mismo que requieran su traslado.

Artículo 4º.- Las empresas sólo aceptarán las órdenes oficiales que se encuentran encuadradas en el art. 2º de este Reglamento. Si una orden oficial imperfectamente emitida fuera aceptada por la empresa, ésta no tendrá derecho a exigir su pago.

Artículo 5º.- Las órdenes presentadas por personas distintas a aquellas cuyos nombres figuran en la misma, serán retiradas por las empresas y, previa formación de acta respectiva, remitidas las actuaciones al Ministerio de Transportes, a sus efectos.

Artículo 6º.- La aceptación de las órdenes oficiales comprende a las que se presenten, sea en las terminales de recorrido, o en cualquier punto de la línea con parada autorizada, sin perjuicio para esta última circunstancia, de aplicar la limitación que contiene el art. 10,inc.g) de la Ley nº 12.346.

Artículo 7º.- Cuando las empresas reciban una orden oficial, contra entrega del pespectivo boleto, harán llenar al beneficiario de la misma y conformar debidamente con su firma, la constancia destinada a tal efecto y cuyo formato y títulos figuran en el apéndice 1º del presente Reglamento. Esta constancia deberá ser agregada a la respectiva orden en todos los casos y su omisión dará derecho al Ministerio emitente a demorar su pago hasta tanto la empresa demuestre fehacientemente la fecha, hora y número de vehículo en que fué transportada.

Artículo 8º.- Sobre los transportes de personas o cosas que se les solicite, las empresas efectuarán, contra entrega, de la orden oficial pertinente, el cincuenta por ciento (50%) de descuento sobre el valor de la tarifa aprobada y hasta el

límite que no pase el cinco por ciento (5%) de la capacidad útil de cada unidad en marcha. De acuerdo con ello las empresas automotoras de transporte de pasajeros, ajustarán su descuento a la siguiente escala:

Vehículos hasta 29 asientos, a un pasajero.
" de 30 a 49 asientos, a dos pasajeros.
" de 50 asientos, a tres pasajeros.

Artículo 9º.- Los transportadores de un solo vehículo y las empresas automotoras cuya explotación dependa del Ministerio de Transporte, quedan eximidas de efectuar el descuento prescripto por el artículo precedente.

Artículo 10º.- El pago de la orden oficial, sea a tarifa íntegra o con el descuento a que se refiere el artículo 8º, podrá ser requerido por las empresas al contado en el momento de entregarse el boleto y comodidad, cuando los distintos Ministerios o Reparticiones Nacionales emisoras no hayan librado, para esa empresa, más de cien (100) órdenes en el año calendario anterior. En caso contrario queda la empresa obligada a la apertura de crédito y a gestionar el posterior cobro de la orden por la vía administrativa correspondiente.

Artículo 11º.- A los efectos de la aplicación del descuento establecido en el art. 10,inc. g) de la Ley nº 12.346, para las empresas que correspondan, dentro de la capacidad limitativa del cinco por ciento (5%) de la capacidad útil de cada unidad en marcha, las empresas a que se refiere el presente Reglamento llevarán un libro especial, cuyos folios en duplicado, se ajustarán en formato y títulos al modelo que figura en el apéndice 2º de este Reglamento.

Se anotarán en el mismo todas las órdenes recibidas, guardando el riguroso orden cronológico en que viajaron. Con posterioridad a los asientos, se efectuarán, sobre planilla, los descuentos correspondientes. Las empresas quedan obligadas a remitir al Ministerio de Transportes, cada vez que se finalice un folio, la copia del mismo, debidamente sellada y firmada, con el carácter de declaración jurada.

Artículo 12°.- Cuando las órdenes oficiales sean facturadas a tarifa íntegra, total o parcialmente, según resulte de las anotaciones a que se refiere el artículo 11°, las empresas justificarán esta circunstancia mediante la conformación de la constancia cuyo modelo figura en el apéndice 1° de este Reglamento. La misma será adherida al dorso de las respectivas órdenes acompañando la constancia del beneficiario a que se refiere el Art. 7°. Este anexo revestirá el carácter de declaración jurada.

Artículo 13°.- Toda orden que sea remitida al cobro por las empresas sin el anexo indicado en el art. 12°, deberá facturarse con el descuento del cincuenta por ciento (50%) de su valor.

Artículo 14°.- Déjase aclarado que la orden oficial sobre la que se efectúa el descuento, colma solamente la capacidad del vehículo hasta el punto o localidad para la cual ha sido extendida. A partir de dicho punto, y si continuaran viaje otros usuarios u otras cosas en el caso de empresas de carga, poseedores de órdenes oficiales, deberá procederse nuevamente conforme se indica en el art. 8° del presente Reglamento.

Artículo 15°.- Para el cobro de las órdenes correspondientes a servicios prestados por empresas automotoras de transportes de pasajeros, las facturas que se presenten deberán contener:

a) Fecha del viaje;
b) Recorrido (punto de origen y destino);
c) Tarifa que se aplica;
d) Descuento que se practica;
e) Importe total a liquidar.

Para las empresas automotoras de transporte de cargas, las facturas que se presenten deberán contaner:

a) Si es transportador de un solo vehículo;
b) Fecha del transporte;
c) Recorrido (punto de origen y destino);
d) Tarifa que se aplica, si es por tonelada, kilogramos, bulto, etc. Si se tiene clasificador, número o clase que se aplica.

Las facturas podrán ser rechazadas por los respectivos Organismos Oficiales si no reunen la totalidad de los requisitos exigidos para su cobro por el presente Reglamento.-

Fdo. SADI E. BONNET
Ministro de Transportes

A N E X O Nº 1

PARA EL TITULAR

ORDEN Nº _____ MINISTERIO _____

Se solicita viajar:

el día _____ de _____ de _____ a las ____ has.

BOLETO Nº _____ _____

Firma del titular

(Cortar cuando la orden se descuenta totalmente)

PARA LA EMPRESA

DECLARACION JURADA

La orden precedente se factura a tarifa íntegra entre _____ y _____ por encuadrarse en el Art. 8º del Reglamento, estando colmada entre los puntos indicados por las órdenes Nros. _____ anotadas en el Folio Nº _____

_____

Sello y Firma

Nº (x)	FECHA				ORDEN OFICIAL			RECORRIDO		VEHÍCULO		BOLETO	SE EFECTUÓ DESCUENTO		RESERVADO
	DIA	MES	AÑO	HORA	Nº	MINISTERIO EINTENTE	NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO	DE	A	Nº INT.	CLASE KIL	Nº	DE	A	M.T.N.

(x) Las órdenes se asentarán rigurosamente por el orden de fecha en que se efectuó el viaje.-

Boletín Nº 108.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1956.-

Atento a las consultas formuladas por el Banco Hipotecario Nacional, relativas a la aplicación del Decreto Nº 15.797 del 30 de agosto del corriente año, sobre régimen de retribuciones para los agentes del Sistema Bancario Oficial, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 19 del citado Decreto nº 15.797/56, establece que las normas de interpretación y aclaración a las disposiciones del mismo serán resueltas directamente por el Ministerio de Hacienda,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Los agentes que hayan ingresado a una Institución Bancaria Nacional siendo menores de 18 años de edad, pasan a ser beneficiarios de las retribuciones por antigüedad fijadas por el Art. 1º del Decreto nº 15.797 del 30 de agosto del corriente año al cumplir dicha edad, a cuyo fin corresponde que el cómputo de la antigüedad se efectúe desde el momento en que empezaron a desempeñarse en los respectivos organismos.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

Fdo. EUGENIO A. BLANCO

RESOLUCION Nº 273.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 109.-

COMPRA-VENTA - CAMBIO - IMPORTACIONES OFICIALES

Buenos Aires, 24 de diciembre de 1956.-

Al Ministerio de Hacienda de la Nación,
CAPITAL.-

Ref.: Tratamiento cambiario general para las importaciones que realicen las Instituciones Oficiales.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con referencia a nuestra nota 730-E.49541 del 30 de noviembre de 1955, por la que se comunicó que este Banco asignaría, durante un lapso determinado, un único tipo de cambio para las compras que realizaran en el exterior los entes y organismos del Estado.

Sobre el particular, llevamos a su conocimiento que el H. Directorio de esta Institución, atento al hecho de haber llegado a su término el lapso aludido y de conformidad con la opinión concordante del Ministerio de Hacienda de la Nación, ha resuelto dejar sin efecto el referido tratamiento cambiario diferencial.

En consecuencia, desde el 1º de enero del año entrante, a las importaciones a cargo de las distintas ramas, dependencias y empresas estatales también les serán de aplicación las normas cambiarias dictadas y a dictarse, con carácter general, en relación al producto que deba adquirirse en el exterior.

Se proveerán divisas del mercado oficial sólamente para aquellos artículos expresamente incluídos en las listas pertinentes actualizadas (Circular C. 2304 y sus modificatorias). Las importaciones de los artículos restantes podrán realizar

se con ajuste a los regímenes cambiarios comunicados por las Circulares C. 2305 (mercado libre, sin recargo) y C.2306(mercado libre,con recargo) y sus modificatorias, correspondiendo asimismo abonar, con destino al Fondo de Restablecimiento Económico Nacional, los recargos de cambio que fueran de aplicación.

Para toda importación, no prevista en alguna de las mencionadas circulares ni expresamente excluída en ellas, deberá consultarse a este Banco quien la autorizará, si la considerara favorablemente, para que se realice por el mercado libre de cambios y fijará el valor del recargo que le correspondiera.

El régimen que por la presente se comunica alcanza tanto a las nuevas importaciones como a las modificaciones (prórrogas, reemplazos y complementos) de las ya autorizadas por fórmulas 104A. y 104B.

Resulta obvio señalar que, con la resolución adoptada,se hace homogéneo el tratamiento de situaciones iguales y permite a las instituciones oficiales equiparar los precios de sus contrataciones con los de la actividad privada, tanto en la industria nacional como en las importaciones.

Por último, nos permitimos hacer presente que se hará necesaria la adecuación de los presupuestos a la norma cambiaria informada.

Saludamos a Uds. muy atentamente.-

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Fdo. Angel B.Mietta - Alfredo Velurtas.-

CIRCULAR 730/1159.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 110.-

DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1956.-

Visto el decreto nº 8.854/49, por el cual se organiza y reglamenta el funcionamiento de la Dirección de Obra Social del Ministerio de Hacienda, y

CONSIDERANDO:

Que a través del tiempo transcurrido desde la implantación del referido estatuto, ha podido observarse la necesidad de ajustar sus disposiciones a una nueva orientación más racional y acorde con la modalidad propia de los servicios respectivos;

Que tal circunstancia se evidencia, por vía de ejemplo, en las normas que determinan la constitución y funcionamiento del Consejo Consultivo de la nombrada dependencia -arts. 3º, 5º, 7º y concordantes- cuya concepción, más efectista que orgánica, lo convirtió en un instrumento inoperante, en el cual el afiliado carece de una representación eficaz que garantice la defensa de sus intereses;

Que dicho cuerpo, con aparentes funciones de control, no ha logrado verdadera justificación funcional en el mecanismo administrativo que rige el desenvolvimiento de la Obra Social y, por el contrario, ha ido paulatinamente autolimitando en la práctica su intervención hasta quedar convertido en un mero organismo simbólico;

Que para corregir dicha deficiencia, se propugna una reestructuración del Consejo, a través de la cual se convertirá al mismo en un cuerpo de asesoramiento con intervención directa en todos los asuntos vinculados con el desarrollo de los servicios específicos de la Obra Social e integrado totalmente por representantes de los afiliados;

Que por otra parte resulta necesario conformar la organización y régimen de funcionamiento de la repartición al nuevo ordenamiento promovido en el Ministerio de Hacienda como consecuencia de la incorporación de las dependencias integrantes del ex-Ministerio de Finanzas, cuya disolución fuera dispuesta por el decreto-ley nº 10.351/56;

Que además, en razón del incremento operado en los servicios a cargo de la Obra Social con motivo de la circunstancia señalada precedentemente, se estima oportuno rever la jerarquía funcional asignada a la misma, a fin de ajustarla a la magnitud y trascendencia de sus actividades, en un plano armónico con la que ostentan sus similares en las restantes Secretarías de Estado;

Que ello involucra promover el reconocimiento del grado de desarrollo alcanzado por la dependencia, como medio dirigido a dar vigencia orgánica a un estado de hecho singularmente evidenciado;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

C A P I T U L O I

FINALIDAD

ARTICULO 1º.- La Dirección de Obra Social del Ministerio de Hacienda, que pasa a denominarse Dirección General de Obra Social, tendrá por objeto la atención de los servicios sociales para su propio personal y el perteneciente al citado Departamento de Estado, inclusive las reparticiones descentralizadas, con excepción del comprendido en el régimen del decreto-ley nº 20.714/56.

ARTICULO 2º.- La Dirección General de Obra Social deberá organizarse y realizar sus prestaciones de conformidad con la reglamentación que dicte el Ministerio de Hacienda, debiendo contemplar, como mínimo, los siguientes servicios:

a) Asistencia médica integral;

b) Proveedurías, créditos comerciales y convenios;

c) Subsidios y préstamos;

d) Descanso y recuperación.

C A P I T U L O II

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION

ARTICULO 3º.- La administración de la repartición estará a cargo de un Director General y de un Subdirector General, nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del Ministerio de Hacienda.

La dirección será asistida por un Consejo Consultivo que la asesorará en todo lo relacionado con la función específica que deba cumplir la Obra Social.

El cargo de Presidente del Consejo será ejercido por el Director General y en su ausencia, desempeñará dichas funciones el Subdirector General.

ARTICULO 4º.- El Consejo Consultivo estará integrado, además, por seis (6) Vocales Titulares y tres (3) Suplentes, que representarán a los afiliados.

Los Vocales durarán tres (3) años en su función, pudiendo ser reelectos y se renovarán tres (3) cada año. Serán designados por el Ministerio de Hacienda de una terna propuesta por cada una de las reparticiones cuyos agentes se hallen comprendidos en los beneficios del presente régimen. No podrá integrar el Consejo en un mismo período más de un (1) Vocal Titular o Suplente por repartición. Las designaciones respectivas tendrán carácter honorario.

Si alguno de los Vocales falleciere o renunciare, o en alguna otra forma dejare vacante el cargo antes de terminar el período para el cual fué elegido, se procederá a designar su reemplazante para cumplir el lapso establecido de entre los Suplentes y en su defecto, se elegirá el nuevo miembro siguiendo el procedimiento indicado precedentemente. Las con

diciones para ser elegido Vocal serán determinadas por vía reglamentaria.

ARTICULO 5º.- El Director General tiene a su cargo la representación de la Obra Social y ejerce las tareas directivas y ejecutivas de la misma en todos los asuntos técnicos y administrativos que no se hallen expresamente reservadas al Ministerio de Hacienda. Es al mismo tiempo el representante legal de la entidad en todas sus relaciones con terceros y tiene además entre sus funciones principales:

a) Dirigir y ejercer la inspección y fiscalización de todas las dependencias, actividades y personal a su cargo;

b) Cumplir y hacer cumplir en lo que compete, las presentes disposiciones y demás normas reglamentarias que se dicten;

c) Realizar las operaciones económico-financieras que sean necesarias y útiles para los servicios sociales;

d) Comprar, vender, dar o recibir en pago, prestar o contraer préstamos y dar o tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles, inmuebles y semovientes;

e) Constituir o aceptar derechos de hipoteca, prenda o cualquier otro derecho de uso, goce o garantía;

f) Celebrar convenios generales o especiales con organismos oficiales, mixtos y particulares para la prestación de los servicios sociales, económicos o asistenciales;

g) Intervenir en el manejo de fondos de la Obra Social disponiendo los ingresos y egresos, con sujeción a las normas que se establezcan reglamentariamente;

h) Resolver, con el asesoramiento del Consejo Consultivo, la habilitación de nuevos servicios y ampliación y/o modificación de los existentes;

i) Dictar las disposiciones internas relacionadas con la organización y funcionamiento de las dependencias de la Obra Social;

j) Elaborar, con el asesoramiento del Consejo Consultivo, los planes de acción de la Obra Social;

k) Elevar al Ministerio de Hacienda el inventario general, la cuenta de ganancias y pérdidas y la memoria de la entidad;

l) Proponer al Ministerio de Hacienda el presupuesto anual de sueldos, gastos e inversiones;

ll) Proponer al Ministerio de Hacienda las modificaciones de las cuotas de afiliación;

m) Proponer al Ministerio de Hacienda la designación del personal necesario, su promoción y remoción;

n) Disponer el traslado del personal dentro de su jurisdicción;

ñ) Convocar y requerir el asesoramiento del Consejo Consultivo para la consideración de todo asunto que haga a la marcha de los servicios a cargo de la Obra Social;

o) Suministrar al Consejo Consultivo toda la información y antecedentes que éste solicite para el cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO 6º.- El Subdirector General reemplazará al Director General en caso de ausencia o impedimento de éste o vacancia del cargo. Fuera de dichos casos, desempeñará las funciones que el Director General le asigne.

ARTICULO 7º.- El Consejo Consultivo sesionará por lo menos una vez por mes y las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes. Serán funciones principales

a) Prestar asesoramiento al Director General de Obra Social en todos los asuntos que éste someta a su consideración;

b) Proponer al Director General la adopción de las medidas que considere atinentes al mejor desenvolvimiento de los servicios respectivos;

c) Dejar constancia de lo actuado en las actas que se labren en su oportunidad de cada una de las sesiones que realice;

d) En todos los asuntos que el Director General someta a su consideración, deberá emitir su opinión por escrito y el informe respectivo será firmado por todos los miembros, dejando constáncia del de aquellos que estuvieran en disidencia;

e) Tomará intervención especialmente en la consideración de los proyectos que formule el Director General de Obra Social, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 5º, incisos c), d), e), f), h), j), l) y ll), y toda medida que se proponga al Ministerio de Hacienda, relacionada con los servicios a cargo de la repartición;

f) Además de la reunión mensual que deba realizar, sesionará cuando medie pedido de por lo menos tres (3) de sus miembros y en cada una de las oportunidades en que el Director General de Obra Social lo convoque.

C A P I T U L O III

BENEFICIARIOS

ARTICULO 8º.- Gozarán de los beneficios que establece el presente régimen los agentes en actividad, jubilados y pensionistas aludidos en el artículo 1º y sus parientes, en orden a la reglamentación que se dicte. El personal nombrado en primer término será afiliado obligatorio.

El personal que por cualquier causa cesare en su empleo, quedará automáticamente desafiliado de la Obra Social, como así también sus parientes, salvo que la cesación fuera para ingresar a otra repartición nacional, en cuyo caso el agente podrá mantener su afiliación y la de sus parientes.

CAPITULO IV

RECURSOS

ARTICULO 9º.- Los recursos de la Dirección General de Obra Social se obtendrán de los siguientes conceptos;

a) Los fondos y bienes que posea a la fecha la Dirección de Obra Social del Ministerio de Hacienda;

b) La contribución mensual obligatoria del personal en actividad citado en el artículo 1º y la contribución del personal jubilado y pensionistas que opte por la afiliación;

c) La contribución mensual de los parientes del personal en actividad, jubilado y pensionistas, de acuerdo con la reglamentación que se dicte;

d) La contribución del Estado Nacional;

e) Donaciones, legados, subsidios, etc.;

f) Los recursos provenientes de sus prestaciones.

ARTICULO 10º.- Las contribuciones correspondientes a los afiliados en concepto de cuotas (ley nº 13.215), serán calculadas sobre el total de las remuneraciones sujetas a descuentos jubilatorios que perciba el agente en actividad y sobre el total de los haberes de jubilación o pensión, según el caso.

Las reparticiones del Ministerio de Hacienda cuyo personal se halle comprendido en el presente régimen, actuarán como agentes de retención de las contribuciones del mismo en concepto de cuotas o prestaciones las cuales serán descontadas por planilla de sueldo y depositadas de conformidad con lo dispuesto en este artículo.

La Dirección General de Obra Social gestionará ante el Instituo Nacional de Previsión Social el descuento por planilla de haberes de las cuotas y servicios correspondientes a beneficiarios de jubilaciones y pensiones que sean afiliados del organismo. En su defecto, dichos afiliados deberán ingresar los importes respectivos directamente en la Tesorería de la

Dirección General de Obra Social.

Los aportes y reintegros que se mencionan en este artículo deberán depositarse dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente al de su retención, en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de la Dirección General de Obra Social o abonarse en la Tesorería de dicha repartición dentro de igual lapso, según proceda.

ARTICULO 11º.- La administración de los fondos provenientes de aportes del Estado, se hará con sujeción a las leyes y reglamentaciones que rigen la materia, mientras que los restantes fondos serán administrados directamente por la repartición.

ARTICULO 12º.- Los recursos no invertidos en un ejercicio se transferirán automáticamente al siguiente.

C A P I T U L O V

GENERALIDADES

ARTICULO 13º.- Los fondos de la Dirección General de Obra Social, mientras no sean objeto de una inversión especial, se depositarán en el Banco de la Nación Argentina a la orden de la repartición.

ARTICULO 14º.- Las compras, ventas, arrendamientos, como así también toda otra convención sobre trabajos o sumininistros de especies que efectúe la Dirección General de Obra Social se realizarán como norma general mediante licitación pública, privada o contratación directa, según el caso, por la citada repartición y/o con intervención de la Dirección General de Suministros del Estado cuando aquella lo estime conveniente, todo ello, con sujeción a lo determinado por el artículo 11º.

ARTICULO 15º.- Los cargos de Director General y Subdirector General de la Obra Social deberán figurar en el presupuesto del Ministerio de Hacienda.

ARTICULO 16º.- La Dirección General de Obra Social elevará para su aprobación al Ministerio de Hacienda, dentro de los sesenta (60) días de la fecha, el proyecto de reglamentación del presente decreto.

Dirección General de Obra Social.

Los aportes y reintegros que se mencionan en este artículo deberán depositarse dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente al de su retención, en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de la Dirección General de Obra Social o abonarse en la Tesorería de dicha repartición dentro de igual lapso, según proceda.

ARTICULO 11º.- La administración de los fondos provenientes de aportes del Estado, se hará con sujeción a las leyes y reglamentaciones que rigen la materia, mientras que los restantes fondos serán administrados directamente por la repartición.

ARTICULO 12º.- Los recursos no invertidos en un ejercicio se transferirán automáticamente al siguiente.

C A P I T U L O V

GENERALIDADES

ARTICULO 13º.- Los fondos de la Dirección General de Obra Social, mientras no sean objeto de una inversión especial, se depositarán en el Banco de la Nación Argentina a la orden de la repartición.

ARTICULO 14º.- Las compras, ventas, arrendamientos, como así también toda otra convención sobre trabajos o sumininistros de especies que efectúe la Dirección General de Obra Social se realizarán como norma general mediante licitación pública, privada o contratación directa, según el caso, por la citada repartición y/o con intervención de la Dirección General de Suministros del Estado cuando aquella lo estime conveniente, todo ello, con sujeción a lo determinado por el artículo 11º.

ARTICULO 15º.- Los cargos de Director General y Subdirector General de la Obra Social deberán figurar en el presupuesto del Ministerio de Hacienda.

ARTICULO 16º.- La Dirección General de Obra Social elevará para su aprobación al Ministerio de Hacienda, dentro de los sesenta (60) días de la fecha, el proyecto de reglamentación del presente decreto.

ARTICULO 17º.- Facúltase al Ministerio de Hacienda para dictar la reglamentación de este decreto como así también las normas aclaratorias y complementarias que estime pertinente.
ARTICULO 18º.- El presente decreto entrará en vigor a partir del 1º de enero de 1957, desde cuya fecha quedan derogados los decretos números 8.854/49, 28.871/50 y 14.581/51 y toda otra disposición que se oponga a este régimen.
ARTICULO 19º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. ARAMBURU - E.A. Blanco.-

DECRETO Nº 21.644.-

Boletín Nº 111.-

FACULTAD MINISTERIAL - JUICIOS - DEMANDAS - PROCURACION DEL TESORO - REPRESENTANTES EN JUICIO - LITIGIOS - FUNCIONES - PATROCINIO

Buenos Aires, 4 de enero de 1957.-

Visto lo informado por la Procuración del Tesoro de la Nación,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA,

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS,

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Aclárase el artículo 1º del decreto nº 4.369 de fecha 1º de diciembre de 1955 (+), en el sentido de que la intervención del señor Procurador del Tesoro de la Nación, a que dicho acto de Gobierno se refiere, consiste en la remisión por intermedio de la Oficina de Asuntos Fiscales a su cargo de las actuaciones administrativas o judiciales a los señores representantes fiscales que corresponda a los efectos de que éstos asuman la representación y/o defensa del Estado en su carácter de actor o demandado.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial, pase a la Procuración del Tesoro y archívese.-

ARAMBURU - L.Landaburu - A. Ossorio Arana - T.Hartung - J.C.Krausse - E.A.Blanco - L. A.Podestá Costa - C.A.Adrogué - R.Martínez - A.Mercier E.Sadi Bonnet - P.Mendieta - L.M. Ygartúa - F. Martínez.-

DECRETO Nº 34.-

(+) Ver Digesto Nº 2.-

Boletín Nº 112.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Buenos Aires, 15 de enero de 1957.-

Visto la Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría General de la Nación, aprobada por Decreto-Ley nº 23.354 del 31 de diciembre ppdo., y

CONSIDERANDO:

Que hasta tanto el Tribunal de Cuentas de la Nación dicte las resoluciones normativas necesarias para el mejor cumplimiento de dicho cuerpo legal, es conveniente mantener en plena vigencia las resoluciones dictadas por la Contaduría General;

A tales efectos,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Mantener en vigencia las resoluciones de la Contaduría General de la Nación, dictadas hasta la fecha.
ARTICULO 2º.- Regístrese, dése a conocer por Digesto Administrativo y archívese en Secretaría.

RESOLUCION Nº 3.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli - José M. Fernández Fariña Wilfredo P. Dedeu - Antonio M. Pérez Arando - César Aguirre Legarreta.-

CREDENCIALES

Buenos Aires, 31 de julio de 1956.-

VISTO:

Lo dispuesto por los decretos 33.446/44, 5.425/45, 10.311/45 el "Reglamento de documentos de identidad, certificados y credenciales" de la Policía Federal, aprobado por decreto nº 35.950/48 y lo informado por el Jefe de la citada repartición; y

CONSIDERANDO:

Que las disposiciones mencionadas reglamentan el otorgamiento de la medalla credencial a determinados funcionarios judiciales y administrativos;

Que la medalla credencial no acredita por si sola identidad, por lo que es conveniente disponer su supresión para el futuro y la caducidad de las ya otorgadas;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- La Policía Federal no otorgará en lo sucesivo medallas credenciales para acreditar la función o cargo que invistan los funcionarios públicos. Las ya otorgadas carecerán de todo valor a esos mismos efectos.

ARTICULO 2º.- Por vía del Ministerio del Interior se impartirán instrucciones a los Interventores Nacionales en las provincias a fin de que adopten disposiciones similares a las contenidas en este decreto en las respectivas jurisdicciones locales.

ARTICULO 3º.- Derógansе los decretos 33.446/44, 5.425/45, 10.311/45, los nº 145 a 150 del "Reglamento de documentos de

identidad, certificados y credenciales" de la Policía Federal, aprobado por decreto 35.950/48, y demás disposiciones que se opongan a este decreto.

ARTICULO 4º.- Anótese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - L. Landaburu

DECRETO Nº 13.671.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 114.-

TELEGRAMAS "SIN PREVIO PAGO"

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1949.-

Visto el presente expediente, atento a lo dictaminado por las Direcciones Administrativa y de Telecomunicaciones, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 459 del Reglamento de los Servicios Telegráfico y Radiotelegráfico Interno (CDV. Nª 25) establece que los telegramas de la categoría "Sin Previo Pago" sólo podrán ser expedidos por los funcionarios autorizados al efecto;

Que el actual procedimiento para conferir esas autorizaciones consiste en que el Ministerio o Repartición interesada solicite a Correos y Telecomunicaciones su otorgamiento, después del cual se efectúan las publicaciones en el Boletín Diario y, como consecuencia de ello, todas las oficinas mixtas, telegráficas y radiotelegráficas del país, se ven continuamente precisadas a actualizar las nóminas de autorizados;

Que ese trámite dilatorio conspira contra la celeridad del servicio, y es susceptible de provocar omisiones en perjuicio de los organismos interesados, omisiones que si bien pueden ser corregidas en caso de producirse, siempre lo serían "a posteriori", sin que ello repare los inconvenientes irrogados al usuario;

Que para prevenir las posibles dificultades con que pudieran tropezar, como consecuencia del actual sistema, los organismos que hacen uso de las franquicias "Sin Previo Pago" para imposición de telegramas, conviene y procede crear una credencial que la Repartición otorgará a todos los autorizados para expedir telegramas de la citada categoría;

Que esta nueva modalidad permitirá la regular ejecución de los servicios, la supresión de demoras en la aceptación y, a la vez, un mejor contralor por parte de los propios organis

mos interesados, en beneficio de su renta.

Por tanto,

EL DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Crear, "ad referéndum" del Poder Ejecutivo Nacional, la "Credencial de Autorizado para expedir Telegramas Sin Previo Pago", cuya presentación acreditará el derecho de su poseedor a imponer telegramas con la categoría de su denominación.

ARTICULO 2º.- La referida credencial será extendida al cargo con que esté investido el funcionario autorizado. Llevará constancia, además, de la cuenta a que debe ser imputado el importe del despacho.

ARTICULO 3º.- La "Credencial de Autorizado" será provista por la Dirección de Telecomunicaciones a solicitud del Ministerio de Repartición interesada, mediante el pago de un derecho de CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 5.-). Será válida por el término de un (1) año a contar de la fecha de su otorgamiento, y renovable por períodos iguales, mediante el pago de un nuevo derecho de DOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.-), por cada renovación. La Dirección de Telecomunicaciones, una vez otorgada la autorización o renovación, procederá a cargar los importes en la fórmula 3070 A correspondiente.

ARTICULO 4º.- Créanse las fórmulas Nº 3151,3152 y 3153, cuya conformación está determinada en los modelos que dran a fojas 14 y 15 del presente, y cuya denominación, características y uso se ajustarán a la siguiente especificación:

REGISTRO-FORMULA	Nº 3151
DENOMINACION	"CREDENCIAL DE AUTORIZADO PARA EXPEDIR TELEGRAMAS SIN PREVIO PAGO"
DIMENSIONES	(Cerrado) 70 x 105 mm. de alto
MATERIAL	Tapas de cartón gris de 1ª Nº12 Parte exterior: Forradas con tela, color borra vino,grano grueso.

	Parte interna: Con una hoja impresa sobre papel imitación hilo de 76 gms. el m2. y una cartera para colocación de la tarjeta.
CLASE	Carnet, tapa superior con leyenda dorada a fuego con oro legítimo y ángulos redondeados.
USO	Dirección de Telecomunicaciones.
REGISTRO-FORMULA	Nº 3152
DENOMINACION	"RENOVACIÓN DEL CARNET FORMULA Nº 3151"
DIMENSIONES	102 x 50 mm. de alto
MATERIAL	Cartulina ficha color crema de 35 Kg. la resma
CLASE	Tarjeta
USO	Dirección de Telecomunicaciones
REGISTRO-FORMULA	Nº 3153
DENOMINACION	"FICHA DE AUTORIZADO FORMULA 3151"
DIMENSIONES	135 x 75 mm. de alto
MATERIAL	Cartulina extra fuerte de color rosa pálido, de 50 Kg. la resma
CLASE	Ficha
USO	Dirección de Telecomunicaciones

ARTICULO 5º.- Autorízase la confección, por Talles Gráficos, de cinco mil (5.000) credenciales fórmula 3151, diez mil (10.000), tarjetas fórmula 3152, y diez mil (10.000) fichas fórmulas 3153. La confección de la credencial será efectuada con carácter urgente. Para estos trabajos se emplearán los materiales indicados en las muestras que obran a foja 17.

ARTICULO 6º.- A partir del 1º de febrero de 1950 las dependencias de la Repartición no aceptarán ningún telegrama "sin previo pago" que no se presente junto con la credencial creada por la presente resolución y, cuando corresponda, con su respectiva tarjeta de renovación. Además, en cada telegrama se deberá colocar al pie, en los espacios reservados para el remitente, el número de la cuenta y el de la credencial.

ARTICULO 7º.- No se exigirá la presentación de la "credencial de autorizado" cuando los despachos "sin previo pago" fueran impuestos directamente por los miembros del Poder Ejecutivo Nacional, los Presidentes de ambas Cámaras Legislativas de la Nación, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o, en su caso, las personas comprendidas en el artículo 53, inciso 4 del decreto Nº 1864/49

ARTICULO 8º.- En caso de extravío o inutilización de la credencial, la Dirección de Telecomunicaciones otorgará una nueva credencial previo pago de DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2,50.-). El nuevo documento será valido por el término que faltara hasta el vencimiento del reemplazo.

ARTICULO 9º.- La Dirección Administrativa efectuará las correcciones pertinentes en el folleto de la C.D.V. Nº 42 (2ª edición) y la de Telecomunicaciones, propondrá las modificaciones que correspondan en el folleto Nº 25.

ARTICULO 10º.- Publíquese en el Boletín Diario y en las Notificaciones de Servicio para las Estafetas; comuníquese por la Dirección de Telecomunicaciones a los organismos interesados; tómese razón por donde corresponda, y vuelva a la Secretaría General para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 1º.-

Marco A. Andrada
Sec. General

BRAGAGNOLO

RESOLUCION Nº 7399.-

Boletín Nº 115.-

FERIADOS NACIONALES - DIAS NO LABORABLES

Buenos Aires, 9 de febrero de 1956.-

Visto la diversidad de normas legales dictadas durante el régimen depuesto sobre el régimen de los días feriados, conteniendo disposiciones en no pocos casos confusas y hasta contradictorias; y

CONSIDERANDO:

Que es indispensable y urge determinar un régimen claro y definitivo sobre la materia, a fin de poner término a la confusión o inseguridad que hasta hoy se observa al respecto, con los consiguientes inconvenientes y perjuicios para los empleadores y los trabajadores;

Que a dicho propósito obedeció el decreto-ley 554/55, promulgado con posterioridad al triunfo de la Revolución Libertadora, cuyo contenido es necesario perfeccionar y aclarar;

Que ha de seguirse un criterio de prudencia en la determinación de los días feriados y no laborables, a fin de no afectar el desenvolvimiento de las actividades públicas y privadas y, por ende, la economía de la Nación;

Que corresponde establecer los días feriados nacionales que corresponden a los grandes fastos de la Nacionalidad, de la Raza y de la Cristiandad, en los cuales el Estado ha de asociarse jubiloso al legítimo deseo de todos sus habitantes de rendir homenaje con una pausa en el noble esfuerzo cotidiano con que engrandecen a la Patria y alimentan a los suyos;

Que asimismo deben establecerse los días no laborables, coincidiendo con fiestas de índole religiosa, que la Nación debe reconocer acorde con los sentimientos de la mayoría de sus habitantes y respaldando la libertad de cultos; conceptos con los cuales el Pueblo Argentino se ha consubstanciado desde los primeros instantes de la vida independiente de la Pa-

tria;

Que también deben incluirse entre los días no laborables, aquellas festividades que sin revestir carácter cívico o religioso, han sido consagradas por las tradiciones y las costumbres del pueblo en el curso de muchos años;

Que, de acuerdo con dichos principios, mientras en los días feriados nacionales rigen normas legales vigentes sobre el descanso dominical, el descanso en los días no laborables es obligatorio para la Administración Pública Nacional, Bancos, Seguros y actividades afines, a la vez que es optativo para las actividades industriales, comerciales y civiles en general;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVICIONAL DE LA NACION ARGENTINA,

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO,

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Son días feriados nacionales los siguientes: 1º de Mayo, 25 de Mayo, 20 de Junio, 9 de Julio, 17 de Agosto, 12 de Octubre y 25 de Diciembre.

Son días no laborables los siguientes: 1º de Enero, 6 de Enero, Lunes y Martes de Carnaval, Jueves Santo, Viernes Santo, Corpus Christi, 15 de Agosto, 1º de Noviembre y 8 de Diciembre.

ARTICULO 2º.- En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. En dichos días los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva, percibirán el salario correspondiente a los mismos días, aun cuando coincidan con domingo; y en caso de que trabajen en tales días, cobrarán doble.

En los días no laborables el descando es obligatorio para la Administración Pública Nacional, Bancos, Seguros y actividades afines, y solamente optativo para las actividades industriales, comerciales y civiles en general. En dichos días, los trabajadores que trabajen cobrarán sus salarios simples.

ARTICULO 3º.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales vigentes que se opongan a las del presente decreto-ley.

ARTICULO 4º.- El presente decreto-ley será refrendado por el Excelentisimo señor Vicepresidente de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, de Trabajo y Previsión, de Aeronáutica, de Ejército y de Marina.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

ARAMBURU - Issac Rojas - Eduardo B. Busso - Raúl Migone - Arturo Ossorio Arana - Teodoro Hartung - Julio C. Krause.

DECRETO-LEY Nº 2.446.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 116.-

ADSCRIPCIONES

Buenos Aires, 31 de octubre de 1946.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- En lo sucesivo todas las adscripciones de empleados de los distintos Ministerios que se realicen, deberán ser previamente autorizadas por Decreto del Poder Ejecutivo.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.-

DECRETO Nº 16.763.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 117.-

MISIONES AL EXTERIOR - COMISIONES AL EXTERIOR - VIATICOS - COEFICIENTES - GIROS AL EXTERIOR

Banco Central de la República Argentina

Presidente

EXPEDIENTE Nº 09729/56

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1956.-

SEÑOR MINISTRO:

Tengo el agrado de dirigirme a S.E. con referencia a los Decretos emanados del Poder Ejecutivo Nacional, autorizando el traslado al exterior de misiones oficiales con carácter transitorio.

Como tales Decretos involucran egresos de divisas en virtud de las remesas que deben efectuarse a favor de los funcionarios que integran las misiones, con anterioridad a su firma deben ser remitidos a este Banco Central a efectos de que emita su opinión con respecto a las disposiciones que se refieren a los egresos aludidos. En varias oportunidades se han observado omisiones en las disposiciones mencionadas que no permitieron aprobarlas. A fin de evitar los inconvenientes que ello trae aparejado a los Ministerios o Reparticiones que requieren el traslado de funcionarios al exterior, sugiero al señor Ministro disponer que, por intermedio de la dependencia correspondiente, se informe a los Ministerios acerca de las siguientes normas que rigen la materia que es de competencia de este Banco, en los decretos a que me he referido:

a) En los considerandos, que se cuenta con la conformidad del Consejo de Gabinete, para el envío de la misión.

b) En la parte dispositiva, deberán especificarse los países que visitará la misión y las personas que la integran; asignarse los viáticos con los respectivos coeficientes y autorizarse su giro al exterior; determinarse el tiempo que demandará el cumplimiento de la misión; especificarse la firma del decreto por el señor Ministro del ramo correspondiente y por S.E. el señor Ministro de Hacienda.

Aprovecho esta oportunidad para saludar al señor Ministro con mi consideración más distinguida.

Fdo. JUAN ANTONIO NICHOLSON
Secretario del H. Directorio

Fdo. BENJAMIN CORNEJO
Vice- Presidente

A S.E. el señor Ministro
de Hacienda de la Nación,
Doctor Eugenio A. Blanco
S / D.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 118.-

INTERVENCIONES FEDERALES - VIATICOS - GASTOS DE REPRESENTACION - PASAJES OFICIALES - ADSCRIPCIONES - ORDEN DE CARGA

Buenos Aires, 17 de octubre de 1955.-

Siendo necesario fijar las normas a las cuales deberá ajustarse la liquidación de asignaciones al personal que presta servicios en las misiones federales, como así también determinar los casos en que los señores Comisionados Nacionales podrán expedir órdenes de pasajes con cargo al Gobierno Nacional,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

I - PERSONAL SUPERIOR QUE PRESTA SERVICIOS EN TODAS LAS INTERVENCIONES FEDERALES

ARTICULO 1º.- El personal militar en actividad del Ejército, Marina o Aeronáutica y el funcionario o empleado nacional, provincial o municipal, en uso de licencia con goce de sueldo; los retirados del Ejército, Marina o Aeronáutica y los jubilados o retirados civiles, que perciban sus haberes jubilatorios o de retiro, gozarán del siguiente viático mensual, exceptuando los casos que se expresan en el art. 6º, aparte de las asignaciones que en concepto de gastos de representación determina el art. 5º:

a) Comisionado nacional	$ 4.500
b) Secretario	" 3.500
c) Jefe de despacho	" 2.500
d) Oficial mayor	" 2.200

ARTICULO 2º.- El personal militar en actividad del Ejército, Marina o Aeronáutica y el funcionario o empleado nacional,

provincial o municipal, a quien se le hubiera acordado licencia sin goce de sueldo; los retirados del Ejército, Marina o Aeronáutica y los jubilados y retirados civiles a quienes se les suspendiera la percepción de sus respectivos haberes, gozarán del siguiente viático mensual, aparte de las asignaciones que en concepto de gastos de representación determina el art. 5º:

a) Comisionado nacional	$ 6.500
b) Secretario	" 5.000
c) Jefe de despacho	" 3.500
d) Oficial mayor	" 3.000

ARTICULO 3º.- Las personas que no tengan las calidades determinadas en los artículos precedentes, percibirán las asignaciones que determina el art. 2º.

ARTICULO 4º.- El número de secretarios y oficiales mayores a designarse, será equivalente al de ministros y subsecretarios existentes en el orden provincial y el de jefe de despacho al de secretario de Gobernación. También corresponderá un cargo de oficial mayor para el jefe de policía.

ARTICULO 5º.- El personal a que se refieren los arts. 1º, 2º y 3º percibirá mensualmente, en concepto de gastos de representación, las siguientes sumas:

a) Comisionado nacional	$ 1.200
b) Secretario	" 1.000
c) Jefe de despacho	" 750
d) Oficial mayor	" 500

ARTICULO 6º.- Las personas que se encuentran en las condiciones que se determinan en el art. 1º, no gozarán del viático mensual, en los siguientes casos:

a) El personal militar en activid**a**d del Ejército, Marina o Aeronáutica y el funcionario o empleado nacional, provincial o municipal, cuando el lugar en que debe desempeñarse esté alejado a menos de 40 kilómetros de su asiento habitual; entendiéndose por asiento habitual,a

los efectos de la aplicación de este decreto, la localidad donde se encuentre instalada la oficina en la que preste efectiva y permanentemente el servicio (nacional, provincial o municipal):

b) Los retirados del Ejército, Marina o Aeronáutica y los jubilados o retirados civiles cuando el lugar en que deban desempeñarse esté alejado a menos de 40 kilómetros de su domicilio habitual, entendiéndose por domicilio habitual, a los efectos de la aplicación de este decreto, el último que figura denunciado en su libreta de enrolamiento o libreta cívica, en el momento de la designación.

ARTICULO 7º.- De conformidad con lo dispuesto por el art. 26 de la ley 14.370, declárase compatible mientras duren las intervenciones federales, la percepción del viático fijado en los arts. 1º y 3º del presente decreto y el haber de jubilación o retiro civil, correspondiente al personal incluído en los artículos indicados precedentemente.

II - PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN TODAS LAS INTERVENCIONES FEDERALES

ARTICULO 8º.- El personal militar en actividad del Ejército, Marina o Aeronáutica y el empleado nacional, provincial o municipal, en uso de licencia con goce de sueldo; los retirados del Ejército, Marina o Aeronáutica y los jubilados o retirados civiles, que perciban sus haberes jubilatorios o de retiro gozarán de un viático diario de acuerdo con la escala establecida por el art. 2º del decreto 17.089/46, modificado por el decreto 26.602/51.

Para el personal militar en actividad o retiro, el viático se calculará teniendo como base el monto nominal del sueldo o retiro, excluída cualquier otra designación.

ARTICULO 9º.- El personal militar en actividad del Ejército, Marina o Aeronáutica y el empleado nacional, provincial o municipal a quien se le hubiere acordado licencia sin goce de sueldo; los retirados del Ejército, Marina o Aeronáutica y los

jubilados y retirados civiles, a quienes se les suspendiera la percepción de sus respectivos haberes, podrán percibir el importe del sueldo correspondiente al cargo provincial para el que fuera designado, más un viático diario de hasta m$n. 50 que será propuesto por el Comsionado nacional.

ARTICULO 10º.- Las personas que no tengan las calidades a que se refieren los arts. 8º y 9º, percibirán las asignaciones que determina el art. 9º.

ARTICULO 11º.- Los viáticos a que se refieren los arts. 8º, 9º y 10º, serán fijados por el Ministerio de Interior y Justicia. En ningún caso se acumularán para fijación del viático diario que establece el art. 2º del decreto 17.089/46 modificado por el 26.602/51, el importe de 2 o más remuneraciones.

ARTICULO 12º.- Las adscripciones serán dispuestas por el Ministerio de Interior y Justicia a propuesta del señor Comisionado nacional y previa conformidad del ministerio u organismo descentralizado en que el agente preste servicios.

III - DEL OTORGAMIENTO Y USO DEL PASAJE POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN TODAS LAS INTERVENCIONES FEDERALES

ARTICULO 13º.- Los señores Comisionados nacionales podrán expedir órdenes de pasajes con cargo al Gobierno nacional en las siguientes condiciones:

a) Dentro del territorio de la Provincia: Unicamente cuando el empleado debe viajar para hacerse cargo de sus funciones y cuando terminada su gestión, regrese definitivamente al lugar en que tenía fijada su residencia.

b) Fuera del territorio de la Provincia; Unicamente por comisiones oficiales de imprescindible necesidad,a los siguientes funcionarios: Comisionado nacional, secretario, jefe de despacho, oficial mayor, secretario privado del Comisionado y de los secretarios, contador habilitado y cuando el empleado viaje a hacerse cargo de sus funciones y cuando terminada su gestión, regrese definitivamente al lugar en que tenía fijada su residencia.

c) Tendrán derecho a un pasaje de ida y otro de regreso, cuando éste sea definitivo, los familiares del señor Comisionado y de los secretarios así como también su personal de servicio. También tendrán derecho a órdenes de carga para el transporte de muebles y enseres.

d) El jefe de despacho y el oficial mayor, sólo tendrán derecho a órdenes de carga para el transporte de muebles y enseres;

e) A los efectos de lo indicado en los puntos c) y d), el Comisionado nacional requerirá del Ministerio de Interior y Justicia la autorización para expedir las órdenes de pasajes y cargas;

f) A los efectos de la expedición de órdenes de pasajes serán considerados empleados las personas que fueran designadas por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, o las que tuvieran viático asignado por el Ministerio de de Interior y Justicia.

ARTICULO 14º.- El presente decreto será refrendado por los señores ministros secretarios de Estado en los departamentos de Interior y Justicia, Hacienda, Ejército, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 15º.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

LONARDI - Busso - Folcini - Bengoa - Hartung - Abrahin.-

DECRETO Nº 996.-

VIATICOS A COMISIONADOS NACIONALES

Buenos Aires, 6 de marzo de 1956.-

Visto lo dispuesto por el Decreto Nº 996 de fecha 17 de octubre de 1955 y siendo necesario dictar normas complementarias en materia de viáticos del personal superior de las Intervenciones Federales en las Provincias, a fin de adecuar sus retribuciones, en concordancia con la jerarquía y responsabilidad de la función que se le confíe.

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Las asignaciones fijadas en los artículos 1º,2º y 5º del Decreto Nº 996/55, regirán salvo los casos en que por los presupuestos provinciales correspondan asignaciones mayores en cuyo supuesto, gozarán de estas últimas, estableciéndose con esa finalidad la siguiente correlación:

Función en la Intervención Federal	Sueldos y gastos de representación del presupuesto provincial.
a) Comisionado Nacional	Gobernador
b) Secretario	Ministro
c) Jefe de Despacho	Secretario de la Gobernación.-
d) Oficial Mayor	Subsecretario y Jefe de Policía.-

ARTICULO 2º.- Los viáticos y gastos de representación a que se refieren los artículos 1º,2º y 5º del Decreto Nº 996/55, con la modificación que autoriza el artículo anterior, se imputarán a los sueldos y partidas para gastos de representación que asigne el presupuesto provincial, debiendo abonarse la diferen

cia que pudiere resultar, por el Gobierno Nacional.

Si el presupuesto provincial no contare con partidas para tales fines, los importes de referencia serán abonados totalmente por el Gobierno Nacional.

ARTICULO 3º.- Los sueldos y gastos de representación de los Oficiales Mayores -excluídos los Jefes de Policía- de los Territorios Nacionales declarados Provincias por la Ley Nº 14.408, serán abonados íntegramente por el Gobierno Nacional, con cargo a la partida que para gastos de las Intervenciones Federales asigne el presupuesto.

ARTICULO 4º.- El personal superior de las Intervenciones Federales, dependerá del señor Comisionado Nacional y será designado a su propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 5º.- Derógase, con efecto retroactivo al 17 de octubre de 1955, el artículo 6º del Decreto número 996/55.-

ARTICULO 6º.- Las disposiciones del presente decreto, que será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos del Interior, Hacienda, Ejército, Marina y Aeronáutica, entrarán en vigor el 1º de marzo de 1956.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - E. B. Busso - E.A. Blanco - A. Ossorio Arana - T. Hartung J.C. Krause.-

DECRETO Nº 4.260.-

Boletín Nº 120.-

INTERVENCIONES FEDERALES - VIATICOS - GASTOS DE REPRESENTACION

Buenos Aires, 9 de agosto de 1956.-

Visto la necesidad de ampliar las normas a las cuales deberá ajustarse la liquidación de asignaciones al personal que presta servicios en las Intervenciones Federales y la conveniencia de contemplar la situación de los funcionarios que se ven obligados a trasladarse a lugares distintos de su residencia habitual por un tiempo prolongado, con los consiguientes gastos de vivienda para ellos y su familia;

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Las asignaciones fijadas por los artículos 1º y 2º del decreto nº 996/55 al personal superior que presta servicio en las Intervenciones Federales, serán acrecidas en TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.000) mensuales, cuando el lugar en que desempeñe sus funciones diste más de treinta kilómetros de su asiento o domicilio habitual, respectivamente.

ARTICULO 2º.- A los fines de lo dispuesto en el artículo 1º de este decreto, entiéndase por asiento habitual, la localidad donde se encuentra instalada la oficina en que preste efectiva y permanentemente el servicio (nacional, provincial o municipal); y por domicilio habitual, el último que figura denunciado en su libreta de enrolamiento o libreta cívica, en el momento de la designación.

ARTICULO 3º.- No gozarán de la asignación a que se refiere el presente decreto:

a) Los funcionarios que presten servicios en las Provincias que cuentan con residencia oficial destinada a alojamien

to de los mismos o que ocupen sin cargo, y con idéntico destino, locales o edificios de propiedad del Estado Nacional, provincial o municipal o arrendados por el Estado Nacional, provincial o municipal.

b) Los funcionarios que perciban en conjunto la suma Doce mil pesos moneda nacional ($ 12.000) mensuales nominales, computándose a tal efecto: haberes jubilatorios o de retiro; sueldo nacional, provincial o municipal, viático mensual (Decreto nº 996/55); gastos de representación nacional o provincial.

ARTICULO 4º.- La sobreasignación que acuerda el artículo 1º será liquidada hasta la concurrencia de la suma de Doce mil pesos moneda nacional ($ 12.000) a que se refiere el artículo 3º, apartado b).

ARTICULO 5º.- Las normas de interpretación de los decretos nros. 996/55, 4.260/56 y el presente, serán dictadas por conducto del Ministerio del Interior.

ARTICULO 6º.- Las disposiciones del presente decreto, que será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, Hacienda, Ejército, Marina y Aeronáutica, entrarán en vigor a partir del 1º de julio de 1956.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - L. Landaburu - E.A. Blanco - J.C. Krause - A. Osorio Arana - T. Hartung.-

DECRETO Nº 14.400.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 121.-

INTERVENCIONES FEDERALES - PASAJES OFICIALES - ORDENES DE CARGA

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1956.-

Visto la necesidad de modificar las normas fijadas por el Decreto nº 996/55 para el otorgamiento y uso de pasaje por parte de los funcionarios superiores de las Intervenciones Federales a fin de contemplar la situación de Jefe de Despacho y de los Oficiales Mayores, para quienes no se consigna el derecho de uso de pasajes para sus familiares y personal de servicio,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el Decreto nº 996/55, artículo 13º, inciso c) en la siguiente forma:

c) Tendrán derecho a un pasaje de ida y otro de regreso, cuando éste sea definitivo, los familiares del señor Comisionado, Secretarios, Jefe de Despacho y Oficiales Mayores, así como también su personal de servicio. También tendrán derecho a órdenes de carga para el transporte de muebles y enseres.

ARTICULO 2º.- Déjase sin efecto el inciso d), artículo 13º, del decreto 996/55.-
ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los Señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, Hacienda, Ejército, Marina y Aeronáutica.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-
DECRETO Nº 17.268.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 122.-

LEY DE CONTABILIDAD - CAJA CHICA - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Buenos Aires, 21 de enero de 1957.-

Visto que el art. 48º, párrafo 3º de la Ley de Contabilidad establece que los regímenes llamados de "fondo permanente" o "caja chica" serán autorizados por medio de la reglamentación que dicte la autoridad superior en cada poder, Tribunal de Cuentas y entidad descentralizada,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Hasta tanto sean dictadas las reglamentaciones relacionadas con el funcionamiento de "fondo permanente" e "caja chica", considérase en vigencia los regímenes existentes hasta la fecha.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, dése a conocer por Digesto Administrativo y archívese en Secretaría.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J.Tarelli - José M.Fernández Fariña Wilfredo P. Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - César Aguirre Legarreta.-

RESOLUCION Nº 6.-

Boletín Nº 123.-

COEFICIENTES

Buenos Aires, 4 de julio de 1956.-

Visto el despacho final producido por la Comisión Interministerial creada por el decreto nº 1.302 bis del 24 de enero de 1956 y modificado por el nº 4.416 del 8 de marzo del mismo año, y

CONSIDERANDO:

Que el régimen de retribuciones para el personal destacado en el exterior del país debió ser objeto de un estudio integral, en razón de diversos factores que desajustaron las compensaciones por costo de vida concretadas en los coeficientes que se aplican para la liquidación de los haberes en cada país, tanto por las variaciones operadas en ese costo como por las modificaciones de sueldos en el orden interno;

Que además, la incidencia de la modificación de los tipos de cambio obligó a reajustar transitoriamente los coeficientes en vigor al 31 de diciembre de 1955, lo que se hizo por decreto nº 2.143 de fecha 3 de febrero de 1956 para el primer trimestre del año en curso;

Que en virtud de haberse completado los estudios realizados por la Comisión Interministerial de referencia, se ha llegado a proyectar nuevos coeficientes que presentan señaladas reducciones con respecto a los anteriores;

Que se ha procurado conciliar la imposición de obtener economías emergente del momento en que vive el país, con la necesidad de asegurar a ese personal un nivel de vida decoroso apropiado a la honrosa representación que inviste, pero que se halle también encuadrado en la austeridad republicana que debe presidir la recuperación moral de la Nación;

Que, asimismo, dichos coeficientes, deben tener en cuanto se refiere al personal específico del Servicio Exterior de

la Nación que determina el artículo 2º de la Ley Nº 12.951, un índice especial de reducción, para compensar el aumento de sus retribuciones en el orden presupuestario;

Que para el personal no comprendido en el considerando anterior, que se desempeñe también en el exterior no es del caso el índice de reducción mencionado, pero en cambio debe adoptarse otro índice de corrección para los sueldos de las jerarquías menores a fin de que las reducciones, derivadas de los nuevos coeficientes, que pueden ser soportadas por las jerarquías superiores, no rebajen las retribuciones más modestas por debajo de niveles que en toda forma deben mantenerse por responder a las necesidades mínimas de vida decorosa;

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Fíjanse con retroactividad al 1º de abril de 1956, los siguientes coeficientes, con los índices de corrección a que se refieren los artículos 3º, 4º y 5º: ALEMANIA, Seis con diez (6,10), AUSTRALIA, Cinco con veinte (5,20), AUSTRIA, Cinco con ochenta (5,80), BELGICA Y LUXEMBURGO, Seis con treinta (6,30), BOLIVIA, Cuatro con veinte (4,20), BRASIL, Siete con cincuenta (7,50), BULGARIA, Cinco con cuarenta (5,40), CANADA, Seis con treinta (6,30), COLOMBIA, Cuatro con noventa (4,90), COSTA RICA, Cuatro con noventa (4,90), CHECOSLOVAQUIA, Cinco con cuarenta (5,40), CHILE, Cuatro con setenta (4,70), CUBA, Seis con diez (6,10), DINAMARCA, Cinco con ochenta (5,80), ECUADOR, Cuatro con cincuenta (4,50), EGIPTO Y ARABIA SAUDITA, Seis con diez (6,10), EL SALVADOR, Cuatro con noventa (4,90), ESPAÑA, Dieciseis con cincuenta (16,50), EE.UU. de AMERICA, Seis con treinta (6,30), ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (O.E.A.), Seis con treinta (6,30), ORGANIZACION NACIONES UNIDAS (O.N.U.), Seis con treinta (6,30), DELEGACION PERMANENTE ANTE LA O.N.U. (Oficina Europea), Seis con treinta (6,30), FILIPINAS, Seis con diez (6,10), FINLANDIA, Cuatro con cincuenta (4,50), FRANCIA, Siete con setenta (7,70), GRECIA, Cinco con cuarenta (5,40), GRAN BRETAÑA, Siete con setenta (7,70),

GUATEMALA, Cuatro con noventa (4,90), HAITI, Cuatro con noventa (4,90), HOLANDA, Cinco con veinte (5,20), HUNGRIA, Cinco con cuarenta (5,40), HONDURAS, Cuatro con noventa (4,90), INDIA, Cinco con veinte (5,20), IRLANDA, Seis con diez (6,10), ITALIA, Seis con cincuenta (6,50), ISLANDIA, Cuatro con veinte (4,20), ISRAEL, Siete con cincuenta (7,50), JAPON, Cinco con sesenta (5,60), LIBANO, Cinco con cuarenta (5,40), MEXICO, Cuatro con noventa (4,90), NICARAGUA, Cuatro con noventa (4,90), NORUEGA, Cuatro con setenta (4,70), NUEVA ZELANDIA, Cuatro con ochenta (4,80), PAKISTAN, Cuatro con ochenta (4,80), PANAMA, Cinco con cuarenta (5,40), PARAGUAY, Cinco con sesenta (5,60), PERSIA, Cinco con cuarenta (5,40), PERU, Cuatro con setenta (4,70), POLONIA, Cinco con veinte (5,20), PORTUGAL, Cinco con cuarenta (5,40), POSESIONES HOLANDESAS EN AMERICA, Cuatro con noventa (4,90), POSESIONES BRITANICAS EN ASIA, Cuatro con ochenta (4,80), REPUBLICA DOMINICANA, Cuatro con noventa (4,90), RUMANIA, Cinco con cuarenta (5,40), U.N.E.S.C.O., Siete con setenta (7,70), UNION REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS (RUSIA), Siete con cincuenta (7,50), SANTA SEDE, Seis con cincuenta (6,50), SIRIA, Cinco con cuarenta (5,40), SOBERANA ORDEN MILITAR DE MALTA, Seis con cincuenta (6,50), SUDAFRICA, Cuatro con ochenta, (4,80), SUECIA, Cuatro con setenta (4,70), SUIZA, Seis con treinta (6,30), TAILANDIA, Cinco con cuarenta (5,40), ZONA INTERNACIONAL DE TANGER, Seis con treinta (6,30), TURQUIA, Cinco con cuarenta (5,40), URUGUAY, Cinco con cuarenta (5,40), VENEZUELA, Siete (7), YUGOSLAVIA, Cuatro con cincuenta (4,50).-

ARTICULO 2º.- Déjase establecido que los coeficientes fijados por el artículo 1º del presente decreto, se aplicarán a las retribuciones del personal que presta servicios en el extranjero y a los gastos en el exterior del país, de acuerdo a los siguientes conceptos:

Por retribuciones del personal se entiende: el sueldo básico fijado por el presupuesto para la categoría en que reviste el agente, el adicional por antigüedad, la remuneración extraordinaria y sobresueldos establecidos por los artículos 45,46 y 50 de la Ley 12.951, y además en el caso de las fuerzas armadas los su

plementos generales. Por gastos se entienden los de oficina, de alquiler, de representación, los viáticos, la indemnización o compensación por cambio de destino y los gastos de instalación y gastos de traslado.

ARTICULO 3º.- Para los Funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que determina el artículo 2º de la Ley Nº 12.951, los coeficientes que se fijan por el presente decreto, se aplicarán para las retribuciones y gastos previstos en los artículos 37 y 41 de dicha Ley, con las siguientes reducciones: personal casado un Treinta por ciento (30%) y personal soltero un Treinta y cinco por ciento (35%).

ARTICULO 4º.- Los coeficientes para las retribuciones del personal no comprendido en el artículo anterior, cuyos sueldos y adicionales al sueldo que se liquidan con coeficiente y que en conjunto no excedan de DOS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.700.-) mensuales, se aplicarán con las bonificaciones establecidas en la siguiente escala para cada uno de dichos totales:

					Hasta m$n.	1.000	el	50%	del	coeficiente
Más	de	m$n.	1.000	hasta	m$n.	1.200	el	45%	"	"
"	"	"	1.200	"	"	1.300	"	35%	"	"
"	"	"	1.300	"	"	1.500	"	30%	"	"
"	"	"	1.500	"	"	1.800	"	25%	"	"
"	"	"	1.800	"	"	2.200	"	20%	"	"
"	"	"	2.200	"	"	2.400	"	15%	"	"
"	"	"	2.400	"	"	2.700	"	10%	"	"

A los Consejeros Económicos y Financieros cuyos sueldos y adicionales al sueldo que se liquidan con coeficiente, se encuentran comprendidos entre DOS MIL SETECIENTOS PESOS (m$n. 2.700.-) y CUATRO MIL PESOS (m$n. 4.000.-) mensuales, se aplicará la bonificación del DIEZ POR CIENTO (10%) del coeficiente.

ARTICULO 5º.- Para la liquidación de viáticos, el coeficiente se aplicará sobre los montos que fijan las disposiciones vigentes en la materia, con una bonificación del CINCUENTA POR CIENTO (50%).

ARTICULO 6º.- El personal embarcado perteneciente a la Armada no será considerado en misión transitoria y para el mismo regirá el coeficiente TRES (3) tanto en la estadía en puertos extranjeros como navegando hacia tales puertos, excepto en los viajes de instrucción y misiones de carácter especial en los que regirá el coeficiente CUATRO CON CINCUENTA (4,50).

ARTICULO 7º.- (Transitorio).- Para el viaje de instrucción del corriente año que realiza el Buque Escuela A.R.A. BAHIA THETIS, Decreto nº 6.007 del 3 de abril de 1956, regirá el coeficiente establecido a tal efecto en el artículo 2º del Decreto Nº 2.143 del 3 de febrero de 1956; para los demás buques quedarán firmes las liquidaciones practicadas durante el 2º trimestre de 1956 en virtud del Decreto Nº 7.457 del 23 de abril de 1956.

ARTICULO 8º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Relaciones Exteriores y Culto, Hacienda, Comercio e Industria, Ejército, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

ARAMBURU - Podesta Costa - Blanco Martínez - Ossorio Arana - Hartung Krause.-

DECRETO Nº 11.919.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 124.-

COEFICIENTES

Buenos Aires, 4 de octubre de 1956.-

Visto el Decreto Nº 11.919 de fecha 4 de julio de 1956, por el que se fijaron los coeficientes a aplicarse a las retribuciones y gastos del personal que presta servicios en el exterior; y

CONSIDERANDO:

Que la embajada de la República en Bolivia informa que el coeficiente vigente de cuatro con veinte (4,20) establecido por el citado decreto para dicho país, resulta en la actualidad insuficiente a las necesidades de los funcionarios alli destinados como consecuencia del aumento experimentado en el costo de vida:

Que en consecuencia procede reajustar dicho coeficiente a fin de asegurar a los funcionarios un nivel de vida acorde con la importancia de su cargo y de la representación que invisten;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 1º del decreto nº 11.919 del 4 de julio de 1956, dejándose establecido que, a partir del 1º de octubre del corriente año regirá para BOLIVIA el coeficiente de CINCO CON VEINTE (5,20).

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Relaciones Exteriores y Culto, Hacienda, Comercio e Industria, Ejército, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

DECRETO Nº 18.525.-

Boletín Nº 124.-

COEFICIENTES

Buenos Aires, 4 de octubre de 1956.-

Visto el Decreto Nº 11.919 de fecha 4 de julio de 1956, por el que se fijaron los coeficientes a aplicarse a las retribuciones y gastos del personal que presta servicios en el exterior; y

CONSIDERANDO:

Que la embajada de la República en Bolivia informa que el coeficiente vigente de cuatro con veinte (4,20) establecido por el citado decreto para dicho país, resulta en la actualidad insuficiente a las necesidades de los funcionarios alli destinados como consecuencia del aumento experimentado en el costo de vida:

Que en consecuencia procede reajustar dicho coeficiente a fin de asegurar a los funcionarios un nivel de vida acorde con la importancia de su cargo y de la representación que invisten;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 1º del decreto nº 11.919 del 4 de julio de 1956, dejándose establecido que, a partir del 1º de octubre del corriente año regirá para BOLIVIA el coeficiente de CINCO CON VEINTE (5,20).

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Relaciones Exteriores y Culto, Hacienda, Comercio e Industria, Ejército, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

DECRETO Nº 18.525.-

Boletín Nº 125.-

COEFICIENTES

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1956.-

Visto el decreto Nº 11.919 de fecha 4 de julio de 1956, por el que se fijaron los coeficientes a aplicarse a las retribuciones y gastos del personal que presta servicios en el exterior; y

CONSIDERANDO:

Que el Banco Central de la República Argentina ha modificado la cotización nominal de la peseta en el Mercado Oficial, por lo que se hace necesario ajustar el coeficiente fijado para España a fin de conservar la equidad anteriormente establecida;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 1º del Decreto Nº 11.919 del 4 de julio de 1956, dejándose establecido que, a partir del 1º de enero de 1957 regirá para España el coeficiente de cinco con ochenta y cuatro (5,84).

ARITUCLO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Relaciones Exteriores y Culto, Hacienda, Comercio e Industria, Ejército, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

DECRETO Nº 22.610.-

ARAMBURU - Podesta Costa Blanco - Martínez - Ossorio Arana - Hartung - Krause.-

DECLARACIONES JURADAS - PATRIMONIALES

Buenos Aires, 4 de mayo de 1953.-

CONSIDERANDO:

Que el Estado para salvaguardar y afianzar la moral administrativa, debe establecer un sistema que tienda a poner a los funcionarios públicos correctos a resguardo de la difamación y que, por otra parte, llegado el caso, facilite al Poder Administrador la comprobación de las trangresiones en que puedan haber incurrido los agentes del Estado;

Que, sin perjuicio de las atribuciones que constitucionalmente corresponden al Poder Judicial para conocer en los actos de los funcionarios y empleados públicos presuntivamente violatorios de sus deberes, como así para juzgar a los autores de denuncias falsas o calumniosas, se considera conveniente brindar al Pueblo la oportunidad de colaborar en la eventual indagación de hechos que importen el enriquecimiento ilícito en que puedan haber incurrido los servidores de la Nación;

Por lo tanto,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Créase en el Registro del Personal Civil de la Administración Pública, dependiente de la Contaduría General de la Nación, el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales del personal de la Administración Pública, que tendrá a su cargo la inscripción y custodia de dichas declaraciones y la fiscalización del cumplimiento del presente decreto en las condiciones que se especifican en los artículos siguientes.

ARTICULO 2º.- Quedan comprendidos en el régimen del presente

decreto los siguientes funcionarios y empleados de la Administración:

a) personal de la administración civil, centralizada o descentralizada, inclusive Bancos oficiales y empresas del Estado, con jerarquía no inferior a Subdirector o Subgerente, así como los representantes o delegados del Estado en las sociedades de economía mixta;

b) los funcionarios de la Municipalidad del distrito federal y de las comunas de los territorios nacionales que determine el Ministerio del Interior y los concejales de esta últimas;

c) el personal de las fuerzas armadas en actividad con categoría no inferior a coronel y grados equivalentes en las otras armas;

d) el personal de la Policía de Seguridad, con categoría no inferior a la de Subcomisario y grados equivalentes de los cuadros de la Prefectura Nacional Marítima y Gendarmería Nacional;

e) Los funcionarios del servicio exterior;

f) todos aquellos funcionarios y empleados que a pesar de no hallarse comprendidos en la nómina precedente deban ser incluídos, en razón de sus funciones, a cuyo efecto los distintos Departamentos de Estado deberán elevar las listas pertinentes dentro de los 20 días de la fecha al Ministerio de Hacienda de la Nación, para su aprobación por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 3º.- Los funcionarios y empleados a que se refiere el artículo 2º deberán presentar una declaración jurada dentro del plazo de 60 días computados desde la fecha del presente decreto, que contendrá:

a) relación detallada de sus bienes, tanto de los radicados en el país como en el extranjero, con especifica-

ción del costo de origen, rentas y deudas;

b) relación detallada en los mismos términos de los bienes del cónyuge e hijos menores;

c) nombre, apellido, profesión, medios de vida y domicilio de sus parientes por consanguinidad en línea recta, que vivieren a la fecha de presentarse la declaración.

ARTICULO 4º.- Los funcionarios y empleados que sean nombrados con posterioridad a la fecha del presente decreto y aquellos que por promociones o asignaciones de funciones se hallaren comprendidos en el artículo 2º, deberán presentar sus declaraciones dentro de los 30 días de la respectiva designación.

ARTICULO 5º.- Los que no presenten sus declaraciones juradas en término sin causas justificadas, o incurran en omisiones, ocultaciones o falsedades acerca de su verdadera situación patrimonial, serán exonerados sin perjuicio de la responsabilidad penal consiguiente y de las investigaciones que disponga efectuar el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 6º.- En los casos de modificación substancial de los patrimonios, las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 3º y 4º deberán ser renovadas anualmente, antes del 31 de enero.

Los funcionarios que hubiesen presentado sus declaraciones hasta seis meses antes de esa fecha, deberán renovarla al vencimiento del término indicado, en el año subsiguiente.

ARTICULO 7º.- Las declaraciones se presentarán bajo sobre lacrado y firmado y serán de carácter secreto. Dichas declaraciones sólo podrán ser abiertas en los siguientes casos:

a) en los supuestos previstos en el artículo 8º;

b) a pedido de sus firmantes o sucesores;

c) a requerimiento de juez competente en el fuero penal.

ARTICULO 8º.- Las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios serán realizados por los respectivos ministerios

a iniciativa propia, a requerimiento de autoridades jerárquicas superiores y en caso de denuncia.

A los efectos de practicar las comprobaciones pertinentes, los ministerios podrán solicitar la colaboración de los organismos de información e investigación competente: Control de Estado, Policía Federal, y demás policías de seguridad.

ARTICULO 9º.- Cuando de la investigación practicada no resultare probado el enriquecimiento ilícito, el procedimiento se dará por terminado.

Si, en cambio, se acreditare prima facie la existencia de los hechos imputados, por decreto del Poder Ejecutivo se dispondrá la intervención de la autoridad judicial competente, excepto en los casos previstos por el artículo 46 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de las sanciones administrativas que corresponda aplicar de acuerdo con la naturaleza de los hechos investigados.

ARTICULO 10º.- Toda persona capaz podrá presentar denuncia en el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales, sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, fundada en la comisión de delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y prevaricato, y sin perjuicio de las nuevas previsiones que se establezcan al respecto en la ley penal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13.

El Registro dará traslado de la denuncia al Ministerio respectivo, donde se exigirá al denunciante la comprobación de su identidad y ratificación de la denuncia presentada.

Si los hechos denunciados resultaren presuntivamente fundados, el Ministerio iniciará la correspondiente investigación y procederá en lo demás según lo previsto por los artículos 8º y 9º.

ARTICULO 11º.- Los denunciantes quedan sometidos a las responsabilidades de los artículos 109 y 245 del Código Penal.

ARTICULO 12º.- Los funcionarios y empleados que violaran el secreto de las declaraciones y actuaciones serán exonerados

sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiera lugar.

ARTICULO 13.- El Ministerio de Justicia proyectará la reforma del Código Penal, a fin de incorporar la represión del delito de enriquecimiento ilícito y proporcionar adecuada tutela penal a las obligaciones creadas por el presente.

ARTICULO 14.- Invítase a los Poderes Legislativo y Judicial de la Nación, a adherir al régimen del presente decreto, respecto del personal que los mismos determinarán.

ARTICULO 15.- Invítase a las provincias a adoptar para el personal de sus respectivas jurisdicciones, normas similares a las del presente decreto.

ARTICULO 16º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

DECRETO Nº 7.843.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 127.-

DECLARACIONES JURADAS - PATRIMONIALES

Buenos Aires, 26 de mayo de 1953.-

Visto que las disposiciones contenidas en el decreto Nº 7.843/53, dictado en acuerdo general de ministros el 4 de mayo, por su amplio alcance, comprenden a los distintos ministerios de la Administración Nacional y sus organismos jurisdiccionales abarcando gran cantidad de sus agentes;

Que en consecuencia es aconsejable que tales disposiciones se cumplan encuadradas dentro de un régimen normativo que facilite su efectiva fiscalización y proporcione la debida uniformidad;

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- La Contaduría General de la Nación gestionará de los distintos Ministerios que antes del 30 de junio próximo se remita directamente al Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales de la Administración Pública, independiente de la nómina a que se refiere el inciso f) del artículo 2º del decreto Nº 7.843/53, una nómina del personal que obligatoriamente se halle comprendido en su régimen en virtud de lo dispuesto por los demás incisos del artículo citado. La información comprenderá el personal de cada Ministerio y sus entidades descentralizadas y servirá para comprobar el cumplimiento que sus agentes debieron dar al decreto. Con el mismo objeto, los Ministerios y sus organismos jurisdiccionales comunicarán al Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales los apellidos, nombres y datos de identidad de los funcionarios y empleados a que se refiere el artículo 4º del decreto Nº 7.843/53.

La Contaduría General de la Nación comunicará a los distintos Ministerios las instrucciones para la confección de las de

claraciones juradas preparadas por la misma, y que se aprueban por la presente resolución.

ARTICULO 2º.- El Registro otorgará a cada declarante un recibo oficial, que deberá exhibirse para todo trámite ulterior que realice el titular ante dicho organismo, con motivo de lo establecido en el artículo 6º del decreto Nº 7,843/53.

Cuando la entrega de la declaración se realice en el Registro en mano, el recibo se le otorgará en el acto, cuando se realice por vía postal se le remitirá en igual forma dentro de las 48 horas.

ARTICULO 3º.- El Registro se organizará sobre la base de un sistema de ficheros y/o registros por ordenamiento alfabético y numérico a los efectos del contralor del cumplimiento del decreto Nº 7.843/53 y adoptará las medidas necesarias para la guarda y custodia de las declaraciones en forma que asegure su conservación e inviolabilidad.

ARTICULO 4º.- A los efectos de proceder a los fines indicados en los apartados del artículo 7º del decreto Nº 7.843/53, el Ministerio iniciador o el juez en su caso, solicitará directamente a la Contaduría General de la Nación el sobre que contenga la declaración pertinente y otorgará un recibo en el que conste los fines para los cuales se retira. La declaración debe retornar una vez cumplida su finalidad lacrada y firmada por la parte solicitante.

El recibo antes otorgado quedará anulado y archivado en el Registro para constancia de la diligencia cumplida.

ARTICULO 5º.- Facúltase a la Contaduría General de la Nación a dictar las disposiciones que estime conveniente para el mejor cumplimiento de los fines que deba cumplir el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales.

ARTICULO 6º.- Comuníquese y pase a sus efectos a la Contaduría General de la Nación.

Fdo. P.J. BONANNI

RESOLUCION Nº 1.346/-

ANEXO A LA RESOLUCION MINISTERIAL Nª L.346 del 26-5-53.-

INSTRUCCIONES

PUNTO 1º.- La declaración jurada de bienes a que se refiere el artículo 3º del decreto Nª 7.843/53 debe abarcar la totalidad de bienes, rentas y deudas que por su costo, valor actual o monto, represente una cifra de importancia dentro de la suma total del patrimonio. Debe, asimismo, además de consignar los datos a que se refiere el aludido decreto, ser lo suficientemente analítica y detallada como para delimitar sus rubros, por ejemplo:

1.- Casas

2.- Terrenos

3.- Inmuebles y establecimientos rurales

4.- Capitales invertidos en explotaciones comerciales, industriales, financieras, agrícola-ganaderas, etc.

5.- Títulos, acciones, debentures, etc.

6.- Créditos hipotecarios, créditos comunes, depósitos bancarios, dinero en efectivo.

7.- Otros bienes, cualquiera sea su naturaleza (automóviles, joyas, semovientes, objetos de arte, etc.)

y, dentro de tales rubros, determinar en forma precisa los datos que permitan su individualización en forma fehaciente por ejemplo: al declarar una casa, además de los datos requeridos por el decreto, indicar su ubicación citando calle, número, localidad, etc.; al declarar un crédito hipotecario indicar nombre y apellido del deudor y la ubicación del inmueble gravado; cuando se declare inversión de capitales en industria, comercio, etc. consignar el nombre o razón social domicilio y ramo de la misma; lo mismo cuando se trate de deudas en que deberán indicarse nombre, apellido y

domicilio del acreedor y todo dato que contribuya a ilustrar sobre lo declarado como ser tasa de interés, carácter de la garantía si la hubiera, vencimiento, etc.

Cuando se declaran bienes tales como automóviles, motocicletas, aviones, lanchas, yates, aparatos de instrumental, joyas, etc. debe especificarse claramente (además de su costo de origen, etc.) su marca, modelo, tipo, año de construcción, característica, etc. según corresponda.

PUNTO 2º.- Los sobres a que se refiere el artículo 7º del decreto Nº 7.843/53 deberán ser de color blanco, sus lacres de consistencia que impida su fácil deterioro, y sus dimensiones estar comprendidas dentro de los siguientes límites: largo 230 a 250 milímetros, ancho 120 a 160 milímetros.

En la cara externa anterior de su respectivo sobre el declarante consignará con escritura a máquina los siguientes datos:

a) Una leyenda que indique: "Declaración Jurada Patrimonial, decreto Nº 7.843/53";

b) Apellido y nombres completos del declarante;

c) Número de Libreta de Enrolamiento o Cívica o de Cédula de Identidad y Policía que la expidió;

d) Ministerio;

e) Repartición;

f) Cargo;

g) Función;

h) Fecha de declaración;

i) Domicilio del declarante;

j) Firma.

PUNTO 3º.- Los sobres lacrados y con los requisitos que se señalan, podrán recibirse en el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales en cualquiera de las siguientes formas:

en la Capital Federal, personalmente por cada interesado, o colectivamente por la Dirección del Personal de cada organismo; en el interior, por envío postal, bajo sobre suplementario y certificado, con recibo de retorno por Correos y Telecomunicaciones cuando la declaración jurada la envía el propio interesado, o bien por remesas colectivas que hagan las administraciones respectivas.

En todos los casos en que las declaraciones juradas deban remitirse por vía postal, se adoptarán las seguridades antes expresadas.

PUNTO 4º.- Las declaraciones que consten de más de una foja, deben foliarse y firmarse cada una de ellas.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 128.-

DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES

Buenos Aires, 5 de febrero de 1954.-

Atento lo dispuesto por el Decreto Nº 7.843/953 de fecha 4 de mayo de 1953, y

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso f) del artículo 2º del recordado decreto, corresponde proceder a la aprobación de las listas elevadas por los distintos Ministerios;

Que es necesario considerar, al mismo tiempo, las situaciones especiales expuestas por algunos Departamentos respecto al cumplimiento de las medidas dispuestas;

Que la naturaleza especialísima del régimen fijado por el Decreto número 7.843/53, hace necesario el dictado de normas que aseguren su eficaz aplicación frente a situaciones que se produzcan en el futuro;

Por ello;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Apruébanse las listas adjuntas remitidas por los distintos Ministerios en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º, inciso f) del Decreto Nº 7.843/953, y dispónese su archivo en el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales.

ARTICULO 2º.- Las modificaciones y/o ampliaciones de las listas a que se refiere el artículo precedente, serán remitidas directamente a la Contaduría General de la Nación (Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales) por los distintos Departamentos de Estado para su aprobación por el Ministerio de Hacienda. Si dicha Secretaría de Estado las objetara, el

caso será resuelto por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 3º.- Los distintos Departamentos procederán a comunicar a la Contaduría General de la Nación (Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales), la nómina de los funcionarios que desempeñan los cargos que integran las listas aprobadas por el artículo 1º del presente decreto, como así también la de aquellos comprendidos en las modificaciones y/o ampliaciones de las mismas.

Tal comunicación deberá realizarse, además, en el caso de nuevas designaciones y promociones de funcionarios que, por tales circunstancias, se hallen encuadrados en el régimen del Decreto Nº 7.843/953, dentro de los veinte (20) días de producidas.

ARTICULO 4º.- Los agentes comprendidos en el régimen del Decreto Nº 7.843/953 (artículo 2º, inciso f), deberán cumplimentar su declaración jurada dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de la aprobación de las listas pertinentes, su modificación y/o ampliación, por parte del Ministerio de Hacienda o el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 5º.- Para facilitar la implantación y organización del nuevo servicio de que se trata, amplíanse en veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto, los plazos vencidos que se establecen en los artículos 2º "in-fine", 3º y 4º del Decreto Nº 7.843/953.

ARTICULO 6º.- A los efectos previstos en el artículo 5º del Decreto Nº 7.843/953, corresponderá al Ministerio de Hacienda establecer la calificación de las causales respectivas.

ARTICULO 7º.- Para los fines previstos en el artículo 7º, incisos a) y c), del Decreto Nº 7.843/953, el Ministro respectivo, Control de Estado o el Juez competente, solicitarán directamente y por escrito y por actuación reservada a la Contaduría General de la Nación, la entrega del sobre que contenga la declaración jurada pertinente y otorgará el recibo con constancia de los motivos que originan el retiro. Una vez satisfecha la finalidad del pedido, la declaración será devuelta, lacrada y firmada, por el funcionario solicitante. La solicitud y el recibo

mencionado se archivarán en el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales como antecedente de la diligencia cumplida.

ARTICULO 8º.- En los casos comprendidos en el artículo 7º, inciso b) del Decreto Nº 7.843/953, si el solicitante fuera el propio declarante se labrará un acta en el Registro, con la constancia de la documentación de identidad exhibida y se procederá allí mismo a abrir el sobre en presencia de un funcionario responsable de dicha dependencia, pudiéndose extraer anotaciones e incluso copia de la misma. Cumplida la diligencia, se ensobrará nuevamente la declaración, y el sobre, lacrado y firmado por el peticionante, volverá a archivarse en el Registro, donde también se conservarán las actas y otros antecedentes del trámite cumplido.

ARTICULO 9º.- Cuando el recurrente fuera un sucesor del declarante fallecido, acompañará a su solicitud la documentación que, a juicio del Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales lo acredite como tal, siguiéndose en lo demás, el procedimiento señalado en el artículo anterior.

ARTICULO 10º.- A los efectos previstos en los artículos 8º y 9º, el declarante o sus sucesores podrán hacerse representar por personas autorizadas por escrito.

ARTICULO 11º.- Las declaraciones juradas ingresadas al Registro no podrán ser retiradas del mismo, ni abiertas, sino siguiendo el método establecido en este decreto. En ningún caso serán devueltas a los declarantes, aun cuando éstas hubiesen sido remitidas por error o el declarante dejara de estar comprendido en el régimen del Decreto Nº 7.843/953. Será personal y directamente responsable el funcionario que autorizare o cometiere cualquier violación a lo establecido precedentemente.

ARTICULO 12º.- La Contaduría General de la Nación queda facultada para requerir directamente todos los antecedentes que considere necesarios para el mejor cumplimiento de su cometido, y los funcionarios responsables quedan obligados a suministrarselos en el más breve plazo posible.

ARTICULO 13º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

DECRETO Nº 1.677.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 129.-

PROPAGANDA POLITICA

Buenos Aires, 5 de marzo de 1956.-

Visto el decreto 3.855/55 por el cual se disuelve el Partido Peronista en sus dos ramas, en virtud de su desempeño y vocación liberticida, y

CONSIDERANDO:

Que en su existencia política, el Partido Peronista, actuando como instrumento del régimen depuesto, se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia ciudadana, para lo cual creó imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina, artículos y obras artísticas;

Que dichos objetos, que tuvieron por fin la difusión de una doctrina y una posición política que ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino, constituyen para éste una afrenta que es imprescindible borrar; porque recuerdan una época de escarnio y de dolor para la población del país, y su utilización es motivo de perturbación de la paz interna de la Nación y una rémora para la consolidación de la armonía entre los argentinos;

Que, en el campo internacional, también afectan el prestigio de nuestro país, porque esas doctrinas y denominaciones simbólicas, adoptadas por el régimen depuesto, tuvieron el triste mérito de convertirse en sinónimo de las doctrinas y denominaciones similares utilizadas por las grandes dictaduras de este siglo, que el régimen depuesto consiguió parangonar;

Que tales fundamentos hacen indispensable la radical supresión de esos instrumentos o de otros análogos, y esas mismas razones imponen también la prohibición de su uso al ámbito de las marcas y denominaciones comerciales, donde también fueron registradas con fines publicitarios y donde su conservación no se justifica, atento el amplio campo que la fantasía brinda para la

elección de insignias mercantiles;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA,

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO,

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Queda prohibida en todo el territorio de la Nación:

a) La utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o de propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados, grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadas, de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales, pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo.

Se considerará especialmente violatoria de esta disposición, la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones "peronismo", "peronista", "justicialismo", "justicialista", "tercera posición", la abreviatura "P. P.", las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales denominadas "Marcha de los muchachos peronistas" y "Evita capitana" o fragmentos de las mismas, la obra "La razón de mi vida" o fragmentos de la misma, y los discursos del presidente depuesto y de su esposa o fragmentos de los mismos;

b) La utilización, por las personas y con los fines establecidos en el inciso anterior, de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina, ar-

tículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales, creados o por crearse, que de alguna manera cupieran ser referidos a los individuos representativos, organismos o ideología del peronismo;

c) La reproducción por las personas y con los fines establecidos en el inc. a), mediante cualquier procedimiento, de las imágenes, símbolos y demás objetos señalados en los dos incisos anteriores.

ARTICULO 2ª.- Las disposiciones del presente decreto-ley se declaran de orden público y en consecuencia no podrá alegarse contra ellas la existencia de derechos adquiridos. Caducan las marcas de industria, comercio y agricultura, y las denominaciones comerciales, principales o anexas, que consistan en las imágenes, símbolos y demás objetos señalados en los incs. a) y b) del art. 1ª.

Los Ministerios respectivos dispondrán las medidas conducentes a la cancelación de tales registros.

ARTICULO 3ª.- El que infrinja el presente decreto-ley será penado:

a) Con prisión de treinta días a seis años y multa de quinientos (m$n. 500) a un millón (m$n. 1.000.000) de pesos.

b) Además, con inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena para desempeñarse como funcionario público o dirigente político o gremial;

c) Además, con clausura por quince días, y en caso de reincidencia, clausura definitiva cuando se trate de empresas comerciales.

Cuando la infracción sea imputable a una persona colectiva, la condena podrá llevar como pena accesoria la disolución.

Las sanciones del presente decreto-ley no serán sus

ceptibles de cumplimiento condicional, ni será proc
dente la excarcelación.

ARTICULO 4º.- El presente decreto-ley será refrendado por el Excmo. señor Vicepresidente provisional de la Nación y por to dos los señores Ministros Secretarios de Estado en Acuerdo G neral.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección G neral del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Rojas - Busso - Podestá Costa - Landaburu - Migone - Dell[illegible] Maini - Martínez - Ygartúa - Mendi do - Bonet - Blanco - Mercier - Al sogaray - Llamazares - Alizón Garci Ossorio Arana - Hartung - Krausse.-

DECRETO-LEY Nº 4.161.-

Boletín Nº 130.-

PARTIDOS POLITICOS - PROHIBICIONES - PERSONAL - FUNCIONARIOS PUBLICOS

Buenos Aires, 16 de octubre de 1956.-

Visto que la ley 13.645, que establece el llamado "Régimen de las Organizaciones Políticas", no se ajusta a los principios que constituyen el fundamento de la estructura democrática y republicana establecida por la Constitución Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que en las directivas básicas del Gobierno Revolucionario, éste se ha comprometido a "sanear toda la estructura electoral de la Nación", "a fortalecer y afianzar el federalismo", y a "mantener también estricta neutralidad e independencia frente a las distintas tendencias y partidos democráticos", como asimismo a adoptar las "medidas previas a la consulta electoral para que ésta sea verdaderamente libre y auténtico su resultado";

Que siendo los partidos políticos órganos esenciales de la democracia representativa destinados a encauzar y orientar la voluntad popular mediante el contacto entre el elector y el elegido, deben también constituirse, organizarse, gobernarse y funcionar en forma democrática, para que no existan inconvenientes en el seno de las actividades partidarias que trasciendan como escuela a los ámbitos de las actividades públicas u oficiales;

Que la designación de los candidatos llamados a integrar los poderes del Estado, debe emanar de partidos políticos democráticos.

Que en este momento histórico en que la autoridad del Estado asegura el libre desarrollo de las activiades partidarias, el Gobierno provisional aspira a que los diversos partidos po

líticos superen en el más breve plazo posible los conflictos internos que puedan debilitarlos, a fin de facilitar el encauzamiento definitivo de la ciudadanía hacia el proceso preelectoral que permitirá el cumplimiento de los compromisos políticos contraídos por el Gobierno con el pueblo de la Nación.

Que para el cumplimiento de estos propósitos es fundamental reglamentar el funcionamiento de los partidos políticos, mediante normas generales que establezcan las bases indispensables para su constitución y funcionamiento y que garanticen su más amplia libertad de organización y autonomía;

Que debe mantenerse la personería de los partidos políticos democráticos existentes a la fecha de la Revolución eximiéndolos de cumplir con los requisitos que condicionan la constitución de un nuevo partido, sin que ello signifique exceptuarlos de satisfacer las demás exigencias que se refieren al funcionamiento de la agrupación;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA,

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO,

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- El Estado garantizará el libre desenvolvimiento de las actividades de las agrupaciones políticas democráticas, así como la facultad de organizarse como partido y gobernarse de acuerdo con los estatutos y cartas orgánicas que cada una se dicte.

ARTICULO 2º.- El presente decreto-ley regirá para los partidos que se propongan intervenir en la elección de miembros de los poderes públicos de la Nación y de la Municipalidad de la Capital federal.

ARTICULO 3º.- Para que una agrupación política pueda ser reconocida como partido deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Una declaración de principios y un programa de acción política en los que se propugne expresamente el mante

nimiento del régimen democrático, republicano, representativo y federal de gobierno, así como el de las libertades, derechos y garantías individuales que consagra la Constitución Nacional;

b) Un nombre que no contenga designaciones personales ni derivados de ellas, no provoque confusión y que se distinga del nombre de cualquier otra agrupación;

c) Una carta orgánica que asegure la libertad de afiliación, la participación y fiscalización de los afiliados en la dirección, gobierno y administración del partido, y en la elección de sus autoridades y candidatos. Deberá impedir la actividad partidaria a quienes por cualquier causa hayan perdido el ejercicio de sus derechos electorales o políticos;

d) Un número de afiliados adherentes no inferior a quinientos o al uno por ciento de los electores inscriptos en el Padrón Electoral del Distrito en el cual solicitaren reconocimiento.

ARTICULO 4º.- Cuando un partido político resuelva alterar su declaración de principios, programa de acción política, nombre y/o su carta orgánica, deberá remitir ejemplar autenticado de tal alteración al juez electoral correspondiente antes de que entre en vigor.

ARTICULO 5º.- El reconocimiento de un partido político importará, además del de su personería como tal, el reconocimiento de su carácter de persona jurídica para todos los efectos del derecho privado. El ejercicio de los derechos inherentes a la agrupación como partido político reconocido corresponde exclusivamente a sus autoridades en ejercicio estatutariamente elegidas y no es delegable, sin perjuicio de las funciones asignadas a los apoderados por las leyes electorales.

ARTICULO 6º.- Los partidos políticos reconocidos deberán:

a) Dar estricto cumplimiento a su carta orgánica y al presente decreto-ley;

b) Llevar como mínimo, por intermedio de cada filial o comité, los siguientes libros que deberán ser rubricados y sellados por el juez electoral correspondiente, con indicación de la filial o comité a que pertenezcan;

1) Libro de afiliación, donde constará el nombre de los ciudadanos inscriptos, firma o impresión digital, su domicilio, número de matrícula individual, clase y ocupación. Las firmas o impresiones digitales pueden ser llevadas en fichas de afiliación.

2) Libro de inventario, donde se registrarán ordenadamente todos los bienes que integren el patrimonio del partido.

3) Libro de caja, donde se registrarán por su orden todos los ingresos y egresos de fondos y se individualizará, en cada caso, el origen de los ingresos y el destino dado a los mismos, debiendo conservarse la documentación correspondiente.

4) Libro de actas, donde se registrarán las resoluciones emanadas de los distintos organismos prescriptos por la respectica carta orgánica;

c) No depender de organizaciones extranjeras;

d) Efectuar balances anuales y remitir copia de los mismos al juez electoral, el que ordenará su publicación en el Boletín Oficial, por tres días. Si resultare necesario practicar aclaraciones, el juez solicitará los informes pertinentes;

e) Antes de elegir sus candidatos, sancionar una plataforma electoral que les servirá de mandato. Una copia autenticada de dicha plataforma deberá enviarse al juez electoral.

ARTICULO 7º.- Los padrones de afiliados serán públicos. El partido deberá remitir al juez electoral el 1º de diciembre de cada año, copia actualizada y autenticada de los mismos. Dicha remisión deberá hacerse efectiva, además, cada vez que el juez la

solicite, debiendo igualmente remitirse, antes de cada elección interna, el padrón que habrá de utilizarse en la misma. Los resultados de las elecciones internas serán publicados y comunicados al juez electoral respectivo.

ARTICULO 8º.- Cuando agrupaciones políticas constituyan organismos centrales para actuar como entidades nacionales o regionales, estos organismos deberán inscribirse ante el juez electoral del lugar que fijen como domicilio, acompañando:

a) La declaración de principios de la entidad;

b) En su caso, el estatuto o reglamento; y

c) La nómina de los partidos o fracciones locales que la constituyen.

Estas entidades deberán llevar, debidamente rubricados los libros prescriptos en el art. 6º inc. b) aparts.2, 3 y 4 del presente decreto-ley.

La simple inscripción importará, asimismo, el reconocimiento de su carácter de persona jurídica para todos los efectos del derecho privado.

ARTICULO 9º.- Queda expresamente prohibido a los partidos políticos la aceptación de aportes o donaciones:

a) De empresas concesionarias o permisionarias de servicios u obras públicas o que sean proveedoras habituales de la Nación, provincias, municipalidades o entidades descentralizadas de las mismas;

b) De empresas que exploten juegos de azar;

c) De grupos, asociaciones o autoridades extranjeras;

d) De organizaciones patronales, obreras o profesionales;

e) De empleados públicos o privados, si el aporte o donación fuera obtenido con intervención directa o indirecta de los superiores jerárquicos o empleadores;

f) Las que fueran anónimas. Los donantes podrán exigir que su nombre no se publique, pero el partido deberá conservar la

documentación necesaria, para poder establecer claramente el origen de las donaciones.

ARTICULO 10ª.- La transgresión a las normas sobre formación del patrimonio de los partidos políticos obligará a éstos a entregar al Consejo Nacional de Educación un importe igual al de la donación o aporte ilícitamente recibido.

Las personas de existencia ideal que efectúen aportes o donaciones, en transgresión de lo dispuesto en el art. 9ª sufrirán una multa por un importe igual al décuplo de la donación o aporte ilícitamente efectuado, sin perjuicio de la pena corporal que pueda corresponder a sus directores, gerentes, representantes o agentes.

ARTICULO 11ª.- Serán reprimidos con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por doble término:

a) Los propietarios, directores, gerentes, agentes o representantes de las empresas, grupos, asociaciones, autoridades u organizaciones mencionadas en el art.9ª, incs. a), b),c) y d) que contravengan lo allí dispuesto;

b) Los afiliados que de por sí o por interpósita persona reciban a sabiendas donaciones o aportes para el partido, de las personas mencionadas en el inciso precedente, así como los afiliados que por sí o por interpósita persona soliciten, a sabiendas, de aquéllas,donaciones o aportes para el partido, o reciban, donaciones anónimas en contra de lo prescripto por el art. 9ª, inc. f);

c) Los empleados públicos o privados y los empleadores que intervengan directa o indirectamente en la obtención de aportes o donaciones de sus inferiores jerárquicos o empleados para un partido político, así como afiliados que a sabiendas reciban para el partido aportes o donaciones así obtenidos;

d) Los que utilicen, directa o indirectamente, fondos de un partido para influir en la designación de cualquier persona en una elección interna.

ARTICULO 12º.- Los que sin haberse desafiliado formalmente de un partido se afiliaren a otro, serán inhabilitados para el ejercicio de sus derechos políticos, incluso la afiliación a cualquier partido, por el término de cinco años.

ARTICULO 13º.- A los efectos del presente decreto-ley tendrá jurisdicción en cada distrito electoral el juez nacional encargado del respectivo registro electoral con las siguientes atribuciones:

a) Aplicar las disposiciones del presente decreto-ley;

b) Atender las reclamaciones interpuestas por los partidos políticos;

c) Decretar la disolución de los partidos políticos, la que sólo podrá tener por causales:

1) Las determinadas en la carta orgánica;

2) La voluntad de los afiliados expresada en la forma que la carta orgánica prevea; y

3) La violación de lo dispuesto por el art. 6º, inc. c).

ARTICULO 14º.- En toda reclamación, el juez fijará audiencia dentro de los cinco días, bajo apercibimiento de celebrarse con la parte que concurra, y se expedirá dentro de los tres días de realizada aquélla. La incomparecencia hará perder el derecho de apelar. La prueba deberá ofrecerse en la primera presentación y producirse en la audiencia.

ARTICULO 15º.- Las resoluciones definitivas del juez electoral podrán ser apeladas dentro de las cuarenta y ocho horas ante la Cámara Nacional respectiva, la que deberá expedirse dentro del término de diez días.

ARTICULO 16º.- Las resoluciones de las cámaras nacionales que denieguen o revoquen la personería jurídica, serán apelables dentro de las cuarenta y ocho horas para ante la Corte suprema.

ARTICULO 17º.- Todas las actuaciones que deban cumplirse en virtud del presente decreto-ley, se harán en papel simple y las publicaciones que los jueces dispongan efectuar en el Boletín Oficial serán sin cargo.

ARTICULO 18º.- Derógase la ley 13.645 y toda otra disposición que se oponga al presente decreto-ley.

ARTICULO 19º.- Nada en el presente decreto-ley podrá ser interpretado como modificatorio de lo dispuesto en los decretos-leyes 3855/55;4072/56;4161/56,4258/56,5147/56 y 11.843/56 y correlativos; como así tampoco de las resoluciones adoptadas por la Justicia electoral con posterioridad al 16 de setiembre de 1955.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 20º.- Los comisionados federales aplicarán las disposiciones del presente decreto-ley a los partidos políticos que se propongan intervenir en las elecciones de miembros de los poderes públicos locales.

ARTICULO 21º.- Acéptanse como ya constituídos a los partidos políticos que actuaban públicamente al 16 de setiembre de 1955. En caso de que estos partidos no se hallaren inscriptos en la Justicia electoral, deberán hacerlo dentro de los quince días de la fecha. Dentro del mismo plazo, los organismos centrales deberán presentar los documentos mencionados en el art. 8º,inc. a), b) y c), no obstante lo cual podrán continuar actuando.Los partidos quedan liberados de cumplir lo prescripto en el art. 3º y para la observancia de lo dispuesto en el art. 6º,inc. b), gozarán del término de noventa días. De igual plazo dispondrán los organismos centrales para cumplir con lo establecido en el art. 8º, penúltimo párrafo, referente a la rubricación de libros.

Cuando en uno de los partidos mencionados en el párrafo primero del presente artículo existieran distintas fracciones que se atribuyan públicamente el nombre o la representación del mismo; dichas fracciones deberán distinguirse mediante un aditamento al nombre partidario, sin que la Justicia electoral pueda desconocerlas.

ARTICULO 22º.- Nada de lo establecido en el presente decreto-ley podrá ser interpretado en el sentido de que confirma,cuestiono o niega la validez de las actuales autoridades de los partidos políticos a que se refiere el artículo anterior.

ARTICULO 23º.- El presente decreto-ley será refrendado por el señor Vicepresidente provisional de la Nación y los señores ministros secretarios de Estado en los departamentos de Ejército, Marina, Aeronáutica, Interior y Educación y Justicia.
ARTICULO 24º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Rojas - Ossorio Arana
Hartung - Krause - Landaburu -
Adrogué.-

DECRETO-LEY Nº 19.044.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 131.-

COMPRA-VENTA - BANCOS

Buenos Aires, 25 de enero de 1957.-

Visto lo establecido por Decreto 18.137/56, y

CONSIDERANDO:

Que hasta tanto no se sancionen por el Poder Ejecutivo los regímenes de compras, ventas y contratación de servicios elevados por las entidades bancarias oficiales, es conveniente facilitar el desenvolvimiento de esas instituciones, obviando la impugnación de sus rendiciones de cuentas por parte del Tribunal de Cuentas de la Nación;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Amplíase la vigencia de los reglamentos de compra-venta que se hallaban en vigor en las instituciones bancarias oficiales al sancionarse el Decreto 18.137/56, hasta tanto el Poder Ejecutivo apruebe los nuevos regímenes de contrataciones elevados a su consideración.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de HACIENDA.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

ARAMBURU - E.A.Blanco

DECRETO Nº 834.-

Boletín Nº 132.-

COMPRA-VENTA - BANCOS

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1956.-

Visto lo propuesto por el Ministerio de Hacienda, y

CONSIDERANDO:

Que la Contaduría General de la Nación en función de la fiscalización que le confiere la Ley nº 12.961, ha considerado que los bancos oficiales comprendidos en el Art. 124 de aquella Ley deben ajustar sus regímenes de compra-venta a la reglamentación general de la ley de Contabilidad o, en su defecto, que esos sistemas particulares se sometan a la aprobación del Poder Ejecutivo ya que éste en esa materia no puede ser sustituído por los directorios de las citadas reparticiones;

Que sin perjucio de considerar procedente la posición de la Contaduría General en el problema, razones de uniformidad en el procedimiento y la necesidad de conocer en detalle las características propias de cada servicio, aconsejan el estudio integral del mismo para darle adecuada solución;

Que mientras a ello se llegue, es indispensable dar inmediata solución al inconveniente que ha creado el atraso en el despacho de las rendiciones de cuentas de los organismos bancarios las que se hallan pendientes de aprobación por la causa señalada, situación que no debe prolongarse en consideración al número de rendiciones observadas y al volumen de la suma total que en conjunto ellas acusan;

Que proceden por lo tanto posibilitar la solución disponiendo la aprobación de los reglamentos de compra-venta en vigor en los organismos citados, apartándose del régimen general del decreto nº 36.506/48, lo cual el Poder Ejecutivo puede disponer el uso de la facultad que le confiere el art.50º

de la Ley 12.961;
Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Apruébase los reglamentos de compra-venta y sus modificaciones que estuvieron en vigor en las instituciones bancarias oficiales dictados por sus autoridades naturales, así como los procedimientos derivados de los mismos a que se alude en los considerando del presente.

ARTICULO 2º.- El reglamento que rija a la fecha de este decreto continuará en vigencia por el término de 90 días.

ARTICULO 3º.- En el plazo mencionado en el artículo anterior las instituciones bancarias oficiales, deberán someter al Poder Ejecutivo para su aprobación, el reglamento de compra-venta que contemple las características parciales de esas instituciones, respondiendo a los principios básicos generales del decreto reglamentario del artículo 50º de la ley de Contabilidad.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

ARAMBURU - E.A. Blanco.-

DECRETO Nº 18.137.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 133.-

OBRAS PUBLICAS

Buenos Aires, 13 de marzo de 1956.-

Visto el expediente 464/56 del registro del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y atento lo expuesto por la Comisión arbitradora de la ley 12.910, creada en virtud de lo dispuesto por el art. 8º del decreto 11.511/47;

CONSIDERANDO:

Que el art. 22 del citado decreto, fijó las bases del régimen de emergencia para el reconocimiento de variaciones de costos que debe incluirse en los pliegos de condiciones para la contratación de obras públicas;

Que dicho artículo reglamenta al art. 6º de la ley 12.910;

Que la aplicación del citado art. 22 ha dado origen a conflictos entre las reparticiones públicas y las empresas contratantes;

Que, por otra parte, el art. 31 del mismo decreto 11.511/47 en cuanto permite indemnizar los gastos improductivos provocados a las empresas contratistas por actos de gobierno, consagra un principio de justicia que debe aplicarse igualmente cuando los gastos improductivos son causados por otros actos administrativos o por actos de la propia repartición contratante, siempre que no medie impericia o negligencia de los empresarios, u otras causas no imputables a la Administración.

Por ello y atento lo propuesto por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Obras Públicas,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Todas las reparticiones centralizadas o descen-

tralizadas de la Administración nacional y las empresas del Estado que contraten obras bajo el régimen de la ley 12.910, incluirán en los pliegos de condiciones respectivos, disposiciones que contemplen exactamente las previsiones de los arts. 22 y 31 del decreto 11.511/47, sin perjuicio de las cláusulas complementarias que estimen necesario agregar según la naturaleza de la obra y conforme a lo prescripto por el inc. e) del art. 3º del mismo decreto.

ARTICULO 2º.- En cumplimiento de lo dispuesto en los incs. a) y b) del citado art. 22, las reparticiones, al redactar los pliegos de condiciones incorporarán a los mismos las planillas que contengan listas completas, con denominación y precios básicos de los jornales y cargas sociales, combustibles, materiales fundamentales que se incorporen a las obras o se consuman en ellas y materiales de monto apreciable; entendiéndose por tales aquellos que ésten contenidos en los ítems o rubros del presupuesto cuyo monto no sea inferior al 2% del valor contratado.

ARTICULO 3º.- Las omisiones en que pudieran incurrir las reparticiones al redactar las planillas mencionadas, no impedirán la liquidación de variaciones de costos siempre que se pruebe que los materiales omitidos reunen las condiciones mencionadas en los artículos anteriores. En tal caso la diferencia se liquidará tomando como precio básico del jornal o material emitido, el vigente en el semestre de la licitación, determinado de conformidad con lo previsto en el art. 20 del decreto 11.511/47.

ARTICULO 4º.- La compensación por gastos directos improductivos establecida en el art. 31 del citado decreto, será también reconocida a los contratistas cuando las paralizaciones o disminución del ritmo de ejecución previsto, sean causados por actos administrativos de la propia repartición contratante o de la Administración, siempre que no medie impericia o negligencia del contratista u otra causa no imputable a la Administración.

ARTICULO 5º.- Todas las divergencias entre las partes contratantes por distinta interpretación o dudas en la aplicación de

la ley 12.910 y sus decretos reglamentarios, serán resueltas, como hasta el presente, en la forma prevista por el art. 8º del decreto 11.511/47, decreto 14.211/49 y las modificaciones introducidas por el art. 3º del decreto 1.098/56. La Comisión arbitradora a que dichas disposiciones se refieren podrá dictar las normas de procedimiento que estime adecuadas para la mejor tramitación y substanciación de los recursos allí previstos.

ARTICULO 6º.- Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a todos los contratos que se celebren para la construcción de obras licitadas con posterioridad a su publicación.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Mendiondo.-

DECRETO Nº 4.693.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 134.-

COMPRA-VENTA - EMPRESAS DEL ESTADO - GARANTIAS EN CONTRATACIONES

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1955.-

Visto el presente Expediente Nº 13.570/55 relacionado con el dictamen 9 - 898 - 55 de fecha 26 de mayo de 1955, por el que la Contaduría General de la Nación comunicó que las empresas del Estado se encuentran facultadas para intervenir en las licitaciones que se realicen de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Nº 14.380 por entender que ha derogado la Ley Nº 12.911 (Dto. Nº 20.135/44) que prohibía participar en las mismas a las entidades autárquicas, y

CONSIDERANDO:

Que dichas empresas podrán concurrir en un pie de igualdad con los restantes proveedores, debiendo observar todos los requisitos y exigencias de la Ley de Contabilidad;

Que, siguiendo este orden de ideas los citados Organismos estarían obligados a constituir garantías por las ofertas mayores de m$n. 10.000;

Que tal depósito de garantía tiene por finalidad evitar que el resarcimiento y las penalidades previstas en el contrato de suministros, no puedan ser hechos efectivos por insolvencia del proveedor, ya que cuando se constituye en pagaré simple el fin es tener un título ejecutivo para cobrar judicialmente con mayor rapidez las sumas que se liquidan por cargos y cuando se trata de un pagaré avalado el propósito es doble, ejecución judicial rápida y garantía contra la insolvencia;

Que, teniendo en cuenta que por su régimen financiero y por su naturaleza jurídica no puede aceptarse que una empresa

del Estado caiga en la insolvencia y que, por otra parte, el artículo 10ª "in fine" de la Ley Nª 13.653 (t.o) expresa que "El Estado responderá por el pago del pasivo cubierto que resulte", se estima que podría liberarse a las empresas del Estado de constituir garantías en las distintas licitaciones que se realicen bajo el régimen de la Ley Nª 12.961.

Por tanto, visto lo informado por la Contaduría General de la Nación a fs. 2 (Inf. 9 - 2.100/55),

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1ª.- Libérase a las empresas del Estado de la obligación de constituir las garantías en las contrataciones que realicen con el Estado.

ARTICULO 2ª.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.

ARTICULO 3ª.- Tómese nota, comuníquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y vuelva a la Dirección General de Suministros del Estado a sus efectos.-

ARAMBURU - E.A. Blanco.-

DECRETO Nª 6.067.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 135.-

SUELDO - COSTO DE VIDA - SUBSIDIO FAMILIAR

Buenos Aires, 23 de febrero de 1956.-

Visto la necesidad de actualizar las asignaciones de los agentes al servicio del Estado en razón de que las mismas datan, en líneas generales, desde el año 1954, no obstante el proceso inflacionario subsiguiente que ha venido experimentando la economía nacional a raíz de la desacertada política monetaria y financiera observada por el régimen depuesto, y

CONSIDERANDO:

Que procede contemplar la mejora de aquellas asignaciones, como medida de emergencia, mediante un sistema que posibilite su rápida liquidación y pago a fin de que los beneficiarios puedan percibir a la mayor brevedad dicho aumento;

Que, con ese propósito, el Gobierno Nacional estima conveniente conferir a esa mejora, el carácter de una "bonificación por costo de vida", en la inteligencia de que tal temperamento, al propio tiempo que resulta menos gravoso para el Estado -que no cuenta actualmente con la holgura financiera necesaria para tender en forma adecuada otro régimen de cómputo del beneficio-, es también más favorable para el personal ya que las percepciones en concepto de aumento serán liquidadas, sin descuentos por aportes jubilatorios;

Que la mejora que se instituye, lo es sin perjuicio de las promociones calificadas que los distintos Ministerios y organismos estatales puedan y resuelvan discernir en favor de sus agentes, mediante ajustes en sus retribuciones, que tengan por objeto exclusivo premiar la capacidad, dedicación y eficiencia del personal al servicio de la Administración Pública;

Que, asimismo como otro medio de allegar mayores recursos

a los hogares de ingresos modestos, el Poder Ejecutivo considera oportuno extender los beneficios del subsidio familiar, de manera tal que los mismos alcancen a un sector más amplio de sus agentes;

Que, en un todo de acuerdo con la política establecida por el Gobierno de la Revolución Libertadora en materia de presupuesto y finanzas públicas, que propugna la contención de las erogaciones estatales, es indispensable disponer que los mayores gastos que irrogue la aplicación de las medidas señaladas, deben ser atendidos sin exceder los niveles presupuestarios previstos para el año en curso, a cuyo efecto los Ministerios y demás organismos estatales propondrán al Poder Ejecutivo los reajustes de sus autorizaciones crediticias vigentes, arbitrando las disponibilidad que demanden las mejoras, por vía de las economías que habrán de lograrse con la aplicación de los Decretos-Leyes números 7.104/55 y 1.635/56;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Institúyese para todos los agentes al servicio de la Administración Pública Nacional dependientes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con efecto a partir del 1º de febrero de 1956 y sobre la base de las asignaciones nominales que aquéllos hubieran tenido al día 31 de enero del año citado, una mejora mensual equivalente al diez por ciento (10%) del total de dichas asignaciones.

ARTICULO 2º.- El personal de estado civil casado, viudo o casado y separado (legalmente o de hecho), cualquiera fuese su edad, que por aplicación de lo dispuesto en el artículo precedente no alcanzará a percibir una asignación nominal mínima mensual equivalente a la suma de mil ciento veinte pesos moneda nacional (m$n. 1120), tendrá derecho a que se le liquide, igualmente como mejora, el importe necesario para totalizar dicha asignación mínima nominal, exclusión hecha de los beneficios del subsidio familiar que se liquidarán por separado.

ARTICULO 3º.- Para el personal de estado civil soltero, que por aplicación de lo establecido en el artículo 1º no alcanzara a percibir las asignaciones nominales mínimas mensuales que a continuación se detallan según las edades, corresponderá liquidar como mejoras las sumas necesarias para totalizar los siguientes importes:

E D A D	Asignación nominal mínima mensual m$n.
Menos de 16 años	550
De 16 y hasta menos de 18 años	700
De 18 y hasta menos de 22 años	900
De 22 y más años	1.120

ARTICULO 4º.- Entiéndese por asignaciones, a los fines de la aplicación de lo dispuesto por los artículos anteriores, los importes totales nominales que perciban los agentes en concepto de:

a) Remuneración mensual básica;

b) Adicional y suplemento de sueldos de los Decretos números 7.025/51 y 9.010/54, o equivalentes;

c) Bonificaciones por costo de vida de los Decretos números 7.025/51, 6.000 y 6.019/52 y 296/53, o disposiciones similares; y

d) Adicionales por función o por cargo jerárquico -y siempre que los agentes desempeñen efectivamente tales funciones o cargos-, en los casos de organismos o reparticiones que en virtud de los régimenes orgánicos de escalafonamiento de su personal aprobados por el Poder Ejecutivo o por autoridad competante, apliquen el sistema de liquidar, sobre los sueldos básicos del escalafón, aquellas clases de adicionales.

Las bonificaciones por antigüedad, los gastos de representación, las compensaciones por residencia o zona, las bonificaciones por destino, los suplementos por título profesional y otros similares con características de bonificaciones especiales o particulares, sean o no computables a los efectos jubilatorios, no se considerarán como asignaciones a los efectos previstos en este artículo.

ARTICULO 5º.- La mejora que corresponde al personal del Clero del presupuesto será, para todas las categorías de esa clase de agentes, la que determina el Artículo 1º del presente decreto.

ARTICULO 6º.- Para el personal docente, la mejora a que se refiere este decreto será liquidada de acuerdo al detalla siguiente:

	Importe mén.
a) Maestros (de grado, de jardín de infantes, de taller)	300
b) Preceptores de enseñanza primaria	300
c) Maestros especiales	300
d) Hora semanal de cátedra	10

ARTICULO 7º.- Previamente a la determinación de la mejora que a cada agente corresponda en concepto de "bonificación por costo de vida" instituída por este decreto, los Ministerios y demás organismos del Estado que aún no hubieran incorporado a los sueldos básicos de su personal, el adicional y suplemento de sueldo de los decretos núms. 7.025/51 y 9.010/54, de conformidad con lo establecido por el art. 14 del último decreto citado, deberán proceder a dicha incorporación.

ARTICULO 8º.- Los beneficios que como mejoras de las asignaciones de los agentes al servicio de la Administración pública nacional, se disponen por los artículos anteriores, se acordarán en todos los casos como una "bonificación por costo de vida".

En consecuencia, los importes respectivos serán liquidados al personal sin descuentos por aportes jubilatorios.

ARTICULO 9º.- Aclárase que las mejoras regladas por los arts. 1º a 3º sólo serán liquidadas por los importes totales que los mismos establecen, a los agentes que cumplan la labor ordinaria de treinta y cinco (35) horas semanales como mínimo. Exceptúase de esta norma al personal que se desempeñe en horarios más breves por razones de salubridad, trabajo nocturno u otras causales de igual naturaleza, establecidos por disposiciones legales o reglamentarias en vigor.

Para el personal que, no estando comprendido en el parárrafo anterior, cumpliera horarios semanales de labor más reducidos que el señalado en la primera parte de este artículo, las mejoras de que se trata serán determinadas en proporción al tiempo asignado para la labor respectiva.

ARTICULO 10º.- Las mejoras de asignaciones que dispone este decreto no serán aplicables respecto de los agentes al servicio del Estado cuyos haberes se ajusten, en razón de la naturaleza de las tareas que desarrollen, a laudos o convenios de trabajo. Dichos agentes serán beneficiados con las mejoras que se acuerden al personal de las actividades privadas respectivas.

ARTICULO 11º .- Las mejoras que en concepto de "bonificación por costo de vida" se establecen por el presente decreto, sólo deberán liquidarse a los agentes del Estado residentes en el país.

ARTICULO 12º.- Con el propósito de evitar superposición de beneficios, los agentes pertenecientes a organismos, servicios o sectores de personal para los cuales -a contar del 1º de octubre de 1955 y hasta la fecha de este decreto- se hubieran autorizado, con carácter general, mejoras en sus sueldos y demás asignaciones, cualesquiera que fuesen las causas o denominaciones de las mismas, sólo tendrán derecho a percibir los beneficios que establecen los artículos precedentes, desde el momento de su aplicación, en la parte en que estos últimos excedan del monto nominal de aquellas mejoras. Dicha parte también será liquidada en concepto de "bonificación por costo de vida".

La disposición que antecede no regirá para los casos de mejoras provenientes de la aplicación de las escalas y normas sobre asignaciones, vigentes sin modificaciones desde el día 1º de octubre de 1955, contenidas en los regímenes escalafonarios del personal.

ARTICULO 13º.- En los casos en que un agente desempeñare más de un cargo compatible en la Administración pública nacional, las mejoras acordadas por este decreto serán liquidadas independientemente para cada cargo, en la medida que corresponda a los mismos, excepto en lo que respecta al subsidio familiar cuyo beneficio sólo se abonará en uno de los cargos y sobre la base del total de entradas normales y permanentes al hogar del agente.

ARTICULO 14º.- Las mejoras que en concepto de bonificación por costo de vida se fijan por los artículos pertinentes, siguen a las retribuciones básicas que tenga asignadas el personal por servicios remunerados a sueldo, jornal o a destajo, y en consecuencia sus importes se disminuirán proporcionalmente a causa de cualquier reducción que afecte a dichas retribuciones básicas.

ARTICULO 15º.- Las disposiciones del presente decreto son también aplicables al personal transitorio y a los agentes llamados a cumplir con el servicio militar obligatorio. Para estos últimos, el beneficio por aplicación de este decreto será liquidado en la proporción del cincuenta por ciento (50%), excepto el subsidio familiar que se otorgará por su monto íntegro de conformidad con el régimen respectivo.

Igualmente se liquidarán tales beneficios a los agentes en uso de licencias con percepción de haberes. Asimismo, las mejoras aludidas incrementarán las asignaciones fijadas para los cargos de los agentes, que se encontraren con licencias sin goce de retribuciones, otorgadas de acuerdo con las disposiciones que rigen la materia.

ARTICULO 16º.- Las mejoras que en concepto de nueva "bonificación por costo de vida" se establecen por el presente decreto, rigen para el personal que se hallara en servicio a la fecha

del mismo, aun cuando su incorporación a la Administración pública nacional se hubiese operado con posterioridad al día 31 de enero de 1956. Aquellas mejoras igualmente serán de aplicación para los agentes que ingresaren luego de dictado este decreto.

En ambos de estos últimos casos, las mejoras serán determinadas -por aplicación de los artículos pertinentes- sobre la base de las asignaciones que a tales agentes se acordaran en el momento de sus designaciones respectivas.

ARTICULO 17º.- Las sumas que se liquiden al personal como "bonificación por costo de vida" deben ser consideradas a los fines de la determinación del tributo por impuesto a los réditos.

No serán computadas, en cambio, a los efectos del cálculo del sueldo anual complementario, ni para la liquidación de viáticos u otros conceptos cuyos importes se regulan sobre la base de los sueldos propiamente dichos del personal.

ARTICULO 18º.- En los casos de embargos sobre haberes, la bonificación por costo de vida que regla este decreto no se acumulará al sueldo a los efectos del cálculo del porcentaje de quita que establecen la ley núm. 9.511 y el art. 11, apart. b)del decreto 6.754/43 (ratificado por la ley 13.894).

ARTICULO 19º.- Los agentes que de conformidad con lo dispuesto por el presente decreto deben ser retribuídos con una asignación nominal mínima de mil ciento veinte pesos moneda nacional (m$n. 1.120) mensuales, y cuyos sueldos básicos sean inferiores a setecientos pesos moneda nacional (m$n. 700) mensuales nominales -una vez incorporados a dichos sueldos básicos el adicional y suplemento de sueldos a que se refieren los decretos núms. 7.025/51 y 9.010/54, conforme lo establece el art. 14 del último decreto mencionado-, deberán ser reubicados en la categoría de auxiliar 4ª.

La diferencia de cuatrocientos veinte pesos moneda nacional (m$n. 420) hasta completar aquella asignación nominal mínima, será liquidada como "bonificación por costo de vida" integrada de la forma siguiente:

Bonificacion por costo de vida:

a) Decreto 7.025/51	m$n.	100
b) Decreto 6.000/52	"	200
c) Del presente decreto	"	120
Total	m$n.	420

ARTICULO 20º .- En los casos en que, luego del 1º de febrero de 1956, se hubiesen operado o se operasen modificaciones en las asignaciones que se computen para la determinación del beneficio que se acuerda por el presente decreto, las mejoras instituídas por el mismo se ajustarán, desde la fecha que corresponda, conforme a la nueva situación de revista de los agentes respectivos.

ARTICULO 21º.- Los beneficios en concepto de subsidio familiar a que se refieren el decreto 24.815/45 y disposiciones modificatorias, complementarias y aclaratorias del mismo, serán liquidados a los agentes de las Administración pública nacional con entradas normales y permanentes al hogar de hasta dos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000) mensuales nominales.

Los agentes al servicio del Estado, cuyas entradas normales y permanentes al hogar excedan de la suma de dos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000) mensuales nominales, percibirán los beneficios del subsidio familiar en la medida que el importe de este último sobrepase el monto de aquel excedente. Así se señala, a título de ejemplo, que un agente casado con tres (3) hijos a su cargo y con entradas normales y permanentes al hogar de dos mil cien pesos moneda nacional (m$n. 2.100) mensuales nominales, tendrá derecho a percibir la suma de veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 25) por mes en concepto de subsidio familiar.

ARTICULO 22º.- Déjase establecido que, en los sectores de agentes que al día 1º de febrero de 1956 tuvieren en aplicación regímenes de subsidio familiar más beneficiosos para el personal que el que se fija por el artículo anterior, se mantendrán aquellos regímenes.

ARTICULO 23º.- A partir del día 1º de febrero de 1956 todas las sumas que se liquiden en concepto de "bonificación por costo de vida", incluso la nueva mejora establecida por este decreto, serán computadas como entradas normales y permanentes al hogar a los fines de la determinación de los beneficios del subsidio familiar.

ARTICULO 24º.- Las disposiciones del presente decreto tienen aplicación tanto para el personal de las dependencias centralizadas (incluso servicios de cuentas especiales), como para los agentes que se desempeñan con afectación a los organismos descentralizados y planes de obras y trabajos públicos.

ARTICULO 25º.- Los gastos que irrogue la aplicación de las disposiciones contenidas en este decreto, serán atendidos provisoriamente con las autorizaciones previstas en los presupuestos vigentes de los Ministerios y demás organismos estatales para la partida "Cumplimiento decretos 7.025/51, 6.000/52, 6.019/52, 296/53 y 9.010/54 (A clasificar por inversión)", o similares, hasta tanto se arbitren por vía de reajustes dentro de esos mismos presupuestos los créditos necesarios para afrontar las nuevas erogaciones de que se trata.

Con igual carácter provisional y hasta la misma oportunidad señalada en el párrafo anterior los Ministerios u organismos cuyos presupuestos no contaran con la partida antes mencionada, cargarán los gastos emergentes del cumplimiento de este decreto, a las partidas principales de sueldos, jornales o bonificaciones, según sea el caso.

Entretanto se concreten los reajustes presupuestarios antes referidos, autorízase a las Direcciones de Administración o dependencias que hagan sus veces y a la Contaduría General de la Nación, para efectuar las liquidaciones e imputaciones correspondientes en las partidas mencionadas, sin sujeción a la norma de afectación duodecimal de créditos.

ARTICULO 26º.- Para la adecuación de los créditos presupuestarios que requiera la aplicación de los beneficios acordados por el presente decreto, los distintos Ministerios y organismos del Estado propondrán a la consideración del Poder Ejecutivo, con in-

tervención del Ministerio de Hacienda de la Nación, los ajustes de las autorizaciones legales que fueran menester y con estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas por los decretos-leyes núms. 7.104/55 y 1.635/56.

ARTICULO 27º.- A los fines de lo establecido por el decreto 11.001 del 12 de julio de 1955 declárase también computables las bonificaciones por costo de vida que fija el presente decreto.

ARTICULO 28º.- El Ministerio de Hacienda de la Nación dictará las normas aclaratorias y complementarias que se requieran para el mejor cumplimiento de las disposiciones del presente decreto.

ARTICULO 29º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda y de Trabajo y Previsión.

ARTICULO 30º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación para su conocimiento y demás efectos.-

ARAMBURU - Eugenio A. Blanco
Raúl C. Migone.-

DECRETO Nº 3.019.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 136.-

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - RESPONSABLES - RENDICIONES DE CUENTAS - FONDOS - INVERSIONES

Buenos Aires, 5 de febrero de 1957.-

Visto lo dispuesto por el Decreto-Ley 23.354/56 que aprueba la nueva Ley de Contabilidad y,

CONSIDERANDO:

Que es necesario arbitrar las medidas conducentes al despacho de las rendiciones de cuentas que debanser juzgadas de acuerdo con las prescripciones de la citada ley, como así también de aquellas que se refieran a inversiones hechas durante la vigencia de la Ley 12.961;

Que es conveniente además registrar en forma independiente dichas inversiones, a efectos de agilitar el despacho de las rendiciones pendiente de aprobación.

Por ello y en uso de las facultades que le acuerda el artículo 83, inciso e) de la Ley de Contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Los responsables que deban rendir cuenta a este Tribunal, elevarán en forma independiente las rendiciones de cuentas de los fondos de cualquier origen, recibidas con cargo a los ejercicios de 1956 y anteriores, de aquéllos que correspondan a los ejercicios 1957 y posteriores.

ARTICULO 2º.- Solicitar a la Contaduría General de la Nación y a los respectivos servicios administrativos la apertura de cuentas independientes para registrar los cargos y descargos que co-

rrespondan a los ejecicios de 1957 y posteriores.
ARTICULO 3º.- La Fiscalía General de este Tribunal llevará por separado la registración de las cuentas según corresponda a uno u otro período.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, dése al Digesto Administrativo y archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli - José M. Fernández Fariña - Wifredo P. Dedeu - Antonio M. Perez Arango - César Aguirre Legarreta.-

RESOLUCION Nº 46.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 137.-

PRESUPUESTO - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - EMPRESAS DEL ESTADO

Decreto-Ley Nº 23.573 de 31-12-56

.....

"ARTICULO 17º.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley nº 14.395 "incorporado a la Ley nº 11.672, Complementaria Permanente de "Presupuesto, por el siguiente:
"Los presupuestos de los Organismos Descentralizados y Empre- "sas del Estado deberán prever los créditos necesarios para "atender los servicios financieros de amortización e intereses "tendientes a reintegrar las sumas que, conforme a las corres- "pondientes disposiciones legales, se les hubieran anticipado "o se les anticipen para financiar sus planes de obras y/o ad- "quisiciones.-

.....

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 138.-

PRESUPUESTO - LEY DE CONTABILIDAD

Decreto-Ley Nº 23.573 de 31-12-56

.....

"ARTICULO 22º.- La vigencia y ejecución en el año 1957, de "los presupuestos y demás planes de erogaciones que rijan en "dicho año conforme a las disposiciones que contiene el pre- "sente decreto-ley, deberán ajustarse a los principios admi- "nistrativos y contables que inspiran los artículos 144 y 145 "de la nueva Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal "de Cuentas y de la Contaduría General de la Nación, a cuyo "efecto el Ministerio de Hacienda de la Nación establecerá, "por resolución, las normas necesarias.-

.....

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 139.-

PRESUPUESTO - ESCALA DE SUELDOS Y CARGOS - FUNCIONES - SUELDO

Decreto-Ley Nº 23.573 de 31-12-56

.....

"ARTICULO 23º.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley Nº 11.672 "(edición 1943), reemplazado por el artículo 24 de la Ley Nº "13.558, por el siguiente:
"Los sueldos y denominación de los empleos se regirán por la "siguiente escala:

Clase	Categoría	Remuneración mensual m$n.
1	Oficial Superior Principal	3.300
2	Oficial Superior de 1a.	3.200
3	Oficial Superior de 2a.	3.100
4	Oficial Superior de 3a.	3.000
5	Oficial Superior de 4a.	2.900
6	Oficial Superior de 5a.	2.800
7	Oficial Superior de 6a.	2.700
8	Oficial Superior de 7a.	2.600
9	Oficial Superior de 8a.	2.500
10	Oficial Superior de 9a.	2.400
11	Oficial Mayor	2.300
12	Oficial 1º	2.200
13	Oficial 2º	2.100
14	Oficial 3º	2.000
15	Oficial 4º	1.900
16	Oficial 5º	1.800
17	Oficial 6º	1.700
18	Oficial 7º	1.600

Clase	Categoría	Remuneración mensual m$n.
19	Oficial 8ª	1.500
20	Oficial 9ª	1.400
21	Auxiliar Mayor	1.300
22	Auxiliar 1ª	1.200
23	Auxiliar 2ª	1.100
24	Auxiliar 3ª	1.000
25	Auxiliar 4ª	950
26	Auxiliar 5ª	900
27	Auxiliar 6ª	850
28	Auxiliar 7ª	800
29	Auxiliar 8ª	750
30	Auxiliar 9ª	700
31	Ayudante Mayor	650
32	Ayudante 1ª	600
33	Ayudante 2ª	550
34	Ayudante 3ª	500
35	Ayudante 4ª	450
36	Ayudante 5ª	400
37	Ayudante 6ª	375
38	Ayudante 7ª	350
39	Ayudante 8ª	325
40	Ayudante 9ª	300
41	Sub-Ayudante Mayor	275
42	Sub-Ayudante 1ª	250
43	Sub-Ayudante 2ª	225
44	Sub-Ayudante 3ª	200
45	Sub-Ayudante 4ª	175
46	Sub-Ayudante 5ª	150
47	Sub-Ayudante 6ª	125
48	Sub-Ayudante 7ª	100
49	Sub-Ayudante 8ª	75
50	Sub-Ayudante 9ª	50

A los efectos de las designaciones existentes a las fechas en que el Poder Ejecutivo apruebe los ajustes presupuestarios

"a que se refiere el presente decreto-ley, sobre la base de la "escala vigente por el artículo 11 de la Ley Nº 11.672 (edición "1943), sustituído por el artículo 24 de la L. y Nº 13.558, es- "tablécense las siguientes equivalencias:

Escala Ley Nº 11.672 (edición 1943), reemplazada por el artículo 24 de la Ley Nº 13.558			Nueva escala		Remuner.
Clase	Categoría	Remuner. mensual m$n.	Clase	Categoría	Remuner. mensual m$n.
			1	Oficial Sup.Prin.	3.300
			2	Oficial Sup.de 1a.	3.200
			3	Oficial Sup.de 2a.	3.100
			4	Oficial Sup.de 3a.	3.000
			5	Oficial Sup.de 4a.	2.900
			6	Oficial Sup.de 5a.	2.800
			7	Oficial Sup.de 6a.	2.700
			8	Oficial Sup.de 7a.	2.600
			9	Oficial Sup.de 8a.	2.500
			10	Oficial Sup.de 9a.	2.400
			11	Oficial Mayor	2.300
			12	Oficial 1º	2.200
			13	Oficial 2º	2.100
1	Oficial Mayor	2.000	14	Oficial 3º	2.000
2	Oficial Principal	1.900	15	Oficial 4º	1.900
3	Oficial 1º	1.800	16	Oficial 5º	1.800
4	Oficial 2º	1.700	17	Oficial 6º	1.700
5	Oficial 3º	1.600	18	Oficial 7º	1.600
6	Oficial 4º	1.500	19	Oficial 8º	1.500
7	Oficial 5º	1.400	20	Oficial 9º	1.400
8	Oficial 6º	1.300	21	Auxiliar Mayor	1.300
9	Oficial 7º	1.200	22	Auxiliar 1º	1.200
10	Oficial 8º	1.100	23	Auxiliar 2º	1.100
11	Oficial 9º	1.000	24	Auxiliar 3º	1.000
12	Auxiliar Mayor	950	25	Auxiliar 4º	950

Clase	Categoría	Remuner. mensual món.	Clase	Categoría	Remuner. mensual món.
13	Auxiliar Principal	900	26	Auxiliar 5º	900
14	Auxiliar 1º	850	27	Auxiliar 6º	850
15	Auxiliar 2º	800	28	Auxiliar 7º	800
16	Auxiliar 3º	750	29	Auxiliar 8º	750
17	Auxiliar 4º	700	30	Auxiliar 9º	700
18	Auxiliar 5º	650	31	Ayudante Mayor	650
19	Auxiliar 6º	600	32	Ayudante 1º	600
20	Auxiliar 7º	550	33	Ayudante 2º	550
21	Auxiliar 8º	500	34	Ayudante 3º	500
22	Auxiliar 9º	450	35	Ayudante 4º	450
23	Ayudante Mayor	400	36	Ayudante 5º	400
24	Ayudante Principal	375	37	Ayudante 6º	375
25	Ayudante 1º	350	38	Ayudante 7º	350
26	Ayudante 2º	325	39	Ayudante 8º	325
27	Ayudante 3º	300	40	Ayudante 9º	300
28	Ayudante 4º	275	41	Sub-Ayudante Mayor	275
29	Ayudante 5º	250	42	Sub-Ayudante 1º	250
30	Ayudante 6º	225	43	Sub-Ayudante 2º	225
31	Ayudante 7º	200	44	Sub-Ayudante 3º	200
32	Ayudante 8º	190	45	Sub-Ayudante 4º	175
33	Ayudante 9º	180	46	Sub-Ayudante 5º	150
34	Sub-Ayudante 1º	160	47	Sub-Ayudante 6º	125
35	Sub-Ayudante 2º	150	48	Sub-Ayudante 7º	100
36	Sub-Ayudante 3º	130	49	Sub-Ayudante 8º	75
37	Sub-Ayudante 4º	120	50	Sub-Ayudante 9º	50

" Como excepción y cuando a raíz de exigencias legales u or-
"gánicas sea necesario establecer ineludiblemente funciones de-
"terminadas, las mismas se consignarán a continuación de las ca
"tegorías que correspondan.

" Cuando existan asignaciones básicas intermedias a las fija
"das para las categorías presupuestarias que se establecen en
"la escala precedente, aquellas se identificarán con la denomi-
"nación que corresponda, únicamente en los casos en que concurran

"las causales indicadas en el parrafo que antecede.
" Los Ministerios y Organismos Descentralizados que tengán "en aplicación para el personal de su jurisdicción regímenes "de escalafonamiento que establezcan remuneraciones distintas "a las fijadas en el presente artículo continuarán aplicando "los sistemas vigentes.
" Quedan excluídos de la escala mencionada:

1º) El personal militar;

2º) El personal del servicio exterior (Ley Nº 12.951);

3º) El personal de seguridad y defensa;

4º) El personal docente;

5º) Los funcionarios de ley; y

6º) El clero.

" Para estos casos regirán las remuneraciones y designacio "nes funcionales pertinentes.-

....

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 140.-

SUELDO - COSTO DE VIDA - PRESUPUESTO

Decreto- Ley Nº 23.573 de 31-12-56

.....

"ARTICULO 24º.- Unifícanse en un solo monto las bonificaciones "mensuales por costo de vida instituídas por los Decretos núme"ros 7.025/51, 6.000/52, 296/53 y 3.019/56, las que serán li"quidadas por los importes que correspondan a cada sueldo básico, de acuerdo con el siguiente detalle:

Remuneración mensual básica m$n.	Costo de vida m$n.
de 4.500 a 5.000	1.600
de 3.500 a menos de 4.500	1.500
de más de 3.300 a menos de 3.500	1.400
3.300	1.300
3.200	1.200
3.100	1.080
3.000	1.070
2.900	1.060
2.800	940
2.700	930
2.600	920
2.500	800
2.400	790
2.300	780
2.200	660
2.100	650
2.000	640

Remuneración mensual básica m$n.	Costo de vida m$n.
1.900	520
1.800	510
1.700	500
1.600	490
1.500	480
1.400	470
1.300	460
1.200	450
1.100	440
1.000	430
950	425
900	420
850	415
800	410
750	405
700	420

	Menores de 22 años casados	Menores solteros		
		de 22 a. 18 años	de 18 a 16 años	de 16 años
650	470	395	285	285
600	520	390	280	280
550	570	385	275	275
500	620	400	270	270
450	670	450	254	254
400	720	500	300	238
375	745	525	325	230
350	770	550	350	222
325	795	575	375	225
300	820	600	400	250

" Exclúyense de la unificación dispuesta precedentemente "las bonificaciones por costo de vida que correspondan a "los siguientes casos:

a) Cuando se trate de sueldos básicos inferiores a m$n. 300; y

b) Cuando con carácter general deban liquidarse sumas diferentes a las que se indican a continuación, por las siguientes disposiciones:

Decreto Nº 7.025/51	m$n. 100
Decreto Nº 6.000/52	m$n. 200
Decreto Nº 296/53	según su artículo 3º
Decreto Nº 3.019/56	según incisos a) y c) de su artículo 4º.

" En consecuencia, las bonificaciones por costo de vida a "que se refieren los apartados a) y b) precedentes, continuarán liquidándose en la forma discriminada o global y por los "importes que fijan las disposiciones correspondientes.

" El pago de las bonificaciones por costo de vida cuya unificación dispone el presente artículo, se atenderá con los "créditos asignados para el cumplimiento de los decretos citados anteriormente, hasta tanto se concreten los reajustes de "presupuesto a que se refiere el artículo 9º del presente decreto-ley, en cuya oportunidad deberá desdoblarse la partida "global respectiva, si así procede, en tres sub-partidas de "acuerdo con los siguientes conceptos:

1º) Crédito destinado al pago de bonificación por costo de vida unificado;

2º) Crédito para atender las erogaciones correspondientes a las bonificaciones por costo de vida excluídas de la unificación dispuesta;

3º) Crédito para pago del salario familiar.

.....

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 141.-

PRESUPUESTO - RECURSOS - PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS - INVERSIONES DEL ESTADO

Decreto-Ley Nº 23.573 de 31-12-56

.....

"ARTICULO 25º.- A partir del 1º de ENERO de 1957, todos los "recursos comprendidos en las Cuentas A - 1, A - 2 y B (en "la parte que corresponda según las disposiciones en vigor) "de la Cuenta Integral de financiación del Plan de Trabajos "Públicos e Inversiones del Estado a que se refiere el De- "creto-Ley Nº 470 de fecha 6 de octubre de 1955, serán in- "gresados directamente por los organismos recaudadores a la "Tesorería General de la Nación, y acreditados a los rubros "que correspondan de dicha cuenta integral. Facúltase al Po "der Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de Ha- "cienda, establezca los casos en que deban transferirse a "la Tesorería General de la Nación las existencias al 31 de "DICIEMBRE de 1956 de los recursos de que se trata, no afec "tados a compromisos inmediatos.

" Cuando en virtud de disposiciones orgánicas dichos re- "cursos constituyen la fuente normal y regular de financia- "ción del presupuesto administrativo o de explotación de los "respectivos organismos, serán excluídos del ingreso a la "Tesorería General de la Nación.

" La disposición de los recursos ingresados a la Tesore- "ría General de la Nación se efectuará de conformidad con "las normas que rijan sobre el particular.

" Facúltase al Poder Ejecutivo para que, por conducto del "Ministerio de Hacienda establezca las excepciones que co-

"rrespodan a este régimen, teniendo en cuenta la naturaleza
"y destino de los recursos.
" Mantiénense en vigor las normas orgánicas que rigen la
"administración descentralizada de los recursos de referen-
"cia, en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en el
"presente artículo. El Poder Ejecutivo por conducto del Mi-
"nisterio de Hacienda, dictará las reglamentaciones perti-
"nentes.-

.....

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletin Nº 142.-

PRESUPUESTO - VACANTES - NOMBRAMIENTOS - PROMOCIONES - ECONOMIAS

Decreto-Ley Nº 23.573 de 31-12-56

.....

"ARTICULO 26º.- Establécese la supresión automática de todas "las vacantes de personal, cualquiera sea su naturaleza, exis"tentes al dia 1º de ENERO de 1957 en las partidas individua"les de los presupuestos del Capitulo I - Administracion Cen"tral (A - Gastos a financiar con recursos de Rentas Generales "y B - 2 Servicios de Cuentas Especiales) a regir para el ejer"cicio correspondiente al año referido.

" Suprimese asimismo en dichos presupuestos, el crédito to"tal disponible a la fecha mencionada en las partidas globales "de sueldos y jornales.

" Las eliminaciones señaladas precedentemente implican tam"bién la reducción de los créditos destinados al pago del suel"do anual complementario, aporte patronal y demás gastos en "personal, en la medida que se relacione con las supresiones "que se efectúen.

" Las rebajas de cargos y créditos a que se refieren los pa"rágrafos anteriores, deberán concretarse efectivamente en los "presupuestos en la oportunidad en que se efectúen los reajus"tes que establece el presente decreto-ley.

"ARTICULO 27º.-Para los organismos y servicios a que hace refe"rencia el artículo anterior, establécese además la supresión "automática de todas las vacantes de personal administrativo y "técnico, obrero, de maestranza y de servicio, definido expresa"mente con tal carácter en el presupuesto general de la Nación, "que se produzcan en las partidas individuales y globales de

"sueldos y jornales a partir del día 1ª de ENERO de 1957.
"ARTICULO 28ª.- Las disposiciones contenidas en el artículo 27
"no serán de aplicación en los siguientes casos:

a) Personal especificamente afectado a servicios de comunicaciones y transportes;

b) Personal especifico de organismos que desarrollen actividades industriales y comerciales;

c) Personal afectado especificamente a tareas de percepción, fiscalización e inspección de las dependencias recaudadoras de impuestos y tasas; de abastecimiento, agio y especulación;

d) Personal especificamente afectado a los servicios hospitalarios, sanitarios y asistenciales; y

e) Personal afectado especificamente a las luchas contra las plagas de la agricultura y la ganaderia.

" En tales casos, las vacantes que por cualquier causa se pro
"dujerán a partir del 1ª de ENERO de 1957, quedarán automática-
"mente congeladas.
"ARTICULO 29ª.- Los organismos descentralizados se regirán en
"materia de disponibilidades crediticias para "Gastos en Perso-
"nal" de sus respectivos presupuestos, conforme a las normas si
"guientes:

a) Las vacantes de personal, cualquiera sea su naturaleza existentes al 1ª de enero de 1957, en las partidas individuales y globales de sueldos y jornales quedan congeladas en su totalidad; y

b) Igualmente se considerarán congeladas en su totalidad las vacantes de personal administrativo y técnico, obrero, de maestranza y de servicio, definido expresamente con tal carácter en el presupuesto de cada organismo, que se produzcan en las partidas individuales y globales de sueldos y jornales a partir del 1ª de enero de 1957.

"ARTICULO 30º.- Déjese aclarado que no están comprendidas en "las normas de supresión o congelamiento de vacantes a que se "refieren los artículos 27 y 29 (apartado b), las siguientes "clases de personal:

1.- Clero.
2.- Funcionarios de Ley.
3.- Personal docente.
4.- Personal militar
5.- Personal de seguridad y defensa.
6.- Personal del servicio exterior.

"ARTICULO 31º.- De las vacantes que resulten congeladas por "aplicación de lo dispuesto en los artículos 28 y 29, sólo po "drá disponerse para efectuar nombramientos de agentes, pre- "via comprobación documentada en cada caso particular, de la "necesidad impostergable que en tal sentido acusan los servi- "cios respectivos y con autorización acordada directamente por "el Ministerio de Hacienda de la Nación.

"ARTICULO 32º.- De los créditos cuya rebaja efectiva dispone "el artículo 26 del presente decreto-ley, sólamente podrá au- "torizarse el mantenimiento en el presupuesto respectivo, de "aquellos que fuesen destinados a compensar el costo de mejo- "ras en las retribuciones del personal correspondiente.

" Los aumentos de remuneraciones a que se refiere el párra "fo precedente, que revestirán el carácter de promociones ca- "lificadas de los agentes, deberán ser programados en oportu- "nidad de someterse a consideración del Poder Ejecutivo los "ajustes de presupuesto que prevé este decreto-ley.

" Igual temperamento que el señalado en los parágrafos an- "teriores podrá aplicarse en los casos de los organismos des- "centralizados, en lo que respecta a la congelación de vacan- "tes a que se refiere el apartado a) del artículo 29.

"ARTICULO 33º.- Las promociones o aumentos de las asignaciones "del personal de la Administración Nacional en todas sus ramas "sólo podrán disponerse como consecuencia de lo señalado en el "segundo párrafo del artículo 32 y regirán invariablemente a

"partir del dia 1º del mes siguiente al de la fecha de apro-
"bación.
" Toda excepción a esta norma deberá ser autorizada previa
"mente en Acuerdo de Gabinete y aprobada por decreto dictado
"con intervención del Ministerio de Hacienda.
" Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación para
"los casos en que las promociones del personal respondan a
"movimientos automáticos establecidos por regímenes escalafo
"narios en vigor.-
"ARTICULO 39º.- De las normas sobre economías y contención de
"los gastos públicos que prevé el presente decreto-ley, no
"serán aplicables a los Planes Analíticos de Obras y Adquisi
"ciones del Estado los artículos siguientes: 26 a 32,36 y 37.
"ARTICULO 40º.- Las excepciones a lo dispuesto por los artícu
"los 26 y 27,32,34,35 (primera parte) y 36 a 38 del presente
"decreto-ley, sólo podrán ser acordadas, frente a necesidades
"ineludibles de los servicios debidamente documentadas, por
"decreto del Poder Ejecutivo dictado con intervención del De
"partamento de Hacienda.

.....

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 143.-

SOBREASIGNACIONES - COMPENSACIONES - BONIFICACIONES - PROHIBICIONES

Decreto-ley Nº 23.573 de 31-12-56

.....

"ARTICULO 34º.- Los Ministerios y demás organismos del Esta-
"do incluso los descentralizados, que tuvieren implantado el
"otorgamiento de sobreasignaciones, compensaciones u otros
"beneficios análogos en favor del personal, cualquiera que
"sea su origen y estén reglamentados o nó por el Poder Ejecu
"tivo, no podrán disponer o proponer modificaciones, según el
"caso, a los sistemas vigentes a la fecha del presente decre
"to-ley.
" Las disposiciones que se adopten en violación de lo es-
"tablecido se reputarán nulas y las Direcciones de Administra
"ción ó dependencias que hagan sus veces y los organismos de
"fiscalización respectivos, se abstendrán de prestar confor-
"midad o dar curso a las liquidaciones de los beneficios que
"no se ajusten a lo reglado por este artículo.-
"ARTICULO 40º.- Las excepciones a lo dispuesto por los artícu
"los 26 y 27,32,34,35 (primera parte) y 36 a 38 del presente
"decreto-ley, sólo podrán ser acordadas, frente a necesida-
"des ineludibles de los servicios debidamente documentadas,
"por decreto del Poder Ejecutivo dictado con intervención del
"Departamento de Hacienda.-

.....

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 144.-

ADSCRIPCIONES - FACULTAD MINISTERIAL

Decreto-ley Nº 23.573 de 31-12-56

....

"ARTICULO 35º.- El personal administrativo y técnico, obrero, "de maestranza, de servicio ó de cualquier otra clase, desig "nado en la Administración Nacional, deberá desempeñarse en "la función ó destino para cuyo fin ha sido prevista la par- "tida con cargo a la cual se atienda su remuneración, quedan "do prohibida toda afectación a otros servicios.

" Sin perjuicio de lo expuesto y a fin de lograr el mejor "aprovechamiento del personal al servicio de la Administra- "ción Pública Nacional, mediante su conveniente redistribu- "ción entre los diversos servicios, autorízase a los señores "Ministros Secretarios de Estado para que por vía de resolu- "ciones dispongan la adscripción de personal de sus dependen "cias, de manera tal que resulte factible cubrir las insufi- "ciencias de agentes que puedan existir en otras reparticio- "nes u organismos de la misma o distinta jurisdicción minis- "terial.

"ARTICULO 40º.- Las excepciones a lo dispuesto por los artícu "los 26 y 27,32,34, 35 (primera parte) y 36 a 38 del presen- "te decreto-ley, sólo podrán ser acordadas, frente a necesi- "dades ineludibles de los servicios debidamente documentadas, "por decreto del Poder Ejecutivo dictado con intervención del "Departamento de Hacienda.-

.....

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 145.-

CONTRATADOS - PROHIBICIONES

Decreto-ley Nº 23.573 de 31-12-56

.....

"ARTICULO 36º.- No podrá disponerse en la Administración Nacional la contratación de agentes, cuando los mismos sean destinados a cumplir funciones o a realizar tareas comunes y permanentes que deban atenderse con cargos estables de presupuesto.

" Los contratos actualmente vigentes del tipo a que alude el presente artículo, no serán renovados a su vencimiento, debiendo por lo tanto los distintos Ministerios y Reparticiones proceder a la regularización de tales situaciones en concordancia con lo establecido en esta disposición.

"ARTICULO 39º.- De las normas sobre economías y contención de los gastos públicos que prevé el presente decreto-ley, no serán aplicables a los Planes Analíticos de Obras y Adquisiciones del Estado los artículos siguientes: 26 a 32, 36 y 37.

"ARTICULO 40º.- Las excepciones a lo dispuesto por los artículos 26 y 27,32,34,35 (primera parte) y 36 a 38 del presente decreto-ley, sólo podrán ser acordadas, frente a necesidades ineludibles de los servicios debidamente documentadas, por decreto del Poder Ejecutivo dictado con intervención del Departamento de Hacienda.-

.....

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 146.-

COMISIONES AL EXTERIOR - MISIONES AL EXTERIOR - TRASLADOS - NOMBRAMIENTOS

Decreto-ley Nº 23.573 de 31-12-56

.....

"ARTICULO 37º.- El envío de comisiones o misiones al exterior, "como asimismo los traslados y designaciones de personal de "cualquier naturaleza para prestar servicios fuera del país -y "en tanto estos últimos no responden a movimientos propios del "servicio exterior de la Nación-, deberán ser dispuestos previa "conformidad otorgada en Acuerdo de Gabinete.

"ARTICULO 39º.- De las normas sobre economías y contención de "los gastos públicos que prevé el presente decreto-ley, no se- "rán aplicables a los Planes Analíticos de Obras y Adquisicio- "nes del Estado los artículos siguientes: 26 a 32,36 y 37.

"ARTICULO 40º.- Las excepciones a lo dispuesto por los artícu- "los 26 y 27, 32, 34, 35 (primera parte) y 36 a 38 del presen- "te decreto-ley, sólo podrán ser acordadas, frente a necesida- "des ineludibles de los servicios debidamente documentadas,por "decreto del Poder Ejecutivo dictado con intervención del Depar "tamento de Hacienda.-

.....

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 147.-

AUTOMOTORES - COMPRA-VENTA - PROHIBICIONES

Decreto-Ley Nº 23.573 de 31-12-56

.....

"ARTICULO 38º.- Prohíbese la adquisición de automóviles ya "sea para asignarlos a funcionarios o a servicios generales "de los Ministerios u organismos del Estado. Sólo podrá auto "rizarse la venta de automóviles en desuso o en deficientes "condiciones de funcionamiento, para adquirir unidades nue- "vas en su reemplazo, cuando tal cambio resulte ventajoso y "sin que en ningún caso la operación signifique invertir un "importe mayor que el obtenido con la enajenación.
"ARTICULO 40º.- Las excepciones a lo dispuesto por los artícu "los 26 y 27,32,34,35 (primera parte) y 36 a 38 del presente "decreto-ley, sólo podrán ser acordadas, frente a necesidades "ineludibles de los servicios debidamente documentadas, por de "creto del Poder Ejecutivo dictado con intervención del Depar "tamento de Hacienda.-

.....

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 148.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - COMPRA-VENTA

Buenos Aires, 11 de febrero de 1957

Visto lo dispuesto por el artículo 58º de la Ley de Contabilidad, y

ATENTO:

Que es necesario dar normas provisorias para determinar jurisdiccionalmente las autoridades competentes para autorizar contrataciones y para aprobar las que no excedan de cien mil pesos moneda nacional, hasta tanto se dicten las respectivas reglamentaciones que determina el artículo 58º citado;

Que para salvar tal situación no habría inconvenientes en considerar prorrogadas provisoriamente las respectivas reglamentaciones jurisdiccionales del artículo 48º de la Ley Nº 12.961;

Por todo ello y atento a las facultades generales que le otorga la Ley de Contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Hasta tanto el Poder Ejecutivo dicte las reglamentaciones a que se refiere el artículo 58º de la Ley de Contabilidad, considéranse en vigencia las dictadas oportunamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 48º de la Ley 12.961, en la parte que sea aplicable.

ARTICULO 2º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y cumplido archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rafael López Segura - José M.Fernández Fariña - Eusebio E. Villar - Antonio M.Pérez Arango - Juan Carlos Pastene.-

RESOLUCION Nº 59.-

Boletín nº 149.-

PASAJES OFICIALES

Buenos Aires, noviembre 6 de 1946.-

Habiéndose advertido la frecuencia con que diversas dependencias del Ministerio otorgan pasajes oficiales a su personal, por vía aérea, sin justificar en cada caso la razón o motivo que haya exigido la utilización de ese medio de transporte:

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º.- En lo sucesivo, todas las dependencias de este Ministerio que se hallen expresamente facultadas a extender pasajes oficiales, sólo emitirán las órdenes correspondientes a empresas de transporte aéreo cuando razones muy fundadas así lo exijan, debiendo en el expediente respectivo exponer, circunstanciadamente, los motivos que hubieren mediado para la utilización de esa vía de transporte.

2º.- Tómese nota en la Dirección de Administración y comuníquese a quienes corresponda.-

RESOLUCION Nº 541/46.-

MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín nº 150.-

PERSONAL - RENUNCIA - EXONERACION - CESANTIA - LIQUIDACIONES DE HABERES.-

Buenos Aires, octubre 29 de 1946.-

Visto lo solicitado por la Dirección de Administración - del Ministerio de Hacienda y siendo conveniente autorizar con carácter general la liquidación y pago de haberes de los empleados que hubieren cesado en sus cargos durante el lapso - que medie entre la fecha del decreto y la de notificación al empleado,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Autorízase a las Direcciones de Administración o las dependencias que hagan sus veces, de los distintos Ministerios, Secretarías y Reparticiones autárquicas, para que, como norma de carácter general, liquiden y abonen los haberes de los empleados que hubieren cesado en sus cargos por haberse dado término a sus funciones, por aceptación de renuncia, jubilación, exoneración, cesantía o separación, durante el - lapso que medie entre la fecha de la disposición legal que - dió por finalizadas las tareas y la de notificación al empleado, siempre que el cargo se encontrare vacante y existiere - real prestación de servicios.

ARTICULO 2º.- Los Departamentos de Estado, Secretarías y Reparticiones autárquicas adoptarán las medidas pertinentes a objeto de que, con la mayor celeridad, se notifique al personal - comprendido en el artículo anterior el cese de sus funciones.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, a quienes corresponda y vuelva a la Dirección de Administración del Ministerio de Hacienda a sus efectos.-

DECRETO Nº 16.079/46.-

MINISTERIO DE [illegible]

DECRETO MINISTERIAL

LICENCIAS

Boletín nº 151.-

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1956.

Visto la gestión interpuesta por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, propiciando el otorgamiento de una licencia especial a favor del personal técnico y auxiliar de Radiología;

CONSIDERANDO:

Que tal petición se fundamenta en la circunstancia de que el personal que desempeña las funciones de referencia, se encuentra permanentemente expuesto a los riesgos consecuentes de su contacto con las radiaciones;

Que deben adoptarse las consiguientes medidas preventivas, para lo cual corresponde crear la obligatoriedad de que dicho personal goce de licencias periodicas por un término total no menor a los treintas (30) días anuales;

Que lo solicitado se encuentra plenamente justificado para disponer la pertinente excepción al cumplimiento de las normas contenidas en el Decreto nº 12.720/53, que establece el régimen de licencias para el personal civil de la Nación;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Establécese que los profesionales médicos radiólogos y auxiliares de Radiología, pertenecientes a la Administración Nacional, gozarán de treinta (30) días laborables de licencia por año calendario, obligatoria y no acumulables, fraccionada en períodos semestrales de quince (15) días cada uno, cualquiera fuera la antiguedad del agente.

ARTICULO 2º.- Las licencias previstas en el artículo anterior deberán ser usufructuadas obligatoriamente durante los períodos prefijados, mediando entre ambos un lapso no inferior a los dos (2) meses.

ARTICULO 3º.- Se harán pasibles de una suspensión de diez (10) días, sin goce de haberes, aquellos agentes que duran-

te la licencia prevista, actúen en el orden privado en tareas iguales a las determinadas precedentemente, motivando su reincidencia mayores sanciones, que pueden llegar hasta la cesantía.

ARTICULO 4°.- Determinase que el personal de referencia queda excluido de la utilización de las licencias previstas en el artículo 4° del Decreto n° 12.720/53, como consecuencia de la aplicación del regimen dispuesto en el presente decreto.

ARTICULO 5°.- El presente decreto será refrendado por los Secretarios de Estado en los Departamentos de Asistencia Social y Salud Pública, Hacienda e Interior.

ARTICULO 6°.- Comuniquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletin Oficial y archívese.-

DECRETO N° 21.158.-

ARAMBURU - F.Martinez
E.A.Blanco-L.Landaburu

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín nº 152.-

BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD

Expediente nº 7.009 - 1949.-

///mo. Señor Ministro de Hacienda:

De la certificación expedido por la Sección Registros del Departamento al digno cargo de V.E. se establece que al Oficial 3º don Luis Ercone se le suspendió el pago de la bonificación por antigüedad en virtud de que entre los servicios denunciados por el causante figuran los prestados en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias.

Esta Contaduría General debe informar que los servicios prestados en esa Institución antes que los Ferrocarriles ingresaran al patrimonio del Estado, son de carácter particular en lo cual ha coincidido pronunciamientos del Señor Procurador del Tesoro y Fallos de la Justicia Federal.

Además la resolución de fecha 14 de marzo ppdo. reglamentaria del decreto nº 19.203/48, que fija el régimen de bonificaciones para el personal de ese Departamento en su art. 2º, apartados d) y g) establece que no serán computados los servicios prestados en empresas privadas, con anterioridad a la fecha en que las mismas hubieran pasado a formar parte del patrimonio nacional ni los servicios prestados en Empresas de Capital Mixto.

Aparte de ello esta Repartición ha tenido oportunidad de expedirse en el expediente nº 37.345/48 y agregados (caso José A. Cual), elevado al Departamento a vuestro digno cargo con fecha 15 de junio del corriente sobre la improcedencia del reconocimiento de servicios prestados en el orden privado, a los efectos del cómputo de la antigüedad para el pago de las bonificaciones, remitiéndose en este caso a las consideraciones allí expuestas.

Con lo expuesto, tengo el honor de elevar a V. E. las - presentes actuaciones.-

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, 22 de junio de 1949.-

Fdo. OTTO D. RASMUSSEN

Presidente

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletin nº 153.-

ADSCRIPCIONES - LEY DE CONTABILIDAD - SERVICIOS ENTRE REPARTICIONES

Expediente nº 121.999/56.-

///nos Aires, 24 de octubre de 1956.-

Vuelva al Banco Hipotecario Nacional para manifestarle, con referencia a la consulta que se formula a fs. 120, acerca de quien debe abonar el sueldo del personal que se desempeña adscripto a otras reparticiones, lo siguiente:

a) En principio, esta Repartición considera que la situación está reglada por la primera parte del artículo 20 del decreto ley nº 7.104/55, en cuanto se refiere a la afectación del personal a otros servicios distintos "á la función o destino para cuyo fin ha sido prevista la partida con cargo a la cual se atienda su remuneración".

Conforme al texto, el sueldo del empleado en las condiciones referidas en la consulta de que se trata, debe ser abonado por el Organismo en el que ha sido designado, con prescindencia de la situación de revista transitoria, motivada por la adscripción.

b) No se trata, en el particular de la situación a que se refiere el artículo 39 de la ley 12.961, puesto que los servicios que está disposición legal regla, son de índole distinta a los de que se trata en este expediente.-

Sirva la presente de atenta nota de remisión.

Fdo. Rodolfo J. Tarelli
Presidente
de la Contaduría General
de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín nº 154.-

BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD

Expediente nº 7.009 / 49.-

Señor Ministro:

A mi criterio no corresponde computar a los efectos de la liquidación de la bonificación por antigüedad los servicios prestados por el recurrente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias.

El decreto nº 19.203/48 establece en su art. 3º que a los efectos del adicional, se considerará como antigüedad el total de años de servicios prestados por los agentes en la administración pública nacional.

Los empleados de la Caja Ferroviaria, antes de la creación del Instituto Nacional de Previsión Social, no podían ser considerados empleados de la Nación, teniendo en cuenta la autonomía con que contaba el organismo, el origen de los nombramientos y remoción del personal en los cuales no intervenía para nada el Poder Ejecutivo, el que tampoco en el manejo de la Caja y de sus fondos, salvo el explicable control ejercido en la misma por la Contaduría General de la Nación.

Como los servicios que se pretenden hacer valer son anteriores a la nacionalización de las empresas ferroviarias y creación del Instituto de Previsión Social que incorporó a la Caja de la ley nº 10.650 como Seccional, soy de opinión que no debe accederse a lo solicitado.-

Buenos Aires, octubre 21 de 1949.-

Fdo. B. Velar de Irigoyen.-

Boletín nº 155.

BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD - DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

Buenos Aires, 2 de febrero 1956.-

VISTO el Decreto nº 34.612 de fecha 6 de noviembre de 1948 por el que se estableció un escalafón para el personal de la ex-Dirección Nacional de Investigaciones, Estadística y Censos, actual Dirección Nacional del Servicio Estadístico, y

CONSIDERANDO:

Que dicho escalafón resulta actualmente inoperante en su aplicación práctica, en razón de que las asignaciones que el mismo establece han sido superadas en el transcurso del tiempo, tanto por la elevación gradual de las asignaciones mínimas que rigen para todos los agentes de la Administración Pública Nacional, cuanto por las diversas promociones fuera del escalafón acordadas al personal que revista en la Dirección Nacional del Servicio Estadístico, circunstancias esas que justifican la derogación del escalafón aludido;

Que por Decreto nº 19.203 de fecha 26 de junio de 1948, se fijó el régimen de bonificaciones y calificaciones (por antigüedad) para el personal del Ministerio de Hacienda de la Nación, bajo cuya dependencia presupuestaria funciona al presente el Servicio Estadístico Nacional en virtud de lo reglado por el Decreto nº 14.185 de fecha 25 de agosto de 1954, por cuya razón se estima procedente y equitativo hacer partícipes a los agentes de aquella Dirección Nacional, del beneficio instituído por el recordado Decreto nº 19.203/48;

Que el gasto que irrogue la liquidación y pago de la bonificación de que se trata, podrá ser adecuadamente atendido con los créditos específicos previsto a ese efecto por el Decreto nº 11.100/55 en el presupuesto de la Dirección Nacio-

nal del Servicio Estadístico (Anexo 10, Inciso 1º, Item 11, Concepto c), Partidas: 1/3, 11/3 y 12/3, Año 1955), prorrogado para el año en curso por el Decreto nº 7.104 de 28 de diciembre de 1955;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Derógase a partir del 1º de enero de 1956, el escalafón actualmente en vigencia por Decreto nº 34.612/48, para el personal de la Dirección Nacional del Servicio Estadístico.

ARTICULO 2º.- A partir de la misma fecha señalada en el art. 1º, incorpórase al personal de la Dirección Nacional del Servicio Estadístico al régimen de bonificaciones y calificaciones que el Decreto nº 19.203/48 estableció para los agentes del Ministerio de Hacienda de la Nación, bajo cuya dependencia presupuestaria funciona el mencionado Servicio Estadístico.

ARTICULO 3º.- A los fines de la incorporación al régimen instituído por el Decreto nº 19.203/48, el personal de la Dirección Nacional del Servicio Estadístico será considerado, por esta única vez, con calificación de "sobresaliente".

ARTICULO 4º.- Facúltase al Ministerio de Hacienda de la Nación para dictar las normas aclaratorias o complementarias que estime pertinentes para hacer efectiva la incorporación del personal de que se trata dentro del sistema de beneficio establecido por el Decreto nº 19.203/48, con arreglo al régimen que el mismo determina.

ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

DECRETO Nº 1.946 Fdo. ARAMBURU - Blanco

Boletín nº 156.-

LICENCIAS

Expediente nº 70.576/57.-

//—ñor Subsecretario:

Por las presentes actuaciones la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos somete a consideración de S.S. la concesión de "licencia gremial" con goce de subsidio profesional a los vareadores que se citan a fojas 1 y 11, que fueran elegidos para integrar la Comisión Directiva de la Sociedad Gremial de Vareadores.

A fin de ilustrar la consideración de la presente gestión corresponde señalar en primer término que, tal como lo reconoce la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos y lo sostiene el propio gremio, los vareadores que desenvuelven su actividad en los hipódromos no mantienen ninguna relación laboral con la repartición ni con el Estado, ya que se trata de profesionales al servicio directo de los ciudadores de caballos de carrera.

Con anterioridad a la disolución de la Asociación Civil Jockey Club, esta entidad había acordado a los vareadores, por Convenio suscripto ante el Ministerio de Trabajo y Previsión, un subsidio especial.- Luego de producida la nacionalización de los hipódromos, este Ministerio mantuvo tal beneficio y mejoró su monto por resolución ministerial nº 7.093/56, pero como acto unilateral, es decir, sin que mediara el refrendo de ningún convenio.- En este sentido, mediante resolución nº 7.006 de 14 de enero de 1957, este Departamento de Estado aclaró expresamente la inexistencia de convenciones de Trabajo con el personal y profesionales que se desempeñan en los hipódromos.

Ahora bien, en el caso de autos la Asesoría Gremial de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos propicia la resolución favorable del pedido formulado, a mérito de las

funciones que los causantes irán a cubrir en el organismo gremial respectivo y tomando en consideración para ello los términos del decreto-ley nº 9.270/56, relacionado con la constitución de Asociaciones Profesionales.

El art. 18º del citado decreto-ley, invocado por aquella Asesoría, expresa:

"Los empleadores deberán reservar el empleo y reincorporar oportunamente en las mismas condiciones a los empleados y obreros que, por razón de ocupar cargos directivos y representativos en asociaciones profesionales de trabajadores o en organismos estatales que requieran representación gremial, dejarán de prestar servicios en sus tareas habituales, no pudiendo despedirlos a su reincorporación, por el término de un año, salvo justa causa legalmente reconocida. El tiempo durante el cual los empleados y obreros hubieran desempeñado funciones precedentemente aludidas, será considerado período de trabajo, a los efectos del cómputo de su antigüedad frente a los beneficios que por leyes, decretos, convenciones colectivas o acuerdos le hubieran correspondido en el caso de haber prestado servicios. El aporte y las retenciones jubilatorios correspondientes estarán a cargo de la entidad obligada, legal o convencionalmente, a abonar los jornales o sueldos".-

Frente al texto transcripto surge la evidencia de dos aspectos fundamentales que hacen al problema en estudio:

1º) Que las obligaciones fijadas rigen para los empleadores; en consecuencia y como ya se señalara al considerar la dependencia laboral de los vareadores, ello no obliga a este Ministerio, sino a los cuidadores de caballos que son los empresarios.

2º) Que la reserva del empleo al personal que ocupe cargos directivos, o de representación gremial, a que están obligados los empleadores no involucra el pago de los haberes respectivos.

De lo expuesto surge que es improcedente que el Ministerio acuerde licencia alguna a personas que no trabajan a su

servicio, y menos aún que este beneficio sea con percepción del subsidio profesional otorgado a los interesados a título gracioso, ya que ello vendría incluso a extralimitar las previsiones de la norma comentada.

Si en cambio se pretendiera, aunque forzadamente, incluir el caso en debate en las normas del decreto nº 12.720/53 -Régimen de Licencia para la Administración Nacional- resultaría:

1º) Que subsistirá la inhibición provocada por la ausencia de relación laboral entre los causantes y la Administración y el carácter de empleados privados de aquellos.

2º) Que la licencia para el desmepño de cargos de representación gremial y/o sindical contemplada para los agentes del Estado sólo se concede con goce de sueldo cuando el cargo a desempeñar no sea retribuido por la entidad gremial y/o sindical. De lo contrario la licencia es sin percepción de haberes (art. 29 del decreto nº 12.720/53, modificado por el decreto nº 17.609/56).

Los vareadores que solicitan licencia en estas actuaciones no pueden ser amparados en el primer supuesto ya que, según surge de lo informado por el propio organismo gremial a fojas 10/11, estos percibirán una retribución especial por el desempeño de sus funciones gremiales.

En mérito a los fundamentos que se dejan expuestos, esta Dirección General es de opinión que no procede hacer lugar a lo solicitado.

DCCION.GRAL. DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 6/II/957.-

MEMORANDUM Nº 229.-

Fdo. Angel BOTTERO TORRES
Director General
de Contabilidad y Administración

//—nos Aires, febrero 12 de 1957.-

De conformidad con lo manifestado por la Dirección General de Contabilidad y Administración, vuelva a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, haciéndole saber que no procede acordar a los recurrentes el beneficio solicitado.-

Fdo. César A. DEYMONNAZ
Subsecretario
de Hacienda de la Nación

BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD

Expediente nº 105.679/49.-

Señor Ministro de Agricultura Y Ganadería:

I.- Se me consulta sobre la situación que crea al personal de las ex-empresas ferroviarias de capital privado, el hecho de la adquisición de las mismas por el Estado, en lo que respecta a los derechos inherentes a la antigüedad en el empleo al ser incorporados a los cuadros de la Administración.

II.- El problema, en mi concepto, debe resolverse con carácter general, contemplando la situación de todos los que se han desempeñado en empresas privadas de servicios públicos nacionalizadas o sucesivamente en distintas reparticiones u organismos que integran la Administración Nacional.

La antigüedad, consecuencia natural de la prestación de servicios, ha sido erigida por leyes y reglamentos en un hecho jurídico con efectos relevantes, incorporados por el moderno derecho del trabajo, que han adquirido jerarquía constitucional en la reforma de 1949.

El factor antigüedad reviste singular gravitación en el aspecto económico o patrimonial de la relación jurídica de empleo privado y de empleo público, tanto en situación de actividad como de pasividad. Así, incide en la fijación del término de las licencias, en la determinación del monto del sueldo, en el régimen del crédito, en los beneficios jubilatorios, etc., etc.,.

El esquema que acabo de trazar patentiza la importancia del asunto y la absoluta necesidad que al resolver cuestiones de esa índole se adopte un criterio uniforme.

III.- Vacaciones. La antigüedad influye en la graduacion del termino de las licencias por descanso.

Esta clase de licencias se funda en "que es obligacion - del Poder Ejecutivo velar por los servidores del Estado perfeccionario del regimen de vacaciones y licencias en vigor" (decreto nº 26.942/47, considerando I).

Basta a mi juicio, el fundamento de esta clase de licencias y la circunstancia que el cambio de regimen, del empleo privado al empleo publico, se haya producido por causas extrañas a la propia voluntad del empleado, para que deba reconocerse esa antigüedad, proveniente de servicios prestados - en empresas de servicios públicos, posteriormente nacionalizadas.

Para ello sería necesario, sin embargo, modificar el decreto nº 26.942/47, por cuanto su art. 3º condiciona el término de las licencias por descanso, a la antigüedad del agente en el servicio civil de la Nación, concepto que excluye a los servicios prestados fuera del mismo.

Análogo criterio ha presidido al decreto nº 11.733/47 en el que se estableció "...que a los militares en situación de retiro que ocupen cargos civiles, deben computárseles los servicios prestados en el Ejército, en la Marina y en la Aeronáutica, a los fines de las licencias que les correspondan, debiéndose tener en cuenta exclusivamente el tiempo de los servicios prestados por año calendario".

IV.- Bonificaciones por antigüedad. El sueldo de los funcionarios y de los empleados públicos se halla integrado, de conformidad con los reglamentos en vigor, por dos partes: a) Una parte fija -sueldo básico- determinada según el grado dentro de la jerarquía o de la categoría del presupuesto ocupado por el funcionario; b) Una parte móvil; -adicional- graduable, de acuerdo a la antigüedad del funcionario en el servicio, y a su calificación.

Cuando el Estado nacionaliza un servicio público asumiendo la prestación de éste e incorporando a los cuadros de la Administración el personal afectado que dependía del concesionario o permisionario, pareciera razonable reconocer la antigüedad a los efectos del cómputo de las bonificaciones, para

colocarlo en un pie de igualdad con el resto del personal de la Administración, desde luego realizando las ponderaciones necesarias entre ambos escalafones, para que el propósito igualitario no se convierta en un privilegio en favor del personal que actuara en la esfera privada.

Advierto, sin embargo, que no es esa la solución que ha prevalecido en los reglamentos vigentes.

No median las mismas razones si se tratara de personal que ya hubiese obtenido indemnización por antigüedad, pensión, jubilación o retiro, porque entonces, la antigüedad habría proporcionado al empleado el beneficio que ella presupone, ya que se la computa a esos efectos.

Esto explica que en los reglamentos de bonificación de los Departamentos de Estado se establezca entre otras, la excepción puntualizada (art. 5° del Dto. 19.203/48, art. 3° del Dto. 32.908/48, art. 34 del Dto. 36.657/48, art. 6° del Dto. 13.540/49, art. 6° del Dto. 34.295/49, art. 5° del Dto. 5466/50, etc.).

Tratándose de personal que ha actuado sucesivamente en distintos Departamentos de Estado de la Administración centralizada o en la Administración institucional o territorialmente descentralizada, la solución debe ser la del reconocimiento de la integridad total en los servicios prestados al Estado con la excepción apuntada y la relativa a los cargos docentes y licencias sin goce de sueldo superiores a treinta días.

V.- Jubilación. En lo que atañe a este derecho, no existe actualmente dificultad alguna ya que el régimen de previsión en vigor (Dto. n° 9.316/46, ratificado por ley n° 12.921), admite la computación de los servicios prestados sucesiva o simultáneamente bajo el régimen de las distintas secciones o cajas de previsión.

Buenos Aires, mayo 15 de 1950.-

Fdo. Dr. PETRACCHI.-
Procurador del
Tesoro de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín nº 158.-

BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD

Expediente nº 111.736 - 1949 - Declaración jurada del Dr. J. C. M. Hiriart s/ servicios prestados como diputado nacional - se considera comprendido dentro de los beneficios de bonificación por antigüedad - Mº - de Hacienda.

Señor Ministro de Hacienda:

Se me consulta si a los efectos de la liquidación de la bonificación por antigüedad deben computarse los servicios prestados como legislador.

Sobre la naturaleza de la bonificación por antigüedad, y los servicios a computarse a ese efecto, tuve oportunidad de emitir opinión en el expediente nº 105.679/49 del Rgto. del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dictamen del que agrego copia.

En el presente caso no siendo óbice que los servicios - se hayan prestados en forma ininterrumpida o alternada (art. 5º del decreto nº 19.203/48) el único escollo que se opone al reconocimiento de esa antigüedad, es que no se trata de servicios prestados en la Administración Pública Nacional - sino en otro poder del Estado.

Sin embargo, en atención a los principios que han inspirado al decreto nº 34.295/49 que estableció el régimen de - bonificaciones por antigüedad para el personal del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial, no veo inconveniente, conforme lo aconsejado por la Contaduría General de la Nación,

que se modifique la reglamentación vigente a fin de hacer factible el cómputo de los servicios de la naturaleza del que motiva la consulta.

Buenos Aires, mayo 15 de 1950.-

Fdo. ENRIQUE C. PETRACCHI
Procurador del
Tesoro de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín nº 159.-

BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD

Proyecto Decreto nº 1.006-1951.
S/bonif. servicios en los tres Poderes. Ministerio de Hacienda.

Señor Ministro de Hacienda.

Con el objeto de dictar la norma reglamentaria en virtud de la cual proceda el reconocimiento -a los efectos de las bonificaciones por antigüedad- de todos los servicios prestados en las dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en la Municipalidad de la Capital Federal, así como en las Provincias, se somete a consideración de V. E. un proyecto en acuerdo general de Ministros al respecto.

En lo que atañe al establecimiento de esa antigüedad no solo no se violaría ninguna disposición legal para hacerlo, sino que la medida propiciada consulta las razones de equidad y justicia, al suprimir diferenciaciones originadas exclusivamente en la jurisdicción donde el servicio se hubiera prestado.

Empero, a fin de facilitar su exacta aplicación y a raiz de la sugestión formulada por la Dirección de Personal en el párrafo final de su informe, correspondería que el art. 1º se modificara en dos sentidos: a) usando la expresión personal del Estado, en lugar de personal de la Administración Nacional, para comprender tanto al que presta servicios en las reparticiones dependientes del Poder Ejecutivo, como en el Poder Legislativo o Poder Judicial; b) si se quiere que en el cómputo se incluyan los servicios prestados en las provincias dentro del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, también debrá efectuarse la aclaración pertinente, pues en la forma en que se encuentra redactado, podría

interpretarse que solamente toma en cuenta los servicios prestados en la Administración Pública Provincial.

Buenos Aires, mayo 13 de 1952.-

Fdo. ENRIQUE C. PETRACCHI
Procurador del
Tesoro de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín nº 160.-

ADSCRIPCIONES - SERVICIOS ENTRE REPARTICIONES - LEY DE CONTABILIDAD

M E M O R A N D U M

M. Nº 236.-

Ref: reintegro por servicios prestados en "comisión" o en calidad de adscriptos - Mem. nº 040/18 B.C.R.A.-

SEÑOR MINISTRO:

Se consulta a esta Dirección General con relación a la gestión interpuesta por el Banco Central de la República Argentina, dirigida a obtener un pronunciamiento de este Ministerio en lo que hace a la procedencia o no del reintegro a las respectivas reparticiones, de los haberes correspondientes a los agentes de su dependencia que se desempeñan en comisión o adscriptos, por parte de aquellas otras en las cuales se cumplan tales prestaciones.

- I -

Sobre el particular corresponde señalar, en principio, que no es de aplicación al caso la norma dada por el artículo 39º de la derogada ley de contabilidad nº 12.961 y reproducida ahora en el artículo 29 de su nuevo texto, el decreto ley nº 23.354/46. En efecto tal como lo tiene manifestado reiteradamente la Contaduría General de la Nación, dicha disposición está referida a contrataciones y servicios de suministros y trabajos entre las entidades centralizadas o descen -

tralizadas, pero no es de aplicación en los casos de afectación de personal de una jurisdicción a otra para cumplir transitoriamente una función o comisión de servicio. Distinto también es el caso de aquel personal perteneciente a organismos de seguridad o de servicios públicos que a requerimiento de la entidad interesada es afectado a la misma para realizar una tarea o cumplir una función inherente a su actividad. Estos servicios adquieren entonces las características de una contratación y están regidos por el artículo comentado de la Ley de Contabilidad.

- II -

La "adscripciones y comisiones" comunes de personal deben ser analizadas, en cambio, a la luz de las disposiciones contenidas por el artículo 20° del decreto-ley n° 7.104/55 y reiteradas por el artículo 35° del decreto-ley n° 23.573/56, cuando expresan:

"El personal administrativo y técnico, obrero, de maes -
"tranza, de servicio o de cualquier otra clase, designado
"en la Administración Nacional, deberá desempeñarse en la
"función o destino para cuyo fin ha sido prevista la par-
"tida con cargo de la cual se atienda su remuneración, que
"dando prohibida toda afectación a otros servicios.-
"Sin perjuicio de lo expuesto y a fin de lograr el mejor
"aprovechamiento del personal al servicio de la Adminis-
"tracion Publica Nacional, mediante su conveniente redis-
"tribucion entre los diversos servicios, autorizase a los
"señores Ministros Secretarios de Estado para que por via
"de resoluciones dispongan la adscripción de personal de
"sus dependencias, de tal manera que resulte factible cu-
"brir las insuficiencias de agentes que puedan existir en
"otras reparticiones u organismos de la misma o distinta
"jurisdiccion ministerial".-

Como se observa, el acto de gobierno citado, que fija las normas de economia a que habra de ajustarse la ejecución del presupuesto, prohibe en principio afectar personal a un destino distinto a aquel donde ha sido nombrado, pero al mismo ——

tiempo y con el propósito de reducir los gastos públicos, autoriza la adscripción de agentes entre distintas jurisdicciones, tendientes a cubrir insuficiencias de los planteles respectivos con las disponibilidades de otros, y evitar asi nuevos nombramientos.

Es evidente que las adscripciones de personal han sido autorizadas como una solución de emergencia, a arbitrar en salvaguarda de los servicios de aquellas reparticiones cuyas escasas posibilidades presupuestarias y frente a las actuales circunstancias economicas, se ven impedidas de aumentar sus gastos. Siendo ello asi, va de suyo entonces que resultaria de todo punto de vista improcedente pretender el reintegro por parte de los organismos de que se trata, de los haberes correspondientes al personal que ha sido afectado en la comentada situacion de revista.-

Tal es, por otra parte, el punto de vista sostenido por la Contaduría General de la Nación al ser consultada sobre el particular (ver expte. n° 121.999/56 - Providencia numero 17 del 24/10/56).-

A lo expresado cabe tambien agregar que si se aplicara el aludido régimen de reintegros, las adscripciones equivaldrian a una virtual contratación de servicios, y atento la naturaleza comun de esas prestaciones las mismas resultarian violatorias de la norma contenida por el art. 36°.del decreto-ley n° 23.573/56.-

En mérito a los fundamentos expuestos y teniendo en cuenta ademas las derivaciones de orden presupuestario que provocaria el procedimiento criticado, esta Direccion General es de opinion que corresponde declarar la improcedencia de tales reintegros.-

Buenos Aires, febrero 12 de 1957.-

Fdo. Angel BOTTERO TORRES
Director General
de Contabilidad y Administracion

Buenos Aires, febrero 20 de 1957.-

NOTA Nº 33.-

Señor Presidente del Banco Central
de la República Argentina
Doctor Eduardo Laurencena
S / D.

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, con referencia al memorandum de esa Institución nº 040/18, del 30 de enero último -expediente nº 70.855/57- por el cual se solicita pronunciamiento de este Ministerio en lo que hace a la procedencia o no del reintegro a las reparticiones respectivas, de los haberes correspondientes a los agentes de su dependencia que se desempeñan "en comisión" o "adscriptos", por parte de aquellos otros en los cuales se cumplen tales prestaciones.

Al respecto, remito adjunto copia del memorandum nº 236/57 producido por la Dirección General de Contabilidad y Administración, de cuyas conclusiones, compartidas en todos sus términos por este Ministerio, resulta la improcedencia de los reintegros en cuestión.

Saludo al señor Presidente con mi consideración más distinguida.-

Fdo. ROBERTO VERRIER
Ministro de Hacienda
de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín nº 161.

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - LEY DE CONTABILIDAD
REINTEGROS - INGRESOS

Buenos Aires, 20 de febrero de 1957.-

Visto el artículo 2º de la Ley de Contabilidad que dispone que los recursos y erogaciones figurarán separadamente y por su importe íntegro, no debiendo en caso alguno compensarse entre sí, sin perjuicio de las afectaciones especiales legalmente establecidas a los fines ejecutivos o que resulten del reintegro de importes indebidamente percibidos, y

CONSIDERANDO:

Que en la última parte del citado artículo se establecen dos excepciones: la primera, para posibilitar la liquidación y pago en forma directa de aquellas sumas que, denunciadas en las respectivas recaudaciones, estén legalmente afectadas, como en el caso de la comisión por la venta de valores fiscales, sobretasas a favor de las compañías de transporte aéreo, etc., y, la segunda, autorizando el reintegro en igual forma de los importes que hubiesen sido indebidamente percibidos (impuestos, tasas, multas, derechos, etc.);

Que no obstante el procedimiento fijado, en algunos casos, en cuanto a la última de las situaciones señaladas, se tropieza con el inconveniente de la inexistencia de disponibilidad en los rubros respectivos, por lo que resulta necesario dictar normas al respecto;

Que igualmente, debe indicarse el trámite a seguir por aquellos organismos que, no estando legalmente autorizados para efectuar compensaciones, se encuentren en la situación de hacer frente a reintegros por sumas indebidamente percibidas;

Por todo ello y atento a la facultad acordada por el ar

tículo 84, inciso c) de la Ley de Contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- En los casos en que haya sido resuelta, por autoridad competente, la devolucion de importes indebidamente percibidos y no sea posible hacerla efectiva por no contarse con la disponibilidad de fondos necesaria o con la autorizacion legal para compensar, el correspondiente reintegro debera disponerse mediante decreto del Poder Ejecutivo, con la imputacion que señale la Contaduria General de la Nación en la oportunidad de certificar el ingreso.

ARTICULO 2°.- Dese al Digesto Administrativo, comuniquese y, cumplido archivese.-

DAMIAN FIGUEROA

Rodolfo J. Tarelli - Jose M.Fernandez Fariña - Wilfredo Dedeu - Antonio M. Perez Arango - Juan Carlos Pastene

RESOLUCION Nº 111/57.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletin nº 162.-

RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - LEY DE CONTABILIDAD - PAGOS - TESORERIAS

Buenos Aires, 19 de febrero de 1957.-

Visto lo dispuesto por el articulo 49º de la Ley de Contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que hasta tanto el Poder Ejecutivo dicte las respectivas reglamentaciones que establece el citado articulo, es necesarie dar normas destinadas a fijar en forma provisoria el monto hasta el cual podran efectuar pagos directos las tesorerias de las distintas jurisdicciones;

Que para obviar la situación expuesta no habria inconveniente en considerar prorrogadas provisionalmente las respectivas reglamentaciones dictadas en virtud del articulo 40º - de la Ley nº 12.961;

Por todo ello y atento las facultades generales que le - otorga le Ley de Contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Hasta tanto el Poder Ejecutive dicte las respectivas reglamentaciones que determina el artículo 49º de la - Ley de Contabilidad, considéranse prorrogadas provisionalmente, en la parte que sea aplicable, las dictadas en su oportunidad de conformidad con le establecido por el articulo 40º de la Ley nº 12.961.

ARTICULO 2º.- Dese al Digesto Administrative; comuniquese a los distintos responsables y cumplido, archivese.-

RESOLUCION nº 101/57

DAMIAN FIGUEROA
Rodolfo J.Tarelli-José M.Fernandez
Fariña-Dodeu-Perez Aranda-Pastore

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletin nº 163.-

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - LEY DE CONTABILIDAD - PRESUPUESTO - EJERCICIO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - COMPROMISOS - CREDITOS - ORDENES DE DISPOSICION - FONDOS - CANCELACION - OBRAS PUBLICAS - RESIDUOS PASIVOS - ORDENES DE PAGO

Buenos Aires, 18 de febrero de 1957.-

Visto lo dispuesto por la Ley de Contabilidad con respecto al cierre del ejercicio de 1956, y

CONSIDERANDO:

Que para el caso, dicha ley ha prescripto normas especiales cuyo alcance y precisión es necesario determinar, a fin de que los respectivos servicios administrativos adopten en tiempo las medidas pertinentes para cumplimentarlas en forma adecuada;

Que con respecto a los créditos incluidos dentro del plan de trabajos públicos e inversiones del Estado, resulta conveniente mantener el regimen seguido en ejercicios anteriores, dejando para la competente reglamentación que se dicte el procedimiento a seguir en el futuro;

Por ello, en uso de las facultades que le acuerda el art. 84, inciso o), de la Ley de Contabilidad y de acuerdo a lo dispuesto por el art. 3º del decreto-ley nº 23.354 del 31/12/56,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Los servicios administrativos competentes en cada una de las jurisdicciones de la administración nacional determinarán los compromisos contraídos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1956 con cargo al Presupuesto General y Cuentas Especiales que, hasta el 28 de febrero en curso no hubieran sido incluidos en orden de pago.

ARTICULO 2º.- La determinación de los compromisos contraidos se hará conforme a las normas que determina el art. 25 de la Ley de Contabilidad.

ARTICULO 3º.- Para atender el pago, los compromisos resultantes de acuerdo a los articulos que anteceden y una vez intervenidos de conformidad por los Contadores Fiscales del Tribunal de Cuentas, seran incluidos en ordenes de disposición ajustadas a las prescripciones del art. 30º de la ley mencionada y en la cual se consignará por anexo, el importe que se imputará a cada partida principal de conformidad con la nomenclatura, ordenamiento y financiación segun corresponda a los creditos del Presupuesto General y Cuentas Especiales, para 1956.

ARTICULO 4º.- En las entidades descentralizadas con individualidad financiera y para los servicios de cuentas especiales con administración directa, las ordenes de disposicion, de caracter interno, seran dictadas por conducto de las respectivas autoridades competentes en cada entidad o Secretaria de Estado, respectivamente, ajustandose a las prescripciones del articulo que antecede.

ARTICULO 5º.- Los servicios administrativos nombrados determinaran, separadamente, los compromisos contraidos en cada uno de los ejercicios anteriores al de 1956 que, al 28 de febrero proximo, no hubieran sido incluidos en orden de pago, aplicandose para ello las normas de los arts. 2º y 3º, excepto las imputaciones,que se haran con afectacion al art. 3º de la ley nº 13.654 y conforme al procedimiento que la misma determina, para los compromisos correspondientes a los años 1954 y anteriores. Los que resultan del año 1955, no deberan ser incluidos en orden de disposición hasta tanto se cuente con el credito legal correspondiente.

ARTICULO 6º.- Las ordenes de disposicion, salvo las referidas en el art. 4º, que se dicten como consecuencia de las normas que anteceden, deberan tener entrada en la Contaduria General de la Nación antes del 31 de marzo del corriente año, previamente intervenidas por el Tribunal de Cuentas

ARTICULO 7°.- Las ordenes de pago libradas hasta el 28 de febrero en curso, mantendran su validez por el termino que fija la ley n° 12.961. En cuanto a las ordenes de entrega y a las ordenes de pago integrales anticipadas que no se hubieran cumplido a la fecha indicada, quedaran automaticamente canceladas, debiendo considerarse las obligaciones que queden sin abonar, como compromisos contraidos y no incluidos en orden de pago, aplicandose para su tratamiento ulterior el regimen prescripto en la presente resolución.

ARTICULO 8°.- Los compromisos contraidos, segun las normas que anteceden, constituiran residuos pasivos de cada uno de los ejercicios indicados, cuya cancelacion, una vez incluidos en ordenes de disposicion, se operara mediante los respectivos libramientos y en las condiciones señaladas en los articulos 33°, 34° y concordantes de la ley de contabilidad.

ARTICULO 9°.- Dejase establecido que no son de aplicacion, respecto del ejercicio de 1956, las disposiciones de los articulos 27° y 29° de la ley 12.961. En consecuencia, la cancelación de los compromisos contraidos se hara con los fondos arbitrados por las ordenes de entrega o de pago integrales anticipadas, libradas al 28 del mes en curso, y siempre que el suministro o servicio se hubiera cumplido y liquidado a esta fecha.

ARTICULO 10°.- Los pedidos numericos de fondo que formulen los servicios administrativos con cargo a las ordenes de entrega y la documentacion necesarias para la cancelación de obligaciones emergentes de las ordenes de pago integrales antipadas, deberan remitirse a la Tesoreria General de la Nación hasta el 28 de febrero en curso, debidamente conformadas por los contadores fiscales del Tribunal de Cuentas de la Nación.

ARTICULO 11°.- Los pedidos numericos de fondos no podran conformarse sin la previa verificación de que la erogación respectiva haya sido incluida en orden de pago interna.

ARTICULO 12°.- A efectos de la cancelacion de los saldos sobrantes de ordenes de entrega u ordenes de pago integrales anticipadas, los servicios administrativos deberan informar a la Contaduria General de la Nación, con intervencion de los contadores

fiscales del Tribunal de Cuentas y antes del 31 de marzo - proximo, las partidas a que corresponda acreditar dichos sobrantes.

ARTICULO 13°.- Quedan excluidas de las normas de la presente resolucion, unicamente las empresas del Estado incorporadas al regimen de la ley nº 13.653 (t.o.)

ARTICULO 14°.- Comuniquese, dese al Digesto Administrativo y archivese en Secretaria.-

RESOLUCION Nº 99/56

DAMIAN FIGUEROA

Rodolfo J. Tarelli - Jose M. Fernandez Fariña

Wilfredo P. Dedeu - Antonio M. Perez Arango

Juan Carlos Pastene

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín nº 164.-

BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD

Buenos Aires, mayo 17 de 1956.-

Visto el pedido interpuesto por el Oficial Mayor de la Contaduría General de la Nación, don Jorge Alberto Berisso, en el que solicita se le computen nuevamente los servicios prestados como preceptor del Ministerio de Educación a los efectos de la liquidación del adicional por antigüedad que rige para este Departamento según decreto nº 19.203/48, y

CONSIDERANDO:

Que al entrar en vigencia el citado decreto, al causante le fueron computados para acrecentar la bonificación por antigüedad a liquidársele en este Departamento, los servicios que tenía prestados como preceptor, desde el 1º de marzo de 1937 al 31 de diciembre del mismo año y desde el 1º de abril de 1938 hasta el mes de noviembre de 1950, teniendo en cuenta que los beneficios que establecía la Ley nº 13.343 para el personal docente del Ministerio de Educación, no alcanzaba a los preceptores o celadores, ya que los mismos se los consideraba docentes al sólo efecto de la aplicación de las disposiciones sobre incompatibilidades;

Que la Ley nº 14.017 modificatoria del artículo 8º de la nº 13.343, prescribe; que en los casos que se prestare servicios administrativos y docentes y en más de uno de ellos rigieran sistemas de bonificaciones por antigüedad, éste deberá computarse independientemente en cada uno de ellos, para percibir cada bonificación;

Que con motivo de lo establecido en la Ley nº 14.017, este Departamento a fin de reajustar el régimen de bonificaciones por antigüedad, dictó la resolución nº 2.112 de noviembre 15 de 1950, disponiendo que no se podía acrecentar la antigüedad bonificable por servicios prestados en el Ministerio

de Educación, con excepción de los casos en que se hubiere producido una cesación total de funciones educacionales o las consideradas como tales con anterioridad al ingreso a este Ministerio, la que dejaría de computarse automáticamente en caso de reingreso;

Que con posterioridad a los actos de gobierno comentados, por decreto nº 7.060 del 1º de octubre de 1952, se extendió el régimen de bonificaciones por antigüedad que rige en el Ministerio de Educación, al personal que aún no gozaba de ese beneficio, comprendiendo a los preceptores y auxiliares de disciplina;

Que ante lo prescripto en la aludida resolución nº 2.112/50 y el alcance del decreto nº 7.060/52 que no tiene vigencia en este Ministerio, se suspendió la liquidación reclamada en autos hasta tanto se determinara de manera precisa la situación del causante frente al decreto nº 19.203/48;

Que en mérito a lo expuesto y no obstante lo dictaminado a fs. 16 vta., 19 y 22, por el señor Procurador del Tesoro de la Nación y lo manifestado por la Contaduría General de la Nación a fs. 26, este Departamento considera que corresponde que se le reconozca únicamente al agente Berisso, para la percepción del adicional cuestionado, al lapso comprendido entre el 1º de diciembre de 1950 al 30 de septiembre de 1952, fechas entre las cuales los servicios prestados por el causante como preceptor, no se encontraban comprendidos en ningún beneficio como el comentado;

Por ello y a fin de evitar la percepción de un mismo beneficio por distintas partes,

EL MINISTRO DE HACIENDA

R e s u e l v e;

1º).- Reconócese a favor del Oficial Mayor de la Contaduría General de la Nación, don JORGE ALBERTO BERISSO, con inclusión de los servicios prestados como preceptor del Ministerio de Educación las bonificaciones por antigüedad //////

que conforme el decreto nº 19.203 del 26 de junio de 1948, dejó de percibir en el lapso comprendido entre el 1º de diciembre de 1950 y el 30 de septiembre de 1952.

2º).- A partir del 1º de octubre de 1952, se le computará al causante a los efectos de la aplicación del decreto nº 19.203/48 la antigüedad registrada en este Ministerio, debiendo regularizar desde esa fecha el beneficio que por el concepto citado le correspondía de acuerdo al sector en que se hallaba ubicado y a la calificación obtenida en dicha oportunidad.

3º.- Tómese nota, comuníquese a quienes corresponda y dése al archivo.

RESOLUCION Nº 4.058.-

Fdo. E. A. BLANCO.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín nº 165.-

BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD - LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS

Buenos Aires, diciembre 27 de 1950.-

Vistas las presentes actuaciones iniciadas por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, solicitando se incluya al personal de dicha dependencia en el régimen de bonificaciones por antigüedad establecido por decreto nº 19.203/48; y

CONSIDERANDO:

Que como consecuencia inmediata de las disposiciones contenidas en la ley nº 13.652, por la que se determinó que la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos pasaba a integrar la jurisdicción del Ministerio de Hacienda, se dictó el decreto nº 34.186 de 31 de Diciembre de 1949, que fijó el 1º de Enero de 1950 como fecha de transferencia de aquella repartición a la nombrada Secretaría de Estado;

Que, en este orden de cosas, corresponde adoptar las medidas necesarias a efectos de que el régimen general de bonificaciones por antigüedad establecido para el Ministerio de Hacienda, encuentre ámbito regular de aplicación en la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, subordinando las liquidaciones respectivas a los sectores y escalas que informan al recordado acto de gobierno, cuyos términos, por razones de ordenamiento administrativo, deben comenzar a regir desde el 1º de Enero de 1950, tal como lo señalara el citado decreto nº 34.186/949;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- A partir del 1º de Enero de 1950, declárase comprendido al personal de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos en el régimen de bonificaciones por antigüedad para -

el Ministerio de Hacienda de la Nación por decreto nº 19203, de 26 de Junio de 1948.

ARTICULO 2º.- De acuerdo con lo determinado en el artículo anterior, la repartición nombrada practicará los reajustes pertinentes sobre los adicionales por antigüedad que su personal venía percibiendo conforme al régimen del decreto nº 30.757/48; bien entendido que a los agentes que por imperio de tal circunstancia se les debiese liquidar una bonificación por antigüedad inferior, no se les efectuará disminución sobre tal concepto, sino que permanecerán estacionados en su adicional mayor, hasta ajustar el mismo al que le corresponde en orden de los nuevos sectores y escalas del decreto nº 19.203, de acuerdo con su sueldo, antigüedad y calificación.

ARTICULO 3º.- Los adicionales por antigüedad a que se refiere el presente decreto serán liquidados considerando como "sobresalientes", por esta única vez, a todo el personal de la repartición de que se trata.

ARTICULO 4º.- Derógase el decreto nº 40.137 de 31 de Diciembre de 1948 y toda otra disposición que se oponga al presente.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y vuelva a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos para su conocimiento y demás efectos.-

DECRETO Nº 2.286.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín nº 166.-

BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD.-

Criterio sustentado por la Procuración del Tesoro y por este Departamento ante diversas solicitudes sobre el particular:

Expte. nº 7.009/49. Ercone Luis. Solicita liquidación suplemento de antigüedad.

Señor Ministro:
A mi criterio no corresponde computar a los efectos de la liquidación de la bonificación por antigüedad, los servicios prestados por el recurrente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias.
El decreto nº 19.203/48 establece en su art. 3º que a los efectos del adicional, se considerará como antigüedad el total de años de servicios prestados por los agentes en la Administración Pública Nacional.
Los empleados de la Caja Ferroviaria, antes de la creación del Instituto Nacional de Previsión Social, no podía ser considerados empleados de la Nación, teniendo en cuenta la autonomía con que contaba el organismo, el origen de los nombramientos y remoción del personal en los cuales no intervenía para nada el Poder Ejecutivo, el que tampoco intervenía en el manejo de la Caja y de sus fondos, salvo el explicable control ejercido en la misma por la Contaduría General de la Nación.
Como los servicios que se pretenden hacer valer son anteriores a la nacionalización de las empresas ferroviarias y creación del Instituto de Previsión Social que incorporó a la Caja de la Ley nº 10.650 como Seccional, soy de opinión que no debe accederse a lo solicitado.
Buenos Aires, año 1949. Fdo. B. Velar de Iriyogen.

Expte. nº 37.345/48. Gual José Antonio. Solicita se el reco-

nozca antigüedad en la Administración Pública por servicios prestados en el Ferrocarril Central Argentino.

Buenos Aires, 30 de junio de 1949.

Remítase al Ministerio de Educación, significándole que este Departamento, en virtud de las razones que expondrá más adelante, no comparte las opiniones, bien respetables por cierto, de la Subsecretaría de Cultura ni de la Confederación del Personal Civil de la Nación, toda vez que, como se verá son sumamente discutibles los derechos que invoca el presentante, don José Antonio Gual, a fin de que en los términos del decreto nº 8.533 del año 1948, se le reconozcan 25 años de servisios prestados en el ex-Ferrocarril Central Argentino con anterioridad a su ingreso en la Administración Nacional.

Sería inoficioso destacar, previamente, que este Ministerio entiende que el trabajo ha adquirido una valoración, una trascendencia y una importancia de tal naturaleza, que llega a constituir la esencia misma de la función social.

Ya ha sido superada la antigua noción del trabajo, por el cual éste representaba una obligación para ganarse el sustento; ahora, un concepto más evolucionado, que es la síntesis de toda la orientación señalada en este aspecto por el Poder Ejecutivo de la Nación, proclama al trabajo como un deber social, que sirve a la vez de instrumento de progreso y de bienestar ciudadano. Al subordinarse a normas de tal elevada jerarquía, este Departamento ha de emitir la opinión que se le solicita con la mayor amplitud de miras, declarando al trabajo, así definido, como una manifestación inmanente de la dignidad humana; sin olvidar, empero, que si bien los principios enunciados deben asumir la forma menos restrictiva posible cuando se trate de aplicarlos a las colectividades de trabajo, -en este casa la Administración Pública-, no por eso tienen que alcanzar una latitud que en la expresión de sus beneficios, exceda los límites en que el Estado, que es una institución jurídica esencialmente de orden, desarrolla su actividad general. De ahí que no corresponda tomar en un mismo pié de igualdad a la antigüedad de trabajo del individuo, cuando por una parte se trate de considerar esa antigüedad con relación a las jubilaciones y licencias, y por otra, cuando se la estime para con

ceder las bonificaciones establecidas por decreto nº 8.533 en debate.

El criterio de apreciación evidenciado a fs. 3 del expte. nº 10.998 y a fs. 1/4 del expte. nº 11.589 agregados, se apoya en la recriprocidad jubilatoria existente y en la antigüedad de trabajo que debe tenerse en cuenta para la concesión de licencias por descanso. Es evidente que, en este orden de ideas los presentantes no han advertido cuál es la verdadera razón de ser que concurre en las dos situaciones comentadas; y tal circunstancia los mueve a sustentar un criterio que a juicio de este Departamento resulta equivocado.
La reciprocidad de los regímenes jubilatorios que el Gobierno dispusiera en Acuerdo General de Ministros el 2 de abril de - 1946 y que el Honorable Congreso de la Nación ratificara con fuerza de ley nº 12.921, cristalizó una necesidad impostergable, porque aseguró la unificación de los preceptos legales, para dar mayor garantía a los derechos reconocidos y más solidez económico-financiera al sistema imperante de previsión.
Esos propósitos se alcanzarón mediante un procedimiento que elimina todo perjuicio, dado que se produce un simple traspaso de aportes que repara prácticamente la falta real de prestación, de tal manera que aunque la totalidad de los años de servicio que producen el beneficio jubilatorio no se acrediten como prestado en la Administración Pública, aquella transferencia de aportes entre una y otra Sección-Ley del Instituto Nacional de Previsión Social cubre virtualmente la antigüedad total de trabajo y regulariza el panorama observable, sin lesionar los intereses estatales ni los del beneficiario. En el otro terreno, es justo que los períodos de licencia que se acuerdan al agente civil respondan a su ciclo total de trabajo, siguiendo la antigüedad que reconocen las leyes jubilatorias. El descanso parcial o total que la licencia o la jubilación significan, nace de una misma fuente de propósito sociales, porque están dirigidos a que el empleado recupere las energías presuntivamente perdidas en la tarea diaria; y el he

cho de que las licencias por descanso capaciten teóricamente al agente para reintegrarse a su labor vencido el plazo de - la misma, mientras que al llegar a la edad jubilatoria el individuo se retira de la función, supone en ambos casos la obediencia a leyes biológicas irrevocables, cuyos efectos procura anular o atemperar el Estado, dictando los instrumentos concurrentes para el logro de tales fines.
En resumen: cuando la amplia concesión de las licencias y jubilaciones se ajusta a la antigüedad total de trabajo, se cumple con un imperativo fundamental de la gestión de gobierno, y se refirman en los hechos los postulados contenidos en la Declaración de los Derechos del Trabajador, que nuestra Constitución proclama, y que en estos aspectos encuentran un vasto territorio para ejercitarse, sin alterar el índice normal de los institutos sociales o económicos que accionan en su - consecuencia.

En cambio, la antigüedad de trabajo que el Estado puede bonificar pecuniariamente debe fijarse a la luz de una sana doctrina, que posiblemente comparta en última instancia ese Ministerio, a poco que analice con detenimiento la concepción primaria de la Administración Pública y las exigencias de fondo y de forma que la definen correlativamente.
En efecto: es ya sabido que la Administración Pública se organiza por la Ley y que para hacerse presente en su forma visible, dicha organización requiere una actividad. Esa actividad que constituye la función pública, se ejercita por intermedio de un órgano, que es el agente; de donde resulta que para que la función pública se formalice es necesario proveerla, vale decir, integrar con los agentes respectivos la actividad administrativa. De consiguiente, el nombramiento del empleado público tiene su origen en la ley, y es, en su expresión jurídica, el acto por el cual un mandatario con poder para proveer una función pública, designa a una persona como agente u órgano de la administración.
Sin entrar a discutir sobre la naturaleza contractual o no - de dicho acto de nombramiento, la relación de derechos entre

el agente público y la entidad llamada Estado no nace, como se ve, de un simple contrato de trabajo de derecho civil, sino de un acto de imperio o mando, en virtud del cual la entidad Estado inviste de la función pública al agente que designa, para que ejecute o actualice la ley en contacto con los administrados.

A su vez, la función pública tiene una serie de atributos jurídicos y legales que le dan significación y valor propios, puesto que el Estado, actuando como Poder Legislativo o como Poder Administrador, la reglamenta mediante leyes, decretos y disposiciones que marcan los derechos del agente y que constituyen en su conjunto el derecho administrativo que le es aplicable. Hemos deseado determinar así, en un rasgo, que dentro del Estado existe una institución perfectamente delimitada,-la Administración Pública-, encargada de cumplir las funciones de gobierno por intermedio de sus agentes; que el nombramiento de éstos, la conservación de los empleos y los sueldos que perciben son materias ajenas al derecho común; y que no se puede aspirar a la condición de agente público, sin la presencia de esa gama de características básicas que desde el nombramiento hasta el cese de la función, configuran una calidad tan especial.

Frente a un cuadro de límites tan firmes, es indudable que el interesado no está en situación de aportar ningún elemento de juicio para ponderar su solicitud.

El señor Gual, empleado de una empresa ferroviaria de índole privada, prestó en ella 25 años continuados de servicios; pero esa tarea fué cumplida al margen de la órbita del Poder Administrativo, es decir, fuera de una esfera a cuya competencia no puede aspirarse sin que exista el lleno de aquellos extremos o condiciones previas, inalterables e inherentes al sistema de la Administración Pública. En manera alguna se halló vinculado durante esos 25 años de servicios con el género de las funciones administrativas a que nos hemos referido; su nombramiento no tuvo origen en la ley ni derivó de un acto de imperio de la entidad Estado, sino que nació de un contrato de trabajo reglado por el derecho civil; mientras perma

neció como empleado particular de la empresa ferroviaria, en ningún momento se encontró bajo la dependencia directa del - Estado, y el derecho administrativo vigente le resultó extraño en absoluto, dado que le era perfectamente inaplicable por la carencia de jurisdicción reconocida y por la consiguiente falta de competencia estatal.

Además, las erogaciones que representan sus sueldos, en dicho período no se atendieron con la Ley de Gastos de Administración; y como no existe, pués, nombramiento originario del Estado, ni función regular y continua en la Administración Pública, ni dependencia directa de pago, ni punto alguno de — contacto con el sistema comentado, debe concluirse en que resulta imposible asimilar la antigüedad acreditada en un organismo particular a esa otra antigüedad tan especial que deriva del ejercicio de la función pública, cumplida dentro de una jurisdicción que se limita con tanta seriedad y fijeza.

El hecho de que los ferrocarriles de la República hayan pasado a formar parte del patrimonio nacional, no altera la situación anterior, puesto que con su ingreso a la órbita de la Administración Pública, el interesado se incorporó a un hecho jurídico existente, como lo es el Ministerio dentro del cual se desempeña; y sería inconsulto pretender que junto con el acto de su nombramiento, que marca el comienzo de una etapa de trabajo "sui-generis", el Estado le reconociera y bonificara por años de servicios que en el orden administrativo no le han sido prestados y que en sentido estricto no le han reportado ningún beneficio.

Recién desde la fecha de su presentación para desempeñar el cargo público que ahora acupa, acrece la antigüedad que el Estado puede bonificarle, dado que con anterioridad, el recurrente se encontraba en relación de dependencia con la empresa ferroviaria y no con es Estado; el patrono era la entidad privada y no el Estado; y por lo tanto, no sería lógico ni jurídico conferir carácter de empleado público para acordar un beneficio de naturaleza retroactiva, a quién durante 25 años - trabajó como empleado de una empresa privada y se halló vinculado a esa empresa por un contrato de trabajo de derecho privado.

Finalmente, este Departamento entiende que le corresdonde señalar las serias proyecciones que alcanzaría el dictado de una resolución favorable al recurrente. LLevados por el más sencillo método deductivo, nos encontraríamos con que el Estado, al designar un agente e investirlo de la función pública, quedaría obligado a reconocerle todos los años se servicios prestados en cualquier entidad particular, aún cuando la misma desarrollare sus actividades en un ámbito completamente extraño a la Administración Pública; y ya subordinados a este orden de ideas, no interesaría que la entidad en cuestión hubiera o no pasado a formar parte del patrimonio nacional, puesto que no quedaría más disyuntiva que la de reconocer y bonificar sin discusiones, por la sóla circunstancia de que el individuo que el Estado incorpora a su órbita,-ya fuere empleado, patrón, dueño de fábrica, industrial,etc.-, tiene servicios prestados en la economía privada, que es en última instancia trabajo nacional, en cuanto se considere que este concepto involucra la actividad general del país.
En síntesis: no se trata solamente de establecer si es aconsejable desde el punto de vista económico reconocer como servicios públicos nacionales los prestados en un sector de la economía privada. El asunto trasciende los límites de los números y lleva a la conclusión de que un pronunciamiento acorde con la solicitud del interesado expresaría una concepción anárquica, lesiva para los verdaderos enunciados de justicia social que informan la gestión de las actuales autoridades nacionales y contraria a los principios inmutables de orden jurídico-institucional en que se funda la organización y el ordenamiento del Estado.
Por lo expuesto, y en contestación al atento requerimiento formulado, este Ministerio cumple en declarar que a su juicio, los regímenes de bonificaciones por antigüedad no deben tomar en cuenta los años de servicios prestados en empresas privadas; y que, en casos como el presente, los servicios prestados en entidades que hayan pasado a formar parte del patrimonio nacional, deben tomarse en cuenta únicamente a partir de la fecha en que las mismas hubieran pasado a in-

tegrar el sistema de la Administración Pública.-

Fdo. Ramón A. Cereijo.-

BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD

Expte. nº 37.345/48.-

Excelentisimo señor Ministro de Hacienda:

Se inicia este expediente con el reclamo interpuesto por el señor JOSE A. GUAL, Oficial 5º de la Dirección General de la Subsecretaria de Cultura, quien al ingresar en el Ministerio de Educación (16 de setiembre de 1944), contaba con más de 25 años de servicios en el ex-Ferrocarril Central Argentino, prestación que no se le computó a los efectos de la estimación de antigüedad que bonifica el decreto nº 17.390 del 14 de junio de 1948, que implanta en el Ministerio de Educación el escalafón por antigüedad, para el personal técnico y administrativo de dicho Departamento.

Sostiene el interesado que en su caso se aplica la letra del decreto, que le priva del cómputo de antigüedad a los fines de escalafón, situación que le perjudica en sus intereses, pués al cabo de muchos años de servicios prestados en una empresa que en definitiva ha sido incorporada al patrimonio nacional, se ve privado de esos años de trabajo, los que siempre se prestaron en el pais.

Fundado en tales consideraciones y en el hecho de que en materia jubilatoria son computables tales servicios así como en el precedente que cita, pide se amplíe el mencionado decreto estableciendo que deben considerarse a los efectos de la bonificación por antigüedad, los servicios prestados en empresas u organismos que han pasado a ser patrimonio del Estado y que a la fecha del decreto, hayan aportado a las Cajas de Jubilaciones respectivas.

La Confederación del Personal Civil de la Nación, apoya dentro de la órbita de acción a su cargo, el pedido de que se trata.

La Dirección General de la Subsecretaria de Cultura, or-

ganismo de quien depende jerárquicamente el interesado estima que constituye una medida de estricta justicia, conforme con las directivas de justicia social impuestas por el Superior Gobierno de la Nación, acceder a lo solicitado y se agrega, a título ilustrativo, copia de un dictamen del Consejo Ministerial, relativo al cómputo de la antigüedad por prestación de servicios privados, a los efectos del otorgamiento de licencias en el orden Nacional.

Esta Contaduría General, llamada a expedirse en este caso que constituye un aspecto hasta ahora no resuelto en la Administración Nacional, debe expresar su opinión contraria a la solicitud interpuesta.

Funda tal opinión no en el solo hecho de que la letra del decreto invocado, al referirse a "servicios prestados en la Administración Nacional", excluya toda otra consideración que no sea la que conduzca lisa y llanamente a desechar el reclamo, pues ese criterio, ajustado a la pura interpretación literal, no contribuiría por sí sólo a la resolución del problema planteado, sobre la base de la interpretación de fondo que corresponde.

Tampoco puede desconocer esta Repartición, el perjuicio que alega el agente, que por el hecho del ingreso a la Administración Nacional, casi promediado el tiempo de prestación que da derecho a la pasividad, se halle en situación de perder, por lo menos en lo que a bonificación en su sueldo se refiere, muchos años de servicios prestados en un sector de la economía privada, puesto que tales servicios han sido en última instancia parte del trabajo nacional, en cuanto este involucra la actividad general del país. No cabe olvidar también, la profundidad con que el actual Poder Ejecutivo ha encarado la mejora de las condiciones y derechos del trabajo, dentro de la política de justicia social que caracteriza su gestión.

Pero esta Contaduría General, sin que importe subestimar tales razones, está obligada en cumplimiento de los deberes a su cargo, a expedirse objetivamente en el asunto a fin de puntualizar las razones que, bajo el punto de vista económico, no hacen aconsejable reconocer por vía de un acto adminis

//trativo, el derecho que se invoca.

El aspecto que en el caso se discute, importa para el Estado hacerse cargo de la compensación de años de servicios que no le han sido prestados y, esa condición, no lo hace equiparable a la situación del personal que, incoporado a la Administración Nacional solicita se le compute la antigüedad a los efectos de la licencia, asunto éste que resuelve favorablemente el dictamen del Consejo Ministerial (fs. 3/5), sobre la base de que el derecho a licencias regla la antigüedad en el trabajo y no un trabajo determinado, principio que esta Contaduría General aunque no lo comparte en la extensión que ese dictamen le da, no puede constituir el fundamento para resolver el presente caso por la razón ya apuntada. Tampoco puede constituir un precedente favorable las disposiciones sobre unificación de regímenes jubilatorios, pues en este caso, amén de que está amparado por una disposición legal, Ley de la Nación 12.921, que lo hace factible, juega el principio ya comentado del derecho adquirido en el trabajo mismo, conforme al cual el derecho a la pasividad es cosa equiparable al derecho de propiedad lo que acomoda por lo demás, a la orientación actual del Gobierno en la materia.

En lo referente a bonificaciones, juega un factor especial, cuya consideración es primordial para la resolución del caso. En efecto, tal cual han sido hasta ahora acordadas las bonificaciones en la Administración Nacional y, en general en el país, ellas tienen por objeto premiar el desempeño eficaz y propender a la dignificación del agente, con miras al beneficio de la gestión encomendada. Por otra parte, no es solamente la antigüedad lo que se bonifica, sino también que debe ponderarse la eficiencia. Es así como el Ministerio al digno cargo de V.E., por la resolución de fecha 14 de marzo del año en curso, reglamentaria del decreto nº 19.203/48 que estableció el régimen de bonificaciones para el personal del Departamento, se establece la obligatoriedad de calificar al personal sobre la base de los tres grandes grupos: Capacidad, Rendimiento y Conducta, especificandose concretamente los elementos de apreciación para graduar la calificación de tales conceptos.

Por decreto de fecha 26 de agosto de 1948, modificatorio de parte del decreto nº 17.390 sobre el que reclama el recurrente, el Poder Ejecutivo ha sentado principios concordantes, ya que deja establecido en sus considerandos que es menester acordar al personal que se incorpora por el mismo a los beneficios de la bonificación, el elemento organico que ha de permitirle la valorizacion de sus condiciones, ponderando su capacidad, rendimiento y conducta y tambien su estimulacion por su antigüedad en la Administracion Nacional.

En otros términos, la bonificación no sólo atiende a la antigüedad sino a las condiciones y calidad de la prestacion, vale decir, que tiene por finalidad premiar la contraccion y eficacia en el servicio del cual se ha beneficiado el Estado en su caracter de poder administrador.

Ese beneficio no puede hallarse para el caso de que un agente con servicios prestados en la economia privada, solicite su computo al ingresar en la Administracion Pública, pues en tal supuesto, el Estado que no recibió la prestación debería atender solamente a la antigüedad y de ese modo, el servicio publico administrativo a cuya mejora se encamina la bonificacion, resultaria perjudicado pues no habria recibido en tiempo y forma la contribución del trabajo individual que justifique el beneficio.

En estas situaciones, no concurre como en los regimenes jubilatorios un factor que elimina todo perjuicio, pues allí, mediante el trapaso de los aportes, la falta de prestacion queda integralmente reparada.

Volviendo a la resolución de V.E., situaciones como las que se trata por el presente, están resueltas con lo dispuesto por el art. 2º, apartados d) y g) y al establecer que no serán computados los servicios prestados en empresas privadas con anterioridad a la fecha en que las mismas hubieran pasado a formar parte del patrimonio nacional, ni los servicios prestados en Empresas de Capital Mixto.

En el Ministerio de Educacion, no existe una norma reglamentaria análoga, respecto a las disposiciones del decreto nº 17.390, pero por razones de uniformidad administrativa y den

//tro del criterio que ha presidido el otorgamiento de las bonificaciones, parece conveniente y hasta necesaria su reglamentacion.

Por lo expuesto, juzga esta Contaduria General que el reclamo interpuesto en las presentes actuaciones no puede prosperar administrativamente y que la situacion especial del interesado, puede ser materia de consideracion especial por el Ministerio de Educacion en el sentido de promoverlo a una categoria superior si ello fuera factible, con lo cual se compensaria en parte el perjuicio que invoca como fundamento de su reclamacion.

Finalmente, esta Reparticion estima que por la naturaleza e importancia de la cuestion, es conveniente contar con una norma de caracter general que fije la interpretacion uniforme en estos casos, a cuyo efecto cabria propiciar el pertinente pronunciamiento del Poder Ejecutivo dictando la norma concordante con la reglamentacion dada por V.E. en la comentada resolucion de marzo ppdo.

Con lo informado, tengo el honor de elevar a V.E. el presente expediente.

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, junio 15 de 1949.-

Fdo; O.D. RASMUSSEN
Presidente

Boletín nº 168.-

ASOCIACIONES PROFESIONALES

Buenos Aires, febrero 4 de 1957.-

VISTO: El Decreto-Ley nº 9.270/56 y la necesidad de reglamentarlo;

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Se entiende por trabajador, a los fines del Decreto-Ley nº 9.270/56, a quien desempeña tareas en relación de dependencia respecto a un empleador.

ARTICULO 2º.- Los empleadores, sus representantes o sus asociaciones profesionales no podrán ser parte, en caso alguno, en las cuestiones referentes a la constitución de las Asociaciones Profesionales de Trabajadores, afiliación gremial o cuestiones conexas.

ARTICULO 3º.- La prohibición del Artículo 5º del Decreto-Ley nº 9.270/56, no alcanza a los aportes que los empleadores efectuen en virtud de disposiciones legales o convencionales, con destino a obras de caracter social o asistencial. Los fondos afectados a tal destino deberan ser objeto de una administración especial, que se llevará y documentará por separado, respecto de la que corresponde a lo demás bienes y fondos sindicales, propiamente dichos.

ARTICULO 4º.- Las asociaciones profesionales de trabajadores, de cualquier grado que sean, pueden tener carácter local, provincial, interprovincial o nacional y solicitaran la inscripción que dispone el Decreto-Ley nº 9.270/56, ante las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y Previsión, salvo -respecto de las asociaciones locales o provinciales- lo que dispongan sobre el particular las respectivas leyes provinciales. El Ministerio de Trabajo y Previsión llevara un registro de las asociaciones profesionales inscriptas en el pais, cualquiera sea su zona de actuación.

ARTICULO 5º.- La resolucion por la que se deniegue, suspenda o deje sin efecto la inscripción de las asociaciones profesionales de trabajadores debera ser fundada en todos los casos.

ARTICULO 6º.- Los recursos prescriptos por los Articulos 9º, 19º y 28º del Decreto-Ley nº 9.270/56, interpuestos contra resoluciones dictadas por el Ministerio de Trabajo y Prevision o por haber vencido el termino del cual las mismas debieran haberse pronunciado, se sustanciaran por ante la Camara Nacional de Apelaciones de la Justicia del Trabajo. Previamente debera agotarse la via administrativa.

Dichos recursos seran fundados y deberan interponerse por ante el Ministerio de Trabajo y Previsión, dentro de los treinta dias de notificadas las partes interesadas o de vencido el termino dentro del cual debió recaer pronunciamiento.

Interpuesto el recurso, las respectivas actuaciones administrativas se remitiran, sin mas tramite, a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la que oira al señor Procurador General del Trabajo, decidira sobre la procedencia del recurso y, en su caso resolvera teniendo a la vista las constancias del respectivo expediente administrativo, sin perjuicio de cualquier otra medida que de oficio dispusiera previamente para mejor proveer.

La remisión de las actuaciones administrativas al Tribunal del Trabajo que deba entender en el recurso, debera efectuarse dentro de los quince días de interpuesto el mismo. En caso de que asi no se hiciere, el Tribunal podra, a peticion de parte, requerir la inmediata remisión de las actuaciones.

ARTICULO 7º.- La asociacion profesional de trabajadores a la que se le hubiese dejado sin efecto su inscripción gremial, perdera automaticamente su personalidad jurídica, pero podra subsistir como asociación civil, cuya existencia se regira por sus estatutos, de conformidad con las leyes y reglamentaciones vigentes.

ARTICULO 8º.- La representación de las minorias, a que se refiere el articulo 13º inciso e) del Decreto-Ley nº 9.270/56, sera obligatoria solamente para las asociaciones de primer grado y se tendrá por cumplido dicho requisito cuando en las respectivas comisiones directivas o administrativas exista -

representacion de la lista o fraccion que haya obtenido como minimo, el diez por ciento del total de votos emitidos.

ARTICULO 9°.- A los efectos del articulo 13° inciso g) del mencionado Decreto-Ley nº 9.270/56, los estatutos de las asociaciones profesionales deberan, establecer que todo acto de disposicion de bienes inmuebles, deberá haber sido previamente aprobado por la Asemblea General de Afiliados o Congreso de Delegados.

ARTICULO 10°.- Los cargos de direccion y administracion de las asociaciones profesionales deberan ser desempeñados en su mayoria por trabajadores en actividad.

ARTICULO 11°.- Los sanatorios, hospitales y farmacias a que alude el articulo 16° inciso g) del Decreto-Ley reglamentado, estaran sujetos a las normas tecnicas y de salubridad comunes a todos los establecimientos de esta indole.

ARTICULO 12°.- La imposicion o modificacion de cuotas y aportes a los afiliados, debera ser resuelta siempre en asamblea o congreso de delegados.

ARTICULO 13°.- Las Asociaciones Profesionales de Trabajadores deberan llevar obligatoriamente los siguientes libros: Caja - Mayor, Inventario, de Actas, Copiador y de Registro de Afiliados. Dichos libros deberan ser exhibidos a los funcionarios, debidamente autorizados, del Ministerio de Trabajo y Prevision en todos los casos en que asi se requiera. A solicitud de las entidades interesadas, el Ministerio de Trabajo y Prevision - podra autorizar el reemplazo de los libros mencionados por sistemas mecanicos o ficheros que previamente apruebe.

ARTICULO 14°.- Las Asociaciones Profesionales de Trabajadores deberan hacer rubricar los libros citados en el articulo anterior por la autoridad de aplicación, mediante solicitud presentada por escrito y haciendo constar nómina de los mismos y número de fojas que contiene cada uno de ellos.

ARTICULO 15°.- El contralor por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión establecido por el articulo 13° del presente - decreto, se hará extensivo a regimenes y servicios de caracter asistencial que realicen las asociaciones profesionales de trabajadores, el que oportunamente sera objeto de reglamentación por la autoridad de aplicacion.

ARTICULO 16°.- El contralor a que se refiere el articulo anterior se extendera asimismo a las explotaciones comerciales o industriales a cargo de las asociaciones profesionales de trabajadores, sin perjuicio de que estos deban cumplir con los demas requisitos y exigencias legales existentes en la materia.

ARTICULO 17°.- A los efectos del articulo 18° del Decreto-Ley n° 9.270/56, se consideraran exclusivamente comprendidos en las disposiciones del mismo a los miembros de las comisiones directivas o administrativas, a los representantes legales en los terminos del articulo 15° del Decreto-Ley citado y a los representantes ante los organismos paritarios y estatales. Las Asociaciones Profesionales deberan remitir a la autoridad que hubiese otorgado su inscripción la nomina de las personas designadas o elegidas para desempeñar los cargos precedentemente indicados.

ARTICULO 18°.- Una vez recibida la comunicación a que se refiere el articulo 20° del Decreto-Ley n° 9.270/56, la asociacion profesional directamente, o los trabajadores, deberan entregar al empleador constancia escrita de la voluntad de cada uno de los afiliados aceptando la retencion.- Las asociaciones profesionales tendran un plazo de un año para cumplir con el requisito anterior respecto a las retenciones actualmente vigentes.

ARTICULO 19°.- La copia de la renuncia a una asociacion de trabajadores, que de acuerdo al articulo 22° del Decreto-Ley n° 9.270/56 debe entregarse al empleador, tiene solo efecto de justificar la falta de retención de los aportes sindicales por dicho empleador. Este requisito se dará por cumplido mediando notificacion documentada de la renuncia al empleador a fin de que éste deje de efectuar dicha retencion.

ARTICULO 20°.- Las inscripciones y personerias gremiales actualmente otorgadas a asociaciones profesionales de trabajadores por el Ministerio de Trabajo y Previsión, seran consideradas automaticamente como inscripciones de acuerdo al Decreto-Ley n° 9.270/56, debiendo las asociaciones adecuar al mismo sus estatutos dentro del plazo de seis

meses a partir de la sancion del presente decreto. En caso de no darse cumplimiento a la precedente disposicion dentro del termino previsto, el Ministerio de Trabajo y Prevision podra intimar la adaptacion de estatutos dentro del plazo que establezca, bajo apercibimiento de suspender la respectiva inscripcion, en la forma autorizada por el articulo 28° del Decreto-Ley n° 9.270/56. Asimismo se consideraran vigentes las afiliaciones de los sindicatos a federaciones registradas a la fecha del presente.

ARTICULO 21°.- Los beneficios acordados a las asociaciones profesionales de trabajadores por el articulo 23° del Decreto-Ley n° 9.270/56, no amparan a las explotaciones comerciales o industriales a cargo de las mismas.

ARTICULO 22°.- Las federaciones que soliciten inscripcion deberan estar integradas por asociaciones profesionales previamente inscriptas.

ARTICULO 23°.- El personal de supervision, tecnico o de vigilancia, en ningun caso podra ser obligado por disposiciones estatutarias, convencionales o de cualquier otra índole, a agremiarse conjuntamente con el personal de otra categoria. En caso de que el personal de supervisión tecnico o de vigilancia constituya un sindicato distinto del que agrupe al resto del personal, podrá federarse libremente con los sindicatos de otra categoría de personal.

ARTICULO 24°.- El Ministerio de Trabajo y Previsión proyectará dentro de los noventa dias de la fecha del presente decreto, - la reestructuración del Consejo Nacional de Relaciones Profesionales y el Decreto-Ley sobre régimen de las Comisiones Intersindicales de conformidad con los artículos 31° y 33° del Decreto-Ley n° 9.270/56.

ARTICULO 25°.- El presente decreto será de aplicación en todo - el territorio de la Nación.

ARTICULO 26°.- Comuniquese, publíquese, dése a la Dirección - General del Boletín Oficial y archívese.

DECRETO N° 1.275.-

Fdo. ARAMBURU-T.E. Guevara

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletin Nº 169.-

TRAMITE - MESA DE ENTRADAS - RACIONALIZACION

Buenos Aires, 6 de marzo de 1957.-

Visto la resolución ministerial nº 5.161 de 6 de diciembre de 1955 (+), por la cual se fijan normas para el diligenciamiento de las actuaciones en las reparticiones y dependencias de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que a fin de asegurar el mejor cumplimiento de los propósitos de racionalización administrativa en que se funda la medida comentada, procede disponer la ampliación de las informaciones que en tal sentido suministran los respectivos organismos en virtud de lo dispuesto en el artículo 8º de la resolución nº 5.161/55;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION
R E S U E L V E :

1º) Substitúyese el inciso b) del artículo 8º de la resolución ministerial nº 5.161/55 por el siguiente:

"Actuaciones pendientes de trámite que hubieren excedido "los términos fijados en el artículo 1º pero sin superar "los TREINTA (30) días: causas que impiden o imposibili- "tan su diligenciamiento"

2º) Agrégguese como inciso c) del artículo mencionado precedentemente:

"Actuaciones pendientes de trámites que hubieran excedi- "do en más de TREINTA (30) días los términos fijados por "el artículo 1º; causas que impiden o imposibilitan su di- "ligenciamiento".

3ª) Las informaciones que suministren las dependencias conforme a lo determinado por los incisos b) y c) del artículo 8ª de la resolucion nº 5.161/55, serán discriminadas por cada expediente, indicando además su número y extracto.

4ª) Las disposiciones establecidas por esta resolución entrarán en vigor a partir del próximo viernes 8 de marzo.

5ª) Las reparticiones del Ministerio aludidas en el artículo 16ª de la resolución de que se trata -facultadas a dictar por sí medidas de carácter similar a la establecida por la misma- procederán de inmediato a incorporar a sus disposiciones las normas que se fijan por la presente, quedando igualmente obligadas a remitir quincenalmente a este Ministerio un parte informativo conteniendo los datos relacionados con el estado de trámite de sus actuaciones.

6ª) Comuníquese a quienes corresponda y pase a la Dirección General de Contabilidad y Administracion a los fines dispuesto por el articulo 3ª de la resolucion ministerial nº 8.216/56.-

Fdo. Roberto Verrier

RESOLUCION Nº 7.064.-

(+) Ver D.M. nº 5.-

deberán solicitar su adjudicación al referido organismo.
ARTICULO 2º.- El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (en liquidación), dará tratamiento preferencial a las solicitudes presentadas, debiendo expedirse en un plazo máximo de quince (15) días.
ARTICULO 3º.- La Dirección Nacional de la Industria, dependiente del Ministerio de Comercio e Industria, no otorgará certificados de necesidad a las dependencias del Estado para la importación de automotores cuando a su juicio, los mismos puedan ser suplidos por las unidades de que se trata.
ARTICULO 4º.- Facúltase al Ministerio de Comercio e Industria a dar por terminados los efectos del presente decreto, en la oportunidad en que se agoten dichos automotores o que el saldo de los mismos así lo aconseje.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y vuelva al Ministerio de Comercio e Industria.-

ARAMBURU - Rodolfo Martínez

DECRETO Nº 2.027.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 171.-

BONIFICACIONES POR ANTIGÜEDAD

Expediente nº 191.890/51.- Ref.: Cómputo de servicios prestados en el Banco Central, durante la vigencia de la ley número 12.155, a los efectos de la bonificación por antigüedad.-

P.Nº 377/57.-

//—nos Aires, 6 de marzo de 1957.-

Vuelva al Ministerio de Comercio e Industria manifestándole que, a juicio de este Departamento, los servicios prestados en el Banco Central durante la vigencia de la ley nº 12.155, deben ser computados a los fines de la bonificación por antigüedad.

La institución de que se trata nació de la fusión de diversas reparticiones dependientes del Ministerio de Hacienda o semiautónomas, tales como la Caja de Conversión, la Comisión de Redescuento, el Crédito Público Nacional, la Junta Autónoma de Amortización y algunos organismos del Banco de la Nación Argentina (Oficina de Investigaciones Económicas, Biblioteca, Revista Económica, Cuentas Corrientes Oficiales y Cámaras Compensadoras), y de la Oficina de Control de Cambios (Sección Bancos), transfiriéndose así al Banco Central, además de las funciones que cumplían dichas dependencias, sus libros, registros, documentación, muebles y útiles y el personal necesario (decreto número 61.127 del 18/5/935).

Por su parte, la ley nº 12.155 convirtió al Banco Central en agente finaciero y Consejero del Gobierno Nacional y, entre otras funciones le asignó las de regular el crédito y la moneda, emitir billetes y aplicar las disposiciones de in

pección, verificación y régimen de los bancos, siendo notorio que esta última, si las restantes no fueran suficientes, constituye por sí sola una clara expresión del carácter de la entidad, ya que se trata de una función de contralor o de policía bancaria, inherente al Estado y que éste nunca podría delegarla en una institución particular.

También en el mensaje con el cual el P.E. remitiera al H. Congreso de la Nación el proyecto de aquel acto legal, puede advertirse el espíritu de sus disposiciones, en lo que hace al problema en discusión, conforme surge de los siguientes párrafos transcriptos del diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación del 19 de enero de 1935 (Página 2354 y 2355): "... De ahí que se haya creído al redactar el proyecto que, no obstante ser el Banco una entidad pública que desempeña una función tan esencial como es la regulación de la moneda y el mantenimiento de su estabilidad, el Estado debe tener una intervención limitada en su manejo".

"... Por otro lado, el carácter esencialmente público de de las funciones del Banco fluye claramente no sólo de la enunciación que de ellas hace la ley, sino también de la índole y alcance que ésta fija para sus operaciones y de este otro hecho primordial. El Banco Central no es una institución que tiende a realizar beneficios, por no ser éste su designio; se le asigna a propósito un capital relativamente pequeño, sobre el que además se establece un dividendo máximo de 6%, para que en ningún caso pueda influir en su política de crédito el incentivo de realizar grandes ganancias expandiendo las operaciones en cuanto le sea posible, como ocurre de ordinario en los bancos comerciales..." (Del texto del mensaje al H.C. enviado por el P.E.).

Bielsa, al referirse al carácter del Banco Central durante la vigencia de la ley nº 12.155 expresa: "Creado por la ley número 12.155, del 28 de marzo de 1935, el Banco Central de la República es un ente autárquico, y claro está, persona jurídica civil. Pero todas las funciones especificadas en el artículo 3º de la ley contribuyen a definir el señalado carácter de esa entidad pública. Por una parte, tiene la función regulado-

ra del crédito en el país y la aplicación de las disposiciones de inspección, verificación y régimen de los bancos establecidos en la ley nº 12.156 del 28 de marzo de 1935, sobre bancos; y por otra, su función de agente financiero y Consejero del Gobierno Nacional en las operaciones de crédito externo e interno y en la emisión y atención de los empréstitos públicos (artículo 3º),.luego la atribución de emitir billetes ..." y continúa más adelante: "No solo las atribuciones y funciones del Banco, sino también las prohibiciones del artículo 34 de la ley de creación, concurren a definirlo como entidad pública nacional...".

No modifica el criterio sostenido por este Ministerio, la disposición contenida por el artículo 59º de la ley nº 12.155, en cuanto otorga a los empleados afiliados a las leyes de jubilaciones y pensiones civiles que se incorporen al Banco Central, la opción para continuar en tales regímenes o acogerse a los de jubilaciones bancarios. Se trata como se vé de una norma intrascendente cuyo efecto, de carácter accesorio, no puede constituir ni alterar el aspecto principal o de fondo. Por otra parte, dicha situación se mantiene en la actualidad por imperio de la ley número 12.962 - Sección III - decreto nº 14.957/46 (artículo 62º), sin que ello permita dudar sobre la condición de empleados públicos que invisten tales agentes.

De lo expuesto, se reitera, este Ministerio concluye en que los servicios de que se trata deben ser computados a los fines de la bonificación por antigüedad en razón de la índole que los caracteriza, pero ello con la salvedad, que el reconocimiento respectivo debe ser objeto de un acto especial del P. E. e investir carácter general para los regímenes existentes en todos los organismos de la Administración Nacional, motivo por el cual se solicita que luego de produciso el dictámen del señor Procurador del Tesoro, se devuelvan las presentes actuaciones a este Departamento, a fin de considerar el dictado del pronunciamiento aludido.-

Fdo. ROBERTO VERRIER

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 172.-

NORMAS PARA LA CONFECCION Y TRAMITACION DE DECRETOS

Buenos Aires, 8 de marzo de 1957.-

Visto la necesidad de fijar normas que regulen la redacción, presentación y tramitación de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional;

Y CONSIDERANDO:

Que uno de los planes trazados por el Gobierno de la Revolución, es el de estructurar debidamente el funcionamiento de la Administración Nacional, adecuándolo a un procedimiento ágil y firme que proteja a los administrados;

Que ya se observan los resultados provechosos para la comunidad de las primeras medidas adoptadas;

Que como cada Ministerio estructura los proyectos de decretos sobre asuntos de su jurisdicción y siendo los mismos conocidos como actos típicos del Poder Ejecutivo, merece que existan normas claras y precisas sobre el dictado y su posterior tramitación;

Que la Secretaría de Decretos, dependientede la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, tiene a su cargo, por imperio del artículo 4º del Decreto Nº 7.120/56, la función de: recibir, ordenar, registrar y revisar, en cuanto a la forma y el procedimiento seguido en la substanciación, los proyectos de decretos que se someten a la firma del señor Presidente de la Nación;

Que para el cumplimiento de su misión específica y en procura de uma mejor racionalización administrativa, es conveniente contar con las normas antedichas;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los proyectos de decretos que los distintos ministerios remitan a la firma del Excmo. señor Presidente de la Nación, deberán ajustarse en su redacción, presentación y tramitación, a las siguientes normas:

1º) El formato, calidad y características de impresión del papel en las hojas de los decretos, será similar a la que se adjunta como ANEXO 1.
El formato y calidad del papel en las hojas que se agregan como planillas anexas de los decretos, serán similares a la que se adjunta como ANEXO 2.
No podrá introducirse en ellas modificación alguna, mientras permanezcan en vigor las presentes normas.

2º) La leyenda "El Poder Ejecutivo Nacional" irá impresa tipográficamente en la parte superior izquierda y el escudo nacional en relieve, en el centro de la hoja.

3º) Los márgenes a observar para la distribución de lo escrito, en las hojas de los decretos, serán los siguientes: margen izquierdo, 5cms; margen derecho, 1 cm.; en las planillas anexas, será el margen izquierdo de 5cms. Cuando deban emplearse dos o más hojas, en la parte inferior de la primera y siguientes se dejará un espacio no menor de tres (3) cms. En la hoja final debe quedar el espacio suficiente para que las firmas puedan estamparse sin inconvenientes.
En la parte superior, debajo del escudo en relieve, se escribirá el lugar , dejando el espacio en blanco para que la Secretaría de Decretos de la Presidencia de la Nación, ponga la fecha, que será siempre la que corresponda al día en que el decreto sea suscripto por el Excmo. señor Presidente.

4ª) La escritura será a máquina, de tipo corriente, a dos espacios, con utilización de cinta negra fija. Quedan terminantemente prohibidas la enmienda, raspaduras, interlineaciones, manchas o cualquier otra forma de presentación desprolija.

5ª) Se escribirá en un sólo lado de la hoja y cuando se emplee más de una se foliarán con sello y se rubricarán cada una de ellas en el margen superior derecho. Cuando el decreto sea la consecuencia de un expediente, la foliación será la que corresponda la mismo.

6ª) Cuando se emplee más de una hoja en el dictado de decretos, no deberá incluirse en la última hoja el artículo de forma a solas, salvo que esté precedido de la última palabra del artículo anterior o que el mismo haya comenzado en la hoja precedente.

7ª) Todo decreto será elevado acompañado de un (1) extractín y dos (2) copias, que estarán debidamente autenticadas por el funcionario que determine cada Ministro Secretario de Estado. Exceptúase de esta disposición a los de carácter "secreto", que se elevarán con una (1) copia.

8ª) El sello oficial del Departamento de Estado que corresponda sera estampado al margen en todas las hojas, encuadrando inmediatamente debajo de la leyenda "El Poder Ejecutivo Nacional", -enla forma señalada en el ANEXO 3- debiendo suprimirse - en el original- el empleo de otros sellos que los establecidos en las presentes normas, como asimismo, toda otra característica, iniciales, etc.,etc., que en caso de ser de utilidad para el trámite interno de cada Departamento de Estado, se podrán estampar en las copias respectivas.

9ª) La redacción del texto de los decretos será clara, concisa y en correcto castellano.
Cuando el decreto sea la consecuencia de un expediente,

se empezará citándolo por su letra, número y demás características que permitan su inmediata localización.

10º) Todo decreto deberá estructurarse con tres partes, a saber: Visto, Considerandos y Dispositiva. Se podrá prescindir de la primera y/o segunda cuando la parte dispositiva por su naturaleza, no lo exija.
En dichos considerandos se analizará con justeza las circunstancias de cualquier orden y naturaleza, que teniendo vinculación directa con el asunto de que se trate, se hayan tenido en cuenta para dictar la medida que se propugne.
El último de estos considerandos, se destinará exclusivamente para encuadrar el acto de la ley, reglamentación o decreto que lo autorice, no debiendo omitirse la referencia de haberse dado intervención a los asesores legales, cuando así corresponda, ya sea de conformidad u oído de los mismos.

11º) Cuando por el decreto se rechaza un recurso interpuesto contra una resolución ministerial o entidad autárquica, deberá consignarse expresamente en la parte resolutiva que se desestima, rechaza o no se hace lugar al mismo y se confirma la resolución recurrida.

12º) La parte dispositiva de los decretos se subdividirá en tantos artículos como aconseje su mayor claridad y comprensión.
Se escribirán totalmente con caracteres mayúsculos:

a) Los apellidos.
b) Las cantidades de dinero.
c) Las cantidades que representen medidas de capacidad, de volumen, de superficie o de longitud.
d) Todo aquello que por su importancia sea conveniente hacer resaltar.
(Todas las cantidades se repetirán en números, poniéndolos entre paréntesis).

13°) Los artículos relativos a los gastos que se autori cen,deberán expresar el importe en letras y número, y cuando se trate de moneda extranjera, su equivalente en moneda nacional.
En lo referente a la imputación, no se usará la expresión PRESUPUESTO VIGENTE, ni los términos IMPUTESE A LA PARTIDA QUE CORRESPONDA. El decreto deberá señalar la imputación en forma analítica, a la cuenta legal pertinente; especificándose, en su caso, el Anexo, inciso, item y partida, señalando expresamente el correspondiente año calendario.

14°) Cuando se trate de nombramientos, ascensos, cesantías y aceptación de renuncias de personal civil del sexo masculino, deberán consignarse con exactitud todos los nombres completos con que aparece en sus documentos cívicos; la clase a que pertenece, número de matrícula, Distrito Militar, número de Cédula de Identidad y la Policía que la expidió.
En los decretos de nombramientos, ascensos, cesantías y aceptación de renuncias de personal civil del sexo femenino, se consignarán también todos los nombres completos con que aparece en su documentación legal, número de Cédula de Identidad, Policía que la expidió y número de Libreta Cívica.
En todos los casos se establecerá con precisión la imputación que corresponda al sueldo o remuneración que se le asigne.

15°) Si en un decreto debe dejarse constancia del/o de los señores Ministros Secretarios de Estado que deban refrendarlo, se empleara la siguiente fórmula:
"El presente decreto será refrendado por el señor "Ministro Secretario de Estado en el Departamento "de..."; o bien: "El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado "en los Departamentos de...y de... etc.".

16°) Cuando corresponda tomar intervención al Escribano Mayor de Gobierno, así se hará constar expresamente en uno de los artículos del decreto.

17°) El artículo final de cada decreto establecerá con precisión el trámite que ulteriormente seguirá hasta su archivo. En todos los casos en que se autoricen gastos que afecten los fondos de la Tesorería General de la Nación, o se dispongan operaciones que deben registrarse en la Contaduría General del Estado, el decreto dispondrá que del mismo tomarán intervención el Tribunal de Cuentas de la Nación y la Contaduría General de la Nación, conforme lo establecido en el Decreto-Ley nº 23.354/56 (Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal de Cuentas de la Nación y la Contaduría General de la Nación).

18°) La firma de los señores Ministros Secretarios de Estado será la habitual en todos sus actos, escrita con tinta azul negra y horizontalmente, dejando espacio para la firma del Excmo. señor Presidente.

19°) Cuando se trate de acuerdos de Ministros, serán suscriptos en primer término, por aquel a quien pertenezca el asunto, o por el que lo haya iniciado y a continuación por los demás señores Ministros Secretarios de Estado.

20°) Los decretos se clasificarán por su importancia y naturaleza del asunto de que trate en "SECRETO" y "PUBLICO".
El primero llevará estampado en la parte superior de todas sus hojas un sello en el que se haga resaltar el carácter que se le ha asignado.
Cada Ministerio tomará las providencias del caso, para asegurar que no se viole el secreto de las medidas de gobierno que tengan ese carácter.

21°) Toda documentación que se remita para la firma será entregada sin excepción a la Secretaría de Decretos -Mesa de Entradas- de la Presidencia de la Nación, -

por lo que se recomienda muy especialmente no apartarse de esta norma, ni aún en los casos de urgencia, a fin de evitar los graves inconvenientes que origina el hecho de substraer del trámite normal una parte de la documentación oficial.
En los casos de decretos leyes, será también de aplicación lo determinado en el párrafo precedente.
A este respecto se hace saber que los decretos serán presentados a la firma del Excmo. señor Presidente de la Nación, única y exclusivamente por el señor Secretario de Decretos de la Presidencia de la Nación, para lo cual la Mesa de Entradas de la citada Secretaría, recibe la documentación que se le remita en forma, de nueve a quince horas, todos los días hábiles administrativos.

22°) Todo proyecto de decreto, luego de registrarse su entrada, será revisado por la Sección Asesoría de la Secretaría de Decretos, a fin de analizar si se ha cumplido fehacientemente con los requisitos de forma, como así también, si el procedimiento seguido por la tramitación del expediente ha sido el prescripto por las normas legales, al solo efecto de racionalizar y orientar el procedimiento y procurar que las decisiones del Poder Ejecutivo no sean contradictorias sobre asuntos de la misma naturaleza, surgidos de distintos Ministerios-Secretarías de Estado.

ARTICULO 2°.- Las presentes normas comenzarán a regir a partir del día 1° de abril de 1957.
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento del Interior.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y ARCHIVESE.

DECRETO N° 2425.-

Fdo. ARAMBURU
Alconada Aramburú

Sello
Foliador

l Poder Ejecutivo
Nacional

Sello
de
Ministerio

A N E X O I

llo
e
idencia

Sello
de
Ministerio

A N E X O II

Sello
de
Presidencia

Sello
Foliador

El Poder Ejecutivo Nacional

Sello
de
Ministerio

A N E X O III

Sello
de
Presidencia

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 173.-

GASTOS DE REFRIGERIO

Expediente nº 110.480/57.- Ref: reintegro por gastos de refrigerio p/personal del Instituto Nacional de Reaseguros.-

-//nos Aires, 8 de marzo de 1957.-

Vuelva al Instituto Nacional de Reaseguros manifestándole que el decreto nº 18.989/56 ha establecido con carácter normativo y general, el régimen a que debe ajustarse el reconocimiento y pago de horas extraordinarias, indemnizaciones, viáticos, gastos de comida y movilidad del personal de la Administración Nacional.

En consecuencia y atento que para el caso en consulta, el artículo 8º "in fine" prohibe expresamente los reintegros de gastos por refrigerio, este Ministerio no considera procedente establecer excepciones al respecto.-

Fdo. Roberto Verrier

RESOLUCION Nº 7.077.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 174.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

Expediente nº 36.306/55.-

//--ñor Director General:

El empleado de la Dirección General Impositiva, don ALEJANDRO J. ROCHAIX, gestiona por las presentes actuaciones el reconocimiento de los servicios prestados como agente de la Caja de Previsión para el Personal Ferroviario, desde el 8 de noviembre de 1920 hasta el 31 de octubre de 1927, a los fines de la bonificación por antigüedad.

El beneficio de que se trata fué instituído para el personal de aquella repartición por el decreto nº 19.204/48, que reproduce en líneas generales el régimen establecido para el Ministerio de Hacienda por el decreto nº 19.203/48, y ambos determinan textualmente: "A los efectos del adicional, se considerará como antigüedad efectiva el tiempo total de servicios prestados por los agentes en la Administración Pública Nacional" (artículos 16º y 5º, respectivamente).

En mérito a ello este Departamento considera de aplicación al presente caso lo resuelto en el expediente nº 7.009/49 ante una gestión promovida por un agente de este Ministerio a los fines del reconocimiento de servicios prestados en la Caja de Previsión para el Personal Ferroviario desde el 31 de agosto de 1939 hasta el 31 de marzo de 1943. En efecto, en dicha oportunidad y frente a lo informado por la Contaduría General de la Nación y el dictamen producido por el señor Procurador del Tesoro (cuyas copias se agregan) este Ministerio dispuso lo siguiente:

"Buenos Aires, 19 de diciembre de 1949.- Pase a la Dirección "General de Finanzas para que se sirva hacer saber al presen

"tante, don Luis Ercone, que los servicios [illegible] de la "rara en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias en- "tre los años 1939 y 1943, no acrecen la antigüedad computable "a los fines de la bonificación establecida por el decreto nº "19.203/48, circunstancia por la cual le fué suspendido el pa- "go de los adicionales que en tal concepto venía percibiendo "hasta el mes de abril del corriente año".

Este Departamento comparte el criterio que se deja expuesto por entender que las distintas disposiciones contenidas en las leyes números 10.650 y 11.308 que se citan en el informe de fs. 12/14, en cuanto determinan la intervención que se reserva el P.E. en algunos aspectos de la administración de la Caja y aplicación del beneficio que acuerda la ley, no pueden ser tenidos como testimonio de una relación de dependencia, sino como el resorte mediante el cual el Estado vigila el estricto cumplimiento de la ley y contribuye a la efectiva realización de sus fines. Así lo prescripto por la parte "in fine" del artículo 8º de la ley nº 10.650 -cuando prevé la posibilidad que la Nación contribuya con los recursos necesarios en el caso que los de la Caja no alcanzaran a cubrir el importe total de las jubilaciones y pensiones que deban ser satisfechas durante el año- no significa, seguramente, que dicho organismo dependa económicamente del Estado; por el contrario, se interpreta que dicha norma procura simplemente prever una eventualidad en defensa del derecho de los interesados y como medio de garantizar la regularidad de las prestaciones, toda vez que los recursos normales de esa institución están dados por el aporte del personal beneficiario y las empresas empleadoras (ley 10.650, art. 9º y la ley 11.308, arts. 1º inc. f) y 9º, inc. 5º).

En razón de lo expuesto y atento las prescripciones contenidas en el artículo 16º del decreto nº 19.204/48, se considera que no corresponde el reconocimiento de los servicios prestados por el causante en la Caja Ferroviaria, según lo acredita en las presente actuaciones, a los fines del régimen de bonificaciones por antigüedad.-

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, 20 de julio de 1955.-

Vª Bª

R. M. MEI
Director General de Contabilidad
y Administración

Buenos Aires, 22 de julio de 1955.-

Visto lo solicitado por el agente de la Dirección General Impositiva, don ALEJANDRO J. ROCHAIX, los dictámenes de la Procuración del Tesoro y Contaduría General de la Nación para casos análogos y de conformidad con el informe producido por la Dirección General de Contabilidad y Administración, este Departamento hace suyo, vuelva a la repartición de origen a fin de que se sirva notificar al causante que no procede el reconocimiento de los servicios que invoca a los efectos de la bonificación por antigüedad instituída por el decreto nº 19.204/48.-

Fdo. FRANCISCO CHOLVIS
Subsecretario de Hacienda

//—ñor Delegado Interventor:

A fin de resolver acerca del derecho de don Alejandro J. Rochaix a computar los servicios que prestó en la ex-Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ferroviarios y a los fines de establecer el adicional por antigüedad estatuído por el decreto 19.204/48, el Ministerio de Hacienda solicita de esta Caja se sirva emitir opinión sobre si durante el período del 8 de noviembre de 1920 hasta el 31 de octubre de 1927, el organismo arriba mencionado era o no parte integrante de la Administración Pública Nacional y si el causan-

te que se desempeñó en el mismo durante ese lapso, investía el carácter de empleado del Estado.

En mi opinión, la Caja de Jubilaciones y Pensiones para Empleados Ferroviarios era una entidad distinta de la Administración Pública Nacional, la Ley 10.650 o sea la Ley orgánica precisaba con claridad la autonomía de la Caja. La administración de la Caja fué confiada a un Directorio mixto (art.4ª), se fijó el fondo con aportes del personal y con las contribuciones de las empresas ferroviarias; y sobre todo se declaró en el artículo 11ª que: "los fondos y las rentas que se obtengan por esta ley serán de exclusiva propiedad de las personas comprendidas en sus disposiciones y con ello se atenderá al pago de las jubilaciones y pensiones".

Es evidente que la Caja no administró caudales públicos, sus fondos no eran propiedad de la Nación sino estaban afectados a fines determinados. Sólo tenía un vínculo remoto con el Estado; su presidente era designado por el P.E. con acuerdo del Senado; sus cuentas sometidas al contralor de la Contaduría General de la Nación en virtud de lo dispuesto por la Ley 11.308, como consecuencia de la obligación de la Nación de contribuir con la diferencia cuando los recursos calculados no alcanzaran a cubrir el importe total de las jubilaciones y pensiones. Pero en lo demás era absolutamente independiente; dictaba su propio presupuesto; el Directorio se regía por su propio Reglamento Interno designaba su personal, concedía beneficios, etc.El hecho de que su presupuesto debía ser sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo o de que sus decisiones fueran susceptibles de apelación ante la Cámara Federal no le quitaba ese carácter de independencia; eran limitaciones impuestas por el juego regular de las Instituciones de un estado de derecho.

Aparte del texto legal de la ley 11.308 que demuestra que los empleados de la Caja estaban equiparados a cualquier empleado ferroviario, basta recordar que el supuesto preliminar de todo empleado público exige por de pronto la obligación de servir al Estado. Sin obligación del Estado no hay función pública posible. Los empleados de la Caja de Jubilaciones y Pensio-

laró a pedido del Procurador Fiscal el sobreseimiento de-
itivo del procesado, no obstante reconocer el hecho impu-
o, en razón del carácter de la Institución en que el acu-
o formaba parte, extraña a juicio del Criminal a la Admi-
tración Nacional y por ende de la responsabilidad penal
existe para los empleados públicos.

En otro caso, en el expediente nº 187 de don Antonio B.
Mitchell, los Ministros de Justicia e Instrucción Públi-
y de Obras Públicas de la Nación, con fechas 6 y 27 de ju
de 1939 respectivamente, y previo dictamen del Procura-
del Tesoro, en sendas resoluciones declararon que el De-
to del Poder Ejecutivo sobre incompatibilidades del 23 de
zo de 1932 no era aplicable a los empleados de la Caja Na
nal de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros Fe
viarios por no pertenecer éstos al personal administrati-
y técnico de la Nación.

Asimismo, en diversas cuestiones planteadas a empleados
la Caja, que a su vez desempeñaban cargos en Ministerios
tras reparticiones públicas, en virtud de las disposicio-
s prohibitivas del Decreto del Poder Ejecutivo del 23 de
zo de 1932 sobre incompatibilidades, la autoridad adminis
tiva se pronunció reiteradamente en el sentido de que no
s alcanzaba la incompatibilidad establecida por el mencio-
o decreto, por no formar parte dichos empleados de la Ad-
inistración Pública Nacional (Casos Roberto J. Carman, Ma-
o A. Ramírez y Carlos Arduino).

Y por último, en casos más recientes, el ex-Procurador
l Tesoro Sr. Julio Velar de Irigoyen emitió opinión en
ual sentido en los siguientes expedientes: En el expte. Nº
2456/1944 "Caja Nacional de Previsión Ferroviaria r/a de-
tos 167/168 s/asistencia y previsión para ferroviarios",
n fecha 6 de julio de 1944 dictaminó que la Caja Ferrovia
a no constituye una Repartición del Estado en el concepto
organismo integrante de la Administración Pública. Es una
stitución independiente de la Administración del Estado do
da de una amplia autoridad financiera y de gestión. Y en el

nes para Empleados Ferroviarios prestaban servicios a la Caja, a sus beneficiarios en todo caso, a aquellos propietarios de los fondos y rentas obtenidas en virtud de la ley, pero no a la Nación. En síntesis, ni la Caja Nacional de Jubilación y Pensiones para Empleados Ferroviarios pertenecía a la Administración Pública, ni sus empleados eran empleados de la Administración Pública Nacional.

El criterio expuesto fué el que orientó todas las resoluciones judiciales y administrativas dictadas en casos en que se planteó la situación de la Caja y sus empleados, con anterioridad a la creación del Instituto Nacional de Previsión Social, en que dicha Caja se incorporó al nuevo organismo (Decreto 29.176/44) y nada mejor a mi juicio, que remitirse a las aludidas resoluciones para evacuar la consulta formulada a fs. 28. A los fines señalados estimo conveniente mencionar algunas de ellas. Así en el expediente K-10.979 "Knischnik Victor s/reincorporación al servicio, promovido por un empleado de la Caja dejado cesante con motivo de irregularidades de índole administrativa, debidamente comprobadas,y en el que a mérito de haber sido sobreseido definitivamente en la causa que se le incoara por dichas irregularidades, solicitaba se le aplicara el decreto del Poder Ejecutivo del 16 de enero de 1913, que dispone "que el empleado suspendido que compruebe su inocencia tendrá derecho a percibir los haberes correspondientes al tiempo en que estuvo privado del cargo". El Presidente de la Caja, con fecha 14 de agosto de 1931 resolvió desestimar la petición, por considerar que ese decreto sólo era de aplicación para el personal de la Administración Nacional, y no para el de la Caja de Jubilaciones de Ferroviarios, por no revestir este organismo el carácter de dependencia de la Administración Nacional ni tampoco de Institución Pública.

En la causa seguida ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional de la Capital contra el ex-empleado de la Caja Victor Knischnik, por el delito de cohecho, el Juez doctor Miguel Jantus en sentencia de fecha 8 de mayo de 1931,

expte. Nº 351.563/1948 Tesorería General de la Nación s/ bonificación por antigüedad. M. de Hac. con fecha 29 de octubre de 1949, opinó: "que antes de la creación del Instituto Nacional de Previsión Social que actúa como entidad rectora en materia de jubilaciones y pensiones del cual dependen en la actualidad todas las Cajas no como tales sino como Seccionales, cada una de ellas no se consideraban como integrantes de la Administración Nacional, sino sujetas al régimen de la ley orgánica de creación de las mismas con excepción a la de la ley 4.349 adonde aportaban los empleados públicos nacionales propiamente dichos. Cambia la situación de la Caja de la ley 10.650 al incorporarse al Instituto Nacional de Previsión Social. Desde esa época el personal de la misma puede ser considerado como integrante de la Administración Pública Nacional...".-

En mérito de lo expuesto al comienzo de este dictamen, y de las resoluciones y opiniones a que me he referido precedentemente, estimo cabe concluír, que en la época en que fueron prestados los servicios invocados por don Alejandro J. Rochaix, la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ferroviarios no era parte integrante de la Administración Pública Nacional y por ende, el nombrado no invistió el carácter de empleado de dicha Administración.-

Asesoría Letrada, julio 10 de 1956.-

Dr. JOSE D. CAMPOLONGO
Abogado Asesor Jefe
Caja Nacional de Previsión
Para el Personal Ferroviario

//—nos Aires, 20 de agosto de 1956.-

Atento lo requerido a fs.28 por el Ministerio de Hacienda de la Nación y en uso de las facultades que le confiere el artículo 2º del decreto nº 658/55; por los fundamentos y consideraciones vertidos por la Asesoría Letrada en su dictámen de fs. 32/34, que el suscripto hace suyos y no reproduce para evi

tar repeticiones enojosas, elévese al mencionado Ministerio informándole que en la época en que fueron prestados los servicios invocados por don Alejandro J. Rochaix, la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ferroviarios no era parte integrante de la Administración Pública Nacional y, por tanto, que el nombrado no invistió el carácter de empleado público.

Previamente, desglósese por Gestores el expediente As.Vs. nº 10.979 y su agregado As. Vs. nº 122.460, para su devolución a la Caja Nacional de Previsión para el Personal de Servicios Públicos.-

Fdo. Dr. HECTOR P. BARMASCH
Delegado Interventor
Caja Nacional de Previsión
Para el Personal Ferroviario

//—nos Aires, 29 de agosto de 1956.-

Visto el recurso deducido en las presentes actuaciones por el señor Alejandro J. Rochaix; atento lo expuesto por la Asesoría Letrada de la Caja Nacional de Previsión para el Personal Ferroviario a fs. 32/34 y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos a fs. 37, estése a lo resuelto por este Ministerio en fecha 22 de julio de 1955.-

Tome nota la Direcdión General de Contabilidad y Administración y pase a la Dirección General Impositiva para su conocimiento y notificación al interesado.

Fdo. EUGENIO A. BLANCO

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 175.-

VIATICOS - HORAS EXTRAORDINARIAS.

Buenos Aires, 8 de marzo de 1957.-

Visto el expediente Nº 9.687/56 (M.de H.), en el que la Universidad Nacional de Cuyo consulta sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 18.989/56, y atento a la facultad que le confiere el artículo 13º de dicho pronunciamiento,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Cuando se trate de funcionarios o empleados que desempeñen más de un cargo y deban realizar comisiones del servicio, la liquidación del viático establecido por el artículo 2º del Decreto Nº 18.989/56 se efectuará sobre el sueldo básico correspondiente al cargo en cuyo carácter represente a la Repartición de la cual depende.

ARTICULO 2º.- A los fines de la aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 2º, parte II, inciso a), déjase aclarado que el viático completo será liquidado siempre que la comisión del servicio que lo origine tenga comienzo antes de los DOCE (12) HORAS del día de salida y finalice después de dicha hora del día del regreso.

ARTICULO 3º.- En el caso de que personal de una jurisdicción concurra a otra para completar jurados de los concursos para integrar cátedras o situaciones similares, el viático correspondiente será liquidado con cargo al presupuesto de la Repartición que requiera los servicios con arreglo al régimen fijado por el Decreto Nº 18.989/56.-

ARTICULO 4º.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7º

del Decreto antes mencionado, debe considerarse tarea extraordinaria a la que se realice al margen del horario normal de labor establecido, alcanzando esta regla a todo el personal cualquiera sea su clase, denominación o categoría, con sueldo básico de hasta DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.000).

ARTICULO 5º.- Dése a la presente carácter de resolución aclaratoria del Decreto Nº 18.989/56.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese y fecho archívese.-

Fdo. ROBERTO VERRIER

RESOLUCION Nº 55.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 176.-

DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL (REGLAMENTO)

Buenos Aires, 18 de marzo de 1957.-

Visto lo dispuesto por el decreto nº 21.644 de fecha 4 de diciembre de 1956, por el cual se reestructura la Dirección General de Obra Social del Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 17º del citado decreto faculta a este Departamento para dictar su reglamentación, como así también las normas aclaratorias y complementarias que estime pertinente;

Por ello y atento al proyecto elevado por la Dirección General de Obra Social,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

CAPITULO I

Finalidad:

ARTICULO 1º.- La Obra Social de este Departamento funcionará bajo la denominación de DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION, y tendrá la organización, atribuciones y obligaciones que determina el decreto nº 21.644 de fecha 4 de diciembre de 1956 y las que le acuerda el presente reglamento.

ARTICULO 2º.- La Dirección General de Obra Social, tendrá por objeto la atención de los servicios sociales para su propio personal y el perteneciente a este Departamento, inclusive las reparticiones descentralizadas, con la excepción establecida en

el artículo 1ª del citado decreto. Sin perjuicio de ello, podra también extender sus prestaciones al personal de otros organismos del Estado Nacional y de la Municipalidad de la Capital Federal, mediante la celebración de convenios especiales, previa autorización acordada por este Ministerio.

ARTICULO 3ª.- Los servicios a desarrollar por la Obra Social serán, como mínimo, los que se expresan en el artículo 2ª del decreto nª 21.644/56, pudiendo ampliarlos a medida que su organización o recursos lo permitan.

CAPITULO II
Organización y Administración

ARTICULO 4ª.-La Dirección General de Obra Social tendrá la siguiente organización:

a) Dirección General;
b) Subdirección General;
c) Departamento Administrativo;
   1) División Comercial.
   2) División Contaduría.
   3) División Tesorería.
   4) División Registro de Afiliaciones.
   5) División Despacho
d) Departamento de Acción Social:
   1) División Acción Social.
   2) División Servicios de Sanidad.
e) Comisión de Compras y Adjudicaciones;
f) Instituto Médico Quirúrgico;
g) Hotel Serrano y Balneario de Huerta Grande (Córdoba);
h) Auditoría Interna y Organización;
i) Asesorías.-

ARTICULO 5ª.- La Administración de la Dirección General de Obra Social estará a cargo de un Director General y un Subdirector General, nombrados en la forma que establecen los artículos 3ª y 15ª del decreto nª 21.644/56. Además el per-

sonal integrante se formará por orden jerárquico, con los Jefes del Departamento Administrativo y del Departamento de Acción Social respectivamente, el Médico Director y el Administrador del Instituto Médico Quirúrgico, el Administrador del Hotel Serrano y Balneario de Huerta Grande (Córdoba) y con los Jefes de las Divisiones y Secciones correspondientes y demás agentes auxiliares previstos en el presupuesto anual.

ARTICULO 6º.- El Director General de Obra Social, además de las funciones que le fija el artículo 5º del decreto nº 21.644/56, podrá dirigirse directamente en todos los asuntos de su competencia a reparticiones y dependencias nacionales, provinciales y municipales, como así también requerir ante quien corresponda la aplicación de sanciones para los afiliados "principales" que, en su condición de tales se hubieran hecho pasible de ellas.

ARTICULO 7º.- El Subdirector General ejercerá sus funciones en la forma que establece el artículo 6º del decreto nº 21.644/56, y de conformidad al reglamento interno que la Dirección General de Obra Social dicte de acuerdo a las prescripciones del referido decreto y a las de la presente reglamentación.

ARTICULO 8º.- La Dirección General será asistida por un Consejo Consultivo que la asesorará en todo lo relacionado con los servicios a cargo de la misma. El cargo de Presidente del Consejo Consultivo será ejercido por el Director General y en su ausencia, lo reemplazará el Subdirector General.

ARTICULO 9º.- El Consejo Consultivo estará integrado, además, por seis Vocales titulares y tres suplentes, en representación de los afiliados. Los Vocales durarán tres años en sus funciones y se renovarán tres cada año, debiéndose efectuar un sorteo en la primera sesión que realice para determinar el término del primer mandato, incluyendo a los suplentes. La designación de los vocales y el reemplazo de uno o más de ellos, se ajustará a lo establecido en el artículo 4º del decreto 21.644/56. Formará quorum con la presencia de la mitad

más uno de sus miembros, debiéndose dejar constancia de lo tratado en cada sesión labrándose a tal efecto el acta pertinente La asusencia de cualquiera de los vocales a tres reuniones consecutivas, sin causa justificable, dará lugar a su reemplazo definitivo hasta la terminación de su mandato. El Consejo Consultivo se dará a los efectos de su funcionamiento su propio reglamento, ajustándose a las prescripciones del referido decreto, y a la presente reglamentación. Para ser vocal se requerirá: a) ser argentino; b) revistar en alguna de las reparticiones o dependencias comprendidas en el presente régimen, con una antigüedad mínima de un año; c) no integrar comisiones directivas de organizaciones gremiales o políticas; d) tener antecedentes que hagan a su buen nombre; e) no revistar en orden de dependencia directa en la Dirección General de Obra Social.

Las funciones de Miembro del Consejo Consultivo son incompatibles con las de Delegado de la Dirección General de Obra Social.

Los Vocales del Consejo Consultivo se desempeñarán "ad-honorem".

ARTICULO 10ª.- El Consejo Consultivo está facultado para requerir la concurrencia a sus Sesiones, de los funcionarios de la Obra Social cuya presencia resulte necesaria para la consideración de los asuntos en trámite.

ARTICULO 11ª.- Las funciones, atribuciones y deberes de los distintos Departamentos y sus Divisiones y Secciones, así como los concernientes al Instituto Médico Quirúrgico y al Hotel Serrano y Balneario de Huerta Grande (Córdoba); Comisión de Compras y Adjudicaciones; Auditoría Interna y Asesorías, serán reglamentados por el Director General dándose cuenta al Consejo Consultivo, y ajustándose a las normas establecidas en general y a las que en particular dispone el decreto nª 21.644/56.

ARTICULO 12ª.- El Instituto Médico Quirúrgico dependerá directamente de la Dirección General de Obra Social, a quien asesorará en su carácter de organismo técnico en la materia de su competencia.

CAPITULO III

Beneficiarios :

ARTICULO 13ª.- Gozarán de los beneficios de la Obra Social las personas que establece el artículo 8ª del decreto nª 21.644/56 y el artículo 2ª de la presente reglamentación. Los afiliados de la Obra Social se clasificarán según las siguientes categorías:

a) PRINCIPALES: Que comprende al personal en servicio en el Ministerio, dependencias y reparticiones descentralizadas, cuya afiliación se declara obligatoria, con excepción del comprendido en el régimen del decreto-ley nª 20.714/56.

b) ADHERENTES: Los jubilados, retirados y pensionistas del Ministerio de Hacienda y sus reparticiones descentralizadas, cualesquiera sean las Cajas y el régimen de previsión. Los agentes que pasaren a desempeñarse a otra repartición nacional, podrán continuar afiliados en la categoría de "adherentes".

c) ACCESORIOS: Están incluidos en esta categoría los siguientes parientes de los afiliados "principales" y Adherentes": cónyuges, padres, padres políticos; hijos y hermanos varones hasta los 22 años de edad y mujeres hasta cualquier edad cuando fueren solteras o viudas y que, en todos los casos, estén a cargo del afiliado.
Están comprendidos asimismo en esta categoría los hijos adoptivos o los menores que estuvieren fehacientemente a cargo exclusivo de los afiliados "principales" o "adherentes".
Los hijos menores de dos años de los afiliados "principales" o "adherentes" se consideran afiliados "accesorios", no abonando cuota alguna hasta cumplir dicha edad, continuando automáticamente a posteriori como afiliados "accesorios" con abono de cuota salvo renuncia expresa del titular.

ARTICULO 14º.- Las solicitudes de ingreso y las declaraciones juradas conteniendo los datos personales que especifique la Dirección General de Obra Social, correspondientes a los afiliados, serán presentadas por éstos dentro del plazo de NOVENTA (90) días a contar de las fechas que se indican a continuación:

PRINCIPALES: A partir de la fecha en que ingresen a la repartición para la cual han sido nombrados.

ADHERENTES: Desde el día en que renuncien para acogerse a los beneficios de la jubilación o retiro, o que ingresen a otra repartición nacional.
El pase a la categoría de "adherentes" de los "accesorios" que por fallecimiento del principal tengan derecho a los beneficios de la pensión que acuerdan las leyes de previsión social, deberá ser solicitado dentro del término de NOVENTA (90) días de ocurrido el deceso.

La presentación de la documentación de que se trata es requisito indispensable para hacer uso de los servicios sociales.
ARTICULO 15º.- La afiliación de los "accesorios" deberá solicitarse dentro de igual término al fijado por el artículo 14º, salvo que las condiciones establecidas en el inciso c) del artículo 13º de esta reglamentación, se reúnan con posterioridad a la fecha de designación del afiliado "principal" o a la de obtención de la jubilación, retiro o pensión del "adherente, en cuyo caso deberá ser solicitada dentro de los NOVENTA (90) días de producida esa circunstancia.
ARTICULO 16º.- Los afiliados "principales", "adherentes" o "accesorios" cuya solicitud de ingreso y declaración jurada fuera presentada en la Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General de Obra Social, una vez vencidos los plazos establecidos precedentemente, no podrán hacer uso de los servicios sociales hasta transcurrido un término de ciento veinte (120) días a partir de la fecha en que la referida documentación ingresara a dicha oficina, y sin perjuicio del pago de las cuotas durante el mismo término.

ARTICULO 17º.- Las cuotas de afiliación de los "principales" serán liquidadas a partir de la fecha de alta en sus empleos y la de los "adherentes" y "accedorios" desde el primer día del mes siguiente al de presentación de sus solicitudes.
ARTICULO 18º.- Los afiliados "adherentes" y los "accesorios" que renuncien a su afiliación podrán reingresar a la Dirección General de Obra Social, en cuyo caso serán sometidos previamente a revisación médica y, aprobada su reinscripción, no podrán hacer uso de los servicios sociales hasta transcurrido un término de diez (10) meses, sin perjuicio del abono de las cuotas sociales durante igual período. A los efectos de la revisación médica, el Instituto Médico Quirúrgico se regirá por normas similares a las vigentes para el trámite por ante el Seguro Obligatorio para el Personal del Estado en cuanto concierne a la opción de capitales adicionales fuera de los términos establecidos.
ARTICULO 19º.- El afiliado "principal" que por cualquier causa cesare en su empleo, quedará automáticamente desafiliado como así también sus "accesorios", pudiendo no obstante, en los casos previstos por el artículo 13º inciso b) y dentro de los términos fijados por los artículos 14º y 15º solicitar su reafiliación y la de sus "accesorios".
ARTICULO 20º.- Entiéndese por parientes a cargo, aquellos que realmente están en esa situación con rescepto al afiliado "principal" o "adherente" y no tengan recursos propios superiores a m$n. 900 mensuales, a cuyo efecto deberán presentarse las correspondientes declaraciones juradas, aludidas en el artículo 14º y sin perjuicio de las informaciones sumarias que la Dirección General de Obra Social está facultada para realizar o requerir cuando así lo estime conveniente.
ARTICULO 21º.- El agente civil que esté cumpliendo el servicio militar o fuere incorporado obligatoriamente a las Fuerzas Armadas de la Nación, continuará revistando como "principal" y sus familiares en carácter de "accesorios". Ambas categorías de afiliación seguirán pagando sus respectivas cuotas.

ARTICULO 22º.- El afiliado "principal" que se halle con licencia sin goce de sueldo por razones particulares, podrá optar por seguir afiliado lo mismo que sus familiares "accesorios", o podrá solicitar su desafiliación temporaria mientras permanezca con licencia. Cuando se trate de licencia reglamentaria sin goce de sueldo por razones de salud, queda eximido del pago de su cuota y la de sus familiares accesorios mientras subsista esa situación.

ARTICULO 23º.- El afiliado "principal" que haya dejado de prestar servicios para acogerse a la jubilación o retiro y se encuentre realizando los trámites para ello, como así también los afiliados "accesorios" que gestionen pensión, y que por esas causas no puedan pagar sus cuotas de afiliación o retribución de servicios, deberán garantizar a satisfacción de la Dirección General de Obra Social el pago de sus cuotas y demás obligaciones contraídas durante aquel lapso.

ARTICULO 24º.- El afiliado deberá comunicar, inmediatamente que se produzca, toda alteración o modificación de los datos consignados en sus declaraciones juradas y solicitudes, o en la de sus familiares, con motivo de casamiento, nacimiento, mayoría de edad de hijos y hermanos varones, fallecimientos, y toda otra circunstancia que altere su situación.

ARTICULO 25º.- Toda declaración falsa u omisión voluntaria o maliciosa por parte del afiliado "principal" o "adherente", de cualquier dato referido a su persona o parientes, en los formularios que deban llenar o en la información que deban producir, será considerada falta grave y podrá ser sancionada con apercibimiento, suspensión, cesantía, exoneración o cancelación de su afiliación y la de sus "accesorios" según corresponda, sin perjuicio de las acciones legales a que dé lugar por la responsabilidades asumidas y por el monto de los perjuicios ocasionados a la Dirección General de Obra Social.

ARTICULO 26º.- El afiliado "principal" y el "adherente" es responsable por la conducta de sus afiliados "accesorios" en las relaciones mismos con la Dirección General de Obra Social.

ARTICULO 27º.- Los afiliados comprendidos en los casos a que se refiere el artículo 22º no podrán contraer compromisos con la Dirección General de Obra Social que signifiquen obligaciones futuras.

ARTICULO 28º.- Los afiliados "accesorios" menores de 18 años, huérfanos de "principal" o "adherente", y que no cuenten con recurso alguno, no abonarán cuota y seguirán gozando de los mismos beneficios y servicios. La Dirección General de Obra Social podrá disponer aquellas medidas que estime convenientes para concurrir en su ayuda.

ARTICULO 29º.- En caso de cónyuges, ambos afiliados "principales" o "adherentes" la declaración jurada de las personas a cargo deberá ser efectuada por el afiliado que perciba mayor haber.

ARTICULO 30º.- La afiliación en cualquier carácter a la Dirección General de Obra Social implica el conocimiento y aceptación de los términos del decreto nº 21.644/56, de la presente reglamentación y normas concordantes.

ARTICULO 31º.- Para ser atendido en cualquiera de los servicios o para requerir los beneficios que otorga la Dirección General de Obra Social, será requisito indispensable la presentación del carnet de afiliado y del cupón u otro recibo que compruebe el pago de las cuotas de afiliación. Los afiliados podrán hacerse representar exclusivamente para realizar adquisiciones en las Proveedurías de la Obra Social, debiendo en cada caso llenar los requisitos que dicte la Dirección General .

ARTICULO 32º.- La Dirección General de Obra Social queda facultada para autorizar libre del pago de cuotas, la utilización de los servicios de Proveeduría y de Turismo, a favor de los profesionales que sin encontrarse en orden de dependencia directa presten servicios a dicho organismo en forma permanente, con exclusión de todo otro beneficio y siempre que las ventas o los servicios sean a título oneroso y no estén subsidiados total o parcialmente por la Obra Social. A tal efecto, extenderá las respectivas credenciales que deberán ser distintas de las que se entreguen a los afiliados.

CAPITULO IV

Recursos

ARTICULO 33ª.- Los afiliados a la Dirección General de Obra Social deberán contribuir con las cuotas mensuales que establezca este Departamento de Estado, de conformidad a lo establecido por los incisos b) y c) del artículo 9ª del decreto nª 21.644/56,y de acuerdo a la facultad conferida al Director General por el inciso 11) del artículo 5ª del mismo decreto.

ARTICULO 34ª.- Los demás recursos, fondos y bienes están constituídos en la forma que establecen los incisos a), d), e) y f), del decreto nª 21.644/56, debiendo la Dirección General de Obra Social elevar a consideración de este Ministerio y dentro del plazo de NOVENTA (90) días, un proyecto para establecer el régimen permanente acerca de la contribución del Estado Nacional, a que alude el citado inciso d).

ARTICULO 35ª.- Las contribuciones correspondientes a los afiliados serán calculadas, retenidas y abonadas a la Dirección General de Obra Social, en la forma que establece el artículo 10ª del decreto nª 21.644/56. A tal efecto las dependencias y reparticiones deberán remitir además, dentro de los mismos términos, el detalle de las retenciones que por cualquier motivo no hubieran podido practicarse en el mes correspondiente.

ARTICULO 36ª.- Los Delegados en el Ministerio, sus dependencias y reparticiones descentralizadas, serán designados por la repartición donde revistaren de una terna que elevará la Dirección General de Obra Social, quienes se desempeñarán "ad-honorem" y sin perjuicio del cumplimiento de sus tareas específicas.

ARTICULO 37ª.- El incumplimiento en el pago de las cuotas y demás conceptos que se adeuden a la Dirección General de Obra Social, dará lugar a la suspensión de todos los derechos del afiliado moroso y los de sus "accesorios", hasta tanto regularicen su situación con la Tesorería.

ARTICULO 38º.- Las cuotas de afiliación correspondientes a los agentes que pasaren a revistar en otras dependencias estatales y optaren por ser "adherentes", serán determinadas en función de las retribuciones sujetas a descuento jubilatorio que perciba en el nuevo destino, siempre que la cuota que así resultare no fuera inferior a la abonada durante su empleo en este Ministerio. De ocurrir este supuesto, se le fijará una cuota igual a la última descontada.

ARTICULO 39º.- En todos los casos y categorías de afiliación, las cuotas serán computadas por mes calendario, abonándose integramente por igual período cualesquiera sea la fecha de alta o baja del agente dentro del mes.

ARTICULO 40º.- La Dirección General de Obra Social tendrá prioridad en la percepción de cuotas y cargos de los afiliados, cuyo descuento se hará efectivo sobre los respectivos haberes, después de cubiertos los correspondientes al Instituto Nacional de Previsión Social, Dirección General Impositiva y préstamos comprendidos en el decreto nº 6.754/43 y sus concordantes.

ARTICULO 41º.- Las reparticiones antes de proceder al pago de haberes al personal que por cualquier motivo cese en sus funciones, solicitarán a la Dirección General de Obra Social el monto de los cargos que el afiliado tenga pendientes. De la misma forma, las reparticiones requerirán a los agentes dados de baja y previamente al pago de los haberes aún impagos, inclusive el sueldo anual complementario, la devolución del carnet que los acredita como afiliados a la Dirección General de Obra Social, incluso los de sus "accesorios". Los carnets retirados serán remitidos por la vía más rápida a dicho organismo, cruzándolos con la palabra "anulado". En el caso de que el agente cesante manifestara haber extraviado el carnet, deberá remitirse una declaración jurada firmada por el mismo donde así conste.

CAPITULO V
Generalidades

ARTICULO 42º.- Los fondos de la Dirección General de Obra So

cial se depositarán en la forma que determina el artículo 13ª del decreto nº 21.644/56.

ARTICULO 43ª.- Las operaciones y peticiones en general que formulen los afiliados deberán ser efectuadas en los formularios oficiales que a tales fines se habiliten.

ARTICULO 44ª.- El carnet que acredita la afiliación a la Dirección General de Obra Social en la categoría de afiliado "principal", servirá a su vez como identificación de su calidad de agente de este Departamento.

ARTICULO 45ª.- La Dirección General de Obra Social se asesorará por el Consejo Consultivo para resolver los casos especiales y las situaciones no previstas por las normas en vigor, y para así también interpretar sus disposiciones en los casos de duda.

CAPITULO VI

Disposiciones Transitorias

ARTICULO 46ª.- Hasta tanto el Tribunal de Cuentas de la Nación no determine el procedimiento a seguir, concordante con la disposición contenida por el artículo 138ª del decreto-ley nº 23.354/56, fíjanse las siguientes disposiciones transitorias respecto a la administración de fondos y régimen de contrataciones correspondientes a la Dirección General de Obra Social:

a) La administración de los fondos correspondientes a la contribución estatal a que se refiere el inciso d) del artículo 9ª del decreto nº 21.644/56, se hará con sujeción a las normas que rigen la materia, con cargo de rendir cuentas a la Contaduría General de la Nación
Los fondos restantes serán administrados directamente por la Dirección General de Obra Social, de acuerdo a las disposiciones que establece el referido decreto, la presente reglamentación y normas concordantes. Los recursos no invertidos en un ejercicio se transferirán automáticamente, cualesquiera sea su origen, al siguiente.

b) Toda convención o contrato que obligue a la Dirección General de Obra Social, se regirá en la forma que establece el artículo 14ª del decreto nª 21.644/56, manteniéndose en vigor hasta tanto no se resuelva de otra manera la resolución M.H. - D.O.S. nª 7 de fecha 22 de marzo de 1956 y las resoluciones internas números 35 y 36 de la Dirección de Obra Social de fechas 8 y 9 de marzo de 1956, respectivamente, en cuanto no se opongan a la primera.-

ARTICULO 47ª.- En virtud de la reestructuración que se lleva a efecto, se faculta a la Direccion General de Obra Social para que por esta única vez suspenda los términos del artículo 16ª precedante, prestando los servicios sociales a los afiliados "principales" y "accesorios" cuya registración se encuentre en tramite o se tramite hasta el 30 de abril de 1957, quienes gozarán de los beneficios en forma inmediata a partir de su inscripción.

ARTICULO 48ª.- Derógase la resolucion ministerial nª 3/951, sus concordantes y aclaratorias y toda otra disposición que se oponga a la presente.

ARTICULO 49.- Comuníquese, tómese conocimiento por donde corresponda, publíquese por el Boletín Informativo de la Dirección General de Obra Social y archívese.-

Fdo. ROBERTO VERRIER

RESOLUCION Nª 7.078.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 177.-

SUELDO - COSTO DE VIDA - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Buenos Aires, 13 de marzo de 1957.-

Visto la consulta formulada por la Dirección General de Contabilidad y Administración y la aclaración producida por la Dirección General de Finanzas del Ministerio de Hacienda de la Nación (Res. nº S.D. 27 del 15 de febrero de 1957), respecto a la liquidación que en concepto de bonificación por costo de vida corresponde a los agentes menores de 22 años cuyo sueldo básico sea de $ 700, mensuales, y

CONSIDERANDO:

Que es conveniente que dicha interpretación sea puesta en conocimiento de los señores delegados y fiscales destacados ante las distintas dependencias, a efectos de su ulterior aplicación;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Los agentes menores de 22 años, cuyo sueldo básico mensual sea de $700, tienen derecho a la bonificación que en concepto de costo de vida determina, para dicha asignación, la escala establecida por el artículo 24 del decreto-ley nº 23.573 del 31 de diciembre de 1956.

ARTICULO 2º.- Dése al Digesto Administrativo y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli
José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene - Secretario.-

RESOLUCION Nº 196.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 178.-

GASTOS EN PERSONAL - LIQUIDACIONES - APROPIACION DE GASTOS - SUELDOS - LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Buenos Aires, 20 de marzo de 1957.-

Vista la necesidad de reglar el procedimiento que se ha de observar en la liquidación de gastos en personal que por su particularidad puede ofrecer dudas frente a las disposiciones de la ley de contabilidad y,

CONSIDERANDO:

Que una vez clausurado el ejercicio, por fenecimiento del término legal, se procede a la liquidación de créditos del rubro gastos en personal que, originados en el estado de revista o actuación del agente durante el ejercicio cerrado, sólo pueden ser determinados con posterioridad en cuanto a su procedencia y monto;

Que en tales casos es necesario determinar previamente el compromiso legal, en función del cual se ha de operar el compromiso contable;

Que dicho compromiso legal en materia de gastos en personal se perfecciona en la oportunidad en que se crea el vínculo jurídico entre el Estado y su agente, o sea cuando se dicta por autoridad competente el acto administrativo de su nombramiento;

Que, consecuentemente, cuando por otro acto administrativo se reconoce el derecho a hacer efectivo un crédito, originado en el reconocimiento de licencias con goce de sueldo, diferencias en los pagos de haberes, etc., corresponde la apropiación al ejercicio de su liquidación;

Que este procedimiento deberá ser observado siempre y cuando se cuente con saldo suficiente en la partida respectiva, ya que en caso contrario deberá gestionarse el crédito necesario;

Que esta interpretación surge de las prescripciones del artículo 25 de la ley de contabilidad;

Por ello y atento la facultad acordada por el artículo 84, inciso o) de la ley de contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Los gastos en personal originados en la situación de revista o actuación de un agente del Estado durante un ejercicio clausurado serán apropiados a la partida principal pertinente del ejercicio de su liquidación, siempre que se trate de agentes nombrados por autoridad competente y exista saldo suficiente en dicha partida.

ARTICULO 2º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J.Tarelli
Eusebio E. Villar - Wifredo Dedeu -
Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 203.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 179.-

HACIENDAS PARA ESTATALES - LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - OBRAS SOCIALES

Buenos Aires, 20 de marzo de 1957.-

Visto lo actuado en el expediente Nº 70.579/57 en el que se consultó sobre el régimen a que deben ajustarse las contrataciones que realice la Dirección General de Obra Social del Ministerio de Hacienda frente a las disposiciones de la ley de contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que la situación jurídica institucional de las obras sociales dependientes de los ministerios, entidades descentralizadas y empresas del Estado no ha sido definida por un acto positivo de autoridad competente, no obstante distintas opiniones y proyectos que al respecto fueran tramitados en diversas oportunidades;

Que ello dió lugar a que la Contaduría General de la Nación (informe 378/53 -expte. 112.807/52, elevado al Ministerio de Hacienda el 3 de febrero de 1953 y reiterado repetidamente) se expidiera en el sentido de que, hasta tanto no se defina concretamente esa situación, no existen impedimentos en que las obras sociales de los ministerios, entidades descentralizadas y empresas del Estado continúen desenvolviéndose en las condiciones previstas en los pronunciamientos que las crearan y de acuerdo con las normas de organización y funcionamiento contempladas en los mismos;

Que la nueva ley de contabilidad no ha modificado la situación, por cuanto, si bien las obras sociales están comprendidas entre las denominadas haciendas para estatales, referidas en su artículo 138, y por lo tanto sometida a la jurisdic

ción del Tribunal de Cuentas de la Nación, en cambio no ha fijado un régimen especial para su funcionamiento ni tampoco les ha impuesto la obligatoriedad de ajustar su cometido a las disposiciones generales de la ley;

Que en tal sentido procede que las obras sociales continúen aplicando el régimen establecido por sus pronunciamientos de creación y organización;

Por ello, y en uso de la atribución que le confiere el artículo 84, inciso o) de la ley de contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E:

ARTICULO 1a.- Los agentes del Tribunal de Cuentas, darán curso a los actos emanados de las autoridades competentes de las obras sociales de la administración nacional en todas sus ramas, que se dicten con sujeción al régimen de funcionamiento establecido en sus leyes y decretos de creación u organización, hasta tanto se dicte una disposición definitiva respecto al carácter jurídico-institucional de esas entidades.

ARTICULO 2a.- Comuníquese por Digesto Administrativo y archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli
Eusebio E. Villar - Wifredo Dedeu -
Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos
Pastene -Secretario-

RESOLUCION Na 205.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 180.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - LIQUIDACIONES - COMPROMISOS

Buenos Aires, 21 de marzo de 1957.-

Visto el expediente 170.037/57 del Registro de la Contaduría General de la Nación y las consultas formuladas a este Tribunal por sus agentes, y

CONSIDERANDO:

Que con motivo de la variabilidad de precios acordada para la adquisición de ciertos artículos, como así también en los casos en que se rescinde un contrato por incumplimiento del proveedor y se contrata con otro a un mayor precio, existen diferencias a pagar que no pudieron preverse en el momento de la adjudicación y por consiguiente no se registraron originalmente en la computación contable del compromiso;

Que la circunstancia señalada precedentemente hace necesario determinar la forma de liquidar y pagar esas diferencias a los proveedores del Estado;

Que pueden, en la práctica, presentarse dos situaciones a saber: a) que la exigibilidad de la diferencia se manifieste dentro del ejercicio en que fué contraído el compromiso; b) que se manifieste después de cerrado ese ejercicio;

Que en el primer caso no existe duda alguna, puesto que la mayor erogación resultante deberá afectar los créditos del mismo ejercicio;

Que el problema se plantea en el segundo caso, este es, cuando la obligación de pagar una suma mayor se pone de manifiesto una vez cerrado el ejercicio.

Que esta situación está resuelta por el último párrafo del artículo 25 de la ley de contabilidad que dice:

"Exceptúase del régimen señalado a aquellas erogaciones "cuyo monto solo pueda establecerse al practicar la res "pectiva liquidación, que será la que determinará el com "promiso".-

Que, en efecto, la obligación de pagar esa diferencia no puede preverse en el momento que se aprueba la adjudicación, toda vez que resulta de hechos y circunstancias posteriores y, por tanto, numéricamente imponderables en la oportunidad de la adjudicación y del compromiso contable;

Que siendo el principio general de la ley de contabilidad que al cierre de cada ejercicio debe computarse como residuo pasivo las sumas comprometidas durante el mismo y no incluídas en libramientos, las diferencias en más deberán imputarse al ejercicio de su liquidación previa aprobación por autoridad competente;

Que en caso de que la diferencia que se comenta tuviera una magnitud que creara reales dificultades con respecto a la partida del ejercicio siguiente que deba absorberla ello podría conjurarse mediante su refuerzo conforme a los medios legales pertinentes;

Por ello, y atento a la facultad que consagra el inciso o) del artículo 84 de la ley de contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Las diferencias a pagar, con motivo de la variabilidad de precios legalmente consentida o que resulten como consecuencia de la rescisión de contratos por incumplimiento del proveedor y su ulterior ejecución a cargo de éste, deberán registrarse conforme al procedimiento que se fija en los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO 2º.- Dése a Digesto Administrativo, comuníquese y archívese.-

RESOLUCION Nº 213.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 181.-

CONTADORES FISCALES - OBSERVACIONES - LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Buenos Aires, 21 de marzo de 1957.-

Visto las disposiciones de los artículos 85 y 87 de la ley de contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que es facultad privativa del Tribunal de Cuentas analizar todos los actos administrativos que se refieren a la hacienda pública y observarlos cuando contraríen o violen disposiciones legales o reglamentarias;

Que las observaciones del Tribunal de Cuentas suspenden el cumplimiento del acto en todo o en la parte observada;

Que el Poder Ejecutivo y el presidente de la cámara respectiva o de la Suprema Corte de Justicia, en los poderes Legislativo y Judicial, respectivamente, son las únicas autoridades facultadas para insistir, dentro de sus respectivos poderes, los actos observados por el Tribunal de Cuentas, cualquiera fuere la autoridad que los hubiera suscripto;

Que es necesario fijar el procedimiento a seguir en la emergencia;

Por ello y atento a la facultad conferida por el inciso o) del artículo 84 de la ley de contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Los contadores fiscales que tengan a su cargo el servicio de delegación ante organismos centralizados o descentralizados de la administración nacional, en cualquiera de sus poderes, cuando consideren que un acto administrati-

vo que se refiere a la hacienda pública, ha sido dictado en contravención o violación de las disposiciones legales o reglamentarias que fueran de aplicación, deberán remitir las respectivas actuaciones al Tribunal de Cuentas, dentro de los plazos que fija el inciso b), artículo 1ª de la resolución 2.920/955 (D.A. 392), justamente con la información que determina el punto 2ª, inciso b), artículo 85 de la ley de contabilidad.

ARTICULO 2ª.- El Tribunal de Cuentas analizará el acto y si comparte las objeciones formuladas dictará la correspondiente observación legal que, con conocimiento de la delegación del ramo, remitirá al organismo de origen, con la indicación expresa de que queda suspendido el cumplimiento del acto en todo o en la parte observada.

ARTICULO 3ª.- Si el Tribunal de Cuentas estima que el acto merece reparo, devolverá las actuaciones a la delegación de origen para su trámite ulterior.

ARTICULO 4ª.- Insistido un acto por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la cámara respectiva o por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en los poderes Legislativo y Judicial, respectivamente, los contadores fiscales sólo podrán darle curso previa intervención del Tribunal de Cuentas.

ARTICULO 5ª.- Juntamente con la intervención del Tribunal de Cuentas, el servicio central que despache la insistencia proyectará la comunicación al Congreso acompañando los antecedentes que determina el artículo 87 de la ley de contabilidad.

ARTICULO 6ª.- Los actos del Poder Ejecutivo y las resoluciones normativas de carácter general deberán ser remitidas directamente por los contadores fiscales, en todos los casos, al Tribunal de Cuentas.

ARTICULO 7ª.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli - Eusebio E. Villar Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nª 217.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 182.-

ASOCIACIONES PROFESIONALES

Buenos Aires, 23 de mayo de 1956.-

Visto la necesidad de dar cumplimiento al programa del Gobierno Provisional en cuanto se refiere a "establecer la libertad sindical de manera que queda asegurado el funcionamiento auténticamente democrático, en un marco de prescindencia de política partidista de las asociaciones gremiales y sindicales, cuyo afianzamiento constituirá especial preocupación para el Gobierno", y

CONSIDERANDO:

Que el derecho de asociarse con fines útiles está garantizado por la Constitución Nacional y su respeto constituye uno de los principios programados como orientadores de la acción del Gobierno Provisional;

Que de ese derecho de asociación surge, naturalmente, el derecho de los trabajadores de constituir asociaciones con miras al estudio de los problemas que les son específicos, a la defensa de los derechos que les son propios y al mejoramiento de sus condiciones de trabajo y de vida;

Que para el ejercicio de ese derecho es imprescindible que los trabajadores puedan actuar libremente en la determinación de la estructura y funcionamiento de las organizaciones sindicales, así como para decidir sobre su adhesión a determinado tipo de asociación;

Que aparte de la justicia que lleva en sí la adopción de un régimen legal que haga posible el ejercicio de la libertad sindical por parte de los trabajadores, es necesario reconocer a ella como uno de los medios más aptos para el logro de mejores condiciones de vida y de trabajo para la obtención de una paz social verdadera y estable;

Que la acción del Estado en esta materia debe estar orien

tada a asegurar la vigencia efectiva de la libertad sindical, sin más limitaciones que las que imponen las normas elementales de la convivencia democrática;

Que el régimen depuesto pregonó su adhesión a estos principios de liberta sindical sin llevarlas nunca a la práctica, trabando, por la misma ley de asociaciones profesionales, la acción sindical que no obedeciera a sus propósitos políticos;

Que ello hace imprescindible que el Gobierno Provisional reforme dicho cuerpo legal y lo adapte a los principios rectores de la libertad de agremiación, cumpliendo con uno de los postulados esenciales de la Revolución Libertadora;

Que en consecuencia, es necesario derogar del régimen legal de las asociaciones profesionales todas aquellas disposiciones que, directa o indirectamente, sirvieron y puedan servir para convertir al sindicalismo en un engranaje más del mecanismo totalitario;

Que la reforma del régimen legal vigente, en materia de asociaciones profesionales, debe apresurarse para acelerar, así, la debida difusión de los principios democráticos del nuevo cuerpo legal, entre todos los trabajdores del país;

Que las consideraciones que anteceden forman la esencia misma de la parte correspondiente de la proclama de Concepción del Uruguay del 1º de mayo próximo pasado;

Por lo tanto;

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA, EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO,

DECRETA CON FUERZA DE LEY;

ARTICULO 1º.- El Estado reconoce a los trabajadores el derecho de constituir libremente sus asociaciones profesionales.

ARTICULO 2º.- Se consideran asociaciones profesionales de trabajadores, las organizaciones permanentes de los que se desempeñan en un mismo oficio, profesión, empresa, industria, comercio u otras actividades similares o conexas, constituídas para la defensa de los intereses de los trabajadores y el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los mismos.

ARTICULO 3º.- Las asociaciones profesionales de trabajadores, no podrán establecer diferencias entre sus afiliados, en razón de credos políticos o religiosos, nacionalidades, razas o sexos. Todos los miembros de la asociación deberán gozar de los mismos derechos y estar sujetos a las mismas obligaciones.

ARTICULO 4º.- Los menores adultos podrán formar parte de una asociación profesional de trabajadores, sin que para ello requieran autorización de sus representantes legales.

ARTICULO 5º.- Las asociaciones profesionales de trabajadores no podrán recibir subsidios de organismos políticos nacionales o extranjeros, ni ayuda económica de empleadores, ni admitir directa o indirectamente la intervención de éstos en el gobierno de la entidad.

ARTICULO 6º.- A efectos de su inscripción, las asociaciones profesionales de trabajadores deberán presentar ante el Ministerio de Trabajo y Previsión en la Capital Federal o ante las Delagaciones Regionales o autoridades que hagan sus veces una solicitud a la que se acompañará:

a) Nombre y domicilio de la asociación;

b) La lista de afiliados cotizantes;

c) El valor de su patrimonio y servicios sociales instituídos;

d) La copia autenticada de los estatutos y reglamentos de la asociación, los que deberán ajustarse a las disposiciones del presente decreto-ley;

e) La nómina de los miembros que integran la comisión directiva con indicación de su edad, nacionalidad, profesión u oficio.

ARTICULO 7º.- Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo anterior y demás exigencias del presente decreto, se ordenará la inscripción de la asociación profesional en el registro correspondiente y la publicación, sin cargo, de los estatutos en el Boletín Oficial del lugar de inscripción.

En todos los casos se comunicará la inscripción al Ministerio de Trabajo y Previsión, con copia autenticada de los antecedentes.

ARTICULO 8º.- Cumplida la publicación se extenderá a favor de la asociciación profesional un certificado suscripto por la autoridad interviniente que acreditará la inscripción en el Registro respectivo.

ARTICULO 9º.- El Ministerio de Trabajo y Previsión o la autoridad que haga sus veces, deberá acordar la inscripción en el plazo de treinta (30) días de presentada la solicitud, no pudiendo rechazarla cuando se hayan cumplido las disposiciones del presente decreto-ley. En caso de denegatoria o vencimiento del plazo podrá recurrirse ante la autoridad judicial competente.

ARTICULO 10º.- La asociación profesional, a partir de la fecha de su inscripción, adquiere carácter de persona jurídica y puede ejercer los derechos y contraer las obligaciones que autoriza el Código Civil, las demás leyes y el presente decreto-ley.

ARTICULO 11º.- Las funciones ejercidas por las autoridades con respecto a la personería jurídica, tratándose de asociaciones profesionales inscriptas, estarán a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión, o autoridad que haga sus veces, con prescindencia de todo otro organismo.

ARTICULO 12º.- Los nombres adoptados por las asociaciones profesionales inscriptas, así como aquellos que pudieran inducir en error o confusión, no podrán ser utilizados por otras personas, asociaciones o entidades.

ARTICULO 13º.- Los estatutos de toda asociación profesional de trabajadores deberán establecer:

a) Su nombre, domicilio, objeto y zona de actuación;

b) La determinación del oficio, profesión, empresa, industria, comercio o actividad que representen;

c) La determinación y denominación de las autoridades directivas y zona de actuación;

d) El procedimiento para la designación y reemplazo de los miembros directivos, debiendose ser en todos los casos por voto secreto de los afiliados;

e) Las normas que aseguren la representación minoritaria en los organismos directivos;

f) Las normas que aseguren el secreto de la votación en las asambleas;

g) El modo de constitución, administración y contralor del patrimonio social, su destino en caso de disolución y régimen de las cotizaciones;

h) La determinación de las atribuciones que se confieren a la Comisión Directiva y cuales quedan reservadas para la Asamblea General de los afiliados.

ARTICULO 14º.- La dirección y administración de las asociaciones profesionales será ejercida por una comisión directiva constituída por un número mínimo de cinco miembros, mayores de edad.

La mayoría de los miembros que ocupen cargos directivos deberán ser argentinos nativos o naturalizados.

ARTICULO 15º.- La representación legal de la asociación profesional será ejercida por la o las personas que determinen los estatutos, quienes deberán ser argentinos nativos o naturalizados.

ARTICULO 16º.- Las asociaciones profesionales de trabajadores inscriptas tendrán los siguientes derechos:

a) Representar y defender ante el Estado, institutos de previsión, tribunales de justicia o empleadores, los intereses profesionales colectivos o individuales de sus asociados;

b) Participar en los organismos estatales vinculados a la ordenación del trabajo;

c) Intervenir en las negociaciones colectivas, celebrar y modificar pactos o convenios colectivos, contribuir a la vigilancia en el cumplimiento de la legislación

del trabajo y promover su ampliación y perfeccionamiento;

d) Colaborar con el Estado como órganos técnicos y consultivos, en el estudio y solución de los problemas concernientes a su categoría profesional;

e) Peticionar en defensa de los intereses profesionales;

f) Fundar instituciones de previsión y asistencia social;

g) Establecer colonias de vacaciones, comedores, sanatorios, hospitales y todo servicio social que tienda a elevar la cultura, preservar la salud y mejorar el nivel moral y material de los afiliados;

h) Organizar y promover la formación de cooperativas de producción, de consumo, de crédito y de vivienda, de acuerdo a la legislación vigente;

i) Promover la instrucción general y profesional de sus afiliados mediante obras apropiadas tales como bibliotecas, conferencias, publicaciones, escuelas técnicas, talleres y exposiciones;

j) Constituir y participar en federaciones o confederaciones de acuerdo al presente decreto-ley;

k) Imponen cotizaciones o cuotas a sus afiliados;

l) Realizar sus reuniones y asambleas en local cerrado sin recabar permiso previo;

ll) Ejercer en el cumplimiento de sus fines todos los demás actos que no le sean prohibidos.

ARTICULO 17º.- Las asociaciones profesionales de trabajadores inscriptas tendrán las siguientes obligaciones:

a) Proporcionar las informaciones de carácter gremial que soliciten las autoridades del trabajo sin perjuicio de las de carácter general que les sean requeridas legalmente por autoridades competentes;

b) Comunicar al Ministerio de Trabajo y Previsión o a la autoridad que haga sus veces toda modificación de sus estatutos o en la integración de la comisión directiva;

c) Enviar al Ministerio de Trabajo y Previsión o autoridad que haga sus veces la memoria y balance de las actividades de la asociación dentro de sesenta días de cerrado el ejercicio;

d) Llevar su contabilidad en forma que permita controlar el movimiento económico de la asociación. Los libros deberán ser rubricados por el Ministerio de Trabajo y Previsión o autoridad que haga sus veces.

ARTICULO 18º.- Los empleadores deberán reservar el empleo y reincorporar oportunamente en las mismas condiciones a los empleados y obreros que, por razón de ocupar cargos directivos y representativos en asociaciones profesionales de trabajadores o en organismos estatales que requieran representación gremial, dejaran de prestar servicios en sus tareas habituales, no pudiendo despedirlos a su reincorporación, por el término de un año, salvo justa causa legalmente reconocida. El tiempo durante el cual los empleados y obreros hubieran desempeñado funciones precedentemente aludidas, será considerado período de trabajo, a los efectos del cómputo de su antigüedad frente a beneficios que por leyes, decretos, convenciones colectivas o acuerdos le hubieran correspondido en el caso de haber prestado servicios. El aporte y las retenciones jubilatorios correspondientes estarán a cargo de la entidad obligada, legal o convencionalmente, a abonar los jornales o sueldos.

ARTICULO 19º.- A solicitud de una asociación profesional de trabajadores inscripta y previa resolución del Ministerio de Trabajo y Previsión o autoridad que haga sus veces, los empleadores deberán retener de las remuneraciones de su personal afiliado el importe de las cuotas y aportes sociales y entregarlo a la asociación. El Ministerio de Trabajo y Previ

sión o autoridad que haga sus veces, deberá expedirse dentro de los treinta (30) días de presentada la solicitud. En caso de denegatoria o vencimiento del plazo, la asociación profesional podrá recurrir ante la autoridad judicial competente.

ARTICULO 20º.- Recibida la comunicación por el empleador y entregadas a éste por la asociación profesional de trabajadores las planillas de retención correspondientes, el empleador será responsable del importe de las retenciones que no hubieran sido efectuadas.

ARTICULO 21º.- Todo miembro que dejare de pertenecer a una asociación profesional de trabajadores perderá las cuotas y aportes sociales pagados, así como los derechos emergentes de su calidad de afiliado. En caso de jubilación, accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación o servicio militar, los afiliados no perderán su afiliación a la asociación profesional respectiva.

ARTICULO 22º.- Todo miembro que renuncie a su condición de afiliado a una asociación profesional de trabajadores, deberá presentar su renuncia, de su puño y letra, y deberá asimismo entregar copia de la misma a su empleador a los fines pertinentes.

ARTICULO 23º.- Toda actuación administrativa o judicial de las asociaciones profesionales inscriptas estará exenta de sellado. Su constitución, inscripción, inspección y disolución se hará sin cargo fiscal alguno. Sus bienes estarán exentos de todo gravamen fiscal y los muebles destinados al funcionamiento de la asociación serán inembargables.

ARTICULO 24º.- Las asociaciones profesionales inscriptas, de una misma actividad, podrán constituir o integrar federaciones nacionales o internacionales.

ARTICULO 25º.- Las federaciones inscriptas podrán constituir o integrar confederaciones nacionales o internacionales.

ARTICULO 26º.- Las asociaciones profesionales, federaciones y confederaciones de trabajadores no podrán intervenir en actividades políticas.

ARTICULO 27º.- Las federaciones o confederaciones mencionadas en los Artículos 24 y 25 deberán encuadrarse en las previsiones del presente decreto-ley.

ARTICULO 28º.- El Ministro de Trabajo y Previsión, o autoridad que haga sus veces, podrá suspender o dejar sin efecto la inscripción de una asociación profesional, federación o confederación de trabajadores, por violación de las disposiciones legales o estatutarias.

De la medida por la que se suspende o se deja sin efecto la inscripción, la asociación profesional, federación o confederación afectada podrá interponer recurso ante la autoridad judicial competente.

ARTICULO 29º.- Serán consideradas prácticas desleales y contrarias a la ética de las relaciones profesionales de trabajo, por parte de los empleadores:

a) Subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación profesional de trabajadores;

b) Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una asociación profesional mediante dádivas o promesas o condicionar a esa circunstancia la obtención o conservación del empleo o el reconocimiento de mejoras o beneficios;

c) Promover o auspiciar, por esos mismos medios, la afiliación de su personal a una asociación profesional;

d) Adoptar represalias contra los trabajadores en razón de sus actividades sindicales o de haber acusado, testimoniado o intervenido en los procedimientos vinculados al juzgamiento de las prácticas desleales;

e) Rehusarse a negociar colectivamente con los trabajadores de acuerdo a los procedimientos legales;

f) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal con el objeto de impedir o dificultar el ejercicio por parte de los trabajadores de los derechos a que se refiere el presente decreto-ley.

ARTICULO 30ª.- Todo empleador que incurriera en prácticas desleales contrarias a la ética de las relaciones del trabajo, será pasible de una multa de tres mil pesos moneda nacional (m$n. 3.000.-) que podrá elevarse hasta el importe equivalente a quince días de los sueldos y salarios que abone el inculpado al personal del establecimiento en que se hubiera incurrido en práctica desleal.

En caso de reincidencia y según la gravedad de la infracción cometida podrá ordenarse la clausura del establecimiento durante uno a quince días, debiendo durante ese tiempo, abonarse los salarios habituales del personal, que con motivo de la medida impuesta se viere privado del desempeño de sus tareas.

ARTICULO 31ª.- Los Artículos 52 a 61, ambos inclusive, del Decreto Nº 23.852/45, Ley Nº 12.921, que determinan la constitución y el funcionamiento del Consejo Nacional de Relaciones Profesionales continuarán en vigencia hasta tanto no se proceda a la reestructuración de dicho organismo.

ARTICULO 32ª.- En los casos en que existan para un oficio, profesión, empresa, industria, comercio o actividad, una sola organización profesional inscripta, ella asumirá la representación de los trabajadores.

En los casos en que existe más de una, la representación de los trabajadores será ejercida por una comisión intersindical.

ARTICULO 33ª.- La constitución, funcionamiento y atribuciones de las comisiones intersindicales serán establecidas en el Decreto-Ley que las reglamente, el que deberá reconocer el derecho de las minorías.

ARTICULO 34ª.- Las disposiciones del presente decreto-ley se aplicarán en todo el territorio de la Nación.

ARTICULO 35ª.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan al presente decreto-ley.

ARTICULO 36ª.- Las disposiciones del presente decreto-ley deberán ser interpretadas de modo tal que no se violen los principios fundamentales establecidos en el Artículo 1ª.

ARTICULO 37º.- El presente decreto-ley entrará en vigencia a los ciento cincuenta días (150) a contar desde el 1º de mayo de 1956.

ARTICULO 38º.- El presente decreto-ley será refrendado por el señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Trabajo y Previsión, Justicia, Aeronáutica, Ejército y Marina.

ARTICULO 39º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaa Rojas - Raúl C. Migone - Laureano Landaburu - Julio C. Krause - Arturo Ossorio Arana - Teodoro Hartung.-

DECRETO-LEY Nº 9.270.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 183.-

BONIFICACIONES POR ANTIGÜEDAD

Expediente Nº 652.478 - 1950.- Suarez Manuel Norberto s/ computación servicios Ferrocarril Nacional Gral. Roca.- MINIST. HACIENDA.-

Mayo 15 Año del Libertador General San Martín, 1950.-

Señor Ministro de Hacienda:

El recurrente solicita que a los efectos de la licencia que en concepto de vacaciones acuerda el artículo 3º del decreto 26.942/947, se computen los servicios que prestara en el hoy Ferrocarril Nacional General Roca desde el 18 de marzo de 1929 hasta el 6 de julio de 1933.

La citada disposición reglamentaria se opone a lo solicitado, toda vez que condiciona el término de las vacaciones de descanso, a la antigüedad del agente en el servicio Civil de la Nación.

En este sentido debe entenderse por Servicio Civil de la Nación, el que se presta en la Administración Nacional en organismos dependientes del Poder Ejecutivo, tal como lo define implícitamente el artículo 1º del decreto ya citado.

La circunstancia de que el ex Ferrocarril del Sud sea actualmente un ferrocarril del Estado por virtud de su compra por el Gobierno de la Nación, no es óbice para lo expresado, por cuanto al acto de la compra no tuvo efecto legal de nacionalizar retroactivamente esos servicios.

Ahora bién, el hecho de que reglamentariamente no proceda lo solicitado, no significa que en justicia no corresponda reconocer derecho a computar esos servicios a los efectos de la licencia por vacaciones, tal como lo he sostenido

en el dictámen dado en el expediente Nº 105.679/949 del Ministerio de Agricultura y Ganadería que en copia acompaño y reproduzco en este caso.-

Fdo. ENRIQUE C. PETRACCHI
Procurador del Tesoro de la
Nación

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 184.-

BONIFICACIONES POR ANTIGÜEDAD - LICENCIAS

Expediente Nº 105.679 - 1949.-
Personal Estación Experimental CINCO SALTOS s/ cómputo antigüedad en empleos.- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.-

Mayo 15, AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN, 1950.-

Señor Ministro de Agricultura y Ganadería:

I.- Se me consulta sobre la situación que crea el personal de las ex-empresas ferroviarias de capital privado, el hecho de la adquisición de las mismas por el Estado, en lo que respecta a los derechos inherentes a la antigüedad en el empleo al ser incorporados a los cuadros de la Administración.-

II.- El problema, en mi concepto, debe resolverse con carácter general, contemplando la situación de todos los que se han desempeñado en empresas privadas de servicios públicos nacionalizados o sucesivamente en distintas reparticiones u organismos que integran la administración Nacional.

La antigüedad, consecuencia natural de la prestación de servicios, ha sido originada por leyes y reglamentos en un hecho jurídico con efectos relevantes, incorporados por el moderno derecho del trabajo, que han adquirido jerarquía constitucional en la reforma de 1949.-

El factor antigüedad reviste singular gravitación en el aspecto económico o patrimonial de la relación jurídica de empleo público, tanto en situación de actividad como de pasividad. Asi, incide en la fijación del término de las li-

cencias, en la determinación del monto del sueldo, en el régimen del crédito, en los beneficios jubilatorios etc.,etc.

El esquema que acabo de trazar patentiza la importancia del asunto y la absoluta necesidad que al resolver cuestiones de esta índole se adopte un criterio uniforme.

III.- Vacaciones.- La antigüedad influye en la graduación del término de las licencias por descanso.

Esta clase de licencias se funda en "que es obligación del Poder Ejecutivo velar por los servidores del Estado perfeccionando el régimen de vacaciones y licencias en vigor" (decreto nº 26.942/47, considerando 1º)

Basta a mi juicio, el fundamento de esta clase de licencias y la circunstancia que el cambio de régimen, del empleo privado al empleo público, se haya producido por causas extrañas a la propia voluntad del empleado, para que deba reconocérsele esa antigüedad, proveniente de servicios prestados en empresas de servicios públicos posteriormente nacionalizados.

Para ello sería necesario, sin embargo, modificar el decreto nº 26.942/47, por cuanto su artículo 3º condiciona el término de las licencias por descanso, a la antigüedad del agente en el servicio civil de la Nación, concepto que excluye a los servicios prestados fuera del mismo.

Análogo criterio ha presidido al decreto nº 11.733/47 en el que se estableció "..... que a los militares en situación de retiro que ocupen cargos civiles, deben computársele los servicios prestados en el ejército, en la Marina y en la Aeronáutica, a los fines de las licencias que les correspondan, debiendo tener en cuenta exclusivamente el tiempo de los servicios prestados por año calendario".

IV.- Bonificaciones por antigüedad.- El sueldo de los funcionarios y de los empleados públicos se halla integrado, de conformidad con los reglamentos en vigor, por dos partes: a) Una parte fija -sueldo básico- determinada según el grado dentro de la jerarquía o de la categoría del presupuesto ocupado por el funcionario; b) Una parte móvil -adicional- gra-

duable, de acuerdo a la antigüedad del funcionario en el servicio, y a su calificación.

Cuando el Estado nacionaliza un servicio público asumiendo la prestación de este e incorporando a los cuadros de la Administración el personal afectado que dependía del concesionario o permisionario, pareciera razonable reconocer la antigüedad a los efectos del cómputo de las bonificaciones, para colocarlo en un pié de igualdad con el resto del personal de la administración, desde luego realizando las ponderaciones necesarias entre ambos escalafones, para que el propósito igualatorio no se convierta en un privilegio en favor del personal que actuara en la esfera privada. Avierto sin embargo que no es esa la solución que ha prevalecido en los reglamentos vigentes.

No median las mismas razones si se tratara de personal que ya hubiese obtenido indemnización por antigüedad, pensión, jubilación o retiro, porque entonces la antigüedad hubiera proporcionado al empleado el beneficio que ella presupone, ya que se la computa a esos efectos.

Esto explica que en los reglamentos de bonificación de los Departamentos de Estado se establezca entre otras, la excepción puntualizada (art. 5ª del decreto nº 32.908/48, art. 34 del decreto nº 13.540/49, art. 6 del decreto nº 34.295/49, art. 5ª del decreto nº 5.466/50, etc.).-

Tratándose de personal que ha actuado sucesivamente en distintos departamentos de estado de la Administración Centralizada o en la Administración Institucional o territorialmente descentralizada la solución debe ser la del reconocimiento de la integridad total en los servicios prestados al Estado con la excepción apuntada y la relativa a los cargos docentes y licencias sin goce de sueldo superiores a treinta días.

V.- Jubilación.- En lo que atañe a este derecho, no exis- actualmente dificultad alguna ya que el régimen de previsión en vigor (decreto nº 9.316/46, ratificado por Ley nº 12.921),

admite la computación de los servicios prestados sucesiva o simultáneamente bajo el régimen de las distintas secciones o cajas de previsión.-

Fdo. ENRIQUE C. PETRACCHI
Procurador del Tesoro de
la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín nº 185.-

CONVENIOS DE TRABAJO

Buenos Aires, 25 de enero de 1957

Visto las conclusiones finales de la Comisión Interministerial que tuvo a su cargo el estudio de aspectos del régimen de relaciones laborales del personal de empresas u organismos estatales que prestan servicios públicos, servicios de interés público o desarrollan actividades industriales o comerciales y lo informado por el Ministerio de Trabajo y Previsión, y

CONSIDERANDO:

Que dichos informes destacan la especialísima modalidad que reviste la prestación de servicios del aludido personal, derivada de las características particulares de las empresas u organismos estatales señalados, por la alta finalidad que persiguen de satisfacer impostergables necesidades públicas o de interés o de utilidad públicos;

Que tales razones llevaron a dictar el Decreto-Ley nº 20.414/56, en cuya virtud los diferendos que se susciten en materia de salarios, que no tuvieron solución por acuerdo de partes, son sometidos a decisión del Poder Ejecutivo, como adecuada y más provechosa solución, ya que éste está en condiciones de efectuar una ponderación integral del diferendo, que no pueden ser tenido en cuenta por los diferentes ministerios atento la competencia limitada que es asignada a cada uno de los mismos;

Que la bondad de ese temperamento está avalada no sólo por el estudio teórico del problema, sino también por la experiencia;

Que por tanto, cabe adoptar un régimen similar al del Decreto-Ley nº 20.414/56 respecto de los conflictos colectivos de trabajo que puedan suscitarse entre su personal y las empresas u organismos estatales de que se trata, buscando primero el acuerdo directo de las partes en conflicto, para lo cual el mismo debe quedar radicado únicamente en la órbita de los ministerios de los cuales dependan aquellos organismos, y sólo en el supuesto de que no se arribare a una solución en la forma indicada, los puntos en litigio deberán ser elevados a consideración del Poder Ejecutivo para su resolución;

Que este régimen no implica descartar totalmente la intervención del Ministerio de Trabajo y Previsión, atento su competencia en la materia, ya que procederá que el mismo sea oido antes de dictarse la decisión definitiva;

Que asimismo, se mantiene la competencia de los organismos de conciliación dependientes del aludido ministerio para todos aquellos casos que se planteen individualmente entre las entidades estatales de referencia y su personal;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA,

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO,DECRETA

CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Los conflictos colectivos de trabajo que se susciten entre su personal y las empresas u organismo del Estado que presten servicios públicos, servicios de interés público o desarrollen actividades industriales o comerciales, deberán quedar radicados ante los respectivos ministerios responsables, de los cuales aquellos dependen.

ARTICULO 2º.- En supuesto de no arribarse a una solución por acuerdo directo entre las partes en conflicto, el mismo deberá ser sometido a consideración del Poder Ejecutivo.

Previo a la elevación de los antecedentes pertinentes que efectuare el Ministerio responsable, las partes podrán usar de

la facultad de presentar un memorial alegando sobre sus derechos dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la decisión que dispone la elevación.

ARTICULO 3º.- El Poder Ejecutivo antes de resolver el diferendo oirá al Ministerio de Trabajo y Previsión, el cual deberá expedirse dentro del término de diez días, dictando aquél el decreto dentro de los treinta días subsiguientes.

ARTICULO 4º.- El procedimiento establecido en los artículos anteriores se aplicará sin perjuicio del mantenimiento de la instancia conciliatoria por ante el Ministerio de Trabajo y Previsión en lo referente a los conflictos individuales que pudieran suscitarse entre el personal y las entidades empleadoras referidas.

ARTICULO 5º.- El presente decreto-ley será refrendado por S. E. el señor Vicepresidente Provisional y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Trabajo y Previsión, Comercio e Industria, Transportes, Comunicaciones, Hacienda, Ejército, Aeronáutica y Marina.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Alberto F. Mercier - Rodolfo Martínez - Sadi E. Bonnet - Luis M. Igartúa - Eugenio A. Blanco - Arturo Ossorio Arana - Julio C. Krause - Teodoro Hartung.-

DECRETO-LEY Nº 879.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 186.-

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1954.-

Opinión de la Contaduría General de la Nación, respecto a:

TRANSFERENCIAS DE BIENES - PATRIMONIO DEL ESTADO - LEY DE CONTABILIDAD - COMPRA-VENTA - SELLOS

I.- S/si el valor de los elementos que se transfieren entre reparticiones debe efectuarse al valor de inventario o el de reposición. Tratándose sólo de un cambio de jurisdicción, no existe inconveniente para que las transferencias de elementos entre reparticiones, sea efectuada al valor con el que figuran los mismos en el inventario del Registro de Bienes del Estado. (Expediente Nº 151.901/52; Inf. Nº 9-202/53).

II.- S/autorización para extraer gratuitamente agua de un terreno fiscal. En principio, toda entrega o locación gratuita de elementos de propiedad del Estado, corresponde ser autorizada expresamente por el H. Congreso de la Nación. De lo contrario debe abonarlo el que utilice el servicio. (Expediente Nº 145.952/52; Inf. 9-125/53).

III.- S/reposición sellado. De acuerdo con el contenido de los Artículos 51ª,52ª,53ª y 75ª del Reglamento de compra-venta, no existe inconveniente en que cuando no se formalice contrato especial, el sellado de ley se reponga en la orden de provisión, toda vez que éstas forman parte del contrato mismo. (Expediente Nº 130.217/54; Inf. Nº 9-265/54).-

Fdo. DAMIAN FIGUEROA
Secretario

Digesto D.G.F. nº 365.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 187.-

PERSONAL - SUELDO - LIQUIDACION DE HABERES

Expediente Nº 8.157/55.-

MEMORANDUM PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS

Con relación a la Nota Nº 1.229/55 del citado Departamento de Estado por la que solicita a este Ministerio que suscriba una resolución, en virtud de la cual se autorice a las Entidades que integran el Sistema Bancario Oficial a liquidar los haberes correspondientes al personal declarado en disponibilidad, sin prestación de servicios, y hasta tanto se resuelva su situación, conforme resulte de la sustanciación de sumarios administrativos, se hace constar que el suscripto, carece de facultades legales para resolver tal medida.

Sobre el particular este Ministerio hace notar que situaciones como la que da origen al presente planteamiento están regladas por los artículos 19º y 22º del decreto dictado en Acuerdo de Ministros el 16 de enero de 1913 y artículo 36º del Decreto-Ley Nro. 33.327/44.-

Buenos Aires, noviembre 10 de 1955.-

Fdo. Eugenio J. Folcini

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 188.-

GASTOS DE REPRESENTACION

Expediente Nº 71.782/54.-

//nos Aires, noviembre 12 de 1954.-

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para manifestarle, respecto a la materia de que tratan estos actuados, lo siguiente:

En oportunidad de ventilarse una cuestión similar relacionada con la asignación de "Gastos de representación" a los señores Rectores de las Universidades Nacionales -temperamento al que aparentemente se oponía la anterior Ley Universitaria Nº 13.031-, traída a colación por el señor Procurador del Tesoro de la Nación en su informe obrante a fs. 57/60, llegóse finalmente a la conclusión de que la citada ley no resultaba vulnerada si el caso se resolvía favorablemente.

En ese sentido expresé sus vistas al Ministerio de Hacienda de la Nación a tenor del párrafo pertinente de su Nota nº 117 de fecha junio 25 de 1953, cursada al Ministerio de Educación, que textualmente dice: "... y con relación a la gestión efectuada por ese Ministerio oportunamente, respecto al otorgamiento de una asignación especial en concepto de "Gastos de representación" para los señores rectores de las Universidades Nacionales, este Departamento debe expresar que, consultada la Contaduría General de la Nación y el señor Procurador del Tesoro respecto a la viabilidad legal de dicha asignación, se ha llegado a la conclusión de que tal temperamento puede ser adoptado según se desprende de los informes respectivos que obran en poder de este Departamento. El Poder Ejecutivo por vía de

ajuste de presupuesto efectuado en uso de las atribuciones legales que posee, puede encarar ese problema, quedando por tanto librado a la resolución definitiva de V.E. la procedencia de tal asignación".

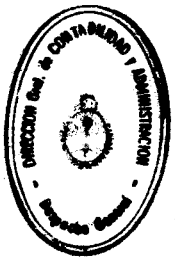
El Poder Ejecutivo, por otra parte, mediante los Decretos Nos. 18.676 del 6/10/1953, 19.831 del 21/10/1953, 20.995 del 3/11/1953, 21.118 del 4/11/1953, 25.586 del 31/12/1953 y 25.918 de fecha 31/12/1953, por los que se reajustaron los presupuestos universitarios del año 1953, resolvió la inclusión de las partidas mediante las cuales quedó autorizado el otorgamiento a los señores Rectores de las Universidades Nacionales de la suma de m$n. 1.500 mensuales en concepto de "Gastos de representación".

Vale decir que ya ha mediado en el caso de las Universidades Nacionales, que en esencia plantean idéntica situación que el de la Comisión Administradora de la Ley nª 13.891 que ahora se trata, un pronunciamiento del Poder Ejecutivo respecto a que procede -en tanto ninguna otra cuestión se oponga-, la liquidación y percepción por parte de los interesados, de sumas establecidas por el presupuesto de los respectivos organismos en concepto de "Gastos de representación", por cuanto éllas no configuran un sueldo o la retribución propiamente dicha fijada a la función, sino que se trata del reintegro a los funcionarios por erogaciones que los mismos deben afrontar en el desempeño de las tareas que son propias e inherentes de sus cargos.

Ante el precedente enunciado, en el que cupo especial intervención a este Departamento de Estado, se considera que no existe impedimento legal alguno para que el funcionario del Servicio Exterior que ejerce la Presidencia de la Comisión Administradora de la Ley nª 13.891, perciba los gastos de representación que actualmente figuran incluídos en el presupuesto legal de dicha Comisión.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

RESOLUCION Nª 128.- Fdo. PEDRO J. BONANNI



Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 189.-

Buenos Aires, 5 de julio de 1955.-

Opiniones de la Contaduría General de la Nación, respecto a: COMPRA-VENTA - BONIFICACIONES POR ANTIGÜEDAD - EMPRESAS DEL ESTADO - LEY DE CONTABILIDAD - VIATICOS - COEFICIENTES - INDEMNIZACIONES - OFERTAS - MULTAS - INGRESOS - CREDITOS

CONTRATACIONES - LICITACIONES

No obliga al proponente la aprobación de la adjudicación fuera del plazo de mantenimiento de la oferta. Dictado el pronunciamiento aprobatorio de la contratación y efectuándose la adjudicación con posterioridad al plazo de mantenimiento de propuestas, no puede exigirse el cumplimiento de la provisión.

La oferta caduca al vencer el plazo de mantenimiento salvo que fuera prorrogado ya sea en forma expresa o tácitamente, es decir no rechazándose la pertinente orden de compra o su recibo, Expediente Nº 132.251/54; Inf. 9-300/54.

Es observable una licitación pública para la contratación de obras, cuyo llamado no ha tenido la anticipación ni el tiempo de publicación que prescribe el Artículo 10 de la ley nº 13.064, Orden de Pago Nº 94/54, Marina, Inf. 9-1919/54.

PERSONAL

No corresponde el cómputo de servicios prestados en empresas que han pasado a depender del Estado, a los fines de la bonificación por antigüedad que acuerdan las disposiciones vigentes, Expediente Nº 191.010/53, Inf. 69.

EMPRESAS NACIONALIZADAS

Aplicación de penalidades. Sin perjuicio de la fiscalización que corresponde con respecto a la prohibición establecida por el Artículo 1ª del Decreto Nª 20.135 de julio 29/44 -ratificado por la Ley Nª 12.911-; cabe tener en cuenta que en el caso que las reparticiones contraten con las empresas nacionalizadas (inciso g) Artículo 47ª, Ley Nª 12.961) estas últimas pueden hacerse pasibles de multas por la mora en que incurran en el cumplimiento de las obligaciones que contraigan según surge del Decreto Nª 20.995 del 13/12/54, Expediente Nª 113.334/54, Inf. 9-101-55.

VIATICOS

Reajuste de sueldos y viáticos con aplicación de coeficientes. El derecho a percibir diferencias de coeficientes, comienza a partir del la fecha en que los interesados fueron ascendidos y no desde aquella que fija retroactividad del ascenso, pues en estos casos juega el principio consagrado por el Poder Ejecutivo en el Decreto Nª 34.146 de noviembre 2/48. Este decreto declara con carácter general, que no procede reliquidar viáticos o gastos de traslado al personal ascendido con efecto retroactivo en el cargo de que es titular . Memorandum SCGN 5.150/54.

MULTAS

Las devoluciones de multas provenientes de sentencias judiciales dictadas por los Juzgados Nacionales en lo contencioso administrativo, corresponde depositarse en el Banco de la Nación Argentina a la orden del Juez y como perteneciente al respectivo juicio (Artículo 32ª, punto 4 de la reglamentación de la Ley Nª 12.961), Expediente Nª 131.265/52, Inf. 9-2.171/54.

El poder administrador carece de facultades para renunciar un crédito a favor del Estado y por consiguiente para la exención de multas en caso de que éstas hubieran sido aplicadas en función de disposiciones legales.

Tal criterio es de aplicación consiguientemente para el caso de otras "autoridades competentes" de las reparticiones descentralizadas, que tengan atribuciones sobre sanciones y multas, Expediente Nº 151.615/54, Inf. 9-192/54.

VARIOS

Ofertas de sociedades no constituídas. Por aplicación del Artículo Nº 288 del Código de Comercio no hay inconveniente en la adjudicación a sociedades en curso de formación, debiendo aconsejarse que en el pronunciamiento respectivo se deje constancia de esa situación, a fin de poder delimitar sin otros trámites, a las personas obligadas, personal ilimitado, solidariamente del cumplimiento del contrato, Expediente Nº 172.350/52, Inf. 9-2.531/54.-

Fdo. DAMIAN FIGUEROA

Digesto D.G.F. Nº 373.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 190.-

AUTOMOTORES - COMPRA-VENTA - PROHIBICIONES

///nos Aires, julio 20 de 1956.-

Vuelva al Ministerio de Trabajo y Previsión (Caja Nacional de Previsión para Empresarios) para manifestarle que la disposición a que se refiere el Artículo 23 del Decreto-Ley Nº 7.104/55, solo es de aplicación en los casos de adquisición de "automóviles" y no de otros vehículos automotores -camionetas, jeeps, etc.- destinados a cumplir con los servicios específicos de las Reparticiones.

Dése a la presente carácter de resolución aclaratoria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 27 del citado Decreto-Ley Nº 7.104/55.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. EUGENIO A. BLANCO

RESOLUCION Nº 113.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 191.-

AUTOMOTORES - COMPRA-VENTA - PROHIBICIONES

Expediente Nº 73.439/56.-

///nos Aires, septiembre 11 de 1956.-

Vuelva al Ministerio de Agricultura y Ganadería para manifestarle que, a juicio de este Departamento, la medida programada en las presentes actuaciones no podría prosperar teniendo en cuenta las siguientes causas:

1º) No obstante los motivos aducidos para justificar el procedimiento que se propicia, debe tenerse especialmente en cuenta la circunstancia de que no sería posible, en los actuales momentos, contraer nuevos compromisos que importen -aún cuando en principio no lo aparenten- mayores erogaciones a cargo del erario público. Ello, en atención a las razones de orden financiero que obligan al Poder Ejecutivo a mantener una firme política de contención en los gastos públicos.

2º) La situación expuesta precedentemente obliga, por ende, a sugerir la conveniencia de que no se aumente la dotación de vehículos al servicio de los agentes de ese Ministerio y sus dependencias, al margen de la cantidad que ya ha sido autorizada, y aconseja por el contrario, como una lógica consecuencia, a meditar seriamente sobre la imprescindible necesidad de resolver el problema que se plantea en lo actuado dentro de las posibilidades que admita su actual plantel de automotores.

3º) Finalmente, debe recordarse en esta oportunidad no sólo el espíritu esencialmente restrictivo que ha inspirado la

sanción del Artículo 17 de la Ley Nº 11.672 (Edición 1943) en materia de reintegro, a los funcionarios o empleados, de los gastos que origine el uso y/o mantenimiento y conservación de automóviles de su propiedad al servicio del Estado, sino también las distintas disposiciones que han sido dictadas con el objeto de lograr positivas economías y el adecuado equilibrio financiero, todo lo cual aconseja que tanto aquella disposición como estas últimas sean respetadas por la íntima relación que guardan entre sí y por traducirse en una conveniencia para los intereses del Estado.-

Fdo. JULIO BROIDE

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 192.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

GASTOS EN PERSONAL - FISCALIZACION - INTERVENCION PREVIA

CONTADORES FISCALES

Buenos Aires, 28 de marzo de 1957.-

Vista la necesidad de establecer el procedimiento mediante el cual el Tribunal de Cuentas de la Nación ejercerá por intermedio de sus delegaciones el control, fiscalización y vigilancia a que hace referencia el artículo 84 de la ley de contabilidad, en materia de "Gastos en Personal" y

CONSIDERANDO:

Que el sistema que se adopte debe basarse en la intervención previa que se practica actualmente con la eliminación de aquellos controles que hace posible la implantación de sistemas de liquidación modernos, en la casi totalidad de los organismos centralizados y descentralizados;

Que dichos sistemas permiten realizar un control eficaz mediante el procedimiento de verificación de un listado de novedades conteniendo las liquidaciones ajustadas de aquellos agentes cuya situación de revista ha sufrido modificación en el transcurso del mes;

Que para el resto del personal debe interpretarse que sus respectivas liquidaciones de haberes no han sufrido variación con respecto a la última modificación intervenida;

Que la conformidad debe prestarse con la reserva de los artículos 93ª y 95ª de la ley de contabilidad;

Por todo ello y en uso de la facultad que le acuerda el inciso o), artículo 84ª,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Las delegaciones del Tribunal de Cuentas de la Nación gestionarán con la suficiente anticipación, el envío por parte del organismo fiscalizado -a contar del 1º de abril del corriente año- juntamente con las planillas de haberes mensuales y antecedentes respectivos, de un listado de novedades que contenga las liquidaciones, ajustadas a su nueva situación de revista, del personal que ha experimentado cambios en la misma, con respecto a la última modificación intervenida.

ARTICULO 2º.- En poder de dichos antecedentes, la intervención de las delegaciones en materia de "Gastos en Personal" se ajustará al procedimiento que señalan los artículos siguientes.

ARTICULO 3º.- Intervendrán todos los nombramientos del personal de la jurisdicción fiscalizada, analizándolos desde el punto de vista legal y del control presupuestario.

ARTICULO 4º.- Archivarán ordenadamente todas las comunicaciones vinculadas al movimiento producido en la situación de revista, para su consideración en la oportunidad de la intervención de los ajustes respectivos.

ARTICULO 5º.- Verificado el estadc de novedades a que hace referencia el artículo 1º y comprobada su exactitud con los antecedentes en su poder, las delegaciones procederán a conformar el ajuste de haberes respectivo mediante un sello o impresión con el siguiente texto: "Con las reservas de los artículos 93º y 95º de la ley de contabilidad, esta delegación interviene el presente ajuste de haberes, dejando expresa constancia que presta su conformidad sobre la base que el mismo incluye las modificaciones señaladas en el listado anexo, figurando el resto del personal sin alteración en su situación de revista, con respecto a la última modificación intervenida".

ARTICULO 6º.- Las delegaciones, al intervenir los libramientos de entrega para el pago de "Gastos en Personal", verificarán si los mismo no exceden la parte duodecimal de los créditos asignados para partidas individuales del presupuesto respectivo.

ARTICULO 7º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J.Tarelli
José M. Fernández Fariña - Wifredo
Dedeu - Antonio M. Pérez Arango -
Juan Carlos Pastene -Secretario-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 193.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - INTERVENCION PREVIA - FISCALIZACION - CAJA CHICA - FONDOS - GASTOS EN PERSONAL - CONTRATADOS - COMPRA-VENTA - CONTADORES FISCALES

Buenos Aires, 28 de marzo de 1957.-

Vista la necesidad de establecer el sistema mediante el cual el Tribunal de Cuentas de la Nación ejercerá directamente o por intermedio de sus delegaciones el control, fiscalización y vigilancia a que se hace referencia en el artículo 84 de la ley de contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que el inciso a), artículo 85, determina que todos los actos administrativos que se relacionan con la hacienda pública deberán serle comunicados antes de entrar en ejecución;

Que el artículo 94 establece que los agentes encargados del cumplimiento de actos autoritativos sólo deberán darle curso una vez intervenidos de conformidad por el Tribunal de Cuentas o sus contadores fiscales, según corresponda, o mediante acto de insistencia dictado por autoridad competente;

Que el régimen de intervención que se adopte, debe contemplar, además, el asesoramiento previo al acto autoritativo, que puedan requerir los distintos organismos centralizados y descentralizados, en virtud del inciso p), artículo 84;

Por todo ello y en uso de la facultad que le acuerda el inciso o), artículo 84 de la ley de contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- El control, fiscalización y vigilancia de las ope

raciones financiero patrimoniales del Estado que corresponda al Tribunal de Cuentas de la Nación, en virtud del artículo 84 de la ley de contabilidad, será llevado a cabo en los distintos organismos centralizados y descentralizados mediante intervención previa de sus delegaciones.

ARTICULO 2º.- A tales efectos, los distintos actos administrativos que se refieren a la hacienda pública deberán serle remitidos, después de ser dictados y antes de entrar en ejecución.

ARTICULO 3º.- En materia de "Gastos en Personal" deberá estarse a lo dispuesto por resolución nº 238/57 y en lo que respecta a "Otros Gastos" la intervención será posterior a la aprobación de la contratación y previa a la extensión de la orden de provisión o en su defecto, a la comunicación respectiva para la iniciación de los trabajos o a la firma del contrato, en su caso.

ARTICULO 4º.- En lo que respecta a los subresponsables y a los regímenes llamados de "fondo permanente" o "caja chica", la intervención será previa en lo que se refiere a la liquidación de fondos, efectuándose el análisis de las inversiones en el momento de la rendición de cuentas respectivas.

ARTICULO 5º.- Sin perjuicio del procedimiento que señalan los artículos precedentes, los delegados prestarán, previo al acto autoritativo, el asesoramiento que le sea requerido por el organismo fiscalizado.

ARTICULO 6º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli
José M. Fernández Fariña - Wifredo Deheu - Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 239.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 194.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - RESIDUOS PASIVOS - ORDENES DE DISPOSICION - CONTADORES FISCALES

Buenos Aires, 28 de marzo de 1957.-

Visto lo dispuesto por los artículos 35 y 36 de la ley de contabilidad y,

CONSIDERANDO:

Que es necesario uniformar la forma y el procedimiento que se ha de observar en la tramitación de las órdenes de disposición que, para el ejercicio de 1956, se dicten con relación a los residuos pasivos;

Por ello y en uso de la facultad que le confiere el artículo 84, inciso o) de la ley de contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Los delegados fiscales destacados ante los distintos organismos del Estado, en base a las cuentas de residuos pasivos que, por aplicación del artículo 36 de la ley de contabilidad deberán determinar los respectivos servicios administrativos, enviarán al Tribunal de Cuentas (Presupuesto e Incompatibilidades) una planilla con la sola enunciación de los totales de los residuos pasivos discriminados por ejercicio.

ARTICULO 2º.- El Tribunal de Cuentas, por conducto del citado servicio central, dará curso a las órdenes de disposición

que se dicten con cargo a los residuos pasivos hasta los importes consignados en la planilla a que se refiere el artículo anterior.

ARTICULO 3º.- Las mencionadas órdenes de disposición deberán ajustarse a lo dispuesto por la resolución nº 99/57 del Tribunal de Cuentas (D.A.Nº 14) y estarán sujetas en cuanto a su forma, trámite y disponibilidad a las prescripciones de los artículos 30 y 31 de la ley de contabilidad.

ARTICULO 4º.- Dése al Digesto Administrativo y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli
José M. Fernández Fariña - Wifredo
Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan
Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 247.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION Buenos Aires

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 195.-

RACIONALIZACION - COMISION INTERMINISTERIAL

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1956.-

Visto la necesidad de complementar las disposiciones en materia de economías, contenidas en los Decretos-Leyes Nos. 7.104/55 y 1.635/56, con medidas concretas en cuanto a la estructura y organización de la Administración Pública; y

CONSIDERANDO:

Que es firme propósito de la Revolución Libertadora, lograr por todos los medios a su alcance, una mejor eficiencia y un más efectivo rendimiento en la prestación de los distintos servicios dependientes de la Administración Nacional;

Que es menester adecuar las distintas funciones dentro de estructuras orgánicas simples, tendiendo a facilitar las tareas y gestiones que el público en general debe realizar ante las dependencias del Estado;

Que las circunstancias actuales imponen una distribución equitativa de los agentes de la Administración Nacional, reforzando los servicios que así lo requieran y liberando a otros de excedentes, propendiendo así a un lógico aprovechamiento cualitativo y cuantitativo de los mismos;

Que es de imprescindible necesidad establecer normas mediante las cuales los agentes de la Administración Nacional, desempeñen funciones en concordancia con su especialidad, idoneidad y capacidad;

Que es imperativo de la situación presente, regularizar las condiciones en las cuales se encuentran los agentes de la Administración Nacional, llevando una acción moralizadora dentro de su jurisdicción, en materia de funciones especiales, ta-

reas en horas extraordinarias, incompatibilidades, adscripciones, etcétera, salvo cuando razones de servicio público lo demanden;

Que en tal sentido, es indispensable que el Poder Ejecutivo obtenga el asesoramiento y proposiciones fundamentales, facilitándole las soluciones adecuadas y éticas al respecto;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Créase una Comisión Interministerial, presidida por el señor Vicecomodoro D. Alberto R. Sola Claret, en su carácter de delegado del señor Presidente Provisional de la Nación, en la que actuará como Secretario el señor Jefe Interino de Personal Civil de la Presidencia de la Nación D. Archeste Eduardo Giromini, y que estará integrada por D. Salvador Máximo Larraechea, del Ministerio de Agricultura y Ganadería; D. Antonio Deluca, del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública; D. Celestino Bellaria, del Ministerio de Comercio e Industria; D. Mario Escalada Uriburu, del Ministerio de Comunicaciones; D. Pedro C. San Martín, del Ministerio de Educación y Justicia; D. Angel Bottero Torres, del Ministerio de Hacienda; Dr. Horacio Jorge Solari, del Ministerio del Interior; Ing. Federico A. E. Batrosse, del Ministerio de Obras Públicas; D. Darío R. Quiroga, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; D. Horacio H. Arbeille, del Ministerio de Trabajo y Previsión y Dr. Manuel Marenco del Ministerio de Transporte; desempeñándose como Asesor Jurídico el doctor Segundo L. Juárez, como Asesor Económico D. Pedro Salazar, ambos del Ministerio de Hacienda, y como Asesor de Estadísticas, D. Carlos A. Juvenal, de la Presidencia de la Nación.

ARTICULO 2º.- Dicha Comisión tendrá por cometido lo siguiente:

a) Proyectar la racionalización orgánica funcional de la Administración Nacional, propendiendo a la simplifica-

ción y homogeneización de las estructuras ministeriales, evitando las duplicaciones y superposiciones de tareas similares;

b) Proyectar un ordenamiento lógico, con nomenclaturas apropiadas para la correspondiente modificación presupuestaria;

c) Establecer los excendentes de personal de las dependencias respectivas y proponer su redistribución en aquéllas que así lo demanden;

d) Proponer las medidas adecuadas tendientes a lograr el cabal cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de servicios extraordinarios, adscripciones e incompatibilidades.

ARTICULO 3º.- La Comisión tendrá como sede la Casa de Gobierno y deberá reunirse por lo menos una vez por semana, debiendo terminar su cometido dentro del plazo de 60 (sesenta) días contados desde la fecha de promulgación del presente decreto.

ARTICULO 4º.- Los Ministerios y demás Organismos del Estado, facilitarán las informaciones y antecedentes que la Comisión, o cualquiera de sus miembros considere necesarios para el cumplimiento de la labor encomendada.

ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos del Interior, Aeronáutica, Relaciones Exteriores y Culto, Educación y Justicia, Trabajo y Previsión, Asistencia Social y Salud Pública, Hacienda, Agricultura y Ganadería, Comercio e Industria, Obras Públicas, Comunicaciones y Transportes.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

DECRETO Nº 23.652.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 196.-

RACIONALIZACION - COMISION INTERMINISTERIAL

Buenos Aires, 26 de marzo de 1957.-

Visto que el Art. 3º del Decreto Nº 23.652/56 fijó en sesenta días el plazo dentro del cual debería concluir su cometido la Comisión Interministerial creada por el referido acto de Gobierno, y

CONSIDERANDO:

Que en la práctica dicho término ha resultado insuficiente para que aquel Cuerpo pudiera expedirse sobre los distintos aspectos de la gestión encomendada, por lo que se hace necesario disponer su ampliación;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Amplíase hasta el 30 de junio próximo, el plazo dentro del cual deberá poner término a su cometido la Comisión Interministerial creada por Decreto Nº 23.652/56, sin perjuicio de que antes de esa fecha pueda formular recomendaciones parciales sobre problemas que requieran solución inmediata.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento del Interior.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Carlos R.S.Alconada Aramburú

DECRETO Nº 3.235.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 197.-

RACIONALIZACION - COMISION INTERMINISTERIAL

Buenos Aires, 26 de marzo de 1957.-

VISTO y CONSIDERANDO los fines de racionalización administrativa que motivaron el Decreto Nº 23.652/56 y siendo indispensable establecer el procedimiento a seguirse con los proyectos de modificación a las estructuras orgánico-funcionales vigentes que deban considerarse durante el desempeño de su cometido por la Comisión Interministerial creada al efecto,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Déjase establecido que para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Nº 23.652/56, los Ministerios y demás organismos del Estado deberán someter a dictamen de la citada Comisión Interministerial, todo proyecto de modificación a las respectivas estructuras orgánico-funcionales vigentes, acompañando los antecedentes y estudios del caso.

ARTICULO 2º.- Con los proyectos a que se hace referencia en el artículo anterior se elevará el respectivo informe del Ministerio de Hacienda de la Nación, respecto a la incidencia presupuestaria de dichas modificaciones orgánico-funcionales.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos del Interior y Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Carlos R.S. Alconada Aramburú - Roberto P. Verrier.-

DECRETO Nº 3.236.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 198.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - LIBRAMIENTOS - PAGOS - FISCALIZACION - CONTADORES FISCALES

Buenos Aires, 3 de abril de 1957.-

Visto el expediente nº 30.036/57 (Nº 110.726/57 C.G.N.) por el que la Contaduría General de la Nación expone las dificultades que se han producido al intervenir los libramientos a que se refiere el artículo 32 de la ley de contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario disponer las medidas conducentes a resolver tales dificultades, concretando y uniformando las condiciones que deben reunir esos documentos y el procedimiento a que ha de ajustarse su trámite;

Que, igualmente, deben determinarse los requisitos a observar por los servicios administrativos al efectuar ingresos y devoluciones de fondos ante la Tesorería General de la Nación;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Los contadores fiscales del Tribunal de Cuentas de la Nación, ajustarán su intervención en materia de libramientos, a las prescripciones de los artículos 25 y 50 de la ley de contabilidad y se abstendrán de dar curso a los mismos cuando no contengan los siguientes requisitos:

a) Determinación, con claridad y exactitud, de la suma total que corresponde afectar a la orden de disposición respectiva y la financiación pertinente;

b) En los casos que resultare imposible consignar el detalle de los pagos a que el libramiento se refiere, deberá insertarse, en el casillero correspondiente, el total a que los mismos alcanza, agregándose un resumen en el que consten discriminados esos pagos con el fin de permitir su verificación;

c) Debe igualmente determinarse el total que se manda pagar con afectación a cada partida principal, al que se llegará mediante la suma de los importes que se imputan a las respectivas partidas parciales.

Cuando ese detalle no figure en el texto del libramiento deberá dejarse establecido que el mismo consta "en planilla anexa", en la que se resumirán las imputaciones en forma tal que agrupen y totalicen las que se refieren a una misma partida principal;

d) En el respectivo casillero del formulario, figurará con claridad la financiación de la suma que se ordena pagar, esto es: "Rentas generales", "Producido de la negociación de títulos", "Cuentas especiales". En los casos en que se atienda con "Otros recursos", deberá concretarse su naturaleza;

e) Los libramientos de pago deberán figurar por el importe líquido a pagar, que es el que determina la imputación, previa deducción de las bonificaciones correspondientes.

En caso de aplicación de multas u otras deducciones que deben ser ingresadas a Rentas Generales, se hará figurar en el rubro "Acreditaciones", del formulario previsto al efecto, la denominación de la cuenta a acreditar;

f) El libramiento, por tratarse de un documento de pago, deberá estar rodeado de todas las garantías necesarias para evitar fraudes o alteraciones. Por tal motivo, no corresponde admitir, ni dar curso a libramien-

tos que contengan raspaduras, enmiendas, cifras borradas o superpuestas u otros agregados, como tampoco la figuración de casilleros, renglones o columnas en blanco, sin su debida amulación o salvedades del caso;

g) Todo libramiento debe tener entrada en la Contaduría General de la Nación acompañado de una copia (legible y en buenas condiciones) debidamente legalizada;

h) Las planillas de detalles que se anexan llevarán las firmas de los jefes administrativos responsables y la del contador fiscal interviniente. Sin tales firmas, el libramiento carece de validez.

ARTICULO 2º.- Los libramientos deben ser enviados con anticipación suficiente para que la Contaduría General de la Nación pueda contar con el tiempo mínimo indispensable para sus registraciones y contralor. Para evitar demoras las delegaciones del Tribunal de Cuentas de la Nación los remitirán directamente y con recibo a la oficina de Ejecución de Presupuesto (Imputaciones) de dicha repartición, no admitiéndose -en ningún caso- su trámite oficioso.

ARTICULO 3º.- Los contadores fiscales a cargo de delegaciones del Tribunal de Cuentas de la Nación pondrán en conocimiento de los jefes de los respectivos servicios administrativos, la necesidad de que los ingresos de fondos en Tesorería General de la Nación sean previamente visados, en todos los casos, por las oficinas competentes de la Contaduría General de la Nación y que toda devolución de fondos contenga, como datos mínimos, además de los emergentes de su carácter, la denominación del organismo que la efectúa y la orden de disposición a la que debe acreditarse el importe.

ARTICULO 4º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y cumplido, archívese.-

RESOLUCION Nº 297.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 199.-

ORGANIZACION DE LOS MINISTERIOS NACIONALES

Buenos Aires, 26 de marzo de 1957.-

Visto lo propuesto por el señor Ministro Secretario de Estado de Ejército, y

CONSIDERANDO:

Que el valor de lo tradicional, adquiere particular importancia en la vida institucional de las Fuerzas Armadas y por ende en la del Ejército, que tiene larga trayectoria histórica;

Que el significado de orden técnico involucrado en la actual denominación: "Ministerio de Ejército", queda relegado a un segundo plano ante la señera y tradicional identificación, que prácticamente se acordara en 1810, en circunstancia de ser designado el Doctor Mariano Moreno, Secretario de Guerra y Gobierno de la Primera Junta;

Que la denominación "Ministerio de Guerra" concuerda perfectamente con el nombre que ostentan escuelas de especialización del Ejército, tal como la Escuela Superior de Guerra, Instituto de gran importancia tradicional;

Que el cambio de denominación precitado, persigue volver a los cánones tradicionales, sin que por ello se pretenda apartar al Ejército de la esfera de acción que le compete,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA, EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO,

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Modifícase la denominación "Ministerio de Ejército por la de "Ministerio de Guerra".

ARTICULO 2º.- Dicha modificación se hará efectiva a partir del día 28 de mayo del año en curso, fecha recordatoria de la asunción al cargo por parte del Doctor Mariano Moreno.

ARTICULO 3º.- El presente Decreto-Ley será refrendado por el Excelentísimo señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros de Ejército, Marina y Aeronáutica.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese en Boletín Público del Ministerio de Ejército, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese en el Ministerio de Ejército (Subsecretaria).-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Arturo Ossorio Arana - Teodoro Hartung - Julio C. Krause.-

DECRETO-LEY Nº 3.282.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 200.-

OBRAS PUBLICAS

Buenos Aires, 6 de marzo de 1957.-

Visto el Expediente nº 6.660/51 del Registro del Ministerio de Obras Públicas, por el que se plantea la diferente interpretación por parte de la Contaduría General de la Nación y del Ministerio de Obras Públicas en lo relativo al cómputo de los días sábados en los casos de justificación de demoras incurridas en la ejecución de obras contratadas con empresas particulares;

CONSIDERANDO:

Que el régimen legal establecido por las Leyes Nros.4.661 y 11.640 determina la prohibición de trabajo material, por cuenta ajena después de las 13 horas de los días sábados;

Que si bien es posible disponer el trabajo de los obreros durante toda la jornada, esta determinación tiene un carácter extraordinario, exigible en circunstancias que no son las previstas en los contratos;

Que la aplicación de las normas legales deben primar en toda diferencia de interpretación de los contratos suscriptos con la Administración Pública;

Que el señor Procurador del Tesoro ha dictaminado a fs. 505 la procedencia del cómputo de los días sábados como medio día laborable;

Por tanto, y atento a lo propuesto por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras Públicas,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los días sábados se considerarán como medio día

en los casos de ejecución de contratos de obra pública, celebrados con la Ley número 13.064, cuyo plazo de realización hubiere sido expresado en días laborables.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial, hágase saber a la Contaduría General de la Nación y vuelva al Ministerio de Obras Públicas a sus efectos.-

ARAMBURU - Pedro Mendiondo

DECRETO Nº 2.317.-

Centro de Documentación e Información

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
Presidencia de la Nación

Este documento fue digitalizado por el
Centro de Documentación e Información
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

Ciudad Autónoma de Bs. As. 2016

http://cdi.mecon.gob.ar/